UNA MANERA DE VIVIR

Reflexiones entretejidas en cinco décadas

Lic. Miguel Montes García



UNA MANERA DE VIVIR

UNA MANERA DE VIVIR.
Reflexiones entretejidas en cinco décadas
Lic. Miguel Montes García

Primera edición, enero 2022.

© Samsara Editorial, 2022.

© Miguel Montes García, 2022.

Diseño de interiores:
© Sergio. A. Santiago Madariaga
maquinahamlet@gmail.com

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total
y parcial sin autorización de la editorial.

Impreso en México / Printed in Mexico

ISBN 978-607-97680-9-6

UNA MANERA DE VIVIR

Reflexiones entretejidas en cinco décadas

Lic. Miguel Montes García

ÍNDICE

PRÓLOGO | 11
Juan Carlos Romero Hicks

ACERCA DE ESTE LIBRO | 19
Silvia A. Manrique Ortega
Rosa Isabel Montes Mendoza

SEMBLANZA DEL LIC. MIGUEL MONTES GARCÍA | 25

DÉCADA 1970

1. *Las pruebas en el periodo conciliatorio de los tribunales del trabajo. Tema IV. Procedimiento*. | 35
2. *Opinión sobre el proyecto de iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional en relación con las relaciones laborales en las instituciones públicas de enseñanza superior*. | 39

DÉCADA 1980

3. *Algunos aspectos de la reforma electoral derivados de la Reforma Política.* | 51
4. *Demandas laborales contra quien resulte responsable*. | 58
5. *Presencia obligada de las partes en el juicio obrero. Su personalidad*. | 75
6. *Notas para la segunda plática*: *Presencia obligada de las partes en el juicio obrero. Su personalidad*. | 90
7. *Notas para la tercera plática: La prueba en derecho del trabajo.* | 97
8. *Parlamentarismo*. | 104
9. *La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y las reformas*. | 111
10. *Análisis de las reformas a los artículos 52, 53 -2º párrafo-, 54 -1er párrafo y fracciones II, III y IV-, 56, 60 y 77 -fracción IV-, y 18 transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. | 127
11. *Análisis de las reformas a los artículos 52, 53 -2º párrafo-, 54 -1er párrafo y fracciones II, III y IV-, 56, 60 y 77 -fracción IV-, y 18 transitorio de la*

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Preguntas y respuestas). | 141
12. *¿La sociedad en el gobierno?* | 150
13. *Notas para la intervención en la mesa redonda ¿La sociedad en el gobierno?* | 160

DÉCADA 1990

14. *La función ministerial*. | 173
15. *Ética y política*. | 177
16. *Notas para la conferencia: Ética profesional del abogado*. | 186
17. *Participación en el homenaje al Lic. Eugenio Trueba Olivares*. | 189
18. *Importancia social de la función del defensor de oficio en materia penal: finalidades jurídicas y éticas*. | 196
19. *Notas para la conferencia: Problemas de la cartera vencida*. | 202
20. *Ley o justicia*. | 204
21. *Notas para la conferencia: Crisis del estado de derecho*. | 211

DÉCADA 2000

22. *Notas para la conferencia: Calificación política electoral y calificación jurídica electoral* | 223
23. *Notas para la conferencia: ¿Necesitamos una nueva Constitución?* | 230
24. *Derecho a la información*. | 233
25. *Notas para conferencia: Crisis del estado de derecho.* | 242
26. *El juez*. | 245
27. *Dictamen sobre los trabajos presentados en la tribuna de justicia, seguridad y derechos humanos*, correspondiente a la mesa "Proyecto para la nación: programa de acción". | 248
28. *Código penal: algunos puntos nuevos de interés*. | 256
29. *Entrevista con el Lic. Miguel Montes García* realizada por Santiago López Acosta. | 261
30. *Mensaje a magistrados y jueces.* | 268
31. *Notas para la conferencia: ¿Qué hacer para tener seguridad pública y una procuración de justicia de calidad?* | 270
32. *Comentarios sobre justicia alternativa.* | 273
33. *Ley de claridad*. | 275
34. *Notas para la conferencia: La función legislativa*. | 277
35. *La perspectiva del H. Congreso del Estado de Guanajuato sobre justicia alternativa*. | 281
36. *Seguridad jurídica y seguridad pública*. | 289
37. *Seguridad social*. | 292
38. *Presentación del libro "Apuntamientos de seguridad social"* del Lic. José Cervantes Herrera. | 309
39. *¿Qué es educar?* | 314

40. Presente y futuro del Poder Legislativo en Guanajuato. | 317
41. Presentación de la novela "La vida no vale nada" del C.P. Eduardo Franco Díaz. | 332

DÉCADA 2010

42. Inducción a la función judicial. | 353
43. Palabras en el homenaje al Maestro Eugenio Trueba Olivares, homenaje ofrecido por la Generación de Abogados 63/67, egresados de la Escuela de Derecho y la Fundación de Egresados de la Universidad de Guanajuato. | 360
44. Presentación del libro biográfico "Eugenio Trueba Olivares, el último humanista". | 364
45. Palabras pronunciadas por el señor licenciado Miguel Montes García en la ceremonia de reconocimiento de la Fundación de Egresados de la Universidad de Guanajuato y la generación de abogados y notarios públicos 1967-1971. | 370
46. Fuero. | 374
47. Dignificación de los tribunales del trabajo. | 383
48. Presentación del libro "*Ciudadano Cero*". | 387
49. Palabras en el reconocimiento al Maestro Eugenio Trueba Olivares por su obra jurídica. | 390
50. Presentación del libro "Ciudadano Cero" | 397
51. Participación en el *foro de innovación legislativa para el desarrollo sostenible en el Estado de Guanajuato*. | 399
52. El derecho y su utilidad social. | 401

EN HOMENAJE

Discurso Homenaje a Miguel Montes García | 425
José Aben Amar González Herrera

Precursor de la transparencia | 429
Armando Trueba Uzeta

Semblanza de Miguel Montes García | 431
Diego León Rábago

Nota del día. 7 de abril de 2011. *El corrido de Miguel Montes* | 435
Eugenio Trueba Olivares

Miguel Montes García | 437
Paulino Lorea Hernández

PRÓLOGO

Miguel Montes García
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro, jurista, legislador, visionario social y político, ejemplo que florece mientras sigue sembrando.

El presente libro intitulado *Una manera de vivir. Reflexiones entretejidas en cinco décadas*, contiene una selección de textos resultado de la inmersión, teórica y práctica, del propio autor a problemas académicos, sociales, legales y políticos, con el claro recordatorio de que en las diferencias se encuentran también rutas de coincidencias y posibilidades de resolución innovadoras.

Don Miguel Montes García, realizó extraordinarias aportaciones al servicio público mexicano. Es inevitable destacar su amor por Guanajuato, aunque nació en Jalisco por decisión personal se asumió como guanajuatense, en la máxima casa de estudios de nuestra entidad llevó a cabo sus estudios universitarios de Derecho. Su residencia, amigos, maestros y las oportunidades académicas y profesionales lo llevaron a analizar y discernir diversos temas políticos, sociales y culturales, algunas de sus reflexiones desarrolladas entre 1970 y 2010, son las que se recopilan en esta obra.

La carrera docente del abogado Montes inició en la década de los años sesenta en el *Antioch College*, cuando mi padre dirigía aquel Colegio de educación superior en la Ciudad de Guanajuato. En esa época tuvo lugar nuestro primer encuentro, su personalidad me impactó de inmediato, su talento como abogado y político me inspiraron: era un joven inquieto y ansioso de aprendizaje; mis padres rápidamente lo identificaron como una persona brillante, desde el primer instante le auguraron un futuro promisorio, ¡cuánta razón tenían!

Todos aquellos que hemos tenido el privilegio de estar involucrados en el proceso de enseñanza compartimos la reflexión del jurista Montes: *educar es más que instruir, es formar seres humanos que practiquen principios éticos con*

sentido de responsabilidad. La educación nos permite abonar a una formación integral de las personas, y además es una herramienta que permite fortalecer la democracia, a través de la ciudadanía. Entre las experiencias más enriquecedoras en el ámbito académico están el diálogo y la discusión, porque fortalecen la capacidad de análisis y síntesis, además de reforzar la apertura a la pluralidad.

Como lo podrán constatar a lo largo de los textos, del también ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las enseñanzas universitarias se atesoran en el pensamiento y se llevan en el corazón. *La universidad me dio experiencias gratas y formación de vida, me enseñó que el ser humano tiene varias características constitutivas, además permite la movilidad social y el goce de la cultura*, señaló en su emotivo mensaje al ser homenajeado en su casa de estudios.

Esta antología denota admiración a la Universidad de Guanajuato, a autoridades universitarias, a los docentes, a alumnos, a egresados, a servidores públicos y a las instituciones. Esta obra está creada desde un enfoque poliédrico del autor, como: abogado, maestro, ministro, legislador, político y eterno estudiante, ávido de conocimiento. Sus reflexiones incluyen planteamientos filosóficos sobre la ética, la justicia y la ley; recuentos sobre asuntos específicos como el fuero y el sistema de pensiones de Guanajuato; discursos de reconocimiento a grandes personajes; y algunas de sus participaciones en la presentación de obras jurídicas y literarias.

Para describir a Don Miguel más allá de lo documentado en fuentes oficiales, me permito utilizar la misma descripción que él utiliza para referirse a Don Eugenio Trueba, ex rector de la Universidad de Guanajuato, en uno de los discursos compilados, fue un hombre congruente, con una relación lógica entre su pensar y su actuar, preocupado por la ética, el conocimiento y el trabajo, dedicado a construir, con estricto apego al derecho, un liderazgo cultural y moral.

En las palabras de reconocimiento dedicadas a su maestro Trueba, el autor dibuja con claridad las motivaciones que guiaron su quehacer profesional; mientras describe su admiración por el personaje deja claro que, para él, *el derecho es un instrumento para facilitar la convivencia social, pero también el perfeccionamiento del hombre.* Además, destaca la importancia de la ética atribuible a cualquier profesión e individuo, subrayando que, aunque es una elección se debe mirar más como una obligación, pues sólo así se orienta la búsqueda de la verdad y la actuación en beneficio del bien común.

Como guanajuatense por convicción, se dedicó a fortalecer y forjar instituciones, se desempeñó en varias ocasiones como diputado local en el Congreso del estado y, más de una vez, como diputado federal. En uno de sus escritos refiere que durante su experiencia legislativa aprendió que la norma jurídica debe tener un contenido real o posible, porque *la ley es expresión de la justicia.*

Aunado a lo anterior, quienes hemos estado en el poder legislativo, entendemos y hacemos propia su reflexión, respecto a que la forma es muy importante en el derecho parlamentario: una forma confusa y una gramática mal

redactada, hace ineficaz la ley, confunde en vez de orientar y puede perjudicar en vez de ayudar.

La labor parlamentaria es una especie de arquitectura jurídica, cuya importancia radica en el diseño, hay que tener autenticidad social y humildad. Para ser legislador no hace falta ser abogado, sino allegarse de personas profesionistas y actuar en conjunto de forma ética, sin caer en un falso debate entre ley o justicia, puesto que la norma jurídica es un juicio de valor en forma imperativa, su contenido justifica su existencia, señala el autor.

En sus reflexiones en torno al Congreso, afirma que la tarea legislativa debería asumirse por convicción no por popularidad, un *hacedor de leyes no se improvisa*. La complejidad del Parlamento hace creer que debemos medir la productividad como sinónimo de eficacia, sin embargo, no es así *la labor del Congreso es eliminar leyes ociosas e inútiles*. Sus pasos me inspiraron y gracias a él entendí la importancia del parlamento, por lo que adopté y replicó su frase: *el Congreso de la Unión debe ser visto como un Poder Legislativo no como un querer legislativo*.

Otro de los temas que se abordan en estos textos es el fuero, el cuál otorga una condición de independencia a los servidores públicos, fundado en la inviolabilidad y libertad de crítica, el autor nos señala que estas condiciones no son un privilegio sino una prerrogativa, la cual debe observarse desde la evolución social y política. El fuero debe analizarse en todas sus aristas, sin prejuiciosamente asociarlo a la inmunidad, puesto que desde el punto de vista ético nada tienen que ver. En ese sentido, las aportaciones del maestro Montes son vigentes y nos permiten cuestionar las recientes modificaciones constitucionales en la materia, se pierde de vista que la comisión de delitos y/o actos de corrupción tiene que ver más con la ética y decisión personal que con el otorgamiento o eliminación del fuero.

Resulta fascinante señalar a los lectores la existencia de los variados temas que fueron esgrimidos por Don Miguel Montes. Debo precisar que estamos en la lectura de los textos de un jurisconsulto que participó en momentos claves de nuestro México y de nuestra entidad. En el año 2000 nuestros caminos se unieron nuevamente, mientras yo fui gobernador, él se desempeñó como diputado local. Como presidente de la Comisión de Justicia, coordinó la dictaminación y aprobación de la Ley vigente de Seguridad Social en el Estado de Guanajuato, la cual partió de un diagnóstico integral que incluyó proyecciones de inversión y gasto, a fin de prevenir la crisis económica del estado en materia de seguridad social.

En las siguientes páginas el lector podrá descubrir que esta legislación aprobada en 2002 fue innovadora y de gran calado porque contempló disposiciones para permitir la capitalización del Instituto de Seguridad Social, a través del incremento de cuotas y aportaciones y la diversificación de instrumentos financieros, además de crear un Consejo Directivo facultado para atender el tema en el mediano y largo plazos, a través de una evaluación periódica para

determinar la viabilidad financiera, y en su caso, hacer los ajustes correspondientes y proponer las reformas necesarias.

Aunado a lo anterior, en adelante se encuentran varios textos del autor que hacen referencia a la seguridad social como concepto y como derecho de las personas, el abogado nos explica que es un concepto con múltiples acepciones, sin embargo, recae en la seguridad económica y la satisfacción de necesidades, las cuales se vuelven cíclicas, y en su conjunto estas dos características se traducen en la obligación del Estado de garantizar el acceso a ella, de ahí la importancia de entender y hacer valer el ejercicio de la federación y coordinación con las entidades federativas.

Al abordar diversas problemáticas desde un enfoque federalista existen varios retos, pero también se abre un paraguas de posibilidades porque dejamos de pensar a nivel macro para integrar necesidades específicas, ejemplo de ello es la reflexión que se nos presenta en uno de los textos sobre la reforma electoral y la reforma política de 1979, en la que a partir del proceso legislativo para la actualización de la norma constitucional, se logra separar dos objetos: 1) la inclusión e igualdad en la representación democrática y, 2) la creación de infraestructura política para el cumplimiento de la obligación ciudadana en el ejercicio al voto; temas vigentes que encontraron solución gracias a discusiones desde las entidades federativas.

En este sentido una de las primeras disertaciones presentadas es la que hace referencia a la creación del documento de identidad único y a la responsabilidad del Estado para no burocratizar el proceso de voto a los ciudadanos, todo ello en la crónica de una viciada relación y un franco desequilibrio entre la centralización gubernamental y la participación real de los partidos políticos.

Don Miguel consagró la mayor parte de su carrera profesional en el *lugar de muchos cerros* y dedicó gran parte de su tiempo a la formación de profesionales, por eso en las siguientes páginas nos ayuda a comprender el resignificado del valor del poder público, con la advertencia de que, cuando *la sociedad confía demasiado en la representación de la voluntad general o mayoritaria se corre el riesgo de interpretaciones contradictorias* que resultan en el debilitamiento del poder mismo. La sociedad y los individuos son los garantes de su propio derecho.

Las reflexiones presentadas en su conjunto nos llaman a la autorreflexión, nos invitan a cuestionar la rigidez teórica cuando construimos ciudadanía y política, porque en efecto *la teoría es siempre la tesis sobre lo deseable y la política es el ejercicio de lo posible y alcanzable dentro de lo deseable* siempre que se encuentre dentro del marco jurídico. Aquí podemos vislumbrar cómo desde la década de los noventa ya había una concepción de lo que hoy nombramos consejos de participación ciudadana y la gestación de los órganos autónomos.

Para quienes son estudiantes, descubrirán en esta compilación, a un compañero y a un maestro. La entrevista realizada al autor por Santiago López Acosta nos deja ver al ministro en su tarea de acercarse más a la justicia y a la

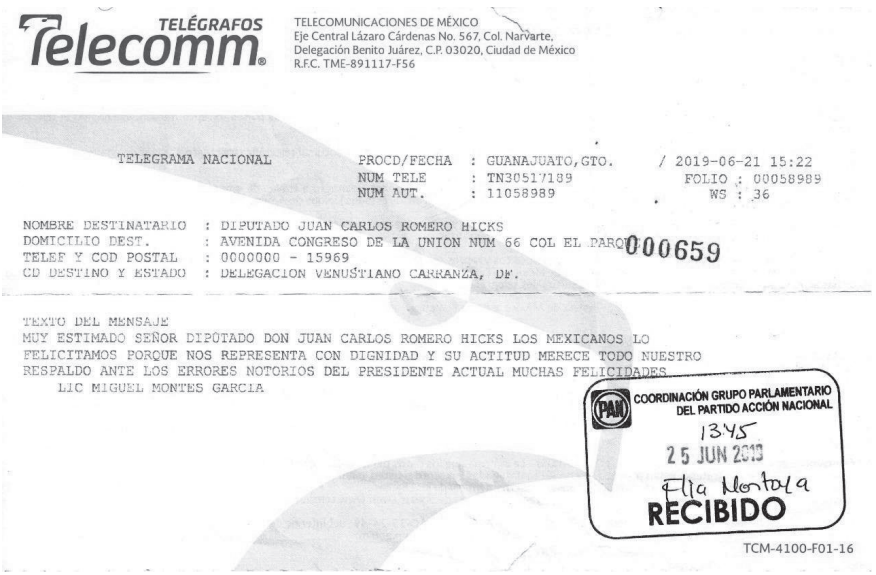
equidad sin más compromiso que su conciencia y el conocimiento de la norma. A los profesionales les acortará el camino para entender la importancia de diseminar el conocimiento y la actualización constante.

¡Telegrama! En junio de 2019 recibí un telegrama remitido desde Guanajuato por el maestro Miguel Montes García: "Muy estimado señor diputado Don Juan Carlos Romero Hicks los mexicanos lo felicitamos porque nos representa con dignidad y su actitud merece todo nuestro respaldo…", me sorprendió, me conmovió y además me hizo mirar en retrospectiva los diferentes momentos en los que nuestras vidas se cruzaron y en todo lo que habíamos compartido ¡Guanajuato, la Universidad y el poder legislativo!

El año 2020 nos arrebató muchas vidas, entre ellas la de Miguel Montes, pero como subraya Isabel Allende: la muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan. Personas como él no se sepultan, se siembran. Así que, para honrar y recordar a Don Miguel, estamos ante una obra que con gran cariño y cuidado seleccionaron su esposa, la Sra. Silvia Manrique Ortega, y su hija, la Dra. Rosa Isabel Montes Mendoza, a quien agradezco el honor de invitarme a participar en esta edición.

Juan Carlos Romero Hicks





TELÉGRAFOS
Telecomm

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 567, Col. Narvarte,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México
R.F.C. TME-891117-F56

TELEGRAMA NACIONAL

PROCD/FECHA : GUANAJUATO,GTO. / 2019-06-21 15:22
NUM TELE : TN30517189 FOLIO : 00058989
NUM AUT. : 11058989 WS : 36

NOMBRE DESTINATARIO : DIPUTADO JUAN CARLOS ROMERO HICKS
DOMICILIO DEST. : AVENIDA CONGRESO DE LA UNION NUM 66 COL EL PARQ 000659
TELEF Y COD POSTAL : 0000000 - 15969
CD DESTINO Y ESTADO : DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, DF.

TEXTO DEL MENSAJE
MUY ESTIMADO SEÑOR DIPUTADO DON JUAN CARLOS ROMERO HICKS LOS MEXICANOS LO
FELICITAMOS PORQUE NOS REPRESENTA CON DIGNIDAD Y SU ACTITUD MERECE TODO NUESTRO
RESPALDO ANTE LOS ERRORES NOTORIOS DEL PRESIDENTE ACTUAL MUCHAS FELICIDADES
LIC MIGUEL MONTES GARCIA

PAN
COORDINACIÓN GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1345
25 JUN 2019
Ella Montoya
RECIBIDO

TCM-4100-F01-16

ACERCA DE ESTE LIBRO

Una manera de vivir. Así quisimos intitular este libro pues eso es lo que nos obsequia: una manera de vivir. Sus páginas nos dibujan a Don Miguel Montes García de muchos modos, a través de diversos ángulos y con múltiples temas, análisis, opiniones, anécdotas, fotografías, expresiones y vivencias.

Decimos también en el título que son *reflexiones entretejidas en cinco décadas;* de hecho, es el periodo que abarcan. Y así las ordenamos, cronológicamente más que por tema o por espacio de conocimiento. Son una suma de experiencias, escritos de su pensamiento, dictados en diferentes épocas de la vida del Lic. Montes García.

Tanto por sus convicciones y actividades en la vida política, como por su calidad profesional, académica y personal, él recibía invitaciones de grupos e instituciones diversas para dictar conferencias, para intervenir en foros, seminarios, debates, conversatorios, o directamente para exponer su visión sobre algún asunto en particular. Aceptaba dichas convocatorias siempre que podía y se preparaba cuidadosamente, con entusiasmo.

El Licenciado Montes García participaba en estos eventos como un estudioso, como parte de las varias facetas de su vida, pues no se dedicaba exclusivamente a ello.

Compartir sus ideas y posicionamientos siempre fue un gusto para él. Disfrutaba a plenitud esas pláticas y esos espacios de diálogo. Podían ser con los amigos, colaboradores, juristas, legisladores, maestros y universitarios, colegas del oficio político, en los Desayunos de los Viernes, y también con la familia. Sí se daban intercambios con el auditorio en turno ¡cuánto mejor! Eran ocasión para detallar sus planteamientos con vigor, profundizarlos y hacer valer sus argumentos. Ponía nítidamente las temáticas sobre el tablero y llevaba la voz cantante. Así era él.

Conversar, afirmaba convencido, es un arte, y para él implicaba también una responsabilidad. De su sonora voz escuchamos: "La palabra, este esencial medio de comunicación, cuando se pronuncia compromete. Todas las palabras, aparte de su significado, tienen un contenido conceptual y a veces ideológico que comprometen. Por eso cuando se habla, sobre todo si se ostenta un cargo de representación popular, debe serse cuidadoso, prudente, hábil y exacto en el uso de la palabra.

Sin la palabra, nosotros no podríamos desarrollar nuestro trabajo, pero la

palabra es para comunicarnos, para encontrar medios de contacto, para encontrar comprensión y para lograr fines. Si no es para esto ¡la palabra se desperdicia! Y ¡lo peor que puede hacer un trabajador de la palabra es desperdiciarla!"[1]

Desde muy joven, en el quehacer diario del Lic. Montes García surgen, entrelazados, el desempeño político, la responsabilidad legislativa, la profesión de abogado, la intención de instruir, la participación en la comunidad del estado de Guanajuato y en la nacional. Esto se ve reflejado en los textos que integramos en *Una manera de vivir*.

Dicho entrelazamiento también lo proyectan fotografías e imágenes que capturan, como él mismo nos manifiesta, sus "aficiones de ocupación como la política o recreativas como el dominó".[2]

Aburrirse no estaba en su repertorio ni estuvo nunca en su horizonte ni en su forma de ser. Don Miguel Montes García vivía sus aficiones, todas, a cabalidad, intensamente: el trabajo, el servicio público, la lectura, el canto, la música, la bohemia, los viajes, la risa, el sentido del humor, el asueto.

Una actividad que le fascinaba y que inició temprano en los años 1960 era, sin duda, impartir cátedra. En ocasiones, cuando entrevistado le preguntaban sobre su trayectoria, él relataba: "algo de lo que me siento muy contento es que en diversas épocas de mi vida he sido maestro"[3]. Su cercanía con la enseñanza, en especial a través de la Universidad de Guanajuato, tenía también otras manifestaciones: "Tengo una costumbre que pocas veces digo. Cada que yo ocupaba un cargo público me presentaba a mi Universidad para rendirle una especie de informe, a través de una plática, de una conferencia, de lo que fuera, para que supiera cómo está uno ejerciendo los conocimientos que ella nos dio o nos propició."[4]

Para *Una manera de vivir* ¿qué fue lo que hicimos?

Los escritos y apuntes del Lic. Montes García son abundantes. Así que decidimos intentar una selección. Para organizarlos optamos, grosso modo, por agruparlos en tres áreas que, vale decirlo, no tienen una denominación estricta. Nos referimos a ellas como la de corte más académico, la política y la legislativa. Al avanzar en la compilación y la relectura de los materiales, nos dimos cuenta de que algunos textos podían ubicarse tanto en una como en otra, por lo que la agrupación resultante es flexible y atiende más a una disposición nuestra que a cualquier otro criterio. En este libro nos abocamos fundamentalmente a la primera; las dos áreas subsecuentes son abordadas en otros volúmenes que estamos preparando.

Un desafío edificante y creativo que vivimos durante el proceso, fue leer las múltiples versiones que encontramos de varios documentos para luego co-

---

[1] Intervención en tribuna, para hechos, en la Cámara de Diputados del Estado. Guanajuato, Gto. 19 de junio de 2003.

[2] Apuntes. "Felicidad", del 16 de enero de 2020.

[3] Entrevista por el Lic. Santiago López Acosta, 2002.

[4] Plática con el jurista Miguel Montes García, por el Lic. Antonio González Arroyo. Diálogos de Identidad. 2017

tejarlas e identificar cuál fue la definitiva en cada caso. Porque el Lic. Montes García tenía un método de trabajo, riguroso y progresivo, una de cuyas resultantes era tener numerosas presentaciones subsecuentes sobre un mismo asunto. Se documentaba e investigaba ampliamente sobre el tema en cuestión, reflexionaba, analizaba y recurría a su experiencia profesional. Elaboraba una lista de las ideas y argumentos que deseaba exponer, la revisaba y la enriquecía con más ideas y argumentos. Dictaba una serie de notas o apuntes preliminares como los que aparecen en algunos capítulos de este libro y los escrutaba minuciosamente. Después, dictaba el documento y lo examinaba y lo afinaba una y otra y otra vez, obsesivamente. Para intentar poner fin al proceso, muchas veces lo escuchábamos decir: "ya no lo voy a volver a leer porque si no, no acabo". En ocasiones él leía el texto o bien éste era empleado a manera de guía para exponer ante su audiencia; no era raro que el Lic. Montes García hiciera nuevas adiciones o ajustes sobre la marcha, en letra manuscrita.

También, con frecuencia, le tocaba improvisar y tenía muchas cosas que decir. Este ejercicio lo desarrolló intensamente, por ejemplo, en su paso por cinco legislaturas, en sus campañas electorales, en los tribunales, como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Pleno y la Tercera Sala, y como catedrático. Pero sus improvisaciones estaban siempre documentadas y fundamentadas; contundente, mantenía una premisa: "La oratoria debe ser una manifestación de ideas. El que no tiene nada que decir, no puede ser buen orador. Podrá engarzar palabras, pero si no se expresa una idea, son ociosas las palabras."[5]

Otro bonito reto en nuestro andar hacia *Una manera de vivir,* lo enfrentamos al decidir incluir ciertas conferencias de las que sólo tenemos las versiones taquigráficas o estenográficas. En ellas la puntuación o es inexistente o no es idónea por la naturaleza misma de la técnica, por lo que intentamos afinarla; algunas presentan renglones ilegibles que hubo que omitir y fallas de origen que no pudimos subsanar.

Para cristalizar *Una manera de vivir* hemos realizado nuestro mejor esfuerzo que, sabemos, está muy lejos de la perfección o de los cánones ortodoxos. Asumimos la responsabilidad de posibles yerros que son solamente nuestros, y por ellos a los amigos lectores les pedimos su comprensión.

Estamos ciertos, empero, que nadie pudo haber continuado esta diligencia con más cariño y emoción que nosotros.

El día 7 de abril del año 2011 hubo un homenaje al Maestro Montes García en el Salón del H. Consejo General Universitario en el edificio central de la Universidad de Guanajuato. Ahí estuvimos con él, ¡contentísimos! Con ese motivo, distinguidas personalidades que lo conocieron muy bien durante muchos años, escribieron textos de reconocimiento a su carácter, a su trayectoria, a sus logros personales y profesionales, a *su manera de vivir*. Conversamos con

[5] Plática con el jurista Miguel Montes García, por el Lic. Antonio González Arroyo. Diálogos de Identidad. 2017.

ellos, pedimos su anuencia y generosamente nos la otorgaron, para incluir en este volumen aquellos mensajes de hace una década que ahora se acompañan en el capítulo "En Homenaje". A ellos, muchas gracias.

Este segundo libro, como en el caso de *Pinceladas y Apuntes* es para la familia, para los amigos: un presente para quienes deseen seguir compartiendo con Don Miguel Montes García.

Silvia Manrique Ortega
Rosa Isabel Montes Mendoza

Diciembre de 2021



SEMBLANZA DEL LICENCIADO MIGUEL MONTES GARCÍA

Nació el 25 de septiembre de 1937 en Degollado, Jalisco.

Sus padres: Ramón Montes Estrada y Rosa García Medina. Su hermana Elisa Montes García. Su esposa Silvia A. Manrique Ortega. Sus hijos: Rosa Isabel, Elisa Noemí y Miguel Montes Mendoza; Mónica, Mily, Silvia, Sofía y José Ramón Montes Manrique; y catorce nietos.

Estudios cursados:

Primarios: Escuela "Marcos H. Pulido", de La Piedad, Michoacán.- Cuando cursaba el tercer año de su instrucción primaria, participó en el Concurso Municipal de Lectura en el que obtuvo el primer lugar.

Secundarios: Escuela Secundaria "Rafael Reyes H.", de La Piedad, Michoacán.- Obtuvo el primer lugar en el Concurso Municipal de Oratoria, cuando cursaba el segundo año de su escuela secundaria.

Preparatorios: Escuela Preparatoria de León, dependiente de la Universidad de Guanajuato.- Ocupó el primer lugar del Concurso Municipal de Oratoria y el segundo lugar en el Concurso Estatal de Oratoria, organizado por la Universidad de Guanajuato y el Periódico "El Universal".

Profesionales: Escuela de Leyes de la Universidad de Guanajuato.

En el año de 1961 fue Campeón Estatal de Oratoria cuando cursaba el tercer año en la Escuela de Leyes y ocupó el segundo lugar en el Concurso Nacional de Oratoria organizado por el Periódico "El Universal", en el mismo año.

Siempre ocupó los primeros lugares de aprovechamiento en todas las instancias de estudio que cursó.

Fue Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria y Secretario General y Presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Guanajuato.

Título Académico: Abogado y Notario Público.

Tesis Profesional: "La Integración de los Tribunales del Trabajo y el Procedimiento Laboral. Sugestiones para su Reforma".

Con inigualable vocación ejerció su profesión desde la década de los años sesenta dedicándose, fundamentalmente, al derecho laboral. En múltiples ocasiones lo hizo pro bono, con genuina generosidad y el alto profesionalismo que siempre lo caracterizó. Durante sus encargos como servidor público aun-

que no litigaba, su despacho siempre permaneció abierto para atender labor social.

Actividades académicas:

Maestro de Ética (Bachillerato de Medicina). Universidad de Guanajuato. Año de 1960.- Formaban parte de su programa de estudios los temas de: "Control de la Natalidad", "Eutanasia" y "Aborto".

Maestro de Introducción al Estudio del Derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Guanajuato, de 1964 a 1974.

Maestro de Derecho del Trabajo Individual, Colectivo y Procesal de 1966 a 1975 y de 1983 a 1985. Escuela de Leyes de la Universidad de Guanajuato.

Maestro de Ética Profesional de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. 1995-1996.

Impartió la cátedra de Derecho del Trabajo Colectivo en postgrado de Contratación Colectiva.

Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato, durante los años de 1983 a 1985.

Investigador en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato en el año de 1997.

Maestro invitado para impartir cursos de Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana Campus León y en el Colegio de León, A. C. 1997-1999.

Como miembro de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, impartió pláticas y conferencias ante diferentes grupos.

Conferencias magistrales y ponencias dictadas en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, Tribunal Federal Electoral, Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, Instituto de la Judicatura Administrativa del Estado de Guanajuato, Universidad de Guanajuato, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, COPARMEX, Banca Promex, Universidad Lasalle Bajío en Salamanca, Universidad Latina de Celaya, Colegio de León, Casa de la Cultura Jurídica de Celaya, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Iberoamericana de León, entre muchas otras.

Cargos desempeñados en el Partido Revolucionario Institucional:

Oficial Mayor del Comité Directivo Estatal en Guanajuato, en el año de 1962.

Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de Guanajuato en 1964.

Secretario General del Comité Directivo Estatal en Guanajuato en 1965.

Secretario de Divulgación Ideológica de la Liga de Organizaciones Populares en el Estado de Guanajuato en 1973.

Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. 1989-1990.

Presidente del Comité Directivo Estatal de Guanajuato, de 1990 a 1991, época en que encabezó los trabajos para formar un padrón de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, mismo en el que se registraron quinientos mil ciudadanos con indicación de su nombre, su domicilio, su distrito electoral y su sección electoral. Este padrón quedó computarizado en el archivo del Comité Directivo Estatal.

Cargos de elección popular:

Diputado a la Cuadragésima Sexta Legislatura del Estado de Guanajuato. 1965-1968.- Perteneció a la Comisión de Justicia y emitió un voto particular no aprobatorio del matrimonio bajo el régimen de sociedad legal, por la falta de uso del mismo en el Estado de Guanajuato. Muchos años después este régimen se derogó. Votó también en contra de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el que se suprimía la inamovilidad de los jueces y magistrados locales.

Diputado Federal a la Quincuagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 1976-1979.- Presidió la Comisión de Estudios Legislativos y fue miembro de la Comisión de Justicia. Tuvo una muy destacada participación en el estudio y aprobación de la Reforma Política de 1977 y la Ley de Amnistía del mismo año, ambas iniciadas por el Presidente de la República e inspiradas por el pensamiento de don Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación. Fue también Comisionado de la Cámara de Diputados ante la Comisión Federal Electoral.

Diputado Local a la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato**,** 1979-1982.- Fue Presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso Local del Estado de Guanajuato e inspirador de la transformación del Congreso para lograr su funcionamiento autónomo. Creó la biblioteca del Congreso Local. Se propuso y logró que la reforma política de 1977 avanzara en el Estado de Guanajuato. Propició el nacimiento del Diario de los Debates en dicho Congreso, que se edita hasta el presente. Inspiró la modernización del Congreso Local. Promovió la reforma constitucional del artículo 63 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a la que se adicionó la facultad-obligación de "hacer la codificación de las leyes del Estado"; antes de esta reforma ninguna autoridad codificaba las leyes que sólo se promulgaban en el Periódico Oficial. También a raíz de esta reforma se hizo la primera Compilación de Leyes del Estado de Guanajuato. Desde entonces y de manera periódica el Congreso Local continúa publicando actualizadas las leyes vigentes en el Estado.

Con esta legislatura se inició en Guanajuato la integración pluripartidista de los ayuntamientos y de la Cámara de Diputados. Formaron parte del Poder Legislativo diputados militantes de los partidos Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, de Acción Nacional y Revolucionario Institucional. El fortalecimiento y autonomía del Poder Legislativo guanajuatense, fácticamente principió en la Quincuagésima Primera Legislatura, que también aprobó reformas constitucionales para que los ayuntamientos de Guanajuato fuesen plurales, a través de la representación proporcional, mediante la cual se eligieron a partir de entonces, los regidores de partido.

Otorgó innumerables becas y apoyos a estudiantes de escasos recursos económicos y alto aprovechamiento académico.

Diputado Federal a la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión. 1988-1990.

Presidente del Congreso de la Unión durante septiembre de 1988 y durante su presidencia se calificaron las elecciones presidenciales de ese año erigiéndose la Cámara de Diputados en Colegio Electoral. Presidió la Primera Sección Calificadora Electoral de ese Congreso. Recibió, a nombre del Congreso, el Sexto Informe de Gobierno del C. Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y en sesión solemne en la que se intentó, múltiples veces, interpelar al Presidente por diputados y senadores de partidos diversos, intentos de interpelaciones que desechó con el único propósito de defender el cumplimiento y respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no permitió que el Presidente de la República que informaba, produjese respuesta alguna a las interpelaciones y reiteradamente explicó y citó los fundamentos legales de su actuación.

Presidente de la Comisión de Justicia de la Quincuagésima Cuarta Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Diputado Local de oposición en la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 2000-2003. Presidió la Comisión de Justicia en esa legislatura y coordinó la dictaminación y aprobación de la Ley de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato, actualmente en vigor, y que fue calificada, en su momento, como una de las más avanzadas de la República Mexicana, que alivió el problema de las pensiones de los trabajadores. En unión del también diputado Lic. Martín Eugenio Ortiz García, presentó la iniciativa de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Guanajuato, primera iniciativa sobre ese tema que se presentó en la República Mexicana.

Sus múltiples participaciones en la tribuna del Congreso Local y del Congreso Federal, constan en los Diarios de los Debates respectivos.

Cargos administrativos en los gobiernos estatal y federal:

Procurador Federal de la Defensa del Trabajo en el Estado de Guanajuato, de 1960 a 1963.- Impulsó la asesoría legal a los trabajadores y organizó cursos regionales en defensa de sus intereses, distribuyendo formatos de demandas laborales entre los trabajadores organizados, sobre los asuntos más frecuentes.

Presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, de 1963 a 1965.- Logró que los laudos se dictasen dentro de los cincuenta y dos días siguientes a la presentación de las demandas laborales, para evitar daños a los trabajadores con una justicia diferida y a las empresas con el pago excesivo de salarios caídos; y, antes de registrarse un sindicato, ordenó el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo la investigación administrativa correspondiente, a fin de que se certificase que los trabajadores miembros del padrón sindical verdaderamente prestaban sus servicios a quien se anunciaba como su patrón.

Director General de Educación Pública en el Estado de Guanajuato, de 1973 a 1975.- Durante su encargo se creó el sistema de enseñanza secundaria por televisión a través de tele-aulas diseñadas técnicamente para ese propósito, propiciando una mini-biblioteca y laboratorio anexos a cada telesecundaria. Se estableció una red de comunicación para la transmisión de la señal televisiva de la telesecundaria, para lo que se instaló, propiedad del Estado de Guanajuato, un transmisor en el Cerro de Culiacán, municipio de Cortazar, Gto., que garantizara una señal clara y constante, indispensable para el éxito de ese sistema, cuya instalación, en la mayor parte de su costo económico, fue pagado con los ahorros que se hicieron en los presupuestos anuales de los años que desempeñó el cargo de Director de Educación. Propició también, la elaboración de una cartografía del estado.

Secretario Particular de Gobierno en el Estado de Guanajuato, durante los últimos meses de 1975 y primeros de 1976. Encargado de Planeación y Desarrollo del Estado.

Director General de Gobierno, Secretaría de Gobernación, México, D. F., en 1982.- Propició la modernización del Diario Oficial de la Federación y la transparencia en el trabajo del Departamento de Juegos y Sorteos dependiente de esa Dirección General.

Director General de Personal, Secretaría de Educación Pública, México, D. F., en 1983.

Oficial Mayor de la H. Cámara de Senadores de 1985 a 1987. Logró que la Oficialía Mayor funcionara como una auténtica secretaría parlamentaria; impulsó el trabajo editorial del Senado de la República y la publicación de las series: "Los Senadores", de la que se editaron diecisiete tomos; un libro sobre "El Recinto del Senado de la República"; el libro "Pliegos de la Diplomacia Insurgente"; "El Senado Mexicano" en tres tomos; así como "Planes en la Nación Mexicana", obra que recoge, en once tomos, los diferentes llamados a la

lucha social ocurridos entre los años de 1808 a 1987, y analiza su contenido y ubicación dentro de su contexto histórico y social.

Procurador General de Justicia del Distrito Federal del 22 de mayo de 1991 al 22 de junio de 1992.- Dio prioridad al impulso de las investigaciones sobre la comisión de delitos con respeto absoluto a los derechos humanos y a la eticidad de la investigación. Propuso la creación de la Escuela Nacional para la Formación de la Policía Científica para la Investigación de los Delitos, infortunadamente no fue aprobada.

Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 1° de julio de 1992 al 31 de diciembre de 1994, integrante de la Tercera Sala.

Subprocurador Especial para la Investigación de los hechos que produjeron la muerte del Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, del 28 de marzo al 14 de julio de 1994, previa autorización de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para separarse temporalmente de su cargo ministerial, que volvió a desempeñar a partir de agosto de 1994. Sobre esta investigación se publicaron dos documentos informativos, uno del 2 de junio de 1994 y otro del mes de julio del mismo año, en tres tomos. La conclusión de esta investigación fue idéntica a la que hizo pública, cinco años después, el señor licenciado Raúl González Pérez, último Subprocurador Especial del caso. Estas investigaciones fueron resumidas brillantemente en el libro "Ciudadano Cero", de la autoría del Dr. Jesús Zamora Pierce, editado por Amazon.

Diplomas y reconocimientos:

Los otorgados:

Por la Generación 1967-1971 de la Licenciatura de Abogado y Notario Público y la Fundación de la Universidad de Guanajuato, por su brillante trayectoria académica y profesional, el 7 de abril de 2011.

Por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con motivo de la conferencia que impartió en su campus.

Por el Club Rotario de León, Gto.

Por el Club Rotario de Irapuato, Gto.

Por la Comunidad Judía de México.

Varios por la Escuela de Leyes de la Universidad de Guanajuato, con motivo de las múltiples conferencias que impartió en sus aulas.

Por el Colegio de León con motivo del curso de Derecho Constitucional que por invitación impartió ahí.

Muchos otros por diversas instituciones nacionales.

Varios por la Universidad Iberoamericana de León, con motivo de las conferencias que en ella impartió.

Asociaciones, Colegios y Academias:

Colegio de Abogados de la ciudad de Guanajuato.

Miembro de Número de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social.

Miembro de Número de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social, Capítulo Guanajuato.

Miembro de Comité Fundador del Capítulo Guanajuato de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, S. C.

Obras:

Primera Compilación de Leyes del Estado de Guanajuato, que contiene todas aquellas no expresamente abrogadas o derogadas. 1981.

Ensayo sobre la Representación Proporcional en los Municipios de la República Mexicana. 1982.

Artículos varios en la Revista de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato. 1984-1985.

Colaboración en el libro colectivo "Libertad, Igualdad, Fraternidad 1789-1989", El Día en Libros; su colaboración dio nombre a este libro.

Participación en el libro de homenaje al Doctor Don Eugenio Trueba Olivares, publicado por la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.

Colaboraciones periodísticas en los periódicos "El Día", "El Universal" y "Excélsior" de la Ciudad de México, D. F., y "a.m.", de León, Gto.

Notas sobre la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal y sobre la Sesión en la que fue Aprobada, diciembre de 2006.

Comentarios a la Iniciativa del Presidente de la República en Materia Política, de fecha 29 de enero de 2010.

Perfil jurídico del Maestro Eugenio Trueba Olivares, leído en el homenaje que le organizó la Universidad de Guanajuato el 16 de febrero de 2015, publicado en la revista "Ciencia Jurídica" Núm. 7, Enero-Junio 2015.

Abogado Consultor.

Falleció el 11 de septiembre de 2020 en la ciudad de León, Gto.

TESORERIA GENERAL DEL ESTADO

74795

EL C. J.GUADALUPE LOPEZ ANGEL.OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL EN ESTE LUGAR.

CERTIFICA

QUE EN LOS LIBROS ORIGINALES DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE DEGOLLADO,JAL.

CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1937 Mil novecientos treinta y siete.

A FOJAS 117 Ciento Diecisiete.

Y BAJO EL NUMERO 295 Doscientos Noventa y cinco.

CONSTA UNA PARTIDA DE NACIMIENTO..... QUE TEXTUALMENTE DICE:

TESORERIA GENERAL DEL ESTADO
DELEGACION DE HACIENDA
- EN -
DEGOLLADO

Para Certificados del Registro Civil

AL MARGEN N- 295 Doscientos Noventa y cinco.MIGUEL MONTES .-H-. DENTRO. En Degollado,Jal. a las 15 quince horas del día 29 veintinueve de Septiembre de 1937 Mil novecientos treinta y siete, ante mi, Miguel Ayala, Juez Oficial del Registro Civil compareció Ramón Montes, casado Comerciante, de 37 treinta y siete años, originario de Santa Lucia Municipio de Penjamo,Guanajuato y dijo: que el día 25 veinticinco del-- presente, a las 8 ocho horas, en su domicilio en Galeana Número 5 cinco, en este lugar, nació el niño.MIGUEL MONTES, que presenta vivo su hijo legítimo y de su esposa.Rosa García de 29 veintinueve años, originaria de este lugar, ambos mexicanos de raza mestiza.Abuelos Paternos:-José Montes y Julia Estrada con domicilio en Juárez 163 en esta Población Maternos: Victor García finado y Apolonia Medina que radica en Santuario número 8 ocho en esta localidad, Se tomó la huella digital del niño registrado.Testigos:-Atanacio Estrada y Heraclio Quezada casados, Empleados, mayores de edad y de este lugar, quienes manifestaron saber la nacionalidad de los padres del niño registrado.Se leyo la presente acta y conformes firmó el que supo.Doy Fé.

FIRMADOS:- RAMON MONTES.RUBRICAS.

ACTA Y LIBRO RELATIVO, SIN CIERRE NI FIRMAS DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.

ES COPIA QUE CONCUERDA CON SU ORIGINAL.

DEGOLLADO,JAL. A 19 DE JULIO DE 1975

EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.

REGISTRO CIVIL - DEGOLLADO, JAL.

J.GUADALUPE LOPEZ ANGEL.

VALOR $ 10.00

DÉCADA 1970

LAS PRUEBAS EN EL PERIODO CONCILIATORIO DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO. TEMA IV- PROCEDIMIENTO

Ponencia que presenta como representante de la
Universidad de Guanajuato.
XII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo.
Toluca, Estado de México.
27-30 de marzo de 1972

> Artículo 600 de la Ley Federal del Trabajo.- Las juntas federales de conciliación tienen las facultades y obligaciones siguientes:
> I.-……
> II.- Recibir las pruebas que los trabajadores o patrones juzguen conveniente rendir ante ellas, en relación con las acciones o excepciones que pretendan deducir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El término para la recepción de las pruebas no podrá exceder de diez días.
> Terminada la recepción de las pruebas o transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, la junta remitirá el expediente a la federal de conciliación y arbitraje.

Todas las personas, jueces o árbitros, a quienes la ley o las partes han encargado la resolución de conflictos derivados de la ocurrencia de hechos jurídicos, o actos jurídicos, que constituyan supuestos que una vez realizados determinen la aplicación de una norma, tienen la necesidad, para resolver jurídicamente, de basar su resolución en las pruebas que las partes rindan o en las que el propio resolutor se allegue.

Las pruebas tienden siempre, independientemente de los medios en que éstas consistan, a demostrar ante el órgano resolutor de un conflicto que los hechos, o actos alegados por las partes, son ciertos, que han ocurrido.

Eduardo Pallares señala que "probar es producir un estado de certidumbre en la mente de una o varias personas respecto de la existencia o inexistencia de un hecho, o de la verdad o falsedad de una proposición. También puede decirse que probar es evidenciar algo, esto es, lograr que nuestra mente lo perciba con la misma claridad con que los ojos ven las cosas naturales".

La Ley de Partida (Ley 1ra. de Título XIV Partida 3ra.) definió la prueba como: "La averiguación que se hace en juicio de una cosa dudosa".

Rafael de Pina en su *Tratado sobre la prueba* dice: "la producción de los actos o elementos de convicción que somete probar es el litigante, y que son propios, según derecho, para justificar la verdad de los hechos alegados en el pleito".

En el Escriche se define la prueba como: "la averiguación que se hace en juicio de una cosa dudosa".

Los límites de este trabajo nos impiden continuar citando a otros tratadistas, pero de las opiniones transcritas, y de todas en general, concluimos que la prueba judicial será aquella que se rinda ante órganos jurisdiccionales, promovida por las partes o recabada por el juez, y que tiene por fin demostrar la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos.

Es requisito natural de la prueba el que debe ser eficaz, o sea, debe tender a producir en el ánimo del juzgador, un estado de certeza respecto de la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes.

Todas las normas procesales referentes a la prueba protegen su eficacia. No podría ser de otra manera. Dentro del proceso la prueba debe ofrecerse y desahogarse después del planteamiento de la litis, porque es precisamente la litis, la que servirá de base al criterio judicial para sólo aceptar que ante el juzgador se rindan pruebas eficaces.

Tan perjudicial sería para la marcha del proceso el que se impida probar un hecho alegado por las partes, como el que se permita a éstas demostrar circunstancias no alegadas, no traídas a juicio. Resultaría absolutamente ocioso pretender demostrar algo fuera de litis y, sobre todo, es sumamente peligroso permitir que una parte, con el pretexto de probar algo intrascendente en juicio, prolongue la duración de un procedimiento.

Los legisladores en nuestro derecho se han preocupado por conseguir brevedad en los procedimientos y cuando alguna de las partes ofrece pruebas o interpone recursos que notoriamente sólo pretenden alargar la duración del proceso, facultan al juez para que la sancione.

En el periodo conciliatorio en los juicios obreros ante las juntas de conciliación, no existe la obligación de la parte actora de presentar una demanda, sino que el procedimiento puede iniciarse con la sola presentación de una queja, circunstancia que se agrava ante las juntas accidentales de conciliación. No existe tampoco la obligación de la parte demandada, aun suponiendo que ya exista demanda, de contestar esa demanda ante la junta de conciliación. Puede incluso concurrir ante el tribunal y no contestar la demanda, sino reservarse sus derechos para contestarla ante el tribunal de arbitraje. La litis sólo se fija en los juicios del trabajo, en la audiencia de demanda y excepciones que se celebra ante el tribunal de arbitraje.

No comprendemos pues como pueda ser posible que antes de la fijación de la litis puedan rendirse pruebas. El tribunal ante el que se ofrezcan no puede

tener ningún criterio que lo oriente para saber si debe aceptarlas, o si debe rechazarlas, y la fracción II del artículo 600 de la Ley Federal del Trabajo, no condiciona la aceptación de las pruebas a la circunstancia procesal de que las partes ya hayan ejercitado acciones, la actora, u opuesto excepciones, la demanda, sino que, por lo contrario, parece ser que autoriza a las partes para que ofrezcan pruebas y las rindan "en relación con las acciones y excepciones que pretendan deducir ante la junta de conciliación y arbitraje" (federal o local).

Nos parece desafortunada la redacción de esta fracción, pues resulta sumamente peligroso dejar al capricho de las partes el límite de hechos que deben probarse. Se rompe con la buena lógica del proceso. No es posible demostrar ante un tribunal hechos no alegados todavía. Se deja al tribunal sin base para regular la aceptación y el desahogo de las pruebas y sin base para calificar lo adecuado de las preguntas o posiciones cuando rindan pruebas testimoniales o confesionales, que son las más comunes.

Por otra parte, el artículo 600 de la Ley Federal del Trabajo señala que las juntas de conciliación tienen la facultad y obligación de recibir esas pruebas, tendientes a demostrar acciones no ejercitadas o excepciones no opuestas por las partes. O sea, que el tribunal no puede rechazar ninguna prueba que una parte ofrezca, porque tiene la obligación de recibirla, bastará que la oferente anuncie que, con base en esa prueba, ejercitará una acción u opondrá una excepción.

Nos preguntamos ¿si con la prueba rendida, en lugar de demostrarse hechos que favorezcan a la oferente, se demuestran algunos que la perjudiquen, tendrá la oferente de todas maneras la obligación de ejercitar la acción que en principio había anunciado? ¿Será facultad de la oferente de una prueba, valorando su resultado, ejercitar o dejar de ejercitar la acción, u oponer o dejar de oponer la excepción? Según la redacción del artículo 600 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción II ¿cuál sería el límite de lo que las partes puedan probar? ¿Con base en qué podrá una junta de conciliación rechazar pruebas notoriamente ociosas, o hasta absurdas, si se le impone la obligación de recibirlas? Repetimos que es desafortunada la redacción de este artículo, pues primeramente confunde y emplea como sinónimo las palabras "facultad" y "obligación" que son conceptos absolutamente opuestos.

En la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo, que podría darnos luz sobre el problema que se analiza, se dice: "Las funciones de las juntas de conciliación son: procurar un arreglo conciliatorio, recibir las pruebas que los trabajadores y los patronos juzguen convenientes rendir ante ellas, siempre que sean de tal naturaleza que exista peligro de que se destruyan o de que no puedan rendirse con posterioridad". Esto es, el legislador sólo pretendió que ante los tribunales de conciliación se rindieran las pruebas en peligro de desaparecer o aquéllas que no fuera posible rendir con posterioridad. Desgraciadamente la redacción de la fracción II del artículo 600 de la Ley Federal del Trabajo no refleja este querer legislativo, pues ni siquiera explica que se rendi-

rán las pruebas en peligro de desaparecer o de imposible rendición posterior, sino que en forma amplísima deja al arbitrio de las partes rendir las pruebas que consideren adecuadas.

Afortunadamente la misma fracción señala que el término para la recepción de las pruebas no podrá exceder de diez días, obligando al tribunal para que transcurrido ese plazo, se hayan desahogado o no se hayan desahogado las pruebas, envíe los autos a la junta de conciliación y arbitraje que corresponda, con lo que se impide la duración inmoderada de los juicios ante las juntas de conciliación, aunque, por otra parte, existen pruebas que, por su propia naturaleza, son de imposible desahogo en un lapso de tiempo tan reducido. La parte final de la fracción que se analiza señala que terminada la recepción de las pruebas, o transcurrido el plazo de diez días, la junta de conciliación remitirá el expediente a la de conciliación y arbitraje que corresponda.

Volvemos a preguntarnos ¿tiene algún objeto que se rindan pruebas ante un tribunal que no está facultado para valorarlas? ¿No resulta ocioso que conozca de pruebas un tribunal que no está facultado para dictar resoluciones?

CONCLUSIÓN

1.- La redacción de la fracción II del artículo 600 de la Ley Federal del Trabajo no refleja el espíritu del legislador, pues éste pretendió que ante las juntas de conciliación sólo se desahogaran pruebas en peligro de desaparecer y de imposible desahogo posterior y la fracción II del artículo 600 de la Ley Federal del Trabajo rebasa por mucho esta pretensión.
2.- Es inadecuado que reciba pruebas un tribunal que no las valorará y que no está facultado para dictar resoluciones.

PROPOSICIONES

1.- Debe suprimirse la fracción II del artículo 600 de la Ley Federal del Trabajo y en todo caso reglamentarse una medida preparatoria de juicio que permita, ante cualquier tribunal del trabajo, el desahogo de pruebas en peligro de desaparecer o de imposible rendición posterior.
2.- O se reduce la función material conciliatoria que desarrollan las juntas de conciliación a su concepto doctrinario, o se reciben pruebas, debe facultárseles para que las valoren y dicten resoluciones.

OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LAS RELACIONES LABORALES EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR[1]

Guanajuato, Gto.
7 de septiembre de 1976

Señores:

En provincia hemos venido analizando con sumo interés las diversas opiniones que se han emitido con motivo del proyecto de iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución del país, presentado por la UNAM al Sr. Presidente de la República, a fin de establecer condiciones básicas que normen las relaciones de tipo laboral en el seno de las universidades e instituciones de enseñanza superior de carácter público.

Nadie puede dudar de los sanos propósitos de la iniciativa, que pueden resumirse en la necesidad de garantizar la continuidad de los estudios, la estabilidad de la investigación, la calidad académica, finalidades todas éstas que, como bien se dice en el proyecto, no pueden alterarse ni negociarse puesto que con ello se afecta la razón misma de ser de las instituciones de enseñanza superior.

A pesar de lo anterior, nos hemos preguntado si la adición (inciso C) que se propone constituye el medio adecuado para salvaguardar tan importantes y obvias finalidades.

Estimamos que el problema no es estricta o solamente jurídico y que, en consecuencia, no basta un planteamiento de esta naturaleza, como parece ser el que formula la UNAM. Ha de verse de manera más cabal y -dijéramos- más realista, con todas sus implicaciones políticas, sociales e históricas.

Durante muchos años, siglos quizás, las relaciones internas de personal y autoridades en colegios y universidades adoptaron características sumamente distintas a las actuales, ciertamente, poco conflictivas. Prevalecía a pesar de sus escasos recursos económicos, o quizás por esto, una identidad de intereses que confiaba al maestro y al empleado el cumplimiento de la función sin divorciar su papel de la institución misma. Negar que esto ha cambiado radicalmente sería ingenuo. Nos hallamos ante el estallamiento de una conciencia de clase que abarca toda empresa y toda organización, sin excluir la educativa. La UNAM admite la circunstancia al afirmar textualmente que "el trabajador

[1] El Lic. Montes García se desempeñaba como Diputado Federal a la Quincuagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 1976-1979

universitario tiene iguales derechos que cualquier otro trabajador", aunque estima que no son antagónicos a los de la institución misma.

Pero esta conciencia de derechos que se ganan reclamándolos, antes de su formulación jurídica misma, no es fenómeno aislado en el complejo campo de la transformación social. Debemos admitir que sólo constituye manifestación de fines ulteriores, de largo alcance, a los cuales muchos universitarios ya están vinculados, como parte de un cuadro histórico más profundo, por decirlo así. En otras palabras, los movimientos universitarios de tipo laboral a los que hoy se hace frente, no agotan su objeto sólo en el establecimiento de las condiciones de trabajo que persiguen de manera inmediata, sino que van mucho más allá. Son parte de una ruta tendiente a una modificación del orden social más radical y que, sin duda, desborda sistemas actuales. No estamos calificando tal fenómeno, pero sí tomándolo en cuenta si queremos sacar conclusiones que operen.

Parte de esa táctica es la creación de atmósferas adecuadas al cambio y no negamos que la universidad es punto de resonancia, como ya lo dijo también el rector Soberón.

Tomando en cuenta lo anterior, estamos muy lejos de asignar a los objetivos y movimientos de las organizaciones laborales universitarias un carácter meramente universitario. De allí que, aun en el supuesto de que se lograse un encuadramiento legal del que aparentemente hoy se carece, capaz de satisfacer razonablemente imperativos internos de entendimiento, tales movimientos se mantendrían vigorosos y metalegales mientras sigan siendo parte del fenómeno más amplio y general a que nos hemos referido.

Nos autoriza a suponer lo anterior, además, la experiencia ya tenida hasta ahora. La iniciativa, en forma expresa, reconoce que la situación laboral actual no queda comprendida bajo ninguna base constitucional, pues ciertamente no cabe en el inciso A, que supone actividades de producción y lucro, ni en el B, reservado sólo para empleados federales. Esto, empero, no ha sido impedimento para la formación de sindicatos, de facto, ni para la organización de innumerables movimientos. Tampoco ha sido obstáculo para pactar y convenir, reconociéndoles incluso personalidad. No censuramos esta actitud, pero sí nos sirve para concluir la fuerza de los hechos, legales o no. Imaginemos ahora por un momento la vigencia del inciso C que se propone. Ya sabemos, a juzgar por la reacción registrada, ante la simple posibilidad de su aprobación, ante el puro planteamiento, que no satisface a las organizaciones sindicales existentes; que se combate desde ahora con rigor; que incluso y probablemente con el beneplácito de algunos dirigentes, es materia y pábulo de actividad variada, declaraciones, mítines, etc.

¿La promulgación probable del ahora simple proyecto cambiaría esa actitud? ¿La mitigaría siquiera? Contestemos con franqueza que no lo esperamos así, que más bien exacerbaría los ánimos y la oposición.

Hay un punto en el proyecto, entre otros, que puede considerarse neurálgico. Es el relativo a las huelgas y previene que no hay derecho a ellas sino

sólo en el caso en que "se violen en forma sistemática, general y reiterada" las condiciones laborales convenidas, usándose términos análogos a los vigentes en lo que ve a servicios públicos desempeñados por empleados federales. Convengamos en que ese supuesto (violación sistemática, general y reiterada) nunca se dará o, al menos, que será muy difícil y remoto que se dé. Concluyamos que de esta suerte se pretende conjurar legalmente la huelga. Pensamos que esto sería saludable, pero en estos momentos este juicio no tiene ninguna importancia ante la seguridad que tenemos de la inoperancia de la reglamentación. No encontramos a la mano ningún hecho, experiencia o situación que nos permita imaginar su eficacia. Estimamos que carecerá de facticidad, si queremos emplear un concepto técnico jurídico y bien sabemos que en el campo del derecho positivo, al menos, la ausencia de facticidad anula la ley.

Sobre los requisitos mencionados para la huelga pasarían los afectados, sin lugar a dudas. La huelga, reglada o no, es un fenómeno de fuerza y obedece a muy complejas causas. Lícita o ilícita, en cierta etapa de evolución o cambio, se manifiesta sin esperar aprobación, como lo que es en esencia, fenómeno o fuerza.

Si no parecen excesivas las anteriores conclusiones -y creemos que no lo son-, surge una cuestión que resulta fundamental, de una importancia práctica que sería necio negar: ante el desacato a la ley y a las bases constitucionales que se proponen, ¿qué se va a hacer?

En otras palabras, ¿cuáles serían las medidas coercitivas, derivadas de una sanción jurídica, consecuentes a la probable, por no decir segura, inobservancia de la norma legal?

Una respuesta pudiera ser simplemente la tolerancia al desbordamiento y la reiteración de pactos obtenidos por la presión, mientras surgiese una conciencia de acatamiento por persuasión pacífica, confiando en la bondad de la Ley. Bajo esta hipótesis, salta a la vista que la reforma no valdría la pena de intentarse.

Otra respuesta podría consistir en el ejercicio de las acciones que las universidades tuvieren en su patrimonio para sancionar la violación. Entre ellas podríamos invocar como principal la recisión de la relación laboral al o a los huelguistas o paristas en condiciones prohibidas por la reforma. Sabemos que esta medida es muy difícil de practicar frente a una coalición que aglutine numerosas voluntades y que, en la mayoría de los casos, sólo contribuiría a complicar las cosas en proporciones muy dilatadas.

Finalmente podríamos considerar una repuesta de orden público, como puede ser la acción más o menos enérgica del Estado, tendiente a reducir coactivamente el movimiento que fuese flagrantemente ilícito. Respecto de esta última y posible respuesta, estamos seguros de que las condiciones políticas, que no pueden pasar por alto los efectos secundarios de determinadas medidas, estorbarían a la autoridad aquella acción.

No quisiéramos que en virtud de lo dicho hasta ahora se pensara en nuestro desinterés por los fines de la iniciativa, pero es imposible desvincularla, como decíamos al principio, del contexto de realidad social al que se lanza. Y esto, al menos, nos hace dudar si no de su bondad, sí de su eficacia. No creo que sea inoportuno desempeñar en estos momentos, un poco, el papel de abogado del diablo, para que la conclusión a la que se llegue sea lo más consistente posible.

Por otra parte, no podemos dejar de considerar otros aspectos del problema que, aunque menos importantes, no deben pasarse por alto.

Aunque en el proyecto se toman en cuenta todas las instituciones públicas de enseñanza superior en el país, se trata de resolver sobre todo una situación propia de la UNAM y del Distrito Federal.

Hay varias universidades que pueden considerarse simplemente como oficiales o dependientes en ciertos aspectos del Estado. Pondríamos ejemplos tan destacados como la Universidad de Guadalajara, la de Veracruz, la de Guanajuato, etc. Se estima que para estos casos el inciso C no sería aplicable. Esto nos parece que en la práctica no tendrá buenos resultados, pues es seguro que surgirán corrientes más o menos fuertes tendientes a aprovechar, por decirlo así, el impresionante nivel de bases organizativas incluidas en la Constitución de la República.

La expresión que habla de dependencias del gobierno federal o estatal, no garantiza la procedencia de la excepción, pues la mayoría de los estatutos legales de las universidades consideradas oficiales, marcan con toda claridad la independencia administrativa, académica, de Consejo o de Junta de Gobierno. Las facultades del Estado son mínimas, en cualquier caso. Una adecuada interpretación de sus estatutos nos llevaría a concluir la no excepción. (Nos abstenemos de comentar los casos de institutos abiertamente dependientes de la Secretaría de Educación). Si se trata de legalizar, por así decirlo, fenómenos que según el proyecto, no son constitucionalmente válidos (de allí la necesidad del inciso C), parecerá que los casos de que nos ocupamos son condenados a la ilicitud y aún afirmarse que en aquellas entidades en que las relaciones laborales se asimilan o las de los empleados estatales en virtud de las leyes locales, quedarían en situación dudosa o irregular, pudiéndose incluso deducir la inconstitucionalidad de tales leyes en cuanto se siguieran aplicando a las universidades, ya que dados los supuestos de la no dependencia estatal, automáticamente caerían dentro de jurisdicción federal, aunque reconocemos que este punto puede ser discutible.

Hay otra circunstancia digna de tomarse en cuenta: si ya en la actualidad muchas universidades de provincia, entre ellas las que pueden considerarse como dependientes del Estado, registran fenómenos parecidos a los de la UNAM, tienen sindicatos, plantean revisiones colectivas, etc., será lógico que quieran las universidades adoptar las bases normativas del inciso C por las ventajas que ello representaría, dando lugar a movimientos de cambio sustan-

ciales en aquellos regímenes jurídicos y provocándose la consiguiente reacción de quienes preferirían seguir estando fuera del inciso C.

Otra observación se impone: el artículo 123 en sus incisos A y B actuales es específico y no se extiende ni se aplica a otros muchos trabajadores que no quedan allí comprendidos. Digamos, por ejemplo, que no es aplicable ni nada previene respecto de empleados públicos estatales y municipales, para mencionar un grupo muy importante y numeroso.

Esto no es problema para el D.F., pero sí lo es para todas las entidades federales y para todos los municipios, de tal suerte que en cada estado se ha legislado sobre su situación y sus derechos de la más variada manera y no pocas veces en forma limitada, por no decir que irrisoria, pues todos sabemos que en la mayoría de los casos se carece de los recursos necesarios, ya no para asimilar sus condiciones de trabajo a las de los servidores federales, pero ni siquiera para aproximarse a ellas. Cuando tal cosa se ha intentado, como en el caso de maestros de primaria, los presupuestos estatales se afectan en proporciones desmesuradas y colocan a los gobiernos en condiciones sumamente difíciles, como es de todos sabido.

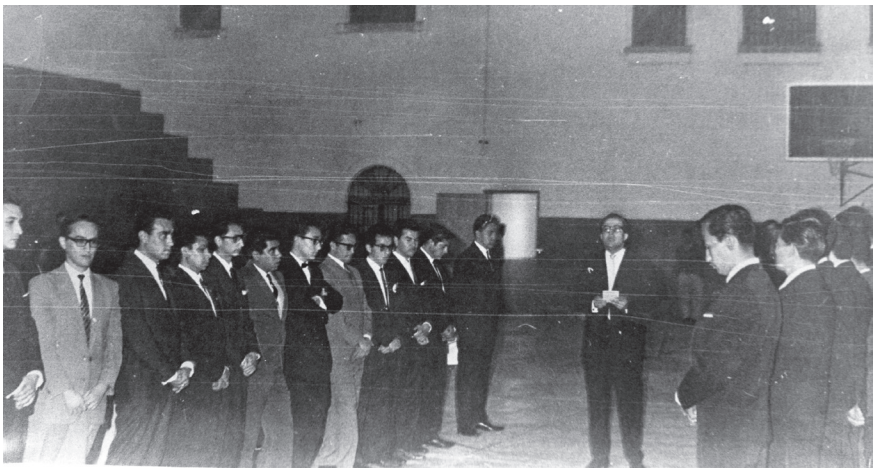
Nos preguntamos si no resultaría al menos extraño que el artículo 123 vaya a contener un inciso especial para regular condiciones de trabajo en las universidades y se mantenga omiso respecto de otras clases trabajadoras tan numerosas e importantes como los empleados estatales y municipales. ¿No podría esto acelerar la conciencia política de esas clases todavía no protegidas por la Constitución y alimentar las tendencias que actualmente ya se manifiestan para igualar derechos y prestaciones que sus análogos, los federales? Y si de antemano sabemos que tales pretensiones serían ruinosas, vale la pena reflexionar sobre estas posibles consecuencias, que no mencionamos como seguras, pero sí como probables.

Faltaría analizar otros muchos puntos relacionados principalmente con la posible aplicabilidad de disposiciones laborales ya vigentes en aquella parte que no quedase cubierta por el inciso C. Mucho habría que decir sobre este particular, pero de momento, estimamos ya innecesario extendernos ante la importancia de los temas que hemos tocado.

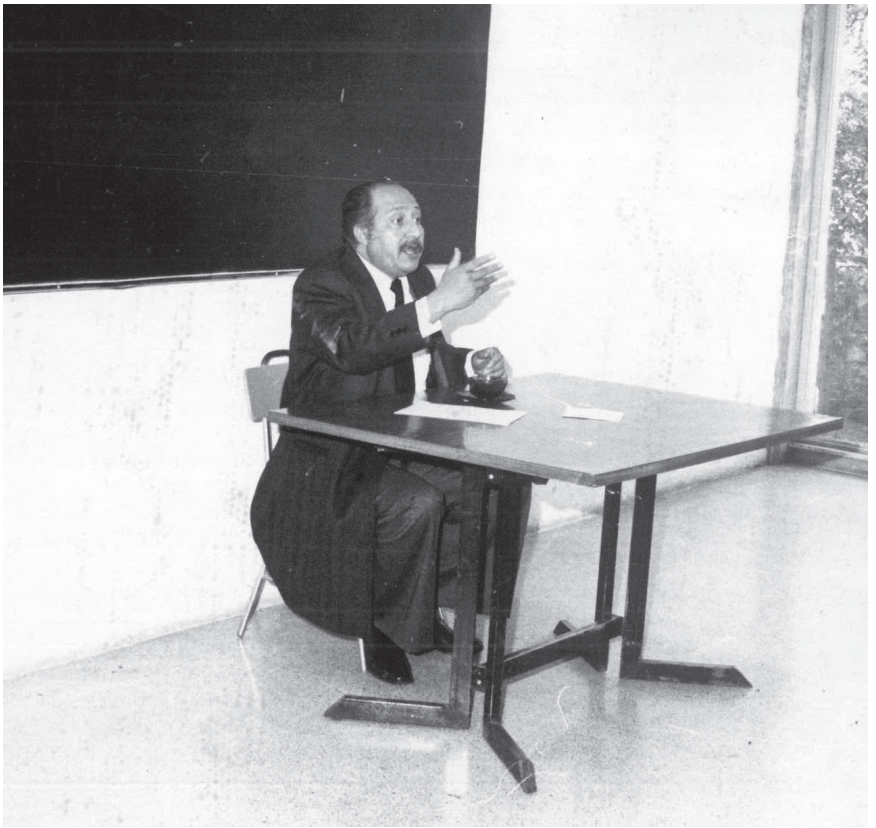
Podríamos resumir diciendo que a pesar de que estamos de acuerdo con las finalidades del proyecto, ante la poca probabilidad de su eficacia, es posible que, al menos en provincia, provoque situaciones de mayor dimensión conflictiva que las actuales.

"Algo de lo que me siento muy contento es que en diversas épocas de mi vida he sido maestro"














Lic. Miguel Montes




LVI
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
LOS
CERROS
PELONES
E EUGENIO TRUEBA

DÉCADA 1980

ALGUNOS ASPECTOS DE LA REFORMA ELECTORAL DERIVADOS DE LA REFORMA POLÍTICA

Quinto Encuentro Nacional Legislativo.
Guanajuato, Gto.
Marzo de 1980

Mesa Directiva del Quinto Encuentro
Nacional Legislativo[2]

I.- Del Registro Nacional de Electores y de la credencial única de elector.

Mediante iniciativa del 4 de octubre de 1977, presentada por el ciudadano José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ante la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, se inició el proceso de reformas legales que instrumentaría lo que en conjunto se ha denominado Reforma Política.

En el aspecto legislativo la Reforma Política la entendemos como un proceso de actualización permanente de las normas jurídicas a fin de facilitar que las minorías del país, que por su número y organización representen corrientes ideológicas de importancia que deban ser consideradas como factores de opinión, participen en la organización del gobierno y en la toma de decisiones de la nación.

La Reforma Política descansa en un supuesto sin el que no podría existir: el respeto absoluto a la voluntad ciudadana manifestada en el voto.

Por la importancia del acto a través del cual se emite el sufragio, las distintas leyes electorales rodearon el acto de votar de una serie de formalidades, todas ellas tendientes a garantizar la seguridad en la validez del sufragio. Se ha creado el Registro Nacional de Electores, encargado en su momento de la formulación del padrón y, al presente, de su actualización constante. Casi todas las entidades federativas, cuando de elegir autoridades locales se trata, celebran convenios con el Registro Nacional de Electores para utilizar en sus elecciones los padrones electorales que proporciona ese Registro. El manejo de los padrones electorales constituye, al presente, una difícil y grave responsabilidad y en la eficiencia del padrón y en su fidelidad descansa uno de los elementos primarios de toda elección confiable.

En las elecciones de diputados federales a la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, celebradas el día uno de julio de 1979, los máximos organismos electorales integrados por comisionados de los partidos

[2] Diputado Local a la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 1979-1982

políticos contendientes, de los poderes ejecutivo y legislativo del país, reconocieron los defectos que al presente tiene el padrón electoral. Así, el ciudadano presidente de la Comisión Federal Electoral, cuando se ocupó del análisis del proceso electoral del año de 1979, manifestó que uno de los factores importantes coadyuvante al abstencionismo electoral lo fue el inapropiado y defectuoso padrón electoral que sirvió de base en estas elecciones.

Múltiples voces se han ocupado de este problema y todas ellas están de acuerdo en que es indispensable modernizar los sistemas de trabajo del Registro Nacional de Electores y cambiar la actual credencial permanente de elector, que tiene una vigencia de 25 años, por una tarjeta única de identidad que pueda ser utilizada por los ciudadanos para efectos electorales y para muchos otros.

No se nos escapan las dificultades y el costo que la expedición de esta tarjeta única de identidad implicaría, pero partimos del supuesto de que debe crearse una vigorosa infraestructura política que facilite el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y permita el conocimiento indubitable de la voluntad del pueblo, manifestada en su voto. Ya se ha dicho y es cierto, que la organización política salvó a nuestro país en la crisis económica, por eso debemos fortificarla.

Nuestra primera proposición es que se cree la tarjeta única de identidad ciudadana.

II.- De la elección.

Hemos expresado que el acto mismo de votar se ha rodeado de una serie de formalidades para garantizar la seguridad en el voto y facilitar el conocimiento de la voluntad ciudadana. Estas formalidades abarcan a todos los que participan en el acto de votar: al ciudadano votante, a la mesa directiva de la casilla y a las demás autoridades electorales.

Pocos procesos en nuestras leyes son tan aparentemente simples y tan complejos en realidad, como el que contiene los actos a través de los cuales se prepara la emisión del voto y se emite éste.

Analicémoslo en grandes pasos y sin profundizar mayormente, porque cada uno de los presentes ha participado y ha vivido las complicaciones y deformaciones de un proceso electoral.

Parece ser que para votar los mexicanos hemos partido de la desconfianza recíproca y hemos rodeado la elección de formas y requisitos destinados a vencer esa desconfianza, que lo único que han logrado ha sido burocratizar el procedimiento a través del cual se emite el voto. Lo que en un momento histórico determinado se previó como forma de seguridad, se ha transformado en maraña de casi imposibilidades para emitir el sufragio. Exigimos que el votante esté en el padrón electoral general y, además, en el correspondiente a la sección de su domicilio. Este padrón seccional debe y puede ser consultado por el personal de casilla para permitir que el ciudadano vote. Si no está en el

padrón seccional, sólo excepcionalmente podrá votar. En teoría el ciudadano tiene recursos para inconformarse con los defectos del padrón de su sección, pero en la práctica no es frecuente que estas inconformidades de ciudadanos se presenten. Además, en el momento de votar, el personal de casilla puede y debe exigir que el votante se identifique.

Son pues tres cosas que se requieren para votar: 1.- que tenga credencial permanente de elector; 2.- que esté en el padrón seccional electoral; 3.- que se identifique. Podemos calcular el tiempo que se lleva realizar estos actos y concluir de ahí que bastaría que, interesadamente, cualquier miembro del personal de casilla o representante de los partidos y candidatos contendientes se propusiera, caprichosamente, dilatar el acto de votar para que esto causara graves molestias a quienes están esperando, que tal vez por esta sola circunstancia, se alejen de la casilla.

Pero las dificultades principian antes: ninguno de los organismos electorales, excepción hecha de la Comisión Federal Electoral que cuenta con apoyo técnico, está eficazmente capacitado o tiene recursos para realizar la función que se le encomienda. Las comisiones locales electorales y los comités distritales se integran mediante un procedimiento de insaculación, que los propios defectos del padrón redujeron en mucho. Insisto en que no siempre sus integrantes son los idóneos y el desarrollo de la función se complica cuando se considera que ésta es transitoria, no remunerada o mal remunerada, y que las personas que forman los organismos electorales no tienen voluntad de abandonar sus ocupaciones normales, que les proporcionan los satisfactores a sus necesidades y dedicarse íntegramente al cumplimiento de este encargo. A nadie se le puede pedir distraerse de su modo de vida para dedicarse a una actividad no lucrativa y meramente temporal.

Si es difícil integrar las comisiones locales electorales, más lo es integrar los comités distritales electorales y el problema se agrava cuando se trata de la integración de las mesas directivas de casillas. Insisto, sin pretender ser destructivo, en términos generales las autoridades electorales no tienen la capacidad técnica, ni la voluntad de cumplir adecuadamente con la función que se les encomienda, además de que carecen de los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de la función. No se me diga que en los últimos tiempos esto se ha mejorado, porque reconozco la mejoría, pero eso no quita validez a las observaciones que hago en el sentido de que es el sistema mismo el que se ha transformado en sumamente complejo.

Una idea de la complejidad del sistema nos la da el averiguar los miles de ciudadanos que se requieren para que los mexicanos con derecho a hacerlo puedan votar. Más de 40,000 personas participan en el proceso electoral como autoridades y el solo número basta para pensar que los errores humanos se multiplican en alto grado.

Cabe añadir que algunos de los partidos políticos contendientes, que legalmente tienen la obligación de coadyuvar y vigilar el buen desarrollo del

proceso electoral, por la pasión natural de la contienda, hay ocasiones en que en lugar de facilitar este proceso, lo complican magnificando las fallas y provocando algunas. Sin embargo, cuando se llega a la calificación de las elecciones, arguyen cualquier detalle para tratar de nulificar los procesos y con eso prestigiar o fortificar a su propio partido político.

No es mi intención analizar todo el proceso electoral, pero a guisa de ejemplo, analicemos lo que ocurre para que realicen su trabajo las mesas directivas de las casillas.

La mesa directiva de la casilla se integra con un presidente, un secretario, dos escrutadores y los suplentes respectivos, todos ellos ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, residentes en la sección respectiva. Además los partidos políticos y los candidatos, propietarios y suplentes, tienen derecho a nombrar a representantes. Considerando que existen al presente siete partidos políticos con registro definitivo y con acción nacional, puede concluirse que en cada casilla existirán, por lo menos, 15 personas, encargadas de dirigir la votación. No imaginamos los supuestos en que coincidan en una fecha elecciones federales y locales, o elecciones de presidente de la república, senadores y diputados al Congreso de la Unión, porque este número de personas puede aumentar en cada casilla. Ya es bastante complejo el que 15 personas con intereses diferentes actúen con la misma finalidad.

Analicemos su trabajo: deben instalar y clausurar la casilla según lo previene el apartado A, fracción I del artículo 110 de la LOPPE, y de cada uno de estos actos, levantar un acta según lo señalan los artículos 182 y 193 de la misma ley. Además, deben levantar un acta de cómputo por cada una de las votaciones que se celebren, o sea, que cuando las votaciones sean múltiples, levantarán varias actas de cómputo. Además, deben levantar actas adicionales para registrar a quienes hayan votado porque tenían el derecho de hacerlo y no estaban comprendidos en el padrón electoral correspondiente a esa sección. Deben recibir las protestas por escrito, o las impugnaciones que hagan los representantes de los partidos políticos o de los candidatos, y deben ceñirse a las formas de escrutinio y computación que señala el artículo 194 y siguientes hasta el 199 de la LOPPE. No termina ahí su trabajo, sino que, luego deben integrar el paquete electoral en los términos del artículo 200 de la LOPPE. El artículo 201 de la misma ley previene, además, un orden para realizar el escrutinio y la computación, y luego deben hacer llegar los paquetes firmados a las autoridades electorales.

Es difícil imaginarse todas las complicaciones prácticas que la realización de esas operaciones produce en un personal poco calificado. Pero, lo que sí sabemos, es que cualquier falla de este personal se revierte en contra del candidato triunfador, porque sus opositores, partidos y candidatos, la hacen valer y, en ocasiones la deforman, todo tendiente a producir la nulidad de la casilla y, finalmente, la nulidad de la elección. Son tantas las formas y tanto el personal que interviene en cumplirlas, que los errores son casi imposibles de evitar. Es

más, se ha llegado a sostener la tesis de que, cuando en alguna elección no existen errores, éste es un indicio casi cierto de que la elección fue amañada. De tal manera, los partidos y candidatos triunfadores no tienen opción: si cometen errores el proceso se macula y si no cometen errores el proceso, a priori, es considerado maculado.

Pensamos que el defecto está en el sistema y por eso proponemos que, por lo menos la Comisión Federal Electoral, las comisiones locales electorales y los comités distritales electorales, sean organismos que funcionen permanentemente, con personal capacitado y remunerado, que se dedique en las épocas en que no haya elecciones, a divulgar las formas y requisitos del proceso electoral, y a capacitar, con responsabilidad y seriedad, a quienes sean funcionarios de casillas. Quizá también fuese conveniente que estos mismos organismos electorales tuviesen facultades para la elaboración, manejo y distribución de las tarjetas únicas de identidad que en otra parte propusimos.

Parece injusto que todos los defectos en el proceso electoral se reviertan en una sanción en contra de los candidatos triunfadores, quienes en múltiples ocasiones, no son responsables de esos efectos, pero sí son los únicos sancionados. Nuestra actual Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales establece un sistema de calificación que es justo, pero inequitativo, puesto que trata de manera diversa a los candidatos a diputados, que lo son mediante el sistema de mayoría relativa en distritos uninominales, y a los que lo son mediante el sistema de representación proporcional en circunscripciones plurinominales. Analicémoslo.

De hecho, aunque la Comisión Federal Electoral sólo determina qué constancias de mayoría tiene por registradas y cuáles no, en los casos de los distritos uninominales y asigna el número de diputados por el sistema de representación proporcional, ante ella ocurre el primer procedimiento de calificación. Este organismo analiza los defectos del proceso desde la designación de funcionarios hasta los fenómenos ocurridos en el acto de la elección y en los actos de computación, pero no sólo, sino que, a nuestro entender, ante la Comisión Federal Electoral se realiza un juicio político de los candidatos a ocupar los cargos, sobre todo, de quienes lo son en distritos uninominales y por el sistema de mayoría relativa.

Nuestra realidad es que todavía el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtiene la mayoría de los triunfos en los distritos uninominales y que, además, los dirigentes de la legislatura, presidente de la Gran Comisión, presidentes de las comisiones legislativas más importantes, son miembros de este partido. Por un hecho totalmente natural, a través de los medios de difusión se informa de quiénes serán las personas que ocuparán estos cargos, cuando el proceso de "calificación" ante la Comisión Federal Electoral no se ha concluido y hemos observado que los partidos perdidosos, seguramente por táctica que juzgan conveniente, enfocan sus baterías en atacar a quienes serán los diputados más significados, y en el foro de resonancia nacional que es la Co-

misión Federal Electoral, no sólo impugnan el proceso mismo de la elección, sino la personalidad de los candidatos, de tal manera que, cuando ocupan la curul, en muchas ocasiones llegan "lesionados políticamente", esto es, "dañada su imagen y disminuida su ascendencia" para los importantes cargos de dirección.

Posteriormente, en el Colegio Electoral, los distritos uninominales son también analizados y discutidos individualmente.

En nuestra opinión, este es el defecto del sistema de calificación electoral que facilita el que los candidatos que participan mediante el sistema de mayoría relativa en distritos uninominales, no sean tratados de manera igual a los candidatos que participan mediante el sistema de representación proporcional en circunscripciones plurinominales.

Sinteticemos: tanto en la Comisión Federal Electoral como en el Colegio Electoral, se analizan individualmente los distritos uninominales y este análisis individual se presta para que los opositores no sólo ataquen el proceso, sino también la personalidad del candidato. De manera distinta, tanto en la Comisión Federal Electoral como en el Colegio Electoral, se analizan globalmente, en conjunto, los casos de quienes compitieron mediante el sistema de representación proporcional en circunscripciones plurinominales. Creemos que debe buscarse la forma en que tengan igual proceso calificatorio los candidatos a diputados mediante el sistema que sea.

A nadie conviene este sistema calificatorio que discrimina a los candidatos a diputados y los trata de diferente manera en razón de si compiten en distritos uninominales o en circunscripciones plurinominales.

Estamos conscientes de que quizá el único mérito de este desordenado trabajo sea fijar la atención de ustedes en alguno de los múltiples problemas que ocasiona la aplicación de la vigente Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Estamos conscientes también de que la ley que pretenda regular el dinámico y complejo fenómeno político debe y puede estar sujeta a revisiones constantes. Sabemos que la realidad supera a la norma, sobre todo en esta materia. Sabemos que las que hemos planteado como soluciones generales quizá no sean las más adecuadas y por eso como otra solución para que las leyes reguladoras del fenómeno político y del proceso electoral adquieran el mismo dinamismo que la materia que regulan tiene, hacemos la siguiente proposición con dos opciones:

Primera opción: Que se constituya una comisión integrada por representantes de las legislaturas locales, la Cámara de Diputados Federales, el Senado de la República y la Secretaría de Gobernación para que, de manera permanente, actualice la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Esta comisión puede iniciar su trabajo con el análisis de los problemas aquí planteados y de las soluciones que se esbozan, y agregar a su agenda otros temas y otras soluciones.

Segunda opción: En defecto de lo anterior, que se constituya una comisión integrada por representantes de las legislaturas locales, electos en esta asamblea, para que realice el mismo trabajo y, en su momento, inicie ante el Congreso de la Unión las modificaciones legales a que haya lugar con base en la facultad que le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si nuestra exposición sirve para, de alguna manera, formar un organismo nacional estudioso de manera permanente de los problemas político-electorales que deban reflejarse en leyes, habrá cumplido su cometido.

Guanajuato, Gto., marzo de 1980.
Dip. Lic. Miguel Montes García.

DEMANDAS LABORALES CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE[3]

(Versión taquigráfica)

Departamento de Investigaciones Jurídicas de la
Escuela de Leyes de la
Universidad de Guanajuato.
Guanajuato, Gto.
24 de octubre de 1983

Muy buenas tardes.

En primer lugar quiero hacer un agradecimiento muy sincero a la Universidad de Guanajuato y en forma particular al Departamento de Investigaciones Jurídicas, que nos da la oportunidad de reanudar con los estudiantes de la Universidad de Guanajuato un diálogo que sólo interrumpieron causas ajenas a nuestra voluntad y trabajos que nos ocupan mayor tiempo del que desearíamos.

Quiero agradecer la presencia de los compañeros abogados, desde luego de los compañeros estudiantes, de los señores funcionarios estatales y federales de los tribunales del trabajo y hacer, en su honor y en su mérito, un reconocimiento a la honestidad y a la honradez con que los tribunales del trabajo del estado, ya sean del fuero local o del fuero federal, funcionan, debido, fundamentalmente, a la probidad y a la honestidad de quienes los presiden. Es una verdad que recorre el país que en Guanajuato los tribunales pueden cometer errores porque son tribunales integrados por humanos, con ello se puede diferir del criterio jurídico, pero todo mundo reconoce que su trabajo es honesto.

Haremos críticas al sistema de trabajo, hasta a la ley, a los usos y costumbres de litigantes y tribunales, no con el afán de encontrar el defecto, sino con el afán de superar el defecto. En las críticas que hagamos pretenderemos que las enseñanzas de la Universidad y los modestos estudios que realizan quienes colaboran en el Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Escuela de Leyes, se apliquen en la práctica forense del Estado; la investigación por sí misma, siendo valiosa desde el punto de vista científico, quizá renuncia a su aplicación práctica, desiderátum de todo conocimiento; nosotros no queremos en lo personal renunciar a esa aplicación práctica de lo que las leyes dicen y de lo

[3] Primera de tres ponencias presentadas en el ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Escuela de Leyes.
En este libro incluimos la primera y segunda ponencias completas, así como las notas que el Lic. Montes García preparó con antelación a la redacción final de la segunda plática.

que la universidad enseña. Vamos a tratar de conformar el marco general en que desarrollaremos nuestras intervenciones.

Este ciclo de pláticas no es más que la continuación de las que ya ustedes, o compañeros de ustedes, han recibido, impartidas por el Maestro Torres Gómez, por el Maestro Serrano Robles y otros ilustres abogados. El Maestro Torres Gómez señalaba en sus pláticas que el abogado debe tener un firme criterio axiológico para tratar de desarrollar adecuadamente su profesión y que esto rezaba no sólo para el abogado postulante, sino para el funcionario, para el juez, para el legislador. Yo diría que reza para cualquier hombre tener un firme criterio axiológico para poder desarrollar adecuadamente una tarea en la vida.

También aquí se dijo que era mucho mejor un buen juez que una buena ley, afirmación con la que estoy perfectamente de acuerdo. Pero quizá lo contrario también sea verdadero: es mucho peor un mal juez que una mala ley. Toca al juzgador aplicador del derecho, hacer que la ley no sólo pretenda justicia y seguridad sino que sea equitativa, que busque en cada caso concreto la realización del valor que dio origen a la norma general.

Si este marco nos convence podemos entrar en materia. Una explicación más. No es nuestra plática producto de una preocupación meramente teórica, aunque no negamos la validez de las preocupaciones teóricas, quisimos desarrollar este tema analizando los usos de los litigantes, las costumbres de los tribunales del trabajo en el estado; analizándolos como problema para tratar de mejorar esos usos. Pensamos que lo que se ha dicho en Guanajuato en distintos foros es cierto: un conjunto de litigantes influye en la calidad del tribunal y a su vez la calidad del tribunal influye en los litigantes. Si se descuidan una u otra cosa, se deterioran.

¿Por qué ocuparnos de este tema? ¿Por qué ocuparnos de las demandas laborales entabladas contra "quien resulte responsable"? Porque es usual en todos los tribunales del Estado y en otros del país, que los litigantes dirijan sus demandas presentadas ante los tribunales del trabajo contra "quien resulte responsable".

Las demandas empiezan diciendo "vengo a demandar a fulano, zutano, perengano y a "quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo". Casi es una fórmula sacramental que todos los litigantes usan indiscriminadamente y que se da cuando se presenta una demanda. Si nada más se presentara la demanda, no tendría mayor importancia ocuparnos del tema, pero ocurre que cuando una demanda se presenta así, contra varias personas físicas o contra varios entes jurídicos colectivos y además "contra quien resulte responsable", el Tribunal del Trabajo la radica y en su auto de radicación, en el auto a través del cual se provee que quede ahí el expediente y se le dá un número de orden, dicen: "téngase a fulano de tal por demandado, a zutano, a perengano y a quien resulte responsable de tal fuente de trabajo".

Si las cosas quedaran ahí todavía el problema quizá no ameritara nuestro análisis, pero se va más allá porque la junta ordena a cualquiera de los actuarios del tribunal, que emplace a fulano, a zutano, a todos y cada uno de los demandados que se determinaron por su nombre y, agrega la junta, "a quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo". Y todavía se va más allá, el actuario va y dice: "emplacé a fulano, emplacé a perengano y emplacé a todos los demandados por su nombre". Todavía se va más allá y en la mesa de audiencias la junta dice: "te faltó emplazar a "quien resulte responsable"; se suspende esta diligencia y se cita para tal fecha, ve a emplazar a "quien resulte responsable"". Se va el actuario y luego emplaza a todas estas personas físicas y levanta un acta diciendo: "me constituí en tal lugar y ahí me cercioré de que fuera el lugar señalado como fuente de trabajo por el actor, y ahí emplacé a "quien resulte responsable"".

Las cosas no paran ahí. Luego, en la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento de pruebas -todos ustedes saben que en Derecho del Trabajo hay una audiencia para todo-, una sola audiencia en donde las partes se concilian, se ratifica la demanda o se ejercitan nuevas acciones, se contesta la demanda y se ofrecen pruebas. Estas demandas entabladas contra multiplicidad de sujetos, en ocasiones tienen un destino muy curioso: los litigantes lucen sus habilidades de conocimiento de Derecho Procesal y revisan la lista de demandados. Si en la audiencia ven que falta alguno de los demandados y que formalmente está emplazado, se desisten de los otros y agregan unas palabritas. Dicen: "también fulano de tal", el único ausente, o los ausentes, "le daban órdenes al trabajador. Me desisto de la demanda en contra de todos los demás y nada más la continúo contra ellos".

Se continúa contra los ausentes formalmente emplazados. Ya en esa condición, como a la junta otros artículos le ordenan que cuando un demandado no se presente a la audiencia de demanda y excepciones, lo tenga por contestando los hechos de la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, a estos ausentes los tienen por contestando la demanda así, y el abogado postulante queda satisfecho porque triunfó, le dio resultado su "habilidad", habilidad entre comillas. Pero aún más, hay ocasiones, podemos señalar casos concretos, en donde los abogados postulantes se desisten de las acciones contra todos los demandados excepción hecha de "contra quien resulte responsable", y entonces el tribunal tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo a "quien resulte responsable", salvo prueba en contrario. Como a continuación también es la etapa de ofrecimiento de pruebas, tampoco tiene oportunidad de ofrecerlas.

Voy a exagerar en lo que voy a decir. Se dictan laudos en que, en ocasiones se condena a los demandados y también se condena a "quien resulte responsable", como si estas palabras "quien resulte responsable" fuesen alguna persona determinada, como si se pudiese entablar una demanda, no digo entablar sino seguir todo un juicio y condenar a un ente no identificado, indeterminado.

Esta fue la preocupación que nos hizo ocuparnos del tema, ¿será correcto eso?, ¿será lo que dice la Ley Federal del Trabajo, será correcta la aplicación que de la Ley Federal del Trabajo están haciendo los tribunales? Insisto, no me refiero exclusivamente a los de Guanajuato, aunque no los excluyo, sino en general a los tribunales del país y sobre todo si esto es lo que quiere la ley, si esto es lo que ella ordena, pues en determinadas cuentas contra quien se siguió el juicio, ¿no se lesiona acaso con un laudo contra "quien resulte responsable" la garantía de audiencia, pues a quién se escuchó que se llame así?. Estos fueron los hechos que nos crearon la inquietud del análisis no con afán crítico ni exhibicionista sino para encontrar un camino legal, arriesgando la opinión personal que deseamos adecuada, que deseamos justa, pero que con el auxilio de ustedes afinaremos.

Acordémonos que es un seminario en donde admitimos las opiniones y las preguntas de todos ustedes para encontrar una solución a este problema. Esto ha creado una verdadera anarquía y una inseguridad absoluta para los demandados en un juicio obrero, y nos preguntamos "bueno ¿este uso en qué se originó?"

Nos acordamos de nuestros primeros años de litigantes y de nuestros primeros años de funcionarios de tribunales del trabajo y no se demandaba así. ¿En qué se originó este problema? Y encontramos otro hecho que quizá le haya dado origen: es muy frecuente que patrones irresponsables, sobre todo propietarios de pequeños negocios, de pequeñas fuentes de trabajo, de una tiendita, de una pica en León, de un taller de rebozos o suéteres en Moroleón, ante las autoridades administrativas incluidas las fiscales, las de Hacienda Federal o las de Secretaría de Finanzas del Estado, registran sus negocios a nombre de una persona insolvente, para si hay algún problema y se les condena pues ellos dicen "no, pues yo no soy dueño de nada". Realizan esta argucia, ponen los negocios a nombre de su mujer, o a nombre de sus hijos, y la mujer y los hijos son insolventes, y ellos creen que están muy seguros.

Seguramente contra esta práctica reaccionaron algunos postulantes y también el legislador -valga esta aparente digresión-, el legislador del trabajo, no el legislador formal, no la Cámara de Diputados, no el Congreso de la Unión, sino el *legislador real del trabajo* en los últimos años en el país, son o es un sujeto con dos grandes cabezas: o el llamado sector obrero organizado, o las grandes empresas organizadas. Esos son auténticamente los legisladores en materia del trabajo, sin eludir la responsabilidad formal y legal de quienes inician las leyes y quienes las aprueban. Pero la verdad es que antes de enviar una iniciativa sobre Derecho del Trabajo a las cámaras, el iniciador por conducto de alguno de sus secretarios -el iniciador generalmente es el Ejecutivo Federal- pacta con el sector obrero organizado los términos de esa iniciativa, o los pacta con las grandes empresas.

Esto es un hecho y entonces, seguramente, además, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, en la de diputados y en la de senadores, hay represen-

taciones ordenadas y combativas, quizás las únicas de las más combativas del sector obrero organizado. Entiéndase Confederación de Trabajadores de México, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y ellos inician. Entonces tratan de proteger su clase. Estas son gentes integradas, bien o mal, a los intereses de su clase en el concepto personal de ellos, y nos encontramos con que, aparte de este hecho -muy frecuente en Derecho del Trabajo, desgraciadamente-, pues parece ser que la ley da pie a que se establezcan demandas contra "quien resulte responsable".

Hay un artículo de la Ley Federal del Trabajo de 1931, creo que el artículo 441 de esa Ley y este es el primer antecedente que encontramos de este uso. Este artículo decía textualmente:

"Artículo 441.- Los litigantes en el primer escrito o en la primera comparecencia o diligencia, deben designar casa ubicada en el lugar de residencia de la junta, a efecto de que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias en que deban intervenir. Asimismo, para la primera notificación de la persona o personas contra quienes promuevan, deberán designar con precisión la casa o cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 444".

Aquí yo decía "bueno, pues este artículo ordena que se demande a personas pero nos encontramos con un artículo diferente, un artículo en la Ley de 1931, el 481 textual". El artículo 481 de aquel ordenamiento dice:

"Artículo 481.- Tanto los patrones como los obreros pueden proponer sus demandas en contra de las personas que resulten afectadas por la resolución que se dá al conflicto existente entre ellos".

Yo pienso "seguramente esta redacción, un tanto cuanto desafortunada, fue la que motivó que en principio se establecieran demandas contra "quien resulte responsable" o sea contra quien se vea afectado por este conflicto". Este artículo 481 quizá sea el antecedente final legal federal del actual artículo 712 que se ha modificado en su redacción, pero que más o menos permite el que se plantee este tipo de demandas. Veamos el texto del artículo 712.

"Artículo 712.- Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social de donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda, el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador".

Y luego en otro artículo que textualmente señala que "Cuando se haya demandado en los términos del artículo 712 se emplazará con la demanda cerciorándose el actuario que es el domicilio o lugar señalado en ésta, y emplazando aquí a quien esté", y dice la ley "con lo que se entenderá que ha sido emplazado el patrón".

Estos son los textos legales que pudieron dar un supuesto fundamento legal a estas demandas contra "quien resulte responsable". Ahora debemos preguntarnos como abogados ¿estarán bien interpretados y aplicados?

En primer lugar en la propia ley siempre se impone la obligación de las partes en su primera comparecencia o escrito, señalando en el lugar de residencia de la junta, domicilio para oír notificaciones la parte que promueve y se le advierte que si no lo señala las notificaciones, incluso las personales, se le harán por lista o por estrados, según sea el uso del tribunal. Y en ese mismo artículo se le dice, también debe señalar el domicilio de la persona o personas contra quien promueve, forzosa y necesariamente en el primer escrito. Es apenas una necesidad lógica que la junta, el tribunal, sepa a quién se está demandando para que lo pueda llamar a juicio. Todos los códigos de procedimientos que conocemos obligan a quien promueve a que señale el domicilio o el lugar donde se pueda citar a aquella persona contra la que se promueve.

Parece de perogrullo pero es muy natural. Aquí también se da ese fenómeno; se da esta obligación para las partes y esta es la regla general a la que hay que atender en todos los juicios: quien promueve debe señalar el domicilio de la persona o personas contra quienes se promueve y, como excepción, y sólo como excepción, la actual Ley Federal del Trabajo y todas las anteriores permiten que para el supuesto -supuesto de excepción también-, que el trabajador ignore el nombre o nombres de las personas a quienes les prestaba el servicio, sólo en ese supuesto no dé sus nombres; y le impone obligaciones, vamos a decir, sucedáneas, bien explicables, que indique siquiera si ignora estos nombres, el lugar donde prestaba el servicio, donde está ubicada la fuente de trabajo, y a qué se dedica esta fuente de trabajo.

Perdón por insistir en este tema, yo no sé qué tan atractivo les pueda resultar. Para nosotros resulta de gran interés porque puedo decir que la generalidad de las demandas hace caso omiso de estos supuestos legales; y ojalá esto no trascendiera, pero el hacer caso omiso de estos supuestos legales complica la tramitación de los asuntos que se ventilan en los tribunales del trabajo en grado superlativo y conduce a verdaderas injusticias e inequidades.

Entonces, ya tenemos un elemento que nos será muy útil. El legislador no permite que se demande a sujetos indeterminados. Siempre las acciones se ejercitan contra alguien, contra otra persona jurídica, no contra "quien resulte responsable", pues imagínense qué problema tendrían todas las autoridades si este criterio se extendiera. Qué cómodo para los litigantes, eso sí. Por eso ellos en cuanto vieron el resquicio, lo aprovecharon.

— Vengo a demandar "a quien resulte responsable".
—Oye, ¿quién es?
—Averígualo tú, pues para eso eres tribunal.

No, el legislador no permite eso, es un supuesto de excepción, y si es un supuesto de excepción, todo lo otro que hemos narrado se configura automáticamente como un abuso, como una mala interpretación de la norma.

No pueden convivir en una misma demanda el que se dirija contra personas físicas concretas y a la vez se diga que "a quien resulte responsable"; eso nada más no puede ser, no está dentro de los supuestos que señala el artículo 712, que establece el caso de excepción en que se puede demandar sin dar el nombre del patrón porque se desconoce, pero, dando a cambio del nombre, la ubicación de la fuente de trabajo y a qué se dedica esta fuente de trabajo. En todos los otros casos hay que dar el nombre. Entonces ¿cómo es posible que en una demanda se diga "vengo a demandar a Juan Pérez, a Víctor Macías y a Espiridión Morales y, además, a quien resulte responsable"? Pues no, ya no estamos dentro del supuesto.

¿Qué debe hacer el tribunal con esas demandas? Pues también de eso nos ocupamos. Se trataba de encontrar caminos que nos ayuden a solucionar el problema, y de encontrar caminos legales.

Recuerden, ustedes tienen una hermosísima obligación en Derecho del Trabajo, una hermosísima obligación. La ley les ordena, no les da la facultad, la ley les ordena que hagan todo lo posible porque el juicio sea rápido. Les voy a leer textualmente el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo.

"Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso".

Claro, sin violar las normas relativas al procedimiento que señala la ley, pero cualquier medida para lograr la economía, concentración y sencillez del proceso está obligada, no facultada, insisto, obligada la junta a tomarla; pero además las juntas tienen otras facultades que, bien interpretadas y bien aplicadas, creo que superan esta práctica extendida en espacio y en tiempo de demandar a "quien resulte responsable", juntamente con otros demandados concretos.

El artículo 685 nos señala: "Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley":

Y yo digo, una demanda que se entabla contra varios sujetos concretos y además contra "quien resulte responsable", pero además en esa demanda se imputan los hechos que se narran a uno de los sujetos que se mencionan, éste es el fenómeno diario de las demandas de Derecho del Trabajo. Se dice:

—Trabajaba con el señor Benigno Morales.

—Bueno, y también demandas a "quien resulte responsable" y me dices que trabajabas con Benigno Morales.

No es una demanda vaga, no es confusa. Entonces, ¿por qué no aplicar lo que señala el artículo 873 que, bien aplicado, puede ser útil? ¿Qué nos dice el artículo 873? El artículo 873 nos señala:

"Artículo 873.- El pleno o la junta especial, dentro de las 24 horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con 10 días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes, con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios la junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días".

No será esta una irregularidad al demandar. Las demandas en Derecho del Trabajo son simplísimas, simplísimas. La ley dice que, señalando contra quien se demanda, hay que narrar los hechos dice la ley, en que se funden las peticiones. Así dice la ley diciendo "demando a fulano de tal porque yo era trabajador y me corrió, y no me pagaba el salario mínimo, y quiero que me pague lo que me falta del salario mínimo y la indemnización que me corresponde". Está hecha una demanda de trabajo, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se aplican estos artículos y por qué no se hace sencillo el procedimiento del trabajo? Voy a decir lo que creo que pasa.

Todas las juntas del país y en particular las del Estado de Guanajuato carecen de apoyos administrativos. El pobre presidente de la junta -perdón, digo pobre, en función no de recursos económicos sino del exceso de obligaciones que se derivan de su cargo-, la hace de actuario, de secretario, a veces saca copias, sí, lo digo en serio. No tiene quién lo auxilie a tomar decisiones de trámite en los juicios obreros, no tiene quién lo auxilie. Se pagan tan bajos sueldos -no sólo pagar altos sueldos es la solución- pero se pagan tan bajos sueldos que el personal que labora ahí, pues no tiene mayor interés; casi tiene el interés genérico de la burocracia, llegar un poco tarde y salir lo más temprano posible. Entonces, estas circunstancias trascienden a la eficiencia del funcionamiento del tribunal.

Pero además, con muy buena voluntad los tribunales del trabajo del Estado no se concentran en celebrar una audiencia a la vez; de una manera generosa pero ilegal -ilegal dada su organización-, citan a varias audiencias a la misma hora con el propósito de que los negocios se desahoguen más fluidamente, y ojalá se pudiesen cumplir los términos legales. Y así hay varias mesas ante las cuales se celebran audiencias.

Antes, hace algunos años, cuando yo era un poco más joven, se citaba exclusivamente a una audiencia que se celebraba ante la junta en pleno, porque las juntas locales del estado de conciliación y arbitraje funcionan todas en pleno, esto es, en grupo, integradas. Antes se citaba a una audiencia ante el pleno y hasta que el pleno terminaba esa audiencia se iniciaba otra. Pero el trabajo se ha multiplicado y las juntas no, y los plenos tampoco, por lo menos no en la misma proporción que el trabajo; y entonces los presidentes de las juntas vieron que en México hay varias mesas para que se desahoguen ante la misma junta muchas audiencias al mismo tiempo, y aquí hicieron una cosa semejante. Nada más que no se reflexionó que en México las juntas trabajan como juntas especiales que están facultadas por la ley para que el auxiliar supla al pleno en cuestiones de trámite, y las juntas de Guanajuato trabajan en pleno no como juntas especiales y cuando la junta trabaja en pleno, la ley no las faculta para que ningún auxiliar las supla. Entonces las audiencias que se levantan todas de origen, los litigantes lo soportan, y lo soportamos, porque todos tenemos el mismo interés de que se desahoguen pronto; pero la verdad, a lo mejor lo único que se requiere es una organización diferente de la junta; pero por lo que hace a este tipo de problema que estamos tratando con tanta concreción -y que queremos hacer extensivo, un problema general que vivimos, porque pensamos que la universidad, así lo reconocen las autoridades universitarias, además no puede ni debe estar alejada de los problemas de su sociedad, de su comunidad- basta con que se instruya a los empleados que reciben las demandas y que se les diga "mira, cuando venga una demanda contra muchos y contra "quien resulte responsable" pásamela y no la admitas, te dictas este acuerdo y me lo pasas a firma. Vamos a requerir a estos señores para que nos la aclaren, vamos a decirles que el defecto consiste en que no están demandando correctamente".

Si se tiene esta facultad, si el artículo 873 la da, pero además, además y esto es verdaderamente tremendo, perdón -si es que amerita pedirlo, por tratar en un foro que, se supone, que nada más me ocuparé de los nombres de las acciones y de esas cosas un poco rebuscadas en cuestión de abogados- por ocuparme de problemas reales ante los cuales sólo se enfrentan cuando ya salieron de la universidad. Aquí se trata de la vida diaria, ya no se trata de lo que nos dijeron en el aula, sino de lo que está ocurriendo en cuanto salimos del aula, en cuanto tratamos de ejercer nuestra profesión, en que, a veces, lo que aprendemos en el aula para este ejercicio distorsionado, no nos es útil, y llegamos

con la ley en la mano: "y esto que están haciendo aquí, en qué artículo lo dice la ley", y nos llevamos sorpresas bien desagradables.

Entonces -yo creo que esto es importante ponerlo aquí en este foro, en este foro creo es importante ponerlo-, yo digo las cosas se complican más en las juntas del trabajo. Se nota, es un problema. Hay que analizarlo así, que muchos abogados de prestigio, de prestigio ganado a través de una vida de ejercicio, rehúyen trabajar en Derecho del Trabajo. Yo a veces decía "esto ha de ser por ignorancia de la materia, porque como antes no se impartía…" Pues no, no es tanto por eso; es, tanto porque se desconciertan ante los usos que no se comprenden, porque no se derivan del texto de la ley.

Quiero platicarles -para que nos abrumemos un poco, porque todos somos responsables, absolutamente todos-, lo que ocurre con las "habilidades" de muchos litigantes que no tienen ese criterio axiológico firmemente asentado, al que se han referido aquí en otras pláticas y con lo que empezamos la nuestra.

Se demanda por un afán de asegurar al trabajador-cliente, se demanda a una empresa, desde el gerente, desde luego a la empresa, al gerente general, al gerente de ventas, al gerente de compras, al gerente de refacciones, a la señora del gerente, a los accionistas. Les doy a ustedes mi palabra de honor que no estoy inventando, se demanda a todas estas personas, 11 sujetos, y en el cuerpo de la demanda, contra muchos de ellos, no se narra un solo hecho, por lo contrario, en la demanda se dice "trabajaba para la empresa fulana de tal y también para la empresa fulana de tal", y contra los otros sujetos no se narran hechos, ni siquiera se afirma que se trabajaba para ellos, y la demanda se admite y se ordena emplazar a cada uno de los mencionados en la demanda.

¿No es esta una notoria irregularidad y una falta de vigilancia en la entrada de las demandas? Ya lo sé que son muchas, ya sé que son muchas las que entran, pero basta con tener una regla general de vigilancia. Alguien debe leerlas; la ley obliga a la junta, a la junta nada más, a que lea todas las demandas, pues tiene que suplir la queja o tiene que subsanar la irregularidad en su presentación, le da un plazo de 24 horas para que lo haga pues, ¿cómo se puede citar a un juicio si antes el tribunal no ha leído las demandas?

En estos casos, si se demandara así, ¿no es notorio que la junta debería requerir al actor si es trabajador para que nos aclare la demanda y nos diga si sabe quién es su patrón? Pues que lo demande a él y ¿qué necesidad hay de molestar a tanta gente? Y si no sabe quién es su patrón, pues entonces que se atenga a los términos del artículo 712 y se demande sí a quien sea el patrón de esa fuente de trabajo, y se dé la dedicación de la fuente de trabajo y la dedicación de ésta. Pero no hay más posibilidades de accionar, porque si este error fuese nada más de que "bueno, se molestó a la gente y vinieron 12", ¡Ah!, porque acuérdense señores que ustedes cursan Derecho del Trabajo, acuérdense que en Derecho del Trabajo, a la etapa conciliatoria -será motivo de otra plática nuestra-, a la etapa conciliatoria hay que ir personalmente, no se vale mandar al apoderado; se tiene que ir personalmente. Imagínense entonces lo

que representa que se demande a 15 personas, incluida la esposa del gerente, y que el señor tenga que venir con su esposa a presentarse porque a alguien se le ocurrió incomodarla demandándola sin que se narre nada contra ella.

No, lo que pasa es que estos aseguramientos que los litigantes -en un afán de garantizar el resultado del negocio- realizan, en mi opinión, y lo quiero poner a disposición de ustedes, resultan absolutamente ilegales, absolutamente ilegales. Y creo que los tribunales no deben admitir este tipo de demandas, que se evitarán mucho trabajo, mucho trabajo ocioso y muchas complicaciones de hecho y de derecho si simplemente, al presentarse una demanda, vigilan que cumpla los requisitos mínimos que la ley señala para este tipo de demandas, si se instruye adecuadamente al personal de los tribunales -por escaso que éste sea-. Si se tienen las facultades, la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la economía, concentración y sencillez del proceso, la facultad del 873, de que, en caso de que se notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, al admitir la demanda le señalará los defectos, omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que lo subsane en un término de tres días…. Si se tienen todas estas atribuciones, ¿por qué no ejercerlas?

Ahora bien, tenemos que concluir o por lo menos tengo que concluir yo mi exposición para no cansarlos; me he fijado un tiempo máximo de exposición y luego responder a las preguntas de ustedes, si es que existe alguna.

Tenemos que concluir con algo doloroso -algo doloroso que por fortuna no he sido yo el primero en tocar ni en este ciclo de pláticas, ni en la Universidad de Guanajuato, porque algunos maestros nuestros lo tocan desde siempre-, la necesidad de que el abogado sea un profesionista en verdad capacitado, capacitado en derecho, no sólo en el manejo de las leyes; la necesidad ya expuesta de que haya un firme criterio axiológico, y que se sepa que la obligación del abogado no es única y exclusivamente ganar el asunto para su cliente a como dé lugar. Hay muchos abogados que ya no entienden eso y que se (consideran) mejores abogados quienes más "habilidades" -entre comillas- procedimentales tienen, el que más trampitas sabe hacer ¡ah, qué buen abogado es! Definitivamente, es distorsionar el sentido de nuestra profesión.

Tenemos que concluir que quizá, a todos nosotros como abogados, y a los que hacemos egresar de nuestra Universidad, estemos cayendo en una falta de formación profesional y que, quizás, los tribunales del trabajo, todos hayan caído en una burocratización excesiva en donde su problema no sea impartir justicia y equidad en cada caso concreto, sino tramitar rápidamente el asunto, y a ver qué sale.

Perdón otra vez por ocuparme de estas cosas que a mí me hacen apasionarme, y que yo quisiera contagiar mi apasionamiento a ustedes; es que estos defectos, aparentemente sin trascendencia, se traducen en la vida real en gravísimas injusticias, gravísimas injusticias, en lesionar intereses de personas que no tienen ninguna relación con el negocio. En ocasiones repetir ociosamente todo un negocio.

Quiero decirles que yo como abogado no me preocuparía el día que una persona venga y me enseñe un laudo y me diga:

—Fíjese que me están ejecutando.

—¿Y qué le están ejecutando?

—Pues es que yo soy el responsable de esta fuente de trabajo y aquí me condenaron pues dice que "a quien resulte responsable".

—Oiga señor ¿y usted acudió a juicio?

—No señor, yo nunca fui.

—¡Ah, señor! pues déjeme pedir un amparo porque usted no ha sido oído.

Yo creo que ese amparo se ganaría y entonces habría que repetir todo un procedimiento y sabrá qué tantas dificultades sean hasta para el actor; nadie que desconozca el derecho puede trabajar con la ley por instrumento, lo creo con toda honestidad.

Posiblemente haya sido muy rápido mi planteamiento y esté incurriendo en un defecto que a veces critico: en dar en ustedes por sabidas muchas cosas de las que yo partí. Ustedes me lo dirán en este momento en que abrimos esta plática a las preguntas que deseen hacerme, en la inteligencia de que les ruego, de verdad, su participación. Les aclaro que quizá yo no sepa todas las respuestas, pero aquí hay abogados con una gran experiencia en la materia, y ustedes mismos, que, si yo no sé alguna, me auxiliarán a encontrarla, y si no, les prometo estudiarla, y en próxima sesión les daré la respuesta.

Muchas gracias.

Preguntas y respuestas

Lic. Meza.- Licenciado, me ha parecido interesante esta plática, partiendo de que usted ha dicho una verdad que ocurre en los tribunales del Estado de Guanajuato y en muchas partes fuera del Estado de Guanajuato. Es cierto que las demandas, en su mayoría, contemplan a "quien resulte responsable" y que las autoridades laborales así le dan trámite a la demanda. Va a ser importante, en lo particular para mí, tener una sesión de pleno en la junta de Guanajuato, re apuntar lo que usted ha comentado en esta ocasión y creo que es interesante lo que usted ha planteado, porque usted comentó, se va a utilizar ante otras juntas. El procedimiento va a ser sencillo como la ley lo establece. De lo que usted ha comentado, Licenciado, tengo unas dudas, pero una es la importante. Usted comentó que en el caso de que la demanda sea irregular, sea oscura, con base en el segundo párrafo del artículo 873, habrá que requerir al actor para que la aclare. La pregunta es la siguiente, Licenciado: una vez transcurrido el término de tres días, si el actor durante ese término no aclara su demanda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque tengo entendido que esa fracción contempla una norma, Licenciado.

Lic. Montes.- Así es. Tiene usted absolutamente toda la razón en el planteamiento y le agradezco mucho que nos lleve a ese tema. Es cierto, el artículo 873 después de que dice que el actor debe aclarar su demanda, no dice qué pasa si no lo hace, no establece una sanción específica pero, quizá en el capítulo de sanciones podamos encontrar una. Y perdón por atreverme a tanto Licenciado, yo diría que el tribunal debe decirle al actor que si no lo hace, por lo menos no le dará trámite a su demanda, y seguramente es de los pocos casos en que puede empezar a correr el término para tenerlo por desistido fictamente del planteamiento de la acción si no hace la aclaración. De la otra manera, en ningún caso se va a tener por desistido al actor fictamente del planteamiento de esa acción; y en su tiempo pues, dar vista -como lo señala el caso del desistimiento- a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para que ella requiera al actor y si no cumple con eso será esto menos.

Estoy seguro que cualquier abogado, porque, quiero decir, este defecto en el planteamiento de las demandas no es de los trabajadores, es de los abogados que postulamos en las juntas que además, es un círculo pequeño de abogados. Yo casi diría, Licenciado, que, en la vida práctica, lo que va a ocurrir será que en cuanto las juntas se empiecen a poner exigentes, el uso de los litigantes va a cambiar. "Bueno, pues yo para qué me meto en problemas, pues voy a hacer los planteamientos como la junta dice"; pero si no ocurriera así, en última instancia el asunto caducará en su momento, Licenciado. No le puedo aconsejar que inventemos una sanción; no existe. No sé si esté respondida. Gracias, señor.

¿Alguna otra pregunta señores?, no me vaya a pasar lo que en algunas clases, luego era yo tan confuso al exponer, que nadie dudaba porque nadie me había entendido.

Lic. López Ríos.- A este respecto, en materia fiscal existe una prevención para el actor, de suerte que regularice su demanda. Si éste no lo hace en un término que la ley señala, entonces la ley expresamente señala que será desechada su demanda. Creo que para que se regularice también el proceso fiscal, sería conveniente que en la ley se estableciera una sanción en ese sentido, puesto que son situaciones tan elementales como el que un trabajador sepa cuál es la fuente en la que está laborando, que si no se lo indica a la junta, entonces creo que la ley debe sancionarlo simplemente por no manifestar con suficiente interés cuál es la pretensión que plantea ante los tribunales laborales. Esa sería simplemente una sugerencia.

Lic. Montes.- Pues ojalá que nuestro departamento, llegando a estas conclusiones, pudiese elaborar un estudio, algún memorándum a disposición de las autoridades correspondientes. Tiene usted razón, creo que en mi opinión la ley, todas las leyes son perfectibles, absolutamente todas y en forma particular la Ley Federal del Trabajo en el aspecto procesal; hay aspectos muy desafortunados dentro del Derecho Procesal del Trabajo.

Pero además, hay otro desiderátum del que nos ocuparemos con motivo de otra plática. Es que la Ley del Trabajo, por querer ser excesivamente proteccionista ha llegado a ser ineficiente. El proteccionismo excesivo no ayuda ni siquiera a aquellos a quienes se pretende proteger. Pasa lo mismo que con los niños sobreprotegidos: los hace uno inútiles.

Entonces, aquí estamos en un fenómeno con una ley, y ya veremos qué reacciones de hecho y qué consecuencias ha provocado la ley en las otras dos pláticas, a las que ojalá me acompañen, que son mañana y pasado mañana.

Lic. Meza.- Respecto al término de tres días para que se aclare la demanda, el primer procedimiento, encontramos en caso de que no la aclarase. La pregunta es la siguiente, Licenciado: se concede el término de tres días para la parte actora, que normalmente es el trabajador, para que aclare su demanda. En ese término nos dice: "señor, no sé quién es el patrón". ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

Lic. Montes.- "No sé quién es mi patrón", pues entonces está dentro del supuesto del artículo 712, y entonces sí se puede demandar "a quien resulte responsable", pero se le puede demandar exclusivamente a él y a nadie más, y entonces hay que dar los extremos que señala el 712: "¿dónde está tu fuente de trabajo y a qué se dedica esta fuente de trabajo?" Y entonces yo, junta, voy. Y en los términos de otro artículo, el relativo a notificaciones que se refiere expresamente a este tema, cuando el trabajador haya demandado en los términos del artículo 712, basta que la junta entregue la demanda en la fuente de trabajo señalada para que se tenga por emplazado al patrón. Pero eso no quiere decir que ya todo el juicio se vaya a seguir contra "quien resulte responsable", y el laudo se vaya a dictar contra ese ente indeterminado, sino que ya se emplazó correctamente al patrón en los términos de ley. Y yo me atrevería a decir, con base en la otra facultad, una facultad muy importante, que contiene el artículo y qué bueno que usted la tocó. El artículo 782 tiene una facultad espléndida para los tribunales; señala "que los tribunales del trabajo podrán ordenar con citación de las partes el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento para actuarios o peritos y, en general practicar las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad".

"Cualquier diligencia"; yo me atrevería con base en eso a decirle a las autoridades fiscales, "¿a nombre de quién está registrado esto?", "a nombre de fulano de tal". ¡Que no hay un procedimiento específico de averiguación en la ley… no lo hay!; ni la obligación específica del tribunal de investigar, pero puede realizar cualquier diligencia para llegar al conocimiento de la verdad, cualquiera, la que la junta quiera, la que ella determine, ¿porque no?, si se demandó en los términos del 712, y además de haber sido emplazado el patrón en el lugar señalado como fuente de trabajo, y si éste no sabemos todavía quién es, ¿por qué no averiguarlo por parte de la junta? Y, entonces, el juicio se sigue contra un sujeto determinado: el responsable de la fuente de trabajo, que debe llamarse de alguna manera. Yo creo que esto es muy claro.

(Pregunta no identificada).

Lic. Montes.- Sí se han impugnado procesos por ese vicio, aunque no den resultado. Pero mire, normalmente no se impugnan; ustedes en sus prácticas de Derecho del Trabajo deben haberlo visto; deben haber recorrido algún tribunal. El hecho es que las audiencias se levantan por una mecanógrafa a la que le está dictando un auxiliar, y si usted busca al pleno, no lo encuentra. Si busca al presidente sí lo encuentra, porque todos los litigantes sabemos en dónde están los presidentes de las juntas, y a veces vamos a darles lata y a decirles "intervenga usted en este asunto"; pero en el acta se dice que se está actuando ante la junta, y al final del acta, los litigantes y el secretario de la junta firman como si se hubiese estado ante la junta, y ahí queda que se actúa ante la junta. Esta es la verdad.

Conozco un caso de algún postulante en la junta de Celaya donde quiso hacer valer eso y la misma junta lo desechó. No sé si después habrá habido otro recurso legal o un juicio de amparo, pero ¿por qué no acatamos esto? Bueno, no lo acatamos porque a todos nos conviene, y que, en última instancia, no nos lesiona.

Mire usted, de dos maneras pueden trabajar las juntas. Si trabajan por junta especial como la federal que hay en la Ciudad de Guanajuato -la no. 31, Junta Especial no. 31de la Federal de Conciliación y Arbitraje- ésta puede trabajar con seis mesas distintas en que se haya nombrado un auxiliar, ¿porqué? porque esa es junta especial. Nada más hay una junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el país y esa está en la Ciudad de México, y la Junta Federal de Conciliación no. 31 nada más conoce de asuntos individuales, y ahí sí es perfectamente legal que para todos los trámites en cada mesa haya un auxiliar, y solamente para cuestiones de personalidad, de competencia y otras, debe estar integrado el pleno. Para todos los demás basta el auxiliar. Pero desde hace mucho tiempo que por las autoridades locales están descuidadas las juntas del Estado, y a nadie se le ocurre que trabajen como juntas especiales, y entonces, trabajan todas como Juntas de Conciliación y Arbitraje en pleno. Por esta sola circunstancia, los auxiliares no pueden sustituir al pleno; pero como sería absurdo, duraría…, si así se dura tiempo imagínese usted lo que sería que nada más se trabajara ante la junta. Le aseguro a usted primero, que los asuntos tardarían mucho más de lo que tardan, pero mucho más. Entonces, todos lo soportamos, nos conviene, y todos decimos "está integrada la junta", "sí, sí está integrada", y firmamos.

Perdón otra vez por ponerlos ante esta realidad que dista mucho de lo que vemos en libros, en las aulas, pero esta es la verdad. Por eso pocas veces se impugna la validez de la actuación del tribunal, porque desde que la actuación se inicia, las partes que comparecen ante él están de acuerdo.

Pregunta de persona no identificada. Licenciado ¿podemos entonces, al menos en lo particular concluir para el abogado o quizás para el litigante en lo

general, que se le facilitaría más el trabajo si señalara siempre "a quien resulte responsable", señalando de acuerdo con el artículo 712?

Lic. Montes.- No, yo creo que se le dificultaría más. Yo tengo la experiencia profesional. Esto no nace de una teoría sino de una convicción como conclusión de mi ejercicio, que para cualquier abogado … trabajar con la verdad es mucho más sencillo. Si usted sabe quién es su patrón, pues dígalo, ¿para qué lo culta?, para que al patrón se le llame a juicio. Después de todo, decir falsamente que no se conoce el nombre del patrón da cierta incertidumbre desde el arranque al negocio, porque la junta tendrá que citar al demandado de manera distinta y después, como lo hemos estado viendo, realizar acciones que dilatarán el procedimiento para averiguar, tarde o temprano, quién es el demandado. Yo diría, si no se averigua quién es el demandado no se podrá seguir el procedimiento. Esto es mucho más fácil, que usted lo diga, porque además usted sabe con quién trabajó. Normalmente se sabe con quién trabajó. Si después ese señor resulta insolvente la ley establece casos específicos de responsabilidades solidarias, por ejemplo, cuando para los trabajadores del campo los propietarios de la tierra son responsables solidariamente con el patrón arrendatario. Si en una empresa una persona trabaja en forma principal para otra, la que recibe el trabajo es responsable con el mismo demandado, si es que éste no tiene con qué resultar. Pero además hay que estar también ante un hecho: dicen que al capital de nada ni los palos le entran. Si usted está demandando a un insolvente ganará en derecho, pero cuando trate de ejecutar su juicio, lo que obtuvo no va a encontrar en qué ejecutarlo, y eso también hay que soportarlo. Esa es mi opinión.

Pregunta de persona no identificada. Licenciado, mi pregunta es en relación a que debido a que los trabajadores por lo general ignoran quiénes son las personas, las que realmente son sus patrones, es por eso por lo que quizás se demanda a personas que no son, como quien es su jefe inmediato. Por lo general ¿los trabajadores ignoran quiénes son sus verdaderos patrones, el dueño de la empresa?

Lic. Montes.- Bueno, yo no puedo aceptar que eso ocurra por lo general. Puede ser que, si se trabaja para una persona moral o para un ente jurídico colectivo, se ignore quiénes sean los accionistas de ese ente, pero, bueno, no tenemos que demandar a los accionistas. Si usted trabaja en la Ford, va a demandar a la Ford, y ella ya verá con quién se hace representar. Usted no tiene que decir quién es el dueño de la Ford, ni siquiera quién es el gerente de la Ford. Le basta con demandar al ente jurídico colectivo al que usted le prestaba servicio; esa también es una persona determinada jurídicamente, y cuando se trabaja con personas físicas, generalmente se les conoce. Usted es chofer o empleado de fulano de tal.

Yo creo que la excepción es ignorar con quién se trabaja. Pero si usted ignora, vamos a suponer que usted trabaja en un edificio de velador, y no sabe quién es el dueño del edificio, pues entonces, lo único que va a decir es

eso: “Yo trabajo de velador en el edificio tal, ubicado en tal sitio, y ahí es un edificio de oficinas”, y ya cumplió usted los extremos del 712; y la junta va a emplazar de manera distinta, ahí en el domicilio, y por emplazar ahí, la ley dice “se tendrá por emplazado al patrón”, y si la junta quiere llevar bien las cosas le será muy fácil decirle al Registro Público de la Propiedad “dime quién es el propietario de tal edificio”.

¿Sí me explico? En fin, siempre hay un camino, siempre hay un camino más sencillo, pero de ninguna manera la conclusión que yo quisiera dejar en el aire es que es más fácil demandar a “quien resulte responsable”. No, es más fácil demandar a quien es el patrón, siempre.

(Pregunta no identificada).

Lic. Montes.- Yo no creo porque el 782 le da una facultad a la junta y tiene que ser una determinación de la junta, no del presidente de la junta.

Hubo primero un acuerdo de pleno para llegar a la conclusión de que, en realidad, se estaba demandando a quien resultara responsable, entonces el 782 ya le da facultades a la junta para que verifique quién va a ser el responsable directo en este caso.

Yo creo que esto compañero, es facultad de la junta, es indispensable que esté en pleno, en mi opinión.

Lic. Montes.- Pues muchas gracias. Si no se aburrieron mucho, nos vemos mañana. Gracias.

PRESENCIA OBLIGADA DE LAS PARTES EN EL JUICIO OBRERO. SU PERSONALIDAD[4]

(Versión taquigráfica)

Departamento de Investigaciones Jurídicas de la
Escuela de Leyes de la
Universidad de Guanajuato.
Guanajuato, Gto.
25 de octubre de 1983

Principiaremos hoy el tema que nos fijamos que no expresa la totalidad de nuestra preocupación, pero el tema que nos fijamos es "Las partes en el proceso del trabajo y su presencia obligada en la etapa de conciliación y en la etapa de demanda y excepciones". Para eso, empecemos por preguntarnos qué es parte en Derecho, a qué se llama parte.

La ley da una definición, pero el antiquísimo y no por menos útil diccionario Escriche nos señala que parte es "cualquiera de los litigantes, sea el demandante o el demandado", y el artículo 689 de la Ley nos dice:

"Artículo 689.- Son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones". Y habrá que agregar o defensas, ustedes saben que la excepción y la defensa es lo mismo, o sea entonces cualquiera que tenga interés jurídico en el negocio es parte. En nuestra plática sobre Teoría del Derecho, en consecuencia, aceptemos para los propósitos de nuestra exposición que esto es parte, personas físicas o morales, entes jurídicos colectivos, que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones y opongan excepciones.

Sabiendo ya lo que es parte en Derecho del Trabajo pensemos qué es lo que hacen las partes dentro del juicio, pues desde luego, la parte actora hecha a andar la maquinaria jurisdiccional, pide algo y su petición pone en movimiento toda la maquinaria jurisdiccional para que se ocupe del problema y se ocupe del proceso; y el demandado, la otra parte, o los demandados, acuden ante el tribunal a fin de que éste decida la controversia que se da entre ellos, aplicando una norma general a un caso concreto y específico; y durante la tramitación del proceso las partes del tribunal tienen finalidades comunes, buscan la verdad.

Lo importante en un proceso jurídico -y el juicio laboral lo es-, lo importante, lo verdadero trascendente a lo que se debe sacrificar todo, es encontrar la verdad. Y las formalidades de que se rodea el proceso para que de verdad

[4] Segunda de tres ponencias presentadas en el ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Escuela de Leyes.

sean útiles, para que sirvan de algo, deben ayudarnos a encontrar la verdad, dando seguridades a fin de que las "habilidades" de los litigantes o los intereses que en ocasiones ofuscan la visión general de las partes, no entorpezcan esta búsqueda.

Siempre que se establece una formalidad jurídica, en el fondo lo único que pretende es seguridad para las partes y seguridad para que sea más fácil encontrar la verdad; cualquier formalidad jurídica que no tenga esta finalidad resulta ociosa e inexplicable.

Pero además en Derecho del Trabajo, que estamos hablando de una legislación de telas, una legislación proteccionista de los trabajadores, el legislador ha tenido una preocupación de fondo. Como sabe que el alargar los procesos del trabajo es negativo para las partes, negativo para la sociedad, el derecho del trabajo tiene una característica, las resoluciones que se dicten en juicios particulares hay ocasiones que afectan no sólo a las partes sino, de manera indirecta, a toda la comunidad. Tiene importancia económica, importancia hasta política; las huelgas y hasta los juicios individuales cuando los salarios caídos hacen que la condena sea muy grande, pueden afectar la existencia misma de una empresa; entonces, el legislador de Derecho del Trabajo ha tenido una preocupación toral, una preocupación importantísima: que no se alarguen los juicios, que sea rápida, que sea fluida la impartición de justicia y más que nada, por su origen histórico, que se concilien las partes, que se avengan, que renuncien a sus posibles derechos, no a sus derechos, sino a sus expectativas, en bien de un convenio; como dice nuestra gente del campo "más vale un mal arreglo que un buen pleito". Esta es una preocupación toral del legislador de Derecho del Trabajo y le sacrifica mucho a esta preocupación, que a mí me parece válida. Pero luego, como es una ley proteccionista -y por los factores que veíamos ayer-, que es elaborada por un sector obrero organizado con representantes en las cámaras federales, que se pacta su contenido de normas sobre todo con el sector obrero organizado, y porque participa del enorme vicio que muchas leyes mexicanas, de que al final de cuentas son aprobadas y discutidas por alguien que no es perito en derecho, pues es una ley con gravísimos infortunios de redacción y, en ocasiones, por querer proteger tanto, desprotegen y hacen inoperante la norma.

Por ejemplo, teniendo el legislador la preocupación válida de buscar la conciliación en Derecho del Trabajo, al mismo tiempo redacta artículos de un alcance que él no se imaginó, como uno que dice: "Los tribunales vigilarán para que en todos los convenios los trabajadores no renuncien a sus derechos, y no es válido ningún convenio o liquidación que no se haga ante los tribunales del trabajo".

Sucede que lo mejor en un convenio, lo mejor, la situación real por la que un convenio se facilita y se celebra, es porque las partes renuncian, no a sus derechos, sino a sus posibles derechos.

Yo trabajador voy y demando y digo: "fui despedido injustificadamente, me deben vacaciones, me deben horas extras y aguinaldo, me deben prima de antigüedad y me deben días festivos y descansos semanales". Y el demandado contesta: "yo no le debo nada, ni lo corrí. Son mentiras todo, no tiene razón en sus peticiones". Ahí está la litis en términos muy generales.

¿Cómo se va a conciliar esta litis de posturas tan opuestas? Ah, pues el trabajador dice "bueno, mira, no me pagues las horas extra pero sí págame los días festivos. No me pagues los salarios caídos pero sí págame la prima de despido, la indemnización". Se concilian porque renuncian a sus posibles derechos y en muchos tribunales, a este artículo le dan una extensión de que no se puede celebrar el convenio porque el trabajador está renunciando a sus derechos. Ya hay una contradicción muy seria que los juristas deben analizar con sentido crítico de si, teniendo tal motivación por la conciliación, el legislador hizo bien al redactar este artículo.

En todo convenio, me atrevería yo a decir, en todo convenio los que lo celebran renuncian a sus posibles derechos, pero además, tan el legislador le sacrifica a la conciliación todas sus finalidades, que en la última Ley Federal del Trabajo, en su aspecto procesal -la que empezó a regir el 1º de mayo de 1980-, el legislador dice en uno de los artículos que "para que sea más fácil la conciliación -no es la cita textual, lo dijo en la exposición de motivos y en las discusiones de la ley-, a la primera etapa, a la etapa de conciliación, las partes deben acudir directamente y no pueden ser representadas por abogados".

No dice abogados, dice por apoderados. Vamos a encontrar el artículo para que veamos qué injusto es el legislador con los abogados. Propone esto. Todos recordemos, perdón, es una breve reflexión para meternos a la materia. Ustedes saben que en Derecho del Trabajo todo se desarrolla en una audiencia: la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas; la junta las cita y en una sola audiencia que debe participar además de las características del Derecho del Trabajo, esto es, un proceso inmediato, primordialmente oral, público -inmediato quiere decir que las partes estén ahí-. No se vale contestar las demandas nada más por escrito; se vale contestarlas por escrito, pero hay que llevar el escrito, si lo mandan por correo la junta no puede admitirlo porque el proceso es oral e inmediato. En esta única audiencia, el legislador quiere que ocurra todo para que no se alarguen los procesos.

Primero en un artículo general -en el 689-, nos definió las partes y en el 692 de la Ley Federal del Trabajo nos dice:

"Artículo 692.- Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado."

Mucho ojo con este artículo y mucho cuidado. Recordémoslo: el legislador dice podrán comparecer en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y luego, en otros artículos muy distintos, cuando se refiere a la conciliación nos dice:

"Artículo 876.- La etapa conciliatoria se desarrollará de la siguiente forma: I.- Las partes comparecerán personalmente a la junta, sin abogados, patronos, asesores o apoderados".

Entonces, regla general, pueden comparecer personalmente o por conducto de apoderado, excepción en la etapa de conciliación, personalmente, sin abogados, apoderados o asesores.

Y todos los litigantes y todos los abogados hemos aceptados este mandato del legislador casi sin crítica y les decimos a nuestros clientes:

—Oiga, le aviso que pasado mañana a las 11:00 tiene usted la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas.

—Ay licenciado, fíjese que no puedo ir, pero ya le firmé el poder, vaya usted.

—Oiga, no, tiene usted que venir.

—¿Cómo que tengo que ir? Entonces ¿para qué le pago?

—Pues, fíjese usted que la junta y la ley dicen que yo no actúe.

—Entonces ¿tengo que ir?

—Sí tiene usted que venir.

¡Y viene!

Pero ¿tiene razón el legislador al ordenar esto? Ahora, vamos a enjuiciar un poquito la ley, vamos a enjuiciar la ley. Primer supuesto contra el que protesto por mi calidad de abogado, y quiero protestar a nombre de ustedes porque van a ser abogados, y a nombre de todos los abogados que han sido, pues porque el legislador tan arbitrariamente supone que si los abogados intervienen no se va a poder celebrar la conciliación. Está bien que tenemos muchos defectos, pero ¿serán tan graves para que nos prohíban la participación en la etapa conciliatoria? ¿Tenemos que aceptar ese supuesto no confesado del legislador, pero del que parte: de que la conciliación se dificulta si participamos los abogados o los asesores o los apoderados? ¿Que esto es cierto, que todos los abogados son picapleitos a los que les conviene pelear y no se van a conciliar nunca?

Cuestionémoslo con verdad, no es una pregunta simple. El legislador parte de esto, tan parte de esto que piensa que se facilita la conciliación si los abogados no intervienen, y la realidad nos prueba todos los días lo contrario; es más, estoy a punto de decir que los tribunales del trabajo hacen como que cumplen la ley, siguiendo nuestra muy mexicana tradición -desde que éramos Nueva España-: "obedézcase, pero no se cumpla". Desde entonces. También la vemos y levantamos un acta que dice: "las partes comparecieron sin ser acompañados por sus apoderados o por sus abogados, se les preguntó si había conciliación y dijeron que no era posible". Y mentiras, los primeros en llegar al tribunal somos los abogados. A veces llegamos antes que los funcionarios de las juntas. Y los funcionarios de las juntas, secretarios auxiliares o presidentes, para saber

si hay conciliación, no les preguntan a las partes directamente, les preguntan a los abogados:

—Entonces qué licenciado, ¿se van a arreglar?
—No, fíjese que no es posible.
—¡Ah! Entonces, ¿la levantamos?
—Levántela, licenciado.
O, si sí hay arreglo, entonces, levantamos el convenio.

Levantamos el convenio y como esto ocurre todos los días ya nadie lo cuestiona y todos piensan que la ley está funcionando, cuando la verdad es que los tribunales están medio funcionando en este aspecto a pesar de la ley, porque la ley dice una cosa bien distinta; porque además, las juntas -cuyos problemas de falta de apoyos administrativos vimos parcialmente ayer-, yo diría, en muy pequeña escala, no tienen tiempo de dedicar los esfuerzos conciliatorios en la magnitud que la ley le dice. Nunca, nunca que yo sepa reúnen a las partes, las exhortan a la conciliación y casi las obligan. Esto se hace excepcionalmente y desde antes que la audiencia empiece, los abogados somos los que estamos platicando. Es más, como no estamos dormidos y como nos interesa ganar cierto dinero a los que vivimos del litigio, a nuestro cliente le decimos desde que nos cae el negocio "oiga, nada más que si, no hay que convenir. ¡Cómo me va a dejar a mí colgado de la brocha!", y los clientes sí de verdad confían en su abogado y esta relación de confianza se da con todos los abogados serios.

Un abogado no debe aceptar un cliente que no le tenga confianza. El abogado es un mandatario del cliente pero no un sirviente; es, en primera instancia, un consejero que debe exigir que el cliente atienda sus puntos de vista. El cliente, la parte, no se conviene si no está autorizado por su abogado. Esta es la verdad; yo no sé por qué estas verdades tan claras no se expresan en los tribunales, y no hablo de los tribunales de Guanajuato, hablo de los tribunales del país.

Y todavía el legislador pensando que la intervención de los abogados es negativa para las conciliaciones. Primer supuesto falso. Y lo grave de las leyes es que cuando los supuestos sociales o de la verdad de la que parten para elaborarse son falsos, la ley no funciona, la ley no funciona. La primera obligación del legislador es conocer la realidad socioeconómica en donde se va a aplicar la norma. Entonces esto es falso. Los abogados son factor conveniente y necesario para que pueda existir una adecuada conciliación y es un desacierto del legislador creer y regular la conducta contraria.

Pero además vamos más allá, preguntémonos, quiero decir que la ley en artículos anteriores -en el 691- dice que los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna, aunque el artículo los está autorizando, como si necesitara la autorización del artículo. Pero, en el caso de no estar asesorados en el juicio, la junta solicitará

la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Ahora sí, ¡ya no entendí!, porque la procuraduría es un asesor de oficio de los trabajadores, es tan asesor como un abogado particular, en ocasiones hasta más ineficiente. Entonces, a los menores sí asesoraría a fuerza, y a los demás, prohibida; ni siquiera permite a los mayores la asesoría de la procuraduría, contradicción también seria. Pero además, para los menores de 16 años es obligatoria la asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante, quiéranlo o no lo quieran. Pues ahora sí estamos lucidos, más sobre lo mismo.

Ya nos facultaba en términos generales el artículo 692 para comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado, y luego en el 693 nos dice -síganme, por favor- desde luego, para luego llegar a otra crítica que juzgo importante: como las juntas pueden tener por acreditada la personalidad ya no quien es parte, sino la personalidad de los apoderados -ustedes saben que las partes son los que tienen interés jurídico y las cuestiones de personalidad se refieren ya a quienes representan a las partes, a los apoderados- a los abogados, nos dice en pocas palabras la junta que hay que tenerles por reconocida la personalidad de quienes presenten cualquiera de estos medios de prueba: una carta poder expedida ante dos testigos -aunque no sea ratificada ante ninguna autoridad- y firmada por el trabajador; si el trabajador no sabe firmar, entonces hay que ir ante la junta y ratificar que ante ella, puso el trabajador su huella, por lo menos ante la secretaria. También un poder notarial, un poder notarial expedido justifica la personalidad, y la personalidad otorgada ante cualquier tribunal vale para todos los del ramo, para todos los del trabajo; y luego, si se trata de representar sindicatos, la junta debe expedirles a los dirigentes sindicales una constancia de que están registrados como dirigentes ante ella o ante el Departamento de Registro de Asociaciones, y los estatutos, y las personas morales su acta constitutiva y la facultad de quien otorga el poder para poder hacerlo.

Todo esto está bien, pero luego nos dice: si el compareciente o el litigante representa a los trabajadores o a los sindicatos, la junta está facultada para -aunque no compruebe la personalidad de la manera que hemos dicho-, sí conoce que el compareciente realmente representa a esos sindicatos por otros medios de prueba o a sus trabajadores, debe tener por acreditada su personalidad; y algunos comentaristas como Trueba Urbina y Trueba Barrera, que son los comentaristas más leídos, porque esa ley roja es la que más se vende -roja de pastas-, dicen: con esto se prueba que el legislador rompe la paridad en el Derecho Procesal del Trabajo y que la legislación es francamente proteccionista, porque se facilita más acreditar la personalidad de los representantes de trabajadores y sindicatos. Y hay que preguntarse si de veras es positivo que se rompa la paridad en el proceso del trabajo. ¿Es positivo, vale la pena que

deveras los patrones, así en términos generales, son tan malos, que hay que tratarlos muy mal, y ponerles todas las dificultades?

Yo no tengo criterio patronal definitivamente. Aspiro a tener criterio legal. Pero si son tan malos, vamos a fusilarlos a todos, ¡nada más faltaba que le sigan haciendo tanto daño al país! Hombres tan malvados. Pero además, además, ¡como si lo más importante fuese facilitar que acrediten la personalidad y dificultar para que la otra parte no la acredite!

Era más justa la ley del 70 y la misma ley del 31, en donde decía "las juntas están facultadas para, si no se acredita la personalidad de esta manera y conocen a los litigantes y saben que representan a quienes dicen representar, está por acreditada su personalidad". Eso me parece más justo para los dos, ¿por qué nada más a los de los trabajadores o porqué nada más a los de los sindicatos?, si después de todo lo importante no es que acrediten la personalidad sino el fondo del asunto, la gran verdad a la que nos hemos referido.

Pero más albarda sobre aparejo. Como buenos abogados que ustedes son deben hacerse una pregunta: ¿de qué habla la Ley Federal del Trabajo? De que regula las relaciones entre los trabajadores y los patrones, exclusivamente las relaciones entre los trabajadores y los patrones. ¿Por qué es el legislador federal -el Congreso de la Unión- el que se ocupa de estas relaciones?

Históricamente, en el país hubo un momento en que cada estado tenía su propia legislación del trabajo con fundamento en el artículo 124 constitucional. Ustedes saben que todas las facultades que la Constitución Política del país no señala como expresamente atribuibles a la federación y a cualquiera de los poderes de la federación, se entienden reservadas para la entidad federativa. Se supone que nuestra federación se creó mediante un pacto, y que los estados cedieron algunas de sus facultades a esta federación y se reservaron todo lo que no consta en el pacto. Entonces el artículo 124 dice: "Todas las facultades que no estén expresamente señaladas para la federación corresponden a las entidades federativas". Pero como en el proceso histórico era muy disímbola la legislación sobre Derecho del Trabajo, hubo un momento en que dijeron "es bueno que sea el poder federal el que legisle sobre Derecho del Trabajo, para que haya una legislación uniforme en todo el país"; y en la fracción X del artículo 73 de la Constitución se dice: "El Congreso de la Unión tiene facultad para legislar sobre relaciones obrero patronales"; y el artículo 123 en su apartado A dice que este artículo en su ley reglamentaria, son aplicables a las relaciones entre trabajadores y patrones, y el apartado B dice: "entre trabajadores y servidores del Departamento del Distrito Federal o del Gobierno Federal".

Muy bien, esa es la facultad del legislador federal, del respetable Congreso de la Unión, y ¿quién le dio tan grande pico para que se metiera a legislar entre las relaciones entre un cliente y un abogado? que no son relaciones de Derecho del Trabajo, que son relaciones que se regulan por el contrato del mandato, que están reservadas a las legislaciones locales. Si ustedes ven el Código Civil se encontrarán con que ahí dice mandato; contrato consiste en esto, y luego dice

mandato judicial consiste en esto otro. Sucede que esa facultad es del legislador local y nada más porque el legislador federal lo pone en la Ley Federal del Trabajo, ¡ah pues ya tenemos que ceñirnos a eso que no le toca!; claro será muy difícil que en cada juicio obrero antes de iniciarlo planteemos un amparo para que no se ciña la junta a las cuestiones que la ley le marca de personalidad.

Era mucho más justa la ley del 31 que decía "en tratándose de personalidad se atenderá a la legislación civil". Así lo decía la ley del 31 y esto es lo correcto. Pues ¡ahora sí estamos curiosos…! Tú, junta, que vas a resolver -porque eres autoridad del trabajo- en los problemas derivados de la relación obrero patronal, antes de eso vas a saber, según tus propias reglas, me vas a exigir que cumpla tus reglas, para que yo pruebe que soy mandatario judicial de fulano. Va, ¡ahora sí quedamos bien!. Con ese criterio, a poquito en cada ley, en el Código Fiscal, la Ley Agraria, el mismo legislador federal nos va a decir "en esta ley la personalidad se acredita así, y en ésta se acredita de esta otra manera", cuando en realidad, para acreditar una personalidad en cualquier materia, hay que atender al Código Civil, que es distinto, aunque casi está uniforme, pero, teórica y lógicamente puede ser distinto en cada entidad federativa.

En mi modesta opinión, pero más en la etapa de conciliación ¿las partes deben estar sin apoderado, sin asesor jurídico, sin representante legal, directamente las partes? "Ándele pues, legislador, vamos a ver si es posible tu mandato".

No lo quiero decir en latín porque luego van a decir que qué pretencioso, aquel principio que dice que a lo imposible nadie está obligado; y los entes jurídicos colectivos ¿cómo van a comparecer físicamente si no tienen cuerpo? Los entes jurídicos colectivos, todas las empresas mercantiles, que cada vez son más los patrones, tienen que acudir por conducto de apoderado, pues ¿de qué otra manera? El gerente es un apoderado, el consejo directivo es un apoderado, el administrador federal es un apoderado. Ellos son apoderados, son los representantes legales del ente jurídico colectivo; no son el ente jurídico colectivo; entonces, siempre que se trate de que está demandada una persona moral, a fuerza, a la primera audiencia comparece mediante apoderado.

Y esto ya no lo dice la ley pero las juntas se han encargado de complicarlo…

—¿Su poder?

—Mire usted, aquí tengo poder federal para pleitos y cobranzas.

—No lo puedo dejar comparecer en este juicio porque, es que para representar a un ente jurídico necesita usted que se le den facultades de administración.

¿De dónde sacaron eso? Pues, ¡quién sabe!, pero se les ocurre que, como son muy estrictos para las personas físicas, pues algún requisito deben poner para las personas morales, y esto ya es albarda sobre aparejo; esto ya no lo dice la ley pero, entonces, en la mayoría de los casos, en todos los casos en donde

hay que demandar a un ente jurídico colectivo, no se puede cumplir este mandato del legislador, en que asista personalmente sin apoderado, sin asesor, sin abogado. Siempre va representado por alguien el ente jurídico y esto no es poco importante; ¡es muy importante! Es darle un tratamiento distinto a la persona jurídica física en relación con la persona jurídica moral; es castigar a la persona jurídica física que no merece ningún castigo. Pero, todavía más, yo no sé por qué… bueno, sí sé por qué: por una interpretación inadecuada. Ahora sucede que si las partes no acudieron físicamente a la audiencia de conciliación, tampoco los dejan participar en la etapa de demanda y excepciones, porque cuando se trata de la etapa de demanda y excepciones la ley dice que este procedimiento se principiará, esta etapa dice que se requiere la presencia personal de las partes y que la junta iniciará esta etapa de demanda y excepciones exhortando nuevamente a la conciliación. Y ya hay por ahí algunas interpretaciones de jueces de distrito y de colegiados de circuito -interpretaciones que podemos citar con número de expediente- que dicen "aquí lo que el legislador quiso decir, es que también cuando dice "personalmente", que estén físicamente las partes", y si no acudieron a la de conciliación, la junta no puede cumplir con su exhorto conciliatorio ¿cómo arranca la etapa de demanda y excepciones si las partes no están física y directamente?

La palabra "personalmente" no significa que estén ahí físicamente. La ley emplea esa palabra (personal) en muchos otros casos en que no se hacen a la parte las notificaciones personales. Se puede hacer hasta por rotulón si la parte no ha señalado domicilio, y se consideran personales. Pero todavía más, vamos a la lógica, olvídense por un momento del derecho -no lo olviden permanentemente porque les va mal en los exámenes-, pero olvídense por un momento para los efectos de esta plática, ¿cómo se inicia un juicio del trabajo? ¿Cómo se empieza?

"Artículo 871.- El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la oficialía de partes o la unidad receptora de la junta competente, la cual turnará al pleno o a la junta especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la junta".

Por escrito se presenta, se inicia el procedimiento. ¿Quién firma ese escrito? Pues el apoderado. El apoderado en muchísimos casos, como dicen las demandas, "Miguel Montes García, con el carácter de apoderado legal de fulano de tal, como lo pruebo con la carta poder que adjunto firmada por dos testigos, vengo a demandar a fulano de tal las siguientes prestaciones para mi cliente, para mi poderdante", y firmo la demanda. Y si mi cliente no asistió porque no pudo, no quiso, a la de conciliación, yo apoderado, que tuve la facultad para firmar la demanda, para echar a andar la maquinaria judicial, para ejercitar acciones que por mandato de la ley tengo facultad, para desistirme de las acciones para llegar a convenios no tengo facultades según esta indebida interpretación, hasta de los colegiados de circuito, para ratificar la demanda que yo mismo hice no me dejan intervenir.

Pero además, además, que distinto trato le da la ley a la falta de la presencia del actor trabajador o del demandado: si el actor no está en demanda y excepciones y no pudo, o no dejaron intervenir a su abogado, la consecuencia es que se tiene por ratificada la demanda inicial presentada. No es tan grave el daño. "No me dejaste hablar para ratificar, pero tú mismo la ratificas. Total, sale junto con pegado. Lo que yo quería era que se ratificara. Está bien". Pero tú, demandado, que no pudiste ir a conciliación y que ahí está tu abogado con todos los poderes, con toda la personalidad acreditada y que no te dejan intervenir porque no me da la gana, o porque, indebidamente, la ley dice así -suponiendo sin conceder que la ley lo dijera- ¿qué consecuencias tiene? Téngase por contestado los hechos de la demanda salvo prueba en contrario, si el actor no va, si fuere castigado el contumaz al que se haya negado a asistir a una situación de la junta, debería haber una sanción para todos. Si el actor no va, se ratifica la demanda; si el demandado no va, perdió el juicio, porque luego esa prueba en contrario ¿en qué consiste? Pues nada más puede probar, o que no hay relación de trabajo, que no existió el despido y de ninguna manera puede probar ningún hecho que sea constitutivo de una excepción según una interpretación correcta de ese artículo.

Qué trágico para los patronos, para los demandados. Para los demandados. Dije mal porque dije patronos. También un trabajador y también un sindicato puede ser demandado y, en ese supuesto, tendría esta consecuencia jurídica. Me parece francamente aberrante. Pero más aún, y estos aspectos fueron analizados en un artículo que se publicó en la Revista del Poder Judicial, que me parece muy claro y que sucumbo a la tentación de tratar de leer para ustedes. Es un artículo elaborado por el señor Lic. Eugenio Trueba Olivares que tiene un gran prestigio jurídico, que aunque no se ocupa frecuentemente de estos casos, sabe bastante, así es, y su criterio, sobre todo, es siempre así. ¿Qué nos dice él en este artículo?

¨La fracción VI del 876 dice que si las partes no concurren en la etapa de conciliación, "deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones".

La redacción de este inciso hace necesaria una recta interpretación. Hemos visto antes que el artículo 692 establece como regla general que las partes pueden comparecer en juicio directamente o por conducto de sus apoderados. ¿Qué alcance tiene la expresión "deberán presentarse personalmente" a la etapa de demanda y excepciones? No ha faltado quien diga que se quiere significar otra vez la prohibición de que concurran a esta etapa los apoderados. Tal interpretación nos parece inadmisible por varios motivos:

A.- Porque aludir a una presentación personal no excluye la representación, ya que los apoderados también son personas como es obvio.

B.- Porque no se emplea el concepto de concurrencia directa, que sería el adecuado, ya que la concurrencia por apoderado siempre es indirecta y tan es así, que el artículo 692, al distinguir entre ambas, denomina a la del titular del

interés "comparecencia directa", no comparecencia personal, expresión esta última que no tiene mayor importancia y que más bien es viciosa.

C.- Porque si se acepta tan errónea interpretación, tendríamos que admitir que un apoderado puede preparar, firmar y presentar una demanda, pero en cambio no puede ratificarla ni modificarla ni presentar puntos petitorios.

D.- Porque si el apoderado puede demandar y hacer valer en nombre de su poderdante una o varias acciones, con todas las consecuencias que de ello se deriven, como por ejemplo interrumpir una prescripción y sentar las bases de la litis, resulta inaceptable que no pueda ratificar y que no pueda replicar ni contra replicar (fracciones II y VI del artículo 878).

E.- Porque si se rechaza la concurrencia del apoderado del actor ausente y el demandado reconviene, se impide la respuesta de aquél, ya que no habrá quién lo represente ni quién solicite plazo para contestar en la forma prevista en la fracción VII del artículo 878.

F.- Porque el apoderado, no obstante haber formulado la demanda y haber puesto en movimiento el aparato jurisdiccional, estará impedido de plantear cuestiones que requieren previo pronunciamiento, como la relativa a incompetencia que, de acuerdo con el artículo 703, sólo puede plantearse en el periodo de demanda y excepciones.

G.- Porque es incomprensible que un apoderado tenga facultades para desistirse en cualquier momento de la acción y, en cambio, no puede ratificar o modificar la segunda.

H.- Porque resulta también incomprensible que un apoderado pueda confesar y allanarse con la reclamación en cualquier momento y que, en cambio, no pueda comparecer a la audiencia de demanda y excepciones para oponerse a éstas.

I.- Porque si la prohibición de que concurran apoderados y asesores a la etapa de conciliación tuviera cierta justificación a fin de no coartar la espontaneidad de las partes, ese motivo no existe en el periodo de demanda y excepciones, cuando el tribunal requiere de la mayor información sobre las razones que esgriman las partes en conflicto, a fin de que su resolución sea lo más justa posible".

Estoy totalmente de acuerdo con esto. Entonces, para resumir y no fatigarlos: primero, cuando se habla de personalidad, el legislador federal se ocupa de un tema para el no tiene competencia; pero ojalá se hubiera ocupado bien, se lo agradeceríamos y lo seguiríamos estrictamente; pero se ocupa mal, lo legisla peor que como lo legisla nuestro Código Civil.

Segundo.- Porque equivocadamente parte del supuesto que los apoderados, sean abogados o simples asesores, son un impedimento para lograr la conciliación y los excluye cuando, en realidad, son un factor para posibilitar la conciliación y esto se ratifica en el trabajo de todos los días en los tribunales. Esto no se inventa.

Tercero.- Porque castiga muy severamente cayendo en gravísimas contradicciones -todas las apuntadas-, la ausencia de la primera etapa de la misma audiencia y no permite intervenir a los abogados y, entonces, sin conocer la verdad por un simple comportamiento procesal que me parece absurdo, lleva a que se pierda el negocio por los demandados. Por todo esto pensamos, de verdad lo creemos, que este aspecto de la ley es sumamente desafortunado, y que las interpretaciones que las autoridades del trabajo y algunas autoridades federales le están dando, son más desafortunadas todavía.

Este sería uno de los casos en donde el tribunal, preocupado por la verdad, debería -con su obligación de ser equitativo-, paliar la injusticia de la norma genérica, en su aplicación a un caso concreto, y porque ya es tiempo que, siquiera en estos modestos foros universitarios, se cuestione con seriedad, con honestidad -no me atrevo a decir que con conocimiento, pero sí con preocupación-, el que se legisle tan a la ligera en materias tan importantes.

Por todo esto, creo que las juntas, los tribunales -en los foros que tienen anuales-, deberían ocuparse de plantear esta problemática y ser sinceros y honestos, a fin de buscar una reforma legal que clarifique estas cuestiones. Es difícil lograr reformas legales, pero no imposible, más cuando se proponen por los propios tribunales que aplican la ley, que tienen el conducto de la secretaría a la que pertenecen en lo federal, o de los ejecutivos de los estados en lo local, porque está tan descuidada la materia del trabajo y resulta tan ineficiente y tan defectuosa la legislación, que las juntas casi están obligadas a dejar de ser tribunales de derecho, y porque ha dado resultados contrarios en la legislación.

En las discusiones en cámara y en la exposición de motivos del Presidente de la República cuando se envió la ley al congreso, se dijo "lo que se quiere en Derecho del Trabajo es que el resultado no se deba a la habilidad de los litigantes sino a la razón que asista a las partes", y el entonces Secretario del Trabajo declaró: "Los procesos obreros no pueden ni deben ser un juego de habilidades de postulantes; debe irse siempre al fondo"; y la legislación es tan desafortunada que, precisamente estos fines expresados son los que no logra, y no sólo no los logra, sino que los dificulta, los hace casi imposibles.

Los invito a que en sus clases de prácticas acudan a una junta y verán como son la mayoría de los negocios, y corroboren la verdad de lo que estamos diciendo. Se arreglan entre los abogados. Esto no es nada malo, ¡que bueno!, porque, porque de alguna manera hay que arreglarse a pesar de los impedimentos legales, y además han servido.

¡Imagínense ustedes! lo que comentábamos ayer: un litigante hábil entre comillas, que sabe primero que puede demandar a "quien resulte responsable"; segundo que los demandados tienen que ir físicamente, bueno, pues esto es una vacilada. Se demanda a 15 personas que nada tienen que ver con el asunto. Saben que, si no van físicamente, se les va a tener por contestada la demanda afirmativa salvo prueba en contrario, prueba muy difícil; y en el momento de la audiencia se desiste de los presentes, de las acciones en contra de

los presentes, y nada más la sigue contra los ausentes, que fueron formalmente citados. ¡Y ya ganó!. Y ya ni al tribunal, ni al litigante, ni a nadie le importa si el condenado realmente merece la condena o no la merece.

Y mientras se pide un amparo, hay que pagar el salario de seis meses, y pagar la fianza para lograr la suspensión. Y estos tribunales se transforman casi en mercados de negociación.

Esa es nuestra propuesta; así de importante es la adecuada aplicación y la adecuada formulación de las reglas procesales.

Por todo esto los invito a reflexionar en los temas, y si mis pláticas siquiera tienen el resultado de preocuparlos a ustedes con estos aspectos, habrán logrado uno de los objetivos, que para lograrlos son hechas.

El día de mañana si ustedes tienen la amabilidad de acompañarme, nos ocuparemos de otros aspectos también muy importantes en relación con las pruebas, para completar el seminario y ver que esta ley, que todo mundo dice que no es formalista, se está transformando, con este afán de proteccionismo exagerado, en una ley excesivamente formalista.

Como el día de ayer señores, suplico que si alguna pregunta, alguna duda -los señores profesionales del derecho, a los señores estudiantes, a los señores funcionarios de tribunales- tienen al respecto, y está dentro de mis capacidades, con mucho gusto la contestaremos; trataremos de responderla.

Preguntas y respuestas

(Pregunta de persona no identificada). Señor Licenciado quisiera hacerle una pregunta, quizá un poco fuera del tema, pero parece que se relaciona, con respecto a cuando el demandado no acude a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se le tiene por contestando la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. ¿Fuera usted tan amable de explicarme ese "salvo prueba en contrario"?

Lic. Montes.- El legislador es cuidadoso y dice: "como usted no vino a la audiencia en donde se está fijando la litis, en donde se están fijando los elementos del pleito, presumo que los hechos narrados por el actor en su demanda son ciertos, pero todavía te doy oportunidad de que, si no son ciertos, -es una presunción de la que los abogados llamamos el *juris tantum*, esto es, que admite prueba en contrario- te doy la oportunidad de que me pruebes que esta presunción es falsa, pero nada más me puedes probar tres cosas en este momento del juicio. Las pruebas que me tengas que ofrecer son para esas finalidades. Me tendrás que probar, primero, que no hubo relación de trabajo", artículo 879.

Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el actor no era trabajador. Primera cosa que puede probar, que no era patrón, en su caso, que no existió el despido, o que no son

ciertos los hechos afirmados en la demanda. Pero esta última parte, que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, el aplicador federal de la ley, el que crea jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados han dicho: no todos los hechos porque, entonces, sería premiar al contumaz y al que no asistió. Nada más aquellos hechos que no sean materia de una excepción. Esto coloca a la parte en una desventaja espantosa.

Pero además, calcule usted que la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se realiza en la misma audiencia, inmediatamente después de que no se asistió a la de demanda y excepciones. Entonces, lo normal que ocurra es que quien no asistió a la de demanda y excepciones, tampoco se presentó en la de ofrecimiento y admisión de pruebas y, ahí sí no hay vuelta de hoja. El que no fue y fue por contestando afirmativamente los hechos de la demanda, ya perdió el negocio.

(Pregunta de persona no identificada). Si uno de los demandados no comparece a la audiencia de conciliación y no es ni el propietario, ni el responsable de la fuente de trabajo, esta persona, si como usted nos indica, el actor se desiste en relación con los presentes y con el ausente que no es, insisto, ni propietario ni responsable de la fuente de trabajo, podríamos suponer la esposa del propietario, que actúa como secretaria ahí del gerente, lo que yo quisiera es que nos ilustrara un poco respecto de las consecuencias que habría para esta persona.

Lic. Montes. Además, está tocando usted un caso muy real. Se me había pasado decirles que los litigantes en Derecho del Trabajo, todas las partes en Derecho del Trabajo, en la audiencia de demanda y excepciones, tienen la posibilidad de aclarar algunos hechos, incluso de ejercitar nuevas acciones en la misma audiencia, aunque no estén comprendidas en la demanda. Y lo que ocurre es lo siguiente: voy a poner un caso real para tratar de ser claro.

Yo demando a Pedro López y a su esposa y luego, en la demanda, nada más narro hechos que atañen a Pedro López y digo que él era mi patrón, que él me pagaba el salario, que estaba bajo su subordinación jurídica y, además de demandar a su esposa, no narré ningún hecho que la afectara a ella, ninguno, en la demanda inicial. Y llego a la audiencia de demanda y excepciones, a la etapa de demanda y excepciones, y usted dirá con buen sentido jurídico "pues sí todos los hechos nada más se refieren a mí, pues ¿qué tiene que a mi señora la declaren por contestando los hechos en sentido afirmativo si, después de todo, ningún hecho es propio de la señora?" No, lo grave es que ahí, en esa audiencia, al ver el litigante hábil -otra vez "hábil" entre comillas-, que no está presente su esposa que también fue emplazada, dice a la junta: "te aclaro y agrego que también recibía órdenes de la señora demandada que está formalmente emplazada, y que también estaba bajo su subordinación jurídica, y que también ella me pagaba el salario. Es todo, muchas gracias". Y entonces, la junta dice: "se le tiene por contestando esos hechos en sentido afirmativo".

Es un caso real. No es uno, ojalá fuese uno. Son múltiples casos reales donde los tribunales podrían frenar esto; pero, si a lo expuesto como irregularidad le agregamos las condiciones paupérrimas en que trabajan y que al frente de las mesas de trabajo no hay ni siquiera abogados (en ocasiones son secretarias de juntas), y no son críticas personales a nadie, personas que no son abogados, violando la ley; y que la junta -el pleno- está en un sitio y las audiencias se están celebrando en otra pieza… ni siquiera sabe la junta lo que está pasando en la audiencia.

Todos estos defectos a los que nos referimos ayer y los que estamos señalando ahora contra la ley, se concatenan y nos conducen a la injusticia, no a la impartición de la justicia.

No en todos los casos. No se me exagere y se vaya a pensar que lo negativo es lo único que existe. No. Y nuestra lucha, de todos nosotros, debe ser que cada día se cumpla mejor el contenido de la ley. Creo que se logrará. Incluso con estas pláticas, ¿por qué no? Pero esto que pasa son las argucias del litigante que el tribunal debe frenar, pero que no se frenan. Que no se frenan, eso es lo que ocurre en las juntas cuando se narran hechos contra todos los demandados. Se puede demandar a muchos. Un velador de una calle puede tener a 20 patrones y en caso de despido demandarlos a todos, eso ni hablar. Pero así, en estos casos, ahí en la demanda, sobre la marcha se inventa nada más una argucia para garantizar el resultado del juicio. Eso es lo que ocurre.

NOTAS PARA LA SEGUNDA PLÁTICA[5]. PRESENCIA OBLIGADA DE LAS PARTES EN EL JUICIO OBRERO. SU PERSONALIDAD[6]

Octubre de 1983

1.- Hablar de lo que para el Derecho del Trabajo debe entenderse por "parte". Señalar que para el diccionario Escriche, parte es: "cualquiera de los litigantes, sea el demandante o el demandado": Y, para la Ley Federal del Trabajo, lo que dice el artículo 689.

"Artículo 689.- Son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones".

Señalar que debemos aceptar como definición de "parte" las personas que tienen posibilidad jurídica de ejercitar acciones y oponer excepciones o defensas. Aunque en Derecho del Trabajo quienes puedan ser afectados por una resolución, son también partes. En realidad la parte es quien tiene interés jurídico en el proceso.

2.- Explicar el contenido del artículo 691.

"Artículo 691.- Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna, pero en el caso de no estar asesorados en juicio, la junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante".

3.- Explicar lo que dice el artículo 692.

"Artículo 692.- Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado.

Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:

---

[5] lmpartida en el ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Escuela de Leyes de la Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Gto.

[6] Nota de las compiladoras. El Lic. Montes García tenía un método de trabajo riguroso que explicamos a grandes rasgos. Se documentaba e investigaba ampliamente sobre el tema en cuestión, reflexionaba, analizaba y recurría a su experiencia profesional. Elaboraba una lista de las ideas y argumentos que deseaba exponer, la revisaba y la enriquecía con más ideas y argumentos. Dictaba una serie de notas o apuntes como los que aparecen en este capítulo y los revisaba una y otra vez. Después, dictaba el texto y lo revisaba y lo corregía una y otra y otra vez. En ocasiones, si el texto era leído ante una audiencia o era empleado a manera de guía, el Lic. Montes hacía nuevas adiciones o ajustes sobre la marcha, en letra manuscrita.

I.- Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la junta.

II.- Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite.

III.- Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello.Y

IV.- Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato".

Ahondar en los comentarios sobre este artículo puesto que señala que las partes pueden comparecer por conducto de apoderado.

4.- Leer el artículo 693.

"Artículo 693.- Las juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que, efectivamente, se representa a la parte interesada".

Y expresar que este artículo es inequitativo puesto que permite a las juntas que a los representantes de los trabajadores y sindicatos los trate de manera diferente, mucho menos rígido para acreditar su personalidad que a los representantes de los patronos o empresas, como si lo más importante fuese que se condenara a las empresas cuando el abogado no pruebe que formalmente las representa, a pesar de que la junta lo sabe. Era mucho más equitativa la ley anterior que daba esta atribución a las juntas en relación con todos los litigantes y no sólo con los representantes de los trabajadores y sindicatos.

Jugar un poco con el comentario que hacen Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera en el sentido de que este artículo 693 prueba la naturaleza social y antiformalista del proceso del trabajo y el rompimiento del principio de paridad procesal. Este rompimiento del principio de paridad procesal no es positivo, y es falso que el Derecho del Trabajo sea antiformalista; es sumamente formalista, excesivamente formalista si se trata de los patrones como si ellos fueran entes antisociales. Si de verdad los patrones son tan malos, lo que la ley debería hacer es prohibir su existencia y cambiar nuestro sistema de producción. Dejar claro que no se tiene un criterio paternalista a ultranza.

5.- Señalar que nos ocupamos de la personalidad porque es indispensable, ya que a través de la personalidad es como el tribunal sabe quién representa a las partes.

6.- Ocuparse del procedimiento ordinario contenido en los artículos del 870 al 891 y recalcar el contenido del artículo 871…

"Artículo 871.- El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la oficialía de partes o la unidad receptora de la junta compe-

tente, la cual turnará al pleno o a la junta especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la junta".

…Para hacer notar que el procedimiento se inicia con la presentación del escrito de demanda ante la oficialía de partes o ante quien lo reciba; y explicar que en este escrito que puede ser firmado por el apoderado del actor, acompañado siempre de carta poder, éste, el actor, ejercita acciones y puede acompañar pruebas a ese escrito, suponemos que documentales, por lo que este artículo se contradice con el criterio seguido por las juntas de conciliación y arbitraje y por algunos tribunales colegiados de circuito como el de Morelia, que señalan que las partes deben estar físicamente presentes en la etapa de conciliación y en la de demanda y excepciones.

Lo contradictorio consiste en que si las partes faltaran a la conciliación físicamente, no se deja a sus abogados intervenir en la etapa de demanda y excepciones, lo que coloca al representante de los demandados en una espantosa desventaja en relación con el representante de los trabajadores, puesto que éste, si no interviene en la etapa de demanda y excepciones, se tiene por reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial, que pudo ser presentada por apoderado. O sea que, de una manera u otra, el apoderado del actor sí interviene en esta etapa y, en cambio, el demandado no puede contestar la demanda enviando un escrito porque se rompe el principio de inmediatez y la consecuencia de su inexistencia, que se da a veces estando presente su apoderado, es que se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo que demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.

7.- Transcribir los artículos 876, 877, 878 y 879, y abundar en que: el legislador de 1980 se propuso facilitar la conciliación en los juicios laborales, casi obligar la conciliación en los juicios laborales. Es más, se dijo en la exposición de motivos de la iniciativa que creó el Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, y en los debates de la Cámara de Diputados sobre todo, que se pretendía que no fuesen las habilidades de los litigantes las que determinaran el resultado del negocio, sino que fuese la justicia intrínseca de la petición la que resultara determinante.

Para lograr esta finalidad se tomó la precaución de que en la etapa conciliatoria no intervinieran abogados, partiendo del supuesto de que la intervención de los abogados es, por sí misma, negativa. Esto, en términos generales, es falso, aunque en muchos casos es cierto. Pero este propósito del legislador ha fracasado y sólo se ha prestado para mil trampas y argucias de las que se dan ejemplos. Los abogados de los trabajadores les dicen a éstos "no te arregles" y los trabajadores no se arreglan.

Las grandes empresas designan gerentes con facultades administrativas a los abogados que litigan, y son ellos los que están presentes en la conciliación, puesto que, ni modo que una persona moral, antijurídica colectiva, vaya a comparecer físicamente con un cuerpo que no tiene.

Los líderes sindicales, algunos de ellos también muy negativos, sí participan en las conciliaciones diciéndoles a los trabajadores que no se arreglen.

Transcripción de los artículos 876, 877, 878 Y 879.

"Artículo 876.- La etapa conciliatoria se desarrollará de la siguiente forma:

I.- Las partes comparecerán personalmente a la junta, sin abogados patronos, asesores o apoderados.

II.- La junta intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio.

III.- Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo.

IV.- Las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la audiencia con objeto de conciliarse; y la junta, por una sola vez, la suspenderá y fijará su reanudación dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las partes de la nueva fecha con los apercibimientos de ley.

V.- Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, pasando a la etapa de demanda y excepciones. Y

VI.- De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por inconformes con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones".

"Artículo 877.- La junta de conciliación y arbitraje que reciba un expediente de la de conciliación, citará a las partes a la etapa de demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas".

"Artículo 878.- La etapa de demanda y excepciones se desarrollará conforme a las normas siguientes:

I.- El presidente de la junta hará una exhortación a las partes y si éstas persistieren en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda.

II.- El actor expondrá su demanda, ratificándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. Si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento.

III.- Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso, a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso estará obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, la junta la expedirá a costa del demandado.

IV.- En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación

pura y simple del derecho, importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho.

V.- La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda en la misma audiencia y si no lo hiciere y la junta se declara competente, se tendrá por confesada la demanda.

VI.- Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren.

VII.- Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato, o bien, a solicitud del mismo, la junta acordará la suspensión de la audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los cinco días siguientes. Y

VIII.- Al concluir el periodo de demanda y excepciones y admisión de pruebas, si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción".

"Artículo 897.- La audiencia se llevará a cabo, aun cuando no concurran las partes.

Si el actor no comparece al periodo de demanda y excepciones, se tendrá por reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial.

Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda".

8.- Ha fracasado el propósito del legislador porque en las mismas juntas, y en estas pláticas están los integrantes de las que funcionan en la ciudad de Guanajuato, para saber si hay conciliación o no hay conciliación, los presidentes y los secretarios no les preguntan a los actores y a los demandados, sino a los que verdaderamente les preguntan es a sus abogados apoderados.

9.- Debe tenerse el valor de reconocer que el camino escogido por el legislador no ha funcionado, sino que al contrario, ha entorpecido el procedimiento laboral. Y los funcionarios de las juntas deben reconocer que no aplican la ley en los términos en que está escrita, por lo menos en lo que hace a la etapa conciliatoria, no sólo, sino que hay casos en que el presidente de la junta, con la mejor buena fe y voluntad convence a los abogados en litigio de que convengan el procedimiento, como si el procedimiento, que es de orden público, pudiese ser convencional.

10.- Señalar la contradicción jurídica dejada muy en claro por el señor licenciado don Eugenio Trueba Olivares en su artículo intitulado *Problemas procesales en materia laboral*, sobre todo por lo que hace a la expresión contenida en la fracción VI del artículo 876, que dice deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones. Me voy a permitir leer lo que al respecto se dijo en ese artículo.

"La fracción VI del 876 dice que si las partes no concurren en la etapa de conciliación, "deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones".

La redacción de este inciso hace necesaria una recta interpretación. Hemos visto antes que el artículo 692 establece como regla general que las partes pueden comparecer en juicio directamente o por conducto de sus apoderados".

¿Qué alcance tiene la expresión "deberán presentarse personalmente" a la etapa de demanda y excepciones? No ha faltado quien diga que se requiere significar otra vez la prohibición de que concurran a esta etapa los apoderados. Tal interpretación nos parece inadmisible por varios motivos:

A) Porque aludir a una presentación "personal" no excluye la representación, ya que los apoderados también son personas, como es obvio.

B) Porque no se emplea el concepto de concurrencia directa, que sería el adecuado, ya que la concurrencia por apoderado siempre es indirecta y, tan es así, que el artículo 692, al distinguir entre ambas, denomina a la del titular del interés "comparecencia directa", no comparecencia personal, expresión esta última que no tiene mayor importancia y que más bien, es viciosa.

C) Porque si se acepta tan errónea interpretación tendríamos que admitir que un apoderado puede preparar, firmar y presentar una demanda, pero en cambio, no puede ratificarla ni modificarla, ni precisar puntos petitorios.

D) Porque si el apoderado puede demandar y hacer valer en nombre de su poderdante una o varias acciones, con todas las consecuencias que de ello se deriven, como por ejemplo interrumpir una prescripción y sentar las bases de la litis, resulta inaceptable que no pueda ratificar y que no pueda replicar ni contrarreplicar (fracciones II y VI del artículo 878).

E) Porque si se rechaza la concurrencia del apoderado del actor ausente y el demandado reconviene, se impide la respuesta de aquél, ya que no habrá quién lo represente ni quién solicite plazo para contestar en la forma prevista en la fracción VII del artículo 878.

F) Porque el apoderado, no obstante haber formulado la demanda y haber puesto en movimiento el aparato jurisdiccional, estará impedido de plantear cuestiones que requieren previo pronunciamiento, como la relativa a incompetencia que, de acuerdo con el artículo 703, sólo puede plantearse en el periodo de demanda y excepciones.

G) Porque es incomprensible que un apoderado tenga facultades para desistirse en cualquier momento de la acción y, en cambio, no puede ratificar o modificar la demanda.

H) Porque resulta también incomprensible que un apoderado pueda confesar y allanarse con la reclamación en cualquier momento y que, en

cambio, no pueda comparecer a la audiencia de demanda y excepciones para oponerse a éstas.

I) Porque si la prohibición de que concurran apoderados y asesores a la etapa de conciliación tuviera cierta justificación a fin de no coartar la espontaneidad de las partes, ese motivo no existe en el periodo de demanda y excepciones, cuando el tribunal requiere de la mayor información sobre las razones que esgriman las partes en conflicto, a fin de que su resolución sea lo más justa posible".

A las anteriores objeciones no se puede contestar arguyendo que el rechazo de apoderados en el periodo de demanda y excepciones sólo procede cuando el interesado no ha concurrido al periodo conciliatorio, y que tal rechazo es una especie de sanción por dicha ausencia. Esta respuesta no sería admisible.

Negar la posibilidad de representación o de asesoramiento sólo porque no ha habido la voluntad de conciliación estaría fuera de toda razón. Si tal hubiera sido el propósito del legislador, la ley debería haber prohibido también la presencia del apoderado y asesores cuando, habiéndose asistido al periodo conciliatorio, las partes se hubiesen negado expresamente a todo arreglo, pues no hay diferencia entre rehuirlo manifiestamente o rehuirlo mediante la ausencia.

11.- Agregar que hay ocasiones en que la ley previene justamente un procedimiento y es la práctica de litigantes y los usos de tribunales la que desvirtúa el procedimiento; pero en este caso, es la ley la que está muy mal, y debe reconocerse el fracaso de obligar a las partes a que vayan físicamente a la audiencia.

Aclarar que no es lo mismo ir físicamente que ir personalmente.

12.- Manifestar que sabemos que las resoluciones de los tribunales colegiados, esto es, las tesis jurisprudenciales, obligan a las juntas de conciliación y arbitraje; pero una cosa es esta obligatoriedad y otra cosa es que las juntas no puedan mantener y defender criterios jurídicos correctos y opuestos a los que sostiene en ejecutorias el tribunal colegiado.

Sabemos que el tribunal ha sostenido que las partes deben ir físicamente a la etapa de demanda y excepciones, pero esto es erróneo por lo ya expuesto.

13.- Expresar el deseo de que las juntas de Guanajuato hagan valer su adecuado criterio jurídico y logren cambiar el criterio indebido del colegiado de Morelia.

14.- Terminar esta exposición señalando que las circunstancias reseñadas en la plática anterior y en ésta conducen a que, en Derecho del Trabajo no se imparta justicia, sino que se propicie la negociación, negociación no siempre digna, que para hacerlo no se necesita conocer de leyes y que casi siempre perjudica a las empresas, no beneficia a los trabajadores y sólo enriquece a los litigantes.

NOTAS PARA LA TERCERA PLÁTICA.[7]
LA PRUEBA EN DERECHO DEL TRABAJO

Octubre de 1983

1.- El diccionario Escriche nos indica que prueba es la averiguación que se hace en juicio de alguna cosa dudosa, o bien, el medio con que se muestra y hace patente la verdad o falsedad de alguna cosa.

También señala que las pruebas se dividen en plenas, completas, perfectas y semiplenas, o incompletas o imperfectas. La primera es la que manifiesta, sin dejar duda alguna, la verdad del hecho controvertido, instruyendo suficientemente al juez para que, en verdad de ella pueda dar sentencia condenatoria o absolutoria. La segunda es la que no demuestra con claridad el hecho, dejando duda acerca de la verdad de él y, por consiguiente, no instruye al juez en términos de poder dar sentencia.

2.- En relación con la prueba en Derecho del Trabajo, es importante que analicemos:

A) Cuáles son los medios de prueba.

B) En qué momento pueden las partes ofrecer las pruebas.

C) Cómo deben las partes ofrecer las pruebas.

D) Quién, además de las partes, puede allegar pruebas al procedimiento laboral y cómo se desahogan las pruebas, bajo qué formalidades y, por último, qué valor tienen las pruebas.

3.- El artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo señala cuáles son los medios de prueba y no los limita, sino que afirma que cualquiera no contrario ni a la moral ni al derecho, debe ser admitido como tal y, como ejemplos enumera como medios de prueba la confesional, la documental, la testimonial, la pericial, la inspeccional, la presuncional, la instrumental de actuaciones, fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Nosotros decimos "audio grabaciones" o video audio grabaciones.

Explicar en qué consiste cada medio de prueba.

---

[7] Impartida en el ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Escuela de Leyes de la Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Gto.

Nota de las compiladoras. De la tercera plática de este ciclo, infortunadamente sólo nos fue posible encontrar las notas en el archivo personal del Lic. Montes García. Por su contenido, dedujimos que la misma versó sobre "la prueba en derecho del trabajo", pero no contamos con el título definitivo que él empleó en el momento de dictar su conferencia, ni tenemos la versión taquigráfica de la misma. Para la identificación del tema sobre el que trata, en este libro las denominamos "la prueba en derecho del trabajo".

4.- Hacer hincapié en la necesidad de que los tribunales del trabajo tengan una cuidadosa vigilancia cuando las partes ofrecen las pruebas a fin de admitir sólo las que conduzcan con certeza al descubrimiento de la verdad buscada, pues es este momento procesal -cuando se ofrecen las pruebas- en el que los litigantes ejercitan sus peores habilidades y, en ocasiones ofrecen pruebas que no tienen por finalidad llevar al juzgador a conocer la verdad que le va a servir para dictar resolución justa, sino que lo único que se pretende es complicar el procedimiento, hacerlo dilatado a fin de presionar a las partes para que se llegue a arreglos, en ocasiones, injustos.

Si el tribunal no extrema sus precauciones en la admisión de pruebas, lo pagará con un gran trabajo y con la duración innecesaria de los juicios.

Hay casos en los que, debido al descuido en la admisión de pruebas, después de un ofrecimiento viciado y doloso, se tiene casi la certeza de que los juicios no terminarán nunca, lo que para las empresas es mantener un riesgo latente, y para las juntas significa no cumplir con la obligación que les impone el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.

5.-Trataremos de señalar en qué momentos las partes deben ofrecer las pruebas. En términos generales, las pruebas deben ser ofrecidas por las partes en la etapa de ofrecimiento de pruebas, dentro de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875 y 880 de la ley.

"Artículo 875.- La audiencia a la que se refiere el artículo 873 constará de tres etapas:

A) De conciliación

B) De demanda y excepciones

C) De ofrecimiento y admisión de pruebas

La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; las que estén ausentes, podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre y cuando la junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en etapa correspondiente."

"Artículo 880.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes:

I.- El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquél, a su vez, podrá objetar las del demandado.

II.- Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes, a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos.

III.- Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del capítulo XII de este título. Y

IV.- Concluido el ofrecimiento, la junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche.

Hay excepciones y la ley señala momentos distintos de ofrecimiento de pruebas, primero si se trata de hechos supervivientes por los que debe entenderse aquéllos que ocurren con posterioridad al momento de ofrecimiento o aquéllos que, habiendo ocurrido con anterioridad a ese momento, eran desconocidos para el oferente. Estas pruebas deben ofrecerse cuando se conozcan en cualquier momento que no haya sido dictado el laudo.

Las pruebas de tachas, que versan sobre la inautenticidad de otras pruebas desahogadas, también pueden ofrecerse después de desahogada la prueba que se combate".

El artículo 872 también previene un caso en el que se pueden ofrecer pruebas, ya que faculta al actor para que, en su escrito inicial de demanda, si lo desea, después de narrar los hechos en que funda sus peticiones, pueda acompañar las pruebas que considere pertinentes.

"Artículo 872.- La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma como demandados haya. El actor, en su escrito inicial de demanda, expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones".

Este artículo nos sirvió de fundamento -y es bueno recordarlo- para decir que el actor tiene grandes ventajas sobre el demandado, y es un elemento más para que las juntas permitan que los demandados, en el ofrecimiento de pruebas, y desde la contestación de la demanda, estén representados por sus apoderados, aunque no hayan asistido físicamente a la conciliación, puesto que el actor, si no va a la conciliación físicamente, pude ofrecer sus pruebas desde el inicio, por lo que no recibiría la misma sanción que el demandado. Máxime si se considera que la presentación del escrito de demanda sí puede ir firmado por el apoderado reconocido del actor.

En resumen, los momentos para ofrecer las pruebas son: la etapa de ofrecimiento; con posterioridad a esa etapa, las supervivientes y las de tachas, acompañándolas al escrito de presentación de la demanda.

6.- Aunque en muchos artículos la ley afirma que el Derecho del Trabajo no debe ser formalista y aun cuando todos los tratadistas están de acuerdo en que no lo es, resulta que en 1980 se creó un sistema exageradamente formalista para ofrecer las pruebas. Y no sólo, sino que rompiendo el principio de que las juntas son tribunales de conciencia, de manera que parece inconsciente, empieza ya la ley a señalar cuál es el valor que el juzgador debe darle a determinadas pruebas.

"Artículo 795.- Segundo párrafo.– "Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la federación, de los estados, del Distrito Federal o de los municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización".

"Artículo 820.- Un solo testigo podrá formar convicción si en el mismo concurren circunstancias que sean garantía de veracidad que lo hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que declara, si:

I.- Fue el único que se percató de los hechos.

II.- La declaración no se encuentra en oposición con otras pruebas que obren en autos. Y

III.- Concurran en el testigo circunstancias que sean garantía de veracidad".

7.- Aclarar que la parte, al ofrecer las pruebas, debe señalar qué hechos pretende probar con cada una de ellas, y que corre el riesgo -si no señala lo que pretende probar- de que la prueba le sea desechada.

Señalar que en el caso de la prueba presuncional, por su propia naturaleza, que reconoce de manera expresa el artículo 831…

"Artículo 831.- Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia de aquél".

…Parece un poco ocioso el contenido del artículo 834: ("Artículo 834.- Las partes al ofrecer la prueba presuncional, indicarán en qué consiste y lo que se acredita con ella"), puesto que, más que ofrecimiento de la prueba presuncional, si se cumple el contenido de este último artículo, lo que se hacen son alegatos para decir por qué se juzga que un hecho puede constituir una presunción.

Además, aunque las partes no ofrezcan la prueba presuncional, siempre tendrá que ser tomada en cuenta por la autoridad que resuelve al hacer el análisis de las pruebas, puesto que la presunción humana no consiste sino en la concatenación lógica que parte de un hecho conocido para llegar al conocimiento de otro desconocido.

8.- Por lo que hace a la instrumental también es ocioso ofrecerla, aunque siempre se hace, pues la junta, para poder resolver, la tendrá que tomar en consideración y, ociosamente, también le ordena que lo haga el artículo 836 de la ley ("Artículo 836.- La junta estará obligada a tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente del juicio").

9.- Por lo que hace a la prueba de inspección protestar porque el artículo 829…: ("Artículo 829.- En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes:

I.- El actuario, para el desahogo de la prueba, se ceñirá estrictamente a lo ordenado por la junta.

II.- El actuario requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse.

III.- Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes.

IV.- De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos.")

…rompiendo el principio de inmediatez, faculta al actuario para que ante él se desahogue la prueba.

10.- Ocuparse de la prueba pericial, señalando lo imposible que de hecho resulta el que las juntas paguen los peritos que debiera nombrar el trabajador, puesto que ninguna junta cuenta con un departamento de peritos o con los recursos económicos suficientes para pagar peritos calificados.

Explicar que, en muchos casos, se abusa de las pruebas periciales a sabiendas de los litigantes, de que nunca podrán desahogarse.

Señalar que hay cosas que ni los peritos pueden averiguar.

Insistir en todas las dificultades de la pericial.

11.- Prueba testimonial.- Señalar las negativas consecuencias que la aparente mentira lleva, que consiste en que los litigantes simplemente informan a la junta que los testigos les han dicho que no se presentarán voluntariamente y le piden al tribunal los haga comparecer.

Estas consecuencias son: dilación del procedimiento, pues no hay autoridad que se preocupe realmente por hacer comparecer testigos a pesar del pedimento de la junta; diferimiento sucesivo de muchas audiencias; eternización de los juicios.

Insistir en la ligereza de los tribunales que no exigen a los litigantes que justifiquen la causa o motivo por la que no pueden presentar a los testigos. Debería exigirse justificar esta causa o motivo.

12.- Ocuparnos de lo ocioso que resulta que la parte actora pretenda probar alguno de los hechos que señala el artículo 784.

"Artículo 784.- La junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:

I.- Fecha de ingreso del trabajador.

II.- Antigüedad del trabajador.

III.- Faltas de asistencia del trabajador.

IV.- Causas de recisión de la relación de trabajo.

V.- Terminación de la relación o contrato de trabajo por obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37, fracción 1 y 53, fracción III de esta ley.

VI.- Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido.

VII.- El contrato de trabajo.

VIII.- Duración de la jornada de trabajo.

IX.- Pagos de días de descanso y obligatorios.

X.- Disfrute y pago de las vacaciones.

XI.- Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad.

XII.- Monto y pago del salario.

XIII.- Pago de las participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y

XIV.- Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda.

Expresar el criterio de que, siempre que el actor ofrezca pruebas para intentar probar estos hechos, las mismas deben desecharse por ociosas.

13.- Nota muy importante. Exponer que a diferencia de otros tribunales en donde el juez es un receptor pasivo de las pruebas que ofrecen las partes, en Derecho del Trabajo, aunque de hecho las juntas también son receptoras pasivas, no deberían serlo, pues el artículo 784 ordena a la junta que exima al trabajador de cualquier prueba cuando ella -la junta- por otros medios, esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos.

Este artículo es positivo, generoso. Bueno, lo que pasa es que los tribunales no lo aplican pues casi siempre estarán en posibilidad de conocer los hechos por otros medios, como por ejemplo, pidiendo de oficio la exhibición de los documentos que todos los patrones están obligados a llevar conforme a lo establecido por el artículo 804.

"Artículo 804.- El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:

I.- Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable.

II.- Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo, o recibos de pago de salarios.

III.- Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo.

IV.- Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley. Y

V.- Los demás que señalen las leyes.

Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después, los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan".

14.- De lo señalado en la nota anterior, se concluye que la junta también puede allegarse los medios de prueba por propia determinación, no sólo por lo que dice el artículo 784, sino por lo que dice el artículo 782.

"Artículo 782.- La junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad, y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate".

Este artículo, el 782, es muy positivo, pues rompe con la tradición mexicana en casi todos los procedimientos, de la pasividad del juzgador frente a las posibles trampas o descuidos de las partes.

Qué bueno que ya el legislador quiere que las juntas tengan facultad para citar a las partes para practicar diligencias, no sólo las para mejor proveer, sino cualesquiera que juzgue necesarias durante el juicio, y que la pueda llevar al conocimiento de la verdad.

Qué malo que este artículo nunca sea aplicado por las juntas. No conocemos ningún caso en que una junta haya convocado a las partes a una diligencia de esa naturaleza, y tan útil que podría ser.

15.- Nota muy importante. Señalar lo ocioso que resulta el contenido del artículo 781…

"Artículo 781.- Las partes podrían interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas, sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes y examinar los documentos y objetos que se exhiban".

…puesto que las partes nunca pueden, aunque lo pidan, interrogar libremente a las personas que intervienen en el desahogo de las pruebas, ni hacerse entre sí las preguntas que juzguen convenientes, pues las juntas se ciñen a la formalidad excesiva de la prueba confesional, y de la prueba testimonial.

No se conoce ningún caso en el que las juntas hayan permitido a un litigante hacer uso de este derecho.

16.- "Artículo 841.- Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen".

Explicarlo y señalar que de acuerdo con él, las juntas son tribunales de conciencia porque valoran las pruebas sin formulismos y sin reglas fijas, claro que sin contradecir las leyes de la lógica jurídica.

PARLAMENTARISMO[8]

Primer Simposio Nacional sobre El Parlamento.
San José, Costa Rica.
9-10 marzo 1987

Dice Karl Loewenstein que la teoría de la separación de los poderes, atribuida a Montesquieu y adoptada por primera vez en la declaración francesa de los derechos del hombre de 1789, tenía por objeto garantizar la libertad individual de los gobernados, en cuanto que los diversos detentadores del poder son "independientes" entre sí y se controlan mutuamente. Desde entonces la "separación de poderes" pertenece al bagaje estándar de los estados constitucionales. Se trata de un dogma arraigado que quizá no va ya de acuerdo con la realidad actual.

Lo que en verdad significa la separación de poderes, es el reconocimiento de la necesidad de distribuir funciones entre diversos órganos (el problema técnico de la división del trabajo). Concluye el autor citado que debe sustituirse la expresión "separación de poderes" por "separación de funciones", lo cual por lo demás no es esencial al ejercicio del poder, sino sólo una necesidad técnica que puede plantearse de muy diversas maneras.

El constitucionalismo de la antigüedad funcionó sin la separación de poderes. Acciones materialmente diferentes -ejecución, legislación, judicial- estaban en las mismas manos.

La separación de funciones se halla muy vinculada al sistema de representación. Esta, la representación, tiene su origen en un proceso de emancipación de ciertos núcleos sociales respecto del poder central absolutista. Estos grupos lograron tener sus representantes ante el monarca o jefe de estado y su misión era participar en el ejercicio del poder en funciones que no eran necesariamente exclusivas. Este fenómeno se dio claramente en Inglaterra cuando la revolución puritana triunfó sobre el despotismo de los Tudor (1678), dando nacimiento al parlamentarismo. La participación parlamentaria en el ejercicio del poder no significó una separación entre el ejecutivo y el legislativo, sino solamente una separación entre los órganos representativos y la corona. Una cosa es seccionar funciones y otra distinta seccionar las materias. Una cosa es romper el poder monolítico y otra asignar exclusividad de materias a los diversos elementos de ese rompimiento saludable.

El poder es, de todas maneras, uno solo y requiere forzosamente, cualquiera que sea la división de funciones, de un liderazgo político que mantenga la unidad. Cuando se confía demasiado en la "representación de la voluntad

[8] El Lic. Montes era Oficial Mayor de la H. Cámara de Senadores; 1985 a 1987.

general o mayoritaria", se corre el riesgo de las interpretaciones contradictorias que arrojan como consecuencia las discrepancias internas y el debilitamiento del poder mismo.

Es el liderazgo político el que dirige y guía la voluntad general representada. No es posible conceder entonces, que la función legislativa y la ejecutiva se hallen opuestas. Cuando mucho podrá hablarse de la necesidad de una técnica distributiva, pero nunca discrepante. Dice Loewenstein: "Pertenece a la biología del proceso del poder que el liderazgo político esté en manos del gobierno, un grupo reducido, eficaz, y con capacidad de acción, en lugar de ser ejercido por una asamblea con múltiples miembros, lenta e incapaz frecuentemente de formar una voluntad política unida".

No debe obligadamente haber oposición entre el trabajo legislativo y el ejecutivo. Las decisiones políticas fundamentales son conformadoras de una práctica gubernamental armónica, la que da lugar, a su vez, a un compromiso de entendimiento entre los diversos órganos del poder. Tal compromiso no es de orden jurídico o legal, sino político e implica el reconocimiento del liderazgo que generalmente recae en el jefe del estado, pero que también puede estar constituido por un grupo (siempre pequeño), en el que participen sujetos ubicados en los diversos "poderes". La convención doctrinal de la "separación" no debe traducirse en una práctica aislante que pase por alto la necesidad del liderazgo político.

Es cierto, sin embargo, que las decisiones políticas fundamentales demandan en la mayoría de los casos de una legislación. Formalmente el órgano legislador asume la responsabilidad, aunque no tenga la autoría. El acto legislativo es el consumador de la decisión. Si rechaza la decisión puede suceder que el control político pase del liderazgo al parlamento; pero como éste se halla teórica y prácticamente incapacitado para ello, de no depositar el control en unos cuantos de sus miembros, se verá que desaparece o se desnaturaliza ese control.

Puede suceder que el liderazgo político (siempre en manos de uno o varios sujetos de alta selección) se ubique en la esfera del ejecutivo o en la esfera parlamentaria. Lo más frecuente es la primera de estas hipótesis. Lo que no debe suceder, so pena del deterioro del poder, es carecer de liderazgo.

El liderazgo no debe asimilarse a la idea de control absolutista o dictatorial. El absolutismo monárquico, la dictadura o el totalitarismo es la deformación o degeneración del liderazgo. Excluyen la representación y los procesos democráticos e implican la radicalización de posturas ideológicas rígidas. En estos casos el parlamentarismo se convierte en un instrumento incondicional del líder o del partido.

El riesgo de la deformación o degeneración no nulifica la necesidad de liderazgo, el cuál toma las decisiones políticas fundamentales dentro de un cuadro constitucional preestablecido. Tiene causes y limitaciones de carácter histórico y social, pero también un margen relativamente amplio de acción.

El parlamentarismo clásico es un concepto que requiere explicarse. Supone un sistema dualista: el jefe del estado (rey, emperador o presidente) y el "gobierno" encabezado por el primer ministro y el parlamento. El jefe del estado tiene un papel generalmente honorífico y es el primer ministro el que toma las decisiones o refrenda las de aquél. El responsable ante el parlamento (cuerpo colegiado) es el primer ministro. El parlamento puede obligar a dimitir al primer ministro y también a todo el gabinete (gobierno) mediante el voto de censura o la negativa al voto de confianza. El ejecutivo a su vez, puede disolver el parlamento y convocar a elecciones.

El parlamentarismo clásico, cuyo modelo es el inglés, tiene la característica de que los miembros del gobierno o gabinete son al mismo tiempo miembros del parlamento. El primer ministro y demás miembros del gabinete, pertenecen al partido mayoritario o a una coalición de partidos. El gobierno conservará el poder siempre que cuente con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios o de la coalición.

Ambos cuerpos, gabinete con un primer ministro, y parlamento, participan o colaboran en las decisiones políticas fundamentales, que se traducen en ley. La ejecución corresponde sólo al gobierno. El inmediato control político es consecuencia de esta paridad. (….ilegible) el control político descansa en los electores.

Como puede apreciarse en este sistema genuinamente parlamentario la "división de poderes" es teórica. La realidad es que parlamento y gobierno trabajan conjuntamente. Cualquier crisis se traduce en el desconocimiento del gabinete por parte del parlamento o en el desconocimiento del parlamento por parte del gobierno, con el fin de restaurar la armonía.

En este sistema de "equilibrio" de fuerzas (separación y colaboración) no hay lugar a hablar de posible declinación o crisis parlamentaria. Se mantiene siempre su fuerza, a menos que intervengan factores externos de carácter social incontrolable. Mientras eso no suceda, la fuerza del gabinete se apoya en el parlamento y la del parlamento en el gabinete.

La minoría parlamentaria u oposición tiene importancia muy grande, como dosificadora de las decisiones políticas y base de lo que se ha llamado "gabinete en la sombra". Es un factor más de equilibrio.

El sistema llamado presidencialista, cuyo tipo es el norteamericano, guarda grandes diferencias con el anterior por el respeto que se ha tenido hacia la teoría de la separación de los poderes. (No debe confundirse el régimen presidencialista con el presidencialismo personalista).

El presidente o jefe del ejecutivo, electo popularmente, no se halla sometido a la voluntad del parlamente o cámaras. Aquél y éstas tienen su propia legitimidad. Legislativo y ejecutivo cuentan con causes de comunicación. Ni uno ni otro pueden desconocerse mutuamente en caso de crisis. La resolución o superación de las crisis se confía al sentido democrático de los funcionarios, a los "pactos de inteligencia" y a la auscultación de la voluntad general. Don-

de hay atraso cívico o poco sentido democrático, las crisis se resuelven por el cuartelazo o por la guerra civil.

Como el aislamiento o la pugna -consecuencia de llevar al extremo la "separación de poderes"-, puede dañar seriamente la gobernación, en los sistemas presidencialistas de tradición democrática, se han buscado diversas vías de coordinación. Las de orden jurídico o constitucional consisten principalmente en las siguientes: facultad del ejecutivo para vetar una ley (veto que puede hacerse a un lado si el legislativo lo vence por votación especial); participación del senado en la política exterior a cargo del presidente, pues le corresponde la ratificación de los tratados; confirmación senatorial del nombramiento que hace el presidente de ciertos funcionarios; aprobación del congreso de propuestas.

También debe tomarse en cuenta que en Estados Unidos el vicepresidente forma parte del Senado, aunque no tiene voto.

Aparte de estas vías constitucionales, han de tomarse muy en cuenta las de carácter político: es el partido el mejor medio de coordinar poderes legalmente incompatibles. Cuando el presidente y la mayoría de los congresistas pertenecen al mismo partido, la coordinación es más efectiva, pues las iniciativas y peticiones presidenciales ofrecen mayor expectativa de aprobación. Dice un autor: "El partido político es el combustible de la maquinaria estatal, sin el cual ésta última hubiese parado sin remedio".

Disponiéndose de la mayoría en ambas cámaras, el régimen presenta unidad y la coordinación es manifiesta. Incluso asegura en no pocos casos, la reelección del presidente.

En Estados Unidos no siempre se da esta situación favorable. Las elecciones "intermedias" de una de las cámaras, a la mitad del camino del período presidencial, pueden dar por resultado la pérdida de la mayoría parlamentaria. Por otra parte, la disciplina partidista no es del todo hermética, y muchas veces hay "votaciones cruzadas", en que un partido o algunos de sus miembros se unen a la oposición.

La coordinación suele ser también el resultado de la auscultación. Las encuestas y consultas, llevadas a cabo con cierto rigor y cuidado, dan muchas veces la pauta para que el presidente o las cámaras, modifiquen sus políticas y se produzca la coordinación. El contacto con la opinión pública es muy importante y también se obtiene a través de las conferencias de prensa, entrevistas, etcétera.

Como quiera que sea, la supuesta independencia entre el legislativo y el ejecutivo, siempre se halla mitigada por las prácticas políticas y sobre todo, por la preponderancia de un determinado partido en un determinado período.

Como puede apreciarse, en este sistema no puede hablarse de "crisis del parlamentarismo", pues si bien es cierto que el presidente tiene facultades muy amplias y es el líder nato de la política interna y externa, así como también que es el autor de la mayor parte de las iniciativas de ley, el congreso mantiene su

fuerza y no es incondicional de la voluntad presidencial, ni siquiera cuando la mayoría de los congresistas pertenecen a un partido. Cuando el presidente "pierde" esa mayoría, la fuerza del Congreso y sus decisiones políticas se hacen más evidentes.

La experiencia histórica demuestra que cuando el parlamento adquiere preponderancia y, paralelamente, se debilita el ejecutivo, sobreviene el desorden. De allí que muchos países hayan tenido que enmendar las bases constitucionales para disminuir la fuerza del parlamento. Una de estas reformas ha consistido en la elección por votación universal del presidente. Éste desempeña una actividad política intensa para lograr que la mayoría parlamentaria pertenezca a su propio partido, del cual suele ser el líder. Al lado del presidente puede actuar un primer ministro y un gabinete de iguales tendencias políticas. Cuando la asamblea parlamentaria retira su confianza al primer ministro y éste se ve apoyado por el presidente, la consecuencia puede llegar al extremo de disolver la asamblea y convocar a elecciones.

La fuerza legislativa del parlamento tiende a disminuir en casi todos los países. Se observa que la gran mayoría de las leyes obedecen a iniciativa del ejecutivo. Ello se debe a la conveniencia de una mayor coordinación o de un mayor equilibrio en beneficio de la nación y no precisamente a una crisis. También se explica esta preponderancia inicialista en virtud de que un determinado partido abriga tanto a los miembros del ejecutivo como a los del parlamento en mayoría. Como casi siempre el jefe del ejecutivo es el líder del partido, se comprende que la actividad legislativa dependa en buena parte de él. De todas maneras, el parlamento ejerce sobre el gabinete o gobierno un gran control, disponiendo para casos extremos del voto de censura al primer ministro. También tiene el parlamento la facultad de "preguntar" o interpelar a los miembros del gabinete.

Un ejemplo de preponderancia parlamentaria es el caso de Suiza, cuya asamblea es hegemónica. El gobierno se integra, prácticamente, con un comité delegado del parlamento.

El caso de México

El régimen de México sigue el modelo presidencialista inspirado en el norteamericano (aunque no igual). Teóricamente la separación de poderes concede a éstos bastante autonomía. En la práctica el sistema nuestro es -y ha sido desde hace muchos años- acentuadamente presidencialista, puesto que el titular del poder ejecutivo tiene una notoria preponderancia sobre los otros dos poderes, principalmente sobre el legislativo.

Las razones de este fenómeno son variadas y complejas. Desde luego puede mencionarse el peso de una tradición centralista con más de tres siglos de duración. La introducción del régimen federal democrático no fue fácil de asimilar. Un período largo de nuestra historia a partir de la Independencia acusa una gran inestabilidad política. La lucha entre conservadores y liberales no daba

ocasión al fortalecimiento de la vida institucional y el poder casi siempre se identificaba con el líder en turno (llámese Santana o llámese Juárez) dotado de facultades extraordinarias no sólo para administrar sino también para legislar. Durante este período que culmina con la entronización de Porfirio Díaz, no cabe hablar de crisis de parlamentarismo. Más que crisis era inoperancia real, aunque no puede negarse que hubo momentos excepcionales de trascendencia, como el Congreso Constituyente de 1856 que formula la Constitución liberal federal. Esta constitución tuvo poca vigencia y la actividad legislativa casi desapareció debido a los conflictos armados que le siguieron, como las Guerras de Reforma o las emprendidas contra el Imperio de Maximiliano.

Con el triunfo de la República, el Partido Liberal se fortalece y los hombres que integran el poder legislativo, que ejercen su mandato accidentadamente cuando las facultades extraordinarias del ejecutivo no se los impide, son reclutados invariablemente entre las filas liberales, de suerte que la posible falta de coordinación con el presidente rara vez se da. Se gobierna no sólo a base del prestigio del bando triunfante sino también a base del prestigio del líder. Una vez que Porfirio Díaz se consolida en la presidencia como verdadero dictador, el papel del poder legislativo, integrado por representantes designados por el mismo dictador en procesos electorales que eran una farsa, es de simple comparsa, dócil seguidor de la política presidencial.

La Revolución produce la Constitución de 1917, que reafirma la separación de los poderes. Durante varios años el legislativo sigue la suerte que le marcan las pugnas entre los caudillos revolucionarios, que se matan entre sí. Calles funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR) para poner un poco de orden en las filas y promover la exaltación a los diversos niveles de mando de aquellos sujetos cuya ideología y disciplina garantizasen la sobrevivencia de las tendencias revolucionarias. El PNR nace, pues, como un partido gubernamental. Su misión principal consiste en respaldar la voluntad del presidente en turno, jefe nato del partido. El poder legislativo se integra durante muchos años con elementos que en totalidad pertenecen al partido (actualmente PRI), de manera que carecen de autonomía política. A través de esta práctica la coordinación entre ejecutivo y legislativo se torna perfecta y el sometimiento del segundo al primero se hizo algo normal. La discrepancia era imposible y el control férreo. En este sentido se podía hablar en México (y en otros países, quizás) de una crisis parlamentaria permanente.

Si bien es cierto que constitucionalmente hay vínculos jurídicos entre ejecutivo y legislativo (derecho de veto, ratificación de nombramientos de ciertos funcionarios, ratificación de tratados internacionales, informes y comparecencias, aprobación de presupuestos), la crisis parlamentaria traducida en sometimiento de los legisladores a las decisiones políticas del ejecutivo, con la aprobación de sus iniciativas se debió más que nada a la gran fuerza política, aglutinante, del partido gubernamental. Sería falso decir que este partido representó con fidelidad todas las tendencias o "anhelos" del pueblo. Sin negar

que hay grandes sectores cuyos intereses se identifican con la política oficial (aunque cada vez menos), debe confesarse que hay desajustes y que la preponderancia del partido se apoyó en el propio gobierno.

La Reforma Política ha introducido el pluralismo y esto empieza a darle a la Cámara de Diputados matices de mayor independencia. Es algo muy saludable; el ejecutivo sigue siendo el guía, al menos en los asuntos o leyes de importancia mayor. El líder coordinador de cada una de las cámaras es el encargado del enlace.

¿Ha sido positivo o dañoso este estado de cosas? Nos inclinamos a creer que en países con poca tradición democrática y con poca educación cívica, la verdadera separación de poderes (legislativo-ejecutivo) acarrearía graves problemas y quizás el caos (hay ejemplos históricos). Es preferible la "coordinación" así sea meramente política. Lo anterior no prejuzga sobre los resultados concretos de una administración. Por mucha coordinación que haya, tales resultados pueden ser malos. Pero el riesgo se eleva cuando esa coordinación falta.

LA LOPPE Y LAS REFORMAS[9]

(versión taquigráfica)

Ciclo de conferencias:
Reformas Constitucionales en Materia Electoral.
Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional.
Cuernavaca, Morelos.
26 de marzo de 1987[10]

Quiero empezar esta reunión con ustedes reconociendo el esfuerzo, la madurez, el propósito positivo de que los funcionarios que integran el Comité Municipal de nuestro Partido Revolucionario Institucional organicen este ciclo de conferencias.

Siempre he pensado que uno de los desafíos que se presentaron a los partidos políticos cuando se los elevó al rango de organismos constitucionales en 1977 era difundir el contenido de las leyes electoral y hacerlo de tal manera que nuestras bases, los integrantes de nuestros comités seccionales, esa gente a la que acudimos siempre que requerimos de presencia humana para que un acto sea significativo o siempre que tenemos campañas electorales, conocieran realmente el contenido de esas leyes. Yo creo que este desafío, la generalidad de los partidos políticos no lo ha cumplido. Pienso que este esfuerzo debería profundizarse en todo el país.

Tengo 30 años de ser militante del PRI[11]. Me da orgullo platicarles que empecé desde pegando cartelones, cargando mantas, haciendo política, como

[9] El Lic. Montes García fue Diputado Federal a la Quincuagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 1976-1979.- Presidió la Comisión de Estudios Legislativos y fue miembro de la Comisión de Justicia. Tuvo una muy destacada participación en el estudio y aprobación de la Reforma Política de 1977 y la Ley de Amnistía del mismo año, ambas iniciadas por el Presidente de la República e inspiradas por el pensamiento de don Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación. Fue también Comisionado de la Cámara de Diputados ante la Comisión Federal Electoral.

[10] En esta fecha se desempeñaba como Oficial Mayor de la H. Cámara de Senadores de 1985 a 1987.

[11] Oficial Mayor del Comité Directivo Estatal en Guanajuato, 1962. Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de Guanajuato en 1964. Secretario General del Comité Directivo Estatal en Guanajuato en 1965. Secretario de Divulgación Ideológica de la Liga de Organizaciones Populares en el Estado de Guanajuato en 1973. Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 1989-1990. Presidente del Comité Directivo Estatal de Guanajuato, de 1990 a 1991, época en que encabezó los trabajos para formar un padrón de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, mismo en el que se registraron quinientos mil ciudadanos con indicación de su nombre, su domicilio, su distrito electoral y su sección electoral. Este padrón quedó computarizado en el archivo del Comité Directivo Estatal.

la hacemos los mexicanos priistas; y que creo que es muy necesario, así sea en términos generales, que todos los miembros del PRI sepan qué leyes se van a aplicar cuando haya elecciones.

Ustedes estarán notando, si hay aquí un académico, algún licenciado, que el lenguaje que quiero emplear no es el académico; no quiero emplear términos rebuscados. Quiero enseñar con la mayor claridad posible para que todo el mundo me entienda lo que son nuestras leyes, nuestro sistema electoral, porque ustedes lo van a vivir y el comité va a pelear -a luchar en ese sistema- por sacar adelante a sus candidatos.

Cuando comentábamos telefónicamente el título que se le dio a esta plática, yo estaba un poco sorprendido. Les decía "¿por qué quieren que hable de la LOPPE -una ley que así conocimos todos en México- con ese nombre, si esta ley ya no se va a aplicar? Si voy a hablar frente a un grupo de estudiantes de Derecho Electoral, pues sí, es un antecedente que seguramente tendrá mucho interés para ellos; pero, si voy a hablar ante las bases de mi partido, a lo mejor hasta los confundo. En lugar de servirles, los voy a enredar si les hablo de una ley que ya no va a tener aplicación. Ya está sustituida esa ley por el nuevo Código Federal Electoral, que ustedes, en una semana, el Senador Manzanilla Schaffer -que es un excelente expositor- vendrá a hablarles del Código Federal Electoral. Sin embargo, acabo de entender hace un momento, en conversación con el Lic. Saucedo y con el señor secretario general del Comité Directivo Estatal, que es conveniente, muy brevemente, hablarles de la LOPPE, lo que se llamaba Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, porque realmente es un parteaguas.

Una era la situación electoral de México antes de la LOPPE y otra fue la situación electoral de México después de la LOPPE. ¿Por qué digo esto? Conviene recordar cuál era la situación que vivía el país a finales de 1977, cuando la "L" Legislatura aprueba la LOPPE. Estaba superándose una crisis económica y de credibilidad de las instituciones que se había dado a finales de 1976. Los canales de participación política, los modos de hacer política en el país, sobre todo para grupos disidentes, para grupos de otros partidos con ideología y pensamiento distinto al nuestro, y al de otros partidos que ya estaban constituidos, estaban azolvados, y algunos de esos canales, esas vías de participación estaban clausuradas. El país vivía una etapa de iniciación de violencia, había guerrillas urbanas, existían grupos armados en varias entidades de la república, como Chihuahua, Guerrero, en parte de Morelos, en parte de Michoacán. Había muchos que, por razones que ellos llamaban políticas, violaban el derecho penal común.

Si ustedes se acuerdan, en 1977 sólo había cuatro partidos políticos reconocidos, legalizados y esos partidos eran el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. No había más; los demás estaban en la ilegalidad. Muchos que ahora son diputados o fueron diputados, en ese

momento eran guerrilleros. Esa es la verdad; esa situación estaba viviendo nuestro país. Existían, además, grupos integrados por un número considerable de ciudadanos representantes de corrientes ideológicas diversas, que no habían podido constituirse legalmente en partidos políticos a pesar de que lo querían, porque había muchos requisitos que cumplir, requisitos que ellos no alcanzaban de ninguna manera a solventar.

Desde hacía muchos años y por muy diversas razones y por conducto de distintos representantes, el Estado Mexicano había manifestado su voluntad política de abrir nuevos cauces de participación ciudadana para fortificar las instituciones y propiciar un cambio democrático lento, paulatino, no violento, que se tradujera en un mayor bienestar y tranquilidad social.

Descubrimos los mexicanos que para la democracia a la que aspiramos, y lo voy a decir ante priistas, son muy importantes las mayorías, pero también son importantes las minorías y que, en estricto rigor ni hay ni debe haber enemistades violentas u odios profundos entre mexicanos por diferencias políticas.

La esencia de la democracia es la convivencia de una mayoría que gobierna con minorías que participan mediante la expresión de su pensamiento.

Los mexicanos no hemos aprendido mucho a respetar el pensamiento ajeno. A veces, ni dejamos que se expresen, nos arrebatamos la palabra cuando se trata un tema y no oímos con tranquilidad qué es lo que nos quiere decir el de enfrente. Esto incluye a los priistas, incluye a los de otros partidos.

En este momento, el Estado Mexicano reconoce que le conviene impulsar el pluripartidismo, que hay muchos partidos políticos, porque preferimos mítines de protesta todos los días, con razón o sin razón, que guerrillas armadas escondidas en la sierra o en las ciudades. Entonces, esta respuesta del sistema mexicano a esas circunstancias a las que me he referido fue una respuesta inteligente, una respuesta clara y cambiaron muchas cosas.

Hasta antes de 1977 todos los integrantes de la Cámara de Diputados se elegían con lo que se llama mayoría relativa. Esto es, en distritos electorales y el que sacaba más votos ganaba y punto. Y el que perdía, así fuese por pocos votos, pues perdido estaba. Y había corrientes que no tenían representación en la Cámara porque en un distrito ninguno de sus candidatos había sacado más votos. Esto, de alguna manera, es un sistema antiguo. Este sistema de elección por mayoría relativa ha sido superado en casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque las combinaciones aritméticas y matemáticas pueden conducir a que una gran cantidad de ciudadanos de un país determinado, siendo muy numerosos no tengan participación, y que nada más otra gran cantidad que forma la mayoría tenga la participación. Y que nuestra democracia no quiere las tiranías, aunque éstas fuesen de la mayoría. Se piensa que todos los mexicanos, de alguna manera, tienen algo que aportar a nuestro sistema.

El proceso de actualización y modernización de las leyes electorales y políticas de México no empezó tampoco en 1977. Tuvimos muchos antecedentes y yo diría que desde 1910, cuando triunfó don Francisco I. Madero, empezó un proceso de actualización de nuestras leyes electorales. Acuérdense ustedes

que antes de Madero los presidentes no se elegían por el voto directo de los ciudadanos. Cuando me puse a estudiar historia de México y vi que en este país un elemento tan nocivo como Santa Anna había sido presidente 11 veces, decía yo "pero ¿cómo es posible que los mexicanos hayan escogido a Santa Anna 11 veces presidente de la república?"

Luego descubrí para mi sorpresa -estoy hablando de hace muchos años, cuando por primera vez me encontré con ese fenómeno-, pues que no, que realmente no habían sido los mexicanos, porque entonces no había voto universal directo; los mexicanos no iban a la casilla a votar por el presidente. Los mexicanos elegían en una circunscripción determinada a otras personas que se llamaban electores. Esos electores eran citados a una junta estatal y en esa junta estatal, ellos escogían a los electores del estado, y luego se reunían en una convención nacional, y era en esta convención donde, los ciudadanos estaban representados ya por los representantes de los representantes, donde se elegía al presidente. No había entonces sufragio o voto universal y directo. Es hasta cuando Madero llega a la presidencia que se convoca a unas elecciones con sufragio universal y directo. Eso es una gran reforma política; ese es un avance democrático. Pero a pesar de que era un sufragio universal y directo, estaba muy limitado. Desde luego la mayoría de la población mexicana no votaba, ¿por qué? Porque las mujeres no tenían derecho al voto; no votaban las mujeres, ¡qué esperanzas que como ahora! -y muchas gracias por esta aquí-, participaran en actos de partido o vinieran a alguna conferencia, ni siquiera votaban. Los hombres hemos esclavizado muchas veces a las mujeres. Eso no está bien. Tienen que pasar muchos años, hasta que el presidente Ruíz Cortínez otorga el derecho de votar a la mujer. Figúrense cuánto pasó desde el sufragio universal y directo en México hasta la presidencia de don Adolfo Ruíz Cortínez.

Hasta entonces, en 1953, por decreto del 17 de octubre, se otorga el voto a la mujer. A partir de ese momento, como que se acelera el proceso de modernización y de actualización del Derecho Político Mexicano y del Derecho Electoral Mexicano, porque en 1963, López Mateos establece la figura de diputados de partido.

No sé si ustedes se acuerden, en 1963 por primera vez en la XLVI Legislatura Federal hay diputados del PAN, del PPS y del PARM ¿Cómo se hacían los diputados por partido?; pues se contaban los votos emitidos en todo el país. En cada distrito electoral el que ganó, ganó. Pero luego en todo el país se decía "cuántos votos sacó el PAN", "pues, que sacó tantos millones o tantos cientos de miles", y al partido que sacaba más del 2.5% de la votación general se le asignaban 20 diputados de partido o un número determinado de diputados de partido. Ahí, en ese momento, se da ya cierta representación a otros partidos, y así estábamos en 1977. Había diputados de mayoría relativa para integrar la cámara federal y había diputados de partido.

En 1977 se moderniza mucho más cuando nace la LOPPE, cuando se reforma la Constitución, se moderniza mucho más el sistema político y el

sistema electoral mexicano, e inventamos, los mexicanos, un nuevo sistema de elegir representantes. Conservamos el tradicional del elegir diputados en distritos electorales, y ahí, el que ganó, ganó. Pero esa era una parte de la cámara, de 400 diputados que integraron a partir de 1977 la Cámara de Diputados Federal. A partir de la LI Legislatura, que empezó a funcionar en 1979, 300 diputados se eligen hasta hoy en distritos electorales como los que ustedes conocen, y ahí, el que saca más votos gana. Y 100 diputados se eligen por un sistema distinto que llamamos de representación proporcional, que dejamos exclusivo para las minorías, y que aplicamos fórmulas aparentemente muy complicadas, pero que son rete sencillas,

¿Por qué? Porque por un lado contamos los votos que sacan los diputados de mayoría y allí no hay problema. Todos lo entendemos; y por otro lado se cuentan los votos que sacan todos los partidos en las llamadas circunscripciones plurinominales, y de esos votos que sacan todos los partidos -incluyendo el nuestro, que participa en esas elecciones, pero que luego no tiene derecho a este tipo de diputados porque es mayoritario-, se restan, se quitan los votos que correspondan a aquellos partidos que han obtenido más de 60 triunfos, o 60 triunfos por lo menos, en distritos electorales; y como nuestro partido siempre tiene más de 60 triunfos en los distritos electorales, él ya no tiene derecho a diputados de representación proporcional.

Hasta el día de hoy, a ese gran total de votos, quitamos los del partido; a lo que queda, se divide entre el número de diputados que se van a elegir en esa circunscripción plurinominal. En ese ámbito de tierra, donde se dividió también el país; divididos los votos -que se llama votación efectiva- entre el número de diputados que se va a elegir, nos da un cociente, un resultado de división. Ustedes saben que en la división se llama cociente a lo que resulta, y por cada vez que cada partido político haga con sus votos un cociente de ésos, se le asigna un diputado que no ganó en ningún distrito, pero que va a representar en la cámara una línea de pensamiento diferente a la de nosotros.

Esto es democracia, esto es avance, esto es actualizarnos, enseñarnos a respetar la disidencia para poder exigir que se respete nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar.

Y así, son 100 los diputados de los partidos políticos (de minorías). Pero no sólo eso hizo la LOPPE. Eso fue, quizá, de lo más espectacular, lo más notable: integrar de manera distinta la cámara federal de diputados, pero también en las cámaras locales.

Acuérdense ustedes, yo lo viví, yo fui diputado local por primera vez en Guanajuato en 1965[12], después de haber sido dirigente estudiantil, medio

[12] Diputado a la Cuadragésima Sexta Legislatura del Estado de Guanajuato. 1965-1968.- Perteneció a la Comisión de Justicia y emitió un voto particular no aprobatorio del matrimonio bajo el régimen de sociedad legal, por la falta de uso del mismo en el Estado de Guanajuato. Muchos años después este régimen se derogó. Votó también en contra de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el que se suprimía la inamovilidad de los jueces y magistrados locales.

latoso y haciendo huelgas, como somos los jóvenes, bueno, yo ya no tanto. Y me encontraba yo con que la Cámara a veces se reunía, a veces no se reunía y, a veces íbamos a sesiones o, a veces, el oficial mayor nos llevaba a nuestra casa el libro de actas, que para que firmáramos. No teníamos sesiones públicas. Muchas cámaras, hay que decirlo con un sentido sano de auto crítica, de análisis histórico, sin afán destructivo, ni con afán de denigrarnos, sino simplemente con afán de análisis, que nos va a servir a todos. Nos decían que las cámaras locales eran un buen club de amigos del gobernador en turno y que, pues qué esperanzas que hubiera algún problema. Lo más que hacían los diputados era cuando sus electores del distrito, sus compadres, sus amigos "oye, fíjate que me quitaron la pistola". "Ay, déjame ver cómo hago para que te la devuelvan". "Oye, que quiero una beca para mi muchacho". "Hay una beca, a ver, denle una beca". "Un camino", cuando el diputado tenía mucho arraigo y era ya muy influyente, pues "a ver si conseguimos el camino".

Esa era la tarea fundamental y pocas veces nos ocupábamos de lo político, de señalar lineamientos, de criticar al ejecutivo -que no tiene por qué ser intocable, ni tampoco lo vamos a criticar echándole la viga ni alguna otra cosa- con el respeto que el cargo merece. Esa es la función del poder legislativo: ser un contrapeso del otro poder que por su propia naturaleza es muy fuerte. No, ¡qué esperanzas que hubiera eso!. No teníamos más sesión pública, más que la solemne, en que el gobernador rendía informe.

En 1977 la Constitución ordena: "En todas las cámaras locales deberá haber diputados representantes de minoría en número suficiente para la representación pero que, desde luego, no tengan la decisión". La decisión, siguiendo el principio esencialmente democrático, debe ser conservada para que la mayoría decida. Pero vamos más allá. En los ayuntamientos también se ordena -se reforma el artículo115 y en 1977- se ordena que en aquellos municipios que tengan más de 300,000 habitantes o por lo menos 300,000, se elija un ayuntamiento introduciendo en esa elección el principio de la representación proporcional. Las entidades lo interpretan de distintas maneras. Hay algunas que dicen "al que saca más votos le damos el presidente municipal y ocho regidores, y nada más va a haber dos de representación proporcional"; o hay otras en que todos los regidores son de representación proporcional. Son las dos grandes corrientes en las constituciones locales.

Un poco más allá -algo que pocas veces se analiza con cuidado- para coraje de muchos compañeros de nuestro partido, a veces muy leales, pero con una posible desorientación porque no se los supimos explicar bien: "Pero ¿cómo va a ser diputado fulano, que compitió por este distrito y perdió? Le ganamos y ahí anda de diputado, que de representación proporcional". ¿Pues, eso qué es?

Pues es esto. Estos actos políticos trascendentes, importantísimos, modernos, tienen dos finalidades: de manera inmediata, actualizar el sistema, modernizarlo; pero a la vez tienen una gran finalidad educativa y de enseñanza, que los mexicanos avancemos en nuestra politización y aprendamos a tole-

rarnos los unos a los otros y a vivir con dignidad, en paz con la disidencia, y enseñar también a la disidencia a que conviva en paz con nosotros.

Si algún mérito tiene nuestro partido político, el Partido Revolucionario Institucional, es que logra en un momento muy dramático de nuestra historia, que el poder pase de manos a manos, dentro de la misma corriente revolucionaria, en forma pacífica. Si algún avance es históricamente importante, es que el poder ya en México, sin ningún género de dudas, dura seis años; un gran poder, porque es indispensable y necesario para la unidad nacional, para que el país no se desgaje, pero con un límite temporal infranqueable.

Hasta antes de Cárdenas como recordamos, había un Jefe Máximo. Eran los fenómenos de nuestra historia, consecuencias de un movimiento armado violento que triunfó, y que al triunfar no necesitaba apoyos legales para imponer lo que quería. Para eso había ganado una revolución y no pedía permiso para hacer algunas cosas. Pero eso le había costado un millón de muertos al país. Pero nos modernizamos, avanzamos, nos politizamos. Y Cárdenas hace respetar la institución presidencial y él mismo conserva prestigio mucho tiempo. Pero poder, lo tiene seis años. De ahí para acá los presidentes tienen poder seis años, pueden conservar prestigio, pueden conservar cierta influencia, pero no gobiernan; gobierna el presidente en turno. Todas estas cosas -que pocas veces se analizan quizá con esta franqueza ante compañeros como ustedes, de lucha partidaria-, son avances políticos; y yo decía, el PRI logró eso. El PRI logró que el poder pasara de manos a manos, de manera pacífica, dentro de la misma línea ideológica, dentro de la misma corriente de pensamiento.

Pero puede ocurrir -y para eso necesitamos prepararnos los mexicanos y este es un esfuerzo del sistema mexicano, consciente de esa necesidad que no se ha explicado con la claridad que merece-, puede ocurrir ¿por qué no? -no debe alarmarnos, ocurre en muchas latitudes-, que la mayoría cambie de rumbo, y que la que es mayoría hoy no lo sea mañana, y que la que lo sea mañana no lo sea pasado mañana.

Los mexicanos tenemos que aprender a prever esa posibilidad y que en algún momento, nuestra democracia tenga alternancia.

Todos estos esfuerzos que yo quiero ver con esta lógica de sencillez -y que puedo estar cometiendo algún error para el hecho de claridad y para el hecho de entendernos-, se prefieren en estas leyes.

La LOPPE, sin embargo, tuvo grandes defectos. Las leyes políticas, las leyes de contenido político electoral cuando se están haciendo –a nosotros en lo personal nos tocó participar en la elaboración de la LOPPE, éramos diputados federales y desde entonces lo expresamos y lo repetimos ahora- el legislador tiene que actuar con una gran humildad y no sentirse muy sabio ni muy competente porque está haciendo una ley. Eso no es bueno. El legislador tiene que ser humilde porque las leyes las cambian las realidades, y desde que nació la LOPPE dijimos: "esta es una ley de avanzada, pero la dinámica social del fenómeno que trata de regular, fenómeno político que es tan cambiante, tan variable, va a exigir reformas inmediatas y otras mediatas, y hagamos des-

de ahora un acto de sinceridad y humildad: reconozcamos que no podemos prever todo y que esta ley va a tener que ser cambiada".

Efectivamente, dos años después de su vigencia, la LOPPE tuvo que ser modificada. En 1983 se modificó y, últimamente, en este año ha sido ampliamente modificada.

Todo lo que he dicho era para conducirlos a ustedes y llevarlos al tema del presente. Ya hablamos del pasado, ya vimos la razón aunque sea así de general. Estamos entrando al presente. Aquí les pido un esfuerzo de atención.

Voy a tratar de explicar con la mayor claridad posible, hasta donde mi modesta capacidad me lo permita, qué es lo que ha pasado en el año de 1985 y en el año de 1986. Se ha reformado la Constitución. Se han reformado varios artículos constitucionales que van a hacer que, a partir de 1988, las cosas ocurran de manera distinta, la cámara se integre de otro modo.

Muchas cosas van a cambiar. En 1985 se reforman los artículos 75, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué se reforman? El Presidente de la República presentó una iniciativa diciendo que era peligroso, riesgoso por las crisis modernas, que transcurriera tanto tiempo entre el momento en que se realiza una elección y el momento en que toma posesión un presidente de la república. La elección se realiza el primer domingo de julio y el presidente de la república toma posesión el día primero de diciembre, así que transcurren julio, agosto, septiembre octubre y noviembre, cinco meses; cinco largos meses en que ya hay un presidente electo y otro presidente en funciones.

Esto divide el poder; esto no es sano y en la práctica, los funcionarios que van de salida -esto es verdad- pues ya no se atreven a tomar decisiones porque van de salida y porque no saben los programas del siguiente presidente; y los que van a entrar con el nuevo presidente todavía no pueden tomar decisiones porque no están en funciones. Y la sociedad mexicana se alarma y se contiene la inversión. Ocurren muchos fenómenos nocivos para el país.

El Presidente De la Madrid preocupado por eso, desde 1982 presenta una iniciativa en la que pide se acorte ese espacio, que haya menos tiempo entre el momento de la elección y el momento de la toma de posesión. Pero además, dice, conviene que se conserve en el sistema mexicano la circunstancia de que el poder legislativo y el poder ejecutivo se elijan el mismo día. Ustedes saben que coincide la elección de diputados federales, de senadores de la república y de presidente de la república. Todo se hace el primer domingo de julio. Bueno, él dice "Este es un valor, porque el pueblo está votando por todo un conjunto y por toda una serie de programas". Para lograr estos dos propósitos, el Presidente de la República proponía que para conservar idéntica la fecha de elección para los dos poderes, que se alargara el tiempo de mandato de los actuales diputados y de los actuales senadores, que duraran en funciones un poco más, en lugar de salir el último de agosto, que salieran hasta el último de octubre.

Esta iniciativa la tomó el poder legislativo y para contradecir a los que dicen que el poder legislativo está siendo siempre incondicional del ejecutivo y que nomás sirve para aprobar lo que el presidente manda -que es una gran mentira, poco analizada, y que el legislativo y los partidos políticos, sobre todo el nuestro, no han sabido combatir-, desde 1982 las cámaras estudian esta iniciativa y duran 82, 83, 84 y hasta 1985 la aprueban pero muy cambiada. La ley que sale no es la iniciativa que entró. Claro, no se pelearon con el presidente, pero enriquecieron la iniciativa. El partido sostiene el principio de colaboración en la función del trabajo; el poder es uno que se ejerce a través de tres instancias: legislativo, ejecutivo y judicial, pero no hay una riña entre poderes, ni tiene por qué haberla.

¿Cuál fue el resultado de esta iniciativa? Muy hábilmente el poder legislativo la aprovecha para muchas cosas: primero, para acortar ese tiempo, el que transcurre entre la elección y la toma de posesión del presidente, pero siguiendo, ¡qué curioso!, así es el avance de la humanidad: avanza no en línea recta ascendente, no hay nada más hacia arriba, avanza en lo general, o a veces se vuelve a lo que ya se tenía. Así como en un tirabuzón. Así avanza la humanidad. Así es el progreso, sobre todo el progreso político y social. Y volvemos en el congreso mexicano a lo que ya tenía, a dos periodos de sesiones al año. Porque ustedes saben que hasta el presente el congreso mexicano dura del 1º de septiembre al último de diciembre en sesiones, y a partir del último de diciembre, ocho meses en receso. Esto para un país es muy serio, es la ausencia del poder legislativo en la vida política nacional. Sólo queda la Comisión Permanente que se integra por 29 legisladores. Y entonces el congreso mexicano dice "No, de aquí en adelante nosotros vamos a sesionar del 1º de noviembre al último de diciembre, y del 15 de abril al 15 de julio".

Es importante que sesione en dos ocasiones y en lugar de cuatro meses de sesiones, va a tener cinco. Pero lo más importante, políticamente hablando, para la presidencia del congreso, es que ella no tendrá un receso de ocho meses, sino de tres y medio en cada caso; lo que se acorta verdaderamente son los periodos de receso. Y fíjense ustedes, todavía en 1988 las elecciones van a ser el primer domingo de julio, pero después de 1988 las elecciones van a ser el primer miércoles de septiembre y nada más va a transcurrir septiembre, octubre y noviembre para que tome posesión el nuevo presidente; en lugar de cinco se reduce a tres los meses.

El informe presidencial que estamos acostumbrados a oír el 1º de septiembre, a partir del 89 lo vamos a oír el 1º de noviembre, día en que se reúne el congreso y va a sesionar para ocuparse, fundamentalmente, de aspectos de presupuestos y leyes fiscales. Noviembre y diciembre, el congreso en periodos fijos y luego va un receso de tres meses y medio que se tendrá que utilizar para analizar las iniciativas que hayan entrado en noviembre y diciembre -que se desearía fuesen todas-, y volverá a sesionar del 15 de abril al 15 de julio, tres meses más y otro receso de tres meses y medio.

Este es un cambio importante que hay que analizar a profundidad para que vean las consecuencias y las razones por las que se hizo. Pero no sólo eso. Como el congreso sintió un profundo respeto por uno de los principios más caros del pueblo mexicano -que nos causó verdaderos traumas-, el principio de la no reelección dijo "no, por decreto, nadie puede durar más tiempo en el cargo". "Nosotros fuimos elegidos para terminar tal día, el 31 de agosto de 1988 y ni un minuto más debemos durar en el cargo; no se vale reformar la Constitución para que nosotros mismos duremos dos meses más en el cargo". "Esto, si lo hacemos, lesiona el principio de no reelección y es un precedente muy malo, porque qué puede impedir en un momento dado, que a alguien se le ocurra reformar la Constitución no para durar dos meses más, sino seis años más. No debemos lesionar este principio, así sea en un minuto.". "Lo que vamos a hacer es que los diputados que se elijan a la LIV Legislatura, la que sigue, esos son los que van a durar los dos meses más; en lugar de salir el 31 de agosto, van a salir el último de octubre; pero se lo vamos a informar a los electores". Y por única vez, los diputados que se elegirán el primer domingo de julio de 1988 van a duran en funciones tres años, dos meses, y los senadores (durarán) seis años, dos meses. Los senadores integrantes de la LIV y LV legislaturas.

Esa fue la reforma que el congreso mexicano hizo en 1985, con una participación extraordinaria del Senado de la República. Si a alguien le interesa profundizar en ese tema, de una manera no tan elemental como yo lo estoy exponiendo por necesidades de tiempo, le dejaré al Presidente del Comité Municipal -que tan gentilmente me ha invitado a esta plática-, el dictamen elaborado en el Senado de la República, que contiene esas reformas.

Pero además, no acabaron ahí las reformas constitucionales. En 1986 se hacen otras reformas muy importantes. Había un problema, que los partidos políticos se quejan mucho; dicen "¡qué barbaridad, el PRI tiene 300 diputados y nosotros 100!, y 300 es el 75% de 400, y 100 es el 25% de 400". Sucede que el PRI en la vida moderna, con esta crisis que nos afecta, que ha afectado a muchos, ya no saca en toda la república el 75% de los votos, saca menos del 75% en toda la república; "y nosotros, todos los partidos minoritarios en conjunto, sacamos más del 25% de los votos que se emiten"; "entones hay una sobre representación, el PRI está representando de más y nosotros estamos representados de menos. Ustedes tienen el 75% de la cámara y a lo mejor nomás tuvieron el 70% de los votos, tienen 5% de más, y nosotros tenemos el 25% y tuvimos el 30% de los votos". Eso no está bien en un sistema democrático.

Nosotros pensamos, tienen la razón. Nosotros conservamos el poder por voluntad de la mayoría del pueblo mexicano; y se establece una nueva reforma para romper otra injusticia. Ustedes saben que hasta en broma a los candidatos de representación proporcional del PRI les empezaron a decir "nacidos para perder", y nadie quería ser candidato del PRI de representación proporcional porque decían "Si no tenemos chanza, nomás nos llaman de relleno, andamos ahí en giras y ya sabemos que no va a ser nadie diputado de nosotros".

Para corregir este defecto de la reforma de 1977, se modifica la Constitución y se establece una nueva manera de integrar la Cámara de Diputados. A partir de 1988 la Cámara de Diputados se va a integrar de otro modo, se va a integrar por 500 diputados. Esto ha sido muy criticado. "100 diputados más, en este momento en que gasta tanto el Estado", "¿cómo es posible que vayan a pagar 100 diputados más?" Y qué bueno que todos dijeran 100 diputados más, pero hay unos que dicen "100 flojos más que van a estar ahí sentados sin hacer nada y ganando esos sueldazos".

Bueno, estas son distintas maneras de concebir la vida cívica y política de un pueblo; si alguien piensa que los gastos que se hacen para profundizar un sistema democrático son inútiles, entonces hay que quitar la Cámara de Diputados para ahorrar, hay que quitarla. Pero históricamente se ha probado que aquellos países en donde no existe el congreso son dictaduras; que la diferencia principal, esencial, entre una dictadura y un régimen democrático, con defectos, pero que está en camino de perfeccionamiento, es precisamente la existencia del congreso.

Un congreso puede no servir, pero el siguiente puede sí servir, y estando establecido se está considerando un régimen de organización democrático. Algunos diputados pueden ser muy malos, otros pueden ser buenos. Lo que pasa es que a veces no profundizamos en estos temas y siempre andamos preguntándonos ¿para qué sirven los diputados?

Yo siempre he dicho que los diputados hacen una función que la gente luego no comprende o que se acostumbra a ella. Los diputados hacen leyes como tarea principal. Fíjense qué importante. Nunca se ha pensado en eso, y a mí me gusta poner ejemplos. Yo les digo: ¿por qué nunca piensan en el aire que respiramos? ¡Ah!, no, pues estamos acostumbrados, respiramos y ni lo notamos. ¡Ah!, pero que no se enrarezca el aire, que no escape el gas y empiece a oler mal, porque entonces, "híjole, qué feo huele", entonces sí notamos el aire. Mientras el aire está puro y está bien nadie nota, nadie reflexiona. Así pasa con la ley, mientras la ley es buena, mientras la ley nos garantiza algunas cosas elementales para el ser humano, ni quién la note. Estamos acostumbrados a ella. Hablamos de salarios mínimos, hablamos de jornada mínima, hablamos de extensión de la propiedad, hablamos de que yo tengo derecho a la justicia. Eso no quiere decir que en todos los casos se cumpla, porque la ley, por su propia naturaleza, se viola por lo seres humanos. Pero la ley existe y es buena, y luchamos por que se aplique, y a veces nos frustramos. Pero ahí está y ya no la notamos, porque ahí está.

Yo acabo de venir de unas pláticas a las que me hicieron favor de invitarme a la Universidad de Costa Rica, en Centroamérica, y vengo asombrado. ¿Saben ustedes que allá no hay derecho de huelga? ¿Saben ustedes que en Costa Rica se está haciendo juicio penal a 33 obreros que se fueron a una huelga? Y nosotros eso lo vivimos ya como una manera natural. ¡Ah!, pues para eso

sirven los diputados, para conservar eso en lo que pocas veces pensamos, eso que rara vez valoramos.

Y sirven para algo más. Para en poco o mucho, frenar al poder ejecutivo. El régimen democrático desde que se idea, se dice debe haber tres poderes: uno que realice los actos de administración y que administre los dineros, que haga las obras; otro que haga la ley y controle a este poder y otro que aplique la ley. Porque si las tres funciones fundamentales del Estado se juntan en una sola mano, en un solo órgano, eso es tiranía, eso es dictadura. Y en cambio si se divide el trabajo, si se dividen las funciones, eso es democracia. Por eso también -lo digo ante priistas, yo soy priista, quiero que mi partido gane en todas las elecciones, lucho por eso. He sido candidato de mi partido en varias ocasiones. Pero soy mexicano-, por eso es bueno también que en las cámaras esté la oposición, porque a veces abusamos, y a veces un gobernante abusivo manda nomás a sus cuates a ocupar cargos sin ningún merecimiento y la gente se desespera. ¿Pero cómo es posible que manden de candidato a este señor? Nuestras bases, ustedes, ¿cuántas veces han pensado eso?, ¿cuántas veces lo han dicho? En eso consiste que nuestro partido se modernice, porque si nuestro partido ve que hay una oposición presente, nuestro partido se mejora y dice "Ah, no, aquí necesito tener cuidado, necesito escoger un candidato que le gane la elección a aquél, y una persona que de veras tenga arraigo y que deveras gane".

No siempre es perfecto, todavía tenemos problemas, pero vamos avanzando. Los avances sociales, si son violentos, son muy dolorosos para la gente más humilde; si son pausados y tranquilos son positivos para todo mundo.

Pues muy bien, la siguiente Cámara de Diputados -perdón por toda esta digresión que he hecho; perdón que luego, a veces, me apasiono, yo soy político-, se va a integrar con 500 diputados, 200 de ellos electos mediante el sistema de representación proporcional en cinco circunscripciones plurinominales. El país se va a dividir en cinco zonas geográficas y de cada zona geográfica van a salir 40 diputados de representación proporcional; y 300 diputados electos en distritos uninominales, ¡ah!, pero con una variante. Hay muchas variantes en esta nueva integración.

El PRI va a tener posibilidad de entrar a las diputaciones de representación proporcional, como todos los partidos políticos participa en los dos tipos de elecciones. En los 300 distritos, el que ganó, ganó, como en los gallos, o sea que, el que saque más votos gana, ahí no hay pierde. En las 200 de representación proporcional, cada partido político debe tener el número de diputados que corresponda al porcentaje de votación. Voy a poner un ejemplo tratando de ser claro. Vamos a suponer que en todo el país se emitieron 10 millones de votos, y que de esos 10 millones, el PRI saca seis millones, el 60%. Eso quiere decir que, sacando seis millones de votos, el PRI ganó los 300 distritos electorales. Si eso ocurre, el PRI ya no tiene derecho a ningún diputado de representación proporcional ¿Porqué?, porque los 300 distritos electorales, equivalen al 60% de los 500 diputados, y sí nomás sacó el 60% de los votos (y se le dan di-

putados de representación proporcional), va a seguir sobre representado. Esto puede ocurrir porque la población en cada distrito electoral es muy distinta.

Pero vamos a suponer que el PRI saca el 60% de votos y sólo gana 250 distritos electorales. Puede ocurrir también. En ese momento el PRI tendrá 250 diputados de mayoría relativa, esto es el 50% de los 500 y, mediante la representación proporcional, tendrá derecho a otro 10% de diputados, a otro 10% a fin de que tenga el 60% de diputados en la cámara porque sacó el 60% de los votos. Cada partido político tendrá el número de diputados, que el porcentaje total de la cámara equivalga al porcentaje de votación que sacó.

Vamos a suponer ahora, un partido minoritario, el PAN; vamos a suponer que el PAN saca en todo el país el 20% de los votos. Le estoy dando demasiados, pero vamos a suponer que sacó el 20% de los votos. En diputados ¿a cuánto equivale? ¿Cuál es el 20% de 500? 100. 100, pero quiero suponer que, al sacar el 20% de los votos, el PAN ganó 30 distritos electorales -confío en que no sea Cuernavaca uno de ellos-, que ganó 30 distritos electorales, -de ustedes depende, además- que ganó 30 distritos electorales. Como ganó 30 nada más, le faltan 70 diputados para tener los 100 a los que tenga derecho. Se le van a reconocer los 30 que ganó y se le van a dar 70 de representación proporcional. Tendrá 100. Eso es el mismo porcentaje del total de la cámara que el porcentaje de votos que obtuvo, y así cada partido.

Pero para tener derecho a esta participación, los partidos necesitan cumplir dos requisitos: primer requisito muy importante, que participen en la tercera parte de los distritos electorales uninominales con candidatos. Ustedes saben que muchos partidos que dicen que son partidos políticos, no son nada, nada más son purito cuento, tienen presencia en la Ciudad de México, porque hacen escándalo, pero eso sí, no tienen presencia en ningún otro lado. Yo me recuerdo de un caso muy curioso donde algún partido, no voy a dar su nombre, pero si quieren hasta lo doy, creo que se llama PRD, estaba diciendo: "en Aguascalientes hubo un fraude electoral". Y nosotros, que apoyamos al pueblo, que vamos a ver los resultados de Aguascalientes -esto es histórico- y tienen tres votos en todo Aguascalientes.

La verdad es que en este país hay un partido político nacional; otro que está presente en muchos lugares, aunque no en toda la nación -no está presente en el sureste, en Tabasco, en Quintana Roo casi no existe-, que es el PAN. Los otros son regionales: el PDM en San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco; el PRT, creo que ahora tiene alguna fuerza en Baja California, y desde luego en el Distrito Federal en donde todos están presentes. En realidad, son regionales. Bueno, pero esto es una digresión partidaria. Esos partidos tendrán entonces la representación que corresponde a su fuerza real, no pueden tener más.

Pero también necesitan sacar por lo menos el 1.5% de los votos en todo el país. Porque un partido que no saca por lo menos el 1.5% de los votos, no tiene ninguna fuerza real, no representa a nadie, por escandalosos que sean. Estos son los dos requisitos que se establecen entonces, en la Constitución:

que participen por lo menos en 100 distritos y que obtengan por lo menos una votación del 1.5%. Obteniendo esa votación, tendrán derecho a integrar la Cámara de Diputados.

Hay otro cambio importante: los senadores, los que se van a elegir en 1988, uno va a durar seis años, dos meses en el cargo, y otro va a durar nada más tres años, dos meses. El que aparezca en la primera fórmula, o sea, el de arriba, ese va a durar seis años, dos meses, y el de abajo, el de la segunda fórmula, va a durar tres años, dos meses. ¿Por qué? Porque se reformó otro artículo constitucional que señala que el senado se integrará por mitad cada tres años, pero que los senadores durarán en funciones seis años, y que sólo por esta ocasión habrá un senador que dure seis años -pero ya vimos la otra reforma en la que se alargaba el periodo en dos meses, lo que les platiqué de 1985-, y otro que dure tres años, dos meses; así va a quedar.

Y qué curioso, con esto también estamos volviendo a lo que habían previsto nuestros constituyentes de 1824, de 1857 y de 1917, porque precisamente cuando nació nuestro sistema, el congreso tenía dos periodos de sesiones en el año y se integraba el senado por mitad cada dos años, porque entonces los senadores duraban en funciones sólo cuatro años. Estas son las vueltas que yo digo que da la historia en esa espiral, y a veces conviene retomar nuestro pasado para avanzar otro poquito. Así se va a elegir el senado.

Y ustedes dirán "¿qué otras ventajas tendrá esta integración de la representación popular?" Pues nada más, ni nada menos que ningún partido político, saque la votación que saque, podrá tener más del 70% de los diputados. Es lo que los teóricos empiezan a llamar el candado hacia arriba. Si un partido político saca el 85% de los votos emitidos no puede tener más que 350 diputados. Ese es el candado hacia arriba para permitir la participación de "esa disidencia". Y yo insisto -eso lo dice un poco, a veces, nuestro partido, pero estas son pláticas de capacitación política- la disidencia en la democracia es buena si es de buena fe, si es propositiva, si se evita la violencia. Se dejan 150 diputados siempre y por lo menos, para que estén representadas las minorías, minorías significativas, las minorías importantes, las minorías que no merecen nuestro desprecio, sino nuestra comprensión, y de las que esperamos ser comprendidos; y ¿por qué no?, a lo mejor en un tiempo, no sé cuántos años, ojalá que muchos, nosotros lleguemos a ser una minoría de esas. Esa es la participación y eso es positivo para nuestro partido.

Pero también tenemos un candado hacia abajo. México no desea vivir en esos sistemas tan variables, tan anárquicos, tan poco fijos y que tanto lesionan y donde gobiernan los congresos y se cambia de gobierno cada tres meses -así ha vivido Francia, así vive Italia actualmente, ustedes leen los periódicos "cayó el gobierno en Italia, se va a integrar un nuevo gabinete", y a los seis meses, "miren, cayó el gobierno de Italia, se va a integrar un nuevo gabinete"-. Para nosotros eso no es deseable. Para nosotros no es deseable porque tenemos una institución presidencial que a veces poco se explica y poco se comprende.

La institución presidencial, no el presidente de la república, llámese como se llame, la institución presidencial para nosotros ha sido factor de unidad, para nosotros es vigor nacional.

Si no tuviéramos esa fortaleza en nuestro sistema que ha soportado tantas cosas, si no tuviéramos esa estructura que gira alrededor de la institución presidencial -porque vivimos en un régimen presidencialista-, quién sabe qué hubieran hecho con nosotros nuestros primos, los güeros. Si así nos han pegado y nos siguen pegando, imaginen ustedes con instituciones políticas débiles, pues ya nos hubieran desbaratado. La inestabilidad en México le interesa mucho a los enemigos de México. Entonces, la institución presidencial se explica así, de esa manera.

Entonces, el candado hacia abajo en la cámara… (Ilegible…) el partido que haya ganado más distritos tendrá derecho a tener 251 diputados[13]. Siempre el partido que haya ganado más distritos electorales uninominales tendrá la mayoría de la cámara. Este es un principio que ha sido muy discutido, muy criticado. La oposición que lucha en la democracia, pero luego a veces impone la dictadura, critica mucho eso. Aquí hay una mayoría obligada en la cámara, una mayoría forzosa. Sí, porque creemos en la necesidad de que exista una mayoría que tome las decisiones; porque creemos en la necesidad de que exista una mayoría que le dé estabilidad al congreso, que le dé fijeza, que le dé eficiencia.

Si algún partido sacara el mismo número de triunfos en distritos uninominales (que otro partido), la mayoría -estas 251 diputaciones-, la tendría el que hubiera ganado más votos. Ya sería muy difícil que se diera un empate en votos; eso solamente en teoría es posible. En la realidad es sumamente difícil.

---

[13] Nota de las compiladoras. En el siguiente capítulo, el Lic. Montes consigna con amplitud el fundamento legal de esas disposiciones. Lo transcribimos pues la versión taquigráfica del presente capítulo adolece de algunas secciones poco legibles. "…se establece en este inciso que si ningún partido político obtiene el 51% de la votación nacional efectiva, y si ninguno obtiene constancia de mayoría relativa equivalente a la mitad más uno de los miembros de la cámara, aquel partido que haya obtenido más constancias de mayoría relativa, tendrá derecho a que se le asignen diputados electos mediante el sistema de representación proporcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta de la cámara, esto es un máximo de 251 diputados.
El inciso D de esta fracción IV del artículo 54, desarrolla un poco más el contenido del inciso anterior y previene un supuesto que, si bien es de difícil realización, pretende preservar también el sistema mixto de dominante mayoría y representación proporcional minoritaria, y las ventajas y valores a los que nos hemos referido. Previene que si ningún partido ha obtenido el 51% de la votación nacional efectiva, y ninguno alcanza constancias de mayoría relativa equivalente a la mitad más uno del total de la cámara, pero hay 2 o más partidos que tengan el mismo número de constancias de mayoría relativa, la mayoría absoluta de la cámara se decidirá y se otorgará a aquel partido que haya alcanzado la mayor votación a nivel nacional en la elección de diputados por mayoría relativa".

Esto es lo esencial de la renovación político electoral. Estos son, a mi juicio, los cambios más importantes en el Poder Legislativo Federal -con reflejo en los poderes locales, legislativos- que viviremos a partir de 1988.

No sé, ojalá haya logrado dejar con claridad -seguramente he cometido muchos errores en la mente de ustedes- estos cambios que a mi juicio son positivos y que significan un avance en la vida democrática de México.

Les agradezco su atención. Y con gusto contestaré cualquier pregunta que deseen hacerme. Muchas gracias.

En el mismo caso que con las reformas anteriores -para que si lo quieren discutir, si a alguien le interesa profundizar-, le entrego también al Presidente del Comité Municipal el dictamen de estas segundas reformas constitucionales, que trae hasta ejemplos y creo que está muy claro.

Gracias.

ANÁLISIS DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 52, 53 -2º PÁRRAFO-, 54 -1er PÁRRAFO Y FRACCIONES II, III Y IV-, 56, 60 Y 77 -FRACCIÓN IV-, Y 18 TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS[14]

Conferencia con abogados
Salamanca, Gto. 1987

Mis primeras palabras son de agradecimiento a la Lic. Margarita Gómez por haberme hecho la distinción de invitarme a conversar con tan distinguido grupo de abogadas salmantinas.

Será muy poco seguramente lo que yo pueda enseñar y mucho lo que de ustedes aprenderé, pues el contacto de quienes en la vida diaria ejercen la profesión de abogados resulta fructífero y estimulante.

El ejercicio de la profesión de abogados no se agota con la participación técnica de estos profesionales en negocios judiciales contenciosos singulares y concretos. En mi opinión, es mucho más que eso. El abogado tiene una responsabilidad social en su comunidad, mayor que la sola de apoderado de partes, de representante de intereses particulares. El abogado es, debe ser, un consejero social y para cumplir esta función, tiene necesidad, obligación de informarse responsablemente de las inquietudes de su medio, de su ciudad, de su estado y de su país y, desde luego, conocer con oportunidad la estructura jurídica del estado, estructura que tanto influye en los cambios sociales, que a veces los ayuda y en ocasiones los detiene.

Entre otras cosas el abogado, creo, es creador de opinión, opinante y receptor de opiniones.

Sirvan estas ideas de justificación del tema sobre el que hoy conversaremos. Se trata de analizar las reformas a los artículos 52, 53, 2º párrafo, 54, 1er párrafo y fracciones II, III y IV, 56, 60 y 77, fracción IV y décimo octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformas que ocurrieron durante el último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, celebrado en 1986, y que fueron ya aprobadas por el Constituyente Permanente y debidamente promulgadas. Estas reformas tienen íntima vinculación con otras ocurridas en anterior periodo ordinario a los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política.

El Presidente de la República, iniciador de las reformas a los artículos 52 y siguientes mencionados en la exposición de motivos de esta iniciativa, princi-

[14] Oficial Mayor de la H. Cámara de Senadores de 1985 a 1987.

pia diciendo: "Iniciamos hoy un nuevo avance en la marcha del pueblo mexicano por la democracia. La democracia es el hilo conductor de la historia del pueblo de México. Constituye la idea política central en la que se expresa la lucha por la independencia nacional. Los hombres de la Independencia concibieron una sociedad libre, conformada por hombres iguales y gobernada por ellos; concibieron, demandaron y conquistaron un régimen democrático. La democracia es el valor por el que lucharon los hombres del Liberalismo al reafirmar el ideal de una república liberal, independiente, regida por el derecho, capaz de acoger y realizar las vocaciones de ciudadanos libres, iguales, prósperos, protegidos por la ley. La democracia es la bandera que inspira la lucha de los hombres de la Revolución por el sufragio efectivo, la no reelección, la libertad, la justicia social y el desarrollo independiente".

"La democracia, valor consagrado en nuestra Constitución, encarnado en nuestras instituciones, reiterado en nuestros planes y programas de desarrollo y presente en nuestra acción cotidiana, es el sistema de vida que ha alentado el progreso del México contemporáneo".

"La democracia sintetiza hoy el consenso entre los mexicanos. Su preservación, su perfeccionamiento impulsa la construcción del México renovado que nos hemos propuesto alcanzar".

"Nuestras instituciones son legítimas porque dimanan de la voluntad histórica del pueblo y están apoyadas en un mandato popular. Al mismo tiempo, la democracia que nos rige ha acogido la expresión de todas las voces, ha permitido el juego de los contrarios y ha alcanzado sucesivas metas, renovado los puntos de partida, las magnitudes y directrices del mandato del pueblo".

Este inciso de la exposición de motivos nos obliga a ocuparnos, de manera previa al análisis particular de las reformas, del concepto de democracia, y que ustedes y no yo formulen un juicio final al terminar esta conversación, de hasta dónde, en qué grado, las reformas que analizaremos constituyen para México un avance democrático, en cuyo caso serán reformas positivas.

Democracia.

Nunca se ha dado una definición clara de qué entendemos por democracia. La palabra democracia ofrece una variada gama de significaciones, que dependen de las convicciones políticas e ideológicas de la persona que la emplea.

Etimológicamente, lo sabemos, democracia significa: demos-pueblo, Kratos-poder o autoridad.

Para Aristóteles existió una forma pura y una forma impura de la democracia. La forma pura, se da cuando el gobierno reside en la mayoría de la colectividad y este poder favorece a todos por igual; y la forma impura, o demagogia, se da cuando el gobierno reside en la mayoría de la colectividad y se aplica tan sólo en servicio de los desposeídos.

Lincoln, en su famoso discurso de Gettysburg, el 19 de noviembre de 1863, habló de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

En las teorías modernas democracia significa sistema de gobierno que se caracteriza por la intervención de las mayorías de los ciudadanos en la organización del poder público. Es un régimen político caracterizado por la participación de los ciudadanos en la organización del poder público y en su ejercicio.

En una acepción generalizada, es el sistema en el que el pueblo en su conjunto ejerce la soberanía y, en nombre de la misma, elige a sus gobernantes.

Es una forma de gobierno que reconoce a los hombres una igualdad esencial y también una igualdad de oportunidades para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y que cuenta con el pueblo para la estructuración del poder.

Una de las ideas básicas de la democracia es el asegurar a la persona su esfera de libertad. Para ello se estructura el orden constitucional y se distribuye el poder. Democracia no es el gobierno de todos, sino la colectividad organizada representativamente y el ejercicio restrictivo de la autoridad, de acuerdo con los cánones constitucionales.

La noción de igualdad que contiene esta acepción de democracia, a nuestro juicio, tiene cinco ideas que los teóricos de la democracia combinan de diversos modos: la idea de la igualdad política, la idea de la igualdad ante la ley, la idea de la igualdad de oportunidades, la igualdad económica y la igualdad social.

Si analizamos estos conceptos, notamos que un modelo de sus elementos fundamentales sería: 1.- participación del ciudadano en las decisiones políticas, 2.- cierto nivel de igualdad entre los ciudadanos, 3.- un determinado grado de libertad concedido a los ciudadanos y exigido por ellos, 4.- un sistema representativo, 5.- un sistema electoral basado en la mayoría.

Una hipótesis de trabajo podría consistir en expresar que un régimen democrático, de tipo occidental, es aquel que realmente asegura a la persona sus garantías individuales, le proporciona un mínimo de seguridad económica, y no concentra el poder en una sola persona o en un grupo, sino que consagra los principios de la elección popular, de la separación de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, así como el del pluralismo ideológico.

Hoy en día los rasgos esenciales de la democracia liberal (también calificada como clásica, occidental, política y, desde el punto de vista marxista, como burguesa) -indirecta, semidirecta y, excepcionalmente, directa- son los siguientes: elección de los gobernantes por los gobernados, separación o colaboración de poderes, garantía de los derechos individuales y de las libertades fundamentales, pluripartidismo y aparición -después de la Primera Guerra Mundial- de los derechos sociales, y de los derechos económicos, después de la Segunda Guerra Mundial.

Todos sabemos que por democracia directa, cada día menos realizable, se entiende aquella en que los ciudadanos toman parte en las deliberaciones y votaciones; toda la población de un país tiene parte en el debate y aprobación de las leyes.

En la democracia representativa los ciudadanos eligen representantes que tendrán la misión de debatir y aprobar las leyes.

La democracia semidirecta acude, entre otros, a dos procedimientos que permiten a los ciudadanos expresar su opinión sobre los problemas a que están sometidos: la iniciativa popular, que tiende a provocar una decisión de los gobernantes, y el referéndum, que tiende a ratificarla o a rechazarla.

Analicemos ahora el detalle de las reformas constitucionales, parte central de nuestra plática. Principiemos por las relativas a los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Me he permitido repartir entre ustedes, hasta donde alcancen, unos cuadros comparativos, en donde están los textos de estos artículos, anteriores a la reforma y los textos vigentes. En ese mismo cuadro encontrarán ustedes también los textos de los otros artículos: 52, 53, 54, 56, 60 y 77. Si leemos los textos es fácil comprender el alcance de estas reformas, aunque las motivaciones de ellas no se expresan en el frío texto legal.

Se reforman, decíamos, primero los artículos 65, 66 y 69 y se agregan dos artículos transitorios a la Constitución: el décimo séptimo y el décimo octavo. Con ellos se dan los siguientes cambios concretos:

1.- El congreso, en lugar de reunirse en un solo periodo de sesiones ordinarias que principiaba el 1º de septiembre de cada año, se reunirá a partir de 1989 en dos periodos de sesiones ordinarias, uno que principiará el 1º de noviembre y otro que principiará el 15 de abril. El primer periodo durará, cuando mucho, hasta el 31 de diciembre y el segundo, hasta el 15 de julio, pudiendo terminarse antes, pero no después de esas fechas.

Se conserva el mandato de que si las cámaras no se ponen de acuerdo para terminar las sesiones desde las fechas indicadas, resolverá el presidente de la república.

2.- El presidente de la república deberá asistir a presentar por escrito el informe del estado que guarda la administración pública en la apertura del primer periodo de sesiones y, en consecuencia, el informe presidencial, a partir de 1989, ya no se rendirá el día 1º de septiembre, sino el día 1º de noviembre de cada año.

Esta es la reforma que contienen los artículos sustantivos; pero ¿por qué se hizo esta reforma que a muchos puede parecer intrascendente? En nuestro país se da un fenómeno que es excepcional en los países latinos y yo diría en países del mundo, transcurre un lapso demasiado largo entre el momento en que se elige el Poder Ejecutivo Federal y el momento en que el mismo toma posesión de su mandato. Mientras que las elecciones se celebran el primer domingo de julio, el presidente toma posesión en diciembre, el 1º de diciembre del mismo año; hay cinco meses en los que existen dos presidentes de la república, uno en funciones y otro, electo.

Aunque jurídicamente no se da ningún problema, política y fácticamente debilita este periodo el funcionamiento de la administración pública, y no lo

estoy inventando yo; estas reformas se inician por el presidente de la república, y expresa en ellas con toda claridad, señala, que los funcionarios salientes dejan de tomar determinaciones porque no saben hasta cuándo podrán ser continuadas por los entrantes; señala, además, que se dilata la ejecución de los planes y acciones de gobierno aprobadas por el pueblo en el momento de las elecciones, puesto que les fueron puestas a su consideración durante toda una campaña, y el país ha vivido en múltiples momentos la desorientación, para calificar de alguna manera, que este largo tramo hace que ocurra en toda nuestra sociedad.

Fue la primera intención de esta reforma, acortar este periodo entre la elección y la toma de posesión del presidente de la república, con otra intención más: conservar por razones pragmáticas y por razones de conveniencia, que coincidan los tiempos electorales de los poderes legislativo y ejecutivo federal, que la elección se realice en el mismo momento.

Para ello resultaba indispensable que siquiera por una ocasión, durasen en el ejercicio de su mandato más tiempo los legisladores electos.

El presidente en su iniciativa, que fue presentada en 1982, proponía que en la reforma constitucional, ahora sí que por decreto, se alargase este mandato por dos meses más. El Congreso de la Unión, con extrema sensibilidad política -yo diría que dando un mentís a quienes señalan que en la mayoría de los casos, estas iniciativas no se enriquecen y no se analizan-, entra al análisis de la iniciativa y dura tres años haciéndolo y sólo la aprueba, sumamente modificada, yo diría que enriquecida, en 1985, y no acepta que el mandato de los funcionarios electos se prorrogue por decreto de los mismos funcionarios en el ejercicio de su cargo. Afirma que con ello se lesionaría uno de los principios más sensibles del pueblo mexicano: el principio de no reelección que, se afirma en el dictamen, tiene una consecuencia natural, la de que los funcionarios electos sólo duren en su mandato exactamente el tiempo para el que fueron electos.

Este análisis obliga al congreso a que la reforma no entre en vigor durante el ejercicio de la actual legislatura, y por eso, se agregan a estos artículos sustantivos, el décimo séptimo y el décimo octavo transitorios de la Constitución, no transitorios del decreto. La técnica puede haber sido equivocada, el contenido es lo que nos ocupa en esta plática y se señala en estos artículos, décimo séptimo y décimo octavo transitorios, que los diputados federales que se elijan a la Quincuagésima Cuarta Legislatura durarán en funciones del 1º de septiembre de 1988 hasta el 1º de octubre de 1991, y los senadores durarán en funciones del 1º de septiembre de 1988 hasta el 1º de octubre de 1994.

Por única vez se elegirán diputados que durarán en su cargo tres años y dos meses, y senadores que durarán en su cargo seis años y dos meses. Se preserva, así, al decir del congreso, este principio de no reelección. Pero además, desde 1934, había una demanda planteada por distintos grupos y partidos políticos de la necesidad de que el Congreso de la Unión sesione durante más tiempo,

de la necesidad de que ordene mejor su trabajo legislativo, y de que el periodo de receso no sea tan prolongado. El periodo que cubre la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es de ocho meses continuos. En un país con problemas cada día mayores y con una dinámica de curso impredecible, no es conveniente este largo periodo de receso.

Al aprobarse los dos periodos de sesiones ordinarias, que por lo demás existen en la mayoría de las legislaturas locales, se logra sobre todo, acortar este periodo de receso, e intentar parar un fenómeno que se está dando, que todos vivimos, los que estamos atentos a la noticia: la Comisión Permanente, sin facultades expresas, se está transformando en un pequeño congresito, lo que desnaturaliza la función del Congreso de la Unión, máxime si se considera la participación, siquiera verbal, cada vez más vigorosa, de las distintas fracciones de oposición.

Esta reforma logra establecer dos periodos de sesiones ordinarias, en el primero de los cuales se ordena que el congreso se ocupe de manera fundamental de las leyes fiscales de vigencia anual y en el segundo se ocupe de las otras iniciativas. Con esta aspiración nace en reforma posterior, al aprobarse el Código Federal Electoral, se cambie la fecha de la elección presidencial y en lugar de realizarse, como todavía ocurrirá en 1988, el primer domingo de julio, ahora será, después de 1988 el primer miércoles de septiembre. Automáticamente se acorta también el lapso que transcurre entre el momento de la elección del ejecutivo federal y su toma de posesión.

Estas son las ventajas políticas que, posiblemente, a lo mejor para quien cotidianamente no se ocupe de estos fenómenos, pueden parecer menores. En mi opinión personal y con sinceridad, creo que son muy importantes, porque pienso que es tiempo de que el país empiece a disminuir un poco los poderes jurídicos y de facto y atribuciones políticas que tiene el poder ejecutivo. Por lo menos empecemos paulatinamente, como han sido todos nuestros avances en la historia, a distribuir, a equilibrar mejor estas atribuciones. Esta reforma puede ayudar.

Como en todas las reformas de contenido político, no se puede profetizar con certeza lo que va a ocurrir. Sería demasiada temeridad intentar hacerlo y la misma dinámica social obligará a que se modifiquen estas leyes, como veremos a continuación, antes incluso de que inicien su vigencia.

Cuando se trata de regular un fenómeno tan dinámico como el político, creo que hay que empezar a legislar con una gran dosis de humildad, reconocer que estamos, sin irreflexión y sin imprudencia, de buena fe, experimentando. Toda experimentación es válida, aún a riesgo de su fracaso, siempre que este fracaso no impida continuar experimentando.

Ya hemos dicho que estas reformas son antecedentes de las últimas que acaban de ocurrir, de las que la prensa se ha ocupado mucho, reformas que han sido muy polémicas, reformas que fueron aprobadas exclusivamente por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, con el voto en con-

tra, fenómeno curioso, de todos los legisladores de cualquier otro signo, que olvidándose de diferencias ideológicas de fondo se unen para rechazarlas, reformas de las más debatidas, de las más atacadas y, en mi opinión también, de las más calumniadas.

¿En qué consisten estas reformas de las que se ha hablado mucho y que pocas veces se conocen? A veces parecen muy complejas, a veces parece ocioso ocuparnos de ellas. Yo pienso que es muy importante ocuparse de ellas, por las razones que al principio apuntaba.

El artículo primero de la iniciativa reformadora propone modificaciones a estos artículos, propone reformas a los artículos 52, 53, 2º párrafo, 54, 1er párrafo y fracciones II, III y IV, 56, 60 y 77, fracción IV de nuestra Constitución.

Al aplicarse las reformas ya aprobadas al artículo 52 constitucional, a partir de la siguiente legislatura, la Cámara de Diputados se integrará por 500 diputados, 300 electos según el principio de votación mayoritaria relativa -todos entendemos es al que estamos más acostumbrados, el que saca más votos en un distrito gana, el que saca menos votos pierde- mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. A este sistema estamos menos acostumbrados, pero es muy sencillo, ahí ya no se vota por candidatos, se vota por partido. Cada partido registra su lista de candidatos; el país se va a dividir en un número determinado de circunscripciones que abarcarán varias entidades federativas y el ciudadano votará por el partido que postula esos candidatos, ya no tanto por los candidatos. Según el número de votos que cada partido saque, será el número de curules que obtenga después de establecer un cociente electoral, cuya fórmula luego trataremos de explicar, que es muy sencilla, porque no trata sino de dividir los votos entre el número de curules que se van a asignar. El resultado es un cociente electoral y cada vez que un partido político con sus votos "pague" este cociente, tendrá derecho a un diputado que se escogerá en el orden presentado en su lista.

La primera consecuencia que se derivará de este artículo, es que la integración de la Cámara de Diputados tendrá un aumento de 100 diputados, todos los cuales serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.

Sabemos que al presente, la cámara se integra por 400 diputados, 300 electos según el principio de votación mayoritaria y 100 según el principio de representación proporcional. Aumentar en 100 diputados el número de integrantes de esa cámara significa -y la cifra no fue arbitraria, es resultado de estudios de proyección matemática-, significa posibilitar que todos los partidos políticos nacionales tengan una representación camaral proporcional al número de votos que hayan obtenido en las elecciones; uno de los elementos de la democracia, decíamos, es participación plural; al presente -por los he-

chos de que un partido mayoritario obtiene el triunfo en la generalidad de los 300 distritos uninominales, y porque la cantidad de sufragantes en cada uno de esos distritos es sumamente variable, pues está influida por condiciones no sólo generales, sino muy locales y particulares-, ocurre que este partido tiene una representatividad camaral mayor a su representación electoral, circunstancia que ha preocupado a los partidos minoritarios que aspiran, entre otras razones por ésta, a lograr que se implante un sistema de representación proporcional puro para la integración de la Cámara de Diputados, y no mixto con dominante mayoritaria, como existe al presente, a fin de obtener, dicen, una representatividad concordante con la representación electoral.

Adelantamos que el aumento de 100 diputados, ya lo dijimos, es condición necesaria para que con la división en cinco circunscripciones electorales plurinominales que se propone en el artículo 53, y con las bases generales que, igualmente, se proponen en el artículo 54, se pueda lograr un acercamiento más equilibrado entre la representatividad camaral y la representación electoral, ello en beneficio, fundamentalmente, de los partidos minoritarios, que no obstante serlo, representan por el número de sus sufragantes y por sus tesis ideológicas, segmentos apreciables de una sociedad plural.

El artículo 53 constitucional propone que para los efectos de elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, el territorio nacional se divida siempre de manera fija en cinco circunscripciones electorales plurinominales; no deja, como hasta hace poco tiempo, la decisión de esta división a la Comisión Federal Electoral, que tenía la facultad de dividir al país en hasta cinco circunscripciones, sino que ahora señala el número determinado de cinco, por lo que a futuro sólo toca a la ley reglamentaria determinar la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones, y ya no su número.

Esta propuesta resulta también condición importante para que puedan operar de manera adecuada las bases generales, que para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional se contempla en la reforma del artículo 54.

Artículo 54.- En este artículo se señalan las bases generales a que se sujetará la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales; deja a la ley reglamentaria el señalamiento de las particularidades detalladas. La fracción I de este artículo se conserva como hasta ahora, por lo que todos los partidos políticos nacionales que soliciten el registro de sus listas regionales, deberán acreditar que participan con candidatos de mayoría relativa en por lo menos la tercera parte de los 300 distritos uninominales.

La fracción II empieza por indicar con claridad que sólo les serán atribuidos diputados electos según el principio de representación proporcional, a los partidos políticos nacionales que obtengan por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida por las listas regionales de las cinco circunscripciones

plurinominales y, lógicamente, no tendrán ningún diputado electo mediante este principio de representación proporcional aquellos partidos que no alcancen como mínimo 1.5 %, pero, además, para obtener diputados electos por este principio, los partidos no deben encontrarse -y aquí quizás sea una falla técnica que provoca esta aparente dificultad de comprensión-, no deben encontrarse en ninguno de los supuestos que previenen los incisos A y B de esta fracción.

El inciso A previene que si un partido político nacional obtiene el 51% o más de la votación efectiva, pero obtuvo un número de constancias de mayoría relativa de presuntos diputados equivalente a un porcentaje del total de la cámara, superior o igual al porcentaje de votos, no tendrá derecho a obtener ningún diputado electo según el principio de representación proporcional, pues si lo obtuviera no se lograría el objetivo fundamental de esta reforma, evitar la sobrerrepresentación de los partidos políticos.

El inciso B contiene otros supuestos en que los partidos políticos no tendrán derecho a obtener diputados de representación proporcional; indica que si un partido político ha obtenido menos del 51% de la votación nacional efectiva y su número de constancias de mayoría relativa es igual o mayor a la mitad más uno de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, tampoco obtendrá ningún diputado según el principio de representación proporcional, puesto que si lo obtuviera se impediría acercarse a que los partidos sólo estén representados camaralmente en proporción a la votación que obtuvieron.

La fracción III del artículo 54 principia por establecer que los partidos que cumplan con lo dispuesto en las fracciones I y II de este mismo artículo 54, esto es que hayan obtenido el 1.5 % de la votación y hayan registrado candidatos de mayoría relativa en por lo menos la tercera parte de los distritos uninominales, se les asignarán diputados por el principio de representación proporcional de sus listas regionales, en el número de porcentaje de votos que haya obtenido en cada circunscripción plurinominal. Al señalar esta fracción que les serán asignados diputados de representación proporcional a aquellos partidos que cumplan con lo dispuesto en las fracciones I y II, está indicando que sólo les serán asignados diputados electos mediante la representación proporcional a aquellos partidos que hayan acreditado su participación en la elección de diputados de mayoría relativa en por lo menos la tercera parte de los 300 distritos y hayan obtenido, por lo menos, el 1.5% de la votación emitida y que, además, no se encuentren dentro de los supuestos previstos en las excepciones que señalan los incisos A y B de la fracción II.

Esta misma fracción III remite a la ley reglamentaria en que se determinarán las normas para la aplicación de la fórmula electoral y ordena que la asignación se haga en el orden que tuviesen las listas de candidatos registrados por cada partido.

La fracción IV del artículo 54, consta de cuatro incisos de la A a la D.

En el inciso A, establece que si un partido político obtiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa que haya obtenido representa un porcentaje del total de la cámara, inferior a su porcentaje de votos, tendrá derecho a participación en la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional hasta que su número de curules, obtenidas por ambos principios, sea igual al porcentaje de votos obtenidos en la elección. El cumplimiento de esta base, con claridad, propicia que la representatividad camaral sea igual a la representación electoral de cada partido.

El inciso B señala un tope máximo a la representatividad camaral de cualquier partido, por numerosa que haya sido la votación obtenida. En estricto rigor es lesivo a la mayoría, pues aun suponiendo que la representatividad en votación exceda el 70% de la votación nacional, ningún partido político tendrá una representatividad camaral mayor a este porcentaje del 70% de los 500 diputados; este es el máximo de diputados que puede obtener cualquier partido político, 350, que equivalen exactamente al 70% de la integración total de la cámara. La consecuencia más importante que se establece en este inciso es que preserva el 30% de la integración total de la cámara, un mínimo de 150 diputados, para que sean obtenidos por los partidos políticos minoritarios, a fin de que en ese cuerpo colegiado se logre una representación plural, correspondiente a la pluralidad de nuestra conformación social.

Es en este párrafo en mi opinión, donde el iniciador se preocupa porque quede garantizada constitucionalmente la integración pluripartidista de la Cámara de Diputados, lo que ojalá se traduzca en que siempre las diversas corrientes partidarias y las diferentes tendencias ideológicas reales, que por su pensamiento, sean apoyadas por un número considerable de ciudadanos, logren voz y participación dentro del Poder Legislativo Federal.

El inciso C de esta fracción IV preserva -y será impugnado y fue de los que más debate causaron, de los que más atacados fueron- preserva, con valor y claridad, la estabilidad de la cámara porque cree, con razón, que la voluntad de una mayoría, así sea relativa, no debe estar sujeta a la eventualidad de alianzas partidarias, todas ellas minoritarias, que pueden distorsionar esa voluntad de mayoría expresada a través del voto, y preserva, además, la operancia del sistema mixto predominante de mayoría relativa con representación proporcional minoritaria.

La experiencia de ya casi 10 años, a partir de 1977, ha demostrado que es positiva para el funcionamiento correcto y democrático de nuestro sistema político, por ello se establece en este inciso, que si ningún partido político obtiene el 51% de la votación nacional efectiva, y si ninguno obtiene constancia de mayoría relativa equivalente a la mitad más uno de los miembros de la cámara, aquel partido que haya obtenido más constancias de mayoría relativa, tendrá derecho a que se le asignen diputados electos mediante el sistema de

representación proporcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta de la cámara, esto es un máximo de 251 diputados.

El inciso D de esta fracción IV del artículo 54, desarrolla un poco más el contenido del inciso anterior y previene un supuesto que, si bien es de difícil realización, resulta posible; pretende preservar también el sistema mixto de dominante mayoritaria y representación proporcional minoritaria, y las ventajas y valores a los que nos hemos referido. Previene que si ningún partido ha obtenido el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno alcanza constancias de mayoría relativa equivalente a la mitad más uno del total de la cámara, pero hay 2 o más partidos que tengan el mismo número de constancias de mayoría relativa, la mayoría absoluta de la cámara se decidirá y se otorgará a aquel partido que haya alcanzado la mayor votación a nivel nacional en la elección de diputados por mayoría relativa.

Conviene insistir: en todos los casos las reformas se preocupan porque la mayoría del electorado, aunque sea relativa, tenga por lo menos 251 diputados en la cámara; así, repetimos, se preserva el respeto a una voluntad mayoritaria y se preserva nuestro régimen.

Una vez que tengan vigencia y facticidad estas reformas, porque los artículos transitorios difieren su vigencia, se darán los siguientes extremos: la Cámara de Diputados estará integrada por 500 diputados, de esos 500 diputados serán electos 300 mediante el principio de mayoría relativa en distritos uninominales, y 200 serán electos por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales en cinco circunscripciones plurinominales.

Sólo tendrán derecho a participar en la asignación de diputados según el principio de representación proporcional aquellos partidos políticos que: A.- acrediten que participan con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos la tercera parte de los distritos uninominales, y B.- hayan alcanzado por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida en las cinco circunscripciones plurinominales.

Pongamos, si me lo permiten, un ejemplo que aspira a ser clarificador: supongamos que el partido político x obtuvo el 60% de la votación nacional efectiva y con estos votos ganó la totalidad de los 300 distritos electorales uninominales. En consecuencia, obtuvo 300 constancias de mayoría relativa; como las 300 constancias de mayoría relativa representan el 60% de la totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputados que son 500, este partido no tendrá derecho a que se le atribuya ningún diputado electo mediante el principio de representación proporcional.

Supongamos ahora que el partido x obtiene el 60% de la votación nacional efectiva, pero que con este 60% sólo ganó 250 distritos electorales uninominales, por lo que obtuvo 250 constancias de mayoría relativa, que equivalen al 50%, del total de los integrantes, 500, de la Cámara de Diputados. Este par-

tido, en principio, tendrá derecho a que se le atribuyan 50 diputados electos mediante el principio de representación proporcional.

En los dos casos ejemplificados quedarán disponibles 200 curules; en el primero todas eran de representación proporcional, y en el segundo 150 serán de representación proporcional y 50 correspondientes al sistema de mayoría relativa habrán ya sido ganadas por partidos minoritarios; en ambos casos los partidos minoritarios obtendrán las que quedaron disponibles de representación proporcional, precisamente en la proporción de votos que hayan obtenido por sus listas regionales en cada circunscripción plurinominal.

Si ningún partido obtiene el 51% de la votación nominal efectiva, y ninguno tiene 251 diputados o más de mayoría relativa, al que haya obtenido el mayor número de constancias de mayoría relativa se le reconocerán, primero, los diputados de mayoría que haya ganado y, segundo, se le adjudicarán de los 200 electos por representación proporcional, los necesarios para que tenga un mínimo de 251 diputados.

Si dos partidos o más tienen menos del 51% de la votación nacional efectiva y ninguno obtuvo 251 diputados, pero tienen el mismo número de constancias de mayoría, al que tenga el mayor porcentaje de votación se le asignarán tantos diputados de representación proporcional cuantos sean necesarios para lograr un mínimo de 251. En ningún caso y por ningún motivo, independientemente del porcentaje de la votación nacional que obtengan, ningún partido tendrá más de 350 diputados.

Esta es la reforma esencial a mi juicio en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados Federales.

Se reforma también el artículo 56 constitucional. Se propone la conservación en el número de senadores que se elijan por cada estado de la federación y se conservan, además, los dos senadores por el Distrito Federal, pero se modifica la manera en que se renueva esta cámara pues, en lugar de su renovación total cada 6 años, se dispone su renovación por mitad cada 3 años en elección directa. Esto antes de su vigencia provocó ya la reforma del artículo décimo octavo transitorio de la Constitución que habíamos analizado. Se reformó en el sentido de que los senadores que se elijan en 1988, el que vaya en primer lugar de la fórmula durará 6 años, 2 meses en su mandato, y el que vaya en segundo lugar de la fórmula durará 3 años, 2 meses en su mandato y, por única vez, se elegirá un senador de 3 años, 2 meses y después todos durarán 6 años, sólo que electos cada 3 años y la Cámara de Senadores se renovará en un 50% en cada elección.

Vale aclarar que en este artículo la iniciativa recogió una de las conclusiones que dio la consulta popular realizada por el Senado, en la que se analizaron las conveniencias e inconveniencias de facilitar el ingreso de minorías a constituirlo. Sin duda se recordará que esa consulta no se agotó con su tema inicial, sino que derivó a un análisis global de la Constitución, naturaleza, esencia,

facultades y funcionamiento del Senado, y se puso en claro la necesidad de vigorizar el Poder Legislativo Federal a través de la fortificación del Senado.

En nuestra opinión, esta renovación trianual sólo en apariencia es sencilla y sólo muy ligeramente puede ser calificada de simplista; creemos que tiene importancia. Sus consecuencias son que siempre el 50% de los senadores sean legisladores con conocimiento pleno del proceso legislativo y de las prácticas senatoriales; que siempre el 50% de los senadores estén ejercitados en la aplicación de un juicio político sereno y claro, que auxilie en el planteamiento y la solución de los problemas que al Senado competen; que por lo menos cada 3 años -al renovarse la mitad de sus integrantes- el Senado capte inquietudes populares; que en cada legislatura se cuente con mitad de senadores experimentados y mitad de senadores con visión fresca y renovada; que se vuelva para bien al procedimiento clásico para renovación del Senado, de la teoría de nuestro estado federal consignado en el texto constitucional de 1824-1874.

Se facilitará la actualización del Senado, que tendrá conocimiento próximo de mayores reclamos populares; se fortificará la presencia del Senado en la vida política del país, en el momento en que la mitad de sus integrantes acompañarán siempre por tres años a un nuevo Poder Ejecutivo Federal. En las elecciones intermedias, las que no coinciden con la elección del ejecutivo federal, cada vez más se facilitará el acceso de senadores no pertenecientes al partido tradicionalmente mayoritario.

Se reforma el artículo 60 constitucional en relación con la auto calificación de las elecciones por el Colegio Electoral, pero se cambia la integración de éste y vuelve a ser integrado por la totalidad de los presuntos y no solamente por 100 de ellos, y se suprime la posibilidad de que el Poder Judicial Federal intervenga en el proceso clarificador de elecciones.

Se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, sin facultades calificadoras y sólo con facultades de control de la legalidad, Tribunal que para algunos representa una esperanza y otros lo combaten desde su origen, pero que es otra vez un experimento, en mi opinión de buena fe, y que próximamente veremos el resultado de su actuación. Tribunal que tendrá facultades para determinar qué constancias de mayoría se registran y cuáles no, y que está integrado por magistrados propuestos por los diferentes partidos políticos, mediante un proceso específico.

Creo señores, que estas son las principales, si no todas, las reformas constitucionales aprobadas en el último periodo de sesiones ordinarias. Insisto en que en opinión de algunos significa involución de la Reforma Política de 1977; en opinión de otros, significa avance. Lo que es indudable es que corrige algunos vicios de la Reforma de 1977; uno fundamental: ustedes saben que el sistema de representación proporcional es correctivo del sistema de mayoría relativa y aspira a que las minorías tengan participación y voz. En el sistema creado en 1977 se dejaba el resquicio -con lo que se terminaba su naturaleza rectificadora-, de que la misma mayoría pudiese determinar la mayoría inte-

gradora del órgano y la minoría que la iba a vigilar. Recordamos un caso muy claro: cuando un sindicato nacional, el de petroleros, pactó con un partido minoritario -el Socialista de los Trabajadores- ceder su voto plurinominal para apoyar a este partido. Con eso desaparecería el elemento corrector que siempre la representación proporcional trae consigo, el no dejar que una mayoría muy escasa sea la que tome sola las determinaciones, sino dar participación a minorías, puesto que se prestaba a que la misma mayoría indicarse cuál era la mayoría que decidiría y la minoría que la fiscalizara.

Por otra parte, creo que esto también resulta importante, se afirma y se garantiza la participación plural de la totalidad de las corrientes representadas en partidos políticos.

No se me escapa que son reformas polémicas, que a veces se critican hasta por el aumento, para algunos injustificado, del número de diputados en momentos económicamente tan críticos como los presentes. Desde luego la oposición ha criticado acremente porque aspiraba al régimen total de representación proporcional, que ha causado gran anarquía en los países en que se implanta y que, sobre todo, causa una separación inmediata del representante respecto a sus representados.

ANÁLISIS DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 52, 53 -2º PÁRRAFO-, 54 -1er PÁRRAFO Y FRACCIONES II, III Y IV-, 56, 60 Y 77 -FRACCIÓN IV-, Y 18 TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS[15]

Colegio de Abogados
Irapuato, Gto. 1987

Señor Presidente del Colegio de Abogados de Irapuato.
Señores abogados.
Quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento para la directiva del Colegio de Abogados de Irapuato y en forma particular al señor licenciado Agapito Vázquez, presidente de esa directiva, porque me brindan la oportunidad de conversar con los señores licenciados en derecho de esta ciudad y con el resto de los asistentes que me honran con su presencia[16].

…

Sesión de preguntas y respuestas. Versión taquigráfica
Espero su bondad y sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.

Lic. Francisco Javier Arrache: Para solicitarle su opinión con relación a ¿qué tan factible sería que esta reforma que se está implementando en el Senado -de que exista una elección cada tres años-, pudiera llevarse a cabo en municipios en cuanto a los síndicos y regidores, y no se presente que entra el presidente municipal con su planilla desconociendo o procurando cambiar todos los programas que tiene una administración anterior?

Lic. Miguel Montes García: Pienso que las funciones de un ayuntamiento y del cuerpo legislativo son absolutamente distintas, de naturaleza muy diferente, por lo menos en una gran parte, en todo lo administrativo. Todos estamos enterados también que debido a las últimas reformas en 1982, del Artículo 115 constitucional, en la totalidad de los ayuntamientos del país se debe introducir el principio de la representación proporcional. Esto hace que en el ayuntamiento haya representantes -en aquellos municipios en que hay

[15] Oficial Mayor de la H. Cámara de Senadores de 1985 a 1987.
[16] Nota de las compiladoras. La ponencia presentada en esta ocasión, es similar a la que el Lic. Montes García dictó en Salamanca y que se incluye en el capítulo inmediato anterior de este libro. El Lic. Montes realizó sólo algunos ajustes menores para esta conferencia. El texto entonces, no se repite en este capítulo. Sí se incluye la sesión de preguntas y respuestas ocurrida en Irapuato, en versión taquigráfica.

presencia de diversos partidos políticos-, de varios miembros de esos partidos políticos los que por su votación lo ameriten.

No se me escapa que este mandato constitucional ha sido interpretado de dos grandes maneras: en la mayoría de los estados federados se elige una parte del ayuntamiento por el principio de mayoría relativa, y otra parte, dos, tres regidores por el principio de representación proporcional; con lo que se vuelve al vicio de los estancos. Un gran estanco para regidores de mayoría relativa y otro gran estanco de representación proporcional, sin que el partido mayoritario tenga acceso a estos últimos y se cae en el vicio que ya comentábamos.

En otros estados federados Guanajuato entre ellos, el ayuntamiento en su totalidad se elige mediante el principio de representación proporcional.

Me parece peligroso que en el ayuntamiento -que por lo menos por sus funciones de beneficio a una comunidad concreta debe tener un plan de trabajo mínimo de tres años– a medio camino se introdujeran criterios diversos, lo que quizás sólo lo politizase demasiado y lo condujese a anarquías e ineficiencias no deseables. No creo que fuese prudente.

Lic. A. Baeza: Dadas estas reformas que han ampliado la presencia del congreso en la vida política a través de dos periodos ordinarios de sesiones, ¿se justificaría aún la subsistencia de la Comisión Permanente, tendría justificación que esta institución que es poco representativa siga existiendo?

Lic. Montes: Mi respuesta es que es indispensable que continue existiendo la Comisión Permanente y voy a decir porqué. El Congreso de la Unión tiene varios tipos de facultades. Facultades legislativas -que sólo el congreso tiene-; de foro político que sirve para mucho, para sanear, para dar salida a muchas inquietudes que son expresadas institucionalmente en él. Facultades administrativas internas y de relación con los otros poderes que no pueden suspenderse en ningún momento porque se suspendería la presencia del congreso, así fuese por un momento y por lo tanto la presencia de uno de los poderes existentes constitucionalmente, y sus facultades de vigilancia.

La naturaleza de la Comisión Permanente es un órgano representativo del congreso para el cumplimiento fundamentalmente de las atribuciones no legislativas. Todo hace la Comisión Permanente, menos legislar. El fenómeno -de hecho- que se da por su integración plural al reducirse el número de sus integrantes, al presente 29, y con la presencia en él de un representante de la mayoría de los partidos minoritarios hace que éstos… -que por lo demás siempre siendo de oposición es muy fácil en un congreso mantener las tesis más bondadosas, independientemente de su posibilidad real-, que luzca mucho la oposición y esto pone en aparentes aprietos a la Comisión Permanente, aprietos que no deben espantar más de lo debido.

Pero suspenderla haría que desapareciese la presencia del Poder Legislativo Federal. Hay que reducirla a sus verdaderas atribuciones, frenar esa tendencia de que por tener el carácter de legisladores se piense que se tiene atribuciones en todo, olvidándose que las del órgano Comisión Permanente y las del con-

greso mismo, están señaladas en la Constitución. Es frecuente y lo voy a decir de una manera gruesa, que los legisladores se sientan "resolvedores" de todo y que los electores los vean así, cuando esto, sobre todo en nuestro medio deja de ser real; no existe esa posibilidad.

Pero la Comisión Permanente es el enlace de las dos cámaras y quien representa al Poder Legislativo Federal, sin las facultades legislativas. Su desaparición sería en mi opinión, nociva para la vida institucional del país.

Hay una reforma posterior, que el número de integrantes de la Comisión Permanente se aumentará hasta 37 para dar mayor representación plural, pero al mismo tiempo, más vigor también a la representación mayoritaria.

Lic. Gallardo: ¿Porque cerrar las puertas a la representación proporcional …? porque tal parece que no quisieron dar una representación proporcional, una igualdad en cuanto a la representación para evitar que hubiera un estado que tuviera más o menos, pero yo creo que si debía haber también en el senado una representación proporcional.

Lic. Montes: Gracias Licenciado. Sobre el tema que usted toca, es uno que ha preocupado desde hace muchos años a gran parte de la clase política mexicana, de todos los partidos políticos y que tiene múltiples opiniones. Usted expresa una que es respetable, pero quizás debamos pensar un poco en lo que es el Senado y porque nace el Senado. No sólo en México, en todas partes, en aquellos congresos que son bicamerales, el Senado es una cámara estabilizadora. Cuando en el voto de Otero señala sus funciones, se dice con claridad que es la cámara que debe frenar los ímpetus de la otra por su composición más dinámica y quizás hasta imprudente. El Senado donde quiera es una cámara conservadora del sistema -sin darle ningún sentido peyorativo a la palabra conservadora- y curiosamente en muchos países de rancia tradición democrática y de gran prestigio democrático, tienen senadores vitalicios y a veces designados por el rey, por el primer ministro, por el ejecutivo. ¿Qué ocurriría si de una manera temeraria quizás, simplemente se determina que se abra el Senado a una representación proporcional?; parece ser que en principio se desnaturalizaría. Hay distintas opiniones, Carpizo en un sentido, Fix Zamudio en otro, de cuál es la representación de los senadores, si los senadores son representantes nacionales o son representantes de las entidades federativas.

En nuestra historia usted sabe que los senadores eran en principio electos indirectamente. Las cámaras locales señalaban quiénes eran los senadores mexicanos, no el electorado de una manera directa. Cuando se cambia el sistema de elección se conserva, así sea en teoría, el carácter del Senado como representante de la entidad federativa y su carácter de igualdad, son pares. Y su representatividad, la importancia de su representatividad no depende ni de la importancia económica de la entidad, ni de la importancia poblacional de la entidad, ni de su ubicación geográfica, ni de su extensión territorial, sino de que simplemente es una entidad federativa y tienen, todas las entidades -por el hecho de serlas-, una representación paritaria.

Con todas las fórmulas de representación proporcional propuestas en esta consulta que se hizo en toda la república, no se logró superar este problema, conservar una representación paritaria de las entidades federativas en el Senado de la República, porque abrirlo a la representación proporcional -necesariamente por la diversidad poblacional-, haría que algunas entidades tuviesen más senadores que otras, independientemente de porque vía se llega al Senado. Pero, además, pensemos por un momento qué ocurriría con senadores electos mediante el sistema de representación proporcional de partidos minoritarios. ¿No se daría una repetición de los debates que se dan en la Cámara de Diputados en el seno del Senado? Pensemos con serenidad si esta repetición de debates conduciría a algo bueno para el país. Está muy claro y analizando cualquier diario de debates de cámara local o de cámara federal, se ve que no sólo la mayoría obedece a una disciplina partidaria, que es más frecuente que la mayoría falte a esa disciplina partidaria que las minorías. La disciplina partidaria de las minorías es en la generalidad de los casos más estricta que la disciplina partidaria de la mayoría.

¿Hasta dónde conviene una repetición de debates? Sin embargo, creo que no se ha explorado bastante -la representación proporcional muy difícil de implementar en un cuerpo colegiado de tan escaso número -dos senadores por entidad-. En Guanajuato se presentó una tesis muy interesante en esa consulta, la recuerdo perfectamente. Se señalaba que hay entidades políticas en el país -los partidos políticos que en el artículo 41 constitucional se señalan ya como entidades de interés público-, que son emergentes, que ameritarían presencia en ambas cámaras y se proponía en Guanajuato para el efecto de designación de senadores.

Equiparemos para este sólo efecto a un partido político -entidad de interés público- con una entidad federativa y establezcamos lo que ocurrió históricamente en la Cámara de Diputados, "senadores de partido", para que todas las tendencias estén presentes también en el cuerpo senatorial. Se desechaba entonces la representación proporcional, pero emergía la figura histórica probada en la Cámara de Diputados de representantes de "legisladores de partido". Esta idea no prosperó, no prosperó en mucho por falta de análisis y porque los partidos de oposición no tomaron esta consulta con la seriedad que ameritaba y a cambio de la apertura senatorial -que recordemos que ningún sistema se debilita a sí mismo de manera caprichosa- a cambio de la apertura senatorial no ofrecieron nada, ni siquiera respeto.

Y eso nos lleva a una de las mayores carencias en nuestro sistema democrático que, en mi opinión, no sabemos debatir, por la falta de foros adecuados quizás, pero no hemos aprendido los mexicanos a debatir. En realidad, difícilmente sabemos escucharnos, hasta cuando conversamos entre pocos dejamos de oír lo que el interlocutor señala, para de manera anticipada estar pensado ya nuestra respuesta. Y lo vemos con claridad cuando en la oposición encon-

tramos crítica, proposiciones irrealizables y en realidad pocas proposiciones participativas. Esto es un fenómeno además, de los foros políticos.

Yo pienso que esta elección de senadores -en la elección intermedia- posibilitará realmente que muchas entidades…(ilegible). Y pongo un ejemplo pasado: casi creo que en Chihuahua hace poco tiempo el senador que se hubiese electo en la elección intermedia, no hubiera sido del partido mayoritario, puesto que la mayoría de diputados actuales de Chihuahua no son del partido mayoritario; creo que se pierden más de la mitad de los distritos electorales-.

Pero además y aunque parezca fuera de contexto, quiero anticipar un criterio muy personal que he señalado en todos los foros: toda reforma política y ésta lo es, tiene un supuesto sin el cual no existe y ese supuesto es el respeto absoluto a la voluntad ciudadana expresada en el voto. Sin ese supuesto, todas las reformas políticas fracasarán y no existirán, serán teorías más, que nos conduzcan a adquirir ilusiones y luego a desencantarnos.

Si este respeto a la voluntad ciudadana expresada en el voto se da en las elecciones intermedias, no es improbable que en el Senado en muy poco plazo existan senadores pertenecientes y militantes de partidos políticos distintos al tradicionalmente mayoritario en nuestro México.

Lic. Humberto Meza: En el sentido que recuerdo, la Comisión Permanente es un órgano del Congreso de la Unión que debe subsistir no solamente por las razones que usted apuntó, sino también porque debe existir un órgano que pueda convocar a sesiones extraordinarias al congreso; pero mi inquietud es esta: como consecuencia de lo que se afirmó aquí, ¿si debe estudiarse, si deben revisarse y reordenarse las atribuciones de la Comisión Permanente?

Lic. Montes: Apunta usted un tema muy interesante que a mí se me escapó en la amplitud de lo que abarcan las preguntas de ustedes o los temas que proponen.

La Comisión Permanente no es solamente un órgano de enlace, tiene algunas facultades en el receso que son indispensables. ¿Cómo cuáles? Ratificación de los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte, de los magistrados del Poder Judicial del Distrito Federal, de los altos empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fundamentalmente embajadores y cónsules; concesión de licencias a los integrantes del poder legislativo que por múltiples razones las solicitan, concesión de licencias a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, aceptación de la jubilación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ahora -y excepcionalmente una discusión de tipo constitucional sumamente interesante- nombramiento de los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Electoral.

Todas estas atribuciones no pueden quedar en el vacío durante un periodo amplio; tienen que cumplirse para el beneficio de la vida institucional del país, y desde luego, sí creo que es prudente señalar sus atribuciones, -aunque están señaladas en la Constitución- siempre es conveniente revisarlas -la vida cada día nos está planteando nuevos problemas-, pero sobre todo diría yo, limi-

tarlas, porque el hecho no sé si antijurídico o simplemente jurídico, el hecho que se está dando es que la Comisión Permanente -impulsada sobre todo por los miembros de las oposiciones- se mete en todo y no sabe qué hacer, porque además no tiene nada que hacer. Ahora se litiga en la tribuna, se plantean juicios de amparo, se plantean juicios obreros, se plantean juicios civiles, es una tribuna abierta a cualquier tema. Si esto ocurre en el congreso, el congreso llega a la ineficiencia, llega a la anarquía.

En muchos países hay candados y hay controles que por no ser nosotros un régimen parlamentario, no nos hemos atrevido a establecer, porque hemos preferido no limitar la libertad de manifestación -sobre todo de los representantes populares-, a limitarla, y soportar el desorden a riesgo de ineficiencia. Es muy difícil conjugar la libertad de expresión con la seriedad y el funcionamiento eficiente de un órgano. Pero la revisión no sólo de las facultades de la Comisión Permanente, sino de cualquier otro órgano, pues debe ser permanente también.

Lic. Barquin: Tal como usted señala, poco a poco se le está ganando terreno al poder ejecutivo federal.

Lic. Montes: Dicen que, en todos estos temas, más vale ser historiador y no profeta. Yo creo que la pregunta es de más fondo. ¿Hasta dónde conviene a la vida democrática del país? Y aquí voy a hacer otra digresión. Para mí, la democracia no se implanta por decretos. Para mí, la democracia es un resultado final de una cultura política; cuando no se da la cultura política democrática, aunque la norma lo establezca la realidad lo niega. Y para mí la democracia tiene muy distintas formas y por eso señalábamos al principio que, si se conserva este ámbito de libertad individual, este ámbito de igualdad de oportunidades, este ámbito de derechos sociales, de derechos económicos, estamos en un régimen democrático… que ninguno es perfecto de manera absoluta.

Yo creo que la pregunta es ¿hasta dónde conviene que efectivamente avancemos a un régimen parlamentario?, ¿hasta dónde nuestra cultura política nos permite ya, cambiar de un sistema preponderantemente ejecutivo a un sistema preponderantemente parlamentario? No es fácil la respuesta. En países europeos sobre todo, estos regímenes parlamentarios han conducido a la anarquía y en ocasiones a la violencia; ojalá que este no fuese el caso de México.

Es también cierto que sobre todo en la crisis que soportamos estuvo muy bien; el ejecutivo para mí ha sido piedra angular de nuestro desarrollo histórico y piedra que explica nuestra unidad nacional esencial. Sin él no podríamos explicarnos nuestro país. Pero en este momento, esta concentración de poderes jurídicos, políticos y fácticos lo está ya lesionando y con él está lesionando al país. Hay pocos méritos que aceptar y muchas culpas que repartir. En consecuencia, pienso que es momento de avanzar en repartir responsabilidades realmente y que las cámaras ocupen los espacios políticos que de acuerdo a su naturaleza les corresponden. Pero, para no faltar a mi tradición quiero señalar que no juzgo que lo más conveniente para el país fuese que

llegásemos a vivir un régimen esencialmente parlamentario, donde el primer ministro, el ejecutivo salga del seno del congreso -esos son los regímenes llamadas parlamentarios-.

La verdad es que salido del congreso actúa con mayores atribuciones de ejecución que el congreso mismo, y que falta quizás mayor divulgación y afirmación de nuestra cultura política para que entendamos este fenómeno. Es frecuente que nosotros no sepamos realmente para qué sirve un diputado, un legislador, a veces ni él sabe. Y que generalmente consideremos un buen diputado al que consiguió más escuelas, más pavimentación de calles -que después de todo no son más que estar tapando agujeros, responsabilidades de otras autoridades- cuando su función, en mi opinión, es esencialmente política y legislativa. Creo que este es el fondo del problema.

Sé que no le he respondido, pero sí… alleguemos mayores preocupaciones. De ninguna manera me gustaría ver necesariamente confrontación del poder.

Creo que sí se ha avanzado. La Contaduría Mayor de Hacienda federal obedece ya a una ley distinta nacida en 1978, cada día cumple mayores atribuciones; no es absolutamente cierta la incondicionalidad absoluta del poder legislativo, menos ahora. Aunque también es verdad que por obedecer a un liderazgo político nacional -y el liderazgo siempre está concentrado- la mayoría del poder legislativo en las decisiones fundamentales, apoya al poder ejecutivo; y que la negociación no se da de manera pública y en muchas ocasiones las discrepancias tampoco, pero existen, existen en comisiones, existen en los tratos que no se hacen públicos de los miembros o auxiliares del poder ejecutivo y el ejecutivo mismo con los integrantes del congreso. Hay muchos problemas nacionales -ingreso al GATT entre otros- que fueron minuciosa, cuidadosamente analizados por el poder legislativo y hasta después de ese análisis se tomó una determinación, y de esto quiero ser garante de manera personal.

Creo que se está avanzando y yo no creo que los avances de este tipo puedan ser impensados, ni imprudentes.

Lic. Mendoza: Se modifica la Constitución Federal, entra en vigor la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales; con esta reforma señor Licenciado ¿traerá por consecuencia la reforma de la constitución de los estados y códigos electorales para los estados, para la integración del congreso estatal?

Lic. Montes: Lo ignoro. El fenómeno que se da en nuestro país es que casi siempre una reforma de esta importancia produce reformas en cadena en las entidades federativas. A veces, reformas impulsadas y orientadas de manera central. No es totalmente deseable que por sola imitación se desencadenase este fenómeno, porque la reforma a nivel nacional tiene una justificación. Todos sabemos que a nivel nacional el partido mayoritario obtuvo en las últimas elecciones un máximo del 67% de la votación emitida y, sin embargo, en la cámara la representatividad camaral es mucho más amplia -aproximadamente del 72% o quizás un poco más-. Pero los llamados partidos políticos nacionales, la verdad es que son partidos políticos regionales; que yo sepa solamente

hay uno con presencia nacional, los otros tienen presencia regional, fortificada en algunos lugares y totalmente inexistente en otros. Sí, a nivel nacional la votación del partido mayoritario fue del 67% -también se tiene análisis en el sentido de que por la crisis que padecemos, sobre todo la crisis de credibilidad, esta votación está a la baja, no está a la alta-. En consecuencia se están tomando medidas para que la pluralidad de las tendencias ideológicas nacionales, entre comillas, estén representadas en el órgano federal nacional.

En los estados habría que tener mucho cuidado y es difícil predecirlo, de que la reforma tuviese causas sociales reales. Esto es, que haya presencia de partidos minoritarios, que también la representatividad camaral de cualquiera de ellos no sea adecuada a su representación electoral. Si este fenómeno se da, la reforma debe hacerse. Si el fenómeno no se da, la reforma sería ociosa y ficticia.

Por otro lado, hay elementos secundarios que no necesariamente tendrían porque establecerse ¿cómo cuál? Como la integración de la Comisión Estatal Electoral o como la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Quizás no tengan las mismas necesidades todas las entidades federativas; hay entidades atípicas, muchas del sureste -Oaxaca, Chiapas, Guerrero-; al presente la reforma municipal para entidades del centro - Guanajuato, Querétaro, Michoacán- que juzgábamos operante, es impositiva en aquellos sitios, es absolutamente inoperante porque tienen otra forma de democracia.

A mí me gusta contar lo que ocurre en Oaxaca, entidad con 570 municipios, todos pequeñísimos, en donde el presidente municipal que va a ser, antes ha sido mayordomo de su comunidad y ha estado sujeto a toda una catequización para llegar a ser presidente municipal. Me consta que desde un año antes se le invita a que participe en las tareas del ayuntamiento, así sea con presencia y ellos ya saben cuando llegan las elecciones que "este señor va a ser su presidente municipal", y que cuando a ese señor en esa comunidad tan pequeña le dicen "tú ganaste" pero aparte "tu rival fulano va a formar parte de tu ayuntamiento", él contesta -y se está viviendo el fenómeno presente- "yo no voy, si mi enemigo va yo no voy". Quizás esto afirme la tesis que yo digo, que la democracia es resultado de una cultura política y no premisa de esa cultura política.

(Pregunta no registrada). …cada tres años…

Lic. Montes: ¿De la Cámara de Senadores? Caray, no lo sé. Me pregunta usted opiniones personales. La tradición mexicana, las tradiciones son respetables. Se empieza por tener una Cámara de Diputados de dos años en ejercicio y una de senadores de cuatro años en 1824. Se alarga luego el periodo de funcionamiento de los diputados a tres y la de senadores a seis. Siempre, siempre ha existido en México el hecho y la norma de que los senadores duren en funciones el doble de los diputados. Tiene más movilidad la cámara de diputados en este sentido. Quizás corresponda a su distinta representación y a preservar un poco más la estabilidad; insisto en que la Cámara de Senadores es

una cámara estabilizadora. Y siempre sería bueno, yo propondría otro supuesto, -quienes hemos ocupado algún cargo público de elección popular como legisladores lo sabemos, a veces lo decimos en broma-, siempre es bueno que alguien integrante del cuerpo conozca ya los usos y costumbres y métodos parlamentarios, porque si no, a veces se cae en extremos verdaderamente viciosos en donde los legisladores son los que ignoran todo esto y es el personal administrativo de apoyo el que lo conoce. Y cuantas veces en una cámara quien realmente ordena es el oficial mayor o cuantas veces el legislador no alcanza a aprender por llamarlo así, el fenómeno del funcionamiento camaral.

No se me escapa que estos son cuerpos políticos y que sus decisiones fundamentales deben ser las políticas.

Mejor pensemos, podría ser otra alternativa, en la conveniencia de que también la Cámara de Diputados se renovase por mitad para conservar en el cuerpo siempre gente experimentada, de mayores conocimientos, que pudiese orientar mejor y comprender mejor. Quizás esto ayude hasta para el establecimiento real de una carrera parlamentaria hasta el presente inexistente en nuestro país, sobre todo para los que militamos en el Partido Revolucionario Institucional; porque los que militan en las oposiciones, esos si tiene una carrera parlamentaria, van a una legislatura, a una van los nones y a otra van los pares; y salen más en muchas ocasiones los que ya tuvieron experiencia, que quienes no la han tenido. Es una posibilidad y requiere análisis…

…

(Cierre del anfitrión)

Agradecemos en todo lo que valen sus valiosos conceptos que mucho nos ayudan a comprender nuestro sistema político y sobre todo, señor Licenciado Miguel Montes García, su presencia, porque da realce a los eventos que con motivo del día del abogado estamos realizando. Usted señor Licenciado Miguel Montes, es ampliamente conocido en nuestro medio y sobre todo es amigo de los irapuatenses que siempre lo recibimos con gusto y con afecto. Como una modesta prueba de nuestro agradecimiento, reciba usted, a nombre del Colegio de Abogados, por su destacada participación en nuestra semana cultural, este diploma.

¿LA SOCIEDAD EN EL GOBIERNO?

(Versión estenográfica)[17]

Conferencia dictada en la reunión de análisis
"Tendencias actuales de la administración pública mexicana".
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública.
Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero.
13 de agosto 1987

Muchísimas gracias. Mi agradecimiento y mi felicitación al Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública primero, por permitirme conversar con ustedes, segundo, por la organización exitosa de esta reunión que será en beneficio de todos los que estamos presentes.

Me llamó la atención en los documentos y programa que recibí de parte de ustedes, el que con realista modestia se afirmase que ésta era una reunión para enterados. Realmente, quiero decir que no es mi caso. Estoy seguro de que el auditorio sí está enterado de los temas que tratamos y, por eso, obviamos -y, seguramente por eso se da un tiempo límite de presentación del tema, en realidad, reducido- obviamos la definición de conceptos. Pero quizá en este tema sea preciso señalar en qué sentido estamos conceptualizando la palabra sociedad, sobre todo si la confundimos con sociedad civil o sociedad política.

Sabemos que a través de la historia del pensamiento político, esta acepción ha cambiado de significado; en el Jusnaturalismo, por sociedad natural se entendía esa asociación primaria de los seres humanos, pura, según Rousseau, difícil, según Hobbes. Y por sociedad civil, se entendía la sociedad política -el Estado-. Si así la conceptualizamos, tiene razón el licenciado Cosío Vidaurri al no aceptar la dicotomía entre sociedad política y Estado.

Pero este concepto se modificó. Marx, que nos ha pintado a todos con su vigoroso pensamiento -aceptémoslo o no lo aceptemos-, por sociedad civil entiende precisamente lo que los Jusnaturalistas entendían por sociedad natural, y la ve como ese conjunto de relaciones en que los individuos hacen la guerra constantemente por el imperativo de solventar sus necesidades y por la lucha económica, que debe entenderse como lucha de clases. Si la entendiéramos así, en este concepto marxista que se maneja mucho en la teoría política moderna -aunque no se confiese- …(ilegible)… -Marx le llamó, además, sociedad burguesa-, si la entendiéramos así -y quizás sí valga la pena para el hecho del desarrollo de la sesión señalarla-, sería comprensible la frecuente contraposición que se establece entre sociedad civil y Estado; contraposición que ha sido

[17] Oficial Mayor de la H. Cámara de Senadores de 1985 a 1987.

usada también con frecuencia con fines polémicos para afirmar, por ejemplo, que la sociedad civil se mueve más rápidamente que el Estado, que el Estado no está en condiciones de comprender todos los fenómenos que provienen de la sociedad civil, que la sociedad civil se forma continuamente, en ella se forma continuamente un proceso de deslegitimización del Estado y que éste, el Estado, no siempre puede detenerlo.

Se contrapone por razones teóricas o por razones de interés, de buena o mala fe, el poder real al poder legal. Por eso se concluye que la solución de la crisis que amenaza la supervivencia de un Estado debe ser buscada en la sociedad civil, donde se pueden formar nuevas formas de legitimación y nuevas áreas de consenso. En los momentos de ruptura se predica el retorno a la sociedad civil, como los Jusnaturalistas predicaban el retorno al estado de naturaleza. Cuidado con estas tesis; sin decirlo contienen el fracaso de todos los partidos políticos cuya función es articular, agregar, transmitir las demandas que vienen de la sociedad civil..

Por eso es necesario fijar la terminología y decir a qué sociedad podemos conceptualizar. Yo me referiré a la sociedad política, a la sociedad que no admite fundamentalmente la dicotomía entre gobierno y sociedad civil, pero que indudablemente, es representante de ésta y de ella tiene que alimentarse.

Con esta introducción -perdón por violar la regla-, deseo no extenderme más de lo justo en la presentación del tema, que ojalá motive el interés de ustedes.

Creo que todo gobierno que sienta respeto por su legitimación y al que le interese ejercer el poder con una base de sustentación real, sólo puede ejercitarse con el consentimiento de los gobernados.

Ya Locke nos decía en su *Ensayo sobre el gobierno civil,* que "lo que inicia y realmente constituye una sociedad política cualquiera, no es otra cosa que el consentimiento de un número de hombres libres, capaces de formar mayoría para unirse e integrarse dentro de semejante sociedad. Y eso, solamente eso, es lo que dio o podría dar principio a un gobierno legítimo".

No es fácil tener noticia de algún gobierno que confiese públicamente, tal vez ni siquiera se confiese a sí mismo, que no es legítimo. Independientemente de su origen, de sus características de ejercicio, todos los gobiernos se ostentan como representantes legítimos del pueblo al que gobiernan.

Se sostiene que la sociedad es, en realidad, un instrumento que permite el mejor cumplimiento de la finalidad esencial de cada individuo que la constituye y el Estado, el gobierno, como rector de esa sociedad, facilita que dentro de la misma no haya anarquía. Se explica entonces la existencia del gobierno como una necesidad de orden social, pues inevitablemente, si el gobierno faltara, fatalmente llegaríamos a la anarquía dañina para todos los individuos asociados.

Seamos pragmáticos. La praxis no siempre corresponde, y menos la praxis política, a la teoría. La teoría es siempre la tesis sobre lo deseable y la política es el ejercicio de lo posible y alcanzable dentro de lo deseable.

Es un hecho innegable que la cada día mayor complejidad y extensión de las sociedades modernas hace imposible el que el gobierno se ejerza de manera directa, por todos y cada uno de los que lo constituyen. En muy pocos momentos ha existido la posibilidad real del ejercicio directo del gobierno por una sociedad concreta, ubicada en tiempo y espacio.

La democracia directa en el presente, en términos generales, es impracticable, y sólo podemos hablar de una sociedad que ejerce el gobierno a través de representantes.

Dentro de una sociedad dada, las relaciones sociales concretas enfrentan intereses de núcleos definidos. A veces es difícil descubrir un interés social general, porque se oculta por la manifestación de esos intereses de núcleo, de clase, sobre todo cuando alguno de estos grupos -por intereses opuestos o por lo menos distintos- tiene mayor facilidad de hacerse oír, ya sea por su poder económico o por su capacidad de organización. Quizá una de las tareas fundamentales de un gobierno legítimo sea descubrir los verdaderos intereses generales, para cuidarlos, realizarlos y cumplir su finalidad importantísima de salvaguardar la armonía y convivencia sociales.

En cuanto en mayor medida un gobierno postula como sus finalidades concretas e inmediatas, la realización de las acciones que los intereses generales propugnan como necesarias, en esa medida, ese gobierno puede afirmar válidamente que lo es de esa sociedad, que es esa sociedad.

Si un gobierno se aleja de las aspiraciones generales, o por lo menos de las aspiraciones de las clases mayoritarias -la generalidad es una mayoría calificada en mi concepto-, durante algún tiempo podría afirmar que las pretende, pero su no realización crearía, necesariamente, una separación entre quienes detentan el poder y quienes son gobernados. Si la separación se ahonda, casi es seguro que surjan grupos políticos organizados en partidos, o no necesariamente organizados así, a veces con demandas iniciales que parecen no tener carácter de participación política, pero que sí corresponden a realidades concretas, a demandas concretas. Estos grupos despojarán de banderas al gobierno y ahondarán -por interés y por buena o mala fe-, el posible divorcio entre éste y los gobernados. El gobierno que así se conduzca tendrá al final una sanción irreversible, la falta de apoyo y su descalificación, su desaparición como gobierno por cualquiera de varias vías, la electoral al no ser ratificado, o la última y extrema, no deseable, la violencia.

Concluyamos: una sociedad está, una sociedad es el gobierno:

a) si la mayoría de sus miembros lo han elegido y,

b) si sus demandas generales o mayoritarias se adoptan como propósitos y acciones por el propio gobierno.

Insistimos en que a veces no es fácil descubrir esas demandas mayoritarias o generales y que, por eso, deben afinarse los mecanismos de comunicación entre representantes y representados, de los que sólo -de esos mecanismos-, sólo son un ejemplo la consulta pública, la iniciativa popular y el referéndum.

Las elecciones son consultas periódicas indispensables para conocer el apoyo generalizado a un programa propuesto por un partido político, apoyo que debe determinar la integración del gobierno.

Resultaría muy interesante ahondar en este tipo de reuniones, en cómo perfeccionar esos mecanismos y otros de responsabilidad de quienes gobiernan, de quienes representan, ante los propios gobernados o representados.

Muchas gracias.

Sesión de preguntas y respuestas

Pregunta Lic. Muro. (Ilegible) …si podemos hablar así acerca de las mayorías o acerca de los representantes legítimos apoyados en esa mayoría, simplemente sería cuestión de llegar a un concepto específico de mayoría.

Lic. Montes. En todos los gobiernos democráticos a la manera occidental se vive un problema lacerante. Y por eso apunté y ahora amplío, que quizá una de las tareas fundamentales de un gobierno que aspira a conservar un régimen democrático, a hacerlo y a vivir con él, sea realizar caminos de participación. Ustedes y yo sabemos que, aunque con facilidad se habla de participación ciudadana, en todas las latitudes, en todo el mundo, esta participación no es tan real como se dice. El fenómeno de abstención electoral no es exclusivo de México. Incluso las democracias que se autodenominan como más acreditadas, lo viven y lo padecen. Si se encontrase una fórmula cabal por medios modernos, electrónicos, computarizados, de participación, ni aun así, quizá, la participación fuese la ideal. Si llegásemos a instalar en cada casa, a la cabecera de la cama de cada ciudadano un aparato en donde, apretando un botón, pudiese participar en soluciones de gobierno o en elección de gobierno, todavía la participación no sería la ideal, porque para participar realmente se requiere información y se requiere capacidad de selección, establecer preferencias; recordemos que elegir es preferir, elegir es votar.

Aquí se involucran principios que la experiencia histórica de cada pueblo determina. Si teóricamente -y sólo estoy hablando en este terreno porque la pregunta es así-, tuviésemos que exigir para aspirar y ser legítimos, una participación sólo numéricamente mayoritaria, tendríamos que concluir que antes de 1910, quizá en todo el mundo, jamás existió un gobierno democrático porque el voto universal y directo surgió, en términos generales, en este siglo. Antes de este siglo en ninguna latitud había voto ni universal, ni directo, y en nuestro país sólo podemos decir que el derecho al voto de mayoría se estableció en la reforma de Ruíz Cortínez cuando se extendió a la mujer. Antes de ese momento, el electorado era selectivo desde su arranque.

Cambiemos entonces la tesis. Al presente, todavía los esfuerzos de participación no alcanzan -y no por falta de voluntad, sino por imposibilidad de comunicación con la totalidad y de convencimiento-, no alcanzan tal vez, a la generalidad de los mexicanos.

Las limitaciones económicas, culturales, formativas, son obstáculos para la participación. No se puede establecer en ninguna latitud democracia por decreto. La democracia como régimen es resultado de un ejercicio cultural; no existe primero y después se da el ejercicio. Siempre debe existir primero como cultura para después, transformarse en ley y en participación real y efectiva. En donde quiera y quizá en los países en desarrollo como el nuestro, se agudice este problema. Pero el principio involucrado es la vocación del régimen, la vocación del gobierno. Es innegable -solamente con muy pesimistas y obtusas mentalidades se puede decir lo contrario-, es innegable, diría yo, que desde siempre, en distintos grados, con interrupciones quizá, el gobierno nacional declara y hace esfuerzos para mantener una auténtica vocación democrática.

Reflexionemos. Hace pocos años las asambleas políticas, por naturaleza de representantes, -y no confundamos representación ciudadana con forzosa interlocución contraria- las asambleas no tenían participación, ni siquiera ideologías diversas a la triunfante en un movimiento violento. Es a partir de la Cuadragésima Sexta Legislatura Federal cuando aparecen los diputados de partido y donde se institucionaliza una pluralidad ideológica. Antes existían corrientes con matices pero esencialmente con el mismo proyecto nacional. Ahora, existe una pluralidad ideológica donde algún partido a veces confiesa y, a veces tácitamente manifiesta tener un proyecto nacional diferente. Cuando no lo expresa, es porque quizá no le convenga.

En este problema de participación, en la Cuadragésima Sexta Legislatura se avanzó muchísimo. Ahí por primera vez, es que se debate cuenta pública; primera vez que, curiosamente el diputado Adolfo Christlieb Ibarrola justifica históricamente y con razón -acudo a él no porque sea de mis autores favoritos, sino para acudir a un contrario- justifica históricamente la necesidad de nuestro régimen presidencial como factor de unidad nacional, como preservativo de nuestra identidad y de nuestro proyecto. Es ligero juzgar al presidencialismo sólo por carencia o por no haber tenido éxito en determinada tarea. Habría que juzgarlo con mucha mayor amplitud, fundamentalmente como factor de unidad que explica nuestro desarrollo histórico. Y curiosamente, curiosamente en un régimen como el nuestro, un partido en el poder o del poder -para efectos teóricos lo acepto- propugna pluralidad y propugna respeto a ideologías diversas.

Las diputaciones de partido fueron un gran avance y, posteriormente -la historia de México no nace ayer ni culmina hoy- posteriormente se hace el esfuerzo democrático, auténtico, real, reconocido ahora por todos, y demandado en su momento también por todos. En 1977 con la Reforma Política, cambiamos nuestro sistema electoral y ampliamos el margen de capacidad

atendiendo hasta a minorías, pequeñas en números, que se consideraron con representación importante y con tesis ideológicas que pudieran transformar, por su bondad, a otros miembros, para que la comunidad las aprovechara, y se amplió el espectro de la Cámara de Diputados.

Al presente es falso -y basta acudir a cualquier sesión de la cámara o de la Comisión Permanente-, al presente es falso que en el seno de esta asamblea no haya interlocución política hacia los actos o propósitos del ejecutivo. La hay razonada, violenta a veces, poco propositiva en muchos casos, pero casi siempre crítica. Esta crítica es oída, razonada -y lo puedo comprobar con hechos-, en muchas ocasiones atendida.

En el futuro, y desde hace unos años, no necesariamente como medios de comunicación indirectos, sino al contrario, como medios de comunicación muy directos -yo diría que, con humildad tal vez no confesada-, se acude a otras vías de participación ciudadana para estimular esa participación. La planeación democrática y la consulta popular en ciernes, por desarrollarse, imperfecta, a veces manipulada, en muchas ocasiones real y auténtica, son esfuerzos serios y de buena fe para estimular esa participación ciudadana directa, no como sustitutiva de una interlocución que el legislativo ya tiene, y que siempre ha tenido en mayor grado de lo que se piensa cuando no se profundiza, sino como complemento para esa necesaria participación.

Esos medios son nuevos, deben mejorarse y deben perfeccionarse. Si hubiera una tabla para la clasificación de regímenes de gobierno que fuese de la democracia al autoritarismo, a la dictadura, el sistema político mexicano no quedaría clasificado, desde luego, en la dictadura, ni siquiera a media tabla, tampoco en la cúspide de una democracia -clasificación que no alcanza ningún país-, sino cerca del punto conveniente, más allá, desde luego, del 50%.

¿Por qué? Mi amigo Guillermo Cosío, brillante parlamentario por otra parte, lo apuntó: no basta un criterio, no basta el criterio electoral para calificar de democrático o no democrático un régimen concreto; hay que acudir a otros criterios. Él señaló cinco: respeto a derechos individuales, aunque tampoco este respeto sea en un 100%, porque las leyes, todos lo sabemos -y perdón por mi formación jurídica- no pierden su validez por su violación. Se puede dar la violación de una norma de manera excepcional, pero todas las normas están hechas para ser cumplidas voluntariamente y la sociedad las cumple en términos generales de manera voluntaria, y en la sociedad incluyo a la autoridad.

Respeto y avance en derechos sociales y en derechos económicos; derechos sociales que surgen después de la Primera Guerra Mundial o con la Primera Guerra Mundial, y derechos económicos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, no adoptados todavía por sociedades que presumen de mayor democracia que la nuestra. No encuentro institucionalizados derechos sociales en sociedades como Estados Unidos o como Costa Rica -para irme al otro extremo-, que presume de una rancia tradición democrática. En Costa

Rica no está institucionalizado el derecho de huelga por ejemplo, y todavía se juzga como delito cuando hay una huelga en servicio público, como sucedió recientemente.

Hay un ámbito de libertad, y un esfuerzo real por establecer cierto grado de igualdad. Como postulado concreto en este régimen del Presidente De la Madrid, llegar a una sociedad más igualitaria. Igualitaria significa igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades económicas, igualdad de posibilidad de educación.

Todo esto, a mí, no por necesidad, no por disciplina, sino por honesta convicción intelectual, me hace concluir que vivimos en un régimen democrático.

Es cierto que en determinadas elecciones no participa la mayoría poblacional. Primero, tengo que excluir todo el sector que no tiene derecho a participar mediante la votación, mexicanos no ciudadanos, gran parte de nuestra población. ¿Por qué? Porque una elemental prudencia nos hace discernir que se necesita ese juicio, esa información, esa capacidad de elección para votar, para elegir.

Segundo, y este no es un fracaso del gobierno sino, quizá, un fracaso de todos los partidos políticos y de todas las organizaciones intermedias que no han sabido interesar a la mayoría ciudadana en las cuestiones de la cosa pública. Es muy cómodo imputar a un gobierno un ausentismo electoral y esta no es responsabilidad sólo del gobierno.

Reiteramos que para lograr una mayor participación y para que esa participación sea respetada -perdón por decir algo que he dicho en otras tribunas-, no hay participación política, o reforma política, o renovación política, sin un respeto absoluto a la voluntad ciudadana expresada en el sufragio. Esto es insustituible. Pero para que ese respeto se dé sin llegar al puritanismo de elecciones químicamente puras que no se dan en ninguna parte -y lo químicamente puro no es bueno ni siquiera en el agua potable-, para llegar a esto son necesarios tres factores:

Primero.- Voluntad política de ese respeto por parte de quien gobierna. Creo que en México ese factor existe, se declara y se reitera.

Segundo.- Militancia y actividad de convencimiento de todos los partidos políticos y organizaciones intermedias.

Tercero.- Participación auténtica de la ciudadanía.

Sin estos tres elementos, tan importante el uno como el otro, la democracia sigue siendo defectuosa.

Yo quisiera -perdón por la extensión, para mí son temas apasionantes- yo quisiera señalar mi convencimiento personal. Se dice mucho -por eso se gastan las palabras- que no vivimos, quizá no viviremos y quizá nadie viva una democracia perfecta. Pero sigue siendo válida nuestra vocación democrática; y el gasto político que a veces se impugna es tan necesario, tan indispensable en una sociedad en desarrollo como la nuestra, para mantener independencia, soberanía, nacionalismo. Es tan indispensable, quizá más que el gasto en

obra. Por eso nos sorprende que tan falsamente, algunos núcleos organizados políticamente no acepten un elemento que les es indispensable para su participación: los subsidios que el pueblo mexicano generosamente otorga a través de sus representantes para posibilitar la participación política.

Concluyo. Reconozco que en términos aritméticos será difícil, aquí y en otros países, hablar de una mayoría poblacional en todos y cada uno de los casos que se resuelvan mediante la elección. Pero afirmo que tendremos que considerar a una mayoría participante para conservarnos y para avanzar en nuestro desarrollo democrático; que tendremos que hablar de una mayoría participante, y que el problema de ampliar la mayoría participante es problema de la propia sociedad, del gobierno, de todos los partidos políticos, y es problema también de universidades y colegios. En la medida que lo logremos, avanzaremos en nuestro sistema democrático.

Muchas gracias.

Pregunta (ilegible)…

Lic. Montes. Muchas gracias. Si me permiten, en primer lugar yo también quiero pedir disculpas, porque también me falta tiempo y vida para ordenar mis ideas.

Creo que usted tiene razón y algo traté de apuntar cuando señalé que un régimen democrático será tanto más perfecto cuanto más sea consecuencia de una cultura política en ejercicio. Sin esta cultura política, aunque la ley lo plasme como finalidad, no tendrá el validamiento fáctico de su cumplimiento. No basta una ley, que puede ser hasta un programa, como nuestra Constitución contiene, para que el avance real se dé; es necesario el hecho de cumplir.

No sólo la igualdad nos puede hacer avanzar en un camino democrático. La igualdad absoluta tampoco se dará nunca. Siempre, por lo menos en mi muy modesta opinión, podemos establecer dos grandes grupos o dos grandes clases: quienes representan y quienes son representados; quienes gobiernan y quienes son gobernados.

Si avanzamos, y esto es un propósito democrático, en establecer condiciones. Yo no creo que ningún gobernante pueda dedicarse a hacer igual a todos y cada uno de los ciudadanos. Su preocupación debe ser establecer condiciones para que se dé esa igualdad del hombre, y este establecimiento de condiciones implica una economía vigorosa, un desarrollo sostenido, una educación extendida, una educación que no renuncie a excelencias y que no caiga en elitismos.

Fácil de decir, muy difícil de cumplir. Sin embargo, no es pesimismo.

Quisiera terminar con la vieja frase, muy acreditada de Churchill: "Los regímenes democráticos son los peores que existen, excepción hecha de todos los demás".

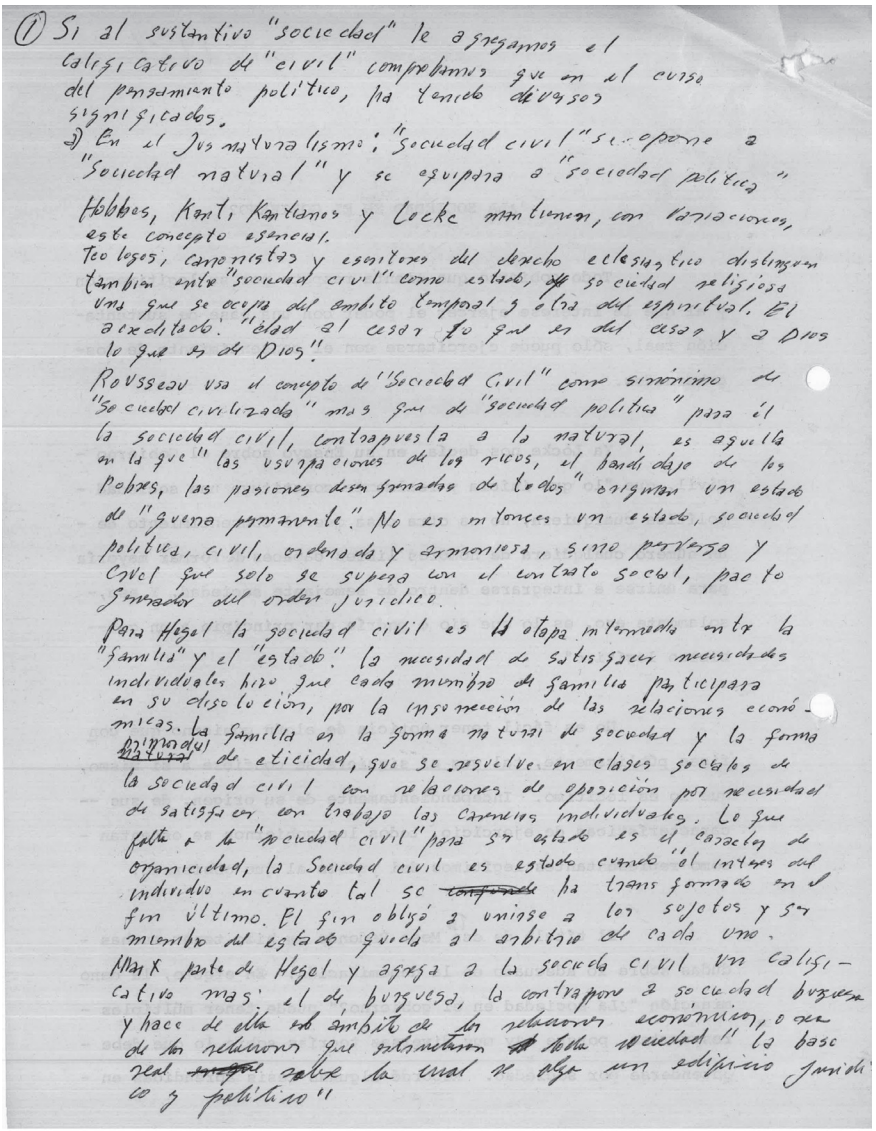
Entonces, esa es la tarea de un gobierno con vocación democrática: establecer las condiciones para que se logren posibilidades de igualdad ciudadana. En teoría, sin esa igualdad no se logra una participación generalizada. Sin capacidad de raciocinio no se puede lograr una participación generalizada; pero

conformémonos con impulsarla con estas vías alternas, insisto, no sustitutivas. El referéndum no se ha aplicado todavía en el país, ni plebiscito alguno, siendo cosas muy distintas. Pero ya hay un referéndum establecido para la mayor concentración poblacional del país; no se ha aplicado.

¿Hasta dónde la representación democrática corresponde a una necesidad real de la población? Es la pregunta y la tarea diaria de todos los que participan en el gobierno y en la administración.

No es problema resuelto, tal vez nunca lo sea. Ojalá yo tuviese fórmulas exactas para medir o alcanzar estos avances. Creo que no existen. Pero sí creo que, si en cada inquietud suya o de grupo, se fortifica la organización ciudadana, se tendrán mucho mayores caminos de participación.

Perdón, creo que tenemos alguna coincidencia. Estoy expresando la verdad de lo que pienso.



Notas manuscritas en el reverso del texto escrito a máquina
"Notas para mesa redonda"

NOTAS PARA MESA REDONDA "¿LA SOCIEDAD EN EL GOBIERNO?"[18]

Agosto 1987

Como punto de partida quiero señalar que, en lo personal, no acepto una dicotomía entre sociedad y gobierno. El gobierno se ejerce por la sociedad puesto que es la mayoría de los mexicanos quienes, en su proceso histórico han determinado y determinan al presente, los sujetos que ejercen el gobierno.

Hablar de la sociedad en el gobierno es hablar de democracia y todos sabemos que desentrañar el sentido de democracia presenta una amplia gama de significaciones que dependen en mucho de las condiciones políticas e ideológicas de la persona que emplea el término.

No basta conocer el significado etimológico de la palabra, decir que "demos" significa "pueblo" y "kratos" significa "poder" o "autoridad"; al presente no es decir mucho.

Avanzamos si señalamos la frase de Lincoln en el sentido de que la democracia es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y tal vez avanzamos más si decidimos que, en un sentido más actual, la democracia es un sistema de gobierno caracterizado por la intervención de las mayorías de los ciudadanos en la organización del poder público y en su ejercicio.

Sin embargo, en mi opinión, no basta analizar el origen de un gobierno determinado para poder concluir que nos encontramos en presencia de un régimen democrático. Quizá este origen nos lleve sólo a hablar de una democracia formal o electoral. Hay otros elementos que nos deberán ayudar a formarnos un juicio más certero. En un resumen apretado, estos elementos podrían ser:

1.- Participación del ciudadano en las decisiones políticas.
2.- Cierto nivel de igualdad entre los ciudadanos.
3. Un determinado grado de libertad concedida a los ciudadanos en un régimen jurídico y exigido por ellos.
4.- Un sistema representativo.
5.- Defensas legales de los ciudadanos frente a las acciones de los gobernantes, sobre todo aquéllas que pudieran considerarse arbitrarias.

---

[18] Notas para la mesa redonda llevada a cabo en la reunión de análisis "Tendencias actuales de la administración pública mexicana". Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. Agosto de 1987.
Nota de las compiladoras. En este capítulo se presentan algunas notas preliminares, preparadas por el Lic. Montes para, como lo hemos hecho en otras ocasiones, mostrar su método de trabajo. Hubo otros apuntes y versiones de su participación. La exposición final, en versión estenográfica, está consignada en el capítulo anterior de esta antología.

6.- El ya dicho sistema electoral basado en la mayoría.

A la manera occidental, podemos afirmar que democracia es un régimen que asegura a cada individuo sus garantías individuales; le proporciona un mínimo de seguridad económica; no concentra el poder en una persona o en un grupo, sino que consagra el principio de la elección popular y de la separación de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial; y consagra también el principio del pluralismo ideológico.

Mantengo que México vive un gobierno democrático porque en su sistema se cumplen los rasgos esenciales de la democracia occidental, por otros llamada liberal, y que son:

1.- Elección de los gobernantes por los gobernados.

2.- Separación, colaboración de poderes.

3.- Garantía de los derechos individuales y de las libertades fundamentales.

4.- Pluripartidismo.

5.- Garantía de los derechos sociales y de los derechos económicos.

No se me escapa que quienes por convicción o por postura, a veces interesada, tratan de desvirtuar lo democrático del régimen mexicano, establecen como su gran defecto la no alternancia en el poder y, dicen, el no respeto del sufragio.

En el primer punto de impugnación olvidan que de un tiempo a esta época, quizá no se haya dado una alternancia partidaria, pero sí se ha dado una alternancia de hombres y de ideas rectoras esenciales, además de un juego partidario interno de un altísimo grado de interés que sería muy difícil analizar en esta reunión porque amerita un trato específico. Y por lo que hace al segundo punto de impugnación constituye, más una tesis partidaria oposicionista que una realidad, pues el partido mayoritario es indiscutible que aglutina a la mayoría del electorado en el ámbito nacional, y en los ámbitos de cada entidad federativa.

Aún en el Distrito Federal, donde sólo en las últimas elecciones la suma de todos los votos de las diversas oposiciones fue mayor -por pocos puntos porcentuales- que la suma de los votos emitidos para el partido mayoritario se mantiene, indiscutiblemente -y así lo reconocen los propios grupos de oposición-, la mayoría relativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sólo en ámbitos muy reducidos se acusa, luego no se prueba la acusación, de falta de respeto a la voluntad ciudadana manifestada en el sufragio.

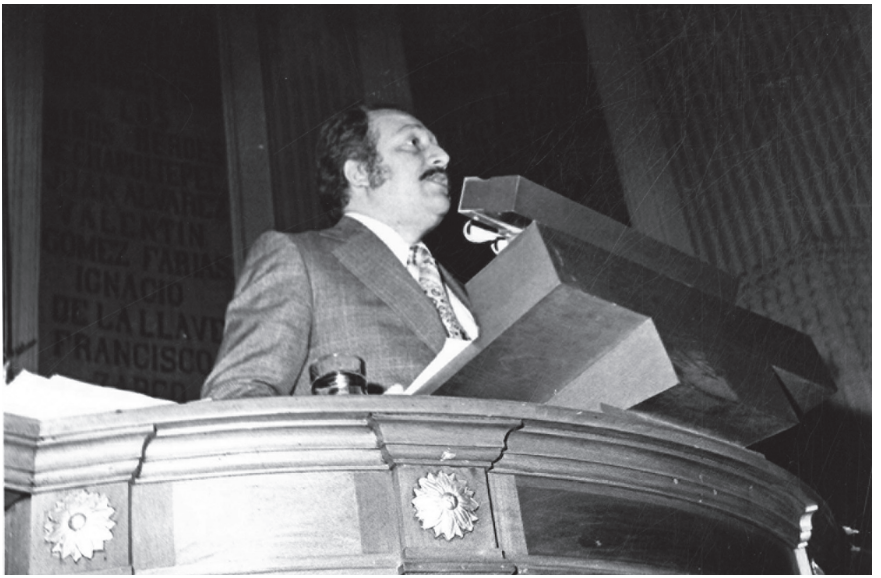
Si con serenidad se medita sobre estos temas, se ve con claridad meridiana que el único proyecto nacional existente y conocido, es el que propone el partido mayoritario, y que los otros partidos, si tienen proyecto nacional, no lo han explicado con claridad y que esas organizaciones sólo representan fuerzas regionales con presencia variable en diferentes lugares.











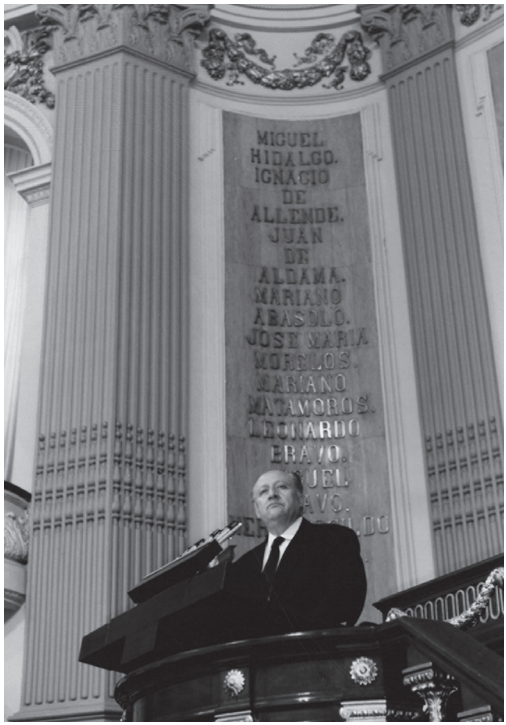





SENADO DE LA REPUBLICA






MIGUEL
HIDALGO.
IGNACIO
DE
ALLENDE.
JUAN
DE
ALDAMA.
MARIANO
ABASOLO.
JOSE MARIA
MORELOS.
MARIANO
MATAMOROS.


GALEANA.






LIC. BENITO JUAREZ GARCIA
1806-1872
CLXXXVI ANIVERSARIO DE SU NATALICIO
21-III-92



DÉCADA 1990

LA FUNCIÓN MINISTERIAL[19]

México, D.F.
6 de mayo 1992

La historia de la institución del Ministerio Público en nuestro país es accidentada. Sus atribuciones, su estructura, su funcionamiento tal como hoy lo conocemos, fue dándose y ajustándose lentamente a los lineamientos básicos de nuestro sistema jurídico positivo, con las inevitables repercusiones de nuestros movimientos y luchas políticas en dicho orden.

El alejamiento de las prácticas coloniales, harto caóticas y caprichosas, para ir conformando los órganos de representación social de acuerdo a las exigencias de nuestra independencia y soberanía, fue proceso arduo y no pocas veces errático. Los criterios subjetivos y discrecionales en el área concreta del tratamiento a la delincuencia no fueron superados con claridad y buena visión, sino hasta que la Revolución Mexicana tradujo en instituciones de carácter constitucional muchas de las aspiraciones del pueblo en materia de justicia y de seguridad jurídica.

No se habían deslindado con precisión el papel de la función jurisdiccional en materia penal, como tampoco el de las fiscalías, que permanecían, en buena parte, como apéndices de los tribunales. Si a eso se agrega la intervención de las autoridades políticas en la averiguación de los delitos, tendremos que reconocer el alto valor de los lineamientos que el Constituyente de 1917 trazó para perfilar nítidamente la función ministerial, que si bien es cierto se coordina estrechamente con la jurisdiccional, permite considerar a la primera como autoridad autónoma encargada de investigar los delitos, de velar por la legalidad y de representar en diversas controversias los intereses gubernamentales.

En el proyecto de Carranza al Congreso Constituyente se reconocía que las leyes vigentes habían dado cabida al Ministerio Público, pero que se trataba de una adopción nominal porque los jueces actuaban con facultades imprecisas, como encargados de la averiguación y de la comprobación de los delitos, desnaturalizándose su función; que, en consecuencia, para garantizar la imparcialidad de los tribunales y diferenciar atribuciones, habría de asignársele al Ministerio Público su auténtica tarea investigadora y persecutoria, sin perjuicio de solicitar, siempre que fuese necesario, las determinaciones pertinentes a la integración de los procesos.

[19] En el documento que obra en el archivo personal del Lic. Montes García es ilegible el título. Por su contenido y para que los lectores identifiquen el tema al que se refiere, en este libro lo denominamos la "función ministerial". En la fecha en que fue dictada esta conferencia (mayo 1992), el Lic. Montes García fungía como Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

Los artículos 21, 73 fracción VI, inciso 6), y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron el resultado de esa política revolucionaria y correctora de viejos vicios.

Las leyes secundarias, tanto la Orgánica de la Procuraduría General de la República como la Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desarrollan, juntamente con los Códigos Procesales Penales respectivos, las directrices constitucionales.

No ignoramos que respecto al monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público, según criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia, se han expresado opiniones que lo objetan. Ya hemos aludido a las razones históricas que motivaron una normatividad tendiente a contrarrestar la excesiva discrecionalidad de los órganos políticos y judiciales. Parecería que tales riesgos pudiesen trasladarse al área ministerial y que no se hiciese buen uso de las atribuciones acusatorias.

El ejercicio de la acción penal representa para el Ministerio Público una delicada responsabilidad, pero es indiscutible que no podía dejarse en manos de los particulares, lesionándose el principio de una inexcusable representación social que concentrase los elementos condicionantes de la acusación bajo normas procesales estrictas. Tal vez se ha dado a estas facultades privativas del Ministerio Público una interpretación demasiado amplia, como si quedase al capricho del funcionario el impulso y ejercicio de la acción. No es así. Las normas secundarias que lo rigen claramente obligan a desahogar la pretensión punitiva cuando se reúnan las probanzas que la motivan, de tal suerte que solo en los casos en que haya ausencia o insuficiencia de tales elementos se puede omitir o postergar la pretensión. Independientemente de que el eventual uso indebido de tales atribuciones no proporcione al ofendido las posibilidades de una instancia superior capaz de corregir el exceso o el defecto, las medidas de autocontrol y las normas generales sobre responsabilidad de los servidores públicos, permiten garantizar decisiones objetivamente correctas. Internamente la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha instrumentado medidas adecuadas que permiten al particular tener acceso a las determinaciones que suspenden o que autorizan la reserva de la pretensión, a fin de que pueda enterarse de sus motivos y los objete si así lo estima pertinente, en cuyo caso se cuenta con órganos idóneos que revisen la decisión. Aunque el criterio del particular no es vinculatorio, hemos comprendido la conveniencia de tomarlo en cuenta para contrarrestar cualquier sospecha de decisión arbitraria. Se trata, pues, de no pasar por alto las obligaciones relativas a los fines protectores de la sociedad, con apego a las normas vigentes y actuando con la buena fe inherente al Ministerio Público.

Importa señalar que el Ministerio Público solo interviene y actúa dentro del área criminal cuando se ha registrado el suceso indeseable de la infracción a las leyes penales. Aunque se halla integrado a un orden jurídico general o sea uno de tantos organismos obligados a cooperar en la buena marcha de la

gobernación, no puede actuar antes del acontecimiento transgresor de dichas leyes. Su función es, por exigencias constitucionales, indagatoria y persecutoria, no previsora, si bien es cierto que contribuye a la previsión de la medida que sus acciones conducentes a la imposición de las penas pueden tener el efecto saludable de paralizar conductas potencialmente ilícitas.

Es bien sabido que las causas generadoras de la delincuencia son muchas y complejas. Tienen raíces sociológicas, económicas, educativas, familiares, éticas, etc. Para conjurarlas se requiere la concurrencia de acciones múltiples que no pueden estar confiadas cien por ciento a la tarea gubernamental, aunque ésta debe promoverlas y fomentarlas en todas las áreas. La acción preventiva policíaca, suele destacarse como función principal e inmediata en la vigilancia y asistencia que se le debe a la sociedad para el mantenimiento de la seguridad pública, del orden y de la paz, anticipándose, en la medida de lo posible, a la infracción de las leyes penales y con competencia para sancionar las infracciones administrativas. Pero debemos reconocer que si a tal acción preventiva no concurren otros factores de control que rebasan inexcusablemente la previsión policíaca normal, correspondientes muchos de ellos al ámbito personal de los gobernados, el deterioro que se siga no es achacable en toda su dimensión a la autoridad en general ni menos a la institución del Ministerio Público. La Policía Judicial se halla estrictamente sujeta a una normatividad que le impide extender su desempeño a conductas delictuosas meramente potenciales.

Al Ministerio Público y a la Policía Judicial compete, en cambio, desahogar con la mayor eficacia posible, con la mayor probidad y con el mayor sentido de responsabilidad toda diligencia tendiente a aportar las pruebas de los delitos y las relativas a la posible responsabilidad de los autores. La lucha contra la impunidad es algo que pertenece cabalmente a la función ministerial y en ello estamos empeñados porque se trata de una obligación insoslayable que al cumplirse alimenta en la sociedad los sentimientos de seguridad jurídica y de puntual combate a la impunidad.

Consideramos, incluso, que la función meramente investigadora puede guardar, y de hecho guarda, ciertas diferencias con la acusadora. Esta última reclama el conocimiento técnico jurídico indispensable para calificar las averiguaciones como base de la acción penal. Convendrá, como es nuestro propósito, profesionalizar ambas vertientes de la función, como el mejor camino para contrarrestar la improvisación, la incompetencia, las corruptelas, los errores. El empirismo en el campo indagatorio, si bien es cierto que es susceptible de corregirse y enriquecerse, no puede prevalecer ni se le deben conceder más posibilidades de las que realmente ofrece. No es suficiente. Hay que dotar al personal de mayores conocimientos, de mayores recursos técnicos, de mejor equipamiento y de mejores estímulos, para ir abatiendo vicios y errores.

En este propósito se han dado ya pasos muy significativos y de buenos frutos. La experiencia que tenemos demuestra que la arbitrariedad, las presiones y los viejos e ilícitos recursos indagatorios, al ser enérgicamente cancelados,

permiten fincar toda averiguación en pruebas y elementos procesales de sólida y eficaz legalidad, garantizándose mejor la fuerza de las resoluciones judiciales.

Es probable que esta labor encaminada a la profesionalización produzca resultados a largo plazo, pero si no se empieza, si no se programa y organiza desde ahora, tales resultados no solamente quedarán diferidos, sino tal vez serán inalcanzables.

ÉTICA Y POLÍTICA

Conferencia en el Salón de Consejo.
Universidad de Guanajuato.
Guanajuato, Gto.
27 mayo 1997

Una plática sobre "Ética y Política" es sin duda una ardua tarea.

Es indudable que nuestro propósito de sencillez en la exposición, puede afectarse de manera considerable por las complejidades del tema. Ambos términos: "Ética y Política" son equívocos, y la conceptualización de cada uno de ellos contiene en sí misma limitantes, que con certeza, incluirán en el desarrollo mismo del tema.

Las primeras dificultades consistirán en precisar, así sea para los efectos de esta charla, qué entendemos por ética y qué entendemos por política. No participaremos en la discusión de las diferentes definiciones y simplemente diremos que:

Nociones de ética.

La ética es la ciencia normativa de la actividad humana en orden al bien. Es ciencia por ser una disciplina racional, un conjunto de conocimientos sistematizados, es normativa porque establece mandatos que tienden a regir la conducta del hombre como ser libre y se dirige hacia el bien porque quiere que a través del cumplimiento de lo mandado los humanos alcancen su valor supremo, vivan como deben vivir para lograr su plena realización. El bien consistirá en que cada ser se realice plenamente, en todas sus potencialidades.

El maestro Eugenio Trueba da la siguiente noción de la ética: "Ciencia que se ocupa de conocer y establecer las normas de la actividad libre del hombre".

Explica que "La actividad libre del hombre puede recaer sobre objetivos susceptibles de calificarse como positivos o negativos (nociones de bien y mal), según que sirvan a nuestro ascenso o a nuestro detrimento, en cuya virtud la moral resulta también disciplina conductora hacia la felicidad que todos los hombres, sin excepción, anhelamos".

Agrega: "Observándonos a nosotros mismos, podemos comprobar que siempre tratamos de realizar u obtener algo que apetecemos como conveniente a nuestro ser. Somos seres en pos de los satisfactores que sirven para remediar alguna o algunas de nuestras deficiencias". Precisa: "Nada se quiere ni nada se desea si no es bajo el signo del bien y hacia él tiende la voluntad".

Substancialmente estas dos nociones de lo que entendemos por ética se identifican.

Es claro que la ética parte de la existencia de la libertad como facultad de optar, de elegir entre varias posibilidades, con la conciencia de que la libertad absoluta no se da, pues la limitan circunstancias de origen, formación, de herencia, y otras, pero sin aceptar fatalismos deterministas que restarían cualquier mérito al acto humano y harían ocioso el que nos ocupáramos de calificarlo como debido o indebido.

En términos modernos podríamos afirmar que la ética es una "ciencia globalizadora", a la que le interesa el hombre y sus acciones totales y, aunque pueden establecerse deberes específicos no entran nunca en contradicción con las reglas generales de conducta debida de cualquier hombre. Es válido hablar de una ética formal o general y otras particulares que se refieren a deberes específicos para cada dedicación o profesión singular, por eso se habla de Ética Profesional del Abogado, de Bioética, que empezó por ser Ética Médica, de Ética del Ingeniero y adelantamos que también podemos incluir una ética específica con deberes definidos de quienes se dedican a la actividad política.

Noción de política.

El diccionario nos confirma lo equívoco del término "Política". Tiene los siguientes significados:

a).- Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados.
b).- Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.
c).- Cortesía y buen modo de portarse.
d).- Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado.

Todos sabemos que etimológicamente política proviene del griego polis: ciudad, por extensión comunidad integrada por un conjunto de hombres que residen sobre un territorio delimitado y que constituye una entidad prácticamente autosuficiente y esté regida por un gobierno autónomo. La política o lo político era lo perteneciente o relativo a la polis.

Para el efecto de esta plática, por política entenderemos aquella actividad humana que busca obtener o conservar el poder de una comunidad organizada a través de un sistema económico-jurídico, para suplir las carencias de cada individuo que la forma y lograr el respeto a los derechos individuales y colectivos.

Tampoco queremos entrar a las amplias y profundas discusiones sobre lo que debe entenderse por política, pero precisamos que no aceptamos las opiniones empobrecedoras, como la de Maquiavelo, entre otras, que se refieren a la actividad política como un mero fenómeno fáctico consistente en la actividad que realizan los que quieren llegar o conservar el poder, considerando éste como un fin en sí mismo. Tampoco aceptamos los determinismos fatalistas como el marxista que niega que pueda estudiarse la política aislada del

resto de la sociedad, que el objeto de ella es lo que Marx llamó "el conjunto de las relaciones sociales" y que lo que determina, lo subrayo, determina la naturaleza de la política, es su papel dentro de la sociedad. Marx dijo: "En la producción social de su vida los hombres entran en relaciones definidas que son indispensables e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una etapa definida del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La suma total de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, el verdadero fundamento, del que surge la sobre estructura legal y política y al que corresponden formas definidas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso vital, social, político e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino al contrario, es su ser social lo que determina su conciencia". Se concibe la política como una superestructura derivada necesariamente de las relaciones económicas o de producción.

Insistimos y nos apoyamos en la noción de David Held y Adrián Leftwich que dice: "La política es un fenómeno que se encuentra en y entre todos los grupos, instituciones y sociedades pasando por la vida pública y la privada. Está involucrada en todas las relaciones, instituciones y estructuras que están implicadas en las actividades de producción y reproducción en la vida de las sociedades. Se expresa en todas las actividades de cooperación, negociación y lucha por el uso productivo y distribución de los recursos. La política crea y condiciona todos los aspectos de nuestra vida y está en el centro del desarrollo de los problemas en la sociedad y de los modos colectivos de su resolución. Por lo tanto, la política trata del poder; trata de las fuerzas que influyen y reflejan su distribución y empleo, trata del efecto de éste sobre el empleo y la distribución de los recursos; de la capacidad de transformación como lo señala Anthony Giddens, de los agentes sociales, los organismos y las instituciones". "Trata del gobierno pero no solo de él sino también de los derechos que los gobernados tienen frente a los gobernantes y en consecuencia, las obligaciones de éstos, ante los ciudadanos gobernados".

En nuestro concepto de política es también muy importante partir de la existencia de la libertad del hombre y de la rotunda negativa de que el poder pueda ser un fin en sí mismo, lo concebimos como un medio para lograr finalidades superiores y aquí podemos encontrar la obligación ética general de todos los políticos, de los que aspiren al poder o de los que ya lo detenten: servir a la comunidad y a esta vocación de servicio algunos partidos políticos la llamará bien común, otros le llamarán justicia social; en realidad solo se trata de que la aspiración al poder o el ejercicio del poder, solo se justifican desde el punto de vista moral y solo tienen validez, si el poder se destina a lograr un beneficio general consistente, en términos amplios, en crear las condiciones sociales necesarias y suficientes para que cada individuo miembro de una sociedad pueda obtener su bien, esto es, realizarse plenamente. Se trata de preservar y propiciar las oportunidades para que cada individuo componente

de la sociedad acceda a los bienes materiales y espirituales que le permitan solventar todas sus necesidades, con lo que logrará su libertad, que desde el punto de vista moral, es ausencia de necesidades, y su perfeccionamiento.

Esta concepción de la política también supone la aceptación de que los seres humanos, además de libres, son esencialmente iguales y que, como seres iguales, tienen derecho a participar en su propio gobierno, opinión común a los regímenes democráticos o con esa aspiración, y participar permanentemente, no solo a través de la elección periódica de sus representantes gobernantes, sino, y será el rasgo más característico de un auténtico sistema democrático, participar diariamente en el gobierno.

¿Y cómo se logra esta participación? De una manera muy sencilla: exigiendo cotidianamente a los gobernantes el cumplimiento de sus obligaciones. O sea, exigiendo a los políticos el cumplimiento de sus deberes de políticos.

Deberes concretos del político.

En esta modesta charla trataré, entonces, de precisar los principales deberes del político.

Ya dijimos, pero conviene reiterarlo, que desde el punto de vista ético resulta absolutamente injustificable buscar el poder por el poder mismo. Su logro y ejercicio solo se justifica si a través del poder se adquiere la obligación ineludible de crear las condiciones sociales que posibiliten una vida social armónica sin lesión de los derechos individuales de cada uno de quienes integran la comunidad. El poder político que acepta la ética es el que se destina a beneficiar a la comunidad a través de acciones adecuadas.

El poder que no se propone lograr el bien común, la justicia social, el bienestar colectivo, o cualquiera otra fórmula que contenga el desideratum irrenunciable de la humanidad a ser dichosa en justicia y libertad, no tiene razón ética de existencia.

Estas altas finalidades de la política se traducen en deberes personales concretos de los hombres que dedican su esfuerzo, acción e inteligencia, para lograr el poder o ejercer el poder.

Si la política se propone el bien de una sociedad, debemos preguntarnos cuáles son las obligaciones del político.

Vocación.

En primer lugar para dedicarse a esta compleja actividad es conveniente tener vocación, entendida ésta como la natural aptitud para comprender los muy complejos problemas sociales a los que diariamente quien ejerce el poder debe enfrentarse, tanto más complejos cuanto más participan en ellos individuos o grupos que sostienen intereses legítimos encontrados o por lo menos diferentes. La vocación política implica en principio, la decisión de renunciar a una vida de tranquilidad personal y familiar en aras de dedicar todo el esfuerzo a la solución de los problemas sociales. Sin vocación, resultará casi imposible

ser practicante del oficio político. No confundo aquí la verdadera dedicación a la actividad política, por inusual que sea, con la más frecuente ocupación de buscar beneficio personal a través del desempeño de un cargo público o de un trabajo partidario. SE trata de estar conscientes de que la actividad política es la búsqueda del beneficio colectivo y que si en ocasiones no se logra, el que tiene vocación obtendrá de todas maneras satisfacción y alegría por el esfuerzo realizado. La vocación parece elemento necesario para un buen desempeño político.

Si ya aceptamos que no se debe aspirar al poder por el poder mismo, surge la obligación de que el político posea una convicción personal firme y un conjunto de ideas claras sobre las maneras en que se puede lograr el bien de la comunidad que recibe su esfuerzo, sea ésta municipal, estatal o nacional. Entre más amplia, mayor debe ser la visión del político.

El verdadero político no puede lograr el poder para desde allí improvisar su acción sin saber qué metas va a lograr; no puede tampoco ser un simple instrumento al servicio de propósitos cambiantes, aunque a veces, aparentemente, estén sostenidos por mayorías transitorias. El político es un dirigente y quien dirige orienta, no impone, orienta, pero debe tener la decisión y el valor para mantener el sentido de su dirección y hasta renunciar a su cargo si su honesta convicción no puede prevalecer.

Otro deber del político es la honestidad.

Honestidad: el político debe ser honesto en cuanto respete de manera absoluta los bienes que administra y no los distraiga de los fines a que están normativamente destinados, pero la honestidad política no se agota con este respeto, el político también debe estar consciente de sus propias capacidades y nunca aceptar el desempeño de puestos públicos para los que no esté preparado. La honestidad principia por el respeto a sí mismo y parte de ese respeto es conocer nuestra capacidad, si no se tienen conocimientos y facultades para ser financiero, no se debe aceptar ser Secretario de Hacienda, por ejemplo.

La eficiencia es una consecuencia de la conciencia de nuestras aptitudes y desde el punto de vista del interés de la comunidad, todos aquéllos que buscan el bien social deben responder a un trabajo eficiente, esto es, conseguir los fines naturales de la actividad que realicen. No será honesto el que acepte desempeñar un cargo para el que sabe no tiene capacidades.

Empleo responsable del lenguaje.

El político trabaja con la palabra. En muchas ocasiones, la palabra oral o escrita es el instrumento necesario para que quien se dedica a la actividad pública pueda realizar su función. En consecuencia, el uso adecuado de este instrumento resulta una obligación ética. Es reprobable que a sabiendas de que muchos vocablos tienen un contenido conceptual que rebasa su mero significado gramatical, se usen irresponsablemente. La propiedad y mesura en el uso del

lenguaje orientan y propician la asunción de actitudes de grupos y hasta de masas que facilitan la solución de conflictos, mientras que la desmesura e irreflexión irresponsable en el uso del lenguaje pueden ser origen e inspiración para violencias que a nadie benefician. Si un político que ejerce liderazgo en determinados conglomerados utiliza expresiones ambiguas o intencionalmente equívocas, causa daños sociales. No se puede decir, por ejemplo, ante una masa enardecida que se está dispuesto a llegar: "hasta las últimas consecuencias", porque muchos interpretarán que se está invitando a la violencia.

Se debe ser mesurado también en el planteamiento de discrepancias entre políticos que sostienen diferente ideología, postulados o programas de acción. Estar conscientes de que a veces las diferencias teóricas entre los ilustrados se traducen en pugnas violentas entre los no ilustrados. La razón que guía a los que saben se puede transformar en ira entre los que ignoran.

Congruencia.

El político debe ser congruente. No entrar en contradicciones por la variación de escenarios, evitar los dobles discursos, el querer complacer siempre al auditorio presente renunciando a sostener los verdaderos principios en los que cree. Se puede cambiar de ideas si se explica por la evolución de pensamiento y la adquisición de conocimiento que superan los que antes sustentaban nuestro parecer, pero no es lícito moralmente sostener hoy, sin motivo, lo contrario a lo que ayer se mantuvo.

Respeto al derecho.

La acción política incide siempre en comportamientos sociales. La acción política crea normas de derecho y las normas jurídicas permiten que las sociedades y los individuos puedan planear su acción comunitaria, si no existieran normas jurídicas nadie podría prever qué consecuencias se derivarían de sus acciones y el caos y la anarquía serían un fenómeno cotidiano que impediría la convivencia social. El político debe fomentar la convivencia social y en consecuencia, respetar la norma jurídica. El respeto a un estado de derecho resulta obligación ética ineludible de todos pero fundamentalmente de los políticos.

A través de la acción política, gubernamental o hasta de oposición, se puede cambiar el derecho y precisamente por eso es obligación ética respetarlo y fundar en él cada acto de funcionario, puesto que si la base jurídica no es suficiente para dar soporte a las acciones del político, éste puede, apoyado en basamento jurídico ya establecido, ampliar el derecho para hacerlo suficiente sustento de su accionar.

El respeto al derecho es tan importante para la acción política que si no se le tiene ésta se desvirtúa y se cae en la arbitrariedad. Dentro del respeto al Derecho ocupa lugar muy importante el respeto a los derechos humanos o garantías individuales.

No se nos escapa en que hay casos extremos en donde una acción política se justifica esgrimiendo argumentos morales para precisamente combatir un régimen jurídico injusto cuyo cumplimiento no se puede tolerar, en este caso el político debe enunciarlo con claridad y anteponer las altas finalidades de buscar el bien contra el contenido concreto de un régimen; pero si se predican las bondades de la ley, no es lícito violarla sino que hay la obligación de sostenerla.

Insistimos en que el respeto al derecho es obligación ética ineludible para el político.

La verdad.

El político debe ser veraz y luchar por conocer, mantener e informar la verdad en cualquier circunstancia e incluso ante los problemas más arduos. Cuando el gobernante o el político mienten no solamente lesionan a aquéllos a quienes interesa directamente el asunto de que se trata, sino que se daña a toda la comunidad, puesto que se fomenta la falta de credibilidad en las instituciones. A medida que la falta de credibilidad en las instituciones aumenta, se dificulta la buena conducción social. La falta de credibilidad se traduce en la adopción de una actitud de escepticismo y casi cinismo entre los gobernantes. Socava las bases jurídicas y sociales y a la larga el caos sobreviene.

Serenidad.

Es ánimo objetivo. Visión clara. Acción prudente. Análisis mesurado de un conflicto. Opinión precisa. La sociedad confía en la dirección del político, y sin serenidad no hay precisión en el mando. La falta de mando es vicio de orden.

Momentos críticos.

Existen momentos que ponen a prueba las convicciones y comportamientos éticos del político. Podríamos hablar de momentos "pico" y estos son, entre otros, los momentos de las campañas electorales. Cuando se viven estas campañas los actores políticos, partidos y candidatos sobre todo, tienden a exagerar, agrandan los defectos de los rivales y sus propias virtudes. Se establecen tendencias y proponen soluciones utópicas a graves problemas sociales a pesar de su absoluta inviabilidad. Entre menos posibilidades de ganar unas elecciones se tiene, mayores soluciones irrealizables se proponen. No queda comprometido quien sabe que a pesar de lo que ofrezca nunca tendrá la posibilidad real de cumplir su ofrecimiento, pero estas soluciones irrealizables desorientan a la comunidad, la confunden y la inhiben de participar en los esfuerzos que sí la acercarían a la real solución de sus problemas.

También en los momentos de campaña fácilmente se cae en ataques a los rivales que son verdaderas calumnias e infamias. Todas estas actitudes resultan éticamente reprobables y a la larga crean rencores y suspicacias de difícil

superación que agreden la sana convivencia. Es deseable, como una actitud más de congruencia, que el político exhiba en público sus mismas opiniones y su misma personalidad que sostiene en privado, sobre todo si su convicción ideológica íntima puede influir en el contenido de un programa de su posible gobierno o acción política. Vgr.: Si cree en el aborto es posible que llegue a defender una ley que lo permita y sería inmoral que se lo ocultase a sus electores potenciales.

Diligencia y prudencia.

El político debe ser también diligente, esto es, dedicar su esfuerzo de manera constante y ordenada hacia la consecución de las soluciones que busca. La indolencia es éticamente reprobable más para quienes tienen una representación general o aspiran a tenerla.

La prudencia debe ser otra característica de quien aspire a desempeñar funciones públicas. Prudencia es prever y también es saber y quien previene anticipa soluciones y evita agobios a la comunidad a la que trata de servir. Todas estas obligaciones éticas del político están vinculadas, se complementan y también es obligación fomentarlas y acrecentarlas.

Comunicación adecuada.

Entre el gobernante y los gobernados, entre el dirigente y los dirigidos, entre el político y la comunidad debe haber una comunicación fluida, lo más constante posible, clara y sencilla, desde luego leal y por lo tanto veraz. Es fácil enunciar esta necesidad pero muy difícil el cumplirla.

Para establecer tal comunicación es indispensable utilizar los medios de comunicación social y su actuar estos medios responden, muchas veces, a sus propios intereses y su eficacia está limitada por defectos de difícil superación.

Vivimos en una comunidad en donde la generalidad de los medios tiene como propósito principal obtener utilidades al practicar la ocupación de informar, y no es raro que a este fin se subordine el contenido y la forma de la información. Si lo que quiere es ganar dinero, se resaltará la noticia o el comentario que beneficie a quien la paga y se minimizará lo que pueda favorecer a quien no puede pagar.

Todos sabemos que uno de los aspectos más importantes para poder comunicarse con los representados es el manejo de los medios de comunicación. No se puede evitar su uso, pero la relación con ellos conviene establecerla, desde un principio, en términos diáfanos, convenir en lo que será publicidad y dejar en libertad lo que sea comentario. En esta charla, no pretendemos un análisis profundo de la problemática y desarrollo de los medios de comunicación, solo precisamos que el político si bien no puede prescindir de ellos, tampoco debe entregarse a los mismos y que es su obligación no usarlos para atacar a sus contrincantes inmotivadamente o utilizarlos para crear estridencias y desorientaciones que solo producen escándalo.

Casi para terminar sucumbo a la tentación de narrar la anécdota de aquel político, que al iniciar una campaña reunió a su familia y, palabras más, palabras menos, le dijo: Les pido que ya no lean los periódicos, no escuchen la radio y no vean la televisión y que si lo hacen no hagan caso de las notas en que me ataquen o me alaben, puesto que las primeras las pagan mis enemigos y las segundas las pago yo.

Esto es lo que resultaría inmoral, utilizar los medios para desprestigios personales o para la difusión de mentiras.

Estoy seguro que estoy muy lejos de haber agotado los que juzgo deberes éticos concretos de quienes se dedican a la actividad política y más lejos aún de haber establecido con claridad las relaciones entre la actividad política y la actividad ética, allí dejo claro que no creo en la neutralidad ética de la actividad política, pero con que me haya referido a los principales deberes concretos y mi referencia resulte útil para quienes me han escuchado, me sentiré satisfecho.

NOTAS PARA LA CONFERENCIA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO[20]

Jueves 19 junio de 1997

En una plática sobre la ética profesional del abogado, conviene empezar por explicar qué debe entenderse por ética y luego qué es y en qué consiste la profesión de abogado.

Nociones de ética.

La ética es la ciencia normativa de la actividad humana en orden al bien. Es ciencia por ser una disciplina racional, un conjunto de conocimientos sistematizados, es normativa porque establece mandatos que tienden a regir la conducta del hombre como ser libre y se dirige hacia el bien porque quiere que a través del cumplimiento de lo mandado los humanos alcancen su valor supremo, vivan como deben vivir para lograr su plena realización. El bien consistirá en que cada ser se realice plenamente, en todas sus potencialidades.

El Maestro Eugenio Trueba da la siguiente noción de la ética: "Ciencia que se ocupa de conocer y establecer las normas de la actividad libre del hombre".

Explica que "La actividad libre del hombre puede recaer sobre objetivos susceptibles de calificarse de positivos o negativos (nociones de bien y mal), según que sirvan a nuestro ascenso o a nuestro detrimento, en cuya virtud la moral resulta también disciplina conductora hacia la felicidad que todos los hombres, sin excepción, anhelamos".

Agrega: "Observándonos a nosotros mismos, podemos comprobar que siempre tratamos de realizar u obtener algo que apetecemos como conveniente a nuestro ser. Somos seres en pos de los satisfactores que sirven para remediar alguna o algunas de nuestras deficiencia". Precisa: "Nada se quiere ni nada se desea si no es bajo el signo del bien y hacia él tiende la voluntad".

Substancialmente estas dos nociones de lo que entendemos por ética se identifican.

Es claro que la ética parte de la existencia de la libertad como facultad de optar, de elegir entre varias posibilidades, con la conciencia de que la libertad absoluta no se da, pues la limitan circunstancias de origen, formación, de herencia, y otras, pero sin aceptar fatalismos deterministas que restarían cualquier mérito al acto humano y harían ocioso el que nos ocupáramos de calificarlo como debido o indebido.

En términos modernos podríamos afirmar que la ética es una "ciencia globalizadora", a la que le interesa el hombre y sus acciones totales y, aunque pueden establecerse deberes específicos no entran nunca en contradicción con

[20] El Lic. Montes García se desempeñaba como abogado consultor.

las reglas generales de conducta debida de cualquier hombre. Es válido hablar de una ética formal o general y otras particulares que se refieren a deberes específicos para cada dedicación o profesión singular, por eso se habla de Ética Profesional del Abogado, de Bioética, que empezó por ser Ética Médica, Ética del Ingeniero.

La profesión de abogado.

La palabra abogado se usa para designar a aquella persona que defiende los intereses de otro ante los tribunales u otras autoridades, basando su defensa en lo que diga la ley.

Abogado viene de la voz latina advocatus que proviene de la partícula "ad", que significa "para" y "vocatus" que significa "llamado".

En la historia de la humanidad primero se practicó la abogacía y después se reconoció la profesión de abogado.

Desde que el hombre vive en sociedad sujeta su comportamiento a determinadas reglas que le permiten precisamente la convivencia social y que la comunidad conserve una armonía general que facilite la vida de todos y permita que unos a otros suplan las indudables carencias individuales. Antes de que la abogacía se conociese como una profesión ya había habido necesidad de demandar servicios de defensa para resolver problemas en donde se daban intereses opuestos.

El ser humano no solamente se enfrenta a sus semejantes sino que también a la autoridad cuando ésta usa mal su poder.

La abogacía surgió naturalmente, como algo propio de la vida social en la que inevitablemente se dan los conflictos. La eminencia de la abogacía consiste en que procura el mantenimiento de las relaciones humanas dentro de un cuadro propicio al mutuo respeto en el que se salvaguardan los derechos de cada quien.

La abogacía es un trabajo que bien realizado contribuye al mantenimiento de la armonía social y aunque se ejerza en forma independiente y libre, aunque no se ocupe ningún cargo público o de gobierno, la abogacía tiene este carácter: Es una profesión cuyo ejercicio es de utilidad pública, puesto que al defender los derechos individuales necesariamente lucha porque prevalezcan también los derechos sociales. Todo procedimiento es de interés colectivo.

Al ser la abogacía una profesión de interés social resulta primordial que los abogados o quienes pretendan serlo, tengan presente que al ejercerlo no solamente desarrollan un modo de vida personal, sino que su acción repercutirá necesaria y forzosamente en la vida de la comunidad.

El mal ejercicio de la abogacía ha dado lugar a que exista una mala opinión de los abogados y postulantes. Se les considera más creadores de problemas que resolutores de ellos y a veces la mala opinión de los abogados es absolutamente justificada. (Poner varios casos del mal ejercicio profesional citando ejemplos de los abogados que se dedican a cobranza, a ejecutivos mercantiles, a juicios laborales con honorarios altísimos).

Sin embargo, nunca hay que confundir a los malos abogados con la abogacía; los primeros merecen los juicios críticos, la segunda es una profesión respetable.

Con base en el sentido común procuraremos establecer cuáles son las principales obligaciones éticas de los abogados para que siquiera los que aspiran a serlo no tengan la disculpa de ignorar sus deberes morales.

Adelantemos que la práctica del derecho, cualquiera que sea el campo en que se actúe no escapa nunca al juicio ético. El ejercicio de lo jurídico no puede ser neutral. Siempre habrá que definirse o se prefiere sólo el éxito a cualquier costo o se lucha porque se realice la justicia o por lo menos se cumpla la ley.

El abogado ante todo debe ser un hombre de bien.

La primera obligación del abogado debe ser cumplir las condiciones legales para el ejercicio de la profesión (extenderse, Ley de Profesiones, colegiación obligatoria).

Otro deber ético del abogado es la información tanto en su ciencia como la información exhaustiva del caso concreto (impericia, negligencia y dolo. Necesidad de estar siempre actualizado).

Prudencia y previsión.

Prudencia significa ver lejos.

Necesidad de un buen uso del lenguaje que es instrumento de trabajo. Toda exposición debe estar al servicio de las ideas de fondo y debe procurar concisión, claridad y una pulcritud respetuosa.

El abogado debe ser autónomo e independiente.

Debe saber interpretar la ley.

Debe ser leal a su cliente, al juez, a los testigos, a los peritos y a la contraparte.

La prevaricación como falta grave a la ética.

El abogado debe ser recatado en su ejercicio profesional y guardar el secreto profesional.

Distinguir entre secreto natural que es el que alude a aquellas noticias que no deben divulgarse cuando signifiquen perjuicio o desprestigio para las personas; el secreto prometido que es aquél en que una vez conocido el confidente promete no revelarlo y el secreto comiso que es el que se da a conocer bajo promesa previa y establecida de guardarlo o bajo promesa tácita cuando se halla implícita en el ejercicio de una profesión. Este es el caso del abogado.

El abogado debe ser veraz y tender siempre a descubrir la verdad.

La mentira es delito. Fraude procesal. Testigos y peritos.

El abogado tiene derecho a cobrar por su trabajo de forma moderada, pero tendrá siempre la obligación ética de trabajar gratuitamente a favor de quienes lo requieran verdaderamente.

Obligación principal ética.

La justicia en la causa.

PARTICIPACIÓN EN EL HOMENAJE AL LIC. EUGENIO TRUEBA OLIVARES

Universidad de Guanajuato
Guanajuato, Gto.
5 de noviembre de 1997

Sr. Lic. Juan Carlos Romero Hicks, Rector de la Universidad de Guanajuato,
Sr. Dr. Manuel Vidaurri Arechiga, Director de la Facultad de Derecho,
Señor Licenciado y Maestro Eugenio Trueba Olivares,
Señoras y señores,
Compañeros estudiantes:

Eugenio Trueba Olivares es un auténtico valor del mejor Guanajuato.

Durante su vida, su actividad ha abarcado múltiples gamas del quehacer humano, siempre con responsabilidad y honestidad intelectual ejemplares.

Eugenio Trueba Olivares es abogado y, como tal, no sólo ha ejercido la profesión postulando en su despacho, sino que ha sido maestro, juez, asesor de diversos funcionarios públicos, él mismo ha sido servidor público, Rector de la Universidad de Guanajuato en dos ocasiones, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y siempre, siempre, consejero de buena fe de todos los que han acudido solicitando su orientación: familiares, alumnos, amigos, abogados y clientes.

Su calidad de abogado ha matizado toda su obra: la de maestro, la de director teatral, la de ensayista, la de cuentista, la de novelista, en fin la de escritor, porque todos estos géneros ha cultivado e, insisto, su vocación por el Derecho se muestra en cada una de sus acciones.

Su vocación jurídica está reforzada por una lúcida conciencia ética, no encuentra y no hay contradicciones entre lo moral y lo jurídico.

Mi convivencia con el licenciado Trueba, siempre como su alumno, me permite afirmar que hay varias preocupaciones constantes que dirigen su trabajo. Le preocupa Dios, la religión, el Derecho, lo bueno, la justicia, la moral, el hombre y su origen, la persona humana, este ser pensante, libre, social, capaz de proponerse fines, que se siente responsable de sus actos y reclama el mérito o la culpa que por ellos le corresponda, que aspira a la trascendencia, que en su interior sabe, intuye, siente que su capacidad de razonar propia de un ser que no sólo está constituido por materia sino también por espíritu, no puede, no debe concluir con la finitud de la vida presente; le parece una gran frustración el que la muerte, que no juzga una consecuencia natural de la vida, nos condujese a la nada absoluta. Está seguro que el innato afán de perfeccionamiento humano se logra de alguna forma cuando el espíritu trasciende a

una realidad más plena que permita un más alto grado de realización integral de la persona.

Así, en su tratado de *Filosofía Jurídica: El Hombre, la Moral, y el Derecho*, sostiene: "…el yo de cada uno de nosotros, no se experimenta como una simple masa orgánica predeterminada en su existencia toda por el fenómeno cósmico. No nos sentimos como un complejo somático sin vocación alguna, conducidos por la combustión o por los movimientos moleculares fatales. Nuestro cuerpo orgánico es una condición de nuestra vida, pero nuestra vida no es sólo nuestro cuerpo. El mármol es condición de la estatua, pero no su causa formal, ni es la estatua misma. Reducir mi yo a la organización somática es desconocer todo lo que soy, mis anhelos, mis deseos conscientes de felicidad, mi vocación por la verdad. En aquella organización somática, riquísima y compleja, tan admirable por mil conceptos, no reside empero toda mi existencia ni toda mi realidad. Mi quididad, mi identidad, no es sólo mi cuerpo".

Más adelante, en coincidencia con Agustín Basave Fernández del Valle, por cierto filósofo mexicano que en diversas ocasiones ha comentado muy elogiosamente la obra de don Eugenio, afirma: El hombre "…busca la verdad en su entorno y en este afán multiplica sus herramientas…". "También busca la verdad en sí mismo. Se pregunta qué es o quién es, a dónde va. De esta preocupación central, nace el desiderátum que aconseja conocerse a sí mismo. No hay formación auténtica que no repose en un decoroso conocimiento del hombre en cuanto hombre".

Desde el punto de vista moral, después de analizar la libertad humana y las tendencias naturales del hombre hacia su bien, Trueba afirma que: "…El hombre es un ser religioso referido a Dios. El alma humana apunta al sumo bien y sólo por causa de algún desorden axiológico puede depositarse esa tendencia en un bien finito inferior, pero aún en este caso se obedece a aquella finalidad. Todo espíritu humano quiere ir más allá de sus límites, hacia lo Absoluto, aunque a veces se sustituya a Dios por un ídolo". "…La búsqueda del verdadero Absoluto, la religiosidad por Dios, no es una propiedad fortuita, sino un fenómeno vital básico…". "El hombre es un ser teotrópico y no tendrá reposo sino en Dios. Se trasciende".

"Ciertamente la mera aspiración de plenitud no prueba la existencia del sumo bien, pero esa aspiración, en cuanto hecho cierto, debe tener sentido".

Eugenio Trueba es un filósofo católico. Su pensamiento está definitivamente influido por la religión que profesa, sin que caiga nunca en el ejercicio excesivo del rito, en el fanatismo o en el clericalismo.

Su religión ha sido su norma de vida. Sostiene que el cristianismo es uno de los hechos históricos de mayor trascendencia, que penetró tan hondamente en la conciencia occidental que transformó las costumbres y la vida toda. La influencia cristiana originó la llamada filosofía perenne. Es el cristianismo una doctrina de amor y salvación.

Una aportación fundamental del cristianismo a la filosofía es la del amor como norma fundamental de la existencia. El cristianismo agrega a las virtudes de rancia tradición hebrea de fe y esperanza, la nueva e importantísima de la caridad. No solamente hay que amar a Dios, también hay que amar al prójimo, quien quiera que sea. La doctrina y la filosofía cristianas conducen a la justicia social, a la dignificación de la mujer y de los esclavos; el principio y fin de la vida y de todas las cosas es Dios y el hombre debe ordenar su existencia conforme a la tendencia natural de plenitud que es la vuelta al Creador. El cristianismo, afirma, conmocionó al mundo y se tradujo en instituciones jurídicas y políticas, en las costumbres, en la filosofía, y sobre todo en la filosofía moral.

Pienso que acepta la tesis tomista de que la inteligencia humana llega al conocimiento de Dios cuando busca las causas y principios primeros. La verdad absoluta y la bondad absoluta que buscan tanto nuestra inteligencia como nuestra voluntad, sólo se hallan en Dios. Todos los bienes finitos son deseables en la medida en que pueden ordenarnos al fin último y el hombre debe obrar de acuerdo con su tendencia hacia su bienaventuranza, es decir hacia Dios.

El cristianismo de Eugenio Trueba, repito, no sólo influye su pensamiento sino que ha regido su vida diaria, su vida familiar, y le ha permitido serenidad y prudencia, hasta un grado estimable de abnegación, en los contratiempos cotidianos que, como a muchos, le ha tocado enfrentar.

En su vida privada y en su vida pública ha ejercido una virtud que por sí misma sería suficiente para respetarlo. La virtud de la congruencia.

Otra preocupación innegable del Maestro Trueba es el Derecho. El Derecho como instrumento para facilitar no sólo la convivencia social, sino el perfeccionamiento integral del hombre. El Derecho como instrumento que ayuda a superar las limitaciones connaturales de la persona, el Derecho como parte de un orden normativo único, admitiendo que entre las normas de conducta morales, jurídicas y de mera urbanidad, convencionalismos sociales, existen importantes diferencias de grado, pero no separación esencial. En sus ensayos jurídicos y en su clase demuestra que toda norma de conducta pretende la realización de un valor, pequeño o grande; de santidad, las religiosas; de bondad, las morales; de justicia, seguridad y certeza, las jurídicas; y de hacer más grata la convivencia, los convencionalismos; pero, en cuanto destinadas a la persona humana, todas las normas integran un único orden normativo que es todo aquello que conviene al desarrollo humano en lo individual y en lo colectivo. Nos convence que las pregonadas características de interioridad, autonomía, unilateralidad e incoercibilidad que se atribuyen a la norma moral y las de exterioridad, heteronomía, bilateralidad y coercibilidad que se predican de las normas jurídicas, constituyen un método útil para estudiar el Derecho y la Moral, pero estas diferencias, insisto, son graduales, importantes, pero no esenciales.

Es Eugenio Trueba un tratadista de lo jurídico que se atreve a esbozar una noción de la justicia. Sostiene que el Derecho debe realizar la justicia; reconoce la dificultad de definirla porque se trata de una noción de jerarquía tan alta como la que corresponde a los conceptos de bien y belleza. Pareciéramos estar en presencia de indefinibles. Sin embargo, distingue entre las dificultades de la definición de justicia y la verdad de la justicia; afirma que se nos presenta como un valor de necesidad indiscutible, cuya sola mención despierta en todos afanes humanos tan irreductibles como el más categórico dato vital.

Es cierto, dice, que los más esclarecidos espíritus de todas las épocas se han ocupado de la justicia como de un tema inexcusable y perturbador y, además, el transcurso vital de cada hombre gira en buena parte alrededor de la justicia, con reiteración y contundencia. "Casi no hay aspecto de nuestras relaciones para con los otros que no sometamos de inmediato al juicio de lo justo o de lo injusto".

La dificultad principal de definir la justicia radica en determinar cuál es su contenido y si bien sabemos que en esencia consiste en dar a cada uno lo suyo y en tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, también sabemos que es muy difícil averiguar qué es lo suyo de cada quién, por eso, después de analizar múltiples teorías, el Maestro Trueba nos da una orientación, en mi opinión, altamente aceptable. Nos dice que: "Hay multitud de ideas directrices que nos ilustran e informan objetivamente para saber lo que es justo". "…Hay elementos universales e invariables en el modo humano de pensar y de sentir sobre la justicia que tienden al bien del hombre y que nos colocan en una base firme para su conocimiento. Casi todos podemos identificar una acción injusta".

Concluye que la justicia es más un problema de voluntad que de conocimiento y que puede deducirse que la falta de fórmulas exactas sobre su contenido no significa desconocimiento; que hay vías orientadoras, experiencias propias e históricas, opiniones prudentes, sentimientos universales e instituciones suficientes para procurarla o, al menos, para aproximarse a ella.

Cree que el problema de la justicia no representa una crisis de orden especulativo, sino que es un problema práctico, de ejercicio, de buena voluntad. Si muchas veces no se realiza es por fallas de conducta y no por ignorancia de la medida. Un mundo que observase un mínimo de normas justas, perfectamente conocidas, y al alcance de todos, sería un mundo mejor. Las medidas de igualdad y proporcionalidad son asequibles en lo fundamental e iluminan las conciencias. La voluntad de observancia es la que flaquea y defrauda. Debemos combatir con valentía ese vicio humano que consiste en achacar los fracasos sólo a las teorías o a los programas y no a su ejecución. Hay un impulso que nos inclina a declararnos equivocados o ignorantes en vez de infractores. Es el mismo impulso que nos lleva a excusar nuestras desviaciones alegando que no sabíamos qué era lo justo, en vez de reconocer nuestras injusticias, así seamos los primeros en invocar la justicia cuando somos las víctimas.

Coincido con el maestro Trueba en que: "existe una serie de normas objetivas fundamentales sobre los derechos del hombre y de la sociedad, en las cuales ha cristalizado la justicia" y que existe también una regla de oro que es pauta valiosísima para actualizar la justicia: "No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Haz a los otros lo que quieres que te hagan a ti".

Estoy seguro que ni con mucho he agotado la profundidad de sus ensayos y sus pensamientos.

El trato directo.

La primera imagen que recuerdo de don Eugenio es la de Rector de la Universidad de Guanajuato y maestro de Introducción al Estudio del Derecho, fui su alumno entonces y lo sigo siendo ahora, pero en aquellos momentos cómo nos imponía su presencia. Bastaba que pasara lista de asistencia para que captara nuestra atención, los que asistimos a sus cátedras lo sabemos ilustrado en las materias que impartía; cumplido en su desempeño, tanto que siempre elaboró textos que sirvieron de guía a los estudiantes. Conocimos sus apuntes de *Introducción al Estudio del Derecho* y luego *Derecho y Persona Humana*, *El hombre, La Moral y el Derecho, La Interpretación de la Ley* y *Guía Temática de Filosofía del Derecho* que desarrollan sus preocupaciones docentes. Cuando sirvió la cátedra de Ética Profesional del Abogado elaboró *Ética Profesional para el Ejercicio del Derecho* y en la especialidad de notaria, algunos apuntes sobre los reglamentos municipales.

Su desempeño magisterial nunca concluyó con la impartición de sus clases, se identificó tanto con gran número de sus alumnos que sigue orientando su ejercicio profesional. Me cuento entre ellos. No sólo enseñaba, formaba y estaba atento a auxiliar en la solución, incluso, de las carencias materiales de sus discípulos más necesitados. No fui el único al que recomendó para conseguir un trabajo que le permitiera continuar sus estudios.

La Universidad que rigió era muy diferente, en sus condiciones materiales, a la actual. Verdaderamente pobre, a pesar de lo cual cumplió su cometido e incluso extendió sus servicios durante las rectorías del Licenciado Trueba, quién se preocupó de que siempre hubiera un gasto inferior al ingreso y no permitió ningún crecimiento burocrático excesivo.

Me parece ahora necesario ocuparme del hombre, del ser humano con el que he tenido el privilegio de convivir. Es un hombre sencillo, amable; a veces parece hosco porque un defecto visual le impide reconocer de lejos a las personas, pero quienes lo tratamos a diario, después de reconocer sus atributos intelectuales, nos admiramos de esas y otras virtudes. No cabe duda que la sencillez es nota característica de grandes valores.

Eugenio Trueba cultiva una gran afición por el teatro, es actualmente director del Teatro Universitario, del que fue cofundador en 1953 junto con Armando Olivares Carillo, Enrique Ruelas, Luis Pablo Castro y otros; además ha

creado y dirige otro cuadro guanajuatense: "El Barretero". Disfruta cultivando esta afición, se enoja, grita, gesticula en los ensayos y comparte la satisfacción de recibir aplausos del público cuando culmina la presentación de una obra. Escribe teatro en mucho por divertirse, pero también por señalar conductas ejemplares ante la comunidad de la que forma parte. Hasta en el teatro, en la novela y en el cuento se deja sentir su vocación de abogado, por eso ha montado y adaptado "El Alcalde de Zalamea", "Crimen en Cuatro Versiones" y, para mí, gratísimamente recordada "Por los Intereses Colectivos". Su cuento "Un Juez de Segunda" demuestra otra vez, sus preocupaciones jurídicas.

Eugenia Trueba es un hombre preocupado por los problemas y los fenómenos sociales. Recuerdo con claridad un hecho que lo pinta de cuerpo entero: cuando en la Universidad de Guanajuato se dio un movimiento estudiantil, anárquico, confundidor y sin finalidades claras, Eugenio Trueba, Rector, renunció a la rectoría a fin de poder tomar partido, con mayor libertad, por la defensa de la Universidad y el catedrático, el escritor, el abogado, participó en la defensa masiva de la Universidad y en mítines públicos sin ocultar su pensamiento y su convicción. No fue extraño oírlo decir encendidos discursos defendiendo el respeto a la independencia y la autonomía universitarias, proclamando que nadie, gobierno, partidos políticos, o elementos religiosos, tenían derecho a apoderarse y a dirigir el trabajo universitario, menos a lesionar las libertades de cátedra e investigación.

Lo vi también, en privado, llamar la atención de algún gobernante cuando en un problema personal pretendió pasar por alto normas jurídicas y expresarle con energía, en su carácter de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que el derecho era para todos y que el más obligado a acatarlo era quien gobernaba.

A pesar de sus méritos nunca he visto que adopte poses majestuosas o que se considere acreedor a grandes reconocimientos. Por el contrario, le gusta no tomarse muy en serio, hace chistes sobre su modo de ser y permite que sus hijos también los hagan, "le tocan violín" que es una cariñosa llamada de atención cuando se empieza a poner solemne. Es excelente conversador y le gusta asistir al café, no a perder el tiempo sino a ganarlo, pues en las mesas de café se han planteado, planeado y decidido acciones que al final resultaron benéficas, tales como hacer la carta geográfica del Estado de Guanajuato, formular una Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato y de la Universidad, o agregar una escuela más a la propia Universidad de Guanajuato. Recuerdo que en algún periódico se publicó que siendo rector debería de dejar de asistir al café y, medio en broma, medio en serio, su comentario fue: primero dejo la rectoría.

Gran aficionado y conocedor de la "fiesta taurina" se permite presumir de su buen desempeño como juez de plaza en Guanajuato y San Miguel de Allende.

Podría seguir narrando anécdotas que dibujan los atributos del Licenciado Trueba y enumerando sus merecimientos para ser reconocido. Eso haría inacabables estos apuntes que ya deben concluir, los termino afirmando que: por lo que ha beneficiado con su trabajo como Rector y como Maestro a la Universidad de Guanajuato, creador del edificio de la Escuela de Minas, de la Escuela de Agricultura, de Radio Universidad y de Teatro Universitario entre otras cosas; por sus cátedras de Introducción al Estudio del Derecho y Filosofía del Derecho, Ética Profesional del Abogado, formadoras de abogados y no solo instructoras; por sus libros de ensayo y de otros temas; por su actividad cultural en conferencias y teatro; por su diario, honrado y honesto ejercicio de la profesión de abogado como juez, como consejero y como postulante, que cumple con el mandato de estudiar para adquirir sabiduría y poder orientar y obtener lo justo, hasta en sus emolumentos, considerando que a la profesión le da valor la sociedad y por esos sus servicios deben estar al alcance de todos; por su congruencia vital; por su ejemplo diario; porque ha engrandecido a Guanajuato y porque lo quiere; por su sencillez y por su vida ejemplar, le reiteramos el respeto y la estimación que le tenemos y que usted tan limpiamente se ha ganado.

IMPORTANCIA SOCIAL DE LA FUNCIÓN DEL DEFENSOR DE OFICIO EN MATERIA PENAL: FINALIDADES JURÍDICAS Y ÉTICAS

6 de noviembre de 1997

C. Lic. Socorro Mendoza.

…

Llama la atención que tanto la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio en Materia Penal del Estado de Guanajuato, cuyas últimas reformas se promulgaron el 18 de julio de 1986, como la Ley de la Defensoría de Oficio Federal publicada el 9 de febrero de 1922, no contengan ninguna referencia en su letra a las altas finalidades jurídicas y éticas de la defensoría de oficio en materia penal.

La Ley de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial el 17 de junio de 1997, hace ya referencias, aunque raquíticas, a estas altas finalidades, así el artículo 1º señala:

> "Art. 1º.- Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto regular la institución de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal y proveer a su organización y funcionamiento, así como garantizar el acceso real y equitativo a los servicios de asistencia jurídica, para la adecuada defensa y protección de los derechos y las garantías individuales de los habitantes del Distrito Federal".

Y el artículo 34, fracción XIII, dice:

> "Art. 34.- Son obligaciones del defensor de oficio: … XIII.- En general, demostrar sensibilidad e interés social en el desempeño de sus funciones y, al efecto, atender con cortesía a los usuarios y prestar los servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa".

En estas modestas palabras se resume la importancia social de la función del defensor de oficio.

El trabajo principal de quien es defensor de oficio consiste en utilizar su ciencia jurídica para defender a aquellos acusados a quienes se les imputan delitos y que normalmente son los más desamparados por carencia de riqueza material o por carencia de conocimientos. La esencia de este desempeño es el ejercicio de la profesión de abogado y, desde luego, el desempeño ético de esta profesión.

Los deberes morales que tiene el abogado los tiene desde luego el defensor de oficio, puesto que todas las leyes exigen para ostentar este carácter el que primero se sea "Abogado" o "Licenciado en Derecho".

Conviene entonces que nos preguntemos cuáles son las principales ocupaciones del abogado bajo la aceptación de que éstas lo serán también del defensor y otras específicas por el cargo que desempeñan.

Si vamos a hablar de obligaciones éticas, conviene empezar por explicar qué debe entenderse por ética y luego qué es y en qué consiste la profesión de abogado.

Nociones de ética.

La ética es la ciencia normativa de la actividad humana en orden al bien. Es ciencia por ser una disciplina racional, un conjunto de conocimientos sistematizados, es normativa porque establece mandatos que tienden a regir la conducta del hombre como ser libre y se dirige hacia el bien porque quiere que a través del cumplimiento de lo mandado los humanos alcancen su valor supremo, vivan como deben vivir para lograr su plena realización. El bien consistirá en que cada ser se realice plenamente, en todas sus potencialidades.

El Maestro Eugenio Trueba da la siguiente noción de la ética: "Ciencia que se ocupa de conocer y establecer las normas de la actividad libre del hombre".

Explica que "La actividad libre del hombre puede recaer sobre objetivos susceptibles de calificarse de positivos o negativos (nociones de bien y mal), según que sirvan a nuestro ascenso o a nuestro detrimento, en cuya virtud la moral resulta también disciplina conductora hacia la felicidad que todos los hombres, sin excepción, anhelamos".

Agrega: "Observándonos a nosotros mismos, podemos comprobar que siempre tratamos de realizar u obtener algo que apetecemos como conveniente a nuestro ser. Somos seres en pos de los satisfactores que sirven para remediar alguna o algunas de nuestras deficiencias". Precisa: "Nada se quiere ni nada se desea si no es bajo el signo del bien y hacia él tiende la voluntad".

Substancialmente estas dos nociones de lo que entendemos por ética se identifican.

Es claro que la ética parte de la existencia de la libertad como facultad de optar, de elegir entre varias posibilidades, con la conciencia de que la libertad absoluta no se da, pues la limitan circunstancias de origen, formación, de herencia, y otras, pero sin aceptar fatalismos deterministas que restarían cualquier mérito al acto humano y harían ocioso el que nos ocupáramos de calificarlo como debido o indebido.

En términos modernos podríamos afirmar que la ética es una "ciencia globalizadora", a la que le interesa el hombre y sus acciones totales y, aunque pueden establecerse deberes específicos, no entran nunca en contradicción con las reglas generales de conducta debida de cualquier hombre. Es válido hablar de una ética formal o general y otras particulares que se refieren a de-

beres específicos para cada dedicación o profesión singular, por eso se habla de ética profesional del abogado, de bioética, que empezó por ser ética médica, de ética del ingeniero.

Noción de la profesión de abogado.

La palabra abogado se usa para designar a aquella persona que defiende los intereses de otro ante los tribunales u otras autoridades. Basando su defensa en lo que diga la ley.

Abogado viene de la voz latina advocatus que proviene de la partícula "ad", que significa "para" y "vocatus" que significa "llamado".

En la historia de la humanidad primero se practicó la abogacía y después se reconoció la profesión de abogado.

Desde que el hombre vive en sociedad sujeta su comportamiento a determinadas reglas que le permiten precisamente la convivencia social y que la comunidad conserve una armonía general que facilite la vida de todos y permita que unos a otros suplan las indudables carencias individuales. Antes de que la abogacía se conociese como una profesión ya había habido necesidad de demandar servicios de defensa para resolver problemas en donde se daban intereses opuestos.

El ser humano no solamente se enfrenta a sus semejantes sino que también ala autoridad cuando ésta usa mal su poder.

La abogacía es un trabajo que bien realizado contribuye al mantenimiento de la armonía social y aunque se ejerza en forma independiente y libre, aunque no se ocupe ningún cargo público o de gobierno, la abogacía tiene este carácter: Es una profesión cuyo ejercicio es de utilidad pública, puesto que al defender los derechos individuales necesariamente lucha porque prevalezcan también los derechos sociales. Todo procedimiento es de interés colectivo.

Al ser la abogacía una profesión de interés social resulta primordial que los abogados o quienes pretendan serlo, tengan presente que al ejercerla no solamente desarrollan un modo de vida personal, sino que su acción repercutirá necesaria y forzosamente en la vida de la comunidad.

El mal ejercicio de la abogacía ha dado lugar a que exista una mala opinión de los abogados y postulantes. Se les considera más creadores de problemas que resolutores de ellos y a veces la mala opinión de los abogados es absolutamente justificada. (Poner casos del mal ejercicio profesional citando ejemplos de los abogados que se dedican a cobranza, a ejecutivos mercantiles, a juicios laborales con honorarios altísimos).

Sin embargo, nunca hay que confundir a los malos abogados con la abogacía; los primeros merecen los juicios críticos, la segunda es una profesión respetable.

Con base en el sentido común procuraremos establecer cuáles son las principales obligaciones éticas de los abogados para que siquiera los que aspiran a serlo no tengan la disculpa de ignorar sus deberes morales.

Adelantemos que la práctica del derecho, cualquiera que sea el campo en que se actúe no escapa nunca al juicio ético. El ejercicio de lo jurídico no puede ser neutral. Siempre habrá que definirse o se prefiere solo el éxito a cualquier costo o se lucha porque se realice la justicia o por lo menos se cumpla la ley.

El abogado ante todo debe ser un hombre de bien.

La primera obligación del abogado debe ser cumplir las condiciones legales para el ejercicio de la profesión (extenderse; Ley de Profesiones, colegiación obligatoria).

Otro deber ético del abogado es la información tanto en su ciencia como la información exhaustiva del caso concreto (impericia, negligencia y dolo. Necesidad de estar siempre actualizado).

Prudencia y previsión.

Prudencia significa ver lejos.

Necesidad de un buen uso del lenguaje que es instrumento de trabajo. Toda exposición debe estar al servicio de las ideas de fondo y debe procurar concisión, claridad y una pulcritud respetuosa.

El abogado debe ser autónomo e independiente.

Debe saber interpretar la ley.

Debe ser leal a su cliente, al juez, a los testigos, a los peritos y a la contraparte.

La prevaricación como falta grave a la ética.

El abogado debe ser recatado en su ejercicio profesional y guardar el secreto profesional.

Distinguir entre secreto natural que es el que alude a aquellas noticias que no deben divulgarse cuando signifiquen perjuicio o desprestigio para las personas; el secreto prometido es aquel en que una vez conocido el confidente promete no revelarlo y el secreto comiso que es el que se da a conocer bajo promesa previa y establecida de guardarlo o bajo promesa tácita cuando se halla implícita en el ejercicio de una profesión. Este es el caso del abogado.

El abogado debe ser veraz y tender siempre a descubrir la verdad.

La mentira es delito. Fraude procesal. Testigos y peritos.

El abogado tiene derecho a cobrar por su trabajo de forma moderada pero tendrá siempre la obligación ética de trabajar gratuitamente a favor de quienes lo requieran verdaderamente.

Obligacion principal ética.

La justicia en la causa.

Obligaciones específicas del defensor de oficio.

Como ya dijimos, el defensor de oficio en materia penal representa, habla y defiende a los más débiles, a los que no tienen voz y no pueden pagar por ser defendidos. Luego las obligaciones de probidad en el desempeño y solidaridad

social al no cobrar a su defendido, se maximizan. Resulta muy importante no lucrar con este cargo, si se pretende hacerlo se pervierte el ejercicio del mismo de manera lamentable y quedan indefensos los que más necesitan la defensa.

Con respeto, pero con energía, el defensor de oficio debe mantener su autonomía e independencia de criterio, incluso frente a sus superiores jerárquicos, convenciéndolos que él es el que mejor conoce la causa en que participa y derivado de ese conocimiento proponer verdaderamente las defensas judiciales y procesales que deben esgrimirse. Hay casos concretos, los llamados delitos de opinión y políticos, en que mantener esta independencia ante el Estado resulta a veces sumamente difícil y requiere de fortaleza de carácter e incluso de cierto grado de heroicidad.

Un problema que se me pidió tratara específicamente es si el defensor de oficio debe acatar la instrucción general de que en ciertos casos por economía procesal solamente se acoja al procedimiento sumario, que todos sabemos, se trata de aquellos casos que regula el artículo 143-Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado y que dice:

> "Art. 143-Bis.- Una vez que haya quedado firme el auto de formal prisión, o el de sujeción a proceso, sin más trámite se citará a la audiencia final del juicio, que se celebrará dentro de los diez días siguientes, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: I.- Que expresen su conformidad el inculpado y su defensor y que ambos y el Ministerio Público manifiesten que no tienen pruebas qué ofrecer; II.- Que el inculpado se haya conformado con la acusación y se declare responsable de los hechos que se le imputen; III.- Que la confesión se haga ante el juez de la causa y reúna los demás requisitos del artículo 275 de este Código y que no pugne con otros elementos de prueba; IV.- Que la mitad de la suma del mínimo y el máximo de la sanción privativa de libertad que proceda imponer al inculpado no sea superior a cinco años; y V.- Que a juicio del juez haya quedado debidamente cuantificada o satisfecha la reparación del daño. El inculpado o su defensor podrán solicitar, en cualquier tiempo, que se adopte este procedimiento. La audiencia final del juicio comenzará presentando el Ministerio Público sus conclusiones e inmediatamente se recibirán las de la defensa. Ambas pueden formularse por escrito u oralmente. El juez dictará sentencia en la misma audiencia".

La respuesta no puede ser genérica, tal como lo hace el artículo citado, tenemos que ser casuísticos y estar a cada caso concreto. La expedición de la justicia penal es un valor que debe preservar el defensor de oficio y preservarlo significa no saturar los tribunales con promociones ociosas e inútiles. Pero habrá casos en que un notorio error procesal beneficie al defendido y el defensor, de oficio o particular, hará bien en aprovechar ese error puesto que el

defendido tiene derecho a que las leyes sustantivas y procesales se le apliquen puntualmente.

Recordemos que nuestra Constitución es tan amplia que al defendido le concede hasta el derecho de mentir, que no debe hacerse extensivo al defensor, pues se reconoce que nadie está moralmente obligado a implicarse en hechos que pueden producirle una pena.

Es muy claro que cualquier defensor no tiene la obligación ética de obtener la libertad de su cliente. Todos son auxiliares del órgano judicial y en ese carácter, su obligación es encontrar la verdad en el proceso. Sólo así se podrá aplicar correctamente la ley y lograr el grado de justicia que la norma contiene.

PROBLEMAS DE LA CARTERA VENCIDA

(Notas[21])

Banca PROMEX.
14 noviembre 1997

1.-Identificación anímica de los jueces con la postura de los deudores, porque son ellos mismos deudores, o lo son sus familiares o amigos.
2.-Simpatía de muchos políticos con la causa de los deudores y conveniencia de contar con el apoyo de estos por su número.
3.-Surgimiento de organizaciones sociales y políticas cuya finalidad es la defensa de los deudores. Los dirigentes de estas organizaciones, en algunos casos, son legisladores. Muchas de sus acciones de defensa no son apegadas a la ley.
4.-Órganos, comisiones, de los congresos nacional y de los estados dedicados a buscar caminos para "la solución del problema de los deudores".
5.-Información en televisión, radio, y diversos diarios que inclina a la "opinión pública" a favor de los deudores. Muchas veces esta información refleja la acción de los políticos y las organizaciones de defensa de los deudores.
6.-Generación de una cultura del "no pago" por la creación de una noción generalizada de que los bancos son injustos.
7.-Despachos jurídicos dedicados a la defensa… de deudores.

¿Qué es lo que ha creado este clima social?
Factores objetivos:
1.-La crisis de 1994.
2.-Algunos innegables abusos de la banca.
3.-Otros innegables descuidos de los bancos que se traducen en demandas mal hechas.
4.-Insensibilidad inicial de la banca para negociar con deudores, la que permanece en cierto grado.
5.-Discusión y posible inequidad de la postura jurídica de la banca.
6.-Oposición entre la formalidad jurídica y la justicia.

(Trabajo del Lic. Trueba)

Nota:

[21] Notas para la conferencia dictada en Banca PROMEX.

Si la banca tramita judicialmente todos los asuntos que tiene no se resolverán favorablemente en un plazo prudente por las siguientes razones:

a).-Es previsible la sobresaturación de los juzgados de una manera natural.

b).-Las organizaciones de defensa de deudores intensificarán sus acciones paralizantes legales o ilegales.

c).-Las autoridades no se decidirán a aplicar la ley a quienes la violen, tal vez se hable de diálogo y hasta se formen comisiones para propiciarlo.

d).-Se puede afirmar que por la vía contenciosa pasarán muchos años sin que se recupere la cartera vencida bancaria.

CONCLUSIONES

PRIMERA.-Las vías contenciosas para recuperar la cartera vencida no parecen aconsejables.

SEGUNDA.-Las negociaciones conciliatorias en que el banco castigue intereses y sólo aspire a recuperar lo que sea viable.

TERCERA.-Desde luego corregir las formalidades jurídicas descuidadas y rectificar antes de que sean impugnados aquellos actos jurídicos susceptibles.

CUARTA.-Necesidad de que la banca recupere la credibilidad y la confianza, y no sólo que se preocupe de "ganar juicios".

LEY O JUSTICIA

Conferencia a universitarios.
Irapuato, Gto.
Martes 29 de junio de 1999

Desde hace un año mi estimada amiga la señora Lourdes Hernández me invitó a nombre de los alumnos de esta universidad a platicar sobre un tema jurídico que parece importante. El tema es ley o justicia. Hace un año por razones personales no pude asistir a esta universidad y seguramente quedé mal, tal vez menos mal de lo que voy a quedar ahora, pero incumplí y quizá hice que incumpliera también mi amiga Lourdes, extiendo disculpas por ese incumplimiento.

El Derecho, lo jurídico, tienen temas muy explorados, muy discutidos y donde cada doctrina filosófico-jurídica plantea soluciones distintas y adopta posturas diversas. Algunas de las preguntas que engloban estos temas fundamentales de las ciencias jurídicas, sin propósito de agotarlas, son las siguientes:

¿Qué es el Derecho?; ¿Por qué nos obliga el Derecho?; ¿Qué es la ley?; ¿Qué es la norma jurídica?; ¿Cuáles son sus elementos sustanciales?; ¿Por qué deben ser acatados los deberes jurídicos? Y, el tema que hoy nos ocuparemos: si existe alguna pugna entre el contenido de una norma jurídica y la justicia a cuál debe atenerse el abogado. O, dicho de otra manera, ¿existen normas jurídicas que no realizan la justicia?, ¿o que la nieguen?, ¿hay normas jurídicas injustas? Y si son injustas ¿nos obligan?, o ¿qué actitud debemos asumir ante ellas?

No es un tema ni de fácil desarrollo ni de fácil comprensión y está conectado con otros de los que, aunque sea superficialmente por las características de estos eventos, nosotros nos veremos obligados a tratar.

Ordenémonos un poco. Tratemos primero de entender lo que es una ley. Ustedes seguramente lo han visto mucho en sus clases de Introducción al Estudio del Derecho o de Filosofía del Derecho.

Ley, etimológicamente proviene de la voz latina "Lex", que a su vez se origina en "Legere" por referencia a una regla que se lee.

Para los romanos, como todos sabemos, la "Lex" representaba el "ius escritum", esto es, el derecho escrito, por oposición al consuetudinario o no escrito.

Ley, en su sentido lato, es la expresión conceptual de relaciones establecidas entre dos o más fenómenos. Para facilitar el conocimiento de esta ley en sentido lato muchos tratadistas le agregan la palabra "natural" y enuncian una fórmula que pretende ser cuidadosa. Nos dicen que el contenido de la ley natural es: un juicio mediante el cual se enuncia, de modo constante y general, el enlace existente entre dos o más fenómenos necesariamente naturales.

Dicho de otro modo: en el mismo grado de aproximación de observancia a las mismas causas, se siguen los mismos efectos. Pero también "ley" con el agregado de la palabra "normativa" puede enunciarse como una escritura lógica mediante la cual se prescribe y determina un modo de obrar o de pensar. Si se trata de la ley jurídica, nos referiremos a un modo de obrar y si se trata de una ley lógica, a un modo de pensar.

Ya sabemos que la ley divina es un precepto o conjunto de preceptos revelados por Dios al hombre. Además desde el punto de vista jurídico, ley en sentido amplio es toda norma instituida en determinado tiempo y lugar o en sentido estricto es la norma elaborada por órganos estatales con potestad legislativa.

Existe una corriente, la del positivismo jurídico, que sólo admite como ley aquella creada por los órganos estatales con potestad legislativa, o por personas jurídicas cuando una ley legislativa se los permite o por resoluciones judiciales individualizadas. Existe otra corriente que nos dice que se da un derecho natural que debe regir el contenido de cualquier ley positiva.

San Agustín nos habla de que tanto las leyes naturales como las jurídicas o sociales, se fundamentan en la razón humana y tienen un origen común y es la ley eterna, o sea, "la razón divina y la voluntad de Dios que impone respetar el orden universal y prohíbe perturbarlo". Esta razón divina o ley eterna es lo que los tratadistas llaman ley natural, no es entonces el derecho natural algo que surja en el mundo fenomenológico físico en forma espontánea, como hierba, sino que es un criterio o conjunto de principios de acuerdo con la razón humana y respetando el orden general del universo, a los cuales tiene que apegarse también el Derecho creado por los humanos.

Durante muchos años, desde finales del siglo pasado hubo una serie de tratadistas que negaron este derecho natural, o supraderecho, porque encontraron que históricamente en épocas y espacios determinados se dieron mandatos normativos sociales, incluso elaborados por órganos legislativos facultados, de un contenido dudoso, en cuanto a si realizaban o no la justicia e incluso mandatos contrarios a la justicia. Todos estos mandatos tuvieron vigencia, se aplicaron incluso coercitivamente y se sancionó con penas frecuentemente extremas a quienes los violaron. Pero además, se encontró que en algunas épocas coexistieron normas legisladas con contenido contradictorio y otras, también legisladas, dadas con posterioridad, contrarias a las que habían regido antes, lo que indudablemente, a su juicio, y éstas últimas también obligatorias, aplicadas coercitivamente. Más sencillamente, hubo, por ejemplo normas positivas que permitieron la esclavitud o la discriminación racial y fueron obligatorias y se cumplieron y luego hubo normas que quitaron la licitud a la esclavitud y a la discriminación racial y también se cumplieron.

En estos fenómenos históricos innegables se apoyan para decir que hay leyes injustas.

Hemos invocado y expresado muchas veces en esta plática y lo hacemos también en el vivir cotidiano la palabra justicia. Ya tenemos un acercamiento a lo que entendemos por ley, tratemos ahora de acercarnos a una opinión de lo que es la justicia.

¿Qué es la justicia? Hans Kelsen afirma que ningún problema ha sido tan apasionadamente planteado y discutido como el tratar de encontrar qué es la justicia. Dice "por ninguna otra cuestión se ha derramado tanta sangre preciosa ni llorado lágrimas tan amargas; sobre ningún otro han meditado tan profundamente los espíritus más esclarecidos". Henkel afirma que: "se trata de una opinión de jerarquía tan alta como la que corresponde a los conceptos de bien y belleza, cuyas definiciones parecen inalcanzables".

Aristóteles dijo que en la justicia se halla toda verdad y que "ni la estrella de la tarde ni el lucero del alba son tan maravillosos".

Santo Tomás tuvo a la justicia como la virtud más excelente.

Proudhon expresó que: "la justicia es lo que hay de más primitivo en el alma humana, de más fundamental en la sociedad, de más sagrado entre las naciones y es lo que las masas reclaman con más ardor".

En un profundo estudio Henkel afirma que todas las nociones de la justicia consideran dos principios nucleares: dar a cada uno lo suyo y tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual. Nos identificamos con este pensamiento y aunque reconocemos que se han empleado diferentes terminologías, en el fondo de la generalidad de todas las doctrinas, se consideran estos dos principios nucleares.

Es muy conocido que Zenón estableció que justicia era: "La prudencia que da a cada uno lo suyo".

Y Sócrates afirma "la igualdad que castiga y premia a cada uno según sus méritos".

En *La República*, Platón toca ampliamente el tema y después de combatir a la corrupción de los principios y aludiendo a su conocida repartición del trabajo según los estratos sociales, afirma que la justicia consiste en "hacer cada uno lo suyo" y que también es un principio racional del alma como contenido del bien.

En la parte toral de su *Tratado de Ética*, Aristóteles se refiere a la noción de justicia y señala que es alteridad, porque sólo se puede entender si se toma en cuenta que lo justo indica repartimiento entre dos o más personas. Concretamente la justicia ve al bien del otro como dación del yo hacía el tú y, muy importante, Aristóteles se ocupa de la intención y se adelanta muchos años a Emmanuel Kant, afirma que no basta practicar la repartición sino quererla en beneficio de los demás. Y aporta su trascendente teoría del justo medio: "la justicia es un punto medio entre dos vicios que pecan uno de exceso y otro de defecto". El punto medio no es un lugar neutro ni un equilibrio indiferente sino que es un vértice, una culminación, pináculo o cumbre.

Aristóteles también nos habla de la igualdad. La concibe de dos maneras: la aritmética y la geometría. Las situaciones iguales se tratan igualitariamente y las desiguales proporcionalmente. La justicia distributiva, según el mismo autor, se refiere al reparto de los bienes según el mérito de cada quien y su realización queda a cargo principalmente de los gobernantes y la justicia conmutativa previene la igualdad en el intercambio de prestaciones.

Una noción fundamental que Aristóteles aporta al mundo es la de equidad, de la que afirma que sin ser idéntica a la justicia, la complementa y sirve como criterio de aplicación para los casos en que la regla general es omisa o insuficiente.

En Cicerón hay identidad entre justicia y derecho natural.

Tal vez la definición más conocida de justicia es la que se atribuye a Ulpiano: "Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde", definición semejante a la que adopta Santo Tomás de Aquino quien nos agrega que la justicia es alteridad, se refiere siempre a otro, como auto de voluntad ordenada por la razón. Si se ordena al bien común, es justicia general y es superior a cualquier otra y cuando los bienes comunes se ordenan al particular, la justicia es distributiva; si se ordena de un particular a otro, es conmutativa.

Hay, entonces, múltiples definiciones de justicia y a pesar de ello, es difícil entenderla porque las dificultades principian cuando tratamos de determinar su contenido. Si aceptamos que consiste en dar a cada quien lo suyo, inmediatamente nos preguntamos que es lo suyo de cada quien y aquí renacen los conflictos originales. Algunos opinan que lo suyo de cada quien tiene demasiado contenido y abarca cualquier situación concreta y otros opinan que se trata de un simple concepto formal que no lleva ningún contenido, que es una formula vacía. Para llenar esta fórmula nos dicen que lo suyo de cada quien es lo que señala el derecho positivo y otros nos dicen que esto no es verdad porque la justicia es un concepto preordenador del derecho positivo. Hay quien afirma que lo justo o lo injusto se califica subjetiva o emocionalmente.

Si la justicia o la injusticia son nociones vacías o subjetivas, lo que equivale a aceptar escepticismos, no tendría sentido ocuparnos del concepto, pues si los escépticos o los subjetivistas afirman esta noción de justicia lo hacen a través de un juicio que, como todos, aspira a tener validez universal y esta sola aspiración niega su tesis puesto que contiene en si misma algo que trata de imponerse a todos y si no es así, no vale la pena hacerlo.

Tenemos que reconocer la enorme dificultad de precisar el contenido de la justicia, pero este reconocimiento no puede conducirnos a la conclusión de la imposibilidad de la comprensión. Hay muchos caminos para saber, para sentir, para intuir el contenido de la justicia y sólo señalaremos algunos, en primer lugar el conjunto de normas jurídicas elaboradas por la humanidad a lo largo de su historia nos acerca a saber lo que es la justicia. También la opinión de los prudentes traducida en jurisprudencia de tribunales o en doctrina

jurídica nos acerca grandemente al conocimiento del contenido de la justicia. Lo que ocurre muchas veces es que la realización de la justicia no es un problema de comprensión, ni de conocimiento, sino es un problema de voluntad y aun sabiendo e intuyendo que tenemos un deber que cumplir no queremos hacerlo, aun sabiéndolo justo, porque somos débiles y elegimos mal y a veces preferimos un aparente bien inmediato a un bien más alto y duradero sólo por ser mediato.

Afirmo, pues, que todos tenemos una noción clara de lo que es la justicia.

A pesar de lo extenso del capítulo sobre la justicia, quiero ocuparme ahora de otra noción fundamental, ya no de ley sino de norma. Es imposible referirme a todas y cada una de las teorías sobre lo que es norma. Sólo me referiré a las que juzgo más representativas de escuelas opuestas.

¿Qué es la norma? En términos muy amplios es una regla que señala como hacer algo. Desde luego se dirige a la conducta y en su naturaleza jurídica la muy acreditada enciclopedia OMEBA nos dice: "denomínase norma jurídica a la significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos por una comunidad jurídica y que, como manifestación unificada de la voluntad de ésta, formalmente expresada a través de sus órganos, instancias productoras, regula la conducta humana en un tiempo y un lugar definidos prescribiendo a los individuos, frente a determinadas circunstancias condicionantes, deberes y facultades, y estableciendo una o más sanciones coactivas para el supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos". Esta larga y no muy clara definición de norma, en mi modesta opinión, tiene el defecto de que sólo reconoce como norma jurídica aquellas reglas dadas por los órganos del Estado facultados, que imponen deberes y obligaciones y que tiene sanción para el caso de incumplimiento.

Puedo aceptar que estas normas constituyen el derecho positivo, pero sólo el derecho positivo y queda pendiente saber si el derecho positivo es todo el Derecho, o aparte de él, la ciencia jurídica establece contenidos de las normas positivas.

Otra vez nos encontramos con que hay quien afirma es todo lo jurídico y quien señala que lo jurídico rebasa, es más amplio que el derecho positivo.

Kelsen es uno de los tratadistas más eminentes que se han esforzado por hacer del Derecho sólo una estructura lógica y su avance ha sido asombroso. Kelsen introduce la idea de imputación como categoría del conocimiento normativo. La imputación es el principio que se opone al de causalidad, el segundo, es el propio del conocimiento de los hechos naturales y el primero, el de imputación, funciona como relacional en la estructuración interna de toda norma y permite no sólo prescribir un deber al humano sino relacionar ese deber con otros hechos y supuestos que lo condicionen.

Esto es, el deber surge cuando se da una hipótesis, que conocemos como supuesto jurídico, y surge de manera automática, lógica, como obligación determinada y no subordinada y nada más. Conocemos la formula Kelseniana

de la norma jurídica: "si A es debe ser B" y esta fórmula contiene los deberes individuales y también el deber del Estado, de sancionar si se incumplen esos deberes individuales. Al deber sancionador Kelsen le llama deber primario.

Es Kelsen el sostenedor más preclaro de que la norma jurídica es sólo un juicio que expresa como estructura relacional hipotética un enlace imputativo con prescindencia de toda valoración.

La teoría Kelseniana en el fondo reduce el objeto del estudio del Derecho, que son las normas, a una estructura lógica y no le importan sus contenidos. Si se da la estructura lógica no le importa si la norma es injusta, pues Kelsen afirma que el contenido normativo es metajurídico, rebasa al Derecho y puede ser objeto del estudio de otras ciencias como la filosofía jurídica, la metafísica, pero no del derecho. Esto es empobrecer el Derecho. Lo que más importa al jurista es el conocimiento de los valores del Derecho. Y si renuncia a ello, renuncia a lo más importante, pues los deberes que la norma jurídica establece, no se dirigen a objetos sino a personas y éstas tienen inteligencia, voluntad y libertad.

Todos sabemos que la validez de lo jurídico no depende de su observancia, pues una norma jurídica que se viola sigue siendo válida y sigue siendo obligatoria.

La norma jurídica debe tener un contenido real o posible, que es el comportamiento humano y para que resulte obligatorio este comportamiento tendrá que realizar valores, mayores o menores, pero todos tendientes a posibilitar la mayor integración del hombre y de su comunidad.

En la actualidad y como reacción a las exageradas tesis del formalismo jurídico se ha revivido una postura que da nuevos fundamentos al ius naturalismo y que se determina neo ius naturalismo.

Se sostiene por esta doctrina que para que la norma jurídica prescriba en realidad un deber tiene que referirse necesariamente a una conducta humana, socialmente posible y que intrínsicamente represente un valor. La última razón de obligatoriedad no se da en la norma, tampoco se da en el cumplimiento forzado de la misma en su carácter coercible. Para que un deber jurídico verdaderamente me obligue tiene que ser valioso y el parámetro con que se mide lo valioso es la posibilidad de que su cumplimiento facilite la realización o perfeccionamiento más alto del propio ser humano en sociedad.

El Derecho, según esta tesis, tiene como sus más altos fines facilitar, normándola, la convivencia social y pretende, si, forzar la conducta individual para que nunca dañe ni se oponga a la vida social.

El Derecho propicia que el ser humano en comunidad pueda prever la consecuencia de sus actos y la consecuencia de los actos de los demás y al mismo tiempo acudir a la autoridad mediante procedimientos normados para que en aquellos casos en que sus semejantes violen mandatos jurídicos la autoridad, en ejercicio de un mandato también jurídico, tenga muy altas probabilidades de obligarlos a comportarse como el Derecho lo prescribe; a esto se le llama

seguridad jurídica, pero esta seguridad jurídica debe complementarse con que el cumplimiento de cada norma ayude a la realización de un valor, específicamente el de la justicia, pues nadie desea seguridad para causarse daños, nadie desea seguridad para la injusticia.

Es innegable que en la historia de la humanidad y formando parte del derecho positivo ha habido normas injustas y tal vez al presente las haya. A estas normas les negamos su esencia de juridicidad real, pero no podemos negarle su naturaleza de leyes positivas.

Y ¿qué actitud debe adoptar el jurista, el abogado postulante, el juez, el investigador jurídico ante estas normas positivas con contenido injusto? Dividamos la respuesta. El contenido de injusticia puede ser absoluto o relativo, grande o pequeño, si es relativo y pequeño hay que atenuarlo en su obligación acudiendo a la equidad y a la interpretación, pero hay que cumplir esas normas porque si no se hace así se lesiona el valor seguridad, sumamente importante para cumplir con el otro valor del Derecho de buscar la armonía social para facilitar la convivencia. Un claro ejemplo de la solución ética correcta de esta pugna es el caso de Sócrates que bebe la cicuta a sabiendas de que está obedeciendo leyes injustas pero lo hace con la convicción de que causaría más daño si huye, como se lo propiciaban y porque se niega a combatir un sistema que defendió. En el caso individual sacrificó la justicia al cumplimiento de la norma positiva para no causar inseguridad y mal ejemplo.

Pero hay otros casos en que la oposición entre la norma positiva y la justicia es intolerable; el caso de las leyes nazistas o sudafricanas y en un grado menor estadounidenses que prescribían como deber jurídico el racismo y que con teorías seudocientíficas exigían la eliminación de las razas inferiores. Fue derecho positivo, fue ley exigible, tuvo vigencia. Pero el buen jurista no deberá nunca acatar esos mandatos, sino por el contrario oponerse a ellos y luchar por su no cumplimiento, por su derogación y sustitución por otras normas que tengan un contenido valorativo.

Por eso aceptamos, que la norma jurídica es en realidad un juicio de valor en forma imperativa y que sólo su contenido justifica su existencia.

Sería muy peligroso predicar que en la aplicación del Derecho algún juez atendiese a su muy subjetiva concepción de la justicia y sacrificase la ley por esa idea personalísima, no, insistimos en que en términos generales la ley es expresión de la justicia y que sólo a través de un arduo y profundo análisis se puede llegar a la conclusión de que habrá ocasión en que en el caso concreto el contenido de la norma se modere por la equidad y que sólo este arduo esfuerzo justificará una posible no aplicación o aplicación parcial de una norma jurídica.

CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO[22]

(Notas)

Universidad Iberoamericana campus León.
30 de septiembre de 1999

Contenido de la palabra, responsabilidad de quien la usa.

1. Concepto de soberanía.
2. La soberanía como autodeterminación normativa ubicada en la norma constitucional.
3. Principios que constituyen el Estado de Derecho derivados del concepto de soberanía:
   a) Supremacía de la Constitución.
   b) Principio de legalidad.
4. La soberanía no se ubica en los poderes federales ni en los poderes locales, puesto que ellos tienen obligaciones que cumplir y las leyes establecen "facultades-obligacionales".
5. Fenómenos que actualmente están lesionando el concepto de soberanía y, en consecuencia, el Estado de Derecho:
   a) Caso Chiapas.
   b) Tepoztlán.
   c) Huelga en la UNAM.
   d) El E.P.R.

Las condiciones que originan los casos de los sub-incisos anteriores lesionan derechos individuales como el de propiedad, el de libre tránsito y otros.

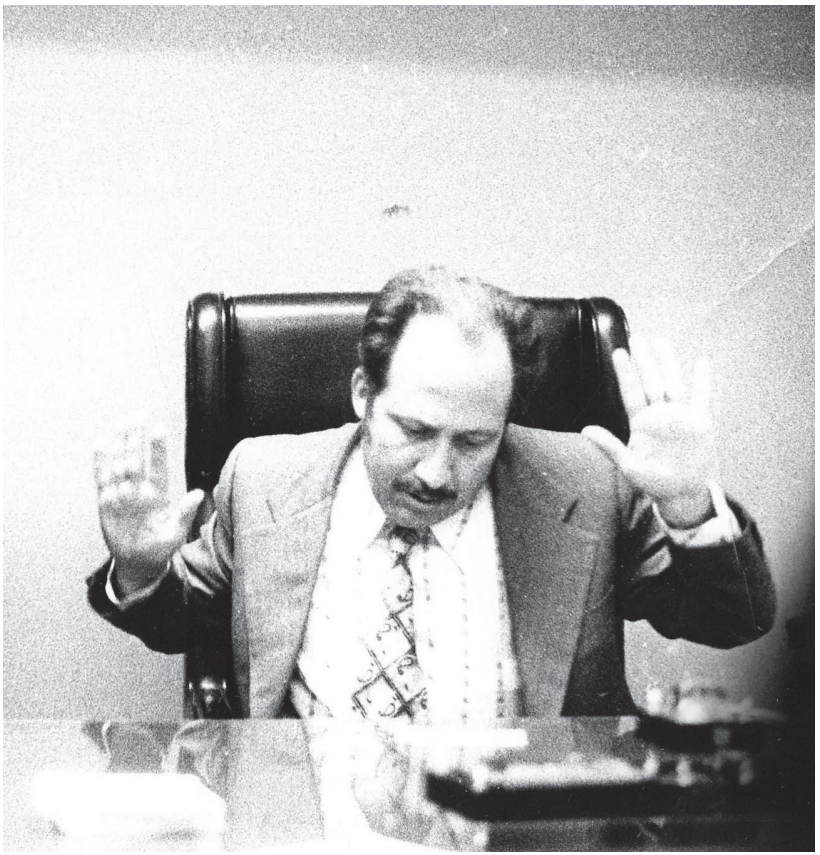
   e) Crisis del 94-95, sus consecuencias económicas e inaplicabilidad de normas mercantiles y civiles.
   f) FOBAPROA e IPAB.
   g) El Barzón.
   h) Inaplicabilidad de códigos penales sobre todo en delito de despojo cuando es cometido por más de tres personas. (Referirse a la denuncia presentada por Ignacio Burgoa y Raúl Carrancá en relación con los bienes inmuebles de la UNAM).
   i) Inaplicabilidad sistemática de gran parte de los artículos de la Ley Federal del Trabajo.
   j) Actos políticos de autoridades eclesiásticas.

[22] Temas a desarrollar en la conferencia del día 30 de septiembre de 1999 a las 19:00 horas. León, Gto.

k) Maraña procesal que imposibilita prever el contenido de sentencias y alarga indefinidamente los juicios.
l) Poca capacidad de autoridades judiciales y procuradoras de justicia.
m) Dificultad para recuperar créditos otorgados por bancos.
n) Procedimientos sumarios, fideicomisos de pago y arbitraje. No resuelven el problema.
o) Alejamiento de las inversiones económicas extranjeras para capitalizar el sistema de financiamiento mexicano.
p) Declaraciones del señor presidente de la república en relación con la UNAM del día 29 de septiembre de 1999 publicadas hoy en los periódicos.
q) Artículo del día 30 de septiembre de 1999 de Sergio Sarmiento publicado en el periódico Reforma.

Expresiones





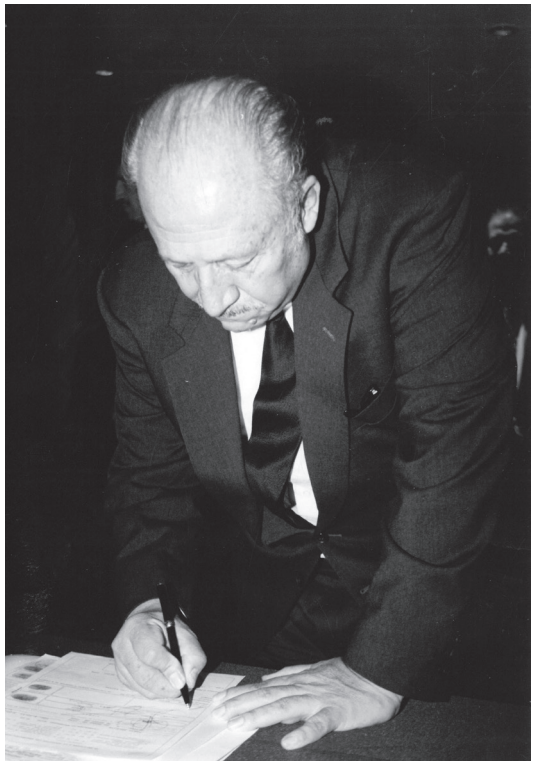






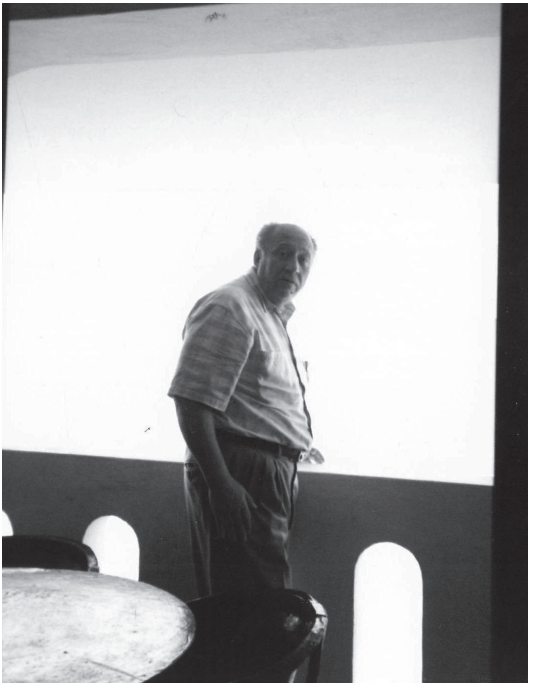














DÉCADA 2000

SOBRE LA CALIFICACIÓN POLÍTICA ELECTORAL Y LA CALIFICACIÓN JURÍDICA ELECTORAL[23]

(Notas)

Conferencia en el Tribunal Federal Electoral.
México, D.F.
31 de marzo del 2000

1.-Explicar lo que se entiende por calificación política electoral y por calificación jurídica electoral[24].

1A-. Marco político-social antes, durante y después del proceso electoral de 1988.

a).- Resultados electorales de diputados y senadores.

b).- Dudas "sembradas" sobre la credibilidad de los resultados electorales de que informaba la Comisión Federal Electoral.

c).- "Caída" del sistema de conteo electoral e importancia de resultados del D. F.

d).- Debilitamiento del P. R. I.

e).- Arribo al Congreso de nuevas fuerzas anárquicas.

f).- Integración numérica de la Cámara.

PAN	101	DIPUTADOS
PRI	260	"
PPS	37	"
PMS	19	"
FCRN	51	"
PARM	32	"

g).- Propósitos de los presuntos diputados de restar credibilidad al Colegio Electoral y al sistema político de calificación electoral.

---

[23] El documento que obra en el archivo personal del Lic. Montes García no registra legible un título específico. Por su contenido y para que los lectores identifiquen el tema al que se refiere, en este libro lo denominamos "notas sobre la calificación política electoral y la calificación jurídica electoral". Incluyen lo ocurrido en el Colegio Electoral de septiembre de 1988, en México D.F.

[24] El 29 de julio de 1986, el Lic. Montes García presentó la ponencia "Organismos Electorales" en la consulta pública organizada por la Comisión Federal Electoral. En ella abordó las dos opciones para calificar las elecciones. Explicaba: "Ambos sistemas tienen ventajas y tienen desventajas. Ninguno de los dos es perfecto. Y serían muy difícil, muy difícil, decir si uno es mejor que el otro. No creo que nadie pueda decirlo con opinión informada".

h).- Débil convicción de varios diputados priistas.

i).- Falta de habilidad de la mayoría en el debate cameral, por su prolongada ausencia.

j).- Presiones de un partido y sistema que quería los mismos resultados del pasado, sin atender a las nuevas condiciones.

k).- Chantaje, amenaza, violencia, hacerse las víctimas, negociaciones ocultas o por lo menos desconocidas para los diputados.

l).- Debilitamiento del PRI por infiltraciones.

m).- Se impusieron las características esenciales de los sistemas "políticos" de calificación, en todos los grupos camerales. Primero disciplina partidaria y luego todo lo demás.

2.-Marco jurídico para la calificación política de las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

a).- Artículo 74, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en aquellos momentos, que textualmente decía:

"Art. 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: Fracción I.- Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las atribuciones que la ley le señala respecto a la elección de Presidente de la República".

b).- Artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso General vigente en aquellos momentos y que textualmente decía:

"Art. 24.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión calificará y hará el cómputo total de los votos emitidos en todo el país en las elecciones para Presidente de la República, para lo cual se erigirá en Colegio Electoral a fin de declarar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano que hubiese obtenido mayoría de votos en las elecciones que al efecto se hubiesen celebrado".

"La declaratoria deberá emitirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se inició el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión el año de la elección".

"La resolución que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión erigida en Colegio Electoral es definitiva e inatacable".

c).- Artículo 156 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente en aquellos momentos:

"Art. 156.- En la computación de los votos emitidos para la elección del Presidente de la República, y en todo lo que a esto se refiera para la declaración del candidato triunfante, se procederá de acuerdo con la Ley Electoral respectiva".

d).- En 1988 estaba vigente el Código Federal Electoral promulgado mediante decreto expedido por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado el día 21 del mes de diciembre de 1987. En este Código, en relación con los cómputos de la elección de la Presidencia de la República, se establecía:

"a).- Libro Sexto.- De los Resultados Electorales.- Título Primero.- De los Cómputos Distritales.- Capítulo Único.- Del Procedimiento del Cómputo".

"Art. 296.- Los comités distritales electorales celebrarán sesión el domingo siguiente al miércoles de la elección, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en el orden siguiente:

El de la votación para diputados;

El de la votación para senadores; y

El de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos".

Se previene en otros artículos que los cómputos se harían ininterrumpidamente hasta su conclusión y que la sesión no podría entrar en receso sin haber concluido determinado cómputo.

3.- El artículo 298 de aquel Código definía:

"Art. 298.- El cómputo distrital de una elección es el procedimiento por el cual el comité distrital determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y computación de las casillas, la votación obtenida en un distrito electoral".

4.- El artículo 301 establecía:

"Art. 301.- El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

I.- Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo 299 de este Código;

II.- La suma de los resultados obtenidos después de realizar esas operaciones constituirá el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

III.- Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren; y

IV.- Se formará un paquete de la elección con los paquetes de las casillas, las actas de escrutinio y computación levantadas en ellas, copia del acta de cómputo distrital y los documentos relativos al cómputo, y se remitirá a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados para su depósito y salvaguarda en tanto se califica la elección. Se enviará a la Comisión Federal Electoral copias del acta de cómputo distrital y de la documentación que resulta del cómputo y, en su caso al Tribunal de lo Contencioso Electoral cuando se interponga el recurso de queja".

A su vez las fracciones I y II del artículo 299 decían:

"Fracción I.- Se abrirán los paquetes de esta elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas se cotejarán los resultados de las actas de escrutinio y computación contenidas en los paquetes con los resultados de las mismas actas que obren

en poder del comité, y cuando los resultados de ambas actas coincidan, se tomará nota de ello".

Fracción II.- Cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta final de escrutinio y computación en el paquete de la casilla ni en poder del comité se practicará el escrutinio y computación levantándose el acta individual de la casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo".

5.- Me interesa subrayar la similitud entre estos artículos mencionados con los actuales 245, 246 y 250 del vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Transcribimos el artículo 250:

"Art. 250.- 1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al d) del artículo 247 de este Código;

b) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de Presidente y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;

c) El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a esta elección; y

d) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma".

Por su parte el artículo 247 incisos a), b), c) y d) previenen el procedimiento de cómputo distrital, establecen:

"a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obra en poder del Presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla no obrare en poder del Presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente.

Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 230 de este Código. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c) Cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo Distrital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo señalados en el inciso anterior;

d) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva".

El artículo 253 establece que el Presidente del Consejo Distrital, una vez integrados los expedientes procederá a:

"b).- Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impugnación respectivo al Tribunal Electoral, el expediente del cómputo distrital que contenga las actas originales y cualquier otra documentación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De la documentación contenida en el expediente de cómputo distrital enviará copia certificada al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Cuando se interponga el medio de impugnación correspondiente se enviará copia del mismo".

6.- Llamar la atención sobre la posibilidad de que los consejos distritales envíen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los paquetes electorales de cada una de las casillas a pesar del mandato del artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que les ordena tomar las medidas necesarias para el depósito en el lugar señalado de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 hasta la conclusión del proceso electoral y una vez concluido procedan a su destrucción.

7.- Señalar la dificultad que representaba para la Cámara de Diputados el resguardo, salvaguarda y conservación de los paquetes electorales. La cantidad de bodegas que debían estar disponibles para ordenarlos y prevenir elementos del Ejército para la salvaguarda constante y permanente.

8.- Conversar sobre lo reducido de la reglamentación para hacer la calificación política de las elecciones.

9.- Referirse al ambiente postelectoral que privaba en el país y sobre todo al desorden que reinaba al arranque de la "LIV" Legislatura[25].

10.- Explicar porqué se determinó que la calificación electoral se realizara el día 8 de septiembre de 1988, las causas fueron:

a).- Dar certidumbre al país sobre la elección del Ejecutivo.

b).- Poder avanzar en la formación de comisiones para el trabajo de la Cámara de Diputados.

c).- No caer en las trampas de dilaciones que las oposiciones proponían.

(Proponer que el Instituto Federal Electoral determine un lugar para la salvaguarda de los paquetes electorales).

11.- El día 8 de septiembre, una vez que la Cámara se había erigido en Colegio Electoral comenzó a las nueve de la mañana la sesión permanente de este Colegio que terminó hasta el día 9 de septiembre a las diez de la mañana.

12.- Comentar que se inscribieron aproximadamente 190 oradores y hubo 119 intervenciones en esa sesión. Se tomó en cuatro ocasiones la tribuna. Se decretaron igual número de recesos forzados. Finalmente, a las diez de la mañana del día 9 se aprobó un decreto en que se establecía:

> "ÚNICO: Son válidas y legítimas las elecciones que para Presidente de la República se llevaron a cabo en todo el territorio nacional, el día 6 de julio de 1988.
>
> Es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el período que comprende del día 1° de diciembre de 1988 al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari, quien en los términos del artículo 87 constitucional, al tomar posesión de su

[25] El Lic. Montes García fue Diputado Federal a la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión. 1988-1990. Presidente del Congreso de la Unión durante septiembre de 1988 y durante su presidencia se calificaron las elecciones presidenciales de ese año erigiéndose la Cámara de Diputados en Colegio Electoral. Presidió la Primera Sección Calificadora Electoral de ese Congreso. Recibió, a nombre del Congreso, el Sexto Informe de Gobierno del C. Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y en sesión solemne en la que se intentó, múltiples veces, interpelar al Presidente por diputados y senadores de partidos diversos, intentos de interpelaciones que desechó con el único propósito de defender el cumplimiento y respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no permitió que el Presidente de la República que informaba, produjese respuesta alguna a las interpelaciones y reiteradamente explicó y citó los fundamentos legales de su actuación. Presidente de la Comisión de Justicia de la Quincuagésima Cuarta Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

cargo, prestará ante el Congreso de la Unión la protesta de ley, el 1° de diciembre del año en curso".

13.- Informar que la votación declarada por cada uno de los candidatos que compitieron fue la siguiente:

	VOTOS	% GLOBAL
Manuel J. Clouthier del Rincón	3'298,584	16.81
Carlos Salinas de Gortari	9'687,926	50.74
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano	5'929,585	31.06
Gumersindo Magaña Negrete	190,891	1.00
Rosario Ibarra de Piedra	74,857	0.39
T o t a l	19,181,843	100.00

14.- Narrar que al Presidente del Congreso de la Unión[26], por su actitud en el Sexto Informe de Gobierno que rindió Miguel de la Madrid Hurtado y por su actitud en la sesión de calificación de la elección presidencial, se le intentó seguir juicio político. Narrar los incidentes de ese juicio y lo dramático que la situación parecía en aquellos momentos.

15.- Analizar hasta donde sea posible las ventajas y desventajas del sistema político de calificación electoral.

16.- Analizar hasta donde sea posible las ventajas y desventajas del sistema jurídico de la calificación electoral.

17.- Insistir, con el mayor vigor posible, en la enorme responsabilidad que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al calificar la elección presidencial, sobre todo en este momento en que vivimos, según todos coinciden, el proceso electoral más disputado de la historia de México.

18.- Necesidad de rescatar la alta credibilidad y responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

---

[26] En ese momento, el Presidente del Congreso de la Unión era el Lic. Miguel Montes García. En la sesión del lunes 12 de septiembre, previo al inicio de la glosa del VI Informe de Gobierno, el diputado Montes García, Presidente de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre, dejó unos momentos la presidencia para exponer su defensa jurídica y política sobre su actuación el primero de septiembre durante el Informe Presidencial y en el Colegio Electoral que calificó las elecciones para Presidente de la República y estableció que debe hacerse a un lado el partidismo, que en muchas ocasiones prevalece sobre el interés general.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Periodo ordinario. LIV Legislatura. Año I. Número de diario 11. http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/54/1er/Ord/19880912.html

NOTAS PARA LA PLÁTICA ¿NECESITAMOS UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?[27]

Irapuato, Gto.
Miércoles 25 de abril de 2001

1.- Recordemos definiciones de la Constitución:

a) Según Kelsen, es la norma fundamental en donde descansan todos los regímenes jurídicos;
b) Se le llama pacto social;
c) Se puede decir que es el estatuto jurídico del poder y desde esta perspectiva la Constitución regula cuatro formas de relación en el poder:
I.- El derecho al poder;
II.- El derecho del poder;
III.- El derecho ante el poder;
IV.- El control del poder.

2.- ¿Necesita México una nueva Constitución? Podemos dividir a los opinantes sobre este tema en dos grupos:

a) Los que señalan que es necesaria una nueva Constitución;
b) Los que indican que basta con reformar o adicionar la Constitución vigente.

3.- En Derecho como en otras ramas del conocimiento humano la forma es fondo. Veamos el contenido del artículo 135 constitucional:

> "Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas".

4.- No existe, en consecuencia, la posibilidad constitucional de hacer una nueva Constitución a través de un poder constituyente, tendremos que valernos siempre del constituyente permanente. Hacerlo convocando a un constituyente, será un golpe de estado y nos encontramos con la sanción que previene el artículo 136:

[27] Diputado Local de oposición en la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 2000-2003.

"Art. 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta".

5.- Comentar casos de golpes de estado por convocar al poder constituyente como Venezuela con Chávez y Perú con Fujimori.

6.- Tomar postura en el sentido de que el único camino constitucional para reformar la Constitución es el que la propia Constitución establece.

7.- Los grandes temas constitucionales de nuestro tiempo:

a) Buscar una Constitución estable, no reglamentaria ni casuística a fin de obtener el "sentimiento de constitucionalidad" del pueblo de México, o sea la "adhesión constitucional". Este consentimiento se requiere para que la Constitución sea verdaderamente un pacto social. Conveniencia de dificultar los métodos de reforma constitucional;
b) Soberanía en relación con la globalidad;
c) Integración supranacional, casos de la Comunidad Económica Europea y del Parlamento Latinoamericano. La ciudadanía europea.
d) Definiciones sobre sistema de gobierno y señalar si requerimos de un presidencialismo o de un parlamentarismo, indicando que ya casi todos los gobiernos son mixtos, esto es, tienen elementos de diferentes sistemas.
e) La dimensión del estado en su aspecto económico y la desrregulación;
f) Estado de bienestar;
g) Control constitucional jurisdiccional;
h) Control financiero;
i) Flujos financieros internacionales;
j) Organización del poder y servicio civil de carrera en el gobierno y sobre todo en el Poder Legislativo, comparándolo con el Poder Judicial;
k) Sistema representativo ocupándose de la representación proporcional legislativa;
l) Participación directa: plebiscito, referéndum e iniciativa popular;
m) Federalismo y regionalismo;
n) Organización municipal;
o) Organismos no gubernamentales;
p) Nuevos derechos, como los de niños, jóvenes, tercera edad, consumidor y protección al ambiente;

q) Regulación de los procesos científicos y clínicos: clonación y eutanasia;
r) Procesos de negociación pre-constitucional para reformar la Constitución;
s) Derecho a la intimidad y habeas data: difícil señalar el contenido del derecho a la intimidad, pero el habeas data consiste en que se garantiza que cualquier gobernado controle sus datos personales y el trabajo de quienes, gubernamentalmente los manejan. Es una facultad del individuo para disponer de sus datos personales y para vigilar a quien los utiliza;
t) Derechos humanos y ombudsman.

8.- Función de la Constitución como eje de la vida social, de los procesos electorales, de las atribuciones del gobierno y de las garantías individuales y de los derechos humanos.

9.- Dificultades para que se dé en las circunstancias presentes una reforma constitucional de fondo. La integración actual del Congreso.

9-A.- La comisión de revisión integral de la Constitución.

10.- Peligro de que al proponer reformas constitucionales, las fuerzas político electorales triunfantes deseen, sólo como revancha, plantear desde la Constitución la ideología que las sustenta.

11.- Concluir señalando la necesidad de la profundidad en el análisis para reformar la Constitución. La serenidad para tomar determinaciones. La eficacia de las normas constitucionales para lograr su cumplimiento, a través de la eficacia del gobierno entendido ampliamente y hacer una breve referencia a la reelección de ayuntamientos, legislaturas y poder ejecutivo.

DERECHO A LA INFORMACIÓN[28]

Conferencia en el ciclo
"Nuestro Derecho a Saber de las Cosas Públicas
y el Acceso a la Información Gubernamental". [29]
Facultad de Derecho. UNAM.
México, D.F.
Lunes 7 de mayo de 2001

El día 19 de octubre de 1977 la Cámara de Diputados de la "L" Legislatura Federal, que fue la de origen, aprobó en lo general con 191 votos en pro y 17 en contra, estos últimos de los diputados de Acción Nacional, el dictamen que las comisiones Primera de Puntos Constitucionales y Sección Constitucional de Estudios Legislativos produjeron en relación con la reforma presentada por el Presidente de la República, que se conoció como Reforma Política y que, entre otros, reformó el artículo 6° de nuestra Constitución.

El día 20 de octubre del mismo año se aprobó en lo particular, por unanimidad, la reforma propuesta al artículo 6° Constitucional. Esta reforma consistió en el agregado de diez importantísimas palabras: "EL DERECHO A LA INFORMACION SERÁ GARANTIZADO POR EL ESTADO".

Para entender el alcance de esta reforma conviene recordar lo que entendieron y se propusieron los legisladores que la aprobaron. Adelantamos que en aquel momento se entendió por derecho a la información, un derecho colectivo público complementario del individual de libertad de expresión. El artículo 6° completo dice: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado". La garantía es categórica, sin límites, breve, imperativa, como debe ser un mandato constitucional.

Sobre todo en la Cámara de Diputados la discusión alrededor de este tema fue rica y paradójicamente su riqueza contribuyó a limitar la comprensión del

[28] Diputado Local de oposición en la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 2000-2003. Presidió la Comisión de Justicia en esa legislatura. En unión del también diputado Lic. Martín Eugenio Ortiz García, el Lic. Montes García presentó la iniciativa de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, primera iniciativa sobre ese tema que se presentó en la República Mexicana.

[29] En su columna Pinceladas, publicada el 7 de mayo de 2001 en el periódico a.m. de León, Gto., titulada "Derecho a la información", el Lic. Montes García hace referencia a este ciclo de conferencias y a su participación en el mismo.

contenido de la garantía. Entonces sólo se pensó que correlativo al derecho de la libertad de expresión existiese el derecho a la información de toda la comunidad. Se crearon dos ilusiones, una realizada parcialmente y otra en la que no se ha avanzado.

La primera se hizo consistir en que todos los partidos políticos tuviesen acceso a los medios de comunicación social, tales como prensa, radio y televisión, ahora debiera agregarse Internet; ello para facilitar su trabajo de convencimiento a la ciudadanía a fin de que, traducido en votos, apoyasen las plataformas electorales y los principios ideológicos de los partidos, así como sus proposiciones de gobierno. En esto se ha avanzado, no como los partidos desean, pero sí como la autoridad electoral ha resuelto que conviene a la ciudadanía.

La segunda ilusión frustrada fue que la comunidad nacional merecía recibir de los medios de comunicación social una información objetiva, oportuna, veraz, imparcial, no manipulada. Se reconoció que la sociedad está sujeta a manipulaciones de la publicidad, y que las grandes cadenas comunicadoras frecuentemente anteponen sus intereses mercantiles a la conveniencia de que las personas reciban información orientadora. Se quería evitar la frecuencia con que la información distorsiona el criterio y confunde a quien la recibe, en lugar de ayudarle a tomar una decisión.

No se contempló entonces que dentro de la garantía que el Estado debe otorgar al derecho a la información, tenía que quedar comprendido el hecho de que fuese el mismo Estado el principal obligado a entregar individual o colectivamente a los gobernados la información que éstos soliciten.

Decía yo que en cuanto a limitaciones sobre la manera de informar de los medios sociales de comunicación no se avanzó, es más, hubo confesión expresa de los legisladores, en voz del licenciado Luis M. Farías, coordinador del grupo mayoritario de diputados en la "LI" Legislatura Federal, sobre la imposibilidad de reglamentar la garantía de información que contiene el artículo 6°, dijo: "no le hemos encontrado la cuadratura al círculo". Esta expresión fue consecuencia de que cualquier intento de reglamentación recibió la oposición decidida de los medios de comunicación que afirmaban se les quería imponer una grave censura a su libertad de expresión. Ley mordaza le llamaban.

Analicemos lo que los legisladores originales entendieron por derecho a la información. Ramón Garcilita Partida, del Partido de Acción Nacional dijo en relación con el tema: "Sí constituye una base, y hay que reconocerlo, hay disposiciones muy importantes, hay datos positivos, precisamente como el de haber incorporado como garantía individual el derecho de información, que desgraciadamente en forma escueta solamente se adiciona en el artículo 6° en el capítulo de las Garantías Individuales". "...la Constitución es para dar principios y realmente creo que la representación nacional esperará con interés el proyecto de reglamentación al artículo 6° para dar efectividad al derecho de información".

El diputado Eduardo Andrade Sánchez expresó: "Destacan en este rubro, el derecho a la información, el asegurar a los partidos sus elementos mínimos de participación en las campañas electorales...". "...El derecho a la información que se consagra, viene a completar, viene a continuar, a modernizar el texto relativo a la libertad individual de expresión; no confundamos los conceptos, como atinadamente lo dice el dictamen, la libertad individual de expresión es un derecho público subjetivo, el derecho a la información que se introduce es un derecho público colectivo, ambos coinciden en el precepto constitucional pero son de una naturaleza que difiere en aspectos sustanciales; no se introduce una garantía individual junto, entiéndase bien, junto, no frente a la libertad de expresión, se establece el derecho a la información, del cual es titular toda la sociedad. Se señala tradicionalmente en las constituciones la libertad de expresión; en la nuestra es claro que el Constituyente del 17 no pudo prever el desarrollo de los medios de comunicación que ahora, a través de esta reforma, dejan su huella en nuestra Carta Magna. La libertad individual de expresión se establece y se esgrime frente al Estado para hacer posible la disidencia, el derecho a la información se exige a través del Estado para hacer posible la democracia."

"Este es el verdadero sentido del derecho a la información, un derecho que es prerrequisito de un auténtico juego electoral, de un auténtico juego democrático; solamente puede optar conscientemente quien está verdaderamente informado, no quien está influido o desorientado. En el artículo 41 encontramos también el establecimiento de otra seguridad de la reforma política, que señala al garantizar a los partidos la obtención de los elementos mínimos para su participación en las campañas electorales, un establecimiento de igualdades".

El diputado Francisco Ortiz Mendoza expresó: "El artículo 6° va a garantizar los derechos de la sociedad, pero también los del individuo. Queremos señalar como laudable y positivo el acceso de los partidos políticos a los medios masivos de difusión, principalmente la radio y la televisión; esta reforma es trascendente, incidirá forzosamente en la politización del pueblo mexicano. El abrir los canales de información a los partidos políticos permitirá al ciudadano mexicano exteriorizarse con mucha mayor frecuencia que lo que es actualmente de la problemática nacional y de las distintas opciones que se presentan para su solución".

El diputado César Augusto Tapia Quijada, opinó: "... saluda con optimismo y con alegría el advenimiento de la garantía a la información...". "...el derecho a la información se ha ubicado en el capítulo de las garantías individuales junto a la garantía de libertad de expresión, pero que tiene un contenido político y un contenido social, que se trata de un derecho colectivo".

La diputada Marcela Lombardo, dijo: "El sentido de la adición propuesta por el Ejecutivo al texto vigente del artículo sexto de la Constitución es correcto, ya que consideramos que el derecho a la información es una garantía del

ciudadano, así como lo es la manifestación de las ideas. Aquélla, la información es complemento de la manifestación de las ideas, y como lo dice la iniciativa en su exposición de motivos, el gobierno debe actualizarse y enriquecerse en su actuación, para que se propicie una mayor participación del pueblo".

"La necesidad de "instituir el derecho a la información como una garantía social", ha nacido de las grandes y graves deficiencias y deformaciones que hasta hoy se han mantenido en los medios de difusión masiva, debido a la posición ideológica y política de quienes los detentan".

El diputado Manuel Villafuerte Mijangos, sostuvo: "Debemos meditar en que si el derecho a la libertad de expresión lo es del individuo, está por inscribirse, y debe garantizarse el derecho de una sociedad a ser informada, a ser bien informada, una sociedad que debe esperar de los medios de comunicación, no solo la información, sino la distracción de su ocio y la perfección por medio de la cultura; información, distracción y cultura son las exigencias de un derecho social, que debemos reconocer como compromiso, aunque no esté escrito en la Constitución".

"La información es un bien del pueblo, no es una mercancía; en consecuencia debemos reconocer que este derecho debe consignarse en la Carta Magna en forma irrestricta sin modalidad alguna. Los derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión, no son irrestrictos. El artículo 6°, objeto de este debate, establece las limitaciones del individuo en el ejercicio de ese derecho. Pero la iniciativa presidencial y el artículo 2° del dictamen que aprobó en sus términos el texto propuesto para el artículo 6° incluye el derecho a la información en forma irrestricta".

"Este derecho a la información es tan importante, es un factor de tanta importancia para todos los pueblos, que a través del ejercicio de la información es posible impulsar a los pueblos en su desarrollo, pero es posible también frenar el desarrollo de los pueblos; entonces no debemos, repito, buscar palabras que vengan a limitar el derecho constitucional que estamos discutiendo, debe introducirse en el texto de nuestra Carta Magna y así lo pido a la H. Asamblea que se apruebe en sus términos el dictamen para que así en lo futuro quede bien claro que el derecho a la información es un derecho irrestricto del pueblo mexicano y que no habrá argumento válido para tratar de vulnerar esta garantía social, que esperamos sea de la Quincuagésima Legislatura la satisfacción de introducirla como garantía constitucional. Muchas gracias".

El diputado Carlos Ortiz Tejeda tuvo una brillante participación, que tal vez más que ninguna otra fijó en la mente de los legisladores el sentido y alcance de la garantía al derecho a la información que se estaba discutiendo y que finalmente quedó establecido en el multicitado artículo 6° Constitucional. Valdría la pena conocer la totalidad de ese discurso, es imposible hacerlo en este acto por su extensión, resaltaremos algunas de sus partes. Dividió su intervención en seis rubros:

1.- Existencia e información.

2.- Ser es comunicar.
3.- Información y sociedad.
4.- Información y clases dominantes.
5.- Información y Estado.
6.- Información y cambio social.

De la parte primera de su intervención destaco: "En este orden de ideas, se antoja diferenciar que una computadora está capacitada para "entender" cabalmente un programa, porque se le alimenta con un lenguaje que le es propio y conocido; en cambio los organismos vivos tienen que descifrar, decodificar, los mensajes de su hábitat. Pero esto no es todo; ese organismo que interpretó y asimiló la información, se transformó con ella, y habrá de transformar, a su vez, al medio en el que está inserto y del cual forma parte. La información es entonces, a la vez que elemento fundamental de la existencia, factor esencial de transformación".

De la segunda parte, transcribo: "La vida es información. A partir de esta premisa, podemos inferir que la comunicación se da incluso al margen del lenguaje. Si la comunicación es antes que otra cosa una presencia, una manera de ser, una interacción o, según la tesis de Watlzlawick, una conducta, podemos concluir que ser es comunicar".

De la tercera parte, reproduzco: "...Simplemente no podríamos imaginar a la sociedad humana, cualquiera que ésta fuera, marginada de la forma más elemental de comunicación, incluso se antoja referirse a la sociedad y al lenguaje como una relación de causa y efecto". "...la información satisface un requerimiento vital, existencial del individuo, que lo convierte en sujeto responsable de su momento, de su realidad. Tal vez coincidimos, señores diputados de Acción Nacional, en que la necesidad está en la naturaleza precaria del hombre, quien no llega nunca a serlo con plenitud, ajeno a los demás".

"El hombre necesita la respuesta, las respuestas a sus interrogantes esenciales. La información lo sitúa en el nivel que su razón requiere para la evaluación, el juicio, la creación. Un hombre informado no es por este solo hecho un mejor hombre, pero sí alguien con mayor probabilidad de llegar a serlo".

De la cuarta parte singularizo: "La información ha sido desde siempre en la sociedad humana factor de diferenciación e instrumento de control y dominio. Vázquez Montalbán, en su estudio sobre los métodos utilizados en la antigua Roma durante el imperio de Julio César, sostiene que la información, como fenómeno social, aparece sólo en las sociedades que son conscientes de la importancia de orientar la opinión pública".

"En suma, que la función de la información es filosófica, ideológica, política".

"La relación entre el acceso a la información y el ejercicio del poder es una verdad históricamente comprobable".

"En los estados modernos, la información -dice Alfred Savñy- ocupa en la jerarquía de los instrumentos de poder un lugar preferente al ejército o la policía".

De la quinta parte de la intervención que analizo, separo: "Así concebida la garantía del derecho a la información, tiene para el Estado el valor de una definición ideológica, de una alianza política con sus mayorías; es la voluntad de confiar en ellas la toma de decisiones que afecten y determinen su devenir histórico".

"En el orden individual, la información significa la única posibilidad de que el hombre sea actor consciente de su propio destino. Solamente si puede razonar, aprender, aprender a partir del dato cierto, del conocimiento de un hecho y sus consecuencias. En verdad, un hombre sólo puede amar lo que conoce y sólo puede luchar por lo que ama".

Por último, de la sexta parte del sobresaliente discurso que comento, transcribo: "La información es el punto a partir del cual el individuo está capacitado para desentrañar los procesos sociales que se dan en su contorno".

"La información tiene una función liberadora capaz de nutrir con elementos nuevos los razonamientos viejos. Informar es transformar: cada paso de esta ciencia es un producto de una información eficaz que cuestiona la anterior: la revolución copernicana; el salto de la mecánica de Newton a la teoría de la relatividad de Einstein; ...".

"...un hombre desinformado es un hombre a ciegas, y un mundo desinformado no puede ser solidario, democrático, consciente. La información es cultura y posibilidad de convivencia. La ignorancia es oscuridad; pero desinformación e incomunicación son el camino cierto al desastre...".

"El derecho a la información constituye un patrimonio del pueblo para rechazar los métodos enajenantes de la sociedad de consumo, para garantizar la efectividad de los procesos democráticos y consolidar el sistema de libertades. Y las libertades -continúa el pensamiento del maestro universitario a quien la voluntad popular dio el encargo de la conducción nacional- no son abstracciones. Recordemos que vivir fuera de la libertad significa que el espacio corre el riesgo de convertirse en cárcel; que el tiempo se convierte en la historia de la servidumbre; que el pensamiento se convierte en dogma; que el trabajo se convierte en enajenación; que la ciencia se convierte en prepotencia y la política en sumisión".

"...información es poder, y en un Estado revolucionario todo poder corresponde al pueblo, si titulares de los derechos son los ciudadanos, y al Estado corresponde la correlativa obligación de su garantía, tenemos que definir también el papel que a los medios de difusión compete".

Esta concepción del derecho a la información como garantía colectiva de la sociedad durante muchos años determinó la comprensión del contenido de dicho derecho. Le puso límites.

A pesar de la dirección que marcó el legislador de 77, cuando una norma es adecuada, adquiere vida propia y, en ocasiones, los cambios sociales no anacronizan, sino que su contenido se actualiza y se amplía con esos cambios. Aquella dimensión de 1977 no se riñe con la que ahora adquiere el derecho a la información, como, entiéndase bien, "el derecho a la información", no la obligación estatal de garantizar su disfrute, derecho subjetivo individual frente al Estado, se quiere que el que gobierna informe de lo que hace, de lo que cuesta hacerlo, de por qué lo hace, de cuándo va a concluir de hacerlo. Modernamente se concibe al Estado como depositario, administrador y usuario de la información que recaba, pero ésta es, por lo menos, un bien de uso común que no debe regatearse a los gobernados. Que ningún servidor público se sienta propietario de la información que maneja, el dueño de ella es el gobernado, desde luego, salvaguardando tipos de información cuya reserva es indispensable para conservar la seguridad del Estado, los datos individuales íntimos de las personas o aquellos proyectos no concluidos y datos cuyo conocimiento podrían causar daño irreparable a algún sujeto en sociedad.

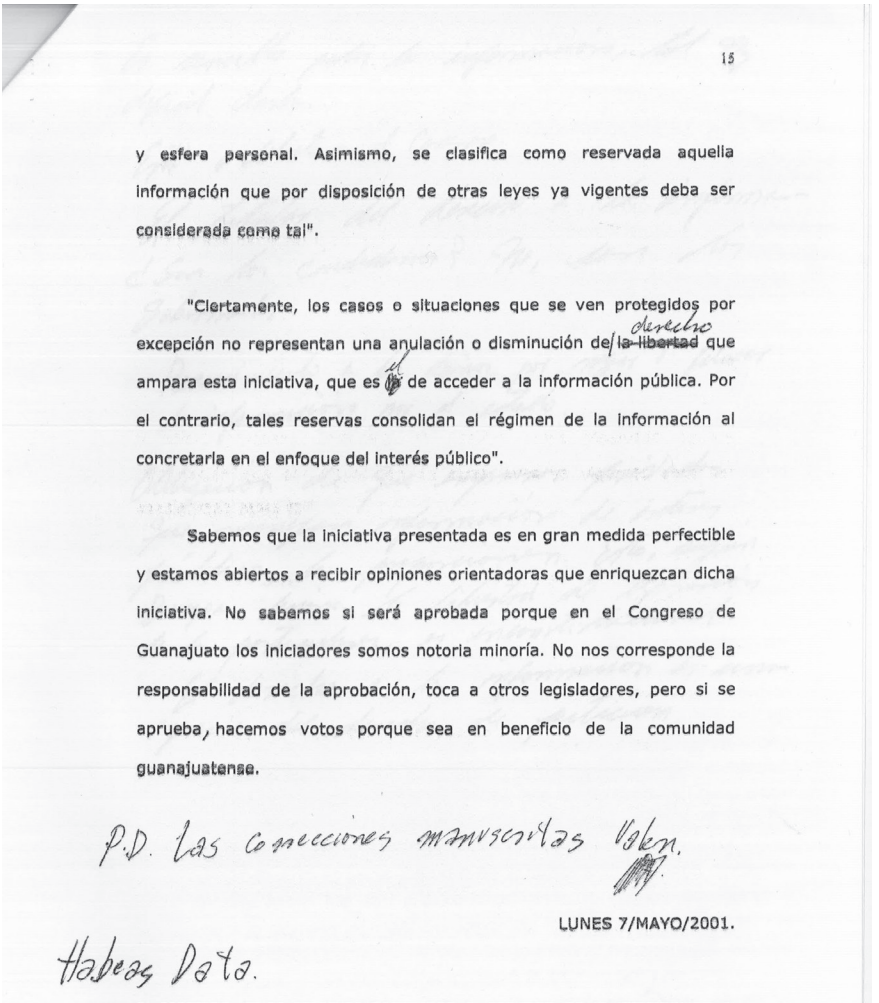
El gobierno, en la ley que proponemos, es sujeto obligado a informar, y el Estado, por mandato del sexto constitucional, garantiza el cumplimiento de esa obligación.

Por eso en la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley cuya aprobación hemos propuesto al Congreso del Estado de Guanajuato, entendimos "por "información pública": el dato o conjunto de datos que los servidores públicos captan, generan, divulgan o reproducen en cualquier forma o medio, entendiéndose que también son sujetos obligados quienes recibiendo o ejerciendo recursos públicos capten, generen, divulguen o reproduzcan información, la cual, por ese hecho, tendrá carácter de pública".

"Por respeto a derechos privados, se especifican los casos en que se salvaguardan tales derechos en todo lo que se refiere a su intimidad y esfera personal. Asimismo, se clasifica como reservada aquella información que por disposición de otras leyes ya vigentes deba ser considerada como tal".

"Ciertamente, los casos o situaciones que se ven protegidos por excepción no representan una anulación o disminución del derecho que ampara esta iniciativa, que es el de acceder a la información pública. Por el contrario, tales reservas consolidan el régimen de la información al concretarla en el enfoque del interés público".

Sabemos que la iniciativa presentada es en gran medida perfectible y estamos abiertos a recibir opiniones orientadoras que enriquezcan dicha iniciativa. No sabemos si será aprobada porque en el Congreso de Guanajuato los iniciadores somos notoria minoría. No nos corresponde la responsabilidad de la aprobación, toca a otros legisladores, pero si se aprueba, hacemos votos porque sea en beneficio de la comunidad guanajuatense.



15

y esfera personal. Asimismo, se clasifica como reservada aquella información que por disposición de otras leyes ya vigentes deba ser considerada como tal".

"Ciertamente, los casos o situaciones que se ven protegidos por excepción no representan una anulación o disminución de ~~la libertad~~ derecho que ampara esta iniciativa, que es el de acceder a la información pública. Por el contrario, tales reservas consolidan el régimen de la información al concretarla en el enfoque del interés público".

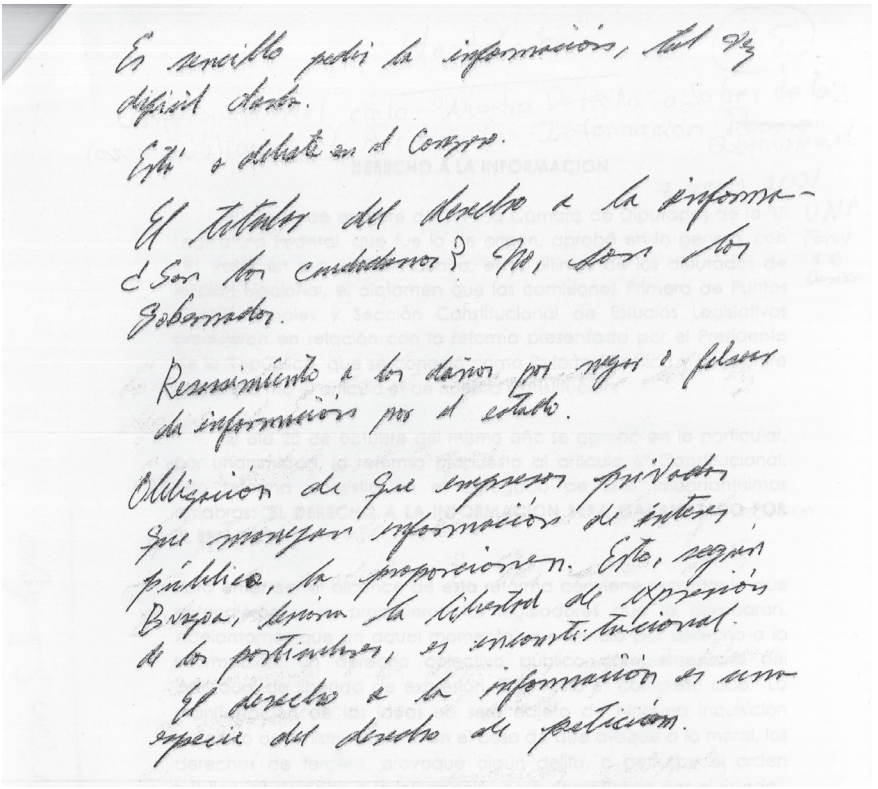
Sabemos que la iniciativa presentada es en gran medida perfectible y estamos abiertos a recibir opiniones orientadoras que enriquezcan dicha iniciativa. No sabemos si será aprobada porque en el Congreso de Guanajuato los iniciadores somos notoria minoría. No nos corresponde la responsabilidad de la aprobación, toca a otros legisladores, pero si se aprueba, hacemos votos porque sea en beneficio de la comunidad guanajuatense.

P.D. Las correcciones manuscritas Vgkn.

LUNES 7/MAYO/2001.

Habeas Data.

Anotaciones en el documento original de la ponencia


Es sencillo pedir la información, tal vez difícil darla.
Está a debate en el Congreso.
El titular del derecho a la información ¿Son los ciudadanos? No, son los Gobernados.
Resarcimiento a los daños por negar o falsear la información por el estado.
Obligación de que empresas privadas que manejen información de interés público, la proporcionen. Esto, según Bazúa, lesiona la libertad de expresión de los particulares, es inconstitucional.
El derecho a la información es una especie del derecho de petición.

Anotaciones en el reverso de alguna página de la ponencia

CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO[30]

(Notas)

Universidad Lasalle Bajio campus Salamanca.
Salamanca, Gto.
16 de mayo del 2001

Nota previa:

Por Estado de Derecho debe entenderse una organización político-jurídica en donde en términos generales se cumpla el mandato legal. Sería un concepto muy estricto que exigiéramos que se cumpliera la norma siempre; en todas las sociedades hay violaciones a la ley, sobre todo entre particulares, pero existen también procedimientos jurídicos y autoridades, judiciales y administrativas, que restauran las violaciones legales. Estas violaciones a la ley entre particulares que se resuelven mediante controversias judiciales, no nos autorizan a afirmar que se está rompiendo el Estado de Derecho, son normales, forman parte del Estado de Derecho.

Podemos afirmar que se rompe el Estado de Derecho cuando de manera frecuente, aunque no llegue a ser sistemática, son los propios representantes del gobierno los que voluntariamente eligen no cumplir la ley.

1.-Concepto de soberanía.

2.-La soberanía como autodeterminación normativa ubicada en la norma constitucional.

3.-Principios que constituyen el Estado de Derecho derivados del concepto de soberanía:

Supremacía de la Constitución.

Principio de legalidad.

4.-La soberanía no se ubica en los poderes federales ni en los poderes locales, puesto que ellos tienen obligaciones que cumplir y las leyes establecen "facultades-obligaciones".

5.-Fenómenos que en el pasado lesionaron el concepto de soberanía y, en consecuencia, el Estado de Derecho:

a) Caso Chiapas.
b) Tepoztlán.
c) Huelga en la UNAM.
d) EL E.P.R.

6.-Fenómenos que en la actualidad lesionan el Estado de Derecho.

a) Caso Chiapas.

[30] Temas a desarrollar en la plática del día 16 de mayo del año 2001 a las 11:00 horas en la Universidad de Lasalle Bajio campus Salamanca.

b) Toma de posesión del Presidente Fox alterando la letra de la protesta constitucional. Esa alteración prueba un desafecto a la normatividad jurídica que se ha reiterado en otras ocasiones.[31]

c) Iniciativa de reforma integral o Nueva Hacienda Redistributiva. Violación a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 constitucional. (Fracción IV: "Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior".

d) El E.P.R.

7.-Otros comentarios sobre el tema. Las condiciones que originan los casos de los incisos anteriores, lesionan derechos individuales como el de propiedad, el de libre tránsito y otros.

a) Crisis del 94-95, sus consecuencias económicas e inaplicabilidad de normas mercantiles y civiles.

b) FOBAPROA E IPAB.

c) El Barzón.

d) Inaplicabilidad de códigos penales sobre todo en delito de despojo cuando es cometido por más de tres personas. (Referirse a la denuncia presentada por Ignacio Burguoa y Raúl Carrancá en relación con los bienes inmuebles de la UNAM).

e) Inaplicabilidad sistemática de gran parte de los artículos de la Ley Federal del Trabajo.

f) Actos políticos de autoridades eclesiásticas.

g) Maraña procesal que imposibilita prever el contenido de sentencias y alarga indefinidamente los juicios.

h) Poca capacidad de autoridades judiciales y procuradoras de justicia.

i) Dificultad para recuperar créditos otorgados por bancos.

j) Procedimientos sumarios, fideicomisos de pago y arbitraje. No resuelven el problema.

k) Alejamiento de las inversiones económicas extranjeras para capitalizar el sistema de financiamiento mexicano.

l) Uno de los mayores riesgos que estamos corriendo es que las autoridades, Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial hagan selectiva la aplicación de la ley considerando que no siempre el cumplimiento de la misma representa un bien, sino que hay ocasiones en que no resuelve un problema. Caso Chiapas. Esto equivale a

[31] Artículo 87: El Presidente, al tomar posesión de su cargo prestará ante el Congreso de la Unión, o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande".

hacer selectiva la aplicación del Derecho y que ella dependa de la fuerza política, económica o social de los sujetos violatorios. Tal pareciera que estamos creando condiciones para que si se conjunta fuerza, se viole la norma. Es una invitación que dice: ¿quieres violar la ley? Hazte fuerte políticamente y podrás hacerlo.

m) Casos en que el Congreso Local y el Ejecutivo del Estado han violado la Constitución a sabiendas:

Artículo 10, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado. (Replaqueo)[32]. Inequidad el impuesto y aplicación retroactiva del mismo. En lo individual parece que daña poco pero significó que a la comunidad guanajuatense en conjunto se le quitaron más de doscientos sesenta millones de pesos.

Artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que dice:

"El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá las facultades y obligaciones que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Guanajuato, la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables".

"El Gobernador del Estado podrá delegar atribuciones que no sean de su ejercicio exclusivo en las dependencias que de conformidad con esta Ley sean competentes, o en su caso, en los servidores públicos que estime pertinente".

[32] En su columna Pinceladas, publicada el 18 de diciembre de 2000 en el periódico a.m. de León, Gto., titulada "Ingresos y egresos", el Lic. Montes García desarrolla el tema.

EL JUEZ[33]

Guanajuato, Gto.
15 de junio de 2001

Tener la potestad de juzgar a nuestros semejantes porque la sociedad, a través de un mandato legal, nos la ha otorgado, implica, inexcusablemente, la adquisición de una enorme responsabilidad jurídica y moral que se traduce en la necesidad de corresponder a ella con el conocimiento profundo y amplio del Derecho, con imparcialidad y objetividad en el ejercicio descargo, diligencia en el desempeño, con modestia y austeridad en el comportamiento personal, con rectitud en la conducta, independencia de criterio y autonomía en la decisión. Todo ello solo se logra con un gran esfuerzo, una constante y permanente dedicación al estudio de la ciencia jurídica y una firme voluntad que preserve de claudicaciones y corruptelas.

Ser juez, aunque se reciba un sueldo, no es un empleo sino una vocación. El desempeño exige dedicación absoluta al cargo. No hay límite en el tiempo que se le dedica. En cada caso concreto habrá que encontrar la verdad y resolver conforme a ella. La aplicación del Derecho es la tarea que no se agota cuando concluye la jornada de atención al público en la oficina. El buen juez sabe que, para conservar claridad de juicio y serenidad en las decisiones, necesita de una conducta personal moderada. Cualquier exceso mina y disminuye su capacidad de esfuerzo.

El trabajo judicial pide, para ser realizado con propiedad, soledad física que no debe traducirse en aislamiento espiritual. La comunicación del buen juez con los juristas prudentes, de ayer y de hoy, se hace a través de consulta continua a la doctrina y a los antecedentes judiciales.

Escuchar a los judiciables es útil, pues si bien la sentencia tendrá que dictarse en congruencia con lo actuado, el conocimiento directo del sentenciado, sobre todo en derecho penal, resulta insustituible para la graduación de la pena que no será correcta sin valorarla personalidad y peligrosidad social del reo.

Al exceso de ingreso de asuntos y a las frecuentes triquiñuelas de las partes no debe agregarse la indolencia de trámite del Tribunal. Todo ello produce el rezago judicial, que es el mayor mal que agobia a la justicia. Se requiere personal de apoyo para abatir este rezago pero los secretarios y proyectistas, indispensable ayuda, son sólo coadyuvantes, no sustitutos del juez. La llamada justicia de secretarios es una perversión que no está autorizada por la ley.

---

[33] Publicado en su columna Pinceladas, el 18 de junio de 2001, en el periódico a.m. de León, Gto.

El juez es el conductor y director del proceso. Las otras partes son sus auxiliares. Cualquier medio que el juez y partes utilicen tiene como propósito encontrar la verdad. Aplicar autoridad y energía a veces es útil para evitar desviaciones, pero también lo es la suavidad y gentileza para orientar a quienes están frente al juez.

La objetividad y la imparcialidad son actitudes sin las que no se puede impartir justicia. Si en un caso existe algún sujeto o circunstancia que las perturbe, el juez deberá excusarse del conocimiento de ese asunto, sin esperar a que los interesados lo recusen. La excusa nunca será pretexto frívolo para dejar de conocer de asuntos difíciles o de alto impacto social.

El ejercicio de la judicatura implica virtudes y conocimientos que nunca se adquieren totalmente. Los centros de enseñanza solo otorgan las bases mínimas que permiten la actualización permanente. Tener conciencia de esta limitación servirá para desterrar la soberbia, que parece una deformación natural del ejercicio judicial. La ley otorga al juez la facultad de decidir un conflicto, pero la sabiduría para hacerlo sólo se adquiere con sacrificios y esfuerzos. No confundir capacidad legal de decidir con correcta decisión, es obligación ética insoslayable de los jueces. Corregir lo mal hecho, siempre dentro de la ley, es la más alta valentía.

La sociedad quiere que sus jueces sean confiables y para ello les pide que huyan de la corrupción. En ocasiones es tan sutil que se adquiere insensiblemente, con simples tolerancias, dejándose llevar, escuchando palabras de amistad y apoyo que disfrazan intereses ilegítimos. Son tan atrayentes los frutos de la corrupción que suele presentarse como conducta normal. En ocasiones, con criterio distorsionado, socialmente se valora al corrupto como exitoso, como inteligente, y al honesto como fracasado y tonto. La corrupción casi siempre va acompañada de un rápido y notorio éxito económico. ¡Qué obligado está el juez de huir de ella y evitarla a cualquier costo en su tribunal! Sólo es honesto el juez que está consciente de que sus conocimientos, por muchos que sean, sólo valen porque vive en sociedad y sin ésta serían inútiles.

Es una expresión común señalar que en cada sentencia debe realizarse el valor justicia, pero esta expresión es de difícil logro. El buen juez debe buscar la verdad y atarse a ella. Defenderla y hacer que prevalezca. La ley y la verdad son su meta y su defensa. No hay casos pequeños si la justicia está de por medio.

En ocasiones, la aplicación de la ley crea conflictos con aparentes contradicciones entre ésta y la justicia. Todas las leyes merecen la presunción de que son justas, y en principio hay que acatarlas porque justicia y seguridad no son valores excluyentes, pero si en algún caso real la aplicación de la ley se riñe con el concepto de justicia porque la norma atenta contra valores humanos fundamentales, el buen juez no la aplicará y antes renunciará al cargo. Esta decisión extrema, delicada, solamente se tomará después de profundo, sereno y prudente análisis.

Sólo quien tenga la conciencia que el ejercicio de la judicatura constituye una digna esclavitud podrá cumplir las altas responsabilidades que se aceptan cuando se protesta el cargo de juez. Si alguna función dignifica y eleva es la de buen juzgador. Si algún defecto denigra y daña, a quien lo tiene y a la comunidad, es el de mal juez.

Todos los jueces tienen a su servicio un instrumento moderador de la regla general que servirá para mejor realizar el valor justicia, es la equidad. Aristóteles decía que la equidad es mejor que la ley porque sirve para moderar ésta cuando, en un caso concreto, puede causar un daño no deseado. El ejercicio equitativo del Derecho es la más alta responsabilidad de un juez.

Cualquier desmesura puede ser lesiva para el buen desempeño judicial, incluso el trabajo inmoderado. El descanso racional es tan importante como el trabajo mismo y por eso debe disfrutarse de manera plena. La vida ordenada es condición para la buena impartición de justicia. Sin honestidad, prudencia, sabiduría, diligencia, mesura, estudio, sentido común y preocupación por la justicia no se llega a ser buen juez.

DICTAMEN SOBRE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN LA TRIBUNA DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA MESA "PROYECTO PARA LA NACIÓN: PROGRAMA DE ACCIÓN"

Partido Revolucionario Institucional
24 y 30 de octubre de 2001

De la lectura de las ponencias presentadas bajo el rubro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se advierte una gran coincidencia tanto en el diagnóstico sobre los problemas que aquejan a tales áreas, como en las proposiciones tendientes a superarlas.

El diagnóstico es negativo y se reconoce, crudamente, que no se cumplen las metas y los valores perseguidos en Justicia, Seguridad (entendida como prevención y persecución de los delitos) y en Derechos Humanos. Se da a entender que se adolece de ineficacia, de formalismos y de poca celeridad en los servicios. Se reconoce la existencia de la corrupción y se extiende la desconfianza del gobernado en las instituciones y en los servidores públicos. Lo anterior debe entenderse como una apreciación de carácter general no achacable a todos los segmentos de las áreas, pero que constituye un telón de fondo susceptible de removerse como una prioridad de carácter político y ético insoslayable.

Objetivamente se aprecia que las acciones de los gobiernos de origen no priistas nada significativo han hecho para mejorar las cosas y la pobreza de sus planes, unida a la incapacidad de sus diversos niveles de mando, explican su fracaso.

I

Cabe considerar que si fuere necesario matizar defectos y vicios, el renglón relativo a la inseguridad podría considerarse como el más grave y urgido de políticas eficaces. Hay un clamor de todos los sectores sociales denunciante del fenómeno, el cual tiene repercusiones de toda índole incluidas las relativas a las actividades económicas. Muchas empresas e iniciativas se ven frustradas ante la inseguridad y ante la multiplicación de delitos sumamente graves, como el secuestro, el asalto, todo lo relativo a protección, financiamiento, comercialización y tráfico de drogas, robo de automóviles y otros. La impunidad es también un fenómeno extenso.

II

En el concepto de administración de justicia se habla indistintamente de atribuciones propias de la actividad jurisdiccional, del Ministerio Público, la policía ministerial y la policía preventiva. Se hace necesario, sin embargo, hacer las distinciones pertinentes. En lo jurisdiccional la aplicación de la ley queda en manos de los jueces y sujeta a las acciones de las partes, sin poder rebasar en la mayoría de los casos estas funciones. Al Ministerio Público le corresponde ciertamente perseguir el delito pero debe asignarse a la policía indagatoria y a la policía preventiva la responsabilidad de la investigación y recolección de pruebas. Hay opiniones doctrinales en el sentido de que la actividad investigadora de carácter policiaco debe de gozar de mayor autonomía respecto de la estricta fiscalización que corresponde al Ministerio Público, modificándose para ello las bases constitucionales. Por lo que ve al Poder Judicial Federal, debe reconocerse que es una de las áreas más limpias y respetables, sin perjuicio de la revisión que se haga de las leyes que lo rigen.

III

Hay coincidencia de pareceres en el sentido de impulsar la profesionalización en todos los niveles de los servidores públicos y principalmente en el área policial. No puede negarse que se trata de un punto de vista sumamente atendible puesto que la improvisación, el empirismo y la ausencia de programas rigurosos para la capacitación constituyen un serio obstáculo para el mejoramiento de los servicios. Vinculado a este punto se señala también la necesidad de otorgar mayores recursos a fin de remunerar con justicia a quien honestamente desempeñe con eficacia sus obligaciones. En relación con el mismo tema se propone el mejoramiento de elementos materiales y la modernización de equipos que permitan al servidor público superar la acción delictiva, sobre todo cuando ésta se halle organizada.

IV

Se hace ver en las ponencias la conveniencia de una coordinación más estrecha y eficaz entre las autoridades ministeriales y policíacas de la federación y de los estados, despejándose toda clase de obstáculos burocráticos que puedan enervar la actividad persecutoria e indagatoria. Se señala que también resultará pertinente establecer diversos centros, nacional y regionales de capacitación permanente, así como registros confiables de los integrantes de los diversos cuerpos policiales.

V

En materia estatutaria se advierte la preocupación por la revisión de las leyes sobre esta materia y se busca mayor simplificación, claridad y transparencia en los trámites. De allí que se hable de la pertinencia de establecer la oralidad para el conocimiento y ventilación en algunos delitos. No puede negarse que

hay exceso de formalidades susceptibles de removerse y de facilitar la gestión al particular, así como también facilitar la protección a las víctimas, todo lo cual amerita reestructurar la legislación procesal. Parece muy atendible la creación de grupos investigadores adscritos a agencias del Ministerio Público itinerantes.

VI

Hay quienes proponen reducir la edad de delincuentes menores para ampliar el margen de imputabilidad. Los criterios empleados en este punto son muy variados y difícil de unificar. El estudio se amerita y quizás sea conveniente crear bases de juicio que permitan a la autoridad determinar la imputabilidad circunstancialmente y en cada caso.

VII

En cuanto a lo sustantivo se advierte la conveniencia de revisar sanciones y agravar las correspondientes a delitos sumamente graves como el secuestro, el tráfico de menores, la violación, el lavado de dinero, el terrorismo y otros. Incluso habrá que estudiar la conveniencia de federalizar ilícitos graves que hoy corresponde prever a las legislaciones locales.

VIII

Existen leyes de carácter penal que adolecen de inconstitucionalidad, como sucede con algunas disposiciones relativas al crimen organizado. Se comprende la necesidad de acentuar la acción persecutoria hacia los integrantes de esas organizaciones que tanto daño causan, ameritándose un mayor rigor procesal y sustantivo. Sin embargo, su condición desconocedora de ciertas exigencias constitucionales, ha permitido a delincuentes que disponen de amplios recursos de defensa, conseguir la protección de los tribunales federales, con la consecuente impunidad. De allí la necesidad de examinar con detenimiento algunos preceptos constitucionales que, tomando en cuenta la protección de la sociedad y de las víctimas, se establezca mayor congruencia entre la legislación secundaria y las bases constitucionales.

IX

Otro problema que se destaca en las ponencias es el relativo a la mayor protección a emigrantes. Ver por aquellos mexicanos que al no encontrar condiciones de trabajo en su tierra, pasan como indocumentados a los Estados Unidos, es algo que requiere de constante atención. Esos trabajadores aportan su esfuerzo en el exterior para solventar mejores condiciones de vida para sus familias y merecen un tratamiento digno y tendiente al reconocimiento de sus derechos frente a los abusos de que son víctimas. Debe reforzarse toda acción diplomática para conseguir del estado norteamericano una política de respeto y reconocimiento a tales derechos. La acción de nuestros consulados

tiene que multiplicarse y aumentar su número en las zonas que se estimen más adecuadas para que constantemente se vele por nuestros trabajadores. Dentro de este mismo tema y siendo la desocupación la principal causa de emigración, el Partido tendrá que avocarse con prioridad indiscutible a atacar tan grave problema que a su vez fomenta el aumento de la delincuencia.

X

En materia de derechos humanos no se ha avanzado todo lo deseable. Debe entenderse que la función de los diversos órganos vigilantes del respeto a los derechos humanos no solamente se halla dirigida a garantizar el tratamiento estrictamente legal de los delincuentes, sino también de las víctimas y de cualquier particular respecto del cual las autoridades de cualquier nivel puedan desconocer o conculcar tales derechos fundamentales. Las recomendaciones que dictan tales organismos suelen ser desatendidos sin que se corrijan las faltas cometidas. Procede buscar medidas que permitan la mayor consideración a tales recomendaciones, incluyendo la posibilidad de que algunos de ellos, por su importancia, puedan ser vinculatorias. Esta posibilidad habrá de estudiarse con el mayor cuidado para evitar que se puedan invadir o duplicar facultades propias de los tribunales de amparo.

XI

Finalmente tiene que reconocerse que la simple mención de propósitos y la enumeración de medidas generales para combatir la inseguridad, los vicios, la corrupción, etc., es algo insuficiente. Ha llegado el momento en que no sólo se debe decir lo que tiene que hacerse, sino también cómo debe hacerse. Se hace indispensable una labor de desarrollo, de precisión, de laboratorio, para ir desglosando las proposiciones y traducirlas en acciones e iniciativas concretas.

Miércoles 24/octubre/2001.

ACCIONES E INICIATIVAS CONCRETAS

I.

a).-Crear un comité nacional que coordine todas las acciones que se tomen para prevenir el delito. En cada entidad federativa el Procurador de Justicia presidirá este comité que en lo nacional será presidido por el Procurador General de la República.

b).-Ampliar las atribuciones de las procuradurías de justicia en aquellas legislaciones locales que lo requieran a fin de facultarlas para realizar acciones de prevención del delito.

c).-Integrar a las procuradurías las actuales secretarías de seguridad pública transformándolas en subprocuradurías de seguridad pública y prevención del delito.

d).-Crear al interior de cada procuraduría un órgano de evaluación que estime periódicamente la eficacia de esta dependencia señalando el número de asuntos que quedan en archivo, en reserva, en los que se determinó el no ejercicio de acción penal y aquéllos en que no se obsequió la orden de aprehensión. Debe determinarse también el número de sentencias condenatorias obtenidas y el número de sentencias absolutorias.

II.

a).-Impulsar la profesionalización de las tres áreas fundamentales de las procuradurías de justicia: uno, el Ministerio Público; dos, los peritos y tres, la policía investigadora.

Para lograr esta profesionalización es indispensable crear la Escuela Nacional de Investigación Científica Criminalística, si es necesario con campus estratégicamente ubicados en varias entidades federativas.

b).-En defecto de lo anterior, establecer una coordinación institucional entre las distintas academias policiales y entidades de capacitación de personal existentes para lograr que los actuales esfuerzos, dispersos e incoordinados, rindan mejores frutos.

c).-Crear un comité interdisciplinario a fin de preparar normativamente, desde el nivel constitucional hasta los legales, el fortalecimiento de la autonomía de las policías para asignarles la responsabilidad de la investigación de los delitos y recolección de pruebas y asignar al Ministerio Público la fiscalización de esas averiguaciones y la consignación ante tribunales.

d).-Apoyar decididamente la especialización de los tribunales para que tanto a nivel federal como local haya jueces de instancia especializados por materias, fundamentalmente penal y civil. Fortalecer también la especialización de los tribunales de control constitucional.

III.

a).-Se reitera la necesidad de la creación de la Escuela Nacional de Investigación Científica Criminalística.

b).-Establecer a nivel constitucional, un porciento presupuestal mínimo bastante destinado a cada uno de los poderes judiciales federal y locales que constituirán su presupuesto anual, sin perjuicio de aumentarlo cuando sea necesario.

c).-Sugerir el establecimiento de un salario mínimo judicial suficiente en las entidades federativas y mecanismos que garanticen el retiro de los jueces con disfrute de haberes vitalicios dignos.

d).-Fortalecer las instalaciones, el armamento y el elemento humano de los organismos que combaten y previenen el delito sobre todo de aquellos encargados de combatir a la delincuencia organizada.

IV.

a).-Facultar legalmente a cualquier procuraduría para investigar los delitos que lleguen a su conocimiento, pues en estricto rigor la competencia es una característica jurisdiccional que solo debe atribuirse a los órganos que digan el derecho, pero no a los que prevengan o investiguen los ilícitos penales. Con esto se evitarían las dilaciones en el inicio de averiguaciones con declaraciones, a veces tendenciosas, de no competencia.

b).-Fortalecimiento del Registro Nacional de Armas de Fuego dentro del que deben incluirse todas y cada una de las asignadas a los cuerpos policiales, así como aquéllas con las que se haya cometido un delito. Este registro contendrá también los nombres y datos de identificación de delincuentes y policías. Su consulta será obligatoria cuando se designen servidores públicos de estas áreas.

V.

a).-Establecer para los delitos que merezcan pena alternativa el procedimiento oral para que de manera breve se dicten las sentencias.

b).-Simplificar los procedimientos penales para suprimir formalidades excesivas y facilitar la participación procesal de los ofendidos.

c).-Reestructurar la legislación procesal impulsando la protección y atención a las víctimas.

d).-Impulsar la creación de Ministerios Públicos Especializados en diversos tipos delictuosos tales como: los contra la vida; los contra la propiedad; los contra la libertad y los cometidos por la delincuencia organizada.

VI.

a).-Dejar los actuales límites de imputabilidad por edad del sujeto activo, pero establecer la obligación ministerial de determinar pericialmente la edad real, que puede ser diferente a la cronológica, cuando un menor cometa

delitos graves y establecer, para estos casos, procedimientos y penas como si se tratase de mayores imputables.

b).-Homogeneizar las normas aplicables a menores infractores y la estructura de los tribunales que conocen de esas infracciones.

VII.

a).-Revisar las sanciones correspondientes a delitos graves como el secuestro, el tráfico de menores, la violación, los relativos a producción, financiamiento, comercialización y tráfico de estupefacientes, el terrorismo, el robo de automóviles y otros.

b).-Responsablemente analizar la conveniencia de federalizar delitos graves, considerando que debe evitarse el burocratismo de la centralización.

VIII.

a).-Se reconoce que la delincuencia organizada debe ser combatida implacablemente.

b).-Revisar la constitucionalidad de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y si es necesario reformar la Constitución buscando la supresión de algunas garantías procesales y de investigación a quienes pertenezcan a organizaciones delincuenciales.

c).-Los miembros importantes de la delincuencia organizada disponen siempre de recursos para pagar una defensa eficaz y las actuales inconstitucionalidades de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada provocan la concesión de amparo a los consignados por estas normas. Por eso urge la actualización de esta ley y las reformas constitucionales consecuentes.

IX.

a).-Impulsar decididamente toda acción diplomática que tienda a conseguir de los Estados Unidos de Norteamérica el reconocimiento y respeto a los derechos de los emigrantes mexicanos.

b).-Multiplicar el número de consulados en los Estados Unidos de Norteamérica en aquellas zonas en que se asientan numerosos nacionales mexicanos.

c).-Estimular la creación de programas que aseguren empleo a nuestros nacionales sobre todo en los lugares en donde existen gran número de emigrantes.

X.

a).-Difundir desde la educación preescolar y primaria el conocimiento de los derechos humanos.

b).-Fortalecer los organismos que garantizan la vigencia de los derechos humanos.

c).-Crear conciencia de que los derechos humanos no son sólo los de los violadores de la ley sino también y fundamentalmente los de las víctimas de esas violaciones.

d).-Mejorar los procedimientos de investigación de los organismos que garantizan la vigencia de los derechos humanos a fin de que cumplan los requerimientos constitucionales.

e).-Reformar las leyes para que las recomendaciones de los organismos que vigilan por la vigencia de los derechos humanos, en los casos más trascendentes, tengan carácter vinculatorio.

Miércoles 30/octubre/2001.

CÓDIGO PENAL. ALGUNOS PUNTOS NUEVOS DE INTERÉS

Guanajuato, Gto.
Jueves 29 de noviembre 2001

PARTE GENERAL.

1.-El error o ignorancia invencible puede dar lugar a la exclusión del delito. El error vencible motiva pena atenuada. (Artículo 13).
2.-Se introduce como disposición sustantiva en el artículo 1 el catálogo de delitos graves.
3.-Se suprime la figura de delito preterintencional (con lo cual no estoy de acuerdo).
4.-No se adopta ninguna doctrina especial sobre elementos del delito, desechándose las influencias de teorías alemanas que transitoriamente tuvieron efectos en nuestra legislación. El artículo 19 de la Constitución Federal exige para el auto de formal prisión elementos que prueben el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
5.-Se mantiene la edad de 16 años cumplidos para que un menor pueda ser penalmente responsable.
6.-Se suprimen las penas de relegación, confinamiento, publicación de sentencia y amonestación. Las dos primeras nunca se establecieron para ningún delito y las dos últimas se quitan por resultar trascendentes.
7.-La pena de prisión va de diez días a cuarenta años, en vez de tres días a treinta años del código abrogado. Esto se debe a que se aumentó la pena para homicidio calificado, homicidio en razón de parentesco y secuestro a treinta y cinco años de presión; y a cuarenta años para el caso de concurso real o ideal.
8.-Se introducen nuevas alternativas en las penas, como el trabajo a favor de la comunidad y la semilibertad condicionada (reclusión nocturna o reclusión de fin de semana). También se crea la pena de no ir o residir en una determinada jurisdicción territorial.

Sobre el trabajo a favor de la comunidad, transcribo comentario que hice hace tiempo:

> "Se define el trabajo a favor de la comunidad en forma igual a la del artículo 27 del Código Penal del Distrito federal. Puede ser pena autónoma o sustitutiva.
>
> Se fija la jornada de trabajo en tres horas y se aclara que se trata de servicios no remunerados.
>
> En el Código del Distrito Federal se explica que la jornada de este servicio se llevará a cabo en períodos distintos al de las labores que

representen para el sujeto su principal fuente de ingresos. Es algo sobreentendido en el proyecto.

Como es obvio que la persona tiene que trabajar en labores remuneradas para mantenerse, las tres horas vienen a ser un agregado a la jornada legal de ocho horas. Si tomamos en cuenta que conforme al artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo las horas extras no pueden exceder de tres al día ni de tres veces a la semana, tenemos que concluir que el exceso a estos márgenes será indebido y contrario a principios laborales muy respetables. La solución será que el sujeto solamente dedique tres días de la semana al servicio como pena. Bajo el supuesto de que a una persona se le impongan tres años de prisión y que esta pena se sustituya por trabajo a favor de la comunidad, tardará en purgarla seis años aproximadamente a razón de tres días por semana.

Desde el punto de vista práctico la aplicación de esta pena de trabajo a favor de la comunidad presentará muchas dificultades. Requerirá de un cuerpo administrativo más o menos grande que se encargue de colocar al reo en alguna dependencia oficial o en institución privada, de vigilar que el sujeto acuda normalmente a desempeñar las labores que se le asignen y de llevar la cuenta de los días laborados, etc. No se prevé en el proyecto qué sucederá cuando la persona no acuda puntualmente al trabajo, ya se trate de pena autónoma o sustitutiva".

9.-En reparación del daño se precisa que debe tomarse como base el valor comercial de la cosa en el momento de la comisión.

En casos de lesiones y de homicidio, a falta de pruebas específicas sobre el daño causado, se tomará como base el salario mínimo vigente el momento de los hechos y las disposiciones sobre riesgos de trabajo de la Ley Federal del Trabajo.

En cuanto a daño moral, a falta de pruebas se incrementa a ciento veinte días (en vez de noventa) del salario mínimo.

PARTE ESPECIAL.

1.-Se reordenan los capítulos que enumeran los delitos conforme al siguiente criterio: tutela de bienes jurídicos de las personas, delitos contra la familia, contra la sociedad y contra el Estado.

Se revisaron disposiciones penales de otros códigos para incluirlos en el penal, como por ejemplo delitos contra la hacienda pública.

2.-Para el homicidio simple se aumenta la pena de diez a veinticinco años de prisión. En el código abrogado la pena es de ocho a veinte años. Al responsable de homicidio calificado se le impone una pena de veinticinco a treinta y cinco años mientras que en el código abrogado la pena era de veinte a treinta años. Estos son delitos graves.

3.-A quien infiera una lesión que no ponga en peligro la vida y tarde en sanar hasta quince días se le impondrán de cinco a veinte jornadas de trabajo a

favor de la comunidad; si tarda en sanar más de quince días se le impondrán de cuatro meses a un año de prisión. En el código abrogado si las lesiones tardan en sanar hasta quince días se le impondrá de tres a cuarenta días de multa. Este delito de lesiones se persigue ahora por querella. Cuando las lesiones dejen cicatriz permanente en la cara, cuello o pabellón auricular se impondrá de uno a cinco años de prisión. Si este delito es culposo se perseguirá por querella. El delito de lesiones que pongan en peligro la vida o el que produzca enfermedad mental, pérdida de algún miembro o de cualquier función o incapacidad para el trabajo, se considera delito grave.

4.-Se suprimen los delitos de ataque peligroso y disparo de arma de fuego para que puedan ser considerados como tentativa de homicidio o de lesión.

5.-El homicidio culposo cometido por quien conduzca vehículos que estén prestando servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas se sancionará con prisión de tres a ocho años (actualmente es de dos a seis años de prisión). Este delito se califica ahora de grave.

Debe hacerse notar que en el código abrogado se considera el transporte público de personas o remunerado, mientras que en el nuevo código se considera también el transporte de cosas, en lo cual no estoy de acuerdo.

6.-Por lo que ve al delito de aborto, considérese lo que ya se ha hecho en este particular. En el nuevo código este delito se considera grave.

7.-El delito de secuestro se castiga ahora con prisión de diez a veinte años, pero si la persona secuestrada es mutilada, privada de la vida o violada, la pena aumenta de veinte a treinta y cinco años de prisión.

8.-El delito de violación se castiga con la pena de ocho a quince años de prisión. En el código abrogado la pena es de quince a doce.

Se equipara a la violación la introducción por vía anal o vaginal de cualquier objeto o componente orgánico que no sea el miembro viril.

Se considera que pueda haber violación entre cónyuges o concubinos en cuyo caso este delito se perseguirá por querella.

Aparte de los casos que ya contemplaba el código abrogado, la violación se considera calificada cuando se comete entre hermanos, ascendientes o descendientes, padrastros, padrastro, madrastra e hijastro, adoptante o adoptado o tutor o pupilo. Cuando se comenta por el superior jerárquico contra su inferior o cuando se cometa en persona que esté bajo custodia, educación o internado. Delitos graves.

9.-Se suprimen los delitos de injurias y adulterio.

10.-Para fijar la pena al delito de robo se sigue atendiendo al valor de la cosa robada. En el nuevo código se parte de una equivalencia de doscientas veces el salario mínimo, con pena de diez días a dos años de prisión; cuando se exceda esa cantidad la pena aumenta de dos a cuatro años de prisión, etc.

Se consideran robo calificado aquellos casos que ya contemplaba el código abrogado pero aumentándose otros supuestos como el robo de una o más cabezas de ganado, cualquiera que sea su especie, así como también el robo de maquinaria agrícola, bomba de agua, transformador o cualquier

otro equipo destinado al riego agrícola. Desaparece el robo de ganado como figura autónoma.

El robo calificado se considera grave.

Desaparece la excusa absolutoria en los casos de robo entre cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes, adoptante y adoptado, tutor y pupilo, padrastro e hijastro, parientes afines en primer grado y entre hermanos; pero en estos casos se requiere de querella.

11.-Se crea el tipo de administración fraudulenta que dice: "a quien teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular de éstos, en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas en el artículo 202".

Como se ve, se trata de una definición demasiado amplia.

12.-Para el delito de usura se dice que hay lucro excesivo cuando en el momento de los hechos los intereses o ventajas económicas sean cuatro veces o más el gasto porcentual promedio que mensualmente fije el Banco de México.

13.-Si el despojo se realiza por tres o más personas, se considerará delito grave.

14.-El delito de daños a museos, archivos, bibliotecas o bienes que tengan valor artístico, se considerará grave. También será grave cuando se cause por incendio, inundación o explosión.

Se define el delito de incumplimiento de obligación de asistencia familiar. A quien injustificadamente deje de satisfacer las obligaciones alimentarias se le aplicará prisión de seis meses a tres años, así como al pago de los alimentos caídos. A quien se coloque dolosamente en estado de insolvencia con el propósito de no cumplir con sus obligaciones alimentarias, se le aplicará de uno a cuatro años de prisión

15.-En cuanto al incesto se dice que se privará de la patria potestad a los ascendientes que cometiesen el delito. También se dice que se equipara al incesto a quien tenga relaciones sexuales con los descendientes de su "pareja".

16.-Se crea un capítulo especial para el delito de tráfico de menores. Comete ese delito quien ejerciendo la patria potestad o teniendo a su cargo un menor injustificadamente lo entregue a un tercero a cambio de un lucro. La pena será de tres a nueve años de prisión. Luego dice que si la entrega se hace sin consentimiento (¿de quién?) para la explotación del menor con fines reprobables la pena aumenta de cuatro a diez años de prisión. Después se dice que si la entrega del menor se hace con la intención de incorporarlo a un núcleo familiar y otorgarle los beneficios de tal incorporación, se aplicará a los intervinientes de seis meses a dos años de prisión. Este delito se califica como grave, salvo excepción.

17.-Se crea el delito de violencia intrafamiliar, el cual comete el que ejerza violencia física o moral contra una persona que tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o análoga. La pena será de cuatro meses a cuatro años de prisión. Delito de querella, excepto si la víctima es menor de edad.

18.-Se considera también delito contra las leyes de inhumación y exhumación a quien profane cadáveres.
19.-Se agrava la pena para el delito de pandillerismo y asociación delictuosa con una mitad más de las penas correspondientes al delito cometido.
20.-Se incorpora al delito de violación de correspondencia la conducta de quien accese, destruya o altere la comunicación o información contenida en equipos de cómputo, sus accesorios u otros análogos.

Se elimina la excusa absolutoria para el cónyuge que viole correspondencia del otro.
21.-Se crea un título para los delitos contra el desarrollo de las personas menores o incapaces. Puntualizando conceptos existentes en el código abrogado, se precisan aquellas conductas tendientes a la fabricación, publicación o distribución de objetos obscenos utilizándose para ello a menores de dieciocho años o incapaces. Igualmente se precisa como delito la conducta que tenga por objeto la corrupción de menores de dieciocho años o de incapaces.
22.-Se aumentan las penas al delito de lenocinio cuando se cometa en contra de personas menores de edad o de incapaces.
23.-Se crea el delito de terrorismo que comete quien por cualquier medio realice actos en contra de las personas, cosas o servicios al público que produzcan alarma, temor o terror en la población para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación. La pena va de tres a quince años.
24.-Se crea el delito de tráfico de influencias con el cual se pretende inhibir la conducta indebida de negociar o especular con el poder, predominio o fuerza que se tenga. El delito puede ser cometido por el servidor público o por interpósita persona. Se castiga a quien promueva resoluciones ilícitas en negocios públicos ajenos a las funciones inherentes del empleado; así como a quien obtenga beneficios económicos al promover indebidamente resoluciones o actos por el servidor público. La pena va de seis meses a cuatro años de prisión.
25.-El delito de afectación al ordenamiento urbano que se encuentra en la Ley de Fraccionamientos, se incorpora al Código Penal. Se castiga a quienes trasmitan el dominio o cualquier otro derecho respecto a inmuebles que bajo su fraccionamiento se requiera autorización.
26.-Se crea un título para los delitos contra la hacienda pública que ya estaban previstos en el Código Fiscal, revisándose su redacción y haciendo algunas correcciones.
27.-Se crea un título para delitos electorales por considerarse que son de la pertenencia del Código Penal, revisándose los textos y haciendo algunas correcciones.
28.-Se crea un título para delitos ecológicos, por ser materia perteneciente al Código Penal.

ENTREVISTA CON EL LIC. MIGUEL MONTES GARCÍA

Por el Lic. Santiago López Acosta[34]
Guanajuato, Gto.
2002

Muchas gracias Lic. Miguel Montes García que nos haya aceptado esta entrevista.
Con mucho gusto, el agradecido soy yo.

El próximo 29 de agosto vamos a conmemorar el 175 aniversario del Decreto Legislativo que crea la Carrera del Foro, que parece es uno de nuestros antecedentes, o quizá el antecedente más remoto de nuestra carrera y de nuestra Facultad.
Que bueno, lo felicito por hacer esta investigación que muchos de quienes estudiamos en esa Universidad no conocíamos; usted me ha hecho favor de platicármelo y me parece que es importante para la vida de la Escuela de Derecho saber cómo y cuándo nació.

Así es y rescatar nuestra experiencia viva de egresados con una larga y destacada trayectoria como la suya.
Muchas gracias.

Lic. Montes, ¿cuál fue el período donde usted estudió la carrera de Derecho?
Yo realicé mis estudios en la Escuela de Leyes, así se llamaba entonces, de la Universidad de Guanajuato de 1959 a 1963; es mi período de estudiante; y el título que obtuve ya no lo expide ahora la Universidad de Guanajuato. Mi título que es de Abogado y Notario Público; ese es el momento. Antes había hecho yo mi escuela preparatoria en la escuela de León, que dependía y depende de la Universidad de Guanajuato.

¿Cuándo presentó su examen de titulación?
Lo presenté el 17 de octubre de 1964. Recordará usted, que el año lectivo de la Universidad era de febrero a noviembre, principios de diciembre; durante la época de frío en Guanajuato, que es bastante intensa, andábamos desmañanándonos y desvelándonos para preparar los exámenes finales. Todos aquellos exámenes eran verbales con tres sinodales que lo examinaban a uno por confesionario o unidos; era un sistema bastante estricto el presentar los exámenes.

[34] Originalmente, la entrevista apareció en una publicación especial impresa de la Universidad de Guanajuato.

¿Y el examen recepcional era todavía más riguroso?
El examen recepcional era más riguroso. Eran cinco sinodales, el reglamento entonces vigente decía que podrían interrogarnos sobre cualquier tema teórico o práctico de la carrera. Elaborábamos una tesis escrita, requisito indispensable para presentarlo; había ocasiones que los sinodales no la leían o por lo menos algún sinodal no la leía, porque sabían que tenían derecho a preguntarnos sobre lo que fuese. Eran exámenes muy pesados para el sustentante. Hay una broma que definía al examen recepcional: decía que era un acto solemne en donde cinco personas que estaban de un lado de una mesa le demostraban a una sexta, que estaba frente a ellos, que era ignorante y acababan por decirle "colega".

¿Sobre qué fue su trabajo de investigación?
Yo era en ese momento, la ley lo permitía, -la Ley Federal del Trabajo-, Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, y mi tema fue sobre Derecho Laboral; presenté una tesis sobre la necesidad de que los tribunales del trabajo estén integrados por jueces y que no sean tripartitos, como siguen siéndolo, integrados por representantes del trabajo, del capital y del gobierno; en aquel momento ni siquiera se exigía que fuese abogado, simplemente que debía ser técnico en derecho del trabajo. Como todos los que hemos hecho la tesis hace muchos años algunos aspectos de ella nos da un poco de pena, porque éramos muy inexpertos y otros con el tiempo se ratifican. De aquella tesis ratificaría la necesidad de que los conflictos individuales, los que son de patrón a trabajador por acciones individuales se resuelvan por un juez, pero también reconozco la necesidad de que los conflictos colectivos, huelgas, conflictos de orden económico, se resuelvan por tribunales de clase.

¿Cómo observa a la distancia Lic. Miguel Montes la evolución de la ciencia jurídica?
Sí hay evolución de la ciencia jurídica. Muchas materias de que el derecho no ha podido ocuparse porque –curiosamente- el derecho en otras áreas, en otras disciplinas científicas que son auxiliares del derecho ha avanzado poco, en todo lo de genoma humano, lo de derecho espacial, informática, computación sufrimos un retraso. No podemos ni tenemos capacidades los abogados de hace años para proponer leyes o normas en relación con estos temas; algunos institutos están haciendo esfuerzos, pero la verdad es que los abogados nos hemos dedicado a la ley, nos hemos olvidado de otras disciplinas científicas que complementan el ser buen abogado, que amplíen el horizonte y poder normar adecuadamente estas áreas; es un clamor que en México está insuficientemente normado lo relativo a transplante de órganos, a clonación, a vida in-vitro; los robos cibernéticos son para nosotros muy difíciles de detectar y de tipificar como delitos; también no se ha avanzado en la creación de derecho internacional.

En México, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio abrió áreas de ocupación de abogados sobre todo en fronteras, que muchos del resto del país desconocen. El Tratado de Libre Comercio debería ser un documento de cabecera de los abogados, no sólo en ciudades como Monterrey por la necesidad del comercio inmediato con los Estados Unidos, o en los grandes despachos, muchos de ellos transnacionales de la Ciudad de México; hay mayor creación de normas internacionales y una tendencia muy clara a uniformar leyes civiles, leyes procedimentales internacionales, y lo más novedoso tal vez es en el Derecho Penal. Ahora estamos en presencia de un Derecho Penal Internacional con jueces como Garzón que no sabemos cómo surgieron, y ese derecho surge donde hay tesis revolucionarias, en los delitos de genocidio por ejemplo, que nunca prescriben, y cualquier juez de los que forman parte de esos tratados o del mundo, tienen jurisdicción sobre delincuentes, aunque éstos hayan sido gobernantes, y los delitos no se hayan cometido en el espacio de vigencia inicial de la norma; todo esto es sumamente interesante y aquí hay evolución del Derecho.

¿Las universidades qué deben hacer para afrontar ese reto?...
Algunas están adaptándose a este reto. Ignoro, sería temerario decirlo, si mi Universidad se haya modernizado en ese sentido, pero conozco que el Tecnológico de Monterrey, que la Universidad Iberoamericana, Campus Distrito Federal, ha avanzado en sus programas de estudios; pienso que el abogado moderno, el abogado contemporáneo debe contar con mayores conocimientos científicos generales, siempre ha habido la necesidad de que el abogado sea un hombre culto; la cultura siempre ha sido un apoyo para el buen ejercicio de la abogacía; no se puede ser buen abogado si no se es culto; ya es tiempo de que todos los abogados en México hablen por lo menos inglés y francés, pues es una necesidad. Segundo, ya es tiempo de que todos los abogados manejen lo relativo a informática, manejen su computadora, puedan entrar a Internet, realizar consultas, es tiempo de que se especialicen en éstas y otras materias que hemos mencionado: Derecho Penal Internacional, Tratado de Libre Comercio, Derecho Electoral, tantas materias, pues el mundo de lo normativo es inacabable.

A la distancia Lic. Miguel Montes, ¿cómo recuerda usted su Escuela de Leyes?
Primero con un gran cariño, luego con nostalgia. Estamos muy conscientes que esa Escuela ya no existe. Éramos muchos para ese tiempo, pocos para el de ahora. Ahí hicimos nuestros mejores amigos, algunos conocimos ahí a las que ahora son nuestras esposas y tuvimos maestros verdaderamente destacados y creo que es justo mencionar algunos de los que yo tuve: Raúl Aranda fue mi maestro de Derecho Civil, brillante, inteligente; Jesús Luna Guzmán, un sabio del Derecho Penal, sus clases amenas, si no recordábamos la materia, recordábamos la gracejada, lo anecdótico y eso nos servía para aprender; gente como el maestro Arturo Serrano Robles que nos impartió Constitucional y Amparo

y era un extraordinario Juez de Distrito y luego fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia, y nos enseñó amparo de una manera sencilla, clara; fue muy esforzado y estimado, padrino de nuestra generación por elección al que no le pedimos ningún regalo, al contrario le ofrecimos una cena; Daniel Chowell Cázares; el maestro Armando Olivares Carrillo, no me dio clase, pero nos dio algunas conferencias, yo no tuve el privilegio de que fuera mi maestro en aula, lo fue en la Universidad de la vida; otro que recuerdo con gran afecto es el licenciado Hernández Téllez, quien ya falleció, que nos dio Derecho Administrativo, también un sabio del Derecho; creo que seré injusto y se me olvidarán algunos pero en términos generales tuvimos muy buenos maestros. Destaco al Maestro Trueba que impartió Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho.

De su época estudiantil, de sus compañeros de su generación, ¿qué recuerda?
Desde luego era una vida común. La ciudad de Guanajuato se presta para que la Universidad sea nuestra casa y toda la ciudad también, tuvimos una gran convivencia en esos momentos; luego la propia vida nos va separando, algunos compañeros seguimos viéndonos con frecuencia, otros sabemos dónde están, Cholita Hernández es magistrada y otros no sabemos ni dónde se encuentran. Creo que es lo normal en la vida universitaria, pero es una época que vale la pena vivir; la Universidad no sólo nos da carrera y quien piense que la Universidad es garantía para una situación económica personal aceptable creo que está en un error. La Universidad nos prepara no sólo para ganar dinero, amplía el horizonte de nuestra vida y nos da a conocer valores más importantes que el dinero mismo y eso facilita el bien vivir, que no es sinónimo de vivir con opulencia.

Lic. Miguel Montes en su larga y destacada trayectoria profesional usted ha tenido la oportunidad de desarrollarse en diferentes facetas profesionales; en los tres poderes ha tenido una función relevante, ha sido Ministro de la Corte, Diputado, ahora mismo es Diputado del Congreso del Estado por tercera ocasión, ha ocupado importantes cargos en la administración pública, es abogado postulante; ¿cuál de ellas le satisface más, cuál de esas actividades considera usted que le llena más como abogado?
Creo que tiene usted razón. Soy, yo siempre lo digo, no con soberbia, ni con vanidad, sino con una humildad real, ninguna falsa modestia tampoco, soy un mexicano privilegiado; ¿por qué razón? He tenido la oportunidad durante mi vida de trabajar con el Derecho, con la ciencia jurídica, con las leyes desde muy distintos ángulos; desde luego como postulante es indispensable conocer la ley para tener éxito en los casos que se manejan, he tenido la oportunidad de ser legislador local y federal y ahí me ha tocado ver las fuentes reales del Derecho y participar en alguna medida en el contenido y en la forma de algunas normas; la forma es muy importante en el Derecho.

Una forma confusa, una gramática mal redactada hace ineficaz la ley y confunde en lugar de orientar. He sido juez tanto en la Presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje como en el cuerpo judicial más alto del país.

He sido Procurador de Justicia, ese es otro aspecto de la vida del Derecho, con investigación de casos penales y persiguiendo el delito, lo que también es problemático y satisfactorio. Y algo de lo que me siento muy contento es que en diversas épocas de mi vida he sido maestro de la Universidad y compañero de estudios de grupos de estudiantes menores de edad que yo; todo esto me ha permitido tener una visión del Derecho y de su utilidad social. Por eso digo que soy privilegiado.

El cargo que más satisfacción me ha dado, es el haber sido Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Para cualquiera es muy satisfactorio, no la distinción que implica en sí mismo llegar a ese cargo al que muy pocos mexicanos llegamos, sino tener como compromiso de trabajo sólo su saber y su conciencia, ni siquiera la ley porque un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, en una interpretación jurídica puede hacer prevalecer, en los casos necesarios, sin sentirse creador del Derecho porque no es legislador y sin torcer la seguridad jurídica que sólo le da la ley, pero puede interpretando la misma acercarse más a la justicia y a la equidad, y no tiene más compromiso que su conciencia y el conocimiento de la norma. Entonces es un trabajo muy esforzado, altamente bello; estuve muy contento como Ministro.

Y también en los diferentes congresos en los que he participado, casi siempre me ha tocado presidir la Comisión de Justicia y me han permitido participar en la creación de algunas normas de todos niveles, que ojalá sean útiles para la comunidad que regulan.

¿La combinación entre política y derecho cómo la observa?

El señor Ministro Tena Ramírez, es un tratadista de Derecho Constitucional muy importante, decía refiriéndose a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ésta debería estar integrada siempre por un grupo de abogados que tuvieran como origen la carrera judicial, para que conocieran todo lo procedimental, y la importancia que para la seguridad jurídica tiene el procedimiento; pero también debería haber ministros que fuesen doctrinistas del derecho, doctos, sabios, creadores, que conocieran la filosofía jurídica y el deber ser, lo que debe contener la norma, además de la norma misma. Decía que debía haber abogados postulantes que hubieren sido honestos y destacados para que la Corte tuviese sentido de la práctica, de que no se dilatasen los asuntos años y años, sino que se resolviesen con rapidez dentro de lo posible y que no fuere sólo teoría sino practicidad y decía, y esto responde su pregunta, que debería haber buenos políticos para que conociesen la trascendencia social de sus resoluciones, la importancia que para la comunidad tiene una sentencia de la Suprema Corte, que va a marcar derroteros de conducta para todos los jueces del país del fuero que sea, para todos los tribunales del país y que la conducta

tiene que apegarse a lo que diga la Suprema Corte. Él decía, que solo una Corte integrada así sería ideal.

Entonces el Derecho tiene muchos puntos de contacto con la política, solo que a veces la palabra política se usa en sentido peyorativo, con ese sentido no tiene contacto el Derecho; con la buena política, la que está pensando en el bien general, en la justicia social, en la importancia del Derecho como norma de armonía y tranquilidad social, en eso a querer o no cada abogado es político, y a querer o no a cada político le hace falta conocer el Derecho. El trabajo legislativo se hace con las normas, por lo que creo que hay muchos puntos de contacto con la política bien entendida, que no tiene nada que ver con la demagogia, ni con la política electorera o meramente partidista convenenciera.

Lic. Montes, ¿qué recomendaciones podría usted formular para las nuevas y futuras generaciones de abogados de nuestra Facultad?

Mire, yo soy de la gente que no se siente capacitado para hacer recomendaciones; todos hemos cometido errores en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional; todos tenemos la necesidad de aprender, alguien que diga que lo sabe todo está mintiendo, a lo mejor de manera inconsciente.

Me ha servido a mí mucho y tal vez a todos los abogados, yo les platico, no les recomiendo, es leer lo más que puedan, no hay lectura mala, lea lo que caiga.

Yo recuerdo que de niño cuando mi mamá me mandaba al mercado yo me entretenía en un puesto de unas amigas, las Romo de La Piedad, Michoacán, donde hice mi secundaria, leyendo periódicos viejos en que ellas envolvían su mercancía, hacían alcatraces; y ahí me pasaba muchas horas hasta que mi mamá iba por mí. Pues hay que leer todo, no hay libros malos; todo nos deja alguna enseñanza y ahora en la vida moderna ya no nada más digo leer, tal vez hay que ver muy bien el Internet escogiendo, porque es inmenso.

Ahora se nos obliga a seleccionar los libros porque son innumerables y un buen lector, un extraordinario lector leerá cuando mucho un libro a la semana y estoy exagerando; esto quiere decir que se leen muy pocos, 52 libros al año, y en el transcurso de su vida unos cuantos cientos de libros. Entonces hay que administrar el tiempo y no desperdiciarlo.

Y yo diría otra cosa por la que yo he sido también privilegiado, el trato con gente sabia de su medio; hay quien dice que ir al café es perder el tiempo, yo digo pues depende de con quién vayas y de lo que platique. A veces ir al café es aprender mucho; yo he tenido trato con gente muy destacada, verdaderamente destacada y valiosa de Guanajuato. Tuve trato con el maestro Olivares Carrillo, lo tengo con don Eugenio Trueba al que veo, para mi fortuna, todos los días; fui muy amigo, estimé mucho y respeté mucho al maestro Euquerio Guerrero, he estado muy cerca del maestro Arturo Serrano Robles, he conversado en múltiples ocasiones con don Antonio Torres Gómez; traté muchísimo a todos los maestros que ya mencioné.

El trato con la gente que sabe más que uno también es positivo; y no faltar a las responsabilidades. La inteligencia empieza por aprovechar sus propias capacidades, esto lo obliga a conocerse y a no desperdiciarlas. Es más inteligente alguien al que le cuesta mucho trabajo aprender, pero se encierra horas y horas a estudiar, que alguien al que no le cuesta mucho, pero que no estudia nunca, yo creo que es más inteligente el primero; eso sería lo que yo platicaría con los jóvenes, pero insisto, no me atrevo a dar recomendaciones.

¿Su visión de la Facultad maestro?
Tengo aproximadamente tres años que no la conozco de cerca, otros trabajos me han alejado de la Universidad, también algunos deterioros de salud que por fortuna están superados; creo que necesita modernizarse, actualizarse, ¿por qué? Eso no se debe descuidar nunca, es una preocupación y una ocupación permanente o debe serlo de todas las universidades, han crecido en número, tal vez deba enriquecer sus currículas y mi impresión es que hasta el momento lo que está en el programa curricular es lo general de la carrera de leyes; mi impresión es que nuestras universidades en términos generales otorgan los conocimientos mínimos para empezar a aprender; tal vez podamos enriquecer los contenidos curriculares.

Licenciado Miguel Montes, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.

MENSAJE A MAGISTRADOS Y JUECES

Ceremonia de inicio de actividades del
Instituto de la Judicatura Administrativa.
Viernes 24 de mayo de 2002

C. Gobernador Constitucional del Estado,
Licenciado Juan Carlos Romero Hicks.
C. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
Licenciado Héctor Manuel Ramírez Sánchez.
C. Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Doctora Teresita Rendón Huerta.
Cc. magistrados.
Señoras y señores:

Me distingue la invitación que para participar en esta ceremonia me hicieron los señores magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por conducto de su presidenta, la doctora Teresita Rendón Huerta.

La vida moderna exige de los profesionales en cualquier rama del conocimiento humano, la especialización. El derecho no escapa a esta exigencia y por eso es entendible que hoy nazca el Instituto de la Judicatura Administrativa, como un esfuerzo bien intencionado para solventar la necesidad que existe en Guanajuato de que la impartición de justicia administrativa tenga juzgadores debidamente capacitados.

Porque conozco los atributos personales de quienes integran este Tribunal, sé que tienen en cuenta que para ser jueces de lo administrativo, aquí y ahora, no basta el conocimiento de la ley, sino que es indispensable una integridad personal a toda prueba que repela las asechanzas que por dádivas, influencias o presiones, pudiesen ofrecerse de parte de quienes ostentasen mayores formas de poder.

Sé que el Instituto que hoy nace no será solo "instructor" o "actualizador" de los responsables de la función sustantiva de la impartición de la justicia administrativa, sino que, como se anuncia, se dedicará a "formar" a esos funcionarios, lo que significa dotarlos de la fortaleza de carácter, austeridad de hábitos y probidad, cualidades indispensables en cualquier juez. Buscar y lograr la eticidad, la diligencia, la sabiduría, la prudencia, la imparcialidad y la objetividad de cada resolución. En resumen, alcanzar un alto nivel moral y profesional en cada juez, será la misión esencial de este Instituto.

Sin que en forma alguna sea el propósito expreso de quienes han inspirado el nacimiento del Instituto, cuya necesidad veo clara y justificada, advierto en

ello y en las áreas similares del Poder Judicial Federal, de los poderes judiciales locales, de las procuradurías, de los cuerpos policíacos, de los tribunales electorales y otros organismos, llamadas de atención a los centros de enseñanza que con sus programas y currículas profesionales no satisfacen plenamente las necesidades de especialización y de formación. Por eso muchas entidades públicas y privadas se ven obligadas a desahogar trabajos complementarios de la integración universitaria, a pesar de que, en principio, la docencia sea actividad ajena a su específica misión.

La capacidad personal y la honestidad intelectual de los actuales magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato son garantía de que este órgano seguirá, como hasta ahora, cumpliendo la alta función de impartición de justicia para la que fue creada.

Hago votos porque los poderes estatales puedan destinar mayores recursos materiales y humanos a la administración de justicia. Sin estos recursos no existirá el marco material indispensable para que los jueces, incluidos los que egresen de este Instituto, ejerzan de la mejor manera posible. Hago votos también para que autoridades gubernamentales, tribunales y universidades, encuentren los caminos de coordinación, en programas, en diplomados o en cursos específicos, para que cada cual cumpla sus atribuciones orgánicas en beneficio de nuestra vida en común.

¿QUÉ HACER PARA TENER SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE CALIDAD?[35]

(Notas)

Foro Empresarial de la COPARMEX.
León, Gto.
Miércoles 27 de agosto de 2002

Habrá que contestar la pregunta: "¿Qué hacer para tener seguridad pública y una procuración de justicia de calidad?"

1.- Desde luego el trabajo de prevención del delito que deben realizar las distintas autoridades con facultades para hacerlo es sumamente importante. Una policía preventiva municipal capacitada y adecuadamente equipada es un instrumento valioso que desalienta la comisión de delitos. Infortunadamente el delito es un elemento constante dentro de las sociedades humanas. En ningún momento de la historia de la humanidad, en sociedades pequeñas o grandes, se ha logrado desterrar totalmente el acto delictuoso. Pareciera ser que el hombre asociado genera inconformidades e inadaptaciones de algunos de los miembros de la comunidad que las desahogan violando las normas de convivencia que la propia comunidad se ha dado, esto es, delinquiendo. No solo la policía preventiva municipal, sino también las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Policía Federal Preventiva son factores importantes de prevención del delito, aunque insuficientes. Operativos en zonas de alta incidencia delictiva, redadas para detectar irregularidades son útiles, aunque siempre habrá que estar atentos a que no se cometan excesos por estas fuerzas armadas.

   Pareciera ser que la formación policíaca contiene en sí misma la tendencia a abusar de la fuerza y en ocasiones a violar la ley en perjuicio de los particulares supuestamente protegidos.

2.- Un factor indispensable para abatir los índices delictivos lo es el propiciar elevación generalizada del nivel de vida, a través de mayor empleo, mejor remunerado, mejores y más extendidos servicios educativos, mejores servicios de salud, campañas para desterrar alcoholismo y drogadicción. Estos

[35] El documento que obra en el archivo personal del Lic. Montes García no tiene un título específico. Por su contenido y porque así inicia el primer párrafo, en este libro lo denominamos "¿Qué hacer para tener seguridad pública y una procuración de justicia de calidad?". En la fecha en que fue dictada esta conferencia, el Lic. Montes fungía como diputado local. Notas para la plática en el foro empresarial de la Coparmex. Hotel Fiesta Americana de León.

temas que se enuncian con facilidad son de muy difícil logro y requieren esfuerzos coordinados de sociedad y gobierno.

Las pésimas condiciones que privan en los centros de reclusión o, como se les llama, de rehabilitación social, repercuten en propiciar un ambiente de inseguridad. El hacinamiento en las cárceles, la falta de higiene, los autogobiernos carcelarios, la corrupción en términos generales son males endémicos que deben ser desterrados al costo que se requiera.

Imbuir en la población en términos generales y en particular en los cuerpos de seguridad pública el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento a la buena ley, parece inexcusable. Hay que empezar desde la educación para la infancia y continuar en la educación para adolescentes y adultos.

3.- La creación de programas concretos en donde autoridades y grupos de vecinos trabajen conjuntamente para la vigilancia de las zonas habitacionales de estos grupos de vecinos es necesaria. Los frutos que en el Distrito Federal y en otras ciudades han brindado programas como "El Vecino Vigilante" o "La Policía de Barrio" son importantes. Se demuestra que ningún grupo es ajeno a la tarea preventiva contra la delincuencia. Ni las autoridades solas ni los gobernados solos pueden dar un combate adecuado contra la delincuencia. Unidos y coadyuvando adquieren más fuerza.

4.- Las asociaciones de colonos deben propiciarse para que los vecindarios adquieran conciencia de la enorme importancia que significa estar prevenidos contra el delito. Hay que ganarle la calle a los delincuentes y a los mal vivientes. Organizar actos tales como kermeses, festejos y hasta fiestas de barrio, sin desórdenes en la vía pública no es despreciable. Los fraccionamientos cerrados y con vigilancia, también son útiles.

Procuración de justicia de calidad

1.- Procurar la justicia penal y parte de la civil es tarea fundamental de las procuradurías. No basta la voluntad multimanifestada de estos órganos para avanzar en esta procuración de justicia. No es suficiente tampoco querer hacerlo. El voluntarismo desordenado produce poco.

2.- Una procuración de justicia profesionalizada, científicamente capacitada y especializada, parece la respuesta más acertada a fin de mejorar esta tarea.

3.- Profesionalizar las áreas de Ministerio Público, Policía Judicial y peritos es indispensable. No se puede hacer en cursos intensivos que duren unos cuantos meses y en mi opinión, tampoco en los actuales institutos o academias que no tienen programas nacionalmente coordinados ni nada que conjunte sus esfuerzos. Desde que desempeñé el cargo de Procurador de Justicia del Distrito Federal propuse la creación de la Escuela Nacional de Investigación Científica del Delito para que de allí egresen los policías, los ministerios públicos y los peritos. Podría ahondarse muchísimo en la necesidad de que estas áreas sean independientes las unas de las otras. Au-

tónomas. En el país nunca se ha dado una policía científica, en términos generales, los policías se hacen en la práctica y el trabajo de los llamados "soplones" resulta muy importante para la investigación del delito. Cuando se cuente con una policía, con agentes del ministerio público y con peritos científicamente capacitados, el combate a la delincuencia será mucho más eficaz.

Establecer agencias del ministerio público especializadas o cuerpos orgánicos de las mismas características resulta inexcusable. Los delitos sexuales, el combate a la delincuencia organizada, los delitos graves, merecen ser combatidos por especialistas.

4.- La especialización conlleva la necesidad de un buen pago, seguridad en el trabajo y estatus social adecuado para los buenos servidores públicos en estas materias. No se puede renunciar a la aspiración de que cada policía investigador tenga título universitario en cualquiera de las ramas humanistas. Se habrá avanzado mucho cuando sólo los universitarios puedan ser policías ministeriales. Lo que se invierta en buenos sueldos, adecuadas prestaciones y armamento idóneo, rendirá en seguridad, tranquilidad pública, abatimiento de la impunidad y mejor procuración de justicia.

5.- No descarto la buena idea que se expresó al principio del actual ejercicio presidencial o unos meses antes, de separar la tarea policíaca de investigación del delito del área de consignación jurídica de delincuentes. No se renuncia a que la investigación sea dirigida por el Ministerio Público de determinadas características, pero sería adecuado que otro tipo de ministerios públicos especializados supervisasen lo correcto de la investigación policíaca, para que cuando se presente la consignación el juzgador no se queje de defectos técnicos que él no puede suplir y que propician el dictado de autos de libertad por falta de méritos por insuficiencia de prueba o consignaciones técnicamente defectuosas.

Cualquier Ministerio Público debe tener la misma capacidad, vocación profesional y valor que cualquier juez.

6.- La coordinación entre el juzgador penal federal o local y los procuradores de la justicia federal o locales, no debe descartarse sobre todo en el combate a la delincuencia organizada. Coordinación que no implica ninguna relación de dependencia sino al contrario, capacitación jurídica similar. Los buenos sueldos ayudarán aunque no garantizan por sí mismos, a desterrar la corrupción y evitar la proclividad a obtener dinero fácil.

Son mis modestas aportaciones para este interesante tema.

COMENTARIOS SOBRE LA JUSTICIA ALTERNATIVA

(Notas)

Guanajuato, Gto.
12 de febrero del 2003

1.-Conceptualmente por justicia alternativa se entienden las medidas alternativas de solución de conflictos (MASC).

2.-Mis comentarios más que sobre un texto legal serán sobre este método nuevo que para resolver conflictos se pretende establecer en la legislación de Guanajuato y que ya opera en otras partes.[36]

3.-Se trata en realidad de generar una nueva cultura para la resolución de conflictos. La responsabilidad de generar esta cultura, en mi opinión, se ubica en el Poder Judicial, el Poder Legislativo y fundamentalmente en las universidades radicadas en el Estado de Guanajuato.

Constituye todo un reto cambiar la vocación del ejercicio profesional del abogado; convencerlo que más que impulsor de procedimientos contenciosos que representan una lucha civilizada a través de juicios ante los tribunales, tendrá ahora que esforzarse en ser solucionador de conflictos a través de medidas alternativas.

4.-Tal vez una medida necesaria para impulsar este ejercicio cultural de impartición de justicia sea establecer la cátedra de Justicia Alternativa en la Universidad de Guanajuato. Cualquier comentario a un texto legal en el Estado de Guanajuato resulta hipotético puesto que ese texto legal vigente todavía no existe. Hay una iniciativa presentada por el Supremo Tribunal de Justicia pero la Cámara de Diputados no la ha aprobado.

Es una obligación del Ejecutivo del Estado apoyar presupuestalmente el desarrollo de los centros de justicia alternativa. La justicia alternativa forzosamente tiene que ser sobre conflictos que involucren derechos o bienes sobre los cuales las partes tengan la libre disponibilidad.

En los negocios penales tendrá que darse en aquellos asuntos que requieren querella para ser averiguados y admiten el perdón judicial para ser concluidos.

Los medios alternativos de solución de conflicto existen en ciernes en distintas disposiciones legales del Estado, tal por ejemplo las conciliaciones en juzgados menores en materia civil y el procedimiento voluntario de divorcio. Existen también en la Ley Federal del Trabajo en donde se ha

[36] El Lic. Montes era en ese momento Diputado Local de oposición en la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 2000-2003. Presidió la Comisión de Justicia en esa legislatura.

establecido una conciliación obligatoria. Infortunadamente los procesos de conciliación obligatoria están pervertidos y desvirtuados, es una forma que se enuncia en las actas, pero casi no se practica en la realidad.

La conciliación que propone la iniciativa de Ley de Justicia Alternativa tiene que ser voluntaria y los centros que se creen para impulsar esta rama deben estar a cargo de personal capacitado y con verdadera técnica en la mediación y conciliación y conocer de los temas sobre los que verse la controversia.[37]

[37] El Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Guanajuato consigna las múltiples intervenciones del Lic. Montes García en el punto "Lectura y discusión del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, relativo a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato". H. Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Sesión de apertura. Segundo periodo ordinario correspondiente al tercer año de ejercicio legal. Celebrada el 15 de mayo del año 2003.

LEY DE CLARIDAD

Guanajuato, Gto.
14 de mayo de 2003

El derecho a la información garantiza que los particulares, los gobernados, se enteren de los actos de sus gobernantes, quienes son sus mandatarios y no sus mandantes, con oportunidad, veracidad, amplitud y claridad. Ello es así porque la información pública está en el haber de los gobernados y la autoridad la detenta como depositaria únicamente para el cumplimiento de sus fines. Bajo esta perspectiva bien podría concluirse que la vida democrática depende de la construcción de un espacio público informado.

Estas ideas se contienen en la iniciativa de Ley de Claridad que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Congreso del Estado desde el día 2 de marzo del año 2001[38] y que hasta la fecha no ha sido aprobada por el Congreso.

También dijimos entonces que con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato pretendíamos hacer del gobierno una caja de cristal para los gobernados y garantizar el elemental derecho de todo gobernado de acceder a la información que el Estado capte, genere, divulgue o reproduzca en cualquier forma o medio, incluida aquella que los particulares obtengan con recursos públicos. Fue una respuesta ante la tendencia nacional e internacional de acabar con los espacios de privilegio y hermetismo de los gobiernos frente a los particulares.

Es una verdad generalmente expresada que la información es poder. Solo quien está adecuadamente informado puede tomar decisiones importantes para su vida y para la de la sociedad a la que pertenece. Sólo con información se puede elegir; en realidad las campañas electorales pretenden dar a conocer a los electores quiénes son los candidatos y qué se proponen hacer. Sin información se estaría en presencia de decisiones sin conocimiento y por lo tanto, irresponsables.

---

[38] Diputado Local de oposición en la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 2000-2003. Presidió la Comisión de Justicia en esa legislatura y coordinó la dictaminación y aprobación de la Ley de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato, y que fue calificada, en su momento, como una de las más avanzadas de la República Mexicana, que alivió el problema de las pensiones de los trabajadores. En unión del también diputado Lic. Martín Eugenio Ortiz García, presentó la iniciativa de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, primera iniciativa sobre ese tema que se presentó en la República Mexicana.

El gobierno, en cualquiera de sus niveles, actúa con la representación de los gobernados y de manera natural surge la obligación que el gobierno tiene de informar todo a sus representados.

La moderna rama del derecho a la información pretende revertir nuestra añeja tradición de secrecía en los actos de gobierno y seguramente ayudará a la eficacia de la acción pública y a desterrar la corrupción.

Las leyes de información pueden ser aprovechadas por cualquier residente, incluso extranjero o en tránsito dentro del ámbito territorial de su aplicación y no sólo abarca el recibir datos sobre los graves problemas que confronta una comunidad sino sobre las acciones cotidianas y cualquier relación por simple que parezca de los gobernados con sus gobernantes. Quien desee inscribir a su hijo en una escuela, quien desee establecer una modesta tienda, quien tenga necesidad de acudir a un servicio público de salud o a realizar cualquier trámite ante autoridad tiene derecho a que se le diga con oportunidad y claridad qué requisitos debe cumplir.

El contenido que a nuestro juicio debe tener cualquier ley de información lo señalaremos a continuación y para ello utilizaremos un análisis comparativo entre las leyes de información vigentes en México y en algunos estados y la iniciativa que presentaron los legisladores priistas y también la que presentó el Gobernador Juan Carlos Romero Hicks.

LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
(Notas)

Conferencia en la Universidad Latina de Celaya.
Celaya, Gto.
21 de mayo de 2003

Los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato[39] establecen las facultades y atribuciones de los poderes legislativo federal y legislativo local, respectivamente.

El artículo 74 de la Constitución Federal previene las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y el 76 las que son exclusivas del Senado de la República.

Si analizamos el contenido de los artículos mencionados en un breve resumen, podemos señalar que los poderes legislativos tienen tres tipos de atribuciones: las de representación política de los mexicanos; las de fiscalización y vigilancia para que el gasto público sea correctamente ejercido por el ejecutivo y las de, dentro de su respectivo ámbito de competencias, hacer leyes que se aplicarán en toda la república las que emita el Congreso de la Unión, y en el Estado de Guanajuato, las que emitan las legislaturas locales.

También tienen los congresos facultades jurisdiccionales cuando se trate de declaración de procedencia o juicios políticos, de fijación de límites entre entidades federativas o entre municipios y para admitir nuevos estados a la Unión Federal o crearlos y para admitir o crear nuevos municipios. El Senado de la República, además, analiza la política exterior, ratifica nombramientos que el ejecutivo haga tales como los del Procurador, Ministros de la Suprema Corte, grados dentro del Ejército y la Armada y Fuerza Aérea, empleados superiores de Hacienda y autoriza la salida de tropas del territorio nacional.

Una facultad muy importante para el Senado la contiene la fracción V del artículo 76 cuando nos habla de declarar desaparecidos los poderes institucionales de un Estado y nombrar, en su caso, gobernador provisional.

Todas las atribuciones que tienen el Congreso y las Cámaras Federales de Diputados, la de Senadores y la local son muy importantes y surgen desde luego las siguientes preguntas:

Primera.- ¿La estructura actual de las cámaras de senadores y diputados y del Congreso Local, permite el cumplimiento de sus atribuciones?

Segunda.- ¿En la historia del país las cámaras han cumplido con las atribuciones que tienen?

---

[39] Al final de estas notas se incluye la transcripción del artículo 63.

Tercera.- ¿Qué se requiere para que las cámaras puedan cumplir con su función constitucional?

Es innegable que al presente las cámaras han ganado poder político y empezando a ser un mejor equilibrio con el ejecutivo.

(Nota[40])

---

[40] TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

Art. 63.- Son facultades del Congreso del Estado:

I.- Expedir las leyes y reglamentos que regulen su estructura y funcionamiento, las que, para su vigencia, no requerirán de promulgación del Ejecutivo;

II.- Expedir, reformar y adicionar cuantas leyes o decretos sean conducentes al Gobierno y administración en todos los ramos que comprenden y que no estén, de manera exclusiva, reservados a la federación;

III.- Hacer la codificación de las Leyes del Estado;

IV.- Cambiar provisionalmente la residencia de los poderes estatales en casos excepcionales y necesarios;

V.- Derogada, P. O. 20 DE MARZO DEL 2001.

VI.- Autorizar el cambio de residencia de las cabeceras municipales, erigir nuevos municipios y formular la declaratoria de su inexistencia, siempre que fuere aprobado por el voto de las dos terceras partes de los diputados y de la mayoría de los ayuntamientos;

VII.- Aprobar con el voto de cuando menos el setenta por ciento de sus miembros, a propuesta del organismo a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución, la división del Estado en Distritos Electorales, atendiendo a criterios de carácter objetivo y técnico, para garantizar el equilibrio en la representación popular. De no aprobarse la propuesta, regresará al organismo autónomo para que formule una nueva;

VIII.- Nombrar entre los vecinos, cuando se declare la nulidad de elección de ayuntamiento, a los miembros del Consejo Municipal, en tanto se celebran nuevos comicios, y expedir la convocatoria para la celebración de éstos en un plazo no mayor de seis meses.

Convocar a elecciones extraordinarias para diputados, cuando se declare la nulidad de la elección en uno o varios distritos, o en el caso previsto por el segundo párrafo del artículo 53 de esta Constitución. La convocatoria para elecciones extraordinarias de diputados, deberá expedirse en un plazo igual al señalado en el párrafo anterior.

IX.- Declarar Gobernador electo, mediante formal decreto, a quien en los términos de la declaratoria del Organismo Autónomo Estatal o, en su caso, de la resolución del Tribunal Estatal Electoral haya obtenido mayoría de votos en la elección correspondiente;

X.- Convocar a elecciones de Gobernador, en caso de nulidad, de los comicios, si el electo no se presenta a tomar posesión del cargo, o en su caso de falta absoluta ocurrida dentro de los tres primeros años del período constitucional, dicha convocatoria deberá expedirse en un plazo no mayor de seis meses;

XI.- Reformar, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados y con aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, la división política del Estado;

XII.- Solicitar al Gobernador del estado la comparecencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para que informen al Congreso, cuando se discuta o estudie un asunto relativo a las funciones que aquellos ejerzan. Solicitar la comparecencia de los Presidentes de los Ayuntamientos y Consejos Municipales y la de los Titulares de los Organismos Públicos Descentralizados de los Municipios, para los mismos efectos;

XIII.- Fijar anualmente los gastos que requiere la Administración Pública del Estado, previo examen del Presupuesto de Egresos presentado por el Gobernador y decretar la Ley de Ingresos respectiva;

XIV.- Autorizar al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos para que contraten empréstitos para la ejecución de obras de utilidad pública, designando los recursos con que deben cubrirse y de acuerdo con la Ley de Deuda Pública. Dicha autorización no será necesaria cuando los créditos se contraten como consecuencia de una calamidad general.

XV.- Expedir anualmente la Ley de Ingresos para los municipios del estado;

XVI.- Autorizar al Ejecutivo del Estado para que ejerza cualquier acto de dominio sobre los bienes inmuebles de dominio privado del Estado, fijando en cada caso las condiciones a que deben sujetarse. Esta facultad la tendrá, en su caso, la Diputación Permanente;

XVII.- Desafectar los bienes destinados a un servicio público o los de uso común del Estado;

XVIII.- Proceder al análisis, revisión y dictamen de la Cuenta Pública que el Ejecutivo del Estado le deberá rendir en períodos de no más de tres meses. Dicha cuenta tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los conceptos del gasto señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Asimismo, deberá dictaminar el concentrado de la Cuenta Pública Anual que le presentará el Ejecutivo;

Si del examen que se realice aparecieran desviaciones o discrepancias en las tendencias del gasto, en las partidas o en los conceptos del presupuesto, deberá hacer las observaciones que correspondan y, en su caso, fincar las responsabilidades de acuerdo con la Ley;

XIX.- Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas Municipales incluyendo la administración centralizada y paramunicipal y ordenar cuantas auditorías fueren necesarias; así como solicitar la comparecencia de los presidentes municipales, de los demás miembros del Ayuntamiento y de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, cuando se revisen sus correspondientes Cuentas Públicas y, en su caso, proceder de acuerdo al último párrafo de la fracción anterior;

La Ley establecerá los plazos para dar a conocer a los Ayuntamientos los resultados de las auditorías practicadas, las cuales se desarrollarán conforme a los principios de audiencia, celeridad e imparcialidad:

XX.- Nombrar y remover a sus empleados. Estas facultades las tendrá la Diputación Permanente en las épocas en que el Congreso no esté en período ordinario de sesiones;

XXI.- Designar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de las propuestas que sometan a su consideración, por turnos alternativos, el Gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial, así como aprobar las solicitudes de licencia de más de seis meses por causa de enfermedad y las renuncias al cargo de Magistrado, cuando éstas sean presentadas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado o al Consejo del Poder Judicial, según corresponda por el origen de la propuesta para su designación.

Designar a los Consejeros Magistrados del Poder Judicial en los términos que establece esta Constitución.

Designar de entre sus miembros, a sus representantes ante el Organismo Autónomo a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución, a los Consejeros Ciudadanos en términos de su competencia y los integrantes del Tribunal Estatal Electoral, de conformidad con la ley.

Designar al titular del organismo estatal defensor de los derechos humanos, de acuerdo a la propuesta que formule el Gobernador del Estado, en los términos de la ley respectiva y ratificar los nombramientos que conforme a la misma requieren de ello. Esta facultad la tendrá la Diputación Permanente cuando el Congreso no esté en período de sesiones.

Ratificar el nombramiento del Procurador General de Justicia a propuesta del Gobernador del Estado en los términos que establece esta Constitución.

Aprobar el nombramiento de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a propuesta del Gobernador del Estado;

XXII.- Erigirse en jurado de responsabilidades, en los casos de juicio político;

XXIII.- Declarar si ha lugar a la formación de causa respecto de los funcionarios que gocen de fuero;

XXIV.- Conceder amnistía, en circunstancias extraordinarias, por el voto de las dos terceras partes de los diputados;

XXV.- Premiar a quienes hayan prestado eminentes servicios al Estado, a la Patria o a la Humanidad y recompensar a los buenos servidores del Estado;

XXVI.- Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando alguna reforma o adición a la Constitución General de la República, el dictado de una ley o cualquier acto del Gobierno Federal constituyan invasión a la soberanía del Estado;

XVII.- Decidir sobre las licencias que soliciten los diputados y el Gobernador del Estado para separarse de sus respectivos cargos;

XXVIII.- Ejercer facultades de vigilancia, fiscalización y auditoría, respecto a los presupuestos y gastos de los demás poderes y de los organismos descentralizados incluyendo a la Universidad de Guanajuato;

XXIX.- Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por algunas de las causas graves que la Ley imitativamente prevenga, siempre y cuando los afectados hayan tenido oportunidad para rendir pruebas y hace los alegatos que, a su juicio, convengan;

XXX.- Designar, de entre los vecinos del municipio de que se trate, a los consejos municipales que concluirán los períodos respectivos, en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros; si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones;

XXXI.- Derogada, P. O. 20 de marzo del 2001.

XXXII.- Aprobar, en su caso, la asociación de municipios del Estado con los de otras entidades federativas para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponden;

XXXIII.- Declarar, cuando sea procedente y previa solicitud de un Ayuntamiento, que éste se encuentra imposibilitado para ejercer una función o prestar un servicio público, para que el Ejecutivo del Estado la ejerza o lo preste, de conformidad con el procedimiento que establezca la ley; y

XXXIV.- Las demás que de un modo expreso o implícito se le otorguen en cualesquiera de los preceptos de esta Constitución o de la federal.

LA PERSPECTIVA QUE TIENE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN MATERIA DE JUSTICIA ALTERNATIVA

II Coloquio Nacional de Justicia Alternativa.
23 de mayo del 2003

He sido invitado para platicar con ustedes sobre la perspectiva que tiene el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato en materia de justicia alternativa.

Suele ocurrir que en la glosa de alguna ley nos ocupemos del "espíritu del legislador" asignándole ideas propias del exponente o comentarista, con lo que a veces se desvirtúa su verdadera intención. Confío en no incurrir en este error porque, como ustedes saben, formo parte de la legislatura estatal actual compuesta por 36 diputados y en consecuencia, como mínimo, represento la treinta y seisava parte del auténtico espíritu o propósito del legislador.

El día 15 del presente mes, en la Sesión de Apertura del Período Ordinario de Sesiones del Congreso, se discutió y aprobó el dictamen que la Comisión de Justicia hizo sobre la Iniciativa de Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato que presentó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.[41] En ese dictamen y en las discusiones que se darían alrededor de él, quedó claramente expuesta la perspectiva que el Congreso Local tiene, no sólo sobre la mediación, sino también sobre la conciliación y, en términos generales, sobre la justicia alternativa.

Vale destacar que la ley en comento nace como la manifestación clara del arranque de una nueva cultura jurídica que incidirá en la ampliación de las vías para resolver los conflictos entre partes que tengan la libre disponibilidad de sus derechos sin afectar el orden público; pero, además, se pretende modificar o corregir sustancialmente inveterados hábitos profesionales de quienes ejercen la abogacía o de quienes, en general, desempeñan algún papel en los casos de conflictos y choque de intereses particulares de los gobernados. En este arranque puede aspirarse, desde luego, a que en las universidades y en los institutos de estudios superiores que tienen sus campus en el territorio de Guanajuato, incluyan en sus programas académicos las materias de mediación

[41] El Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Guanajuato consigna las múltiples intervenciones del Lic. Montes García en el punto "Lectura y discusión del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, relativo a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato". H. Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Sesión de apertura. Segundo periodo ordinario correspondiente al tercer año de ejercicio legal. Celebrada el 15 de mayo del año 2003.

y conciliación como formas de autocomposición asistida para la solución de las diferencias.

Tal vez se adviertan ya tendencias doctrinales que protegen valores culturales no presentes aún para la generalidad, pero el Derecho debe cumplir una función de vanguardia que le permita actualizar la convicción de que la solución pacífica de los problemas es algo bueno, pertinente y saludable para todos. Cuando los abogados dejen de considerarse simples oficiantes de cualquier asesoramiento legalista al servicio sólo de dudosos éxitos en cualquier causa, y se convenzan que su principal responsabilidad es cumplir con una vocación de auténticos consejeros sociales y de conciliadores eficaces, la sociedad que los forma será mejor servida. El ideal de lograr menor asistencia ante los tribunales y mayor uso de los centros alternativos de justicia asistida, fructificará cuando los centros adquieran credibilidad y se certifique, se palpe y se compruebe que un convenio vinculatorio entre los directamente interesados es mejor que una resolución dictada por un tercero.

A quienes siempre hemos aconsejado la conciliación como la mejor solución, nos alienta que institucionalmente los poderes judicial y legislativo se ocupen ahora de ella. Falta descubrir cómo podemos, sin que se pierda eficacia, impulsarla con mayor vigor, pero los caminos que esta nueva ley abre son muy estimables.

Toca principalmente al Poder Judicial, a los centros de enseñanza y a los colegios de profesionales, difundir y sostener esta nueva cultura. El primero tendrá que observar con objetividad los resultados de su operancia, anotarlos estadísticamente, para proponer al Poder Legislativo las reformas que juzgue necesarias a fin de superar los resultados iniciales. A los centros de enseñanza les toca no solo instruir sino formar a los nuevos profesionistas de la conciliación y a los colegios de abogados insistir en el uso de estas vías alternativas.

En Guanajuato se elevó a rango constitucional la justicia alternativa mediante el decreto 191 promulgado el día 15 de abril de este año en cuyo artículo tercero se declara que: "La ley establecerá y regulará la mediación y la conciliación como medios alternativos para la resolución de las controversias entre los particulares respecto a derechos de los cuales tengan libre disposición". Se hicieron también constitucionales los principios de equidad, imparcialidad, rapidez, profesionalismo y confidencialidad que informarán este método de impartición de justicia. Se agregó el de gratuidad para la que otorgue el poder judicial.

Esta reforma constitucional, en estricto rigor técnico, no era indispensable, pero socialmente conviene que la justicia alternativa tenga el más alto rango jurídico para abonar la aceptación general.

La Comisión de Justicia[42] que dictaminó la iniciativa presentada por el Supremo Tribunal, propuso al Pleno del Congreso varias modificaciones que

[42] El Lic. Montes era en ese momento Diputado Local de oposición en la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 2000-2003. Presidió la Comisión de Justicia en esa legislatura.

fueron aprobadas. Una de las más importantes fue que los convenios celebrados ante los centros en sede judicial se eleven a categoría de cosa juzgada en lugar de que tuviesen sólo carácter de documento ejecutivo. La Comisión de Justicia textualmente dijo:

> "Otorgarle carácter de documento ejecutivo al convenio resultante de un procedimiento de autocomposición asistida, no le daría a dicho instrumento ni la fuerza ni el atractivo social necesario para que el sistema de justicia alternativa opere exitosamente. Terminar un procedimiento de mediación y conciliación con un documento ejecutivo sólo llevaría a las partes, en caso del incumplimiento del convenio, a iniciar un juicio que, paradójicamente, es precisamente lo que se pretende evitar. Ello, consideramos, desalentaría a los interesados a optar por la justicia alternativa como forma de dirimir sus controversias".
>
> "Por otro lado, si la pretensión del iniciante es que los convenios se equiparen a las sentencias, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 446 del Ordenamiento Civil Adjetivo, la Comisión Dictaminadora estimó pertinente decir de manera clara y expresa que la naturaleza de los convenios en materia de autocomposición asistida será de cosa juzgada, lo cual queda establecido en los artículos 4, 26 y 30 del decreto que se somete a la consideración del Pleno".
>
> "La Comisión también analizó la viabilidad jurídica de otorgarle a los convenios la categoría de cosa juzgada. Sobre este punto, se concluyó que debido a la reforma realizada previamente a la Constitución Política local, en la que se establece que el Centro Estatal de Justicia Alternativa forma parte del poder judicial, no existe impedimento constitucional para que dicho órgano, por mandato de ley, pueda elevar a categoría de cosa juzgada los convenios resultantes de la mediación y conciliación entre partes en conflicto".
>
> "En este mismo sentido, la Comisión Dictaminadora estimó conveniente establecer que sólo tendrán carácter de cosa juzgada los convenios celebrados ante el Director del Centro Estatal de Justicia Alternativa o, en su caso, ante el subdirector de la sede regional, por ser autoridades judiciales; no así los convenios celebrados ante las instituciones privadas que presten servicios de mediación y conciliación, que sólo tendrán ese carácter cuando se sometan para tal efecto ante los funcionarios judiciales mencionados con anterioridad".

Hubo otras modificaciones propuestas por la Comisión de Justicia y aceptadas por el Congreso que constan en los puntos del 4 al 17 del Capítulo III del Dictamen y que a continuación transcribo:

> "4.- La Comisión Dictaminadora propone adicionar a la iniciativa un artículo 4 para, como ya se dijo anteriormente, establecer la naturaleza del convenio como cosa juzgada, en materia civil. Además se especifica que si la mediación y la conciliación se inició con proceso judicial, el Director del Centro Estatal de Justicia Alternativa o el

subdirector de la sede regional deberá remitir el convenio al juez para que proceda en los términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato a dar por terminado el proceso y ordenar su archivo definitivo".

"5.- El artículo 6 de la iniciativa –7 del decreto- se modificó para darle mayor claridad y para reiterar la naturaleza jurídica del convenio como cosa juzgada. Por otra parte, sufrió modificaciones para evitar el establecimiento de fases rígidas y subsecuentes de mediación y conciliación, de manera que éstas puedan darse en forma simultánea cuando así lo demande el asunto que se trate".

"6.- Al artículo 7 de la iniciativa –8 del decreto- la Comisión Dictaminadora le adiciona tres párrafos que establecen con claridad la forma en que habrá de iniciarse el procedimiento de mediación y conciliación, así como los requisitos que debe cumplir el solicitante para poner en marcha el procedimiento de autocomposición asistida".

"7.- En el artículo 10 de la iniciativa –11 del decreto- la Comisión consideró conveniente establecer que, en los casos en que la audiencia de mediación y conciliación se lleve a cabo habiendo existido un proceso judicial en marcha, deberá informarse de la celebración de dicha audiencia al juzgado correspondiente para los efectos de suspensión de los plazos y términos judiciales".

"8.- En el artículo 16 de la iniciativa –17 del decreto- que se refiere a la forma de conclusión del trámite de mediación y conciliación, se modifican dos incisos. El inciso c) establecía como causa de terminación la decisión de las partes cuando así lo determinaran de común acuerdo; en su lugar se dice que dicho procedimiento podrá ser terminado por una de las partes y no forzosamente por el acuerdo de ambas, ya que es suficiente que una de ellas no quiera continuar con el procedimiento para darlo por terminado. En el inciso d) se suprime la palabra "consecutivas", para dejar únicamente dos inasistencias injustificadas; lo anterior para evitar que una de las partes pudiera alargar innecesariamente el procedimiento inasistiendo en forma alternada a las audiencias. Además se adicionan dos causales más de terminación de la mediación y la conciliación: una, cuando el Director del Centro Estatal de Justicia Alternativa o el subdirector de la sede regional consideren que no hay voluntad de las partes para llegar a un arreglo, la otra, por el hecho de haberse dictado sentencia ejecutoriada en el conflicto respectivo".

"9.- El artículo 17 de la iniciativa –18 del decreto- define a los mediadores y conciliadores oficiales y privados. Dentro de los primeros incluye a los "adscritos a las Agencias del Ministerio Público especializadas en estos procedimientos". Este precepto fue modificado por la Comisión por hablar sólo de Agencias del Ministerio Público.

El propósito de esta modificación es evitar que la Procuraduría General de Justicia se vea obligada a la creación de agencias especializadas, con los efectos adversos que en materia presupuestal tendría. Por otra parte, la iniciativa establece que los mediadores y conciliadores privados tienen que ser "preferentemente profesionistas". La Comisión Dictaminadora decidió suprimir esta parte del artículo ya que los requisitos para ser mediador y conciliador privado, incluyendo el de ser preferentemente profesionista, se establecen en el artículo 24 del decreto".

"10.- En el artículo 18 de la iniciativa –19 del decreto- que establece atribuciones y obligaciones para los mediadores y conciliadores, además de algunas modificaciones de redacción, se suprimen los incisos d), e), k) y l) por considerar que su contenido está ya incluido en otro artículo, o bien que resultan innecesarios o que son de difícil cumplimiento, como la atribución de darle seguimiento a los convenios celebrados con la intervención del Centro para reforzar la voluntad de cumplimiento espontáneo de los mismos".

"11.- Asimismo, por estimar que se les impone a los mediables y conciliables obligaciones extremadamente estrictas e imposibles de cumplir, la Comisión Dictaminadora propone suprimir los incisos b), c) y d) del artículo 22 de la iniciativa, que corresponde al artículo 23 del decreto".

"12.- El artículo 24 de la iniciativa –25 del decreto- se modifica para suprimir los incisos c) y e). El primero, por considerar que no se justifica como requisito para la creación de una institución de mediación y conciliación privadas, que forzosamente cuente con dos salas debidamente acondicionadas para celebrar las sesiones de mediación y conciliación. El segundo, en virtud de que deja al reglamento de la Ley el establecimiento de otros requisitos que deberán ser cumplidos por las instituciones privadas, lo que se estimó incorrecto, ya que éstos deben contenerse en la propia Ley. Asimismo se suprime el último párrafo que se refiere a los requisitos de las personas físicas que presten servicios de mediación y conciliación, por haber quedado debidamente regulados en el artículo 24 del decreto".

"13.- La iniciativa en su artículo 25 –26 del decreto- propone que los convenios celebrados ante los centros privados o ante las personas físicas que presten estos servicios, adquirirán el carácter de documentos ejecutivos, cuando sean homologados en la vía procedimental no contencioso ante el juez que hubiere sido competente para conocer del asunto. Como ya ha sido mencionado con anterioridad, la Comisión Dictaminadora estimó pertinente otorgarles el carácter de cosa juzgada, no de documento ejecutivo, pero siempre y cuando los mediadores y conciliadores los sometan ante el Director del

Centro Estatal de Justicia Alternativa o ante el subdirector de la sede regional para elevarlos a tal rango".

"14.- En el artículo 27 de la iniciativa –28 del decreto- la Comisión consideró conveniente eliminar la referencia a los artículos concretos, estableciendo únicamente que los mediadores y conciliadores privados se ajustarán al procedimiento que señala la Ley. Lo mismo se hizo en el artículo 4 de la iniciativa –5 del decreto- referente al procedimiento que deberán seguir las agencias del Ministerio Público para mediar y conciliar".

"15.- El artículo 28 de la iniciativa –29 del decreto- se modifica para dejar claro que el procedimiento de mediación y conciliación no solo suspende el término de prescripción, sino todos los plazos y términos judiciales en los juicios civiles, para evitar cualquier perjuicio procesal a las partes. Resulta pertinente precisar que en los juicios mercantiles tramitados ante los tribunales del orden común en ejercicio de la competencia concurrente, no procederá la suspensión de términos y plazos de ninguna naturaleza, ya que éstos están sujetos a un ordenamiento federal".

"En materia penal se suprime lo relativo a la suspensión del término para la prescripción de la acción penal, estimando que ello desalentaría a los inculpados de acudir a la justicia alternativa. Sólo se deja la suspensión que se refiere al término para la formulación de la querella".

"16.- En el artículo 29 de la iniciativa –30 del decreto- se suprime el primer párrafo que establece la naturaleza jurídica de los convenios, ya que ésta quedó debidamente expresada en otros artículos".

"17.- Es también pertinente señalar que algunos artículos sufrieron modificaciones sólo para efectos de mejorar su sintaxis y puntuación, pero sin modificarlos substancialmente".

El artículo 3 de la iniciativa propuso que la mediación y la conciliación podrán ser realizadas por personas físicas o por los integrantes de instituciones privadas constituidas para proporcionar tales servicios. Este tema dividió al Congreso y los grupos parlamentarios de oposición, PRI, PRD, Verde Ecologista y PAS, así como un diputado independiente lo votaron en contra, en un apretado resumen las razones de este voto en contra y se explican en el dictamen, que a continuación transcribo:

"La administración de justicia en nuestro sistema judicial responde a un determinado contexto constitucional y cultural y es una función que cumple el Poder Judicial, Así pues, considerada la justicia alternativa como una modalidad de la administración de justicia, su ejercicio corresponde únicamente a ese poder en los términos del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal forma, es discutible la constitucionalidad de normas que facultan a los

particulares a actuar en procesos de impartición de justicia, realizando parcialmente las mismas funciones que el Poder Judicial. Lo anterior significa además, el inicio de la privatización de la administración de justicia y que se lesionen los principios de imparcialidad, equidad y gratuidad que se atribuyen a los procedimientos de justicia alternativa".

"Con la propuesta de creación de los centros privados de mediación y conciliación, autorizados y regulados por el Poder Judicial, se deja de lado el hecho de que actualmente los litigantes gozan de libertad para buscar la conciliación entre las partes que representan. En este tenor, los centros privados no representan la forma adecuada de incorporar a los litigantes a las tareas de mediación y conciliación, sino que, por el contrario, impondrían nuevos límites y trabas administrativas que hoy no existen, convirtiendo al Poder Judicial, en el ámbito de la justicia alternativa, en un otorgador de permisos, supervisor y certificador de litigantes".

"Antes de otorgar permisos y poner en operación centros privados, es conveniente que el Poder Judicial gane experiencia en los procedimientos de justicia alternativa a través de Centro Estatal y las sedes regionales. Así mismo, en una primera etapa de difusión y penetración cultural entre la población, es predecible que con la operación del centro oficial y sus sedes regionales baste para atender la demanda ciudadana en materia de autocomposición asistida".

La mayoría que aprobó el que se autorizaran Centros Privados de Justicia Alternativa, dio las siguientes razones:

"Coadyuvará a cumplir con los objetivos de la presente ley, allegando aún más los servicios de mediación y conciliación a los particulares, que de esta forma tendrán una doble alternativa para elegir".

"Disminuirá la carga de trabajo de los tribunales judiciales".

"En un futuro reducirá el gasto que le implicaría al Estado la creación de tantas subsedes como municipios existan en la entidad".

A pesar de la diferencia reseñada, en lo general, la Ley de Justicia Alternativa la aprobó el Congreso de Guanajuato con 32 votos en pro. Hubo dos abstenciones que lo fueron por inconformidad con la distribución del texto del dictamen que no fue recibido en tiempo por quienes se abstuvieron, pero en tribuna aclararon su acuerdo en lo general con la ley y estos mismos diputados votaron afirmativamente la reforma constitucional.

Por último, la actitud del Congreso ante esta nueva Ley de Justicia Alternativa es de humildad. Sabemos que la práctica permitirá que bajo el método lógico de afirmación de aciertos y corrección de errores, esta ley se mejore. No se ha aprobado una ley perfecta, dista mucho de serlo. Hay algunos puntos que la ley sostiene con audacia, como el artículo 5 que permite a las partes en un conflicto penal darlo por concluido siempre y cuando se trate de delitos perseguibles por querella, con lo que tal vez algunos interpreten que se rom-

pe el monopolio del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, pero que el Congreso pensó es simplemente vigorizar la participación de los ofendidos que pueden decidir por sí mismos la terminación definitiva de un conflicto penal y acordar también la reparación del daño con fuerza de cosa juzgada. Esto enfatiza las modernas tendencias penalistas que dan una mayor participación a la víctima. Si bien puede estimarse entre los mejores avances del Derecho Penal el que el ofendido no sea parte, es innegable que la reparación del daño causado interesa, y mucho, al sujeto pasivo de los delitos o a sus causahabientes.

Llama también la atención el mandato del artículo 29 que ordena la suspensión de todos los plazos y términos judiciales y de la prescripción, a partir del momento en que el Centro Estatal de Justicia Alternativa, señala lugar, fecha y hora para la audiencia de mediación y conciliación, siempre que se trate de materia civil del fuero común. En materia penal el proceso de mediación y conciliación sólo interrumpe el plazo para la formulación de la querella.

En el foro guanajuatense se detecta interés, escepticismo a veces y optimismo en otras, sobre los resultados prácticos de la Ley de Justicia Alternativa. Yo hago votos porque todos coadyuvemos para fortalecer este camino de mayor eficacia y equidad en la solución de conflictos entre partes y en beneficio del orden, la paz y la concordia sociales.

SEGURIDAD JURÍDICA Y SEGURIDAD PÚBLICA

(Notas)

Guanajuato, Gto.
2003

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 10 dice que participará en la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública puede considerarse como reglamentaria del artículo 21 constitucional, el cual dice en su párrafo final que la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El artículo 3 de la ley mencionada dice que la seguridad pública es la función a cargo del Estado y que las autoridades competentes alcanzarán dicho objetivo mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como de la reinserción del delincuente. Agrega que el estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales. Sigue diciendo que la función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las autoridades de policía preventiva, del ministerio público, de los tribunales y otras autoridades.

El artículo 6 de dicha ley dice que la conducta de los miembros de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Las autoridades establecerán instrumentos de formación policial que inculquen estos principios. Aparte de las policías preventivas de los municipios existe una Policía Federal Preventiva que se supone depende de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La seguridad jurídica es uno de los valores que persigue el Derecho.

Doctrinalmente se entiende por seguridad jurídica la garantía de que la situación de una persona sólo puede ser modificada por procedimientos y normas estatutarias (J. T. Delos).

La seguridad jurídica tiende a informar a la persona sobre las consecuencias de su comportamiento en sociedad. Nos dice a qué debemos atenernos cuando actuamos en sociedad.

Conforme al concepto anterior, se sostiene que la seguridad jurídica es algo que realiza el Derecho Positivo o ley formalmente expedida por el legislador. Es la ley positiva la que precisa las facultades y deberes de los gobernados y de las autoridades ante determinados supuestos jurídicos.

Los autores dicen que pueden establecerse tres formas de entendimiento de seguridad jurídica:

a).- En el Estado absolutista predomina la razón de Estado y el soberano establece, según la coyuntura histórica, su concepto de orden; en esta etapa o en esta forma de seguridad las leyes suelen ser circunstanciales y se coloca la justicia por debajo de la política; b).- Etapa de las Luces o Ilustraciones, cuya filosofía tiende a proteger al ciudadano frente al Estado, pasando a primer plano la ley como el mejor instrumento de la seguridad; el positivismo jurídico adopta esta postura y sostiene que lo que no está en la ley no es Derecho; c).- Se atiende más al concepto de justicia material y se dice que la ley es insuficiente y que suele ser oscura, contradictoria y aún injusta, acentuándose la lucha del Derecho contra las leyes y señalándose la importancia de la interpretación o hermenéutica; se agrega que es más importante un buen juez o una buena autoridad que un código. Se agrega que una seguridad injusta es contraria a Derecho y que una justicia sin seguridad de nada sirve.

Debe distinguirse entre seguridad jurídica y seguridad pública pero sin que esta distinción implique oposición entre ambos conceptos; más bien son complementarios, de allí que algunos autores digan que la seguridad jurídica es la garantía dada a un individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos y que si llegan a darse, la sociedad le dará protección y reparación.

En otras palabras, no basta la ley para que haya seguridad jurídica, sino que es necesaria la existencia de un sistema capaz de proteger a las víctimas de una infracción y de sancionar al responsable de la misma.

La seguridad jurídica no sólo consiste en "saber a qué atenerse" conforme a las normas positivas, sino también en un orden social, en un sistema que haga posible el disfrute de los derechos y el ejercicio de las obligaciones de las personas.

Primero es la ley y luego su observancia. Parecería que, en beneficio de la seguridad jurídica, el Derecho Positivo debería extender su acción al mayor número posible de hipótesis o supuestos, pero esto no es cierto. La experiencia ha mostrado que el exceso de reglamentaciones es pernicioso (como lo es también el extremo liberal de: "dejar hacer y dejar pasar"). Estudios muy importantes de autores como Novoa Monreal y Hernando de Soto han probado que las "selvas preceptivas inextricables" de muchos países, incluido México, sólo llevan a la confusión, al incumplimiento, a la multiplicación de órganos burocráticos, a la dádiva, a la corrupción, a la economía informal, y a la disminución o paralización de inversiones. El exceso de reglamentación estorba y daña la economía.

Una prudente legislación positiva como base de la seguridad pública de nada sirve –repetimos- sin un buen sistema de seguridad pública, sin el buen funcionamiento de todos aquellos órganos destinados a sancionar a los transgresores de la ley.

Bajo este aspecto el caso de México deja mucho que desear. Las infracciones y los delitos proliferan alarmantemente al tiempo que la eficiencia de los órganos persecutores, administrativos, ministeriales, policiales o jurisdiccionales, pierden esa eficiencia. En algunos casos hasta parece que el Estado renuncia a aplicar la ley y se muestra tolerante ante manifestaciones claramente lesivas al orden social.

La actividad persecutoria de los delitos es limitada y las causas generadoras de los mismos crecen en vez de disminuir (pobreza, crisis de valores morales e impunidad).

Con frecuencia contribuyen a la impunidad las víctimas de las infracciones, que no denuncian los hechos, tanto por desconfianza en la autoridad como por no verse involucrados en trámites complicados, formalistas, anticuados y no pocas veces inútiles.

La dependencia de la policía investigadora respecto del Ministerio Público, es un factor que abona la ineficacia y el rezago, como lo son también algunas de las rigurosas exigencias constitucionales. Aparte la falta de profesionalismo y la lamentable corrupción interna de los grupos policiales son también factores negativos graves.

De esta manera aunque las leyes positivas sean buenas, se fracasa ante las limitaciones del sistema sancionador.

SEGURIDAD SOCIAL

Capítulo Guanajuato del
Colegio de la Academia Mexicana
de Derecho de la Seguridad Social
en el Estado de Guanajuato.
29 de agosto del 2003

El concepto de seguridad social tiene multiplicidad de acepciones. En sentido amplio resulta totalizador porque significa la seguridad económica general garantizada por el Estado a cada uno de los individuos que constituyen una comunidad. En este sentido es indudable que en ningún sitio, en Guanajuato tampoco, se ha logrado una seguridad social plena. Las sociedades humanas organizadas se caracterizan por tener necesidades las que por su propia naturaleza son ilimitadas en número, aunque limitadas en capacidad. Esta vieja tesis, no por antigua menos cierta, sólo quiere decir que satisfecha una necesidad, surgen otras posiblemente derivadas de la satisfacción de la primera, concatenadas a esa satisfacción o de distinta índole, pero el ser humano finito nunca ha logrado la completa satisfacción de sus necesidades. La supresión absoluta de la necesidad no es posible, pero sí lo es la disminución de éstas para posibilitar la realización digna de cada persona.

El Estado y sus gobiernos a través de una evolución histórica dolorosa, han adquirido conciencia de su obligación de expulsar de las comunidades humanas un buen número de necesidades. Grandes pensadores y políticos han impulsado la adquisición de esta conciencia. Mencionemos a Sir William Beveridge, creador del célebre Sistema Nacional de Sanidad Inglés que entre otras cosas expresó: "La necesidad es un escándalo innecesario, existe porque los estados no se han tomado la molestia de suprimirla". Sostuvo también que: "La necesidad es uno de los cinco gigantes que obstruyen el camino de toda reconstrucción. Los otros cuatro se llaman: enfermedad, ignorancia, miseria y odio".

Gramaticalmente seguridad significa libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Sociológicamente Fairchaild asegura que: "Seguridad es la situación de encontrarse a salvo con defensa contra el azar". Normalmente se emplea este concepto refiriéndose a condiciones económicas. La seguridad social implica la certeza de haberse liberado de los principios de la miseria, la vejez y el paro sin compensación. El ya citado Sir William Beveridge, nos dice que seguridad social es: "El conjunto de medidas adoptadas por el Estado para los ciudadanos, contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de

presentarse, por óptima que sea la situación de conjunto de la sociedad en que se vive".

En sentido estricto muchos tratadistas entienden por seguridad social un nombre genérico equivalente al conjunto de los seguros sociales.

También por seguridad social se entiende certeza de los medios económicos de subsistencia sobre una base preferentemente familiar; asistencia sanitaria completa, política de pleno empleo con sus correspondientes servicios; y sobre todo atención médica y asistencia económica, la necesaria, en condiciones de precariedad tales como incapacidad por riesgos profesionales o enfermedades, orfandad, viudez, desempleo, o vejez.

En su acepción amplia y también en la sociológica el Gobierno del Estado de Guanajuato atiende la seguridad social de sus habitantes a través de varios canales: la salud, en términos generales, se atiende por los Servicios Coordinados de Salud Pública; se aprovechan las acciones federales como las del Seguro Social o el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; algunas importantes instituciones como la Universidad de Guanajuato tienen sus propios sistemas de asistencia médica. La educación se atiende a través de la Secretaría de Educación, las varias universidades oficiales y autónomas que funcionan en el Estado, los institutos particulares de educación superior y múltiples organismos de capacitación para el trabajo. La necesidad de vivienda para la población en general, se atiende por el Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato y se aprovecha y estimula el funcionamiento de fondos nacionales e internacionales que facilitan créditos para este propósito. La permanencia en el empleo se garantiza a través de las leyes que regulan las relaciones laborales, federal y locales, estas últimas constreñidas por mandato constitucional a los trabajadores al servicio del Estado. La seguridad pública queda a cargo de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de Justicia del Estado, las Fuerzas de Seguridad Pública y las policías preventivas.

Cada renglón de la seguridad social se atiende en coordinación con el gobierno federal que también dedica recursos humanos y económicos a la solución de estos problemas.

Es indudable que la eficacia de la atención varía y que cada sexenio el gobierno dedica esfuerzos prioritarios a determinados renglones de la seguridad social que a su juicio lo ameritan. Los resultados no son motivo de análisis en esta plática, pero vale apuntar que teóricamente todos los esfuerzos de la acción de gobierno tienden al reforzamiento de algún aspecto de la seguridad social.

Se nota la falta de una conciencia clara de parte de las autoridades para comprender la necesidad de una coordinación de todas y cada una de las dependencias que tienden a lograr una mejoría de la seguridad social en su conjunto. Sería recomendable que nuestra Academia coadyuve con la modestia de su condición, pero en un esfuerzo continuado y serio, a lograr este fin.

Es un hecho que el trabajo industrial sobre todo, multiplicó la disminución de capacidades del trabajador como consecuencia de la ocurrencia de riesgos de trabajo, accidentes o enfermedades profesionales. La explotación extrema del obrero en jornadas inhumanas y las remuneraciones paupérrimas agravaron las condiciones de pobreza extrema a que conducía la prestación de servicios, sobre todo en la vejez. El trabajo, las condiciones inadecuadas del mismo y las incapacidades por riesgos profesionales fueron los detonantes que hicieron patente la necesidad de lograr la seguridad social y diferentes leyes se han ocupado de propiciarla dentro de núcleos concretos de trabajadores.

En el Estado de Guanajuato la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, de sus tres poderes, de sus entidades, dependencias, organismos y aquellos ayuntamientos que lo convengan está regulada por la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Nos interesa hacer un breve y necesariamente superficial análisis de la evolución de las instituciones de seguridad social a través de las diversas leyes que se han ocupado del tema.

El primer antecedente que encontramos sobre seguridad social en el Estado lo es la Ley sobre Pago de Cuotas o Pensiones publicada en el Periódico Oficial de 2 de febrero de 1919. Infortunadamente sólo puedo mencionarla como un testimonio de que desde aquel tiempo Guanajuato atendía de alguna manera el problema de las pensiones. Mi falta de tiempo para investigar en detalle me impidió encontrar esta ley, pues en el archivo de periódicos oficiales que obra en el Congreso sólo encontramos parte del de esa fecha y falta el texto de esta Ley sobre el Pago de Cuotas o Pensiones.

Ley de pensiones para los funcionarios y empleados al servicio del estado de guanajuato.

La primera ley que pudimos consultar fue la publicada el 25 de septiembre de 1955, Ley de Pensiones para los Funcionarios y Empleados al Servicio del Estado de Guanajuato. De ella extraemos las siguientes notas sobresalientes:

1.-Se aplicó a funcionarios y empleados al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; a los de oficinas y servicios públicos cuyos cargos y remuneraciones estuviesen enumerados en las leyes orgánicas o sus reglamentos y a los propios empleados de la Dirección de Pensiones.
2.-Se hace una definición de lo que es servidor público.
3.-Se excluye de las protecciones que la ley brindaba en forma expresa a los funcionarios de elección popular directa o indirecta y con acertada expresión jurídica se agrega: “En lo que concierne a ese carácter”.
4.-Se establecen los siguientes beneficios para los servidores públicos y sus familiares:
   a).- Pensión por vejez y por inhabilitación;
   b).- Pensiones para los familiares cuando los servidores públicos fallezcan a consecuencia del servicio o no hayan solicitado su pensión teniendo derecho a ella;

c).- Pensión para familiares por muerte de servidores públicos;
d).- Devolución de descuentos para el fondo de pensiones cuando los servidores se separen del cargo;
e).- Devolución de los descuentos para el fondo a familiares cuando los servidores fallezcan sin tener derecho a pensión;
f).- Obtención de préstamos hipotecarios;
g).- Obtención de préstamos quirografarios;
h).- Obtención en propiedad o en arrendamiento a precios módicos y con facilidades de pago de casas y terrenos de la Dirección de Pensiones del Estado.

5.-Se crea un establecimiento público descentralizado denominado Dirección de Pensiones del Estado de Guanajuato para la administración y manejo de los servicios públicos que la ley instituye.

6.-Se previene que las relaciones entre la Dirección de Pensiones del Estado y su personal se regirán por la Ley del Servicio Civil que se expida. Lo que se explica por qué en aquel momento no se reconocía por las leyes la existencia de relación de trabajo entre el Estado y sus servidores. Regía aún el artículo 123 Constitucional anterior a 1970 y la Ley Federal del Trabajo de 1931.

7.-Se daba competencia a los tribunales del Estado de Guanajuato para resolver los conflictos derivados de la aplicación de esa ley.

8.-Se establecía la obligación de que las oficinas administrativas del Estado filiaran a los servidores públicos a la Dirección de Pensiones informándole de las altas y bajas de personal o variación del salario.

9.-Se obligaba a los pagadores a descontar las cuotas que la Dirección ordenase del sueldo de los servidores.

10.-La Dirección de Pensiones debería clasificar y resumir los informes para formular escalas de sueldos, promedios de duración en el servicio, tablas de mortalidad y estadísticas y cálculos necesarios para encausar el sistema de pensiones y quedaba obligada a promover con oportunidad las modificaciones a la ley que fuesen procedentes.

11.-Expedía tarjetas de identificación para los servidores públicos beneficiados.

12.-Se preveía que los gastos de administración de la Dirección de Pensiones se pagasen del fondo de pensiones.

13.-En el artículo 16 se establecía que el patrimonio de la Dirección se constituía, entre otros renglones, por las aportaciones que señalen los presupuestos de egresos del Estado y por los descuentos forzosos sobre sueldos de los servidores públicos, así como las aportaciones de los servidores de los establecimientos públicos descentralizados. Desde entonces se consideraba que los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtuviesen de las inversiones que hiciese la Dirección también engrosarían al fondo.

14.-Establecía una cuota obligatoria del 5.5% de los sueldos para el fondo de pensiones y en cambio no se preveía porcentaje fijo para la aportación estatal que quedaba sujeta a los que se estipulase en el Presupuesto de Egresos.
15.-Destaco que se imponía la obligación al Estado de cubrir el déficit que tuviese el fondo de pensiones si sus dineros no bastasen para cubrir las pensiones que la ley concedía, cualquiera que fuere su monto.
16.-Desde entonces se prevenía, disposición que se conserva en la actualidad y que no ha faltado en ninguna ley, que los servidores contribuyentes al fondo no adquirían derecho alguno ni individual ni colectivo sobre él, sino tan solo el gozar de los beneficios de la ley. Tenía la Dirección de Pensiones la obligación de publicar sus estados financieros mensuales y anuales.
17.-Era obligatorio invertir los sobrantes del fondo más allá de las erogaciones ordinarias que cubriesen tres meses de gastos en los siguientes renglones: préstamos a corto plazo con un interés nunca mayor del 12% ni menor al 9% sobre saldos insolutos; préstamos con garantía hipotecaria a un plazo máximo de diez años, sobre bienes libres de gravamen que no pasase del 60% del valor del inmueble con un interés no mayor del 9% anual ni menor del 5%, adquisición por el fondo de casas para empleados; tal vez aquí encontremos las raíces del IVEG; se formarían colonias para trabajadores.
18.-Como curiosidad señalo que los gastos notariales se cubrían el 50% por el servidor público y 50% por la Dirección de Pensiones si todavía había sobrantes deberían invertirse en instituciones bancarias.
19.-Se establecía la incompatibilidad de una pensión con cualquiera otra que hubiese sido concedida por el Estado y con el desempeño de cualquier cargo.
20.-Se establecía la inafectabilidad jurídica de las pensiones.
21.-Subrayo que para tener derecho a pensión se requería haber cumplido 60 años de edad y haber prestado servicios durante 30 años efectivos computables.
22.-Esta ley prevenía que la pensión máxima sería del 70% del sueldo y cuando se tuviesen 55 años de edad y 15 de servicios hasta 30, proponía una tabla que iba del 40% al 100%, entendiendo el 100% del 70% al que ya nos hemos referido.
23.-Establecía pensiones por incapacidad.
24.-La pensión máxima para deudos era del 50% de la que disfrutaba el servidor público, durante tres años.
25.-Eran imprescriptibles las obligaciones del Estado para otorgar cuotas.
26.-La Dirección de Pensiones se administraba por una Junta Directiva integrada por tres miembros designado uno por cada poder y el designado por el ejecutivo era Presidente de la Junta y Director de Pensiones.

27.-El Ejecutivo del Estado revisaba las determinaciones de la Junta cuando declarase la concesión o la insubsistencia de pensión.

28.-Como curiosidad enfatizo que se castigaba a la mujer divorciada que no tenía derecho a la pensión de la que hubiese sido su cónyuge, salvo que el marido hubiere sido condenado a pagarle alimentos.

He querido ser detallista en el análisis de esta ley porque aquí nacen muchas instituciones que aún nos rigen, algunas evolucionaron, otras, en determinado momento involucionaron.

Ley de pensiones para el estado de guanajuato.

En el Periódico Oficial del 28 de junio de 1962 se publica el decreto 348 del Congreso del Estado que contenía la Ley de Pensiones para el Estado de Guanajuato.

Algunos puntos importantes que contiene esta ley, son:

1.-La creación con personalidad jurídica de un organismo descentralizado que se denominará "Dirección de Pensiones del Estado". Es el antecedente directo del actual Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

2.-Se aplica a funcionarios y empleados al servicio del Estado cuya relación jurídica estuviese regida por un nombramiento legalmente expedido. El personal de la Dirección de Pensiones también gozaba de los privilegios de esa ley. Mediante convenio podían acogerse a los beneficios de la norma los funcionarios y empleados dependientes de patronatos, instituciones descentralizadas y de los municipios.

3.-Se conservaban las pensiones por retiro, devolución de las aportaciones, obtención de préstamos a corto plazo, adquisición de terrenos o casas y arrendamientos de casa y vivienda. La administración del organismo quedaba a cargo de un director nombrado y removido libremente por el Ejecutivo del Estado.

4.-La cuota a cargo de los empleados era del 5% de sus sueldos y honorarios mientras que el Estado sólo se comprometía a aportar el 2.5% de dichos sueldos y honorarios, nótese que aparece una cuota determinada a cargo del Estado, inferior en un 50% a la que tenía obligación de aportar el beneficiado.

5.-La Secretaría de Finanzas estaba facultada para ordenar auditorías a la Dirección de Pensiones del Estado en cualquier momento. Era su superior jerárquico.

6.-Para los préstamos a corto plazo se estableció un interés fijo del 9% anual sobre saldos insolutos. Como todos sabemos, este interés causó serios quebrantos económicos en algún momento al organismo.

7.-Se estableció un interés fijo para préstamos hipotecarios del 8% anual.

8.-Se modificó la obligación del pago de los gastos notariales para la adquisición de casas y se impuso la carga de estos gastos a los beneficiados.

9.-Se determinó que las pensiones por retiro sólo se otorgarían de acuerdo con los recursos de que dispusiese la Dirección de Pensiones, era una atribución discrecional y como requisitos de procedencia se establecía que el servidor hubiese cumplido 60 años de edad, tuviese 30 años de servicio y hubiese cotizado a Pensiones un mínimo de 3 años. Se previó una tabla para pensiones parciales que beneficiaba a aquellos trabajadores con 15 años de servicio y establecía una pensión que iba del 40% mínimo para los 15 años de antigüedad en el trabajo hasta 55% máximo para quienes tenían 30 años de antigüedad. Ninguna pensión por retiro podía ser mayor del 55% del sueldo. Para calcular la pensión se tomaba como base el salario promedio del último año de servicios. Ustedes han notado ya qué artículos se modificaron para bien y cuáles no.

Ley de seguridad social.

En el Periódico Oficial de 16 de octubre de 1977 se publicó el decreto número 88 del Quincuagésimo Congreso del Estado que contiene la Ley de Seguridad Social. De esta ley subrayo los siguientes puntos importantes:

1.-Su objeto y sujetos son los mismos pero de manera curiosa había una exclusión de los sujetos beneficiados por la ley. Exclusión desacertada porque desaparecían o casi los sujetos beneficiados. El artículo 2 tiene el siguiente texto en su fracción V:

V.- Quedan excluidos los trabajadores a lista de raya, los sujetos a contrato civil o laboral, y los que desempeñen actividades eventuales o de emergencia".

La exclusión que tiene la fracción V equivale con propiedad jurídica a no tener sujetos beneficiados. Recordemos que en ese momento, 1977, ya el Derecho del Trabajo reconocía que existía un vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, así como entre los ayuntamientos y su trabajadores.

2.-El artículo 4 de esta ley, crea con la denominación actual, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato como organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio, órganos de gobierno y administración propios.

3.-Se aumentó la cuota de aportación a cargo de los servidores públicos al 6% de su sueldo y la de las entidades públicas al 3%. Se impuso a los servidores públicos una cuota mensual de $24.00 para la integración de los seguros de fallecimiento y las entidades públicas aportaban una cantidad similar.

4.-Se conservan los préstamos hipotecarios y para la adquisición de vivienda o terreno y los gastos que se originen serán pagados por el asegurado. Se agrega la obligación de contratar un seguro de vida nombrando beneficiario al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato si se le adeuda préstamo hipotecario.

5.-Debemos destacar, por la trascendencia que en la capacidad económica del ISSEG tuvo, que desaparece la edad mínima de 60 años para tener derecho a las jubilaciones y pensiones por vejez. Basta que el trabajador tenga 30 años o más de servicios para que, independientemente de su edad, tenga derecho a jubilarse y además se concede una jubilación parcial que va del 50% al 95% para aquellos trabajadores que teniendo 55 años de edad tengan una antigüedad entre 14 y 29 años de servicios.

6.-Enfatizamos también que por primera vez en la legislación de Guanajuato aparece la noción de sueldo regulador que actualmente se llama sueldo básico, entendiendo por éste el promedio mensual de las percepciones computables al servidor público correspondientes a los 36 meses inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud o a la del dictamen que conceda la pensión cuando no hubiere solicitud previa o a la fecha de separación definitiva del servicio cuando la solicitud se haya formulado posteriormente. Sobre este sueldo regulador deben pagarse los porcentajes de cuota de aportación al Instituto.

7.-En el artículo 42 se establece indemnización por invalidez parcial por riesgos profesionales; para calcularlos se remite a la tabla de evaluación de incapacidades que previene la Ley Federal del Trabajo. No nos explicamos cómo se puede aplicar esta ley, si la fracción V transcrita del artículo 2 excluye de los beneficios de la norma a los trabajadores sujetos a contrato laboral.

8.-El artículo 58 previene que cuando un jubilado o pensionado sea declarado reo por sentencia firme en los casos de delito contra la seguridad exterior de la nación o en contra de la integridad territorial del Estado, automáticamente se extinguirá su pensión. Este artículo nos parece injusto. La pensión se origina en una circunstancia que el trabajador crea con su esfuerzo y tiene derecho a ella independientemente de que después delinca o esté privado de su libertad. Confundir este tema lleva a graves inequidades.

En esta ley se ordena que el ISSEG establezca inversiones en beneficios de carácter social a fin de fortalecer su patrimonio.

9.-Se conservan en términos generales las otras pensiones y prestaciones que contenía la ley del 28 de junio de 1962 y que ahora no mencionamos.

Ley de seguridad social del estado de guanajuato.

En el Periódico Oficial del 29 de enero de 1988 se publicó una nueva "Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato", con los siguientes puntos importantes:

1.-El artículo 7 excluye de los beneficios de la ley, injustificadamente, a quienes desempeñen actividades eventuales o de emergencia. Son, tal vez, este tipo de servidores públicos los que más requieren algunas prestaciones de seguridad social como las derivadas de riesgos profesionales.

2.-En el artículo 8 se le da al salario regulador, por primera vez, la denominación de salario básico.
3.-El artículo 9 aumenta la cuota que deben aportar los asegurados al 9% del sueldo base mensual que perciban. El artículo 14 de esta ley establece también para el Estado la obligación de aportar un porcentaje igual al que aportan los asegurados. Por primera vez el gobierno se autoimpone la obligación de la misma cuantía en la cuota que los servidores públicos.
4.-En el artículo 18 se incurre en un defecto que afortunadamente nunca fue aplicado en la práctica, pues el ISSEG siempre entendió lo que verdaderamente se quería decir aunque no se dijo. Este artículo establece las cantidades que de las cuotas que aporten los asegurados o el gobierno, se destinarán al cumplimiento de las diversas obligaciones que el ISSEG tiene. Así se dice que el 4.0% del 9% que aportan los trabajadores y el Estado se destinará al financiamiento de las pensiones; el 1.78% para el financiamiento de los préstamos a corto plazo; el 1.59% al financiamiento de los préstamos hipotecarios; el 0.41% al financiamiento del seguro de vida y el 0.75% para gastos de administración y el 0.40% para cubrir las prestaciones sociales. Si sumamos los porcentajes a que se refiere este artículo, veremos que nos dan 9%. La pregunta lógica es, ¿dónde quedó el otro 91%? La verdad es que el legislador desde entonces quiso decir lo que ahora expresa la vigente ley: que estos no son porcentajes sino puntos del 9% que cotizan tanto los trabajadores como el Estado. Esto es, de los nueve puntos de los trabajadores y de los 9 puntos del gobierno, 4.07 puntos se destinarán a las finalidades de financiamiento de pensiones, y así sucesivamente.
5.-La fracción III del artículo 28 incurre en una discriminación del género masculino al proponer que el esposo supérstite sólo tiene derecho a la pensión de viudedad si es mayor de 55 años o estuviese incapacitado y hubiere dependido económicamente de la esposa, condiciones que no se exigen si la viudez la sufre la mujer. Tal vez sea momento de iniciar una lucha para evitar discriminación de género masculino. La fracción VII de este artículo establece que los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a pensión de orfandad cuando la adopción se haya realizado antes de cumplir 55 años. Son curiosidades legales.
6.-El artículo 41 previene que cuando un pensionista cambie su residencia al extranjero el Instituto le entregará en una sola exhibición y como finiquito por cada una de las pensiones de que disfrute, el importe de seis mensualidades. Esto es inequitativo e inconveniente.
7.-El artículo 50 establece la pensión de vejez para quien teniendo 55 años de edad haya cotizado un mínimo de 15 y el artículo 56 previene la tabla que va del 50% de la pensión para los que hayan cotizado de 15 años hasta el 95% de ella para quienes hayan cotizado 29 años.

8.-El artículo 52 establece el seguro de retiro con una pensión del 100% del sueldo promedio para quienes hayan cumplido 30 años o más al Instituto si son varones y 28 si son mujeres. Permanece la disposición, que implica serios problemas económicos para los institutos de seguridad social, de no establecer una edad mínima del trabajador para tener derecho a su pensión de retiro.

9.-El artículo 55 establece como salario base o regulador, el promedio del sueldo percibido en el año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador.

10.-El artículo 68 en mi opinión facilita el cumplimiento de las obligaciones del ISSEG al eliminar el límite de intereses y dejar que el Consejo Directivo lo fije anualmente.

11.-El artículo 98 establece la imprescriptibilidad del derecho a ser pensionado y la prescriptibilidad de las pensiones ya vencidas aumenta su plazo a tres años.

12.-El artículo 128 otorga a los trabajadores del ISSEG los mismos beneficios que a los otros servidores públicos y previene que sus relaciones de trabajo se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y por las condiciones generales de trabajo.

13.-El artículo 4° transitorio impone la obligación a pensionistas servidores públicos, poderes del Estado y las otras entidades de la administración pública paraestatal de pagar las cuotas por servicios médicos a la institución que los otorgue.

Ley de seguridad social del estado de guanajuato.

En el periódico oficial del 16 de agosto del año 2002 se publicó la vigente Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. En términos generales esta ley contiene los mismos seguros y prestaciones que la anterior. Debemos destacar que contienen notas de modernidad y disposiciones que sin duda alguna previenen la presentación de crisis económicas para el ISSEG y le posibilitan para que por un tiempo largo continúe cumpliendo las obligaciones que tiene para otorgar seguridad social a los servidores públicos.

Las razones y contenido de esta ley se explicaron con gran claridad, no tan usual infortunadamente, en las consideraciones que en el dictamen asentó la Comisión de Justicia[43] del Congreso Local. Por el interés general que tienen, las transcribiremos:

[43] Diputado Local de oposición en la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 2000-2003. El Lic. Montes García presidió la Comisión de Justicia en esa legislatura y coordinó la dictaminación y aprobación de la Ley de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato, y que fue calificada, en su momento, como una de las más avanzadas de la República Mexicana, que alivió el problema de las pensiones de los trabajadores.

"Todas las instituciones de seguridad social de nuestro país y muchas del mundo se enfrentan actualmente a la terrible posibilidad de una insuficiencia de recursos para poder satisfacer las pensiones y prestaciones de seguridad social a las que están obligadas. Esta insuficiencia se debe fundamentalmente a causas de tipo natural y otras que se han originado por la deficiente administración de sus recursos.

Ante el ineludible proceso natural de envejecimiento demográfico que experimentará el país en las futuras décadas, se prevé que la sociedad deberá desplegar esfuerzos enormes para asegurar la viabilidad y el equilibrio financiero del régimen de seguridad social prevaleciente, prevenir riesgos y proveer recursos para el pago de pensiones dignas y suficientes.

El aumento en la esperanza de vida de la población en México provocó no sólo que se aumentara el número de trabajadores que arriban a la edad del retiro laboral, sino también que se incrementara el número de años en los cuales se les paga su pensión. Las afortunadas circunstancias que han permitido el aumento de la esperanza de vida de los mexicanos, al punto de alcanzar los setenta y cuatro años en promedio, han tenido una consecuencia ruinosa para las instituciones de seguridad social. El número creciente de jubilados y el mayor tiempo de duración del período jubilatorio debilitan los recursos que los organismos de seguridad social tienen, hasta llegar a hacer imposible su viabilidad económica si no se establece el requisito de edad mínima, aunado al de antigüedad en el trabajo, para poder tener derecho a la jubilación.

En la actualidad, uno de cada tres mexicanos tiene menos de quince años de edad, mientras que uno de cada veinte tiene sesenta y cinco años o más. Sin embargo, en el año 2050 esta composición se verá profundamente alterada, ya que se prevé que uno de cada siete mexicanos estará en edad escolar, en tanto que los adultos mayores representarán a uno de cada cuatro habitantes en el país (CONAPO, El Envejecimiento Demográfico de México: Retos y perspectivas 1999).

Por otra parte, la disminución en la tasa de fecundidad, aunada al decrecimiento en la tasa de mortalidad, produjo el envejecimiento de la población, lo cual, a su vez, contribuyó a que sean cada vez menos los trabajadores que aportan a los institutos de seguridad social, frente a los trabajadores que se pensionan.

Así también, más allá de los posibles errores de administración por parte de quienes estuvieron o están al frente de esas instituciones, las deficiencias económicas de los sistemas de pensiones se originaron por no haber entendido el verdadero significado de lo que es la seguridad social, sobre todo, el alcance que deben tener las pensiones jubilatorias. No se entendió que la pensión jubilatoria debe representar para el beneficiario de ella un ingreso que le permita vivir con dignidad cuando

ya no pueda trabajar y se suprimió de los requisitos para obtener esa pensión, el de una edad mínima, atendiendo sólo a la antigüedad en el trabajo.

Hubo momentos en que las instituciones de seguridad social del país, por razón de aparente conveniencia política o por incomprensión de su función, otorgaron prestaciones a los asegurados y beneficiarios indirectos como si se tratase de una relación obrero patronal en donde las instituciones ocuparan el lugar de los patrones.

Los sistemas de pensiones generalmente aplicados en nuestro país hasta los últimos años, se rigieron bajo el esquema de beneficio definido, caracterizado por garantizar a los pensionados y sus beneficiarios un conjunto de derechos establecidos en las leyes y en algunos caso en reglamentos u otras disposiciones. Estas prestaciones dependían del tiempo de cotización de cada trabajador, así como del ingreso al momento del retiro y eran independientes de las aportaciones realizadas durante su vida activa.

Cuando los institutos de seguridad social comenzaron sus actividades bajo este esquema, sus finanzas se mantuvieron superavitarias pues no estaban obligados durante ese tiempo a pagar las pensiones y, simultáneamente, todos sus afiliados efectuaban sus aportaciones. Sin embargo, a medida en que transcurrieron los años y los asegurados estuvieron en condiciones de cumplir con los requisitos para su jubilación los gastos por este concepto se incrementaron considerablemente cada año y los ingresos de los institutos de seguridad social dependieron cada vez más de los nuevos trabajadores que se iban incorporando.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato no es ajeno a esta problemática. Si no fortalece sus ingresos y si las obligaciones que contrajo con sus asegurados y pensionistas siguen en los términos que previene la actual Ley, en el corto plazo no tendrá capital suficiente para pagar las pensiones a que está obligado. Si no se emprende una revisión integral al esquema bajo el cual se financian las pensiones y prestaciones, es fácil augurar que el déficit sobrevendrá en poco tiempo.

Según cálculos actuariales aportados por la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, el Instituto de Seguridad Social del Estado, en las condiciones de ahora, podría cumplir sus responsabilidades solamente hasta el año 2003 sin sufrir ningún déficit. A partir del año 2004 enfrentaría un déficit creciente que va de $35'180,949.57 (Treinta y cinco millones ciento ochenta mil novecientos cuarenta y nueve pesos 57/100), hasta $2,147'935,285.64 (Dos mil ciento cuarenta y siete millones novecientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 64/100) en el año 2030.

El déficit acumulado de los años 2004 al 2030 del Instituto, si permanecen las actuales circunstancias, sería de $27,235'000,000.00

(Veintisiete mil doscientos treinta y cinco millones 00/100) aproximadamente. A partir del año 2031 continuaría el déficit pero en forma decreciente, siendo éste de $2,117'699,441.85 (Dos mil ciento diecisiete millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 85/100), en ese año y en el año 2050 sería de $865'829,281.14 (Ochocientos sesenta y cinco millones ochocientos veintinueve mil doscientos ochenta y un pesos 14/100). El déficit acumulado de los años 2004 al 2050 sería de $57,982'974,145.09 (Cincuenta y siete mil novecientos ochenta y dos millones novecientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco pesos 09/100).

Se puede llegar a la conclusión de que bajo el actual esquema que prevé la Ley vigente, sería imposible que el Instituto existiera y el gobierno no tendría recursos suficientes para superar esa crisis.

Para prevenir y corregir los problemas narrados, resulta indispensable y absolutamente necesario reformar la vigente Ley de Seguridad Social e introducir en ella condiciones que permitan la capitalización del Instituto y su fortalecimiento económico sustentable, no como fin en sí mismo, sino con el propósito de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, siempre a favor de sus beneficiarios directos e indirectos que son aproximadamente treinta y nueve mil ochocientas setenta y nueve familias.

Los elaboradores del documento que sirvió de base a la iniciativa que se dictamina, su iniciante y los diputados que suscribimos, coincidimos en que posibilitar al Instituto para que cumpla de manera sustentable con el pago de las diversas prestaciones y sobre todo, de las pensiones jubilatorias, es lo que esencialmente se pretende y ratificamos que con esta Ley se logrará...

Conviene insistir que las organizaciones de trabajadores afiliados al Instituto participaron durante más de un año en la elaboración de la iniciativa que se analiza y que la generalidad de los planteamientos que se hicieron a la Comisión de Justicia ya habían sido presentados en el seno de la comisión que elaboró el documento base de ella.

A pesar de ello, la Comisión recogió algunas de las propuestas que le parecieron prudentes. Tal es el caso de establecer mínimos y máximos a los intereses que el Instituto cobra cuando otorga préstamos hipotecarios, a corto plazo o para la adquisición de bienes de uso duradero. Es verdad que, durante su historia, los bajos intereses que se cobraron por esos préstamos pusieron en riesgo la viabilidad económica del Instituto. A partir de la vigencia de esta Ley el Instituto no podrá cobrar mayores intereses que los que equivalgan al costo de oportunidad promedio, esto es, el promedio de lo que obtenga el Instituto por las inversiones financieras que realiza. Tampoco podrá cobrar intereses inferiores a la inflación anual que se registre en el país. Se previenen mecanismos para

que los intereses se modifiquen en casos de crisis agudas que propicien una inflación acelerada sin importar que no sea la anual, porque se busca siempre eludir el daño económico que se causaría al Instituto.

La Comisión que dictamina, para tomar medidas de este tipo, tuvo en cuenta, invariablemente, el beneficio del Instituto que equivale al beneficio de todos y cada uno de sus afiliados y beneficiarios.

En términos generales se respetaron las propuestas principales que la iniciativa contiene. Eso implica una gran responsabilidad para los administradores del Instituto que no podrán aducir consecuencias inadecuadas por normas que hubiesen surgido solo por atender peticiones concretas o por afán irresponsable de lucimiento. En problemas tan serios no se puede improvisar, pero insistimos, se agranda la necesidad de una eficaz administración de los recursos del Instituto, que lo son de los trabajadores, a fin de que se evite cualquier dispendio o gasto frívolo.

Subrayamos la característica de irretroactividad que tendrá la aplicación de la nueva Ley. No se afecta ninguno de los derechos adquiridos por los actuales asegurados o pensionados. Permanecen bajo el régimen de pensiones y prestaciones vigente. La nueva Ley, con mayores requisitos, sobre todo para obtener la pensión jubilatoria, solo se aplicará a quienes se afilien al Instituto bajo la vigencia del nuevo ordenamiento normativo. En ningún caso habrá aplicación retroactiva que lesione derechos adquiridos, tal y como se previene en el Artículo Noveno Transitorio.

Fue una demanda reiterada que se fijasen límites a la discrecionalidad en el ejercicio de las atribuciones del Consejo Directivo. Esta solicitud fue atendida, por lo que se limitó esa discrecionalidad y se cuidó no establecer tampoco normas tan rígidas a la actuación del Consejo Directivo que pudieran traducirse en la falta de flexibilidad que necesita para tomar decisiones. Por ello, en los artículos conducentes, se establecieron las disposiciones que se estimaron pertinentes para delimitar los alcances de las facultades del Consejo Directivo, procurando, entre otras cosas, que el Instituto no realice inversiones financieras o comerciales altamente riesgosas, sino que la especulación exagerada quede ajena a sus propósitos".

Resaltamos también el pensamiento de la Comisión de Justicia en relación con algunos temas:

a).- "La Comisión de Justicia reconoce que el Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos que tienen convenio de afiliación, los organismos descentralizados y autónomos del Estado y los otros entes con obligación de inscribir a sus trabajadores en el Instituto, han hecho un esfuerzo responsable al aumentar sus aportaciones. Este esfuerzo ha sido correspondido por los trabajadores que han aceptado, a través de sus dirigentes sindicales, el aumento de las cuotas que deben cubrir al Instituto. A

partir del inicio de la vigencia de esta Ley, las cuotas de los trabajadores se aumentarán en tres puntos, esto es, pasarán del nueve por ciento del salario base de cotización al doce por ciento del mismo salario.

En otras palabras, el nueve por ciento que actualmente cotizan los trabajadores se transformará en un doce por ciento y el nueve por ciento que actualmente aportan los patrones se transformará al cuarto año de vigencia de la Ley en un quince por ciento. Se considera que estas variaciones en las aportaciones y cuotas representan un aumento sustancial de los recursos con los que contará el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

b).- Se adicionó el texto del artículo 37 agregando a la fracción I que no solo la esposa del fallecido, sino también el esposo tendrá derecho a la pensión, siempre y cuando el cónyuge supérstite hubiese dependido económicamente del asegurado fallecido. En la fracción II de este artículo, para ganar claridad, se agregó a la concubina o concubinario estableciendo también que su derecho a la pensión queda condicionado a la dependencia económica que tuviese del asegurado fallecido.

c).- El artículo 47 es de los más trascendentes para lograr los fines que con esta Ley se persiguen, entre otros, garantizar la solvencia económica del Instituto para que pueda cumplir sus obligaciones con los asegurados y sus beneficiarios. En su texto se contiene el requisito de tener un mínimo de sesenta años de edad para poder tener derecho a la pensión jubilatoria.

Este artículo se complementa por el Artículo Tercero Transitorio del proyecto de Ley, que clarifica y precisa su alcance. Se elimina para los trabajadores de nueva inscripción en el Instituto la posibilidad de jubilarse sólo como consecuencia de su antigüedad de trabajo y, reiteramos, se agrega otro requisito sustancial: sólo se tendrá derecho a la jubilación si se tiene un mínimo de sesenta años de edad y veintiocho de antigüedad en el trabajo para las mujeres y treinta años de antigüedad para los varones. El requisito de la edad se aumentará un año cada dos de los posteriores a la fecha de la vigencia de la Ley, hasta llegar a los sesenta y cinco años.

Repetimos: No se lesionan los derechos adquiridos por quienes ya están inscritos en el Instituto, pues para ellos seguirá siendo aplicable su derecho a jubilarse sólo como efecto de su antigüedad en el trabajo sin considerar su edad.

d).- El artículo 77 se comprende dentro del Capítulo Décimo Primero denominado “Del Régimen financiero y de las inversiones del Instituto”. La Comisión de Justicia se hizo eco de las preocupaciones de los comparecientes a las audiencias públicas y de las manifestadas por los propios señores diputados y procuró precisar que la inversión de las reservas del Instituto se hará en bonos o títulos emitidos por el Gobierno

Federal o en pagarés bancario, (fracción III), suprimiendo la facultad discrecional de inversión financiera que antes el Instituto tenía. También se señaló (fracción V) que el Instituto en ningún caso realizará inversiones financieras altamente especulativas y se suprime la posibilidad de que reglamentos del Instituto puedan prever otros renglones en que las reservas pudiesen utilizarse.

En este artículo queda plasmada la preocupación de todos para que el Instituto conserve siempre su disponibilidad de recursos para cumplir sus obligaciones con los pensionados y que sus inversiones verdaderamente se hagan en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez.

e).- El artículo 78 del proyecto de Ley que se sujeta a la consideración de este Pleno, no tiene equivalente exacto por su contenido con ningún artículo de la iniciativa. Se acepta la proposición que hicieron las asociaciones sindicales universitarias y se limita la facultad del Consejo Directivo del Instituto para determinar libremente el monto de los intereses que se cobrarán cuando se otorguen préstamos en efectivo. En este artículo se señala un mínimo y un máximo de esos intereses. Se determina que el Consejo Directivo conserve su atribución de fijar el monto del interés, pero éste nunca podrá ser inferior a la tasa de inflación anualizada que haga pública el Banco de México, ni superior al costo de oportunidad promedio de las inversiones del Instituto. Se logra con este texto evitar a futuro experiencias históricas desafortunadas en épocas de alta inflación y crisis económicas. Se dieron múltiples casos de abuso en que los asegurados obtenían préstamos a bajo interés para invertirlos en instituciones financieras que pagaban intereses más altos a los cobrados por el Instituto. Con este artículo se evita que se perviertan las finalidades de apoyo social que se pretenden alcanzar con los préstamos que el Instituto otorga.

f).- En el artículo 79 del proyecto de Ley, se complementa el contenido del artículo 78. Es un artículo de contenido prudente que previene que cuando las condiciones económicas de mercado cambien con tal rapidez o en tal cuantía que pongan en peligro la viabilidad financiera del Instituto, de manera extraordinaria, el Consejo Directivo puede proponer ajustes urgentes a las tasas de interés, sin esperar el transcurso de un año y sin que tales ajustes afecten a los préstamos ya otorgados, sino que se aplicarán, siempre, a los nuevos préstamos.

g).- Se adicionó en el proyecto de Ley el Artículo Cuarto Transitorio para regular el incremento gradual anual en las aportaciones a cargo de los poderes, entidades, dependencias, organismos y en su caso, los ayuntamientos, hasta alcanzar el porcentaje del quince por ciento del salario base de cotización de sus trabajadores a que se refiere el artículo 19 de la Ley.

h).- El Artículo Sexto Transitorio contiene la propuesta del Plan de Permanencia. Este Plan es muy importante para lograr las finalidades que con esta Ley se pretenden. En él se ofrece a los trabajadores que ya tienen derecho a pensión por jubilación, un aumento salarial importante y otros estímulos como un préstamo especial pagadero en un plazo máximo de cinco años, para que continúen laborando y retrasen el ejercicio de su derecho a jubilarse. Acogerse al Plan es absolutamente voluntario. El Plan será temporal, durará en vigencia veinte años, aunque individuamente solo represente beneficios por diez años a cada persona que lo adopte. Los aumentos salariales sólo beneficiarán al trabajador mientras el Plan le sea aplicado, sin que se reflejen en su futura pensión jubilatoria. El costo del Plan se compartirá entre los sujetos obligados a inscribir a sus trabajadores y el Instituto, con cargo al fondo de pensiones".

A pesar del tiempo utilizado -ofrezco disculpas por mi exceso-, este análisis no es exhaustivo y no tiene más propósito que divulgar las razones para la emisión de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

El ISSEG ha contraído una gran responsabilidad en la aplicación de esta ley al administrar el Instituto. Hacemos votos porque la cumpla con éxito.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "APUNTAMIENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL"

Del licenciado José Cervantes Herrera
Universidad de Guanajuato
Guanajuato, Gto.
26 de febrero del 2004

Me siento distinguido por la invitación que el señor licenciado José Cervantes Herrera me hizo para participar en la presentación del libro "Apuntamientos de Seguridad Social", del que es autor.

Felicito a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato porque su pie de imprenta se enriquece con esta obra. Qué bueno que haya la decisión de la Facultad de Derecho de dar a conocer a su comunidad y al público en general, libros que tienen esta importancia.

El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia, en su XXI Edición, nos dice que apuntamiento es: 1.- Acción y efecto de apuntar. 2.- En Derecho, resumen o extracto que de los autos forma el secretario de sala o el relator de un Tribunal Colegiado. Al verbo "apuntar" se le atribuyen 29 significados: Primero.- Asestar un arma arrojadiza o de fuego; Segundo.- Señalar con el dedo o de cualquier otra manera hacia sitio u objeto determinado; Tercero.- En un escrito, notar o señalar alguna cosa con una raya, estrella u otra nota para encontrarla fácilmente; Cuarto.- Tomar nota por escrito de alguna cosa; y 25 significados más, notoriamente inaplicables al caso.

Creo que es válido concluir que apuntamiento es hacer apuntes y según la misma fuente, un apunte en su segunda acepción es una nota que se hace por escrito de alguna cosa o, en la acepción décima primera: Extracto de las explicaciones de un profesor que toman los alumnos para sí y que a veces se reproduce para uso de los demás.

No se me juzgue ocioso por intentar averiguar desde el punto de vista gramatical por qué a este texto sobre la seguridad social, tal vez por modestia excesiva, su autor lo llamó "Apuntamientos". Desde luego, el autor no explica que se trate de un extracto de las explicaciones de un profesor que toman los alumnos para sí y que a veces se reproduce para uso de los demás, aunque es verdad que se trata de notas por escrito sobre algún tema, sobre alguna cosa. También es verdad que, muy merecidamente, el señor licenciado José Cervantes Herrera es titular de la cátedra de Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Estoy seguro que el contenido del libro forma parte de las explicaciones que el maestro Cervantes Herrera da a sus alumnos y estoy seguro también que este libro fue escrito con gran

exactitud y acuciosidad por el señor licenciado José Cervantes Herrera y desde luego no son notas tomadas por ningún alumno. Respetemos la modestia del autor y ocupémonos del libro que se presenta.

Quiero empezar por decir que será un libro sumamente útil para maestros, alumnos, instituciones de seguridad social, empresas, patrones y afiliados a los organismos de seguridad social. En efecto, los temas que el autor trata son muy amplios, de tal manera que el libro, no obstante su extensión, es, en verdad, un apretado resumen en donde se tratan con gran cuidado los conceptos, tendencias, definiciones, reglamentación y aplicación de la seguridad social, de manera destacada todo lo relativo al Instituto Mexicano del Seguro Social, sus antecedentes, su naturaleza jurídica y sus atribuciones. El tratamiento es lacónico, pero la amplitud del tema determina fatalmente la extensión, máxime si se considera que tiene un glosario de términos y varios anexos. El primero con la jurisprudencia establecida por los tribunales federales, el segundo con un análisis de beneficios muy ilustrativo y el tercero con los acuerdos más importantes del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Coincidimos con el autor en que existen serias dificultades para encontrar material bibliográfico útil para el desarrollo de la cátedra. Estas dificultades se alivian en gran medida con estos "Apuntamientos" que en realidad son una guía programática para la impartición de la clase de Seguridad Social, pero no sólo, sino que ahora ya existe una fuente a la cual acudir cuando se necesite saber cuáles son los derechos de los beneficiarios de la seguridad social, las obligaciones de los empleadores para darla, los deberes del estado para que los pobladores cuenten con ella y las notas constitutivas de cada una de las pensiones y servicios que deben darse al afiliado en cualquier organismo de seguridad social.

El capítulo primero nos propone la definición de lo que debe entenderse por seguridad social, arduo problema que el autor resuelve señalando con valor que por tal se entiende: "la sistematización de instituciones, acciones y esfuerzos que se dan en una colectividad, encaminados a prevenir, restaurar o remediar las lesiones o daños, consecuencia del riesgo social y que impiden al ser humano su pleno desarrollo". Será por lo menos un punto de partida para entender el concepto de seguridad social. Luego nos presenta los antecedentes históricos en materia de seguridad social sin que el capítulo respectivo, el segundo, sea exhaustivo pero sí es altamente ilustrativo y no creo que falte algún antecedente de verdad importante. Luego se ocupa del organismo mexicano encargado por antonomasia de la seguridad social: el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tanto prestigio y bienestar, ahora también problemas, ha traído sobre todo a los trabajadores del país. Me hubiera gustado una referencia estimativa al gran trabajo que en relación con este Instituto, desarrolló el distinguido guanajuatense Ignacio García Téllez.

Considero que en el capítulo segundo que trata de la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social nos da un resumen interesantísimo

de la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el por qué es un organismo público, administrativo por servicio, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita y de carácter fiscal autónomo.

Las páginas 56 y 57 terminan, a mi juicio, con la discusión doctrinaria de la naturaleza fiscal del Instituto y, académicamente, se pronuncian por atribuirle precisamente el carácter fiscal. Se acaba esta larga discusión que incluso se dio en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la página 62 de este libro analítico hay una sugerencia atendible: que se dé cabida a los cooperativistas para que participen en la Asamblea General del Seguro Social.

En la página 72 hay una clarificación muy conveniente: que el régimen de afiliación voluntaria al Instituto Mexicano del Seguro Social, se condiciona a la suficiencia del régimen obligatorio y es facultad del propio Seguro negar el acceso a la afiliación voluntaria si no hay esta suficiencia o si pudiera lesionarse. Si esta noción se hubiese tenido siempre presente en la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal vez se hubiesen evitado las acciones demagógicas que pretendieron extender el servicio a clases que lo requieren sin ser asalariados, pero que por su propia postración económica no aportaban cuotas y tal vez se hubiese aliviado, así fuese en forma parcial, la crisis económica de este organismo.

El capítulo cuarto, a partir de la hoja 81, se ocupa de algo importantísimo, del salario base de cotización. Me atrevo a calificarlo como un capítulo amplio, completo, útil. Sus puntualizaciones sobre cómo valuar el salario base, cómo integrarlo y cómo determinarlo son atinadas. Si se siguiesen puntualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no sufriría daños patrimoniales, el trabajador no tendría menoscabo alguno en sus derechos y las empresas mejorarían notablemente su administración a la vez eficiente y ahorradora.

Encuentro discutible, aunque absolutamente respetable, la interpretación que el autor hace del artículo 36 de la Ley del Seguro Social, que impone a los patrones la carga de pagar íntegramente la cuota de los trabajadores afiliados al Instituto cuando éstos sólo perciban el salario mínimo, el autor opina que ante la no distinción legal el mandato debe aplicarse también para quienes perciben un salario mínimo profesional. Podría decirse que la ley amerita interpretarse y es notorio que el legislador solo quiso aliviar de la carga de la cuota a quienes ganan el salario legal más pequeño, mínimo, tratándose de los profesionistas que ganan uno no tan pequeño resultaría inequitativo para el patrón, conjuntarle dos obligaciones, la de pagar los mínimos profesionales y además la cuota de asegurados de estos trabajadores que, en estricto rigor, no ameritan ya esa protección. Esto no le resta importancia a la definición del autor sino que se la agrega.

Los antecedentes sobre los seguros de riesgo de trabajo, las teorías sobre responsabilidad en materia de los mismos riesgos son cátedras que servirán para

que todos los que nos ocupamos de la seguridad social, como maestros, como estudiantes, como abogados, como beneficiarios o como directores de organismos aprovechemos su contenido. Realmente valioso. Puntual. Informado.

El análisis de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, contiene, con imparcialidad y objetividad académicas las razones y propósitos que el legislador asumió cuando sustituyó el sistema del reparto de hecho por el actual de capitalización de reservas, razones por cierto debatidas, impugnadas y combatidas por muchos partidos políticos e investigadores, pero es verdad que se propusieron:

1.-Lograr un crecimiento con estabilidad, promoviendo el ahorro, tanto público como privado.
2.-Impulsar un crecimiento sustentable a través de la profundización del mercado de capitales de largo plazo.
3.-Motivar la generación de empleos permanentes a través de proyectos de inversión a largo plazo, e
4.-Incrementar el ahorro interno bruto.

La medida en que estos propósitos se logren sólo la dará el futuro y será auxiliada o dañada por los mecanismos que se creen en otras disposiciones legales para aliviar ineludibles crisis económicas generales.

Se ocupa también de describir y resumir los procedimientos de caducidad y prescripción, de enseñarnos cómo se tramita el recurso de inconformidad y la queja administrativa, así como de cuáles son las infracciones, sanciones y delitos en materia de seguridad social.

Le alcanzó el espacio de su libro al maestro Cervantes para explicar sobre los áridos temas de las administradoras de fondos para el retiro; de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y de la cuenta individual y de los planes de pensiones establecidos por patrones o derivados de contratación colectiva.

Hay otros muchos temas que el licenciado Cervantes trata en los diversos capítulos de su libro. Sería impertinente por extenso, referirse de manera particular a cada uno de ellos en esta presentación.

Resumo: el libro contiene con rigor académico los temas sustanciales sobre la seguridad social y transcribe, comenta brevemente y califica, en ocasiones, el marco jurídico que rige la actuación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es preciso. Será muy útil. No es en esencia un ensayo crítico, es fundamentalmente analítico, prudente, enterado. Indubitablemente un libro hecho por un erudito. Constituye una valiosa fuente de consulta a la que abogados, litigantes, académicos, maestros, alumnos, empresarios, beneficiarios y el propio Instituto, pueden acudir para superar incomprensiones y dudas de tipo legal y administrativas, sin correr el riesgo, como luego se da, de que no contenga la orientación sobre el tema que se busca. A todos nos ha pasado que cuando en la práctica de la aplicación del derecho tenemos una duda, acudimos a sesudos tratadistas para que nos ayuden a resolverla y nos encontramos con que

sus extensos tratados se ocupan casi de todo, menos de lo que nos hace falta. En este libro no hay eso. Contiene lo necesario para conocer bien al Instituto Mexicano del Seguro Social, su funcionamiento, las obligaciones que tenemos con él, los derechos que tenemos frente a él, los caminos para impugnar decisiones que no juzgamos legales. Es un libro que hacía falta y por eso reitero mi felicitación al señor licenciado José Cervantes Herrera que lo hizo y a la Facultad de Derecho que lo edita.

Hago votos porque en el futuro inmediato la acuciosidad y empeño del señor licenciado José Cervantes Herrera nos permitan gozar de nuevos frutos que justifiquen ampliamente los espacios, recursos económicos y humanos que la Universidad de Guanajuato y nuestra querida Facultad de Derecho, destinan para los trabajos de investigación, que ojalá se fomenten con mayor intensidad.

¿QUÉ ES EDUCAR?

Colegio de León.[44]
León, Gto.
4 de junio del 2004

Señor Licenciado Juan Jauregui Jiménez,
Director General del Colegio de León
Señoras y señores integrantes del presidium
Alumnos del Colegio de León
Señoras y señores:

Es una distinción que se me haya invitado para dirigir a ustedes unas breves palabras con motivo de este acto académico, máxime si se considera que mi único contacto directo con el Colegio de León ha sido compartir con varios de sus alumnos un curso de derecho constitucional, en el que al coordinarlo, aprendí yo más que los otros asistentes. Fue una experiencia enriquecedora participar en el entonces innovador método pedagógico que se implantó en este Colegio. La participación de los alumnos es requisito indispensable para su buen aprovechamiento y para el éxito de las tareas que el Colegio se ha fijado. Se destierra el verbalismo educativo que tanto perjuicio ha causado en nuestro país.

Felicito a todos los miembros de la comunidad estudiosa del Colegio de León, precisamente por ser parte de ella, y felicito especialmente a quienes hoy son graduados por esa comunidad y sin desvincularse de la misma, integrarán otras más: la de León, la de Guanajuato, la de México.

La gentileza del señor licenciado Juan Jáuregui Jiménez me hace el honor de conservarme con el inmerecido título de maestro titular de esta institución. Me siento obligado por ello y corresponderé, en lo inmediato, con la franqueza de mis palabras.

Soy un convencido de que cuando se habla en público debe aspirarse a lograr sencillez, claridad y brevedad en la exposición. Fiel a esa convicción empezaré por preguntarme: ¿qué es educar? Creo que educar es formar, adiestrar, criar. Hacer que las personas se desarrollen, avancen, mejoren. Que adquieran aptitud y habilidad en lo físico y en lo moral.

---

[44] Mensaje en la ceremonia de graduación del Colegio de León. El documento que obra en el archivo personal del Lic. Montes García no tiene título específico. Por su contenido y para que los lectores identifiquen el tema al que se refiere, en este libro lo denominamos "¿Qué es educar?", frase tomada del mismo texto.

Educar es más que instruir. Es mucho más que enseñar. Existen individuos instruidos y educados mal, esto es, mal formados. Educar es, sobre todo, criar seres humanos que practiquen principios éticos que permitan y mejoren la convivencia, con sentido de responsabilidad social, conscientes de que cualquier conocimiento fuera de un conglomerado social, pierde la mayor parte de su valor y que es la sociedad la que potencializa el valor del conocer y por lo tanto, quien conozca, contrae automáticamente con su comunidad, obligaciones irrenunciables de solidaridad, de tolerancia, de conducta moral, de conducta eficaz, porque el conocimiento como parte de una buena educación, sólo tiene como destino el servicio a la comunidad. Si todos estuviésemos convencidos de que las profesiones tienen como fin servir a la comunidad, las negligencias, las ineficacias y las perversiones que se dan en el ejercicio profesional tenderían a desaparecer, por lo menos a disminuir, pues un profesional que no asume la responsabilidad de este servicio, sencillamente no merece serlo.

El Colegio de León, como cualquier otra institución educativa universitaria, pretende dotar de buenos profesionales a su comunidad y ponerlos a su servicio, pero está consciente que para ello es indispensable, primero, formar seres humanos íntegros, plenos, responsables.

En el mundo moderno las universidades nacieron también para proporcionar los recursos humanos suficientes que, con su técnica y conocimientos, sostengan y hagan avanzar todas las fuentes de trabajo, particulares y públicas, que los hombres han originado para su bienestar. Fábricas, empresas, instituciones y gobierno, sin recursos humanos capaces, sufrirían daños de difícil reparación.

Como consecuencia de esto, casi insensiblemente, ha nacido la convicción de que los egresados de universidades que obtienen títulos académicos, tienen garantizado un empleo del que obtendrán un nivel de vida digno. Infortunadamente en la actualidad esto no es verdad. Si alguna institución pretendiese garantizar que la totalidad de sus egresados serán empleados, estará engañando. El desempleo o el subempleo es un fenómeno cada vez más arraigado y es mayor entre egresados de las universidades que en otros ámbitos.

Que se exprese esta verdad no debe conducir al desaliento. Soy de los que piensan que las universidades dan a cada uno de sus miembros una mejor posibilidad de vida. Eventualmente mejor posibilidad de vida económica a través de un mejor trabajo. Esto es ocasional, pero siempre otorgan una perspectiva vital mucho más amplia que permite disfrutar de los escasos o de los muchos bienes que se tengan, de manera más plena que quienes no han recibido la educación universitaria y acrecientan, hay que decirlo sin ambages, la riqueza espiritual. La vida universitaria ennoblece el intelecto y permite disfrutes estéticos, éticos y materiales que de otra manera no se logran.

Hay pocas cosas comparables a leer un buen libro, comprendiendo sus significados más profundos; a escuchar una buena música con serenidad de ánimo; observar una pintura o recitar una poesía, así sea en voz baja o en

silencio y hasta disfrutar de un bello atardecer, se logra mejor si se cursaron estudios universitarios.

La educación buena posibilita estos disfrutes y goces que son los verdaderamente propios de los seres humanos.

Por eso creo que invertir dinero, tiempo y esfuerzo en la educación es una obligación del gobierno, de la sociedad y de los particulares. Nunca es un gasto, siempre habrá un fruto recogido superior a lo invertido. Insisto en que sólo la educación posibilita la realización plena y absoluta del ser humano.

Esta es nada más... pero nada menos, la trascendente tarea que se ha echado a cuestas el Colegio de León. Coadyuvar a la educación de la comunidad leonesa.

Quienes hoy se gradúan con su actuar y su lealtad a la comunidad serán muestra del éxito o fracaso de este Colegio. Enorme responsabilidad. Nada más... pero nada menos.

PRESENTE Y FUTURO DEL PODER LEGISLATIVO EN GUANAJUATO

Guanajuato, Gto.
Lunes 13 de septiembre de 2004

Muchos tratadistas sostienen que la división de poderes es un elemento de organización política infaltable en un régimen democrático. Constitucionalmente en el país y en el Estado de Guanajuato el gobierno, para su ejercicio, se divide en tres poderes. Todos los conocemos: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. La idea central que informa este trabajo es que cada uno de los poderes debe estar posibilitado para cumplir las atribuciones constitucionales que le atañen; si esto no ocurre, se lesiona gravemente la vida nacional.

Nos pidieron que opináramos sobre el presente y futuro del Poder Legislativo en Guanajuato. Lo haremos, con las limitaciones de tiempo que este evento impone y bajo la advertencia de que no pretendemos adivinar el futuro por falta de dones proféticos.

Es una idea generalizada por lo que hace a los poderes legislativos mexicanos, el federal y los locales, que su función es por lo menos ineficaz e insuficiente. Voces más radicales dicen que pervertida y casi inexistente. Queramos o no el presente y el futuro del Poder Legislativo de Guanajuato está automáticamente vinculado, diríamos que imbricado, al presente y futuro del Poder Legislativo Federal. Jurídicamente se explica porque todos los poderes legislativos se basan en el artículo 116 de la Constitución Federal. Más tarde o más temprano las condiciones de funcionamiento del federal se reflejan y adoptan en los legislativos locales. Modalidades singulares del equilibrio de fuerzas electorales en cada entidad federativa se traducen también en matices de variación distintiva entre el poder de Guanajuato, los otros poderes legislativos locales y el Legislativo Federal.

Los tratadistas atribuyen en sentido amplio tres tareas a cargo del poder legislativo: la de fiscalización y aprobación de los recursos públicos; la legislativa y la de representación política social. Estas tareas se puntualizan por lo que hace al legislativo federal, principalmente en los artículos 73, 74, 75, 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que las características de su depósito, elección, estructura y funcionamiento se contienen en el Título III, artículos del 49 al 78 de la propia Constitución. Si a alguien le interesa en detalle analizar todas y cada una de las atribuciones del Poder Legislativo Federal, fácilmente puede consultarlas en los artículos citados; nosotros destacaremos sólo la de hacer todas las leyes de vigencia nacional, fracción X del artículo 73, admitir nuevos estados a la Unión Federal,

resolver sobre las leyes de las entidades federativas, autorizar los empréstitos del ejecutivo, levantar y sostener a las instituciones de la Armada de la Nación, fijar contribuciones y, como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la muy importante de aprobar anualmente el presupuesto de egresos y revisar la cuenta pública, también anualmente, con el apoyo técnico, se supone, de la Contaduría Mayor de Hacienda. Mientras que el Senado de la República tiene como facultades exclusivas importantes: analizar la política exterior del gobierno, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el ejecutivo, ratificar nombramientos de Procurador General de la República, ministros y otros altos servidores públicos, autorizar la salida de tropas nacionales fuera del país o el paso de extranjeras por nuestro territorio, así como declarar la desaparición de poderes locales.

Por lo que hace al Poder Legislativo de Guanajuato, sus atribuciones puntualizadas se contienen en el artículo 63 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato[45] y son de destacarse como muy importantes la de expedir y adicionar leyes, declarar gobernador electo, convocar a elecciones extraordinarias, modificar la división política del Estado, aprobar el presupuesto de egresos, expedir las leyes de ingresos del Estado y de los municipios, fiscalizar la cuenta pública con el apoyo técnico, se supone, del Órgano de Fiscalización Superior, fiscalizar también las cuentas públicas municipales y de las entidades y organismos paramunicipales, designar los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, ratificar el nombramiento del Procurador General de Justicia y el de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y otros. La forma de funcionamiento y la estructura del Poder Legislativo se contienen en el Capítulo II, artículos del 41 al 62 de la propia Constitución Política del Estado. Mientras que el artículo 64 se ocupa de las atribuciones de la diputación permanente.

A manera de resumen repetimos lo ya dicho: las atribuciones principales del Poder Legislativo son la de fiscalización y aprobación de los recursos públicos, la legislativa y la de representación política social.

Muchos integrantes de la comunidad nacional y muchos integrantes de la comunidad guanajuatense, los medios de comunicación, la clase política, el clero, cada día más opinante y participativo, los círculos académicos... en fin, casi todos, se preguntan si el Poder Legislativo está cumpliendo o no con sus funciones constitucionales y los politólogos se preguntan algo más ¿puede el poder legislativo, en las condiciones actuales de equilibrio político electoral de las fuerzas representadas en los congresos, cumplir con sus atribuciones? A la primera pregunta frecuentemente se responde, que no, que el Poder Legislativo no cumple con sus atribuciones y las razones que se dan resultan anecdóticas, ciertamente motivadas por comportamientos frívolos de algunos integrantes del poder legislativo, comportamientos que magnifican de manera escandalosa los medios de comunicación. Aunque no nos identificamos ple-

[45] La transcripción de dicho artículo constitucional se encuentra en un capítulo anterior de este libro.

namente con esas opiniones, tenemos que reconocer que en efecto, lo más que puede afirmarse del Poder Legislativo es que cumple, con defectos graves, sus funciones constitucionales y que muchas de ellas no las asume y la impresión pública justificada que causa es la de descuido, indolencia, abuso y demagogia, impresión que agrava la crisis que indudablemente vive el Poder Legislativo y aumenta su desprestigio. Hay encuestas que informan que los ciudadanos confían menos en los diputados que en los policías, lo que resulta trágico, dada la desconfianza que la policía infunde.

Para intentar formarnos un juicio sobre el presente y el futuro del Poder Legislativo veamos el desempeño de sus funciones: está probado históricamente que el Poder Legislativo no es un buen fiscalizador. Durante mucho tiempo, en lo federal y en lo local, aprobaba las cuentas públicas que le mandaba el ejecutivo casi sin analizarlas, confiando en lo que el ejecutivo decía y esa aprobación sólo servía como finiquito que liberaba de responsabilidades administrativas y hasta penales a los administradores de los recursos públicos. De manera tácita y con muchas explicaciones este hecho ha sido reconocido por el propio Poder Legislativo, tanto que se ha creado en Guanajuato y en el país, un Órgano de Fiscalización Superior con autonomía técnica y de gestión, con recursos propios que se encarga de la tarea fiscalizadora. Mi opinión atrevida es que el Poder Legislativo confesó su impotencia para fiscalizar y delegó esta responsabilidad en el Órgano de Fiscalización Superior, aunque formalmente es la Cámara de Diputados Federal y el Congreso Local la que revisa las cuentas públicas. En teoría el que fiscaliza manda y los organismos de fiscalización superior creados, también teóricamente tienen facultades para fiscalizar al propio Poder Legislativo. Por fortuna el legislativo ya no declara aprobadas las cuentas públicas, sino sólo revisadas, lo que evita que esa revisión se interprete como finiquito liberador de responsabilidades. La renuncia tácita del legislativo a fiscalizar contradice la causa histórica que le dio origen; los congresos nacieron para vigilar cómo gastaba el rey los recursos públicos y para fijar su cuantía.

Los poderes legislativos también tienen la responsabilidad de aprobar las leyes de ingresos tanto del país como del Estado y los municipios, esto es, establecer las bases, tasas, objetos y sujetos que deben contribuir a los gastos públicos de la federación, del Distrito Federal, del Estado y municipios. Durante mucho tiempo también la aprobación de las leyes de ingresos fue meramente formal y en términos generales se aprobaba lo que el ejecutivo enviaba como iniciativa. Últimamente se discuten y se analizan con mayor profundidad, pero los errores y defectos en estas leyes de ingresos, muchos de sus aspectos de inconstitucionalidad, prevalecen, pues la incapacidad de los congresos para, técnicamente, resolver estos problemas es notoria y habitualmente se mezclan problemas "políticos" (políticos peyorativamente hablando), con estas discusiones. Vale la pena reflexionar que la aprobación de las leyes de ingresos es fundamental para la marcha de los gobiernos, que los ingresos son la columna vertebral de todo gobierno y sin ellos no se puede funcionar.

Veamos ahora, a grandes rasgos, cómo cumple el Poder Legislativo la función de hacer leyes. La mayoría de las iniciativas que se han discutido y aprobado y las que se discuten y aprueban al presente, son propuestas por el Poder Ejecutivo, algunas, como las leyes de ingresos, porque está obligado a hacerlo y otras porque es el poder que conoce mejor o debería conocer mejor el funcionamiento y problemas de la realidad nacional, puesto que está en contacto permanente con ella a través de sus diversas dependencias, secretarías y procuraduría. También es el poder con mayor disposición presupuestal y mejores apoyos humanos, científicos y técnicos para elaborar los proyectos de ley. Esto es muy explicable, sobre todo si consideramos que la fuente original de la norma jurídica es la realidad social y su problemática, que conoce mejor, por sus recursos, el ejecutivo.

Las reglas que aplica el Poder Legislativo para su funcionamiento lo hacen acartonado, tortuoso y difícil, todavía se obliga a que los congresos sigan fórmulas rituales, sobre todo en Guanajuato. Pasar lista de asistencia, leer las iniciativas dos veces, pasarlas a comisiones, discutirlas en ellas, formular dictámenes y luego pasarlas a Pleno para volverlas a discutir y finalmente ser votadas. En ocasiones estos trámites engorrosos no se cumplen en el fondo por la falta de capacidad personal de los integrantes del Congreso, por lo menos en su mayoría. Un hacedor de leyes no se improvisa ni se puede hacer de la noche a la mañana y quienes no tienen cocimiento del Derecho difícilmente podrán elaborar la expresión jurídica más alta en la que se manifiesta el Derecho: la ley.

Es usual caer en el error de medir la eficacia de un Congreso por el número de leyes que aprueba. En mi opinión este criterio conduce a aberraciones, puesto que sería mejor Congreso el que más leyes aprobase y yo creo que es lo contrario; la maraña jurídica que padecemos tiene que despejarse y enriquecer el orden jurídico, es eliminar tanta ley ociosa e inútil que está vigente. Esta tarea se enuncia fácilmente pero es difícil de realizar sin una base de conocimiento jurídico-científico. Por lo que hace a la tarea de hacer las leyes, concluyamos: los poderes legislativos la cumplen muy defectuosamente y la consecuencia de estas carencias la padece la gente, la comunidad nacional, la comunidad estatal. Si se midiese la eficacia del Poder Legislativo por la calidad de las leyes que produce, la calificación sería reprobatoria.

Infortunadamente es frecuente que las leyes aprobadas por el legislativo resulten contrarias a la Constitución, sean inconstitucionales, sobre todo si se trata de leyes fiscales. Nos unimos a las voces que opinan que para evitar estas violaciones a la Constitución debe crearse un consejo de probos y capaces juristas, apartidistas, dedicados exclusivamente a vigilar que las leyes aprobadas no sean inconstitucionales. Vale la pena discutir a profundidad esta idea y llegar a determinar si este consejo vigilante de la constitucionalidad de las leyes debe formar parte del Poder Judicial o del propio Poder Legislativo y si sus decisiones serían vinculatorias para el legislativo o solo orientadoras.

Parece ser que la función que mejor cumple el Poder Legislativo es la de representación política social. En efecto, cada Congreso se constituye en un foro de resonancia en que los diputados, como voceros de sus respectivos partidos políticos o como independientes, denuncian muchos problemas generales. Su fuerza de crítica es considerable y la resonancia en los medios de comunicación también. Muchos dirán que tiene una gran capacidad de escándalo, y comportamientos frívolos y hasta majaderos que todos conocemos, magnifican esa capacidad de escándalo. Se ha confundido en ocasiones la protesta enérgica y los recursos válidos para que la oposición se haga notar ante un gobierno que la ignora, con el ataque avieso, la agresión y la falta de respeto al Poder Ejecutivo. Es normal y comprensible que en ocasiones un debate encendido entre pares, los legisladores, se acalore y se llegue a expresiones descorteses, pero la relación entre poderes tiene que ser serena, prudente y ponderada pues, si esto no ocurre, se daña al sistema en su esencia. En abuso de la función de representación política hay muchos casos en que los poderes legislativos rebasan los límites legales de su actuación y crean las llamadas comisiones investigadoras, que solo tienen fundamento legal cuando se trata de revisar a organismos públicos o entes del Poder Ejecutivo, pero carecen de él cuando quieren mezclarse en la investigación de crímenes políticos; pues según nuestro sistema jurídico, esta función corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Es más, los particulares no pueden ser citados legalmente ante los congresos, sus cámaras o sus comisiones. Es frecuente también que supuestamente para resolver problemas sociales notorios el Congreso, o cualquiera de sus cámaras proponga "acuerdos" que se discuten con gran virulencia en tribuna, en muchas ocasiones se aprueban y nadie cumple porque para nadie son vinculatorios. Si por un lado el legislativo rebasa sus atribuciones por otros muchos se queda corto.

Debemos preguntarnos con seriedad a qué se debe este actuar del Congreso. ¿Será que todos sus integrantes son incapaces, indolentes, corruptos, ignorantes y de mala fe? Pensamos que no, no sólo porque conocemos a honorabilísimos mexicanos que han formado y forman parte del Congreso Federal y del Congreso Local, sino porque no es frecuente que un ser humano se proponga hacer el mal. Incluso cuando lo realiza lo hace porque considera que eso representa su bien. Además en nuestra historia destacan talentos intelectuales valiosísimos que han formado parte de los congresos. Se pueden mencionar muchísimos: Christlieb Ibarrola, Lombardo Toledano, José Rivera Pérez Campos, Antonio Torres Gómez, Daniel Chowell, José Luis Lamadrid y otros. Entonces, qué ocurre, ¿por qué los poderes legislativos son ineficaces? Pensamos que hay fallas estructurales en la integración de los congresos y en su funcionamiento que hacen imposible su eficacia. Analicemos las que a nuestro juicio sobresalen:

a).- De acuerdo con nuestras leyes sólo los partidos políticos pueden registrar candidatos para ocupar cargos de elección directa, como diputados o senadores, y cuando los partidos políticos escogen los candidatos que

van a postular, no tienen como prioridad que las personas seleccionadas posean capacidades personales para el desempeño del cargo. Los partidos políticos lo que buscan es que sus candidatos sean populares y al presente, que tengan recursos económicos suficientes para sostener las cada vez más costosas campañas y coadyuven a ganar la elección. Arriesgo una suposición, si un partido político enfrenta la opción de apoyar a un gran jurista o a un líder social con arrastre apoyará al segundo, aunque de Derecho sepa poco o no sepa nada. Este es un vicio alarmante que las dirigencias nacionales de los partidos deben intentar corregir, sin caer en el extremo de que forzosa y necesariamente para ser diputado o senador se requiera ser abogado, porque también afirmo que un congreso integrado sólo por abogados sería francamente espeluznante. No, lo que señalo debe entenderse en el sentido de que los partidos políticos deben preocuparse porque en cada congreso haya representantes sociales auténticos, pero también personas con capacidades suficientes para poder desempeñar o supervisar el cumplimiento de las atribuciones que resultan obligatorias para los congresos, como la fiscalizadora y la legislativa. La vía electoral de la representación proporcional, se creó fundamentalmente para evitar el desperdicio de votos no triunfadores, pero también para permitir que los partidos seleccionasen candidatos con capacidades para desempeñar las funciones constitucionales necesarias e indispensables de los congresos. Sin embargo, reconozco que la mejor selección de candidatos capaces por sí mismos no bastaría para redimir a los congresos de su tradicional postración.

b).- Otra medida indispensable para que los congresos realicen sus funciones constitucionales será fortalecer su cuerpo orgánico de apoyo. Resulta indispensable que profesionistas honestos, preparados, apartidistas, sin intereses electorales o vedándoles las posibilidades electorales, formen parte de los equipos de trabajo de los congresos. Deben estar bien remunerados. Debe existir una carrera de servidores públicos de los poderes legislativos. Abogados, contadores, economistas, investigadores, científicos y especialistas en otras disciplinas, tendrán que trabajar al servicio de los poderes legislativos si queremos que sean eficaces. Tal vez no sea necesario que ocupen empleos de planta, pero sí que los congresos cuenten con recursos para encargar a verdaderos especialistas la elaboración de proyectos o dictámenes adecuados y que deveras resuelvan los problemas sociales y procuren la armonía de nuestras comunidades. Si se crean equipos técnicos de apoyo para el trabajo congresional y los diputados poseen criterio suficiente y preocupación social bastante para apoyar las soluciones adecuadas que estos equipos les planteen, se estará avanzando en facilitar el adecuado funcionamiento de los congresos y el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.

c).- Reitero mi sugerencia de que para mejorar las leyes y cuidar su constitucionalidad, se creen consejos encargados de esta vigilancia.

d).- A mi juicio, al presente, el Congreso del Estado y el Congreso Federal tienen una estructura anacrónica. Su diseño obedece a momentos políticos de la nación superados o en proceso de superación. Los congresos mexicanos cumplieron formalmente sus atribuciones cuando la mayoría de sus integrantes militaban en el mismo partido político en el que militaba el titular del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, el Congreso apoyaba al Poder Ejecutivo. Ya sabemos que esto creó circunstancias no deseables ni ideales en una auténtica democracia representativa, pero tenemos que afirmar también que si los congresos no desempeñan, no porque no quieran, sino porque no pueden, sus atribuciones constitucionales, el país se frena, todo se paraliza, el Ejecutivo no funciona o funciona con torpeza, el necesario equilibrio entre poderes no se da.

Es conveniente tener congresos democráticos, pero también es necesario que cumplan sus funciones públicas, si no lo hacen, por democráticos que sean, son inútiles para el país.

Aclaremos un poco lo que estamos diciendo: hubo un momento en nuestra realidad que las fuerzas políticas estaban desequilibradas y había una mayoría clara que dominaba todo. Al presente, en la república, los equilibrios políticos son evidentes. Existen tres partidos, PRI, PAN y PRD que cuentan con el apoyo de gran número de electores, de tal manera que en el Congreso Federal nadie es mayoría absoluta y para que el congreso pueda tomar decisiones importantes es necesario que los partidos pacten mecanismos y formas de asociación, así sean transitorias y para casos concretos. El trabajo de crear estas coaliciones gasta mucho tiempo y dada la no reelección de los diputados y senadores, hay ocasiones que el tiempo no es suficiente para lograr acuerdos camerales, además de que al ver la proximidad del final de un mandato muchos legisladores caen en la tentación de dejar el problema pendiente para la siguiente legislatura. A todos los mexicanos nos conviene que en los congresos haya representaciones de todas las corrientes políticas sociales reales y que se refleje en el congreso el mismo equilibrio que se da en la sociedad. No es válido decir que los legisladores no se ponen de acuerdo porque no quieren o porque no saben, la verdad es que no pueden pues tienen formación personal diferente, práctica política y de gobierno distinta, diversas ideologías, variadas lealtades partidarias; esas diferencias impiden los acuerdos cuando de verdad existen. Sostengo que nuestros legisladores en ocasiones no se ponen de acuerdo porque les es imposible o porque va contra su convicción y dignidad personales y en la estructura de los congresos tienen que tomarse en cuenta estas circunstancias para que el congreso, a pesar de ellas, cumpla sus indispensables atribuciones. Si no se modifica la estructura de los congresos, continuaremos en un grado alto padeciendo congresos paralizados que no resuelven sino que difieren. Se darán estos congresos siempre y que se mejore el equilibrio y la

pluralidad representativa de los mismos, ya que es un valor apreciable, por lo que hay que buscar la supresión de las consecuencias no deseadas que tal valor produce.

Propongo que se abra un gran debate nacional para discutir si los congresos mexicanos deben avanzar hacia el parlamentarismo auténtico y si el gobierno en su administración debe organizarse con un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno, para que el primero se encargue de la representación internacional del Estado Mexicano, de comandar las fuerzas armadas y otras tareas, pero que sea el Jefe de Gobierno el que afronte el trabajo diario, cotidiano, de organizar al país en su interior, los problemas de seguridad, los económicos, los del campo, los de las ciudades y que mientras el Jefe de Estado sea resultado de una elección popular directa, el Jefe de Gobierno sea designado por la mayoría del congreso, con lo que automáticamente se lograría que siempre el Jefe de Gobierno tenga el apoyo mayoritario del congreso. Debe reglamentarse también que cuando como producto de una elección o como producto de la modificación de los acuerdos y alianzas entre los partidos se modificase la mayoría del congreso se cambie también al Jefe de Gobierno y la nueva mayoría lo designe.

Si a nivel nacional se logran estos cambios deberán establecerse otros similares a nivel local. Lo importante es que se posibilite que quien gobierna tenga siempre en el congreso una mayoría que no le obstaculice su responsabilidad de gobernar, sin que sea incondicional o irresponsable.

Estas proposiciones no son originales. Muchos regímenes parlamentarios funcionan así y en algunos casos, Italia, se llega a momentos de anarquía e inestabilidad de los gobiernos. Para evitarlos y no estimular el cambio frecuente de las mayorías congresionales, es necesario establecer una consecuencia para aquel congreso que caprichosamente llegue a modificar su mayoría. Si un congreso modifica la integración de su mayoría, debe disolverse y convocar a una nueva elección.

En el Estado de Guanajuato todavía no vivimos la realidad que en el Congreso Federal ya se vive, aquí la mayoría de los diputados milita en el mismo partido político que el Gobernador del Estado, por lo que éste tiene su apoyo. En el futuro inmediato, por la falta de presencia y actividad ordenada de todos los partidos de oposición local, no vemos el crecimiento de los electores de los diversos oposicionistas y el equilibrio electoral y por lo tanto el congresional, están lejanos. Objetivamente consideramos que el partido en el gobierno seguirá por un tiempo ostentando el Poder Ejecutivo y la mayoría de la Cámara de Diputados. Además en Guanajuato se han tomado medidas que posibilitarán el cumplimiento de las principales atribuciones del congreso aunque no hubiese ninguna mayoría partidaria, tales como la reconducción presupuestal estatal y municipal, con la sanción de que mientras el congreso no apruebe los presupuestos de ingresos y la Ley Estatal de Egresos, no se podrá ocupar de ningún otro tema. En esto puede avanzarse, pero creo que Guanajuato tiene por un tiempo garantizado el funcionamiento, así sea formal, de su congreso.

No se me escapa lo discutible de mis opiniones y tampoco me es ajena una leve intención provocadora.

Lunes 13/Septiembre/2004
17:00 horas

LISTA DE DIPUTADOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES
CON LA PROFESIÓN DE ABOGADO EN DIVERSAS LEGISLATURAS

XXVI LEGISLATURA. P. O. 24 DE JUNIO DE 1917.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
II	LIC. JOSE M. ORTEGA.	
VIII	LIC. ENRIQUE COLUNGA.	
IX	LIC. CATARINO JUÁREZ.	

XXVII LEGISLATURA. P. O. 3 DE OCTUBRE DE 1918.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

XXVIII LEGISLATURA. P. O. 2 DE SEPTIEMBRE DE 1920.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
IV	LIC. JUAN R. DOMÍNGUEZ.	
XII	LIC. CRESCENCIANO AGUILERA.	

XXIX LEGISLATURA. P. O. 24 DE SEPTIEMBRE DE 1922.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
IV	LIC. JUAN R. DOMÍNGUEZ.	
XII	LIC. CRESCENCIANO AGUILERA.	

XXX LEGISLATURA. P. O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 1924.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
II	LIC. ENRIQUE ROMERO C.	

XXXI LEGISLATURA. P. O. 16 DE SEPTIEMBRE DE 1926.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
IV	LIC. ENRIQUE ROMERO C.	

XXXII LEGISLATURA. P. O. 21 DE OCTUBRE DE 1928.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
VIII	LIC. MANUEL MENDOZA ALBARRAN.	

XXXIII LEGISLATURA. P. O. 18 DE SEPTIEMBRE DE 1930.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

II	LIC. LUIS I RODRÍGUEZ.	
VIII	LIC. MANUEL MENDOZA ALBARRAN.	

XXXIV LEGISLATURA. P. O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 1932.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

XXXV LEGISLATURA. P. O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 1934.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

XXXV LEGISLATURA. P. O. 11 DE ABRIL DE 1937.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

XXXVI LEGISLATURA. P. O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1937.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. ENRIQUE ROMERO COURTADE.	
III	LIC. RAFAEL RANGEL.	
V	LIC. ERNESTO GALLARDO.	
IX	LIC. LEOBINO ZAVALA.	
XI	LIC. ANGEL ZAMORA DE LA FUENTE.	

XXXVII LEGISLATURA. P. O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1939.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

XXXVIII LEGISLATURA. P. O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 1941.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
VII	LIC. RAFAEL MURILLO MORENO.	
VIII	LIC. J. IGNACIO OLMOS.	

XXXIX LEGISLATURA. P. O. 24 DE SEPTIEMBRE DE 1944.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. CARLOS HERRERA MARMOLEJO.	LIC. ENRIQUE ARIZMENDI L.
II	LIC. JOSE PANTOJA GALLARDO.	
V	LIC. FERNANDO GUTIERREZ ORTEGA.	
VIII	LIC. BENJAMÍN OLALDE B.	

XL LEGISLATURA. P. O. 18 DE SEPTIEMBRE DE 1947.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. ARMANDO OLIVARES CARRILLO.	
VIII	LIC. LUIS PASTOR YÁNEZ PEREZ.	

XLI LEGISLATURA. P. O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1950.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

II	LIC. ENRIQUE GOMEZ GUERRA.	LIC. J. JESÚS ECHEVERRIA JR.
IV	LIC. FAUSTO ALZATI.	
VILI	C. MATIAS HERNÁNDEZ TAMAYO.	
XILI	C. BERNARDINO AGUILAR M.	

XLII LEGISLATURA. P. O. 4 DE OCTUBRE DE 1953.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. ANTONIO TORRES GOMEZ.	
IV	LIC. ANTONIO LOMELI GARDUÑO.	

XLIII LEGISLATURA. P. O. 11 DE OCTUBRE DE 1956.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. PEDRO F. ORTIZ.	
IV	LIC. JOSE CAMPOS ORTIZ.	
VIII	LIC. LUIS SOLIS MUJICA.	

XLIV LEGISLATURA. P. O. 8 DE OCTUBRE DE 1959.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. MARGARITO SÁNCHEZ LIRA.	
II	LIC. RAMON RAMIREZ MARTINEZ.	
IV	LIC. MARIO F. VARGAS.	

XLV LEGISLATURA. P. O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1962.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. ALBERTO CORTES FERNÁNDEZ.	
VI	LIC. SALVADOR FLORES MERCADO.	

XLVI LEGISLATURA. P. O. 24 DE OCTUBRE DE 1965.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	**LIC. MIGUEL MONTES GARCIA.**	
II	LIC. ARTURO VALDEZ SÁNCHEZ.	
VI	LIC. VICENTE MARTINEZ SANTIBÁÑEZ.	
VIII	LIC. SACRAMENTO SILVA GARCIA.	

XLVII LEGISLATURA. P. O. 24 DE OCTUBRE DE 1968.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. IGNACIO FREYRE L.	
IV	LIC. RUBEN AVILA MAGAÑA.	
V	LIC. DELIA PONCE LOPEZ.	
XII	LIC. JOSE AZANZA JIMÉNEZ.	

XLVIII LEGISLATURA. P. O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 1971.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

III	LIC. AGUSTÍN GONZALEZ CARRILLO.	
IX	LIC. ANDRES SOLACHE VILLAGOMEZ.	
XI	LIC. FRANCISCO GONZALEZ VELOZ.	

XLIX LEGISLATURA. P. O. 16 DE SEPTIEMBRE DE 1973.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. ELISA LOPEZ LUNA POLO.	
II	LIC. AMADOR RODRÍGUEZ LEYARISTI.	LIC. ROBERTO PLASCENCIA
VI	LIC. ARTURO ZAVALA.	
IX	LIC. ERNESTO GARCIA DE ALBA.	
X	LIC. CARLOS VILLALOBOS.	
XII	LIC. CLAUDIO ORTIZ OLVERA.	

L LEGISLATURA. P. O. 14 DE OCTUBRE DE 1976.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
VI	LIC. JOSE LUIS VAZQUEZ CAMARENA.	
IX	LIC. ARMANDO TAMAYO PEREZ.	
XII	LIC. FILIBERTO NAVARRETE ROSAS.	
XIV	LIC. SILVESTRE BAUTISTA LOPEZ.	LIC. MANUEL MARTINEZ M.
XV	LIC. JOSE ANGEL GAMBA VAZQUEZ.	LIC. JULIO GONZALEZ HDEZ.

LI LEGISLATURA.
DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1979 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1982.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. J. IGNACIO REYES RETANA.	
III	LIC. RAUL ROBLES ALVAREZ.	
VI	LIC. RUBEN AVILA MAGAÑA.	
XIII	LIC. OSCAR CORRAL PARRA.	LIC. BALDOMERO RAMIREZ E.
XIV	LIC. GUILLERMO NIETO ALMEIDA.	
XVI	**LIC. MIGUEL MONTES GARCIA.**	LIC. MIGUEL A. SERRANO O.

PLURINOMINALES:
LIC. PABLO ALVAREZ PADILLA.

LII LEGISLATURA. DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1982
AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. LUIS MONEM STEFANO.	
IV	LIC. MARCOS F. AGUAYO DURAN.	LIC. EDUARDO CASTRO B.
V	LIC. MA. DEL ROSARIO LOPEZ CARMONA.	
X	LIC. TOMAS BUSTOS MUÑOZ.	
XI	LIC. ALFONSO VALDEZ CONTRERAS.	
XV	LIC. GUILLERMO NIETO ALMEIDA.	
XVI	LIC. MANUEL HERRERA MORENO.	
XVIII	LIC. JOSE AZANZA JIMÉNEZ.	

PLURINOMINALES:
LIC. ANTONIO OBREGÓN PADILLA.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA.
DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1985 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1988.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
II	LIC. RICARDO A. LING ALTAMIRANO.	
IX	LIC. JOSE HUERTA ABOYTES.	
X	LIC. EZEQUIEL CASTELLANOS DURAN.	
XI	LIC. J. GUADALUPE ENRIQUEZ M.	
XV	LIC. CARLOS VAZQUEZ DIAZ.	LIC. VICENTE MTZ . SANTIBÁÑEZ.
XVI	LIC. LUIS FELIPE SÁNCHEZ HDEZ.	LIC. SERGIO VELÁSQUEZ MTZ.

PLURINOMINALES:
LIC. ISRAEL GONZALEZ ARREGUIN.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIV LEGISLATURA.
DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1988 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1991.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. NESTOR R. LUNA H.	LIC. ALFREDO MOSQUEDA V.
VII	LIC. JOSE ABEN AMAR GONZALEZ.	
IX	LIC. SERVIO PADILLA DEL TORO.	
XV	LIC. JOSE ANTONIO RAMIREZ S.	LIC. BLANCA OJEDA MTZ.
XVI	LIC. JUAN I. TORRES LANDA.	

PLURINOMINALES:
LIC. ANTONIO OBREGÓN PADILLA.
LIC. MA. DE LOURDES LOZANO.
LIC. ROBERTO GARZA LOPEZ.
LIC. RODOLFO ARTEAGA PAREDES.
LIC. RODOLFO REA AVILA.
LIC. JOSE MA. SEPULVEDA M.
LIC. MARCELA NIETO MACIAS.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LV LEGISLATURA.
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1991 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1994.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
I	LIC. RAQUEL RODRÍGUEZ AGUILAR.	
III	LIC. JOSE NABOR CENTENO CASTRO.	
IV	LIC. JUAN MANUEL OLIVA RAMIREZ.	
VI	LIC. CELESTE GOMEZ FRAGOSO.	LIC. JUAN JOSE SIERRA.
X	LIC. AGUSTÍN MARMOLEJO VALLE.	
XI	LIC. HECTOR FRANCIA MARTINEZ.	
XVI	LIC. JOSE RUBEN TORRES ARTEAGA.	

PLURINOMINALES:
LIC. JORGE ENRIQUE DAVILA JUÁREZ.
LIC. EUSEBIO MORENO MUÑOZ.
LIC. CARLOS FRANCISCO ARCE MACIAS.
LIC. CARLOS CHAURAND ARZATE.
LIC. FCO. ALEJANDRO LARA R.
LIC. ALEJANDRO RANGEL S.
LIC. DELIA PONCE LOPEZ.
LIC. JUAN CARLOS OLIVEROS.
LIC. LUIS MANUEL JIMÉNEZ LEMUS.
LIC. ANTONIO GONZALEZ A.
LIC. FRANCISCO J. ALCARAZ DE LA ROSA.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LVI LEGISLATURA.
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1994 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

PLURINOMINALES:
LIC. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA.
LIC. JUAN MIGUEL ALCANTARA SORIA.
LIC. CONSUELO CAMARENA G.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LVII LEGISLATURA.
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2000.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
VIII	LIC. ARNULFO VAZQUEZ NIETO.	
XVIII	LIC. RUBEN GARCIA FARIAS.	

PLURINOMINALES:
LIC. CARLOS CHAURAND ARZATE.
LIC. JOSE ABEN AMAR GONZALEZ HERRERA.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LVIII LEGISLATURA.
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2000 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE

PLURINOMINALES:
LIC. RICARDO ALFREDO LING ALTAMIRANO.
LIC. MIGUEL MONTES GARCIA.
LIC. MARTÍN EUGENIO ORTIZ GARCIA.
LIC. FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA.
LIC. LORENZO CHAVEZ ZAVALA.
LIC. ANA FAVIOLA RIONDA ORNELAS.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA.
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

DISTRITO	PROPIETARIO	SUPLENTE
	LIC. J. NABOR CENTENO CASTRO.	
	LIC. GABINO CARBAJO ZÚÑIGA.	
	LIC. MARTÍN ODILON CABRERA CANO.	

PLURINOMINALES:
LIC. JOSE HUERTA ABOYTES.

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA "LA VIDA NO VALE NADA"

Del C.P. Eduardo Franco Díaz
Guanajuato, Gto.
6 de octubre de 2008

Señor Doctor Arturo Lara López,
Rector General de la Universidad de Guanajuato.
Señor Contador Eduardo Franco Díaz.
Señor Ingeniero Jorge Videgaray Verdad.
Señoras y señores:

Es un acierto que la Universidad de Guanajuato haya decidido organizar un acto de presentación de la novela "La vida no vale nada", escrita por el Contador Eduardo Franco Díaz, por muchas razones, y por muchas causas, vinculado a esta Casa de Estudios.

Es una distinción, que gustosamente acepté, que se me haya pedido participar en la presentación de esta obra. Con absoluta sinceridad expreso que estoy muy lejos de estar o sentirme capacitado para hacer un juicio literario sobre ésta o cualquier otra novela. Soy un simple aficionado a la lectura. Desconozco cualquier técnica para escribir o juzgar el valor de una obra escrita. Tampoco sé de las actuales tendencias de la narrativa. Mi gusto al aceptar, se originó en que se me brinda la oportunidad de expresar públicamente algunos juicios sobre el autor de la novela, juicios que normalmente se inhiben por el pudor de una amistad añeja, y simplemente decir lo que a mí me pareció esta novela.

Eduardo Franco es un hombre de éxito. Como algunos de nosotros, es guanajuatense por decisión, por residencia, por formación, por desarrollo personal y porque llevamos el amor a Guanajuato como parte constitutiva de nuestra esencia. Creo que el éxito de Lalo en todo aquello a lo que se ha dedicado, se origina en su tenacidad, en su persistente vocación de hacer las cosas bien y en su voluntad de lograr lo que se propone. Estudió haciendo un gran esfuerzo personal y superando circunstancias de escasez económica; ejerció y ejerce su vocación de Contador con conocimiento y eficiencia. En su carrera pública fue Contador Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, Secretario de esta Universidad y candidato a Presidente Municipal de Guanajuato, en unas elecciones que perdió y en las que asumió una actitud honesta. En un tiempo en que la simulación de triunfos no obtenidos era casi un mandato

patriótico, Lalo reconoció su derrota y públicamente declaró que tenía unos cuantos meses de ser candidato y toda la vida de ser gente honrada, optó por seguirlo siendo y se dedicó, a partir de ese momento, a su profesión en la que probó capacidad de organización e iniciativa emprendedora, factores que lo hicieron un hombre de negocios exitoso.

Nunca ha dejado de practicar sus aficiones artísticas. Quienes lo conocemos de toda la vida sabemos de su vena bohemia, de su virtuosismo como guitarrista, de su don para componer letra y música de muchas y muy hermosas canciones, díganlo si no, la llamada "Eres grande" o la triunfadora "Cachito de tierra".

Para quitarle un poco de dogmatismo a mis afirmaciones, leeré algunos párrafos de estas composiciones, cito de "Eres grande":

"Tienes el ritmo del viento,
la frescura del amanecer,
eres grande porque eres mi tiempo,
eres grande, eres mi querer,
eres grande porque eres un sueño,
eres grande porque eres mujer".

"Es tu risa campana de plata
que cada mañana despierta a la vida;
son tus ojos calor de fogata
que tibia la noche de sensualidad;
son tus manos palomas de seda que vuelan
caricias;
eres grande, como el gran amor que viniste
a inspirar,
eres grande, como aquellas tardes,
tardes tan lejanas de mi soledad".

Cito de "Cachito de tierra", naturalmente dedicada a Guanajuato:

Eres cachito de tierra cuna donde yo nací,
y es aquí mismo, en tu sierra, donde yo
quiero vivir;
es tu cielo tan azul y tan bondadoso tu aire,
que sólo el que te ha vivido sabe qué dicen
tus tardes,
sabe comprender las cuitas de tus bellos
callejones,
sabe cantarles canciones a tus muchachas
bonitas,
sabe caminar tus calles,
sabe querer con locura,
enamorar con ternura como yo me
enamoré".
"¡Ay! Cómo no he de quererte si me diste tu
calor,

si cuando yo fui estudiante, tuve mi primer
amor.
Eres cachito de tierra, cuna donde yo nací
y es aquí mismo, en tu sierra, donde yo
quiero morir".

Ahora les pido que me crean que la música, repito, también hecha por Eduardo Franco, es muy buena. Sería excesivo que siguiera yo quitando dogmatismos y que les pusiera el disco en una reproductora o la tarareara con voz del Tirano Chávez.

Recuerdo también que en otra de sus incursiones a la vida artística, Eduardo Franco le puso música a varios textos del original poeta sanmiguelense Margarito Ledesma, y que esa musicalización la presentó en el Teatro Principal y en otros sitios.

Lalo nunca ha dejado de escribir. Durante ya muchos años sus columnas de comentarios políticos y diversos acontecimientos son infaltables y se han publicado en varios periódicos del Estado.

Ahora afronta el reto de escribir una novela, la que, me pareció, tiene una trama sencilla; una narración ágil, con descripción exacta de sitios que todos amamos y nos traen a la memoria momentos vividos con intensidad, muchos agradables y otros no tanto. El perfil bien diseñado de los personajes hace que los recordemos después de la lectura, identificándolos sin equívocos ni confusiones. El entreveramiento de personalidades de la vida real con quienes el autor y nosotros convivimos diariamente, a cada una de los cuales, con gran tino, Franco les hace un reconocimiento en este libro, con los personajes ficticios, protagonistas de la novela y también la cita de lugares existentes, ciudades, plazas, restaurantes, cafés, hace que la novela gane credibilidad y que sus personajes ficticios, con esta mezcla bien lograda, queden inmersos en nuestra cotidiana realidad.

Después de leer la novela y de asistir con Luis y Luisa Palacios a los Entremeses Cervantinos, reafirmaremos nuestro conocimiento de que don Eugenio Trueba Olivares, don Armando Olivares Carrillo y don Enrique Ruelas, están permanentemente vinculados al Teatro Universitario. Seguramente al llegar al Café de la Tasca, buscaremos a Gaby y a Salvador y en el Rincón Gaucho Ricardo Fernández Camarena y Jorge Videgaray nos saludarán desde una mesa en la que tal vez no estén.

Mezclar personajes reales con los ficticios es una técnica que necesariamente capta la atención del lector, lo atrapa y la lectura se continúa para averiguar a qué otras personas reales mencionará Eduardo Franco en su libro; sentiremos la curiosidad de saber si en sus menciones falta alguno de aquellos a quienes Lalo aprecia. No deja de ser audaz que Eduardo Franco Díaz haya afrontado el riesgo de olvidar a alguien allegado a su afecto. Tal vez algunos hasta le reclamen.

En las tradicionales callejoneadas guanajuatenses buscaremos a María Luisa Monasterio y confiadamente le diremos Malú. Cuando veamos un automóvil azul cobalto veremos al volante a Nicolás Llanes Villanueva, agente investigador libre, conocido muy apropiadamente como "Nauyaca".

Habrá quienes opinen que la novela es violenta, así hubiese parecido hace algunos años, pero en los momentos que vivimos, la violencia del libro parece real y sólo un pálido reflejo de la que todos los días confrontamos en el país y en nuestro Estado. No faltará quien esté en desacuerdo con el destino de María Luisa Monasterio, lo que simplemente, a juicio de ese quien, debió desestimar las atenciones de Armando Llanes Villanueva, hijo del doctor Armando Llanes y de la señora Trinidad Villanueva, con destinos tan poco envidiables, y con ello provocar en Armando Jr. la misma reacción que tuvo en el libro… Pero, parafraseando a Luis Cabrera, el desarrollo de la novela es el desarrollo de la novela.

Tenemos que preguntarnos y adivinar qué se propuso Eduardo Franco Díaz al hacer esta novela, aunque nos equivoquemos en la respuesta. Conociéndolo como lo conocemos, pensamos que además de enfrentar un reto personal y demostrarse a sí mismo que tiene capacidad para ser novelista, con su novela no desea dar lecciones de ética ni proponer ejemplos a seguir; seguramente en sus levantamientos tempranos para escribir, yo diría madrugadores, Lalo llegó a la conclusión que no tenía derecho de dar lecciones morales y se propuso simplemente divertir y alentar la lectura de quienes por su juventud o sus ocupaciones, o ambas cosas, no han encontrado placer ni disfrute en leer libros. Desde el título de la obra se nota la finalidad de popularizar, en el buen sentido de la expresión, el hábito de leer. Parece una finalidad modesta, pero en el fondo es de gran valía, pues si con su libro Eduardo Franco Díaz logra que algunos, pocos o muchos, se den de alta en el batallón de lectores, coadyuvará a cumplir una de las finalidades que también tiene la Universidad: fomentar la cultura.

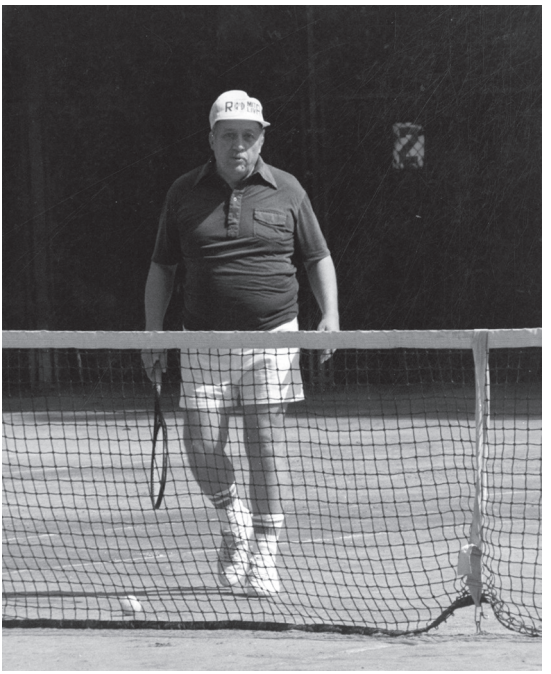
Ello no significa que las preocupaciones intelectuales de Franco, sean frívolas o ligeras. No. Si es verdad que los autores se retratan, voluntaria o involuntariamente, en su obra, en esta novela notamos que los personajes formulan frases e ideas que reflejan auténticas y válidas preocupaciones sociales. En otras partes del libro se sueltan como al desgaire, dudas dolorosas sobre temas tan trascendentes como la existencia de Dios.

En resumen: la novela gusta, por lo menos a mí me gustó. Sus personajes actúan con racionalidad y lógica. Despiertan simpatías y antipatías. Se apoderan del lector que después los recuerda. El libro –como se acostumbra decir- se deja leer.

Gracias Lalo, por proporcionarnos momentos amables y gratos. Tu obra merece, seguramente los tendrá, comentarios más amplios y enterados que los míos, pero no hechos con tanto afecto.

Aficiones recreativas















Los viajes








XD-22-LB
P.175.K

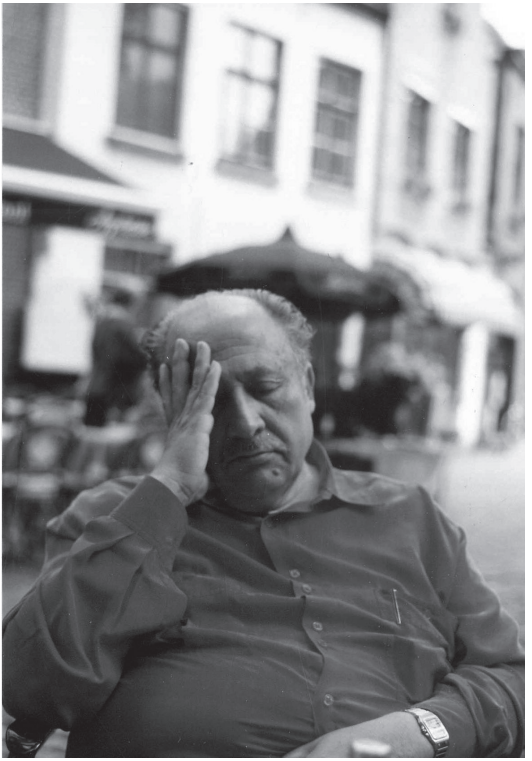







CABO DA ROCA
AQUI...
ONDE A TERRA SE ACABA
E O MAR COMEÇA.
(CAMÕES)
PONTA MAIS OCIDENTAL DO
CONTINENTE EUROPEU
CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
1979
LATITUDE 38° 47' NORTE
LONGITUDE 9° 30' OESTE
ALTITUDE 140m ACIMA DO NIVEL
MEDIO DAS AGUAS

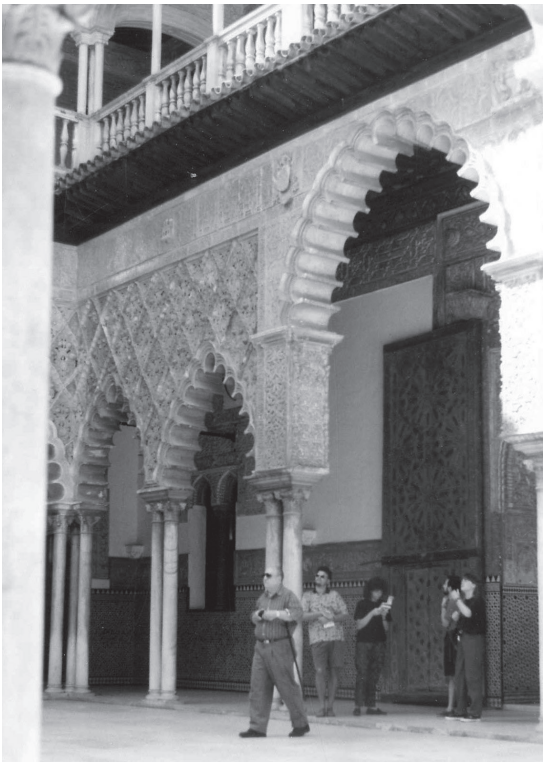


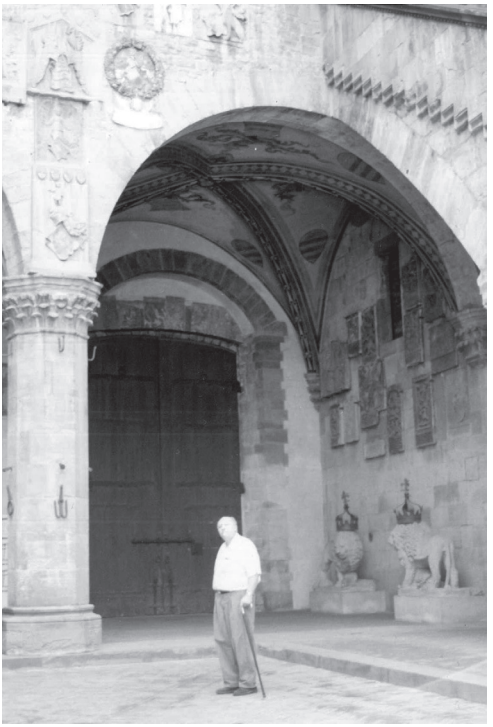






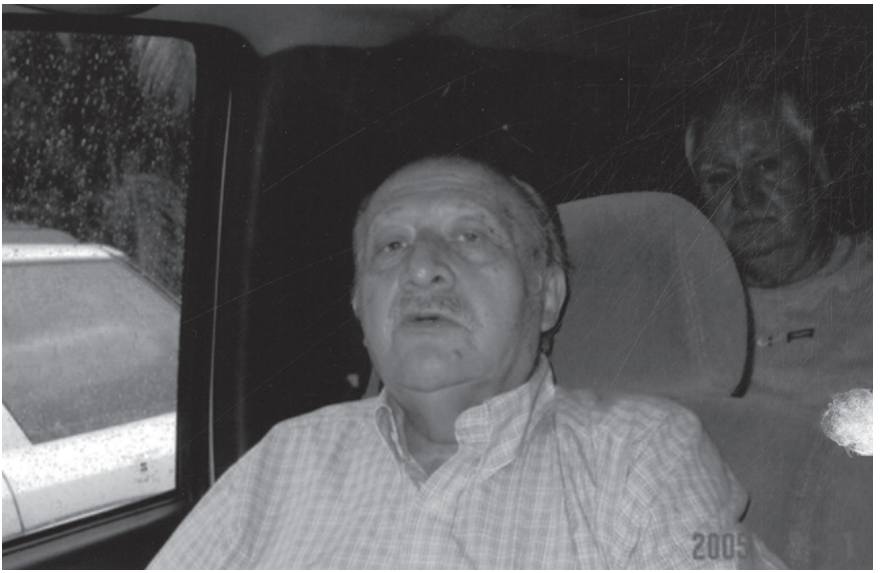







a realidad
s sueños...




2005



DÉCADA 2010

INDUCCIÓN A LA FUNCIÓN JUDICIAL

Casa de la Cultura Jurídica
"Ministro José Vicente Aguinaco Alemán"
Celaya, Gto.
Viernes 14 de mayo de 2010

El señor licenciado Francisco José Oliveros Cabrera, en su carácter de Director de la Casa de la Cultura Jurídica de Celaya "Ministro José Vicente Aguinaco Alemán", me hizo la distinción de invitarme a conversar con ustedes sobre el tema "Inducción a la Función Judicial".

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición, la palabra inducción viene del latín inductio, inductiones y significa acción y efecto de inducir y, a su vez, el verbo inducir proviene del latín inducere y significa instigar, persuadir, mover a alguien y en una segunda acepción, ocasionar o ser causa. Persuadamos, entonces, a este grupo de estudiantes para que conozcan lo que es, cómo está estructurado y de qué se ocupa el Poder Judicial Federal. Nos ocuparemos también de otros organismos que previenen nuestras leyes y que sin ser parte del Poder Judicial Federal, se ocupan de decir el Derecho, esto es, fijar los alcances de normas generales en relación con casos particulares y concretos. Por último, presentaremos nuestra visión de lo que debe ser un buen juzgador.

No será una tarea sencilla desarrollar la temática propuesta porque nuestras leyes son complejas, sobreabundantes y, en ocasiones, repetitivas y poco claras, por lo que caminar por los laberintos que han creado, requiere de un conocimiento profundo, no solo de las leyes positivas, sino del Derecho como ciencia.

El artículo 41 Constitucional, en su párrafo primero, establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, precisamente en los términos que, respectivamente, establezcan la Constitución Federal y las particulares de los estados.

Por su parte, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.

Según el artículo 94 Constitucional, el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Previene también este artículo 94 que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que conforme a las bases que señala la Constitución, establezcan las leyes.

Tenemos entonces los siguientes órganos que integran el Poder Judicial Federal:

1.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
3.- Tribunales colegiados de circuito.
4.- Tribunales unitarios de circuito.
5.- Juzgados de Distrito, y
6.- El Consejo de la Judicatura Federal.

Veamos cómo se compone cada uno de estos órganos:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por once ministros y funciona en pleno o en salas. Sus sesiones serán públicas y sólo serán secretas en los casos que lo exijan la moral o el interés público.

El Tribunal Electoral Federal se integra por siete magistrados, el Pleno tiene su sede en la Ciudad de México y consta de cinco salas regionales con sede en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Distrito Federal y Toluca, integrada cada sala por tres magistrados. Este tribunal es el encargado de salvaguardar la legalidad, la equidad y la constitucionalidad de todos y cada uno de los procesos electorales en nuestro país y, desde luego, la Sala Superior es de apelación y revisora de las resoluciones de las salas regionales.

Los tribunales colegiados de circuito se integran por tres magistrados y al presente existen ciento ochenta y ocho en todo el país. Sus sedes son, además de las capitales de las entidades federativas, las ciudades más importantes de la república.

Los tribunales unitarios de circuito, como su nombre lo indica, están integrados por un solo magistrado cada uno de ellos y al presente existen setenta y seis en toda la república.

Los juzgados de distrito son unitarios y los integra un juez. Al presente existen trescientos ocho juzgados de distrito en toda la república.

Hay, además, dieciocho tribunales de circuito auxiliares, diez tribunales unitarios de circuito auxiliares, cuarenta y cuatro juzgados de distrito auxiliares, un tribunal colegiado de circuito auxiliar en materia civil, siete juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones.

El Consejo de la Judicatura Federal se integra por siete consejeros, todos ellos designados por el Senado de la República, dos a proposición del Poder Judicial Federal, dos a proposición del Poder Ejecutivo y dos a proposición del Poder Legislativo. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación preside siempre el Consejo de la Judicatura Federal.

En un apretado resumen estos son los órganos fundamentales del Poder Judicial Federal y su competencia, en términos generales, se establece por los artículos 103, 104, 105, 106 y 107 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ningún abogado o estudiante de Derecho puede prescindir del conocimiento de estos artículos a los que, por razones del tiempo que se destina a esta plática, sólo nos referiremos en términos sumamente generales.

Previene el artículo 103 que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.

II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III.- Por leyes o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

El artículo 104 indica que además los tribunales de la federación conocerán sobre controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Como veremos adelante esto no es exacto, pues varias leyes federales son aplicadas por organismos que no forman parte del Poder Judicial Federal y por autoridades locales. Previene este artículo una jurisdicción concurrente al señalar que cuando esas controversias sólo afecten intereses particulares, a elección del actor, también podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común y del Distrito Federal.

Conocerán también los tribunales federales de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo. El conocimiento lo atribuye a los tribunales colegiados de circuito según los trámites que se establezcan en la ley siendo sus decisiones inimpugnables.

Conocerán además, los tribunales federales, de todas las controversias que versen sobre Derecho Marítimo; de las controversias en las que la federación fuese parte; de las controversias a que se refiere el artículo 105 Constitucional, que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de las controversias que surjan entre un estado y uno o más vecinos de otro y de los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular.

A partir de 1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre la federación y un estado; la federación y un municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; el Poder Ejecutivo y cualquiera de las cámaras federales o la Comisión Permanente; entre un estado y otro; entre un estado y el Distrito Federal; entre el Distrito Federal y un municipio; entre dos municipios; entre dos poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos; entre un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos; entre un estado y un municipio de otro estado sobre la constitucionalidad de sus actos; entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos.

Conocerá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las acciones de inconstitucionalidad, entendiendo por ellas las que tengan por objeto

plantear la contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La fracción III del artículo105 Constitucional, establece para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de atracción por virtud de la cual y a petición fundada de un Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de la República, la Suprema Corte de Justicia podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito en aquellos procesos en que la federación sea parte y que, a juicio de la propia Corte, lo ameriten por su interés y trascendencia.

Según el artículo 106, también el Poder Judicial Federal resolverá los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales de la federación y los de los estados y el Distrito Federal y entre los de un Estado y los de otro o un estado y el Distrito Federal.

Como ustedes han comprobado, no es sencillo distinguir los asuntos que serán resueltos por el Poder Judicial Federal.

El abogado postulante o el juez que quiera trabajar en realidad con estricto apego a la ley, necesita de mucho estudio para saber qué tribunal conocerá del asunto que pretende plantear o que va a resolver. Allí empiezan las dificultades de un ejercicio responsable de la profesión de abogado, pero como todos los casos no terminan en el principio. Es apenas el arranque, porque además del Poder Judicial Federal, en nuestro país existen treinta y dos poderes judiciales locales, uno por cada entidad federativa con sus propias competencias, que normalmente son conocer de controversias sobre asuntos criminales y civiles en que debe aplicarse la ley local. Cada uno de estos poderes judiciales forma parte de los poderes locales y está integrado, generalmente, por un Supremo Tribunal de Justicia, jueces de partido o de primera instancia y jueces municipales.

Aún no acaban los problemas para fijar competencia de ante quién se debe plantear un negocio jurídico, pues, además de los poderes judiciales federal y locales existen muchísimos tribunales y organismos que con característica de autonomía o con dependencia de los poderes ejecutivos en lo administrativo, tienen como función resolver controversias jurídicas entre particulares, esto es, decir el Derecho. Citemos, entre otros, los siguientes: el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se ocupa de resolver controversias fiscales entre los particulares y la propia federación; el Tribunal Federal Agrario que se ocupa de resolver los conflictos que se dan con motivo de la aplicación de la Ley Federal Agraria; la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, organizada en juntas especiales con diferentes competencias territoriales y por materia, que se ocupa de resolver los conflictos obrero patronales en materia federal; el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que resuelve los problemas entre la federación y sus trabajadores. También existen muchísimas comisiones y organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor, que analizan controversias entre particulares y de alguna manera dicen el Derecho; la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión de Regulación de la Tierra, que para cumplir sus funciones tienen un verdadero tribunal ante el que los particulares deben comparecer. Son muchos organismos federales que dicen el Derecho, podríamos agregar a la Comisión Federal de Energía, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, pero también hay otros locales, tales como los tribunales de lo contencioso administrativo, juntas locales de conciliación y arbitraje, tribunales locales de conciliación y arbitraje y últimamente tribunales para trabajadores universitarios y, desde luego, los procuradores estatales de derechos humanos.

Los organismos que dicen el Derecho en nuestro régimen jurídico constituyen una verdadera maraña que hace sumamente difícil tener presente a la totalidad de ellos por lo que en cada caso concreto hay que analizar ante qué autoridad debe plantearse el asunto y este es el primer problema que tendrá que resolver el abogado mexicano.

Parece que nos hemos especializado en crear complejidades jurídicas múltiples y cada día nacen nuevos organismos ahora con la moda de la "autonomía" de la que se está abusando sin justificación.

Sin embargo, a pesar de estas dificultades narradas no pretendo que mi intervención traiga como consecuencia desilusión a los futuros abogados, con ello quiero hacer presente la dificultad del ejercicio de nuestra compleja profesión. Pretendo combatir la generalizada creencia de que es fácil ser abogado, creo que es sumamente difícil, pero es también extraordinariamente hermoso, pues luchar por la justicia, que es la gran finalidad del ejercicio abogadil, requiere de dedicación y esfuerzo constantes y proporciona satisfacciones tan altas como, tal vez, muy pocas ocupaciones humanas las den.

Cada abogado cuando recibe un caso sea porque se lo plantea un cliente o porque ocupa un cargo público que le impone la obligación de resolver ese caso, tiene que comprenderlo perfectamente para cumplir con su obligación ética de consejero social y deberá siempre empezar por hacer un juicio sobre el caso que va a conocer: tendrá que determinar de qué parte está la razón legal, a quién apoya el Derecho y en función de eso, regir sus actos futuros en relación con ese caso. Todo abogado es por necesidad un juez, puesto que valora, juzga, decide quién tiene la razón legal en cada asunto. Tiene, entonces, el abogado mucho de juez aunque formalmente no lo sea. Hay otros abogados que tienen las atribuciones para juzgar y que prevalezca su juicio sobre todos como verdad legal, son, de acuerdo con la ley, los jueces en sentido formal; integran el Poder Judicial. Por la importancia que en la sociedad tienen, ocupémonos de ellos.

Tener la potestad de juzgar a nuestros semejantes porque la sociedad, a través de un mandato legal, nos la ha otorgado, implica, inexcusablemente, la adquisición de una enorme responsabilidad jurídica y moral que se traduce en la necesidad de corresponder a ella con el conocimiento profundo y amplio del Derecho, con imparcialidad y objetividad en el ejercicio del cargo, diligencia en el desempeño, con modestia y austeridad en el comportamiento

personal, con rectitud en la conducta, independencia de criterio y autonomía en la decisión. Todo ello solo se logra con un gran esfuerzo, una constante y permanente dedicación al estudio de la ciencia jurídica y una firme voluntad que preserve de claudicaciones y corruptelas.

Ser juez, aunque se reciba un sueldo, no es un empleo sino una vocación. El desempeño exige dedicación absoluta al cargo. No hay límite en el tiempo que se le dedica. En cada caso concreto habrá que encontrar la verdad y resolver conforme a ella. La aplicación del Derecho es la tarea que no se agota cuando concluye la jornada de atención al público en la oficina. El buen juez sabe que, para conservar claridad de juicio y serenidad en las decisiones, necesita de una conducta personal moderada. Cualquier exceso mina y disminuye su capacidad de esfuerzo.

El trabajo judicial pide, para ser realizado con propiedad, soledad física que no debe traducirse en aislamiento espiritual. La comunicación del buen juez con los juristas prudentes, de ayer y de hoy, se hace a través de consulta continua a la doctrina y a los antecedentes judiciales.

Escuchar a los judiciables es útil, pues si bien la sentencia tendrá que dictarse en congruencia con lo actuado, el conocimiento directo del sentenciado, sobre todo en derecho penal, resulta insustituible para la graduación de la pena que no será correcta sin valorar la personalidad y peligrosidad social del reo.

Al exceso de ingreso de asuntos y a las frecuentes triquiñuelas de las partes no debe agregarse la indolencia de trámite del tribunal. Todo ello produce el rezago judicial, que es el mayor mal que agobia a la justicia. Se requiere personal de apoyo para abatir este rezago pero los secretarios y proyectistas, indispensable ayuda, son sólo coadyuvantes, no sustitutos del juez. La llamada justicia de secretarios es una perversión que no está autorizada por la ley.

El juez es el conductor y director del proceso. Las otras partes son sus auxiliares. Cualquier medio que el juez y partes utilicen tiene como propósito encontrar la verdad. Aplicar autoridad y energía a veces es útil para evitar desviaciones, pero también lo es la suavidad y gentileza para orientar a quienes están frente al juez.

La objetividad y la imparcialidad son actitudes sin las que no se puede impartir justicia. Si en un caso existe algún sujeto o circunstancia que las perturbe, el juez deberá excusarse del conocimiento de ese asunto, sin esperar a que los interesados lo recusen. La excusa nunca será pretexto frívolo para dejar de conocer de asuntos difíciles o de alto impacto social.

El ejercicio de la judicatura implica virtudes y conocimientos que nunca se adquieren totalmente. Los centros de enseñanza sólo otorgan las bases mínimas que permiten la actualización permanente. Tener conciencia de esta limitación servirá para desterrar la soberbia, que parece una deformación natural del ejercicio judicial. La ley otorga al juez la facultad de decidir un conflicto, pero la sabiduría para hacerlo sólo se adquiere con sacrificios y esfuerzos. No

confundir capacidad legal de decidir con correcta decisión, es obligación ética insoslayable de los jueces. Corregir lo mal hecho, siempre dentro de la ley, es la más alta valentía.

La sociedad quiere que sus jueces sean confiables y para ello les pide que huyan de la corrupción. En ocasiones es tan sutil que se adquiere insensiblemente, con simples tolerancias, dejándose llevar, escuchando palabras de amistad y apoyo que disfrazan intereses ilegítimos. Son tan atrayentes los frutos de la corrupción que suele presentarse como conducta normal. En ocasiones, con criterio distorsionado, socialmente se valora al corrupto como exitoso, como inteligente, y al honesto como fracasado y tonto. La corrupción casi siempre va acompañada de un rápido y notorio éxito económico. ¡Qué obligado está el juez de huir de ella y evitarla a cualquier costo en su tribunal! Sólo es honesto el juez que está consciente de que sus conocimientos, por muchos que sean, sólo valen porque vive en sociedad y sin ésta serían inútiles.

Es una expresión común señalar que en cada sentencia debe realizarse el valor justicia, pero esta expresión es de difícil logro. El buen juez debe buscar la verdad y atarse a ella. Defenderla y hacer que prevalezca. La ley y la verdad son su meta y su defensa. No hay casos pequeños si la justicia está de por medio.

En ocasiones, la aplicación de la ley crea conflictos con aparentes contradicciones entre ésta y la justicia. Todas las leyes merecen la presunción de que son justas, y en principio hay que acatarlas porque justicia y seguridad no son valores excluyentes, pero si en algún caso real la aplicación de la ley se riñe con el concepto de justicia porque la norma atenta contra valores humanos fundamentales, el buen juez no la aplicará y antes renunciará al cargo. Esta decisión extrema, delicada, solamente se tomará después de profundo, sereno y prudente análisis.

Sólo quien tenga la conciencia que el ejercicio de la judicatura constituye una digna esclavitud podrá cumplir las altas responsabilidades que se aceptan cuando se protesta el cargo de juez. Si alguna función dignifica y eleva es la de buen juzgador. Si algún defecto denigra y daña, a quien lo tiene y a la comunidad, es el de mal juez.

Todos los jueces tienen a su servicio un instrumento moderador de la regla general que servirá para mejor realizar el valor justicia, es la equidad. Aristóteles decía que la equidad es mejor que la ley porque sirve para moderar ésta cuando, en un caso concreto, puede causar un daño no deseado. El ejercicio equitativo del Derecho es la más alta responsabilidad de un juez.

Cualquier desmesura puede ser lesiva para el buen desempeño judicial, incluso el trabajo inmoderado. El descanso racional es tan importante como el trabajo mismo y por eso debe disfrutarse de manera plena. La vida ordenada es condición para la buena impartición de justicia. Sin honestidad, prudencia, sabiduría, diligencia, mesura, estudio, sentido común y preocupación por la justicia no se llega a ser buen juez ni buen abogado.

PALABRAS DEL LIC. MIGUEL MONTES GARCÍA EN EL HOMEJAJE AL LIC. EUGENIO TRUEBA OLIVARES

Homenaje ofrecido por la generación de abogados 63/67,
egresados de la Escuela de Derecho y
la Fundación de Egresados de la Universidad de Guanajuato.
Salón de Actos. Universidad de Guanajuato.
Guanajuato, Gto.
27 de mayo del 2010

Maestro don Eugenio Trueba Olivares.
El día 13 de mayo de este año, recibí la amable visita de los señores licenciados Ernesto Arrache Hernández, Ricardo Fernández Camarena y Francisco Frausto Alcaraz, en representación de la generación de abogados 63/67, egresados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Con Gentileza me invitaron para que participara, pronunciando unas palabras, en el homenaje que esta generación y la Fundación de Egresados de la Universidad de Guanajuato, le ofrecen al Maestro don Eugenio Trueba Olivares por su trayectoria académica y su aportación a la cultura guanajuatense. Me informaron de las altas personalidades que presidirían este evento. En principio pensé que el trato constante y la amistosa cercanía que tengo con el homenajeado podrían ser un impedimento para participar en este acto, pues tal vez se podría interpretar que mis palabras obedecían más al afecto y respeto que siento por el Maestro Trueba que a sus merecimientos objetivos. Intenté incluso después de haber aceptado hablar, dar marcha atrás y que alguien me sustituyera en el cargo. El señor licenciado Arrache Hernández con persuasiva amabilidad me convenció de que interviniera.

Quedan explicados mi respeto, mi cercanía, mi afecto y trato frecuente con el Maestro Trueba, por lo tanto, procuraré fundar y razonar la objetividad de lo que exprese.

Creo que este homenaje al señor licenciado don Eugenio Trueba Olivares es absolutamente merecido. Tiene el propósito de dar testimonio y reconocer de manera pública las valiosas aportaciones que el homenajeado ha hecho no sólo a la Universidad de Guanajuato sino a la ciudad, al estado y al país.

Homenaje es un acto o serie de actos que se celebran en honor de alguien o de algo, significa también respeto a alguien. De su significado podríamos desprender que puede haber homenajes inmotivados, caso en el que no estamos, pues nos reunimos aquí para hacer un reconocimiento, ya lo dijimos, al maestro Trueba y por reconocimiento tenemos que entender examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancia y de ese examen desprendemos los indubitables merecimientos que el

Maestro Trueba tiene para recibir el homenaje. Basta sólo enunciar parte de las actividades que ha realizado y los libros que ha publicado, así como las buenas obras que ha llevado a cabo. No repetiré su currículum, pero destaco su larga carrera como catedrático en la Universidad de Guanajuato sirviendo las clases de Introducción al Estudio del Derecho, Filosofía del Derecho, Ética Profesional, Hermenéutica Jurídica, cuya sola enunciación nos da la idea de las aptitudes de que se tiene que ser poseedor para impartirlas.

Fue también director de la Escuela de Leyes y dos veces Rector de la Universidad de Guanajuato. Durante su ejercicio rectoral recibieron gran impulso los programas de investigaciones físicas, se fundó la Escuela de Arquitectura, se incorporó el Teatro Principal a la Universidad de Guanajuato, se fundó el Cine Club de la Universidad, se adquirió el Ex convento de Valenciana y se destinó al campus de la Escuela de Filosofía y Letras. Fue fundador de la difusora XEUG, de la Librería Universitaria, de la Biblioteca Central. Propició la construcción de los auditorios de Celaya y de Irapuato, se revisaron integralmente siete planes de estudio, se construyó la cancha de basquetbol Arturo Larios, se construyó la Escuela de Minas, se fundó la Escuela de Enfermería de Irapuato, se adquirieron los terrenos para la actual Escuela Preparatoria de León y se construyó parcialmente, se fundó la Escuela de Agricultura de Irapuato, se fundó el Centro de Idiomas, varias maestrías de posgrado, y realizó otras múltiples acciones universitarias.

Don Eugenio ha sido presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y como asesor jurídico su consejo se ha escuchado en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el congreso local y en muchos otros sitios.

Su trabajo cultural comprende su participación en el Consejo Editorial del Gobierno del Estado, en el Consejo del Festival Internacional Cervantino, en la publicación de más de 30 obras sobre diversos temas entre los que destacan los de tipo jurídico, filosófico y ensayo, tales como *Derecho y Persona Humana; El Aborto; Marx, Platón, San Agustín, Tomás Moro, Ensayo sobre Utopías; El Hombre, la Moral y el Derecho; Ética Profesional para el Ejercicio del Derecho; El pensamiento de Vitoria; Los Principios y los Hechos* y, muy singularmente, su *Guía Temática de Filosofía del Derecho*, que sigue inspirando el programa de la cátedra de Filosofía del Derecho en la facultad respectiva de esta Universidad.

En la narrativa se han dado sus cuentos en la Revista Garabato, en los libros Antesala, La Pupila del Gato, Una Mala Mirada, Once Cuentos, El Asedio de la Fe y otros publicados en diversas antologías.

En la novela produjo, entre otras, *Los Cerros Pelones, Los Inconformes* y *Los Pasos Finales*, y en el teatro citemos *Por los Intereses Colectivos, Edicto de Gracia, Mortis Arbitrium, Río Revuelto, Crimen en Cuatro Versiones*. Seguramente se me escapan otras obras de su autoría o que ha adaptado para presentarlas en forma más ágil, porque no solamente ha escrito teatro, sino que lo dirige, es

una de sus dedicaciones significadas y que ha coadyuvado al mantenimiento y aumento del nivel cultural en Guanajuato.

Todos sabemos que fue fundador del Teatro Universitario junto con otros destacados guanajuatenses y hemos asistido a las representaciones teatrales que dirige, mismas que han alcanzado indiscutibles éxitos, tales como los que obtuvieron *Por los Intereses Colectivos, El Enfermo Imaginario, Don Juan Tenorio, Todo por la Paz* y, desde luego, los Entremeses Cervantinos.

Ha recibido distinciones como la presea Mario de la cueva de la Federación Nacional de Abogados, el Pípila de Plata, que otorga el Club de Leones de Guanajuato, la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla que impone el congreso local y el nombramiento de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guanajuato. Es muy claro, entonces, que el maestro Trueba merece este homenaje.

Don Eugenio es, además, un abogado exitoso en cuanto al buen resultado de las causas que ha patrocinado y siempre ha sido moderado en el cobro de sus honorarios profesionales.

Quienes tenemos el privilegio de tratarlo frecuentemente sabemos de sus altas calidades y muchas virtudes, a veces el pudor de la amistad nos impide mencionarlas, pero hoy es obligatorio hacerlo. Don Eugenio es un hombre digno, pues su comportamiento es proporcionado a su mérito y condición.

Es un hombre congruente por su coherencia y relación lógica entre pensar, hablar y actuar.

Es moderado porque estima y respeta su propia naturaleza y dignidad y tiene, además, una buena opinión y fama adquirida por la verdad y el mérito.

Es honesto porque es decente, decoroso, recatado, pudoroso y siempre respetó los recursos presupuestales que administró en los diversos e importantes cargos públicos que tan eficientemente desempeñó. Su administración en los mismos fue absolutamente transparente y ordenada.

Es prudente porque discierne y distingue lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. Tiene templanza, cautela y moderación, sensatez y buen juicio.

Es justo porque obra según justicia y razón arreglado a ellas y, en consecuencia, es también sabio porque tiene profundos conocimientos en múltiples disciplinas científicas: derecho, filosofía, arte y es bueno porque actúa con el bien como fin y al decir del propio Maestro Trueba en su conferencia *Justicia Social* que impartió precisamente a esta generación 63/67, cuando cita a Leibnitz: "Justo es lo que en igual medida participa de la sabiduría y de la bondad".

Es bueno porque tiene bondad en su actuar. Es útil para muchas cosas. Es agradable y en ocasiones divertido. Supera a lo común y practica la bondad sin presumir de la práctica. Es probo precisamente por su honradez.

Para fundar las cualidades que de don Eugenio Trueba Olivares he expresado me atengo a las definiciones que de las mismas nos da el *Diccionario de la Lengua Española* en su edición XXII. No invento nada, sólo doy testimonio de

lo que todos conocemos como sus alumnos, sus coterráneos, sus colegas y sus amigos. Por eso afirmo que este reconocimiento y homenaje es absolutamente merecido, aunque provoque los sonrojos e incomodidad del homenajeado.

Por mi parte me atrevo a ratificar que don Eugenio Trueba Olivares es un auténtico valor del mejor Guanajuato.

PRESENTACIÓN DE EL LIBRO BIOGRÁFICO "EUGENIO TRUEBA OLIVARES, EL ÚLTIMO HUMANISTA"

Guanajuato, Gto.
Vienes 18 de febrero de 2011

Los señores Luis Miguel Rionda y Luis Ernesto Camarillo, apoyados por la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, A. C., la Universidad de Guanajuato, la Dirección General de Extensión y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, escribieron la biografía del señor Don Eugenio Trueba Olivares que esta noche se presenta. El primer acierto del libro, tal como lo dice el Dr. Enrique Ruelas Barajas, Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, A. C., es el título de la obra: se llama "EUGENIO TRUEBA OLIVARES, el último humanista" porque, en efecto, la acción y el pensamiento, la vida y las preocupaciones y ocupaciones del maestro Trueba se corresponden cabalmente con lo que entendemos por humanismo.

El libro presenta un resumen de la meritoria y fructífera vida del biografiado y cumple su fin de evidenciar la gran influencia del trabajo de Trueba en el desarrollo cultural, artístico, legal e incluso material del Estado y la ciudad de Guanajuato, destacadamente de la Universidad de Guanajuato y el Poder Judicial del Estado. Es un esfuerzo porque todos conozcamos la trascendencia de un actuar individual para la vida de la comunidad en que ese actuar se da. Cada uno de los lectores de esta obra que hoy se presenta, valorará cuánto nos ayuda para conocer mejor al personaje que es su sujeto y su objeto. El esfuerzo y los aciertos de los autores de la obra son positivos.

Creo que he sido uno de los alumnos y amigos más cercanos al maestro Trueba y creía conocerlo. Hasta presumía conocerlo. Sin embargo, hasta después de leer el libro de Rionda y Camarillo supe muchas cosas buenas sobre Don Eugenio. Es que su modo de ser, su sencillez y su modestia ocultan a todos la dimensión de su valía. Ni la cercanía nos permite conocerlo en su totalidad. No cabe duda que Don Eugenio disimula y oculta, por humildad, sus virtudes, sus penas y sus sentimientos.

Mi juicio sobre la obra que esta noche se presenta es muy simple. El libro me gustó y me gusta también y admiro, aprecio y quiero, al personaje de que la obra se ocupa.

Bernarda Trueba me dio indicaciones muy precisas de que este acto no tenía que ser aburrido por lo solemne, en consecuencia, mi modesta contribución al mismo se constreñirá a narrar una anécdota que viví con el maestro Trueba y que su biografía no recoge: en el año de 1959 yo era estudiante de la

Escuela de Leyes en el primer año y tenía como maestro de Introducción al Estudio del Derecho a Don Eugenio Trueba Olivares. Yo era, como tantos otros, un estudiante pobre, diría que muy pobre, tanto que mis raquíticos ingresos como locutor de fin de semana en una difusora de la ciudad de León, no me alcanzaban para cumplir mis obligaciones de ayuda a mi madre, mis tías y mi hermana y para mis gastos personales. El ahora licenciado José Trueba Dávalos era mi compañero de casa, también como estudiante y supongo que algo comentó de esta circunstancia que yo vivía con su tío, el maestro Trueba, que en ese momento desempeñaba el cargo de Rector de la Universidad de Guanajuato; un día, al terminar la clase, Don Eugenio me dijo: "Quiero hablar contigo; te espero en la Rectoría". Yo me inquieté porque pensé que había cometido alguna falta; pero voy a la Rectoría y el señor Rector, el Dr. Trueba Olivares, me recibió y me dijo: "La Secretaría de Trabajo y Previsión Social me está pidiendo que recomiende a un pasante para ocupar el cargo de Procurador de la Defensa del Trabajo; como se trata de una tarea sencilla porque es en la Junta de Conciliación, en donde sólo se buscan arreglos amistosos con los trabajadores, estoy seguro que tú puedes desempeñarlo, así que voy a decir que eres pasante, toma esta carta y vete a la Ciudad de México para que hables con este funcionario -me dio el nombre- y te dé el nombramiento. No se te ocurra decir que eres alumno del primer año de leyes, acuérdate que eres pasante". Me fui a la Ciudad de México y, en efecto, me expidieron el nombramiento cuyo largo nombre indica su mínima importancia: Procurador Federal de la Defensa del Trabajo, adscrito a la Junta Federal de Conciliación Número 22 en la ciudad de Guanajuato. Yo me sentí, sin embargo, importantísimo y lleno de gusto y susto me presenté con el licenciado Trueba y le dije: "Aquí está el nombramiento y ahora, ¿qué hago?" Me contestó: "Cómprate una Ley Federal del Trabajo y ponte a leerla, gánate la buena voluntad de la señorita Mercedes Campos, que sabe mucho de esto y ella te ayudará, pero, además, si tienes algún problema me preguntas y yo te oriento".

Acordémonos que en esos momentos el señor licenciado Trueba era además Director Jurídico de la Compañía Eléctrica Mexicana del Centro. Al día siguiente me presenté ante el señor Raúl Abascal, Presidente de la Junta Federal de Conciliación 22, a trabajar; mal me había sentado en mi escritorio cuando comparecieron ante mí unos trabajadores electricistas que afirmaban habían sido despedidos de su trabajo injustificadamente. No sabía qué hacer pero les tomé sus datos y les pedí que volviesen en tres días para que firmaran las demandas que iba a elaborar a fin de defenderlos. Al concluir la jornada de trabajo, acudí a las oficinas del licenciado Trueba y le dije: "Señor, no sé qué hacer, quiero que me ayude porque unos trabajadores de la Compañía Eléctrica Mexicana del Centro quieren que los defienda pues se dicen despedidos injustificadamente; usted me prometió orientarme". El licenciado Trueba dijo: "¡Ah, caray! Eso sí es grave, pero no te preocupes porque si los trabajadores tienen razón vamos a arreglarnos". Efectivamente los trabajadores, asesorados

por mí, firmaron un convenio laboral a través del cual la Compañía Eléctrica Mexicana del Centro, representada por el licenciado Trueba Olivares pagó con estricto apego a derecho lo que a cada uno de ellos le correspondía por mandato legal y contractual.

Yo creo que lo narrado es un claro ejemplo de la conducta ética que el licenciado Trueba siempre ha tenido en su ejercicio profesional. En el fondo del asunto, sin mengua de la honestidad, el maestro Trueba cuidó el legítimo interés de las dos partes y propició una solución equitativa que a todos benefició.

Es indudable que el señor licenciado Trueba ejerce, tal vez sin que se lo haya propuesto, un liderazgo cultural y moral en la ciudad de Guanajuato, derivado de su ascendencia en la comunidad. Como abogado es un consultor y consejero social. Esta faceta del ejercicio de su profesión hace que muchas personas acudan a él en solicitud de orientación y apoyo que normalmente encuentran.

Durante toda su vida al maestro Trueba lo han acompañado sus profundas preocupaciones porque la ley brinde protección a todos y tenga caminos fáciles para la realización de los valores jurídicos. No confunde la ley con el Derecho. Considera que ella, la ley, sólo es manifestación parcial de lo jurídico y siempre procuró como Rector, como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, como maestro y como abogado postulante el perfeccionamiento del Derecho y su cumplimiento.

No es un ser humano libre de apremios, dudas y angustias. Su alegría por vivir no adormece sus reflexiones sobre la trascendencia de la vida humana, la existencia del alma y de un más allá en que se alcance la plenitud del Ser. Con profundidad y claridad sus escritos reflejan estas preocupaciones. Veámoslo en los textos de algunas de sus: "Notas del Día" que elabora cuando cree que algún tema lo amerita.

> "NOTA DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2010:
>
> Sólo tres cosas tenía
> para su viaje el romero:
> los ojos abiertos a la lejanía,
> atento el oído y el paso ligero.
> (E. González Martínez).
>
> Así se camina y avanza. La mirada dirigida a lo lejos, buscando aquello que justifica los pasos actuales. Procuramos desentendernos del tráfago que nos envuelve, acallar el ruido y la trivialidad, con la esperanza firme de arribar al santuario final.
>
> La metáfora alienta y encanta. Ayuda a olvidar la realidad: ojos y oídos deteriorados, cansados, pasos torpes. Pero no, no es tal su realidad, sino la del poema".

"NOTA DEL DÍA 12 ABRIL DE 2010:

Salud muy quebrantada. ¿Hay alguien totalmente sano? El caso es que he llegado a una edad muy avanzada, no sin antes pasar por muy malos ratos debido a un alud de achaques.

He percibido, en ocasión de lo anterior, edad y alifafes, la tersa presencia de los amigos.

Mucho se ha escrito sobre esa gema de altísimo valor que es la amistad. Busqué entre mis libros algo que me ayudara en estos momentos a rendirle elogio, sin éxito. Pero lo que he vivido estos días me deja una enseñanza superior a cualquier texto. Tener amigos como los que yo tengo no sólo es algo grato, sino gozo de vida. ¿Cómo agradecerlo? Suertudo que soy.

Ahora necesito aprender a evadirme de la preocupación –ocupación- de los males. Me siento rehén de ellos. Se piensa mucho en uno mismo. Elisa me contó que Luis García Guerrero, con quien tenía correspondencia, dejó de escribirle un tiempo. Cuando luego lo hizo, empezó su carta diciendo: "¡Por fin me he olvidado de mí mismo!", queriendo significar que se hallaba embargado por los muchos cuidados que reclamaba su precaria salud. Trataré, pues, de no ensimismarme".

"NOTA DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2010:

A principios de este año se difundió la noticia de que se había creado en laboratorio una célula viva, algo verdaderamente importante. Por fin la ciencia lograba "crear" vida y despejar su misterio. E. Schrodinger había reconocido en su libro ¿Qué es la vida? que la química y la física no habían podido reproducirla. Ahora, el J. Craig Venter Institute había logrado crear una bacteria por medio de un genoma sintetizado químicamente.

Huelga hablar de las consecuencias tan trascendentes que se derivarían de tal experimento en todos los órdenes.

Pero resultó que una vez analizado el hecho en el medio científico especializado, sin negar la importancia del logro del Instituto Venter, no tenía el alcance propalado. Una bacteria preexistente fue objeto de sustitución de algunos de sus elementos por otros proporcionados químicamente, manteniéndole la vida que ya tenía.

La afirmación de Schrodinger sigue siendo válida. El misterio del "principio vital" continúa. Pero la ciencia avanza. ¿Qué nos depara?".

"NOTA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2010:

He leído que, según los estudiosos del tema, el ateísmo se extiende, que se adopta hoy día por mayor número de personas. Es posible que así suceda, cuando menos en relación con el ateísmo científico. Acontece que con cada nuevo paso explicativo de algún fenómeno, la imagen de Dios se achica, en proceso de continuo eclipse. Lo que pudo haber sido simple creencia se sustituye por la verdad experimental, en proceso de achicamiento de un dios que se usaba como sustituto provisional de lo desconocido. Vaya ateísmo más curioso, como si la ignorancia fuese el único sustento de la fe. Se busca así, por ejemplo, la explicación de la vida en el laboratorio para poder asestar un golpe más a lo que queda de Dios. Cuando Kant negó la cognoscibilidad de Dios, se negó a Dios: la ignorancia como ateísmo. Pero una cosa es ignorar y otra lo ignorado.

El ateísmo de calibre científico hace que la conducta del ateo se desprenda de toda referencia trascendental. Ya no necesita creer. La ética se "purifica" de todo contagio no científico, se humaniza al cien por ciento y se desemboca en una moral sin pecado. Dios resulta algo superfluo. Podrá haber santos, pero sin Dios, según dijo Camus. Todo esto –no puedo evitarlo- me estremece y me aturde".

"NOTA DEL DÍA 7 DE ENERO DE 2011:

En los albores de un año nuevo.
Yo vivo todavía tiempo temprano
como si amaneciera nuevamente
sin sombra de temor en el arcano.

Yo a la vida me siento destinado
sin hojas calendario de la edad
como si no contara lo acotado.
Me anima todavía savia primera
en horas y en espacios transcurridos
como si de final se careciera.

Yo quiero aposentarme en el cuadrante
del reloj que detiene los minutos
como si lo fugaz no sucediera.

Yo quiero ser insomnio del pasado
y mantenerme siempre en la vigilia
usando de un presente inacabado.
Yo quiero perpetuar esta presencia
en el empeño diario de los días
mientras cuente, Señor, con tu licencia".

"NOTA DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2011:

Devanándose los sesos.

Se dice que no hay verdades definitivas, salvo que esto se propone como verdad definitiva. Quizás hay muchas más que contribuyan a echar por tierra el escepticismo (aparte las verdades matemáticas o lógicas).

Yo creo que la razón de ser no tiene explicación fácil, pero su dificultad no ha impedido que el hombre se empeñe en buscarle una explicación. Notables pensadores consideran que es en vano tratar de encontrar esa explicación vinculándola a nuestra condición temporal, y que la verdadera razón de ser es seguir siendo. Aunque esta opinión no es una verdad definitiva, se ofrece al menos como una respuesta salvífica, opuesta a la claudicación del cuerpo y más razonable que la resignación del agnóstico. De algo se tiene uno que agarrar. La fe puede ser un buen asidero".

Termino mis palabras con un reconocimiento expreso a los autores del libro y con mi agradecimiento porque nos permiten a los lectores aproximarnos y estimar con mayor conocimiento los méritos indudables de una figura señera del quehacer intelectual.

Yo, por mi parte, reitero que Don Eugenio Trueba Olivares es un auténtico valor del mejor Guanajuato.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SEÑOR LICENCIADO MIGUEL MONTES GARCÍA EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO

Homenaje en donde le ofrecen un reconocimiento
La Universidad de Guanajuato,
La Fundación de Egresados de la Universidad de Guanajuato y
La generación de abogados y notarios públicos 1967-1971
Salón del H. Consejo General Universitario
Guanajuato, Gto.
Jueves 7 de abril de 2011

Sr. Dr. Arturo Lara López,
Rector General de la Universidad de Guanajuato.
Sr. CP. Juan José Jiménez Albo,
Presidente de la Fundación de Egresados de la Universidad de Guanajuato.
Sr. CP y MA Eduardo Melchor Franco Díaz,
Presidente del Patronato de la Universidad de Guanajuato.
Sr. Lic. Luis Felipe Sánchez Hernández,
Ex rector de la Universidad de Guanajuato y representante de la generación de abogados y notarios públicos 1967-1971.
Sr. Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino,
Rector del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.
Sr. Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga,
Director de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.
Dr. José Manuel Cabrera Sixto,
Secretario Académico de la Universidad de Guanajuato.
Señoras y señores:

Sería imposible citar por sus nombres a los asistentes, tendría que mencionarlos a todos y, seguramente, incurriría en omisiones puesto que están aquí muchos amigos cuya presencia agradezco, sólo debo resaltar la presencia del señor licenciado Eugenio Trueba Olivares, ex rector de la Universidad de Guanajuato y la de quien, seguramente por su habitual timidez estará en alguna parte de atrás del salón, la señora María Isabel Hernández Loera a quien todos conocemos como "Chabelita", que con su discreción y lealtad nos ha acompañado por más de 40 años y de quien algunos opinan que es la única que sabe derecho en ese despacho.

Cuando mis amigos Eduardo Franco Díaz, José Aben Amar González Herrera, Luis Felipe Sánchez Hernández, Rodolfo Vieyra Anaya y José María Sepúlveda, me comunicaron que se iba a celebrar este evento, lo tomé como un gentil recordatorio de que había llegado el momento de hacer balance de lo vivido, contabilizar lo bueno y lo malo de mi existencia y contar también el número de pastillas medicinales que diariamente ingiero y las inyecciones que me aplico para disfrutar de cabal salud.

Si ya tengo edad para homenajes, pensé, debo prepararme para dejar de tener cualquier edad. Pero luego, con absoluta claridad, comprendí que la generosidad de la Universidad de Guanajuato, de la Fundación de Egresados de la Universidad de Guanajuato y de la generación de abogados y notarios públicos 1967-1971, es la causa eficiente de la realización de este acto, y que tiene que ser aprovechado para que todos rindamos un público testimonio de lo positivo y trascendente que han sido para esta Ciudad, para el Estado y para el País las tareas de enseñanza y educación que la Universidad de Guanajuato ha desempeñado durante toda su historia.

Siento que es un asunto de conciencia aclarar públicamente que, con absoluta honestidad, no me considero acreedor de este reconocimiento. He meditado y ponderado los posibles méritos que pudiera tener y lo más que encuentro es que he intentado, durante toda mi vida, cumplir las obligaciones derivadas de los distintos cargos públicos que he ocupado y de mi ejercicio profesional. No hay en ello mérito alguno y, en consecuencia, el reconocimiento que hoy se me ofrece sólo es un eslabón más de la larga cadena de agradecimientos que tengo para mi Universidad y todas las demás instituciones, personas, amigos y compañeros de estudios que lo organizaron.

La mayoría de los que estamos aquí pasamos una etapa muy importante de nuestras vidas en las aulas universitarias, en nuestra mente existen los recuerdos de la juventud que gozamos y, a veces, sufrimos en nuestra época estudiantil; evocamos con afecto y gratitud a todos nuestros maestros que nos orientaron en los caminos del aprendizaje, unos con brillantez, otros con modestia, todos con perseverancia y paciencia. Pocas veces se mencionan sus nombres, por lo que, anticipando mis disculpas por el tiempo que les estoy quitando y por los posibles olvidos en que incurra, los mencionaré: los licenciados Eugenio Trueba Olivares, Sergio Rendón Cano, Margarito Sánchez Lira, Jesús Villaseñor Ayala, Benjamín Gallo Araiza, Raúl Aranda Torres, Jesús Luna Guzmán, José Luis Ibargüengoitia y Chico, Jorge Rico, Salvador Viramontes, Jesús Rendón Huerta, Jesús Cardona, Eduardo Téllez, Dr. José Franco, José Puga, Daniel Chowell Cázares, Arturo Serrano Robles, Ignacio Reyes Retana, Enrique Romero Sosaya y, sin que haya estado a cargo de nuestro grupo, nos impartió pláticas, no por informales menos brillantes y fue rector un tiempo de la Universidad, el licenciado Armando Olivares Carrillo. Todos ellos formaron parte de aquella comunidad universitaria, por eso los evoco con respeto.

La Universidad de Guanajuato nos dejó huellas imborrables. Era una institución modesta y con carencias, pero ya tenía la vocación de instruir y formar que ahora conserva. La herencia del Colegio del Estado perduraba en la Universidad de Guanajuato y se conserva en la actual Universidad Autónoma de Guanajuato. Desde entonces existía, yo diría que siempre ha existido, la libertad de cátedra, la libre expresión de las ideas, la tolerancia para la diversidad y el espíritu de cuerpo que aún distinguen a nuestra casa de estudios. Era curioso y significativo que a la salida de las conferencias que nos impartían personajes e intelectuales valiosos como José Vasconcelos, Jesús Silva Herzog, Guillermo Floris Margadant, Rafael Preciado Hernández, Carlos Madrazo o Vicente Lombardo Toledano, las respetabilísimas señoritas Aguilar, tradicionales prefectas, invitasen a los alumnos y a las alumnas a "guardar", comulgando, los viernes primeros.

Veo aún, en la cancha de basquetbol, al maestro Arturo Larios impartiendo sus sabias instrucciones al equipo universitario, que si bien no contenían una definida estrategia, compensaban esa falta con estimulante entusiasmo:… "¡A ganar muchachos, a ganar…!" Tengo presente la juvenil voracidad con la que satisfacíamos nuestra hambre de pan con las riquísimas tortas de aguacate de la tiendita del patio de estudios o, los alumnos con más recursos pecuniarios, con los también baratos alimentos del Café Universitario, sede de gratísimas y pretenciosas tertulias "filosófico-literarias"; el grupo de "La Rana Sabia" fue testigo de nuestros éxitos y fracasos.

Todavía resuena en mis oídos el tañer de la campana anunciadora de un alumbramiento profesional más de la paridora, mi Universidad. No olvido las múltiples anécdotas que vivimos: la huelga que organizamos, tal vez sin causa pero de buena fe, con la temeraria intención de que mejoraran las clases; el concurso de oratoria, con más de mil pesos de premio en que ante las reiteradas invocaciones de un concursante que terminaba cada párrafo de su discurso con el vocativo "¡Juárez!", después de cinco "¡Juárez!" consecutivos, un compañero de rasgos indígenas, al que apodábamos "Juaritos", le contestó a gritos: "¿Qué quieres mi hijo?"

Esa era la Universidad en que estudiamos. Se esforzaba diariamente por cumplir su misión de formadora de hombres, tenía muchas aspiraciones que la actual casa de estudios ha realizado parcialmente, quería imbricarse con mayor firmeza en la comunidad guanajuatense y penetrar más hondo en la vida económica, científica y social de la Ciudad, del Estado y del País. No podía prodigar sus recursos económicos porque eran raquíticos, pero la probidad y eficiencia de quienes los administraban los hacían rendir.

Esa Universidad me enseñó que el ser humano tiene varias características constitutivas: su inteligencia, que lo ayuda a aprender y a realizar su vocación profesional y su voluntad que le permite intentar siempre la realización del valor de lo bueno. Son, tal vez, las características más importantes del hombre, inteligencia y voluntad, con la primera aprende, enseña, razona, habla, se

comunica y se distingue gradualmente de los otros seres vivos; con la segunda intenta su realización plena, ayuda a los demás, trasciende, a veces se desvía, pero se distingue esencialmente de todos los otros seres vivos.

A esa Universidad, de antes y de ahora, la recuerdo y quiero, la que transmite ciencia y conciencia, conocimientos y valores, enseñanza y educación, capacitación y formación; la que nos dotó de los instrumentos prácticos que nos permitieron la movilidad social ascendente que en nuestras vidas tuvimos y el mejoramiento de nuestras condiciones económicas, pero más que nada nos mostró un horizonte amplísimo de posibilidades personales, no sólo de trabajo, que han sido factores de un auténtico mejor vivir, a través del disfrute de la lectura de un buen libro, de escuchar una buena música, disfrutar un buen teatro, aumentar nuestra capacidad de comprensión y tolerancia; la que sabe que las ciencias exactas avanzan con base en la experimentación y que la misma tiene que practicarse con el único límite de que no nos impida seguir practicándola y que la conciencia se perfecciona con base en la acción humana por esencia, la que realiza el valor de lo bueno.

A esa Universidad de entonces y de ahora, esa es a la que propongo participe en la investigación, dictaminación y postulación de soluciones para los problemas más ingentes que nos angustian; la veo coordinando un eficaz equipo multidisciplinario que averigüe las causas y remedios de la inseguridad general que sufrimos, que sin demagogias establezca si se ratifican o rectifican estrategias o tácticas contra la delincuencia organizada. No hay problema social que sea ajeno a la Universidad y por eso no la concibo simplemente como un depósito de conocimientos, sino como actor serio e informado de las medidas que hagan que la nación supere las actuales condiciones que la agobian.

Una Universidad ajena y alejada de politiquerías desgastantes e inmersa y comprometida en una política con visión de futuro, solidaria con la comunidad nacional y estatal a la que pertenece y la sustenta. Una Universidad fiel a sí misma que se conserve como hasta ahora, con una estructura y una organización eficientes y suficientes, que le permitirán continuar en su incansable búsqueda de la verdad liberadora; la eticidad del actuar universitario conjugará convicción y responsabilidad, atendiendo la explicación de Max Weber, citado por Mario Vargas Llosa en *El lenguaje de la pasión:* decir lo que se piensa y hacer lo que se cree pero midiendo las consecuencias para que sus actos no provoquen catástrofes o resultados contrarios a un designio de largo alcance que impidan la prevalencia de la convicción y lo cierto.

A esa Universidad de entonces, de ahora y de siempre, es a la que debemos todos nosotros rendirle el homenaje que, inmerecidamente, hoy aquí se me ofrece.

FUERO

12 de octubre de 2011

La palabra fuero tiene muy diversos significados, proviene del latín forum que significa foro, recinto o plaza pública, hay quienes dicen que se hace referencia al lugar donde se administraba justicia. En Roma se establecían los tribunales en las plazas, para vigilar y sancionar las transacciones mercantiles.

El diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, propone los siguientes significados:

1.-Históricamente norma o código dados para un territorio determinado y que la Constitución de 1978 ha mantenido en Navarra y en el País Vasco.
2.-Jurisdicción, poder. Fuero eclesiástico secular.
3.-Compilación de leyes. Fuero juzgo. Fuero real.
4.-Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una provincia, a una ciudad o a una persona.
5.-Privilegio, prerrogativa o derecho moral que se reconoce a ciertas actividades, principios, virtudes, etc., por su propia naturaleza. U.m. en pl. Defender los fueros de la poesía, del arte, de la justicia, de la razón.
6.-Coloq. Arrogancia, presunción. U. m. en pl.
7.-Der. Competencia a la que legalmente están sometidas las partes y que por derecho les corresponde.
8.-Der. Competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo. Fuero parlamentario.
9.-Ant. Lugar o sitio en que se hacía justicia. De la conciencia. m. Libertad de la conciencia para aprobar las buenas obras y reprobar las malas. U.m. en pl. Interior o interno. m. fuero de la conciencia. locs. advs. Según ley, estilo o costumbre de-loc. adv. De ley, o según obligación que induce la ley. Amejoramiento del fuero, privilegio del.

Desde el punto de vista jurídico fuero también tiene varias acepciones, pero para los efectos de este análisis consideraremos que "fuero" significa "privilegio" a favor de determinados funcionarios o servidores públicos federales y estatales. Etimológicamente privilegio se deriva de privus individual y legium de "lex" ley.

El fuero parlamentario, que en nuestro país la Constitución otorga a senadores, diputados federales y diputados locales y otros funcionarios. Este privilegio llamado fuero se desdobla en dos aspectos: inviolabilidad que significa que los senadores y diputados tienen absoluta libertad de crítica y que no pueden ser reconvenidos por las opiniones que viertan en el desempeño de sus

funciones, e inmunidad, que en nuestro Derecho tiene el alcance de que no puede quedar sometido a los tribunales si antes no se han cumplido algunos requisitos que marca la ley y que en esencia consisten en que la Cámara de Diputados realice una declaración de procedencia o ante juicio. Se puede realizar una averiguación previa contra diputados o senadores, pero no se puede ejercitar acción penal ante autoridades jurisdiccionales, si el legislador no ha sido declarado responsable del delito que se le imputa por sus propios pares. La declaración de procedencia no presupone que forzosamente el diputado o senador sea responsable del delito para efectos de la aplicación de la pena, sino que lo único que trae como consecuencia es que pueda ser juzgado por tribunal competente de acuerdo a las leyes vigentes. Mientras el legislador disfruta del también llamado fuero constitucional no corre el plazo para que la acción penal prescriba y cuando cesa en su función, cesa el fuero que se le otorga.

Diversas teorías sostienen que el fuero es un privilegio para el cumplimiento de la función, que no se otorga en lo individual a cada legislador sino que se otorga al cuerpo colegiado y por eso afirman que si el legislador disfruta de una licencia, aún así subsiste el fuero constitucional, puesto que se estableció para proteger la función del cuerpo cameral y no a cada uno de sus integrantes. Hay también las tesis contrarias que proponen que si el legislador no está en el desempeño de su cargo, así sea por licencia, cesa en el privilegio del fuero constitucional legislativo.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su diccionario jurídico define al fuero constitucional como: "El derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la federación, para antes de ser juzgados por un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal". La Cámara de Senadores, establece que la declaración de procedencia, es: "Una disposición jurídica realizada por la Cámara de Diputados en virtud de la cual es separado del cargo el diputado o senador de que se trate, para el efecto de que pueda ser sujeto de juicio o pena en su contra".

Características de la declaración de procedencia:

a) La declaración de procedencia es un acto que encierra una garantía o una defensa para los representantes populares, existiendo solo en el desempeño de su función y no de la persona que la asume, esto quiere decir que el hecho de ser legislador no lo exime de ninguna responsabilidad.
b) Dicha protección se erige bajo la tónica de que no puedan ser puestos a disposición de tribunales comunes sin la autorización del órgano competente, que en este caso es la Cámara de Diputados, debido a que pudiera existir una acusación fundada en hechos arbitrarios realizada por los demás poderes en contra de los parlamentarios, y de este modo, coartar la libertad de acción en sus funciones propias.
c) No se trata de una garantía sustantiva, sino de una materialmente procesal determinando que, concluido el juicio de declaración de proce-

dencia, se pueda trasladar al legislador a la jurisdicción común si es señalado como culpable.

d) Tal y como lo plantea Elisur Arteaga Nava, "el acto que emite la Cámara de Diputados no juzga hechos con base en las normas legales, su actuación se limita a presentar una declaración de oportunidad de acuerdo a los hechos y a una probable responsabilidad", así, la función de la cámara baja es solamente resolver si el legislador queda o no a disposición de un juez para que lo condene respecto al delito cometido; por lo tanto, no puede considerarse procesalmente hablando una sentencia, sino una conclusión declarativa que sólo tiene como fin poner al funcionario en cuestión en manos de las autoridades competentes.

e) Tampoco se considera una acción que implique un privilegio absoluto, puesto que la declaración de procedencia es el mecanismo que permite remover la prerrogativa que impide la actuación de la autoridad judicial competente –"inmunidad parlamentaria"- preservando el principio de igualdad.

f) Bajo el concepto presentado por la Cámara de Diputados en donde hace referencia a ser juzgado por jueces especiales, no contraviene a nuestra Carta Fundamental, la cual indica que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales; puesto que, como ya se subrayó, el procedimiento no tendrá como consecuencia una sentencia, sino una mera declaración.

g) La figura de declaración de procedencia es totalmente distinta a la denominada como juicio político, la cual está sustentada en bases exclusivamente gubernativas, en el entendido del derecho positivo mexicano que este tipo de responsabilidad se erige bajo la comisión de algún acto u omisión realizado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, tal y como lo señala el artículo 109, fracción I de nuestra Constitución; es decir, la justicia política, es aquella que se ejerce sobre hombres políticos o en materia política, considerándose un juicio ético-administrativo al cual son sujetos ciertos funcionarios públicos, con independencia de cualquier juicio penal, por lo que las sanciones también son evidentemente políticas.

De todo esto se desprende que la declaración de procedencia como tal se refiere al procedimiento para exigir responsabilidad penal, que tiene como finalidad suprimir la inmunidad de la cual están investidos los integrantes del congreso mexicano, no entendiéndose como la protección sustantiva, sino procesal, la protección sustantiva es la llamada "inmunidad parlamentaria".

Hay quienes confunden la declaración de procedencia con el juicio político, pero ambos conceptos tienen diferencias notables. El juicio político es un proceso de naturaleza judicial realizado por el Poder Legislativo que tiene como objetivo principal privar al condenado del cargo que desempeña para dejarlo a disposición de los tribunales ordinarios para que sea juzgado. A través

de este juicio también puede inhabilitarse al funcionario juzgado a perpetuidad para desempeñar cargos a sueldo de la nación.

Definición de juicio político:
Diccionario Jurídico Mexicano.- El juicio político es un término utilizado para designar el procedimiento para fincar responsabilidad política u oficial a un servidor público. Implica el ejercicio material de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano de funciones políticas, pero respetando las formalidades esenciales de un procedimiento jurisdiccional.

Raúl F. Cárdenas.- Menciona que el juicio político es un juicio propio de los regímenes presidencialistas. Comenta sobre el particular que "en los países de América, de régimen presidencialista, se han seguido los lineamientos de la Constitución Americana, pero en términos parecidos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Germán Campi.- Comenta que el juicio político no es un proceso penal, en el supuesto que se esté juzgando la comisión de delitos. Es un instituto que funciona como antejuicio que, en caso de condena, habilita la instancia penal contra los funcionarios y magistrados que gozan de inmunidad penal.

Alexander Hamilton.- Dice que el juicio político es la separación del servidor indigno del cargo público y no la sanción penal o patrimonial de un acto indebido. Hamilton destacó la importancia de separar la responsabilidad debido a que el daño ocasionado por un funcionario inflige a la comunidad política, ésta debe ser resarcida mediante la remoción del funcionario después de un procedimiento seguido ante un órgano político.

Federico Stein Sosa Solís.- Comenta que con el nombre de juicio político se conoce el procedimiento que se sigue cuando los servidores públicos, durante el ejercicio de sus funciones, incurren en actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.

Héctor Fix Zamudio.- Resaltó que el juicio político se apoya en la idea de que los titulares de los órganos del poder no pueden ser enjuiciados por los tribunales comunes y que se les debe dar esa inmunidad llamada fuero constitucional para que puedan realizar sus funciones sin ser hostilizados; además que "a pesar de que se habla de juicios políticos, no se trata realmente de delitos políticos, sino de infracciones políticas que en un momento dado pueden constituir delitos".

Base constitucional: sería prolijo y no propio de esta plática, por el tiempo que nos llevaría y porque son conocimientos para eruditos, establecer la historia y evolución de estas instituciones a través de las diferentes constituciones que nos han regido en México, e incluso durante la Colonia, pero es necesario que veamos en qué partes están contenidas en la Constitución vigente.

El artículo 13 Constitucional, textualmente dice: "Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean

compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda".

El artículo 61 Constitucional, establece: "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar".

El artículo 74 fracción V de la Constitución, dice: "Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.- Fracción V: Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delitos en los términos del artículo 111 de esta Constitución. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren".

El artículo 76 fracción VII de la Constitución, establece: "Son facultades exclusivas del Senado, fracción VII: Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución".

El artículo 109 fracción I de la Constitución, establece: "I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho".

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

El último párrafo del artículo 109 Constitucional, establece: "Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo".

El artículo 110, establece: "Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral,

los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables".

El artículo 111, señala: "Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demanda del orden civil que se entable contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberá graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados".

El artículo 112, dice: "No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto".

El artículo 114, establece: "El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años".

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, establece: "Los diputados y senadores gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.

Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes".

El artículo 12 de la misma ley, previene: "Los recintos del Congreso y de sus cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

El Presidente del Congreso, de cada una de las cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto".

El artículo 22, señala: "El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad. Garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del recinto legislativo.

El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos poderes de la unión, los poderes de los estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

El Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara; asimismo, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo.

El Presidente responderá sólo ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de las disposiciones que las rigen".

El llamado fuero constitucional o más propiamente inmunidad parlamentaria, con ligeras modificaciones y con redacciones diferentes, está establecido en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, España, Francia, Italia. En Estados Unidos se prohíbe que los senadores y representantes, diputados, sean arrestados mientras asistan a las sesiones de sus cámaras o se dirijan a ellas o regresen de las mismas, salvo en casos de traición, delito grave o alteración de la paz. En Inglaterra hoy en día no existe garantía parlamentaria de inmunidad y solamente debe de informarse a las cámaras de los casos y sentencias que involucren a los parlamentarios.

Creo que con lo expuesto tenemos una idea de lo que son la inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias, también conocidas como fuero constitucional, qué sujetos tienen este privilegio y por qué razón y sus fundamentos constitucionales y legales, aunque sea de manera elemental.

Lo que no está resuelto es si en nuestro país, dada su evolución social y su evolución política, consideradas también su organización y estructura jurídica-política-administrativa, el fuero conviene o no conviene para bien de la nación, si debe conservarse o debe suprimirse. Existen opiniones en pro y en contra de estos puntos y es lo que tal vez convenga que se analice y opine en esta conversación que ojalá sea útil para conocer nuestro sistema un poco mejor.

DIGNIFICACIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO

Viernes 11 de mayo de 2012

Es una obligación irrenunciable del Estado impartir justicia, sobre todo a quienes sufren circunstancias económicas raquíticas. Crear infraestructura material y humana para resolver los conflictos laborales es tarea importante del poder ejecutivo.

Dentro de la evolución y avance de los tribunales encargados de decir el Derecho y resolver los conflictos entre los particulares, existe una área de ellos casi olvidados, son los tribunales del trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje, el tribunal burocrático y el tribunal universitario.

La tardanza en la resolución de los conflictos obrero patronales, la aplicación incorrecta de la ley o la injusticia y falta de equidad en sus resoluciones, se traducen en daños económicos irreparables que afectan no sólo a los trabajadores sino también, gravemente, a pequeñas y medianas empresas.

Es entonces, muy importante mejorar las instalaciones materiales y la preparación de los servidores públicos que trabajan en las áreas encargadas de impartir la justicia laboral.

Situación actual

El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, concretamente de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, debe planear, programar, apoyar, dirigir, coordinar y evaluar el desempeño de los tribunales laborales. Existen dos direcciones que dependen de la mencionada subsecretaría, la Dirección General del Trabajo y la Dirección General de Promoción y Desarrollo Laboral. La primera se encarga de planear, apoyar, supervisar y coordinar el funcionamiento de las juntas locales de conciliación y arbitraje, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal del Trabajo Universitario, así como de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Hay cuatro juntas de conciliación y arbitraje, con sede en Guanajuato capital, Celaya, Irapuato y León; las tres primeras funcionan en pleno y la última se divide en tres juntas especiales.

Las obligaciones, facultades y atribuciones de los tribunales del trabajo se contienen fundamentalmente en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y la Ley Orgánica Universitaria.

Desde luego, por su población, el número de empresas ubicadas en su territorio y el número de trabajadores que la habitan, la ciudad que más conflictos genera es la ciudad de León, Gto.

En el año 2011, en el Estado de Guanajuato, se radicaron 14,718 conflictos individuales entre particulares, de los cuales, 1,180 correspondieron a Guanajuato capital y su zona de competencia; 2,694 a Celaya y su zona de competencia; 2,514 a Irapuato y su zona de competencia y 8,330 a León y su zona de competencia.

De los juicios individuales laborales planteados, aproximadamente el 65% se resolvieron conciliatoriamente. Ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, fuera de juicio, se celebraron 5,252 convenios. 40.6 conflictos diarios se resolvieron conciliatoriamente.

Estos números dan idea de la importancia cuantitativa que en el Estado tiene los conflictos laborales y también denotan la necesidad de que los organismos gubernamentales, tribunales del trabajo, inspección del trabajo y Procuraduría de la Defensa del Trabajo, den la solución a ellos, lo que sin duda redundará en tranquilidad social y mejor nivel de vida.

Son dos los requisitos a cumplir para que los tribunales laborales cumplan su función: instalaciones materiales adecuadas y capacitación y actualización permanente para todos los que integran dichos tribunales. En las instalaciones materiales se ha avanzado, las de ayer eran peores, las de hoy son malas, distan mucho de ser adecuadas.

Sin exageraciones ni ánimo de ridiculizar, trataré de describir los locales en que se ubican las juntas de conciliación y arbitraje: en la ciudad de Guanajuato, la junta está en los bajos de un edificio cercano a la Glorieta Santa Fe, a la entrada de la ciudad, desde luego, sin estacionamiento suficiente, en un espacio reducido que bastan 20 usuarios para saturarlo. Son notoriamente insuficientes.

En la ciudad de León, las instalaciones están en la Avenida Venustiano Carranza, desde luego sin estacionamiento, son amplias, rectangulares en un espacio semejante a un corral bardeado, dividido interiormente en cuatro corrales pequeños en uno de los cuales se instala la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y su sala de convenios y en los otros tres, cada una de las juntas especiales que funcionan. Para el desahogo de las audiencias los espacios se amueblaron con largos mostradores y múltiples ventanillas donde se amontonan los litigantes de un lado y del otro están los auxiliares de la Junta con mecanógrafas que levantan las actas de actuación. Hay monitores donde se va plasmando el contenido de la actuación, que pueden leer las partes, aunque con dificultad, y otro que lee el auxiliar y la mecanógrafa en turno. Sólo hay sillas para la mecanógrafa, los testigos y quienes declaran, así como los litigantes, deben permanecer de pie, a veces por varias horas.

En Celaya e Irapuato los locales son semejantes, el de Irapuato de reciente instalación. Son espacios bardeados y techados más pequeños que el de León, pero con características similares sobre todo por lo que hace a los mostradores en que se desahogan las audiencias. No reúnen las condiciones de idoneidad

para que el trabajo de buscar la verdad en cada juicio se desarrolle de manera digna.

Es aplicable lo que Aristóteles decía: "Hasta la práctica de la virtud requiere condiciones materiales indispensables para que se dé." A mi juicio, esas condiciones no existen en los tribunales del trabajo.

En cuanto al personal que integra esos tribunales necesita mayores motivaciones para el desempeño de su trabajo, cursos de actualización permanente para que mejoren su conocimiento de las normas jurídicas y jurisprudenciales que tienen que aplicar. Hace mucho que no se evalúa el trabajo de los tribunales en cuanto a su calidad y no existen establecidos ni sistemas ni procedimientos de esa evaluación. Para crecer hay que medir, para mejorar hay que evaluar.

En los asuntos litigiosos las resoluciones son tardías, la audiencia de ofrecimiento de pruebas siempre se suspende hasta que el pleno de la junta las califique, a fin de acordar cuáles se aceptan y cuáles se desechan. El pleno sólo se reúne los días jueves y casi siempre para discutir laudos, aunque la discusión se concreta a firmar los laudos y otros acuerdos que los presidentes de la junta les presentan. Los plenos de las juntas de conciliación y arbitraje, en términos generales, no trabajan y la verdadera tarea la desarrolla el presidente de la junta y los auxiliares de la misma. Durante el procedimiento los auxiliares de las juntas se transforman en jueces que dictan resoluciones, toman acuerdos, según su leal saber y entender.

En las diversas disposiciones que rigen el procedimiento laboral se establecen términos que teóricamente obligan a presidentes de las juntas y auxiliares para que dentro de esos términos se den los acuerdos. Si sumamos los días que los artículos 873, 884 fracción II, 885, primer párrafo, 886 y 887 otorgan a los funcionarios de las juntas para realizar el procedimiento nos dan un total de 50 días, que es el término legal para que concluyan un juicio laboral. La realidad es muy distinta, como ejemplo, citemos que en la Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje se tardan varios meses, a veces más de seis, para citar a la primera audiencia después de presentada la demanda y entre audiencia y audiencia, transcurren dos o tres meses.

Conviene mejorar la eficiencia del personal de las juntas, que los actuarios realicen emplazamientos y notificaciones con apego a la ley para evitar repeticiones que alargan el juicio. Que los tribunales se preocupen por cumplir con rigor los mandatos legales, incluyendo algunos casi olvidados, como el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo que impone a las juntas la obligación: "De tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." También las demandas deben estudiarse desde el momento de su presentación para que la junta subsane los defectos que la demanda contenga, como lo ordena el segundo párrafo del artículo citado y para que, en su caso, se hagan los señalamientos de los defectos u omisiones en que el actor haya incurrido y lo prevenga para que los subsane, como lo establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues la omisión de

estos actos puede propiciar concesiones de amparos para efectos de repetir el procedimiento, lo que alarga los juicios y los encarece.

La justicia dilatada se transforma en injusticia y en el caso del derecho laboral representa también daños económicos considerables, pues casi siempre en los conflictos laborales se reclaman salarios caídos y si se alarga el tiempo para dictar la sentencia final, el monto de los salarios caídos puede provocar el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. El ideal sería que personal capaz, actualizado, honesto, diligente y probo resolviese los asuntos laborales máximo en los 50 días que procesalmente se establecen. El estado debe multiplicar sus esfuerzos para que los tribunales del trabajo sean suficientes, ordenados y diligentes para lograr estos plazos. Esta es la justicia pronta y expedita que ordena el párrafo segundo del artículo 17 constitucional. Apoyar la dignificación, en todos aspectos, de los tribunales del trabajo, no es gasto, es inversión.

Debemos considerar también que tribunales cuya calidad decae o se deteriora, contagian esa condición al foro que ante ellos acude.

Un poco fuera de la justicia laboral quisiera hacer un apuntamiento sobre la importancia de la ley para resolver problemas sociales. Ninguna ley por sí misma resuelve un problema, necesita ser aplicada con imparcialidad, autonomía y diligencia, hay ocasiones en que un problema continúa irresoluto aunque se haya dictado una ley al respecto. El defecto es humano. Es defecto de aplicación.

El ejecutivo del Estado tiene facultades legislativas, puede iniciar leyes y en cada etapa de gobierno hay algunas que resultan de presentación obligada, puesto que deben adaptarse las vigentes a los propósitos y metas que el nuevo ejecutivo tenga, tal es el caso de las diversas leyes orgánicas del propio ejecutivo, de la Procuraduría de Justicia y de otros organismos y las leyes fiscales, que son de renovación periódica, pero el exceso en el número de leyes confunde y no orienta. Legislar por lucimiento o para lograr buena imagen es defecto, no virtud. Las normas innecesarias que no tienen su fuente real en necesidades sociales debidamente detectadas no favorecen en nada a la población, sino que al contrario, la perjudican, pues la maraña legal entorpece el funcionamiento de las instituciones públicas, dificulta el trabajo, lo burocratiza, aumenta la corrupción y obliga al gobernado a recorrer caminos enredados innecesariamente, retarda y entorpece todos los trámites.

Hay quienes califican la calidad de un congreso o de un legislador por el número de leyes que aprueba. Es un error. Legislar es también desenmarañar la selva normativa. Abrogar todas las leyes innecesarias. Las que no se aplican, las que son anacrónicas. Pocas leyes, cortas, claras y sencillas, permiten una mejor convivencia que muchas, largas, confusas y complicadas. Legislar para simplificar es facilitar la realización de la justicia para que se traduzca en tranquilidad social.

PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CIUDADANO CERO"

Del Dr. Jesús Zamora Pierce
Instituto Nacional de Ciencias Penales
México, D.F.
Lunes 24 de marzo 2014

Es un honor participar en este evento al lado de la Sra. Dra. Olga Islas y del Sr. Dr. Luis Raúl González Pérez, distinguidos mexicanos que cumplieron, cada cual en su momento, la delicada tarea de revisar y continuar la investigación del homicidio del señor licenciado Luis Donaldo Colosio. Su trabajo fue muy importante y, a mi juicio, apegado a la verdad.

Sr. Dr. Rafael Estrada Michel,
Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales,
Sr. Dr. Jesús Zamora Pierce,
Señoras y señores:

Me distingue que estén presentes en este acto el Sr. Dr. Sergio García Ramírez, el Sr. Dr. Ulises Schmill, Ministro Expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, la señora Ministra en retiro Victoria Adato y otras personalidades.

El señor Dr. Jesús Zamora Pierce, telefónicamente, me invitó a este acto para la presentación de su libro "Ciudadano Cero". De inmediato acepté, a pesar de que no había leído aún el libro, porque mi afecto y agradecimiento al doctor determinaron la imposibilidad de mi negativa. Lo conozco desde hace veinte años, cuando generosamente aceptó participar, como asesor, en la investigación del homicidio del señor licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Coadyuvó, de manera destacada en esa averiguación, aportando su capacidad profesional, su prestigio académico y su esfuerzo responsable.

Dicen los que saben, que los libros son un medio, más allá de la voluntad de su creador, que refleja el carácter y modo de ser de quien los escribe.

Cuando leí "Ciudadano Cero" encontré que, sin duda, revela la personalidad del doctor Zamora Pierce. Es un libro sencillo, claro, conciso, informado, sereno, objetivo y escrupulosamente respetuoso de todos los datos y personas que figuran en los textos consultados. Advierte al principio, con cierto buen humor, que no es necesario leer el libro porque su contenido consta en las sesenta y ocho mil doscientas noventa y tres páginas de los expedientes oficiales del caso y, agrega, que su libro es un memorándum de la investigación de los

trabajos, de quienes la realizaron y de las conclusiones a las que llegaron, como si fuera defecto y no mérito que sesenta y ocho mil doscientas noventa y tres páginas se sinteticen en sólo noventa y cinco hojas y media de que consta el texto.

No son pocas las virtudes que le atribuyo. Quiero hacer notar también que "Ciudadano Cero" es un libro ameno. Capta la atención del lector desde sus primeras letras. Es ágil y adictivo, lo leí en "una sentada", no pude cerrarlo y lo concluí donde dice: …"es la verdad". A mi esposa le pasó lo mismo, lo empezó a leer a las diez de la noche y lo terminó a la una de la mañana, hora en que me despertó para decirme que había concluido la lectura. Igual ocurrió con mi hija Rosa, que lo leyó en dos horas y treinta minutos. Es un libro que atrapa. Interesa por su tema y por su forma. Es veraz porque narra pegado a la realidad el desarrollo e incidentes de la investigación, sin disminuirlos ni exagerarlos. Es también oportuno, pues se presenta cuando se cumplen veinte años del homicidio del señor licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y cuando se repiten, en algunos medios de comunicación, varios de los mitos que se crearon en aquellos momentos y que a pesar de lo acucioso, extenso y profundo de la averiguación previa, no se han podido superar.

Muchas veces el acontecimiento de un magnicidio genera escepticismo e incredulidad en las conclusiones de la averiguación. Confío que "Ciudadano Cero" sirva para que con la información que proporciona, la brevedad y buena fe del contenido, los lectores se convenzan de que, en lo actuado, se llegó al conocimiento de la verdad y se extingan, así sea en pequeña parte, los fantasmas generados por la ignorancia o la mala fe. Ojalá se desvirtúe la frase pesimista de Albert Einstein: "¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio".

En las páginas de "Ciudadano Cero", se mencionan algunas de las personas que participaron en la averiguación previa que resumen el libro, en efecto, la averiguación no fue obra de una persona. Actuó, bajo mi coordinación, un equipo experto, responsable y capaz. Si se revisa el primer tomo del informe rendido en el mes de julio de 1994, se encontrará que está firmado por el señor doctor Rafael Moreno González, de intachable honestidad, prestigio y sapiencia, como Director General de Servicios Criminalísticos; el señor licenciado Mario Croswell Arenas, experimentado y honesto investigador ministerial, como Director General de Investigaciones; el señor licenciado Ignacio Navarro Rábago, como Coordinador de Asesores; el señor doctor Jesús Zamora Pierce, como asesor; el señor comandante Emilio Islas Rangel, como Director General de la Oficina Central Nacional de Interpol México; el señor licenciado Diego León Rábago, como Director General de Apoyo a la Investigación; el señor licenciado Carlos Torres Ramírez, como Director General de Apoyo al Proceso; el señor licenciado Adolfo Riva Palacio Neri, como Director General de Control de Documentos; el señor doctor Carlos Tornero Días, como Subdirector de Psiquiatría y Psicología Forense y Criminalística; el señor Gabino

Carrandi Ortiz, como Subdirector de Imágenes Fijas y en Movimiento y la señora Psicóloga Martha Graciela Miranda González como perito en psicología. En la hoja final se da crédito merecido, además, al señor licenciado Eugenio Trueba Olivares, como asesor, al señor licenciado Joel Hernández Santiago y a la doctora María Elena Alegría Escamilla y a otras personas que formaron parte de ese equipo. Fue una responsabilidad conjunta y las conclusiones presentadas fueron aprobadas con el acuerdo de quienes firmaron el informe, no por simple formulismo, sino significando su conformidad con él.

Menciono estas circunstancias para resaltar que los aciertos de la investigación fueron mérito del equipo y los errores fueron exclusivamente de mi personal responsabilidad.

El homicidio del señor licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, ha sido objeto de la indagación penal más extensa y profunda de ese tipo de acciones en historia de México; sus conclusiones se fundan también en peritajes científicos de personas de acrisolada honestidad, más allá de prejuicios, incredulidades, morbos o calumnias.

Felicito sinceramente al señor doctor Jesús Zamora Pierce, por su brillante esfuerzo al escribir "Ciudadano Cero" y hago votos porque la aceptación del mismo corresponda a la honestidad intelectual de tan destacado jurista.

PALABRAS EN EL RECONOCIMIENTO AL MAESTRO EUGENIO TRUEBA OLIVARES, POR SU OBRA JURÍDICA

Guanajuato, Gto.
16 de febrero de 2015

Agradezco y correspondo a la invitación que la doctora Teresita Rendón me hizo para asistir a este acto, que tiene como fin el reconocimiento a la obra jurídica del Maestro don Eugenio Trueba Olivares.

Me enfrento al cumplimiento de un encargo difícil; mi cercanía con don Eugenio me permite conocer que le incomodan los elogios y en múltiples ocasiones, pública y privadamente, lo ha manifestado; él se ha esforzado siempre por mantener su modestia imperturbada, pero nadie puede negar la valía de su obra jurídica y su ejemplaridad en el ejercicio de la profesión de abogado.

En el libro que editó la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, también como reconocimiento al Maestro Trueba, afirmé, y ahora lo reitero, que: "Eugenio Trueba Olivares es abogado y, como tal, no sólo ha ejercido la profesión postulando en su despacho, sino que ha sido maestro, juez, asesor de diversos funcionarios públicos, él mismo ha sido servidor público, Rector de la Universidad de Guanajuato en dos ocasiones, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y siempre, siempre, consejero de buena fe de todos los que han acudido a él solicitando su orientación: familiares, alumnos, amigos, abogados y clientes".

"Su calidad de abogado ha matizado toda su obra: la de maestro, la de director teatral, la de ensayista, la de cuentista, la de novelista, en fin, la de escritor, porque todos estos géneros ha cultivado e, insisto, su vocación por el Derecho se muestra en cada una de sus acciones".

"Su vocación jurídica está reforzada por una lúcida conciencia ética, no encuentra y no hay contradicciones entre lo moral y lo jurídico".

En el mismo libro editado por la Quincuagésima Octava Legislatura local, otro destacado y esforzado abogado, investigador y maestro de nuestra Universidad, mi compañero el Licenciado Diego León y Rábago, hizo un estudio muy amplio y sólido, de la obra de don Eugenio; sostiene que del pensamiento del Maestro Trueba, expuesto en libros, tales como Derecho y Persona Humana; El Hombre, La Moral y el Derecho; El Agravio en la Ley; El Pensamiento de Vitoria y otros, se desprenden varias tesis jurídicas fundamentales que, afirma, son de raíces principalmente tomistas, lo que sitúa al homenajeado dentro de la corriente neo tomista que surgió en el siglo XX y se desarrolló aceleradamente después de la desaparición de las grandes dictaduras y del neo socialismo alemán, en franca oposición a las posturas positivistas y

formalistas jurídicas y al materialismo marxista y, agrega, que "el principal mérito del autor, aparte de sus acertadas críticas a tales sucesos históricos y direcciones del pensamiento…, es el de integrar un sistema de pensamiento coherente y lógico, difícilmente vulnerable", señala Diego que el doctor Trueba propone las siguientes tesis, que resumo:

Primera. – "La afirmación de que para el estudio del Derecho es indispensable conocer las cualidades definitorias del hombre, pues es éste el protagonista del Derecho".

Segunda. – "…Sólo hay una esfera normativa y la consecuente negación de la neutralidad ética del Derecho, principal postulado del positivismo jurídico".

Tercera. – "…La existencia del Derecho mediante la afirmación de que su origen no puede consistir en otra cosa que no sea la necesidad de cumplir exigencias morales de convivencia. En este sentido el Derecho es una especie de sucedáneo de la moral social para suprimir o contrarrestar el estado de guerra, introduciendo un mínimo de orden para la conservación de la paz".

Cuarta. – "Con todo lo anterior el tratadista rechaza las principales propuestas y soluciones positivistas y formalistas, sin que por ello deje de reconocer sus escasos aciertos. En algunas ocasiones le escuchamos decir que el positivismo y el formalismo habían sido movimientos del pensamiento jurídico necesarios para someter a revisión y corrección los conceptos iusnaturalistas que habían caído en desprestigio por incurrir en desviaciones racionalistas individualistas. También lo escuchamos referir comentarios favorables a algunas aportaciones, como el análisis kelseniano de la estructura lógica de la norma" y sintetiza: "…el autor insiste en el postulado de que la obligatoriedad de los preceptos jurídicos no puede fundarse más que en su propio contenido de valor".

Quinta. – Sostiene el Licenciado León y Rábago que el doctor Trueba no apoya todo postulado iusnaturalista incondicionalmente, sino que, en diversos lugares de su obra, reconoce también los aciertos de las teorías formalistas y positivistas y se podrá aceptar que existen instancias permanentes, principios jurídicos fundamentales, no accidentales ni históricos, que explican, aprueban o condenan la ley positiva, no hay una dicotomía que coloque "al Derecho Natural como algo distinto y hasta antagónico del Derecho Positivo"; para Trueba, repite, "hay un orden normativo único por lo que no puede haber neutralidad ética del Derecho. Toda norma, sea jurídica o moral, persigue siempre el fin de perfeccionamiento humano por lo cual no puede haber diferenciación esencial entre la Moral y el Derecho".

"Por todo ello el doctor Trueba Olivares se sitúa dentro de la corriente de la resurrección moderna del Derecho Natural, como la denomina Edgar Bodenheimer, o del retorno del Derecho Natural, como lo llama Enrique Rommen". Fin de la cita.

La doctrina jurídica que sostiene el Maestro Trueba es consistente, congruente con su acción, pues don Eugenio no se quedó sólo inmerso en la teo-

ría, sino que en su quehacer cotidiano, se ha esforzado por llevar a la práctica sus tesis doctrinarias y mejorar la realidad en que vivimos. No ocurre con don Eugenio lo que otro gran jurista mexicano, don Felipe Tena Ramírez, señaló con cortés suavidad, en una de sus magistrales conferencias: la contradicción que tienen algunos abogados postulantes que en su práctica niegan lo que sostienen en sus libros y en sus cátedras, lo que hace parecer que se trata de dos personas diferentes, por el contrario, existe una gran identidad entre el pensamiento teórico que sostiene don Eugenio y su actuar profesional. De él aprendimos que la abogacía es esencialmente una consejería social, que empieza por analizar si el cliente tiene la razón legal y conlleva el deber de informarle el parecer del jurista y los riesgos que siempre existen, en mayor o menor medida, en todos los litigios. Si un postulante procura siempre defender a quien, desde su punto de vista, es asistido por la razón de la ley, no sólo se aumenta considerablemente la posibilidad de triunfar en un litigio, sino que también se traduce en mayor prestigio del abogado. Esto no significa que no merezca orientación la persona a quien no respalda la norma, vale y se debe sacarlo de su error, de su ignorancia o de su mala fe y conviene defenderlo para buscar un arreglo conciliatorio, justo, entre las partes en conflicto. Solamente así se cumple la obligación ética permanente del jurisconsulto: resolver los conflictos de la mejor forma que existe, tal vez la más equitativa y la más eficaz, la conciliación, vía que don Eugenio defiende en su libro El Agravio en la Ley y se estableció en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato, de la que fue corredactor.

Nos enseñó a no ensoberbecernos de los supuestos conocimientos y habilidades jurídico-procesales y a no encarecer desmedidamente la prestación del servicio profesional, pues son la sociedad y la vida en comunidad y el estado organizado para impartir justicia, los que dan valor al trabajo abogadil. ¡Qué inútil hubiese sido para Robinson Crusoe en su isla desierta ser abogado!

El licenciado Trueba, insisto, no se ha quedado en la prédica, siempre ha pasado a la acción; notó que hacía falta la orientación ética a los alumnos de la Facultad de Derecho y a muchos abogados e influyó, destacadamente, para que se creasen las clases de Ética Profesional y la de Hermenéutica Jurídica, de las que fue titular y evitó que el programa de estudios de la Ética fuese sólo, vicio frecuente, una historia de las doctrinas éticas; se preocupó por enseñar que la ética más que aprenderse se vive, que lo importante y trascendente es descubrir y realizar el valor de lo bueno; con sencillez y claridad estableció, en puntos concretos, qué debe hacer un abogado en los casos que se le presentan para salvar la eticidad e incluye en su Ética Profesional para el Ejercicio del Derecho, capítulos que desde su nombre y sus subtítulos reflejan las preocupaciones profundas del autor e indican los caminos sencillos para evitar desvíos éticos a todos quienes trabajan en la creación, la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas; su libro es de una practicidad clara y sencilla que invita a cumplir el deber y enseña cómo hacerlo.

Don Eugenio Trueba Olivares como abogado postulante, ha defendido con pasión el cumplimiento del Derecho para lograr la realización de los valores que le son substanciales: la seguridad y la justicia, pero insistiendo en que se complementan y que una seguridad para cumplir una ley injusta no sirve a la sociedad y la justicia sin certeza produce incertidumbre perniciosa. Algunas anécdotas que he compartido con él, hacen patente su vigor en la defensa de la justicia.

Hubo una vez que reclamó la negativa de la protección constitucional a un trabajador burocrático que la merecía, por la excesiva condescendencia que, a su juicio, tuvo la autoridad federal con el gobierno del estado; no existía entonces la ley regulatoria de las relaciones laborales entre los trabajadores estatales y municipales con sus patrones y la única vía para su defensa era el juicio de amparo; el perjuicio para el trabajador, cuando se negaba el amparo, era irreparable; ante esta circunstancia el licenciado Trueba que tenía cercanía con la autoridad resolutora, le reclamó y, ante el reclamo, la resolutora le contestó que no tenía derecho a excederse en sus palabras. El Maestro Trueba reconoció su exceso y presentó la siguiente jurídica excusa: "tienes razón, sigo pensando que te faltó valentía para hacer justicia, pero eso no me da derecho a decírtelo, interpondré la revisión".

Recuerdo también otro asunto en que un hijo demandó a sus padres, que poco a poco, con trabajo esforzado y desde muy jóvenes habían acumulado un número considerable de bienes inmuebles y habían puesto varios de ellos a nombre de sus diversos hijos para que, cuando ellos, los padres, fallecieran, los hijos ya fuesen propietarios de esos bienes. En la demanda se reclamaba a los padres no sólo la entrega de los bienes al hijo, ya mayor de edad en esos momentos, sino la rendición de cuentas de la administración que los padres habían realizado durante muchos años, más de quince posteriores a la mayoría de edad del actor; colitigamos el asunto y se probó que los padres, mediante la prescripción adquisitiva del derecho real, eran los titulares del usufructo vitalicio, por el tiempo transcurrido posterior a la mayoría de edad del hijo demandante y, en consecuencia, se les absolvió de rendir cuentas de la administración y de devolver los bienes mientras viviesen y se reconoció la nuda propiedad a favor del hijo. Nuestros clientes se beneficiaron con varios millones de aquellos pesos, continuaron disfrutando los inmuebles y nosotros cobramos los honorarios pactados que, según recuerdo, fueron setenta y cinco mil pesos, eso sí, en cómodos pagos mensuales de tres mil pesos.

Para don Eugenio los honorarios cuantiosos nunca han sido la causa eficiente de su ejercicio profesional.

Narraré dos casos más: un abogado notable, ex alumno del Maestro Trueba, le pidió opinión sobre un caso complicado que llevaba; en una servilleta en el café "Valadez", donde se encontraban, manuscribió sintéticamente lo que debía hacerse, precisando los pasos procesales a seguir. Creo que el asunto lo

ganó el consultante que aceptó la recomendación y a cuyo cargo estuvo, desde luego, el pago del costo de café.

En otra ocasión, el licenciador Hilarión Espinoza Ayala y yo, que compartíamos el despacho con él, acordamos, para poder cobrar nosotros lo que creíamos conveniente, solicitarle elevase sus emolumentos y argumentos que si él, con su trayectoria y su prestigio, cobraba tan poquito, nosotros tendríamos que solicitar menos, lo que no nos permitiría mantener el despacho; se convenció de nuestras razones y ofreció cobrar adecuadamente e, incluso, preguntarnos el monto. A los pocos días una señora, por cierto, de nacionalidad estadounidense, lo visitó para hacerle una consulta, el doctor Trueba la atendió, desahogó la consulta, la orientó y la señora le dio las gracias y se fue; en ese momento el Maestro Trueba se acordó de lo que habíamos conversado, salió de su privado y en voz alta le dijo a la dama: "señora no le he cobrado", ella contestó: "tiene razón licenciado, ¿cuánto le debo?"; él con voz clara le contestó "son veinte pesos".

Han sido múltiples y variados los temas jurídicos que el doctor Trueba ha abordado con un enfoque crítico-constructivo, lo ha hecho en artículos, ensayos, libros y clases. No está de acuerdo con el exceso de leyes que crean una impenetrable maraña jurídica y coadyuvó en la hechura de la Primera Compilación de Leyes del Estado de Guanajuato, editada por la Quincuagésima Primera Legislatura local[46], a fin de averiguar con certeza cuáles eran las vigentes e innecesarias para, en un limpio trabajo legislativo, abrogarlas.

Está convencido que el centralismo exagerado subsiste en México y lo conveniente es disminuirlo, para ello, hace años, presentó ante el Pleno de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo, en su carácter de miembro numerario, la proposición de que se creasen las juntas regionales de conciliación y arbitraje, moderando los viajes obligados a la ciudad de México de trabajadores y abogados, pues allí radicaba la única junta de conciliación y arbitraje del país. Esta propuesta se aprobó y fue antecedente de la actual organización de las juntas de conciliación y arbitraje, por cierto, ya insuficientes. Por la misma razón y para evitar el abuso del juicio de amparo, como Presidente del

[46] Nota de las compiladoras. El Lic. Montes García fue Diputado Local a la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 1979-1982.- Fue Presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso Local del Estado de Guanajuato e inspirador de la transformación del Congreso para lograr su funcionamiento autónomo. Creó la biblioteca del Congreso Local. Propició el nacimiento del Diario de los Debates en dicho Congreso, que se edita hasta el presente. Inspiró la modernización del Congreso Local. Promovió la reforma constitucional del artículo 63 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a la que se adicionó la facultad-obligación de "hacer la codificación de las leyes del Estado"; antes de esta reforma ninguna autoridad codificaba las leyes que sólo se promulgaban en el Periódico Oficial. También a raíz de esta reforma se hizo la primera Compilación de Leyes del Estado de Guanajuato. Desde entonces y de manera periódica el Congreso Local continúa publicando actualizadas las leyes vigentes en el Estado.

Supremo Tribunal de Justicia, en una asamblea nacional de los presidentes de tribunales de justicia mexicanos, propuso la desaparición del llamado amparo de casación; sostiene, con razón, que el juicio de amparo no nació para combatir resoluciones judiciales, sino como defensa contra los actos inconstitucionales de las autoridades distintas a la judicial; le parece que el amparo casación impone a los jueces locales un capitis diminusio que contradice al federalismo jurídico y lo sujeta a un control central exagerado.

Sabe que las leyes largas y farragosas no ayudan a la impartición de justicia y desea pocas leyes, claras, sencillas, sin casuismos inútiles y confundidores. Sostiene que la ley, por sí misma, no resuelve ningún problema, es su aplicación la que los atenúa, por lo que importa más un buen juez que una buena ley.

No quiere la excesiva penalidad para ningún delito porque lo importante no es aumentar la pena sino abatir la impunidad.

Está convencido que los procedimientos complejos y largos impulsan las trampas procesales, alargan los juicios y fomentan el criterio erróneo de que los mejores abogados son los que conocen y crean más intrincados vericuetos procedimentales. Ha procurado y procura la sentencia pronta porque una solución tardía daña a todos; la justicia diferida no es justicia.

Quiere el cumplimiento del principio jurídico de que a los jueces se les den los hechos y ellos aporten el Derecho y no se opone a aumentar las facultades investigatorias del juez, no sólo en los casos para mejor proveer que, por desgracia, raras veces se ejercitan, sino siempre.

En nuestros desayunos de los viernes soñamos con un procedimiento único en que el juez, receptor de los hechos, indicase a las partes, con la mejor buena fe, las pruebas que cada una de ellas debe aportar para demostrar los hechos en que funda su pedimento. No considera desechable, a priori, la universal suplencia de la queja porque el defecto de la petición no supone la injusticia de la causa. No saber pedir no es sinónimo de no tener razón.

Asevera que conviene utilizar en todos los procedimientos jurídicos los modernos medios tecnológicos que guarden sus testimonios, siempre y cuando faciliten y abrevien el tiempo para dictar las sentencias y no encarezcan excesivamente el costo del cumplimiento de la obligación estatal de salvaguardar el Derecho.

Maestro Trueba:

En una entrevista que le hizo don José Argueta Acevedo, le preguntó: "¿existe el Truebismo?" y usted contestó textualmente: "No, no existe. Esos cuentos de algún periodista. A veces se me señala como interventor de algunos acontecimientos y yo soy el primero en sorprenderme de que ande metido allí. Pero con toda sinceridad le digo que no he creado ninguna capilla, ningún grupo, ni ninguna mafia. Tengo buenos amigos, en todas partes, pero hasta allí". Respondió usted la verdad, pues la pregunta se refería al "Truebismo" político-partidario o electorero y en ese sentido como grupo nunca ha existido; pero la respuesta creo que no vale si se aplica a otros aspectos, pues existe

el "Truebismo", por lo menos en Guanajuato, como corriente de pensamiento jurídico, como corriente de preocupación social, como corriente cultural en el teatro y como ejemplo de buen servicio a la Universidad, a la comunidad guanajuatense, en la ciudad de Guanajuato y en el Estado. A esta corriente que, afectuosamente y con respeto, quiero llamar "Truebismo", pertenecemos muchos abogados de Guanajuato, no sólo sus alumnos de cátedra, sino también quienes han leído sus libros y escuchado sus conferencias y pláticas sobre el Derecho.

He procurado no pronunciar ningún halago ni exagerar, por el afecto que le tengo, sus virtudes. Si algún elogio dije, ruego su comprensión, después de todo se trata de un acto de reconocimiento que usted merece ampliamente. Sin faltar a la verdad, sin exageración alguna termino reiterando que el Maestro don Eugenio Trueba Olivares es un auténtico valor del mejor Guanajuato.

PRESENTACIÓN DE EL LIBRO "CIUDADANO CERO"

Del Dr. Jesús Zamora Pierce
Capítulo Guanajuato de la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados
Miércoles 6 de julio de 2016

Señor Doctor Jesús Zamora Pierce,
Señor licenciado Adolfo Anguiano González,
Compañeras y compañeros integrantes del Capítulo
Guanajuato de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados,
Señoras y señores, amigos todos:

El idioma español tiene palabras que sus hablantes utilizan diariamente millones de veces y a pesar de ello no se gastan, conservan su significado y el tono de voz con que se pronuncien, lo acentúa o lo debilita según el matiz y el énfasis con que la palabra se emita. Son palabras "diamante", resistentes al deterioro de su uso diario. Después de ser manifestadas es difícil agregar algo más, pues su significado cumple la función de transmitir el sentimiento que se quiera expresar.

Hay personas y acciones que por su sapiencia y generosidad merecen la gratitud que es tan difícil de expresar plenamente. Se entiende esta dificultad, porque, "la palabra" es insuficiente para transmitir la diversidad de emociones que experimenta el ser humano y ante esta insuficiencia de "la palabra" nacen las artes, la pintura y la música, por ejemplo, trasladan mejor los sentimientos y el valor belleza que la sola expresión verbal. La poesía se acerca más a la transmisión de emociones, a través de la palabra.

La palabra se agota y es insuficiente para significar a alguien lo que en gratitud se le adeuda, por su obra y por su buena voluntad.

Usted, señor doctor Zamora Pierce, el día de hoy nos ha presentado un libro sencillo, claro, conciso, informado, sereno, objetivo y escrupulosamente respetuoso de todos los datos y personas que fueron actores o figuraron en los hechos y en la averiguación previa en que se investigó el homicidio del señor licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El libro refleja, más allá de su voluntad, el carácter y la personalidad del autor. Hace comprensible un tema que conmovió, hace 22 años a la comunidad nacional y cuya investigación fue dubitada ampliamente, tal vez porque los magnicidios tienen, como una de sus consecuencias perversas, el escepticismo social y este homicidio sembró inquietud y dudas porque ocurrió en momen-

tos críticos de la política nacional, coincidió con un movimiento revolucionario que fue más mediático que real, pero dañó las instituciones: el llamado movimiento zapatista en Chiapas. A esta coincidencia se aunó la debilidad y el desgaste de un gobierno que se va, también las escaramuzas de rebeldía interna dentro del sistema, por el protagonismo del señor licenciado Manuel Camacho Solís; todavía más, estuvieron presentes intereses político-electorales y acciones y omisiones erráticas de quienes concluían su ejercicio de gobernantes.

Estoy seguro que *Ciudadano Cero* coadyuvará a extender el conocimiento de la verdad y a extinguir los fantasmas y fantasías que generan la ignorancia y la mala fe. Ojalá se desvirtúe la frase pesimista de Albert Einstein "¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio."

Señor Dr. Zamora Pierce, por su libro, por su importante coadyuvancia en la investigación de que su libro trata, por su honestidad intelectual, por su buena fe y por su presencia esta tarde con nosotros, mis compañeros barristas y yo, le ofrecemos la mejor palabra que en su significado auténtico y en mérito de usted, podemos pronunciar: "Gracias". "Muchas gracias".

PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE INNOVACIÓN LEGISLATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato.
23 de mayo de 2017

Sinceramente felicito a los inspiradores, organizadores y participantes en este foro. He escuchado con atención las brillantes exposiciones de quienes han participado, tanto panelistas como conversantes. Desde luego y como es natural en un evento de la Cámara de Diputados coincido y difiero parcialmente de lo que aquí se ha dicho. Afirmo que la coincidencia y la diferencia son naturales porque la esencia del Poder Legislativo sobre todo de una Cámara de Diputados, es la discusión en absoluta libertad y el diálogo político, a veces apasionado y a veces sereno. A veces creativo e informado, a veces agresivo, tal vez desordenado, pero que debe siempre tener como denominador común la convicción honesta y firme del representante popular que en esa Cámara se expresa.

Una obligación y un derecho tal vez no expresados en las constituciones que crean y norman a los poderes legislativos es que éstos, son un foro de los sistemas democráticos plenos, o que aspiran a serlo, para manifestar ante la comunidad que representan, sus consensos y diferencias.

Soy un convencido que las cámaras de diputados y de senadores, sean parlamentos o poderes legislativos, necesariamente faciliten la expresión de consensos y discrepancias sociales, acuerdos y desacuerdos, que con el diálogo como instrumento permitan, deben permitir, desahogos dentro de sus recintos para que las rebeldías populares no sólo puedan expresarse, y menos con violencia, en plazas públicas y calles.

Dentro del quehacer de un congreso, siempre me ha parecido que "hacer la ley" es su mayor responsabilidad y privilegio y tiene que entenderse que además de su contenido para lograr igualdad, equidad, generalidad y justicia la ley debe ser clara, sencilla y breve. Huir del casuismo es una obligación ética del legislador. La generalidad de la norma es requisito para su correcta aplicación. No es verdad, ahora se dice mucho a través de los medios de comunicación escritos y hablados, que faltan leyes para resolver problemas sociales. Parece que se quiere que haya una ley para cada caso concreto. Esto es imposible y no es adecuado esperar a que se legisle, insisto, casuísticamente para castigar delitos que se cometen con alta frecuencia, aduciendo falta de normatividad. La técnica jurídica bien aplicada y aprovechada hace viable el cumplimiento

de la norma. Su generalidad, su claridad y precisión del lenguaje facilitan la interpretación de los jueces y salvaguarda mejor los derechos de las personas.

Esta mañana, aquí, se han expresado por los diversos participantes muchas verdades alrededor de los quehaceres de los congresos. Yo quisiera olvidarme de las profundas doctrinas que han fundamentado los brillantes conceptos oídos y con la modestia de mi capacidad y experiencia dar, para concluir mi intervención, algunas "recetas caseras" que a mi juicio deben plasmarse en toda norma:

1.- Generalidad en su contenido.
2.- Sencillez, brevedad y precisión en su forma.
3.- Buena intención, buena fe y lógica en su propósito.
4.- Procurar en todo lo posible, no crear organismos enormes que sólo aumentan la burocracia, necesitan de muchos recursos económicos para su funcionamiento, lo que encarece monstruosamente el gasto público.
5.- Es falso que sea mejor legislador el que hace muchas leyes y muy largas y complicadas.
6.- Evitar la creación de trámites repetitivos e inútiles que facilitan la corrupción y dilatan las resoluciones de fondo que el gobierno está obligado a propiciar.
7.- Auxiliar a todo usuario a recabar de distintas fuentes gubernamentales la información que el mismo gobierno exige y que juzga necesaria para otorgar autorizaciones, permisos o licencias, solicitando y proporcionándose entre dependencias de manera directa los datos que se requieran. Es atentatorio contra la gente originar esas peregrinaciones dolorosas entre ventanilla y ventanilla de burócratas que con los modernos sistemas de comunicación tienen toda esa información a través de un programa electrónico y de una computadora.
8.- Procurar que en toda ley, en forma oficiosa y rápida, el Estado y gobierno suplan las carencias del gobernado; así también se evita la tramitología. Será un avance que se aprecie.

A veces la mejor innovación es volver al origen del objeto que pretende innovarse y el trabajo de los congresos y de todo el gobierno se superaría, creo, con sencillez, conocimiento, buena fe, vocación de servicio, respeto a los dineros públicos, honestidad, que principia por conocer las propias capacidades y sólo aceptar cargos públicos que puedan desempeñarse eficazmente con esas capacidades. Nadie puede ser "ajonjolí de todos los moles". Contar con el equipo de apoyo necesario para ganar eficacia pero que nunca implique delegación ilegal de responsabilidades.

Deseo que los asesores orienten pero no sustituyan, ofrezcan alternativas de solución pero no resuelvan. La responsabilidad no es delegable.

Agradezco su paciencia al escucharme y ofrezco disculpas por los errores que seguramente cometí.

EL DERECHO Y SU UTILIDAD SOCIAL

Palabras dichas por el licenciado Miguel Montes García,
y otras aportadas por egresados distinguidos de la
Escuela de Leyes de la Universidad de Guanajuato,
con motivo del 190 aniversario de la fundación de esa Escuela.
Miércoles 13 de septiembre de 2017

(NOTA 1). Conmemoramos, con alegría el Centinonagésimo Aniversario de lo que fue la Escuela del Foro, luego Escuela de Leyes, después Facultad de Derecho y ahora División de Derecho, Política y Gobierno. Más allá de la variación de sus nombres, durante 190 años ha conservado su esencia: enseña el Derecho y sus valores; la forma en que éste se crea, sus finalidades sociales, cómo aplicarlo, conservarlo y enriquecerlo.

A los que fuimos alumnos de esta Escuela -de alguna manera aún lo somos- se nos enseñó que la ley es sustancialmente instrumento que debe ser utilizado por el hombre para facilitar la convivencia en sociedad a través de la realización de valores como la justicia, la seguridad, el respeto a los demás, incluidos los diferentes. En resumen la salvaguarda del Derecho ajeno. Con la aplicación del Derecho debe conservarse y restaurarse la armonía social y solucionarse los naturales conflictos que la convivencia genera. Es el Estado, el gobierno y sobre todo los jueces, quienes se encargan de establecer o restablecer la vigencia de las normas jurídicas con resoluciones prudentes y fundadas, también, si es necesario, con la aplicación de la fuerza, cuyo monopolio detenta el Estado. Un gobierno legítimo tiene la obligación, en casos extremos, de reprimir a quienes causen conflictos y cometan violaciones legales que dañen y pongan en riesgo la vida pacífica de una comunidad humana.

En esta Escuela aprendimos que la norma jurídica debe tener un contenido valioso, que su finalidad principal es realizar la justicia. También aprendimos que conocer y definir lo que es la justicia es altamente difícil y su estudio, en algunos momentos, se puede contaminar con subjetivismos que deterioran el concepto. Hay quienes sostienen que la justicia es un indefinible, pero no por ello concluimos que sea irrealizable, pues, como lo sostiene el maestro y doctor Eugenio Trueba Olivares, afirmamos:

"El problema de la justicia, no representa una crisis de orden especulativo, sino que es un problema práctico, de ejercicio, de buena voluntad." "Si muchas veces no se realiza es por fallas de conducta y no por ignorancia de la medida. Un mundo que observarse un mínimo de normas justas, perfectamente conocidas y al alcance de todos, sería un mundo mejor...". El doctor Trueba agrega: "La voluntad de observancia es la que flaquea y defrauda. Debemos

combatir con valentía ese vicio humano que consiste en achacar los fracasos sólo a las teorías o a los programas y no a su ejecución. Hay un impulso que nos inclina a declararnos equivocados o ignorantes en vez de infractores. Es el mismo impulso que nos lleva a excusar nuestras desviaciones alegando que no sabíamos qué era la justicia, en vez de reconocer nuestras injusticias, así seamos los primeros en invocar la justicia cuando somos las víctimas."

No se puede negar que todos intuimos, sentimos, sabemos cuándo una acción es justa o injusta y en caso de duda encontramos apoyo para saberlo en la opinión de los prudentes plasmada en estudios profundos y resoluciones previas. Todo ello es orientador.

En la Escuela de Leyes de esta Universidad aprendimos que el abogado debe ser un profesionista comprometido para que en su casa, en su ciudad, en su entidad federativa, en su país y en el mundo, impere la justicia; que cuando por las flaquezas del ser humano se lesiona tan alto valor y parcial o totalmente cesa su vigencia, tiene que ocurrir que a través de procedimientos generales previamente establecidos, se restituya prontamente su plenitud. La abogacía es una ciencia social que estudia el Derecho, mismo que descansa en principios generales profundos e inalterables, tales como hacer el bien y no el mal, respetar la vida, cumplir las obligaciones voluntariamente adquiridas y otros salvaguardados en la ley y, aunque en sus manifestaciones fácticas las leyes a veces se contradicen, son variables, hasta se pervierten por el juego de múltiples intereses y crean conflictos, las mismas leyes proponen soluciones por la vía del Derecho.

El Derecho como instrumento general de convivencia y de gobierno, la norma jurídica positiva, no se da en forma silvestre, no nace en campos sin cultivo y simplemente se cosecha, no, el derecho positivo es creación humana y tiene, como tal, defectos explicables que deben ser superados. A veces es de difícil hechura y comprensión, por eso debe ser estudiado a profundidad para conocerlo y luego aplicarlo.

El ejercicio profesional del abogado no se agota con la actividad litigiosa, tiene que hacer, materialmente, la norma, ya sea como asesor o como legislador y si la norma que haga no es clara, sencilla, breve y a la vez profunda y con un alto contenido de valor para la justicia, perderá su utilidad social. Nunca debe olvidarse que la norma jurídica será aplicada por abogados y hombres que no la hicieron y debe bastar una simple lectura para comprenderla y saber cómo aplicarla. Es muy sano que jurisperitos distintos a los hacedores de la norma la apliquen y fijen su alcance y su finalidad; es muy sano también que la persona cuyos intereses se afectan por esa norma, entienda claramente su contenido. Si ya sabemos que el principal problema de la justicia es su cumplimiento y aplicación, tenemos que concluir que la sencillez y la claridad de la forma, son requisitos del correcto derecho.

Es más frecuente de lo deseable que en nuestro ejercicio profesional, los abogados tengamos que luchar para superar defectos de nuestra organización

político-gubernamental, tales como malos servidores públicos, por deshonestidad o pereza, desleales contrapartes que interpretan lo jurídico de manera torcida para beneficiarse con esa interpretación, excesiva burocracia que sólo establece procedimientos para conservar los cargos o multiplicarlos, lo que genera trámites engorrosos que lesionan la buena gobernanza; jueces venales -por fortuna en el medio guanajuatense sólo por excepción- que tuercen el sentido de la norma y pervierten su aplicación. Ya lo dije, el propio sistema normativo crea remedios cuya aplicación alivia estos males, tales son las instancias de apelación y revisión, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, todos ellos, al alcance sólo de abogados altamente capacitados en la difícil técnica procesal.

La vida moderna implica especialización de las actividades individuales y si bien es conveniente tener conocimientos generales sobre muchos temas, es indispensable la profundización en algunos particulares para lograr la eficacia. Por eso es importante que nuestra Escuela avance en sus salidas de especialización por materias.

No es posible, en un evento de esta naturaleza, analizar la totalidad de la problemática que confronta el ejercicio de la abogacía, pero sería inexcusable que no me ocupara de uno de los obstáculos más difíciles de superar que nuestra profesión confronta: la mala ley.

Para nuestro ejercicio profesional partimos del supuesto, que la norma ha sido hecha por conocedores de la técnica jurídica, de buena fe, que pretende la realización de valores de justicia, y que su aplicación se traducirá en facilitamiento de la convivencia y justicia sociales; sin embargo a veces, debido a intereses de grupos económicos o políticos, o por creencias fanáticas que llevan a la distorsión de la norma y también por la ineficiencia y falta de preparación del facultado para legislar, se hacen mal las leyes y éstas deben ser combatidas por el abogado, porque no sólo dañan a él, sino la comunidad a la que el abogado debe servir. Es tema interesante para nuestra Escuela averiguar cómo combatirla. Los abogados necesitamos aprender a, sin romper un sistema jurídico integrado, combatirla, a moderar los defectos de una norma, utilizando en su interpretación y en su aplicación la equidad entendida como el mejoramiento de la justicia en su aplicación en cada caso concreto.

Ratifico mi opinión: a la Universidad ningún problema social le es ajeno y cada día debe ampliar su acción para afirmar su vocación de ser rectora, guía responsable de orientar en todos sus temas a una comunidad cada vez más compleja por sus avances tecnológicos y más demandante de consejo por su pluralidad e integración por individuos distintos. Acción previa para avanzar en este fin, pienso, es la comunicación entre la División de Derecho Política y Gobierno, con sus egresados. Un buen principio será conocer lo que varios de ellos, todos abogados distinguidos, preparados y probos le dicen a su Escuela con motivo de sus 190 años de edad. Para averiguarlo, mediante comunicación directa solicité su coadyuvancia, me la otorgaron y me autorizaron para

hacerlo saber públicamente; me comprometí a ello y ahora lo cumpliré. (Nota 2). Leo de manera textual lo que le expresan a su Escuela:

1.- El Maestro y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guanajuato, don Eugenio Trueba Olivares, rector en dos ocasiones de esta Universidad, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato e insigne maestro de múltiples generaciones, autor de varios libros de Derecho y otros temas, afirma:

"Siempre agradeceré a mi Escuela el haberme formado profesional e intelectualmente, impulsándome a la búsqueda de la verdad en las razones y en los fines del Derecho."

2.- El licenciado Diego León y Rábago, catedrático, investigador universitario, ex magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dice:

"La vida profesional y la enseñanza del Derecho me han hecho comprender que la abogacía no es, en esencia, un juego de argucias o artimañas para satisfacer intereses oscuros o evadir deberes lícitos. Quienes en eso la convierten, la desvirtúan y desprestigian. El ejercicio de tal profesión, para lo que en realidad fue creada, demanda sujeción al verdadero Derecho; al que, mediante normas y principios, pretende la realización de los más importantes valores: justicia, orden, bien común, seguridad, vida humana, convivencia y patrimonio, entre muchos. Mi Universidad, mi Facultad, todavía con esa convicción, da a luz abogados y, sólo por desafortunada excepción, alguno que otro leguleyo."

3.- El doctor Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, actual magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del centro auxiliar de la décima región, afirma:

"La verdad, la libertad, el respeto, la responsabilidad y la justicia, son valores en los que la Universidad de Guanajuato sustenta su misión. Agradezco profundamente a mi alma máter, por haberme formado en las aulas de la Facultad de Derecho, donde viví una de las épocas más hermosas de mi vida, conocí entrañables amigos, y extraordinarios maestros que compartieron sus conocimientos y visión del Derecho con gran sentido humano, lo que sin duda ha influido profundamente en mi práctica profesional al servicio del país."

4.- El magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo con residencia en Guanajuato, Gto., Sergio Pallares y Lara cita a Mario Benedetti y señala:

"Dale vida a los sueños que alimentan el alma,
y aunque tu mente sienta necesidad humana
de conseguir las metas y de escalar montañas,
nunca rompas tus sueños,
porque matas el alma.
Dale vida a los sueños que tienes escondidos,
descubrirás que puedes vivir esos momentos

con los ojos abiertos y los miedos dormidos,
con los ojos cerrados y los sueños despiertos."

Hasta aquí la transcripción del poema de Benedetti y el licenciado Pallares y Lara agrega:

"Sin duda que la redención de las sociedades se puede alcanzar por las vías del estado de derecho y tú, querida Escuela, años ha, nos cobijaste bajo tu manto de sabiduría y nos enseñaste a soñar en la justicia; estimulante nuestra mente y nuestro espíritu, para que al salir de tus aulas buscáramos en el ejercicio de nuestra profesión la verdad y lucháramos por la justicia. Los derroteros de la vida nos llevaron a las distintas ocupaciones profesionales en las que pusimos en práctica las enseñanzas de nuestros inolvidables maestros; y los logros alcanzados, aunque personales, no podrían haber sido un feliz acontecimiento, sin haber transitado en nuestros años mozos por tus espacios de sabiduría y sin haber abrevado los valiosos conocimientos de los maestros que apoyan nuestra formación. Y, a la manera de Benedetti, a la distancia de los años, nos siguen impulsando los sueños que desde tus aulas alimentaron nuestra alma; seguimos la incansable búsqueda de la justicia a que nos motivaste, con los ojos cerrados y los sueños despiertos. ¡Gracias, alma mater, por habernos dado esa maravillosa oportunidad!"

5.- El señor licenciado José de Jesús Quezada Sánchez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del décimo sexto circuito, sostiene:

"Toda palabra es una maravilla cuando se trata de hacer de ella una forma de agradecer algo, en el caso, a una institución como lo es nuestra alma mater en este importante aniversario. Sin embargo, expresar un pensamiento en pocos renglones es una encomienda difícil por lo que ello representa y por la trascendencia que tiene. Parece que fue ayer cuando, con entusiasmo, pisé por primera vez el patio de estudios de nuestra Facultad de Derecho, empero, son más de 42 años que egresé como abogado de una de las principales facultades del país, que tanto talento ha dado a nuestra patria; por ello, me siento orgulloso de ser parte de esa Escuela y por lo mismo, es obligado hacer un pleno reconocimiento a todos y cada uno de los maestros que dejaron su vida y sus enseñanzas para poder contribuir con un grano de arena en el bienestar de nuestro país; enunciar sólo a unos cuantos sería cometer una injusticia ya que cada uno de los mentores aportaron sus conocimientos para lograr finalmente nuestro objetivo. Viva nuestra Universidad, viva la Facultad de Derecho y viva Guanajuato."

6.- El señor Doctor Pedro López Ríos, que fue magistrado y Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo e investigador en el Departamento de Investigaciones Jurídicas de nuestra Escuela, reflexiona:

"Nuestra antigua Escuela de Derecho ha sido fiel a su origen y a su vocación, como:

Una genuina comunidad académica y humana; generosa en su interior, con sus conocimientos y vinculada profundamente a su sociedad.

Auténtica madre y maestra para todos quienes han acudido a sus aulas, sin discriminación alguna, pero especialmente para los desheredados.

Cuna de egresados con visión y compromiso con su país, en muy diferentes ámbitos. Así, en el Poder Judicial Federal, han tenido presencia destacada en el periodo de 1917 a la fecha, 21 ministros guanajuatenses en la Suprema Corte de Justicia, de los cuales ocho han sido egresados de nuestra institución, uno de ellos Presidente de la Suprema Corte.

Enrique Colunga Meade
Julio García Pimentel
José López Lira
Nicéforo Guerrero Mendoza
Luis Chico Goerne
Euquerio Guerrero López
Agustín Téllez López de Lara
Miguel Montes García"

7.- El señor Armando Trueba Uzeta, joven y brillante abogado, exdirector jurídico del Banco Nacional de Comercio Exterior, ex consejero ciudadano propietario del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato y actual catedrático de nuestra Escuela, sostiene:

"En el Estado de Guanajuato existen más de 50 escuelas de derecho, la de la Universidad de Guanajuato es la única prácticamente gratuita y, sin duda, siempre la mejor calificada. Sus egresados somos hijos de la educación pública. Gracias por la educación humana, técnica y laica; gracias por la libertad de cátedra y por su pluralidad. Es esta la escuela de todos, independientemente de posiciones sociales y económicas, y todos le debemos gratitud. Enhorabuena por un aniversario más."

8.- El señor Rafael Octavio Romo Aguiñaga, director jurídico de lo contencioso en Banco del Bajío narra:

"Mi vida ha quedado vinculada ininterrumpidamente desde 1990 a la Facultad de Derecho, ahora División de Derecho, Política y Gobierno. Primero como estudiante y luego como profesor, encontré en sus aulas y en su patio de estudios una integra formación jurídica, ética y humana. Mi Departamento de Derecho, es la amalgama de muchas coincidencias que comparto con mis colegas y alumnos: el orgullo y la responsabilidad de pertenecer a la más alta casa de estudios del Estado de Guanajuato, receptores de una tradición casi bicentenaria; la convivencia fraterna y solidaria con nuestros compañeros, amigos de viaje; y

de forma muy particular, la guía de nuestros maestros y maestras, que siembran para la eternidad. Mi agradecimiento siempre a mi Universidad, a mi División, a mis maestros, a mis compañeros y amigos, a mis alumnos."

9.- El señor magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ex senador de la república, ex diputado federal y ex diputado local, comunica:

"Representa un orgullo ser egresado de las aulas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato, es un privilegio el haber recibido la teoría jurídica de sus notables maestros y la máxima responsabilidad para el ejercicio de nuestro quehacer: respetar la vida dentro de la ley y el ejemplo de ser justos e íntegros como abogados."

10.- El señor licenciado Juan Antonio Rodríguez Corona, magistrado de la sala especializada en materia de propiedad intelectual de la Tercera Ponencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, culto y modesto académico, participa:

"Estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato abrió mi espíritu y permitió que me asomara a la cultura para así volar sobre un horizonte de valores universales. Larga vida pues a mi Universidad, imperecedera gratitud a sus fundadores, sus grandes maestros y fraternidad plena para mis compañeros de aulas."

11.- La señora licenciada Zoila Pérez Alonso, esforzada y laboriosa magistrada de lo penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, jubilada, expresa:

"Hoy refrendo mi gratitud a la prestigiada y reconocida Facultad de Derecho, en cuyas aulas y excelentes maestros me forjé y cultivé mi amor y pasión por la justicia, con base en valores fundamentales como la responsabilidad, la búsqueda de la verdad, el respeto, de suerte que mi formación en tal institución me brindó las herramientas indispensables para contribuir a la paz social."

12.- El señor licenciado Ignacio Navarro Rábago, delegado de la Procuraduría General de Justicia de la nación en el Estado de Campeche, ex secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Coordinador de Asesores en la investigación del homicidio del señor licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, expresidente de la Cruz Roja Mexicana, delegación Guanajuato, ex secretario del H. Ayuntamiento de León, Gto., sostiene:

"Mi deuda con la entonces Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato tiene múltiples razones. La excelencia de sus maestros, los valores que nos inculcaron, el bagaje de conocimientos con el que fuimos dotados para enfrentar nuestro ejercicio profesional, y un largo etcétera. Pero ahora me quiero referir al trato absolutamente igualitario que recibimos todos los alumnos en nuestra querida Escuela. El pri-

mer día de clases todos éramos iguales, no existía distinción en razón de raza, sexo, religión, condición social o preferencias sexuales. En el aula, cada uno de los alumnos destacó de acuerdo a sus méritos, y no por los méritos de su familia, o por su condición económica. Gracias a la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato sus alumnos tuvimos la oportunidad de forjarnos un futuro, sin más límite que nuestras propias capacidades. No es una cualidad menor para una institución educativa, y por eso me encuentro en deuda con mi Escuela de Derecho."

13.- El señor Pedro Vázquez Nieto, destacado poeta y actor, notario público y fotógrafo artístico, reflexiona:

"Me resulta clara la importancia que ha tenido nuestra actual Facultad de Derecho, en la formación de excelentes generaciones de abogados, que han alcanzado los más altos sitiales de la academia, de la judicatura, la diplomacia, el foro y las responsabilidades públicas. Esto ha sido posible a que han arribado a nuestras augustas cátedras maestros de grandes cualidades profesionales, que ausentándose de sus ocupaciones habituales dejaron y dejan, en los jóvenes estudiantes su sapiencia y amor por el Derecho. El comportamiento ético de los grandes maestros, ha sido un referente para los jóvenes estudiantes que han seguido ese rumbo y una prueba de ello es un excelente Poder Judicial en nuestro Estado y una imagen de probidad de nuestros egresados cuando han ido a servir a la Judicatura Federal y hasta presidir la Suprema Corte de Justicia de la nación.

Como cualquier institución, la nuestra requiere ajustarse a las necesidades actuales y formar estudiantes preparados para resolver los conflictos mediante el arbitraje y la mediación, se necesitan estudiantes que aprendan a conducirse con eficacia en los juicios de oralidad y que además sean críticos y propositivos en el análisis de nuestra complicada realidad social. Es necesario que los universitarios tomemos partido, en la búsqueda de las soluciones de los graves problemas que nos aquejan."

14.- La señora licenciada Elisa Jaime Rangel, esforzada y competente maestra de esta Escuela, titular de las cátedras de Filosofía del Derecho y Lógica Jurídica, así como de Deontología Jurídica y Hermenéutica Jurídica y jubilada como secretaria general del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, manifiesta:

"Hablar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato, nos remite de inmediato, tanto a los que por ella pasaron como a los que ahí seguimos, a su patio de estudios. Ese epicentro bullicioso en el que se gesta y se renueva, generación tras generación, una fraternidad entre docentes y estudiantes, resultado de compartir no sólo el conocimiento técnico del Derecho, sino también inquietudes, preocupaciones y esperanzas, ya morales ya intelectuales, respecto a nuestra profesión

y siempre en relación directa con el destinatario de nuestro trabajo: el hombre, inmerso en una sociedad sin la cual no es concebible su cabal desarrollo.

Aprovecho este espacio para agradecer a tantos, a los estudiantes especialmente, mi estancia en estas aulas, que a lo largo de los años ha significado una valiosa fuente de realización personal y profesional."

15.- La señora licenciada Elisa López Luna Polo, expresidenta municipal de esta ciudad, extesorera del Estado y siempre, siempre, una honesta y ejemplar ciudadana, dice:

"190 años de fructífera vida de la señorial Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato representa para las generaciones que hemos egresado de sus aulas, generosas y magníficas, una indestructible fuente del conocimiento orientado a pugnar por la justicia y la solidaridad humana. Seamos agradecidos. Siempre será tiempo de honrar a nuestra centenaria Escuela de Derecho, con nuestro apoyo a clases económicas, sociológica y culturalmente débiles."

16.- El señor licenciado José Abén Amar González Herrera, exdiputado local y ex presidente de la Cámara de Diputados, exsecretario de Gobierno y expresidente municipal de Irapuato, Gto., establece:

"La Universidad de Guanajuato fue el medio por el cual muchas generaciones de jóvenes guanajuatenses pudimos tener acceso a la educación superior. La Universidad es nuestra alma mater y la Facultad de Derecho nuestro hogar. Ahí habitamos, crecimos y se sembró la simiente de lo que en hoy nos hemos convertido. Las herramientas, principios, valores que nuestra facultad nos brindó, constituyen los fundamentos de nuestra vida no sólo profesional sino personal. La educación prodigada es y ha sido palanca de movilidad social y esperanza de desarrollo integral. Los juristas egresados de la colmena legendaria ejercemos nuestra valiosa profesión con la mayor dignidad posible, con verdad para hacer valer la justicia."

17.- El señor licenciado Carlos Arce Macías, exmaestro de la Universidad, exdiputado local, exdiputado federal, exprocurador federal del consumidor, exdirector de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), columnista en varios periódicos y audaz e inquieto político, dice:

"Lograr el acceso a la educación superior, es un lujo. Haber tenido la oportunidad de convivencia con grandes maestros y variados compañeros, provenientes de todos los puntos de la geografía estatal, en una comunidad en busca de lo que los griegos llamaban "areté" -la formación de ciudadanos virtuosos, de hombres de bien-, resultó una experiencia definitiva y vital para mi vida. En mi Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, que ya cumple 190 años, no sé me

obsequió la carta de ruta, pero si se me proporcionó, como a todos los condiscípulos, la brújula para realizar mi viaje, y poder orientarme, incluso en las más peligrosas tormentas. Esto ha sido lo valioso."

18.- El señor licenciado José Luis Romero Hicks, extesorero del Estado, exdirector general del Banco Nacional de Comercio Exterior, preparado y diligente activista, comenta:

"La Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato representa para mí lo mismo que la patria: el alma mater que como tatuaje espiritual se vuelve una divisa, una marca indeleble que determina el derrotero de la conciencia y de la profesión que escogimos. Mi padre, también abogado de esta gran Facultad, lo repitió: la senda de la justicia es el único camino para hacer el bien común, lo único que debe importar al ser humano. Parafraseando al poeta José Gorostiza, puedo decir que tal vez esta Universidad, que nos amolda el alma perdidiza, es una noción del mismo Dios, del Dios de la justicia".

19.- La señora licenciada y maestra Raquel Barajas Monjarás, ex magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, expresidenta del mismo Tribunal y directora de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato, recuerda:

"Hace algunos años, digo algunos porque el tiempo es relativo, subí presurosa y con la emoción contenida al patio de estudios de la entonces Facultad de Derecho, para ver los resultados de los exámenes de admisión, y con alegría vi que había ingresado. Recorrí el patio de estudios, sabiendo que en éste pasaría los cinco años de formación universitaria y sería el lugar más representativo de mi vida profesional. Me emocionaba pensar que por ese lugar habían pasado tan ilustres egresados, como son ministros de la Corte, magistrados estatales y federales, jueces, procuradores de justicia, senadores, diputados, gobernadores, notables investigadores, excelentes litigantes, notarios prestigiados, sabios maestros. En fin, grandes y distinguidos profesionales del derecho. Por lo que puedo afirmar, que nuestra querida Escuela de Derecho ha sido y sigue siendo generosa, pues en estos 190 años de vida formó y sigue formando egresados que se han distinguido y se distinguirán por su conocimiento del Derecho y talento jurídico. Todo esto, gracias a los conocimientos que de manera desinteresada han transmitido queridos y admirados maestros, sus enseñanzas no sólo jurídicas, sino también del bien ser y bien hacer, dan las herramientas para el desempeño correcto de la profesión jurídica.

El haber egresado de la entonces Facultad de Derecho es un orgullo y un privilegio inmerecido, porque gracias a su prestigiado nombre, al inicio de mi carrera profesional se me abrieron puertas, permitiéndome a partir de entonces ejercer mi mayor pasión: el Derecho. Gracias a mi

querida Escuela, a la División de Derecho, Política y Gobierno. Enhorabuena por este aniversario."

20.- Por último, el señor magistrado Miguel Valadez Reyes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guanajuato, exprocurador general de justicia, exdirector jurídico del Gobierno del Estado, exdirector de la Facultad de Derecho y brillante jurista, sostiene y propone:

"La Universidad de Guanajuato no asume como toral misión la de instruir a quienes de ella egresan, sino lograr su cabal formación, porque como ideológico espacio abierto a toda corriente de pensamiento, se busca primordialmente la verdad, para la estructuración integral de seres humanos que contribuyan a la consolidación de una sociedad justa y libre. Como máxima expresión de la ciencia, la técnica, la cultura y el arte del grupo al que orienta y sirve, no puede ser mecánica instructora de individuos que se destaquen por su erudición y sapiencia. Su misión va más allá, su propia esencia le demanda forjar a los que en la aplicación de los conocimientos que les otorga, lo hagan sobre un principio toral de actuación: integrarse con los demás para la consecución de lo que ha de buscarse sea mejor, no en lo efímero por material, sino en lo permanente por substancial.

Por ello la Universidad no puede ser sólo transmisora de conocimientos, sino sobre todo forjadora de hombres y mujeres auténticamente libres, entendiendo por tales no a quienes satisfacen todos sus gustos y placeres, sin limitaciones y sin restricciones, sino a aquéllos que en lo íntimo de su conciencia solidifican toda una convicción axiológica que les permite tener la libertad de sentirse responsables, de calibrar la trascendencia de sus acciones, de discernir las realmente valiosas para imponerse, por decisión propia, el imperativo de realizarlas, pues sólo así se es realmente libre, al tener la facultad de escoger el camino de la justicia y de la verdad o de caer en el abismo de la maldad y el error.

El egresado de esta nobilísima institución debe tener plena conciencia de que ha estado siempre al servicio de los más altos valores del hombre y que, por ello, ha procurado formarlo en genuina libertad, permaneciendo siempre atenta para intervenir en todo lo que la lacera o interesa a la vida comunitaria, entre lo que cobra singular relevancia el Derecho, porque su ejercicio demanda de peculiares y muy especiales condiciones, que tienen que ver, sí, con conocimientos y destrezas, que evidencian al docto en el manejo de la ley, pero que inciden con mayor profundidad en su utilización como instrumento para contribuir a que la persona siga pugnando por alcanzar y acrecentar sus más altos propósitos, sus fines más valiosos, pues sólo así puede impetrar, defender y aplicar las normas matizadas con los valores que les justifican y les dan sentido."

Respetable auditorio, queda expresado el afecto y el agradecimiento que los destacados exalumnos consultados sienten por su Escuela de Leyes y, en algunos casos, lo que creen tendrá que hacerse para su siempre posible mejoría. Es un brevísimo directorio que puede ser el punto de partida para que institucionalmente la División de Derecho, Política y Gobierno se comunique con varios de sus más talentosos egresados.

Muchísimas gracias.

HOJA DE NOTAS

Nota 1.- Explicación previa al auditorio para justificar que estas palabras se presenten como conferencia.

Nota 2.- Antes de hacerlo les explico que en mi intervención escrita doy una brevísima referencia de la historia de vida de cada uno de los egresados consultados. A pesar de su brevedad por el número de quienes le expresaron un pensamiento a su Escuela de Leyes, se alarga considerablemente el tiempo de exposición. Insisto que los egresados consultados son ampliamente conocidos, pues todos ellos han destacado como maestros en esta misma Escuela o en otras instituciones, como abogados honorables y preparados, como servidores públicos que van desde Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrados del mismo, magistrados federales integrantes de diversos tribunales colegiados de circuito, jueces, magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, diputados al Congreso local, diputados federales, senadores, directores de esta misma Escuela, rectores de la Universidad de Guanajuato y otros altos cargos. Para abreviar la exposición y no sintetizar el pensamiento que expresaron, suprimiré en mis palabras las pequeñísimas y, por lo tanto, incompletas historias de vida, pero quedarán en el escrito para entregarlo a las autoridades de la División de Derecho, Política y Gobierno de esta Universidad. Sólo mencionaré sus nombres.

Nota 3.- Otra forma de presentación: principiar en hoja #10[47].

[47] Nota de las compiladoras. Esta hoja 10 se refiere al documento original; por formato, tamaño y tipo de letra, no concuerda con la hoja 10 de este capítulo.

"Hice muchos y muy buenos amigos
que aún conservo"

















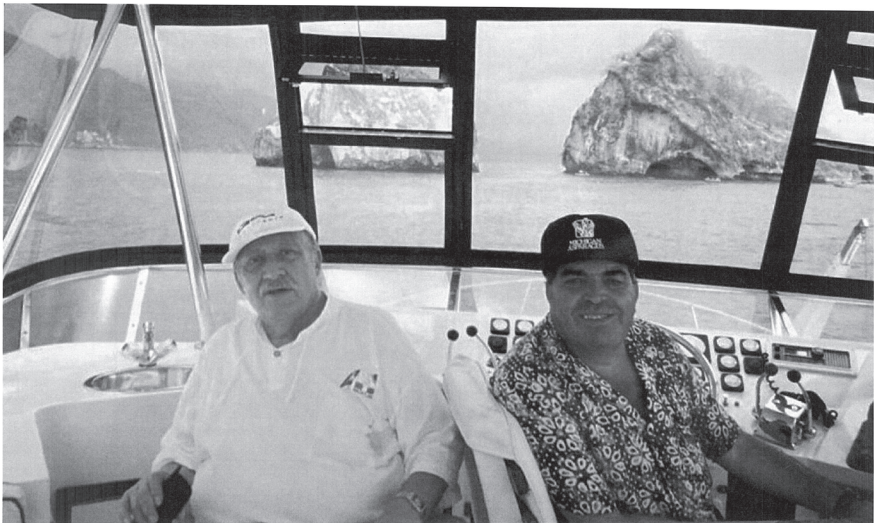

TANE
HSBC



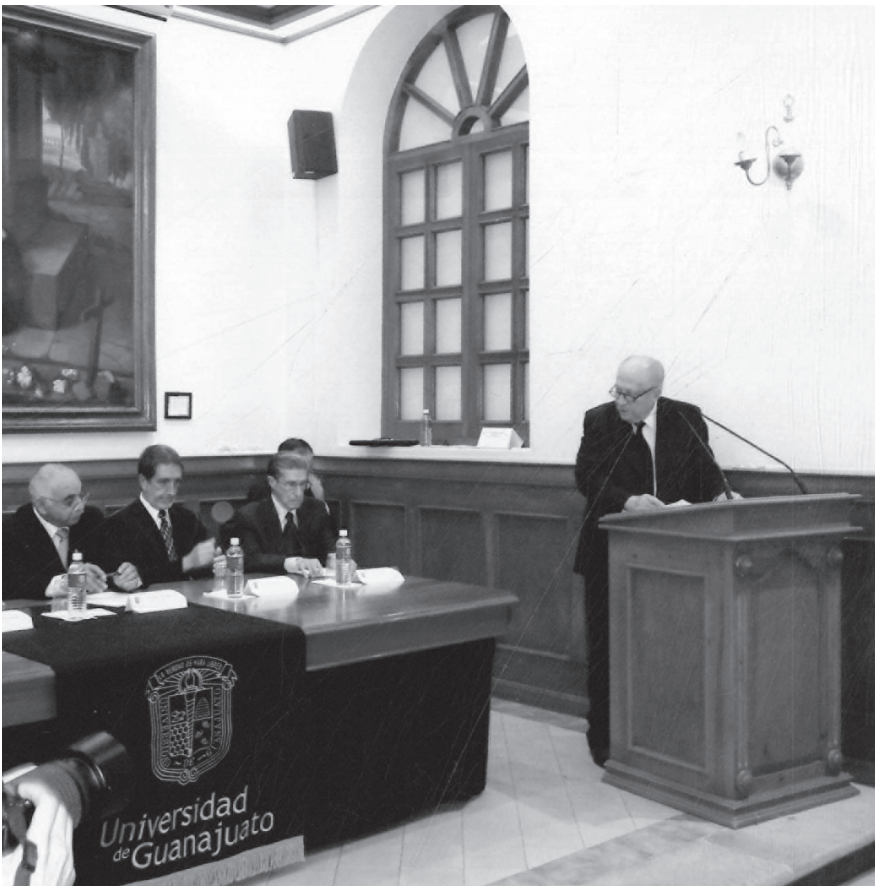








EN HOMENAJE


Universidad
de Guanajuato





DISCURSO HOMENAJE A MIGUEL MONTES GARCÍA

José Aben Amar González Herrera

La gratitud no sólo es la más grande de las virtudes,
sino que engendra todas las demás.
Cicerón

Dr. Arturo Lara López, Rector General de la Universidad de Guanajuato;
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del campus Guanajuato;
Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga, Director de la División de Derecho, Política y Gobierno del campus Guanajuato;
Maestro Juan José Jiménez Albo, Presidente de la Fundación de la Universidad de Guanajuato;
Respetable señora Silvia Manrique de Montes;
Familiares y amigos de Don Miguel Montes García;
Universitarios,
Señoras, señores:

Nos reúne en este ancestral edificio del saber, en este lugar en donde reposan los restos del Rector Marcelino Mangas, un propósito común y un deber de gratitud. El primero el de reconocer la valiosa trayectoria de un universitario que ha prestigiado a su alma mater en el desempeño de su vida profesional. El segundo agradecer al maestro universitario, al legislador, al funcionario público, al litigante, al ministro de la Suprema Corte de Justicia, en pocas palabras al ilustre jurista MIGUEL MONTES GARCÍA su alto sentido del deber y su ejemplo de ser humano comprometido con la verdad y la justicia.

Hago uso de la voz, en nombre de quienes en este año cumplimos cuatro décadas de haber egresado de la Licenciatura de "ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO"; nos honra participar con la Fundación de la Universidad de Guanajuato en este merecido homenaje a quien ha dejado profunda huella en las distintas actividades y tareas cumplidas con pasión y responsabilidad.

¡Bien por la Fundación que promueve estos reconocimientos! ¡Bien por las autoridades universitarias que con su presencia reconocen la enseñanza del ejemplo! ¡Bien porque hoy corresponde destacar las virtudes del universitario Miguel Montes García!

Montes García, es una persona que se distingue por su talento, su buen talante y su firme carácter, atributos que le han servido para destacar en las diversas etapas de la Vida; la Semblanza que de él hace Diego León Rábago

publicada hoy en medios impresos del Estado y lo expresado aquí por mi compañera Rosa Silvia Gutiérrez Segoviano relatan las muchas misiones que nuestro homenajeado ha cumplido.

Don Miguel tiene el don de la palabra, desde temprana edad triunfa en concursos de lectura, de oratoria, sin descuidar sus estudios pues logra siempre los primeros lugares de su grupo. Con esa facilidad de palabra y de expresión, incursiona como locutor en radio y surge la vocación de líder que lo lleva a presidir sociedades de alumnos como la de la entonces Escuela de Derecho de esta Universidad y años más tarde al desempeño de una vasta carrera política en puestos públicos y de partido.

Montes García, recibe su título de Abogado y Notario Público presentando una tesis en la cual propone reformas a los Tribunales del Trabajo y al procedimiento laboral. Su experiencia como Procurador Federal de la Defensa del Trabajo, así como de Presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje en esta capital, le permite establecer con posterioridad un prestigiado despacho jurídico dedicado a asuntos obrero patronales. Afirmo, sin temor a equivocarme, que hizo Escuela en este campo y algunos de sus colaboradores se convirtieron en exitosos litigantes de la rama laboral.

Siempre ha estado vinculado con la educación, su vocación de maestro lo llevó a impartir cátedras de Ética, Introducción al Estudio del Derecho, Derecho del Trabajo, Derecho Constitucional y también ha sido Miembro del Departamento de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad y ha sido conferencista de temas jurídicos y políticos.

Impulsó la creación del sistema de telesecundarias en su paso por la Dirección General de Educación Pública a mediados de la década de los setenta del siglo pasado y se desempeñó en el Gobierno Federal como Director de Personal de la Secretaría de Educación Pública.

Una pasión domina al homenajeado, la pasión por la política, arte que el maestro Montes, entiende como oportunidad de servicio y cuanto cargo le han conferido lo ejerce a plenitud y con un alto sentido del deber, por ello ha sobresalido en esta actividad sin claudicar jamás a sus principios; como legislador local se recuerdan sus votos particulares y en contra de algunas reformas, en tiempos en que el Congreso Local se integraba con diputados de un solo partido y no se acostumbraba cambiar en lo más mínimo las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Como legislador federal, recordamos con qué firmeza actuó como Presidente del Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1988, al someter el acto republicano de rendición de informe del Ejecutivo Federal, al imperio de la ley; así consigna el Diario de Debates el inició de la ceremonia: "Con toda atención hago un llamado cordial a los compañeros legisladores para que no rompamos un protocolo republicano observado durante tantos años y no violemos el espíritu de nuestra Constitución, de nuestra Ley Orgánica y Reglamento Interior. Tiene la palabra el ciudadano Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos. Insisto en que cada legislador tendrá derecho de hablar en las sesiones de su Cámara. Ruego al ciudadano Presidente que inicie la lectura del informe, y reitero mi llamado sereno, de prudencia, a los ciudadanos legisladores para que permitan el normal desarrollo de este acto".

En su andar en la vida pública, ocupó diversos cargos en el Partido Revolucionario Institucional, incluido el de Presidente del Comité Directivo Estatal. Como legislador sirvió en el ámbito local y federal, en el Poder Legislativo 3 veces diputado local y 2 ocasiones federal, además de Oficial Mayor de la Cámara de Senadores; en el Ejecutivo además del cargo ya mencionado en la Secretaría de Educación Pública, fue Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en los tiempos del ideólogo liberal Jesús Reyes Heroles, con quién colaboró para la implementación de la Reforma Política de 1977, y también Procurador de Justicia del Distrito Federal. Así también, se desempeñó como Secretario Particular del Gobernador.

Recibió el más alto honor al que puede aspirar una persona dedicada al ejercicio de la profesión de abogado: el ser electo por el Senado de la República Ministro de la Suprema Corte de Justicia cargo en el cual a partir del 1 de julio de 1992 y hasta el 31 de diciembre de 1994 Miguel Montes García, dio muestras de su aguda inteligencia, capacidad analítica y profundo sentido de justicia, lo cual le permitió obtener el aprecio y reconocimiento de sus compañeros Ministros y el respeto del foro.

Por su honestidad, por su verticalidad, por su compromiso con la verdad, por su gran prestigio profesional y por su cercana amistad con Luis Donaldo Colosio Murrieta, a Don Miguel Montes García por petición de la señora Diana Laura Riojas viuda de Colosio, se le confirió el delicado nombramiento de Subprocurador Federal Especial para la investigación del asesinato de quien entonces era candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República; difícil encomienda y reto que asumió nuestro homenajeado con su característico sentido de cumplimiento del deber y con un actuar responsable.

Permítanme citar textualmente una parte del artículo titulado PRECURSOR DE LA TRANSPARENCIA firmado por Diego de Silva, el cual dice:

"De manera inusitada para el poder público Montes honró el derecho de los mexicanos a acceder a la información pública. Ciertamente esto sucedió en un muy adverso y agresivo clima de linchamiento mediático lo que eclipsó la luz que pretendía arrojar con sus puntuales informes. Y se entiende natural que entonces hubiesen dudas y que hasta hoy persistan, sobre todo después de exponer en aras de esa transparencia una aparente tesis del homicidio concertado, misma que al primer análisis objetivo se derrumbó, lo cual tampoco Montes tuvo empacho en descubrir a la opinión pública, aún a sabiendas de los efectos que ello podría acarrearle, como sucedió.

Debemos reconocer en la persona de Miguel Montes a un precursor en este país de la transparencia y del respeto al derecho de acceso a la informa-

ción pública; es difícil encontrar desde aquellos acontecimientos un ejercicio proveniente desde el poder público de tal claridad y puntualidad; estimo no se ha visto tal apertura en ningún otro asunto de semejante importancia histórica nacional.

Hoy el Maestro Montes seguramente dormirá tranquilo sabedor de la relevancia histórica de su actuación responsable y de su recta conducta. Por ello hay que celebrar que la Universidad de Guanajuato ceda un espacio para reconocer la trascendencia del funcionario, legislador y jurista. Es hora de reconocer y difundir el ejemplo ético de un honorable miembro de la colmena"

Aquí termina la cita y empieza una reflexión. CUÁNTO DEBEN APRENDER QUIENES HOY TIENEN RESPONSABILIDADES DE GOBIERNO, DE HOMBRES, QUE COMO MIGUEL MONTES GARCIA, CON INTELIGENCIA, BUENA ACTITUD, RESPETO A LA LEY Y FIRMEZA AFRONTAN SUS OBLIGACIONES Y RETOS, CON EL ÚNICO AFÁN DE CUMPLIR SU RESPONSABILIDAD EN ARAS DEL BIENESTAR COLECTIVO. MÉXICO Y GUANAJUATO REQUIEREN DE PERSONAS DE SU TALLA PARA CONSTRUIR UN MEJOR DESTINO.

QUERIDO MAESTRO DON MIGUEL MONTES GARCÍA:

ESTA ES UNA TARDE DE FIESTA PARA USTED, PARA SU FAMILIA, PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, PARA LOS MIEMBROS DE MI GENERACIÓN Y ES UNA TARDE PARA DAR HONOR A QUIEN HONOR MERECE, PORQUE USTED HA TRANSITADO POR LA VIDA CON LA CUALIDAD MORAL DE CUMPLIR SUS DEBERES CON EL PRÓJIMO Y CON USTED MISMO.

NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE HABER SIDO Y CONSIDERARNOS AÚN SUS ALUMNOS, PORQUE LO CONOCEMOS POR SUS OBRAS.

NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE COMPARTIR CON USTED Y LOS SUYOS ESTE SENTIDO HOMENAJE A QUIEN SE HA DISTINGUIDO EN EL SERVIR.

NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE QUE NOS INCLUYA ENTRE SUS AMIGOS, LOS QUE AQUI ESTÁN COMO SU ENTRAÑABLE AMIGO DON EUGENIO TRUEBA OLIVARES, DOS VECES RECTOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS, QUIEN NOS IMPARTIÓ LA CÁTEDRA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO Y LOS QUE SE ADELANTARON COMO IGNACIO PATLÁN ROMERO E HILARIÓN ESPINOZA AYALA, MAESTRO Y COMPAÑERO DE GENERACIÓN, RESPECTIVAMENTE.

VAYA CON ESE ORGULLO QUE SENTIMOS, NUESTRO AGRADECIMIENTO POR ACEPTAR ESTE HOMENAJE QUE SE LE HACE DE TODO CORAZÓN.

TERMINO COMO INICIA EL HIMNO DE LA COLMENA LEGENDARIA:

"GLORIA Y HONOR A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO", "GLORIA Y HONOR AL MAESTRO MIGUEL MONTES GARCÍA".

Guanajuato, Gto., 7 de abril 2011.
José Aben Amar González Herrera.
Abogado y Notario Público

PRECURSOR DE LA TRANSPARENCIA

Armando Trueba Uzeta
7 abril 2011

No es fácil abstraerse a la necesaria relación que existe entre la figura de Don Miguel Montes García y su paso como Subprocurador Especial para el Caso Colosio. Desafortunadamente, la existencia de esta aparente simbiosis, suele predominar sobre otros aspectos de la vida profesional del Maestro y relega en la memoria colectiva su trascendencia en otras áreas de la función pública, como legislador y jurista.

La investigación del homicidio del excandidato a la Presidencia de la República Luis Donaldo Colosio, encargada inmediatamente al entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Miguel Montes, fue un acontecimiento extraordinario que, sin duda, marcó su vida pública y, acaso, la privada. A través de los años, en la imaginaria popular no hay lugar para aceptar la teoría del asesino solitario concluida por Montes. Se ha pretendido deslustrar su nombre a fuerza de cuestionar los resultados por él presentados. La tesis del asesino solitario es inaceptable para el común de los mexicanos y a casi nadie interesa que el expediente haya pasado por manos de varios subprocuradores encargados del caso, aún cuando siempre se haya llegado a la conclusión primaria expuesta de manera valiente y transparente por Miguel Montes García.

Poco se ha reconocido la relevancia del ejercicio de transparencia e información pública que Montes puso en práctica para dar a conocer a la sociedad mexicana, de manera abierta y directa, los resultados que en su momento encontró sobre los hechos investigados.

Durante años han discutido los estudiosos del tema acerca de la reserva en las averiguaciones previas, sin ponerse de acuerdo sobre si se trata de un arbitrario acto de opacidad o de una escrupulosa observancia de la ley que reserva el conocimiento del expediente sólo a los vinculados. Pienso que esta opacidad es justificable en la etapa de averiguación previa hasta cierto punto y en determinados casos, en los cuales se comprometa la privacidad y decoro de las personas involucradas, sobre todo de las víctimas; pero ese velo pierde sentido al momento de juzgar a los presuntos responsables, donde no hay por qué temer al escrutinio público de la actuación de las partes en el proceso, incluida la del juez. Así lo entendió Montes.

Ante las inercias de la opacidad procesal -más severa en1994 que hoy en día-, Miguel Montes dio un ejemplo de manejo transparente de la información pública, abriendo ante toda la sociedad las constancias, declaraciones, registros, voces y todas las pruebas relacionadas con el Caso Colosio. Y ello no

es un tema menor en un país donde en aquellos años pocos hablaban sobre el tema de la transparencia y apertura oficial de la información, y donde, hasta la fecha, se sigue exigiendo este derecho. La determinación de Montes en hacer público el resultado de su trabajo y de su equipo, desarmó el fundamento de la crítica pública a su gestión. El resultado, es cierto, no sirvió para obsequiar al público mexicano lo que le hubiera gustado oír, pero Montes nunca investigó para satisfacción de las masas o para condescender con interés alguno. Sin retórica que valga, hay que decir que su único compromiso fue con la verdad de los hechos y con su conciencia, y encontró en la transparencia de la información la mejor herramienta para sostener los resultados de su trabajo.

De manera inusitada para el poder público, Montes honró el derecho de los mexicanos a acceder a la información pública. Ciertamente esto sucedió en un muy adverso y agresivo clima de linchamiento mediático lo que eclipsó la luz que pretendía arrojar con sus puntuales informes. Y se entiende natural que entonces hubiesen dudas y que hasta hoy persistan, sobre todo después de exponer, en aras de esa transparencia, una aparente tesis del homicidio concertado, misma que al primer análisis objetivo se derrumbó, lo cual tampoco Montes tuvo empacho en descubrir a la opinión pública, aún a sabiendas de los efectos que ello podría acarrearle, como sucedió.

Debemos reconocer en la persona de Miguel Montes a un precursor en este país de la transparencia y del respeto al derecho de acceso a la información pública; es difícil encontrar desde aquellos acontecimientos un ejercicio proveniente desde el poder público de tal claridad y puntualidad; estimo no se ha visto tal apertura en ningún otro asunto de semejante importancia histórica nacional.

Hoy el Maestro Montes seguramente dormirá tranquilo sabedor de la relevancia histórica de su actuación responsable y de su recta conducta. Por ello hay que celebrar que la Universidad de Guanajuato ceda un espacio para reconocer la trascendencia del funcionario, legislador y jurista. Es hora de reconocer y difundir el ejemplo ético de un honorable miembro de la colmena.

SEMBLANZA DE MIGUEL MONTES GARCÍA[48]

Diego León Rábago
7 abril, 2011

Hacer un bosquejo biográfico de Miguel Montes García es asunto poco complicado. Basta con seleccionar datos sobresalientes de su abundante, muy rico e incluso apasionante currículo para elaborar con ellos un relato redactado con la debida ordenación. Aunque, el problema aquí es que en el documento sólo aparecen datos relevantes.

Pareciera que Miguel hubiese sido predestinado para realizar acciones y desempeñar cargos y comisiones de la mayor importancia. No es así, empero. Nació, sí, con una mente privilegiada, pero nada, ningún logro, ningún éxito, le ha sido gratuitamente concedido; todo ha tenido origen en su esfuerzo, disciplina y tenacidad.

Referir solo datos seleccionados del currículo de Miguel en una ceremonia en su honor, no resultaría en consecuencia suficiente, pues se omitiría una información cabal de su personalidad, temperamento, cualidades o atributos y rectitud moral.

Narra de Miguel su maestro y entrañable amigo el doctor Eugenio Trueba Olivares, que *a muy tierna edad perdió a su padre y a partir de esa desventura quedó venturosamente sujeto al amor, dirección y rigor de su madre, una ejemplar mujer poseedora de los más sólidos valores tradicionales, que condujo la vida de Miguel por el buen camino, con mano amorosa, pero firme, sin concesiones*. Agrega, *Miguel aprendió de ella, muy pronto, a valerse por sí mismo, a ganarse la vida. Luego tuvo la oportunidad de corresponder a los afanes de ella, velando por su bienestar personal, y económico, antes que el suyo propio.* Y concluye: *madre ejemplar e hijo ejemplar.*

Miguel fue un estudiante destacado; el más de su generación en la Escuela de Derecho de nuestra Universidad. A lo cual agregó ser en este lapso Campeón Estatal de Oratoria, segundo lugar en el Concurso Nacional de Oratoria y Presidente de la Mesa Directiva de dicha escuela y que se diera tiempo para impartir cátedra de Ética en la Escuela Preparatoria de Guanajuato (1960), para ser Oficial Mayor del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (1962) y Procurador de la Defensa del Trabajo en el Estado (1960-1963).

Miguel ha sido polifacético y en cada actividad ha sido sobresaliente. Fue locutor de radio comercial y el primero, en tiempo y calidad, de Radio Universidad de Guanajuato; fue maestro de cátedras diversas: Ética, en Prepara-

[48] Publicado originalmente en el periódico AM de León, Gto. Se reproduce aquí con autorización del Lic. Diego León Rábago.

toria; Introducción al Estudio del Derecho, Derecho del Trabajo Individual, Colectivo y Procesal, Ética Profesional y Derecho del Trabajo Colectivo en Posgrado de Contratación Colectiva, en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad. Fue miembro del Departamento de Investigaciones Jurídicas y miembro de número de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social.

El Derecho, sin duda, ha sido una de las principales vocaciones de Miguel. Su especialidad fue el Derecho Laboral, campo en el que litigó con gran éxito. Empero, no descuidó otras ramas como el Derecho Penal, el Derecho Civil, el Derecho Constitucional y el Derecho de Amparo, en las que ha sido asimismo brillante.

El maestro Trueba Olivares escribió de él con todo acierto:

Siempre he admirado el penetrante sentido de análisis, la contundente lógica, que Miguel posee en el tratamiento de cualquier problema jurídico. Al instante capta el fondo del caso, pero esto no quiere decir que lo haga sin mayor detenimiento. Al contrario, gusta de plantear toda clase de dudas y de posibilidades. De otro reclama diversos puntos de vista, como si nada claro se tuviese y así, socráticamente, llega a conclusiones muchas veces no esperadas y más seguras. No es de extrañar que en la práctica de su profesión haya tenido tantos éxitos y haya sido un verdadero Maestro, estableciendo criterios e interpretaciones legales que otros profesionistas utilizaron luego.

Asunto de la mayor relevancia nacional, donde se puso de manifiesto lo anterior, fu el del asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuya investigación fue encomendada a Miguel con el carácter de Subprocurador Federal Especial. Prestigio profesional, vastedad de conocimiento y experiencia, depurado criterio jurídico y cabal honestidad, fueron sin duda las cualidades consideradas para su designación.

La integración de un excelente equipo de trabajo, con los más destacados y competentes especialistas necesarios para los diferentes aspectos de la investigación, fue el primer acierto de Miguel. El segundo, fue la elaboración de una planeación rigurosamente científica de la investigación, en la que todas las líneas de investigación posibles fueron abordadas y todos los recursos científicos y tecnológicos existentes fueron utilizados para acopiar todos los indicios y pruebas conducentes a la obtención de la verdad. El tercer acierto fue la organización de su equipo de trabajo basada en el trabajo intenso y cuidadoso en grado extremo, en el espíritu de colaboración y en la disciplina. El cuarto acierto fue el de imbuir una mística de búsqueda de la verdad y de absoluta rectitud en todas las acciones de la investigación.

Las sólidamente fundadas y sustentadas conclusiones presentadas por Miguel, a pesar de los sistemáticos planteamientos maliciosos de dudas provenientes de algunos periodistas y políticos, emitidos con aprovechamiento de la ya proverbial incredulidad del mexicano respecto al actuar de sus gobernantes, han sido hasta ahora sustancialmente irrebatibles y han permanecido consistentes e incontestables. Varios otros juristas, que continuaron la investigación

con la idea de encontrar inconsistencias o errores, sólo lograron confirmar la corrección, suficiencia y veracidad de las indagaciones y de las conclusiones presentadas por Miguel con claridad, con la debida publicidad y absoluta transparencia.

Pero, Miguel no se ha ocupado sólo de asuntos de gran relevancia nacional. Para él, en realidad, todo caso en que la justicia esté en juego reviste la mayor importancia. Un ejemplo: en una ocasión gratuitamente se hizo cargo como defensor del juicio penal contra un modesto trabajador de un establo acusado del terrible robo de dos litros de leche. Los propietarios del establo habían automatizado la ordeña de vacas con aparatos y el trabajador era ya innecesario y había que despedirlo. Par evitar el pago de prestaciones laborales legales, los propietarios denunciaron el supuesto delito. El juez se extrañó de que Miguel se ocupase de un asunto de tan escasa importancia, pero éste le contestó que estaba equivocado, que era de relevancia y que mal haría de no atenderlo. El juez dictó auto de formal prisión contra el acusado. Miguel apeló y correspondió conocer del recurso a un magistrado amigo suyo. Cuando éste aún no había leído el expediente, Miguel se entrevistó con él y le dijo: *aunque seas mi amigo, no vayas a excusarte de conocer de este asunto*. Y agregó con severidad: *resuélvelo ya con justicia*. Así tuvo que hacerlo el magistrado, porque así correspondía.

Vocación también mayor de Miguel ha sido la política, campo en el que ha brillado con luz propia. Su lucha ha sido dentro de un solo partido, al que mucho le ha aportado mediante acciones que le han reportado prestigio. Miguel se ha conducido sin concesiones ni desvíos; ha actuado con rectitud y claridad, evitando toda artimaña. Además de múltiples cargos como los de Oficial Mayor, Secretario de Organización, Secretario General y Presidente del Comité Directivo Estatal, logró triunfos electorales indubitables que le llevaron a ser diputado (local) en dos ocasiones, en la Cuadragésima Sexta y en la Quincuagésima Primera legislaturas del Estado de Guanajuato; diputado federal también en dos ocasiones, a la Quincuagésima y a la Quincuagésima Cuarta legislaturas del Congreso de la Unión. Durante este último cargo, desempeñó además los de Presidente del Congreso de la Unión y Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Consta a muchos en el país y en el Estado la apasionada entrega al desempeño de tales puestos, el liderazgo que ejerció para conducir a los demás a las buenas empresas y las trascendentes decisiones y aportaciones con que contribuyó en cada uno.

Miguel fue también Director General de Educación Pública en el Estado, cargo en el que creó el sistema de enseñanza secundaria por televisión, en tele aulas diseñadas para ese objetivo y con una pequeña biblioteca y laboratorio anexos. Asimismo, fue Secretario Particular de Gobierno del Estado y Director General de Gobierno en la Secretaría de Gobernación.

Cargo de suyo complicado, pero que Miguel desempeñó con plena honestidad, con absoluto respeto a los derechos humanos y a la eticidad de la

investigación y siempre sujeto a Derecho, fue el de Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

Miguel fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto puesto en el ámbito de la justicia, el más alto cargo al que puede aspirar un abogado. Se dedicó, entonces, al estudio profundo, meticuloso, de los problemas de constitucionalidad y brilló con talento, buen juicio y eficacia.

Miguel se dedica ahora al litigio de asuntos complicados y a la asesoría jurídica. Lo hace, como siempre, con gran éxito. Cuida de su esposa, hijos y nietos con amor y generosidad.

El homenaje que hoy se le brinda no es gratuito; es, como consta en este documento, sobradamente merecido. En tiempos de grave crisis, se añora su protagonismo, su liderazgo político y su desempeño, con ejemplar honestidad y patriotismo, de cargos gubernamentales de la mayor importancia.

Queda, pues, sólo desear: ¡que Miguel viva muchos años más!

Nota del día. 7 de abril de 2011
(Sólo para Miguel)

EL CORRIDO DE MIGUEL MONTES

Eugenio Trueba

Un homenaje a Miguel
es algo muy merecido
ya que Miguel siempre ha sido
hombre recto, hombre de bien.

Su vida ha sido azarosa,
esforzada y constructiva,
de manera que tal cosa
es muy significativa.

Tiene carácter, vigor,
abunda en conocimientos
y en las cuestiones de honor
no se anda con miramientos.

Maneja bien el Derecho
en todo pleito o litigio
pues suele tomar a pecho
la fama de su prestigio.

Es claro y es contundente
en debate o discusión
y evita prudentemente
el caos y la confusión.

No transige con farsantes
ni le apantallan jactancias
saliendo siempre adelante
en todas las circunstancias.

Cualquiera que sea el asunto
que tome para tratar
se entrega a fondo, a tal punto,
que pierde el sueño y la paz.

Ha sido buen funcionario
en misiones espinosas
de lo más complejo y vario
con conclusiones airosas.

No hace caso de rumores
calumniosos o falaces
sabiendo que sus valores
son pautas fundamentales.

Fue cabal legislador
que brillaba en la tribuna
al estudiar con rigor
ley por ley, una por una.

Ha sido objeto de acoso,
de malicia y de maldad,
como en el caso Colosio
por exponer la verdad.

A su salud lastimada
le pone muchos cuidados
y en la lucha denodada
el mal le hace los mandados.

Su cansancio, paso a paso,
es físico solamente,
pues es lúcido y muy claro
el despejo de su mente.

Ya incorporado a las Cortes
como Ministro exaltado
Miguel de apellido Montes
se retiró jubilado.

Triunfó de nuevo peleando
confiando en que necesita
ser mejor asesorado
por sapiente Chabelita.

No le gustan alabanzas
ni homenajes merecidos
y por eso, sin tardanzas,
aquí se acaba el corrido.

MIGUEL MONTES GARCÍA[49]

Paulino Lorea Hernández
Abril 2011

Como es del conocimiento de los amables lectores, estudié la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hago esta precisión nuevamente debido a que el personaje a quien dedico esta columna no fue mi maestro, como muchos abogados a veces lo asumen, pues él impartió cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato; en consecuencia no tuve la fortuna de aprender de sus clases en el aula universitaria ni de conocerlo personalmente a temprana edad, pero aún así lo considero mi maestro, un verdadero maestro de maestros en la abogacía y en la vida profesional.

Al hacer referencia al Lic. Montes García no pretendo elaborar una biografía de su trayectoria en sentido estricto, sino parte del cúmulo de vivencias a detalle que me ha correspondido compartir desde que lo conocí.

Fue en el año 1988, por el mes de septiembre, cuando conocí al Lic. Miguel Montes a través de otro insigne jurista guanajuatense, como lo fue el magistrado Ignacio Patlán Romero, durante una comida a la que me invitó en la ciudad de Irapuato; allí entre libaciones, chascarrillos y cantos (en lugar de versos, emulando al poeta Aguirre Fierro, El Brindis del Bohemio), tuvimos una plática muy amena durante la cual nos identificamos. Ya el Lic. Montes había ocupado el cargo de diputado federal y estaba en la misma tesitura durante un nuevo periodo apenas iniciado, así es que ya era un político reconocido e identificado por su reciedumbre de carácter, por su erudición jurídica y su elocuencia, además de cierta habilidad natural para la tribuna parlamentaria.

Uno de los episodios que me sorprendió gratamente y marcó mi admiración y reconocimiento hacia el jurista Montes García, fue aquel que protagonizó el entonces también diputado Porfirio Muñoz Ledo, cuando desde su curul a gritos interrumpió la intervención del presidente Miguel de la Madrid, y siendo el responsable de dirigir la sesión solemne el Lic. Montes, con voz enérgica y estentórea, pero además con fundamentos legales exhortó a su "compañero diputado" a guardar respeto y sentarse; los televidentes a nivel nacional vimos cómo Muñoz Ledo acató el exhorto del maestro Montes y permaneció quitecito y callado (ahora quién pone orden en la Cámara de Diputados, y menos quién disciplina a Fernández Noroña).

Me parece que fue a partir de este momento histórico cuando Miguel Montes logró su proyección hacia otra dimensión política más allá del ámbito local; algunos otros colegas o politólogos ubican el inicio de su ascenso en

[49] Publicado originalmente en el periódico AM de León, Gto. Se reproduce aquí con autorización del Lic. Lorea.

otros momentos, tales como cuando fue designado Procurador General de Justicia del Distrito Federal, o Ministro de la Suprema Corte, o Fiscal Especial para el caso del asesinato del Lic. Donaldo Colosio; pero tengo la impresión que aquel episodio referido primeramente fue el origen de los otros logros y momento crucial en su vida política.

Cuando retornó a esta ciudad para radicar ya como Ministro de la Suprema Corte, en retiro o jubilado, hacia el año 2000[50], después del cambio en su estructura y la reducción a once ministros del máximo órgano de justicia, retomó con mucho entusiasmo su actividad social y, en lo jurídico, por impedimento propio de su situación en la Suprema Corte, solamente continuó estudiando, desahogando consultas personales, escribiendo y una vez transcurrido el plazo de impedimento para litigar, regresó poco a poco, brindando algunas asesorías a instituciones bancarias y a empresas, siempre muy cuidadoso en el aspecto ético-profesional, en su honestidad intachable y en la lealtad que profesa a sus amigos. Pero todavía le faltaban algunas batallas por sortear y aún no estaba resignado al anonimato y a la inactividad política, de tal manera que hacia el año 2003 regresó, ahora como diputado local, teniendo como compañeros de bancada al ahora senador Francisco Arroyo y al incansable priista Martín Ortiz García, entre otros; en esta etapa de tres años sembró y aportó instrumentos legales muy valiosos y de vanguardia para Guanajuato, como la primera Ley de Acceso a la Información y su estructura funcional entre los más destacados.

Durante estos últimos once años hemos visto en la localidad en los clubes Atenas y Campestre, en restaurantes, en eventos culturales, en fin, en la vida cotidiana al Lic. Montes García en compañía de su familia o de sus amigos, e instaló por el rumbo de Panorama un despacho en compañía de su inseparable colaborador Ignacio Navarro Rábago, excelente abogado (y quien sí podría ser su biógrafo). La sencillez en el trato del Lic. Montes para con toda clase de personas, ricos y pobres, cultos e intelectuales, o jóvenes estudiantes, colegas y empresarios, sea quizá una de sus virtudes y cualidades más apreciadas; su lenguaje ameno, lleno de sabiduría; ironía oportuna, salpicada de humor; la disposición a escuchar y no escatimar un buen consejo, lo hacen un personaje estimado y atrayente, aunque también a fuerza de la "convivencia en nuestro entorno social y profesional, en apariencia dejamos de apreciar su colosal trayectoria, académica, jurídica y política". No debemos escatimarle un gran reconocimiento a sus 72 años de vida fructífera y destacada.

El próximo jueves 7 de abril a las 19:00 horas en el Salón del Consejo General Universitario, de la Universidad de Guanajuato, los abogados y notarios, miembros de varias generaciones, conjuntamente a las autoridades universitarias, rendirán homenaje y otorgarán un reconocimiento especial al Maestro Miguel Montes García, enorme jurista y político, acrisolado en Guanajuato. Honor a quien honor merece.

[50] El Lic. Montes García regresó de la Ciudad de México a vivir a León, Gto., a finales de 1994.

A.M. → LEÓN, GUANAJUATO → JUEVES 7 DE ABRIL DE 2011

Semblanza del maestro

ABOGADOS Y NOTARIOS DE VARIAS GENERACIONES, junto con las autoridades de la Universidad de Guanajuato, rinden hoy a las 7 de las tarde un homenaje especial al maestro Miguel Montes García. El acto tendrá lugar en el Salón del Consejo General Universitario y durante el mismo, Diego León.Rábago compartirá esta semblanza del maestro Montes García.

DIEGO LEÓN RÁBAGO



EL ABOGADO y maestro guanajuatense Miguel Montes García.

Una vida fecunda

El maestro Miguel Montes García ha sido polifacético y en cada actividad, sobresaliente. Fue locutor de radio comercial y el primero de Radio Universidad de Guanajuato. Maestro de cátedras diversas. Como político, tuvo múltiples cargos y logró triunfos electorales que lo llevaron dos veces al Congreso local y otras dos al federal, llegando a presidir el Congreso de la Unión.

En un momento de especial zozobra para la Patria, en 1994, fue nombrado Suprocurador Federal Especial encargado de la investigación del asesinato del candidato priísta Luis Donaldo Colosio.

Y fue, también, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto puesto en el ámbito de la Justicia, el más alto cargo al que puede aspirar un abogado.

Honran a Miguel Montes

Entrega Universidad de Guanajuato reconocimiento al ilustre egresado en una emotiva ceremonia en la capital del estado

Ruth Elizarraraz

Por su valiosa trayectoria, Miguel Montes García recibió un reconocimiento como ilustre egresado de la Universidad de Guanajuato.

La entrega del reconocimiento se realizó en el Salón del Consejo General Universitario, en la capital del estado, donde se ofrecieron emotivas palabras para el egresado de la generación 1967-1971.

Juan José Jiménez Albo, presidente de la Fundación de Egresados, destacó la calidad del ejercicio profesional de Miguel Montes, y quien representa un ejemplo para las futuras generaciones.

A través de la Fundación, se busca reconocer a los egresados que le dan prestigio a la Universidad, así como el crear identidad y pertenencia en la 'colmena'.

Rosa Silvia Gutiérrez leyó la trayectoria del homenajeado, recordándolo como un distinguido maestro que hizo escuela en la defensa de los derechos laborales.

José Abén Amar González Herrera, dijo sentirse honrado por estar presente en el reconocimiento al egresado, quien fungiera como litigante, ministro de la Suprema Corte de Justicia y Diputado, cargos que desempeñó con alto sentido del deber.

A cuatro décadas de haber egresado de la colmena universitaria, aseguró que Miguel Montes ha dejado profunda huella como persona y como profesionista.

Incluso lo calificó como un precursor de la transparencia y el acceso a la información pública, siempre en aras de la verdad.

Miguel Montes, en son de broma, aseveró que al enterarse del homenaje se puso a hacer una balanza de lo bueno y lo malo en su vida, al hacer el recuento de esos momentos, llegó a la conclusión de tener suficiente edad para recibir un homenaje: "será mejor prepararme para dejar de tener más edad".

"Con absoluta honestidad, no me considero acreedor del mérito que estoy recibiendo, solamente he intentado cumplir con las obligaciones de los cargos que he ostentado", aseveró con humildad Miguel Montes.

Incluso recordó varias anécdotas de su paso por las aulas universitarias, como la ocasión en la que organizaron una huelga para pedir que se mejoraran las cátedras, o las tortas de aguacate con las que saciaban su hambre.

Finalmente, hizo un llamado para que desde la Universidad se resuelvan los problemas sociales del entorno, "que se busquen estrategias, porque la Universidad no puede estar ajena a la realidad que lo rodea".

El rector general de la Universidad de Guanajuato, Arturo Lara López, elogió el desempeño de Miguel Montes.

"Porque asumió con responsabilidad y valor los cargos públicos".

Y confió en que sus aportaciones seguirán haciendo crecer el quehacer universitario.

En la ceremonia estuvieron presentes el rector general de la Universidad de Guanajuato, Arturo Lara López; Juan José Jiménez Albo, presidente de la Fundación de Egresados; Eduardo Melchor Franco, presidente del Patronato de la Universidad de Guanajuato; así como Luis Felipe Sánchez Hernández, ex rector de la Universidad y representante de la generación.





FOTOS: Salvador Rodríguez

EL APLAUSO DE PIE

Académicos, amigos y familiares de don Miguel Montes, estuvieron presentes en el homenaje que le hizo su casa de estudios, la Universidad de Guanajuato. En la ceremonia explicaron que supo asumir con responsabilidad y valor los cargos públicos que le fueron encomendados.

Viernes
8 de abril de 2011
León, Gto.
$8.00 Año 32 No. 8953
Premio Nacional de Periodismo 2009
www.am.com.mx

AsteriscoS

***CONVOCATORIA.-** Vaya capacidad de convocatoria la que tuvo ayer don **Miguel Montes García**, quien recibió un merecido homenaje en el salón del Consejo General de la Universidad de Guanajuato.

***LA COLMENA.-** La ceremonia fue encabezada por el rector general, **Arturo Lara López**; también estuvieron **Juan José Jiménez Albo**, de la Fundación de Egresados, y **Luis Felipe Sánchez Hernández**, del grupo organizador del homenaje y ex rector de la máxima casa de estudios.

***HONORES.-** El momento más emotivo fue cuando mencionaron a su familia; hubo aplausos para doña **Silvia Manrique de Montes**, compañera de toda la vida del jurista, político priista y juarista; pero sobre todo, del ser humano que compartió conocimientos a futuros universitarios.



MIGUEL MONTES.

***DISCURSOS.-** El grupo alumnos de Derecho, generación 67-71, fue el organizador; además de la abogada **Rosa Elvira Gutiérrez Segovia**, hizo la semblanza oficial, en tanto que el irapuatense, **José Aben Amar González** leyó la notable carrera política y jurídica de **Montes García**.

***GRANDES RECUERDOS.-** El mejor discurso vino del homenajeado, quien lejos de recordar su paso por grandes retos políticos; habló de su años juveniles en la UG. Las anécdotas arrancaron carcajadas y aplausos de la concurrencia. Hubo tiempo también para las sugerencias al quehacer universitario.

***RECONOCIMIENTOS.-** El Rector elogió la trayectoria de don **Miguel**; le rindió respeto y admiración, y destacó que ha desempeñado con valor, profesionalismo y entrega, los cargos que ha tenido. Un digno ejemplo para las nuevas generaciones.

***PESOS PESADOS.-** Atentos estuvieron los diputados **José Isaac González Calderón, Luis Gerardo Gutiérrez Chico** y **Ma. Elena Cano**; así como los empresarios **Alejandro Marcocchio, Eduardo Knapp**, el industrial leonés, **Felipe Pablo Martínez Treviño**, y **Eduardo Melchor Franco Díaz**, presidente del patronato de la UG.

***SUSPIRANTES.- Don Miguel** también congregó a tres suspirantes a la Gubernatura: **Juan Ignacio Torres Landa, José de Jesús Padilla** y **Francisco Arroyo Vieyra**; ya quisiera tener esa capacidad de convocatoria el actual presidente estatal del tricolor, **José Luis González Uribe**.

***EL DIEZMO.-** Por cierto, tanto el paisano senador como **Juani**, se fundieron en un fuerte abrazo y se comprometieron a verse el próximo 16 de marzo, en el rancho "El Diezmo" de San José Iturbide, para homenajear al fallecido **Juan José Torres Landa**, quizá uno de los gobernadores del PRI, más recordados en el terruño.

a.m.
Domingo
10 de abril de 2011
Página 4
León, Guanajuato

La Olla

› El legado de Miguel Montes

Sin duda pocos abogados como él, conocen a fondo la política mexicana; las entrañas del sistema judicial y, por qué no, los entretelones del poder de nuestro País. Fue actor fundamental en los que, quizá, han sido los momentos más difíciles para la nación, y del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional: la cuestionada elección presidencial de 1988, que ganara **Carlos Salinas de Gortari**; y seis años después, el brutal asesinato del candidato presidencial del PRI, **Luis Donaldo Colosio Murrieta**. En ambos episodios estuvo presente don **Miguel Montes García**, quien el jueves por la noche fue objeto de un sencillo pero sentido homenaje en el auditorio del consejo general de su alma mater, la Universidad de Guanajuato. La ceremonia fue encabezada por el rector general **Arturo Lara López**; el escritor y presidente del patronato de la UG, **Eduardo Franco Díaz**,; y **Juan José Jiménez Albo**, presidente de la fundación de la universidad. También asistieron **José Manuel Cabrera Sixtos**, secretario académico; **Luis Felipe Guerrero Agripino**, rector del campus Guanajuato, y **Manuel Vidaurri Aréchiga**, director de la División de Derecho, Política y Gobierno del mismo campus.

De "la colmena", **Montes** egresó como abogado y notario público, tras presentar con éxito la tesis "La integración de los Tribunales de Trabajo y Procedimiento Laboral. Sugestiones para su reforma". Además de varios cargos en el Gobierno estatal y federal, fue diputado local y federal, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde relevó a otro notable abogado guanajuatense, **Salvador Rocha Díaz**. Antes, y a petición de **Diana Laura Riojas**, viuda de **Colosio**, don **Miguel** ocupó la Subprocuraduría Especial para la investigación del asesinato del aspirante presidencial priísta. Según su currícula en la Suprema Corte, **Montes García** "ha profundizado en la ciencia jurídica, a través de la investigación y la docencia, ha puesto en práctica sus conocimientos en el ejercicio privado de la profesión, y en el desahogo de grandes responsabilidades en los relevantes cargos que ha ocupado".

Maestro de varias generaciones de abogados, no sólo en aspectos de la Ética y Derecho Laboral, sino como funcionario, legislador, litigante y para muchos de sus alumnos, como ser humano. No en balde el homenaje fue impulsado por los egresados de la generación 1967-1971, que forman entre otros **Rosa Elvira Gutiérrez Segoviano**, **Luis Felipe Sánchez Hernández**, **José Aben Amar González Herrera**, **Rodolfo Vieyra** y **José María Sepúlveda**, así como el ex rector **Eugenio Trueba Olivares**. Resaltó la presencia de su esposa y compañera, **Silvia Manrique de Montes**, así como sus hijos y nietos, quienes jubilosos rompieron la solemnidad del protocolo y lanzaron porras al abuelo, arrancando aplausos de la concurrencia.

Hubo notables presencias para este abogado radicado desde hace décadas en León, como la de los empresarios **Felipe Pablo Martínez Treviño**, **Alejandro Marcocchio Rodríguez**, **Juan Ignacio Torres Landa** y **José de Jesús Padilla**, estos últimos aspirantes a la Gubernatura; así como **Eduardo Knapp**, **José Luis Romero Hicks** y **Arnulfo Vázquez Nieto**. Presentes estuvieron los diputados priístas **María Elena Cano**, **José Isaac González Calderón** y **Luis Gerardo Gutiérrez Chico**.

COLOFÓN